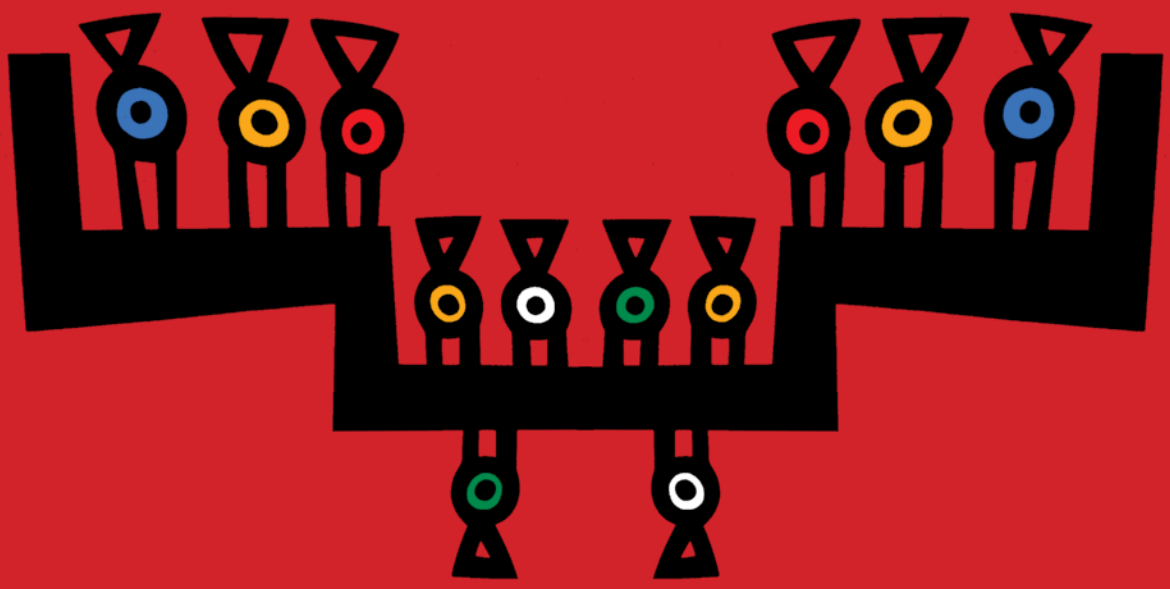
SINDICATOS 2009. ESTRATEGIAS FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL, EL MULTILATERALISMO Y LOS ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN



SINDICATOS 2009.
ESTRATEGIAS FRENTE A
LA CRISIS MUNDIAL, EL MULTILATERALISMO
Y LOS ACUERDOS COMERCIALES
Y DE INVERSION

OUR WORLD IS NOT FOR SALE
STOP CORPORATE GLOBALIZATION

CSA
TUCA

ITUC CSI IGB

Secretariado Ejecutivo CSA

Presidenta
Linda Chávez-Thompson
Estados Unidos

Presidente Adjunto
Julio Roberto Gomez Esguerra
Colombia

Secretario General
Víctor Báez Mosqueira
Paraguay

Secretaria de Política Sindical y Educación
Amanda C. Villatoro
El Salvador

Secretario de Políticas Sociales
Laerte Teixeira Costa
Brasil

Secretario de Política Económica y
Desarrollo Sostenible
Rafael Freire
Brasil

Equipo de la Publicación:

Coordinación
Esther Busser-CSI
Hilda Sánchez -CSA

Revisión y Redacción
Alvaro Orsatti

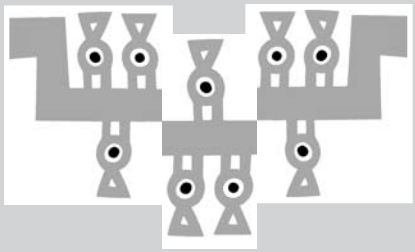
Traducción
Paula Alaniz

Capa, proyecto gráfico y diagramación:
Yvonne Sarué

Ilustraciones recogidas del libro Diseños Precolombianos de Peru, Museo Amano, Fundación Museo Amano, Perú,1996

Sede CSA:
Rua Formosa, 367, 4º andar - Centro São Paulo.
CEP 01049-000 - São Paulo, Brasil.
Teléfonos: + 5511 21040750/ 21040762
Sitio electrónico: www.csa-csi.org

Los artículos publicados en este libro son de completa responsabilidad de los autores.



SINDICATOS 2009.
ESTRATEGIAS FRENTE A
LA CRISIS MUNDIAL, EL MULTILATERALISMO
Y LOS ACUERDOS COMERCIALES
Y DE INVERSION

INDICE

Prologo al Libro: No pagaremos el costo de la crisis. Por un modelo sostenible y justo de Desarrollo. Hacia una PLA ante la crisis. Victor Baez Mosqueira 7

I. CRISIS MUNDIAL
Enfoques globales

1. Global Unions: Declaración Sindical de Washington. ante la Cumbre del G-20. Noviembre 2008 14
2. Global Unions: Declaración Sindical de Londres ante G-20. Abril 2009 24
3. CSI: No a la Economía Casino. Presentado al Foro Social Mundial, Belem. Enero 2009 37
4. Global Unions Oficina Washington, Peter Bakvis: El combate de los sindicatos a la crisis financiera global 41
5. OIT: La crisis financiera y económica: una respuesta basada en el trabajo decente 50
6. SACTWU, Ebrahim Patel: Los desafios de la crisis econòmica y social mundial 57
7. CGT Colombia. Julio Roberto Gómez Esguerra: Crisis y fracaso de la globalización 65
8. CGTRA Argentina. Gerardo Martínez: Intervención en la OIT, Reunión Tripartita de Alto Nivel sobre la actual crisis financiera y económica mundial 68
9. ICM: La crisis financiera internacional y su impacto en los sectores de la ICM 70
10. FIP: Confusión en la industria, crisis financiera y la FIP 72
11. ISP: Comunicado de la Secretaría General 74

Enfoques regionales y subregionales sobre las Américas

12. Declaración de Salvador. Diciembre 2008 78
13. Declaración de Montevideo. Noviembre 2008 81
14. AFL-CIO y CLC: Una nueva agenda de prosperidad para Norteamérica. Febrero 2009 82
15..CCSA, Julio Franco: Crisis social y financiera: opciones desde el movimiento sindical y popular 88
16. CSACC, Rodrigo Aguilar: Centroamérica hacia el 2009: un futuro incierto para la clase trabajadora 94
17. UNI Américas Finanzas, Marcio Monzane: La crisis financiera mundial, el rol de los bancos y la respuesta de la sociedad 98
18. FITTVC-ORI, José Ramírez: Posición del sector ante la crisis 102
19. Khristian Weise: En medio de un cambio de paradigma? La crisis financiera, América Latina y los sindicatos 105

Enfoques nacionales desde Las Américas

20. AFL-CIO, EEUU: La renovación de la economía de Estados Unidos 118
21. CTM México: Un Acuerdo Nacional ante la crisis 123
22. UNT México: Por un cambio de rumbo económico y político en México 125
23. CILAS, Héctor de la Cueva: Otra integración es posible y otra salida a la crisis, también. Escenarios de Las Américas en el 2009 y los retos del movimiento sindical 129
24. CTC Cuba: Frente a la crisis, integración 133
25. CASC Republica Dominicana, Gabriel del Río Doñe y Elpidio Santos; Unidad frente a la crisis 136
26. CNTD República Dominicana, Jacobo Ramos: Enfoque frente la crisis 138
27. CNUS, CASC y CNTD Republica Dominicana: Posición ante la crisis económica internacional 141
28. FNT Nicaragua: Por un modelo de desarrollo enfocado en la justicia social y el bienestar humano 146
29. CATS, El Salvador, Francisco Quijano: Crisis internacional y definición de estrategias sindicales 149
30. UNSITRAGUA Guatemala: Guatemala: una crisis estructural 153
31. CTC Colombia, Apecides Alvis: Resquebrajamiento del modelo neoliberal 157
32. ISP Colombia, Campaña mundial de la ISP Mujeres Agua y Trabajo: Fuentes de Vida Defendemos el agua en manos públicas como un derecho humano 160
33. ICEM Colombia, Carlos Bustos: la crisis económica y el diálogo social en Colombia 164
34. CUT Perú, Julio Cesar Bazán: Anticrisis neoliberal: más especulación, mayor precarización laboral y desigualdades. El sindicalismo exige cambio 167

35. CUT Chile, José Manuel Díaz y Roberto Morales: Neoliberalismo en Chile, Estado y Trabajo: en busca de nuevas oportunidades 171
36.CAT Chile, Ignacio Arraigada Fernández: Crisis financiera y fondos de pensiones 178
37. CUT Brasil: La CUT inicia movilización nacional en defensa del empleo y la renta. Noviembre 2008 182
38. UGT Brasil, Ricardo Patah: Brasil en la crisis financiera mundial 186
39. Forca Sindical Brasil, Paulinho: La globalización y los acuerdos comerciales 189
40. CTA Argentina, Hugo Yasky: La crisis global y los trabajadores. Una reflexión desde Argentina 190
41. UOM Argentina, Eduardo Paladín: Escenario 2009: grandes riesgos, grandes oportunidades 197
42. PIT-CNT Uruguay: Las medidas económicas frente a la crisis internacional en Uruguay 202
43. CNT Paraguay, Miguel Zayas y Rodolfo Romero:. La crisis y sus impactos desde la visión de los trabajadores 205

Otras regiones

44. CCOO España, Javier Doz: España: Crisis económica y cambio de modelo 212
45. UGT España. Antonio López: El sindicalismo internacional frente a la crisis global. Hacia un nuevo paradigma de desarrollo basado en la justicia social 220
46. José Maria Zufiaur. Cómo hemos llegado a esto? 224

II. MULTILATERALISMO

47. CSI, Esther Busser: Cuál es el estado de las negociaciones en la OMC y qué debemos esperar? 232
48. CSI, Esther Busser: El Grupo NAMA 11: Generalidades y logros 238
49. IMF/FITIM, Carla Coletti: Trabajo seguro para un futuro seguro 244
50. Kjeld Jakobson: Un balance de casi siete años de la Ronda Doha 249
51. Mike Wargnone. GATS/OMC: El Modo 4 y los Trabajadores 261
52. SOMO, Miriam Wender: El libre comercio de servicios financieros contribuye a la profundización de la crisis 266
53. SOLIDAR, Andrea Maskimovic: La crisis económica y el financiamiento para el desarrollo: amenazas y oportunidades para la solidaridad global 273

Enfoques americanos regionales y nacionales

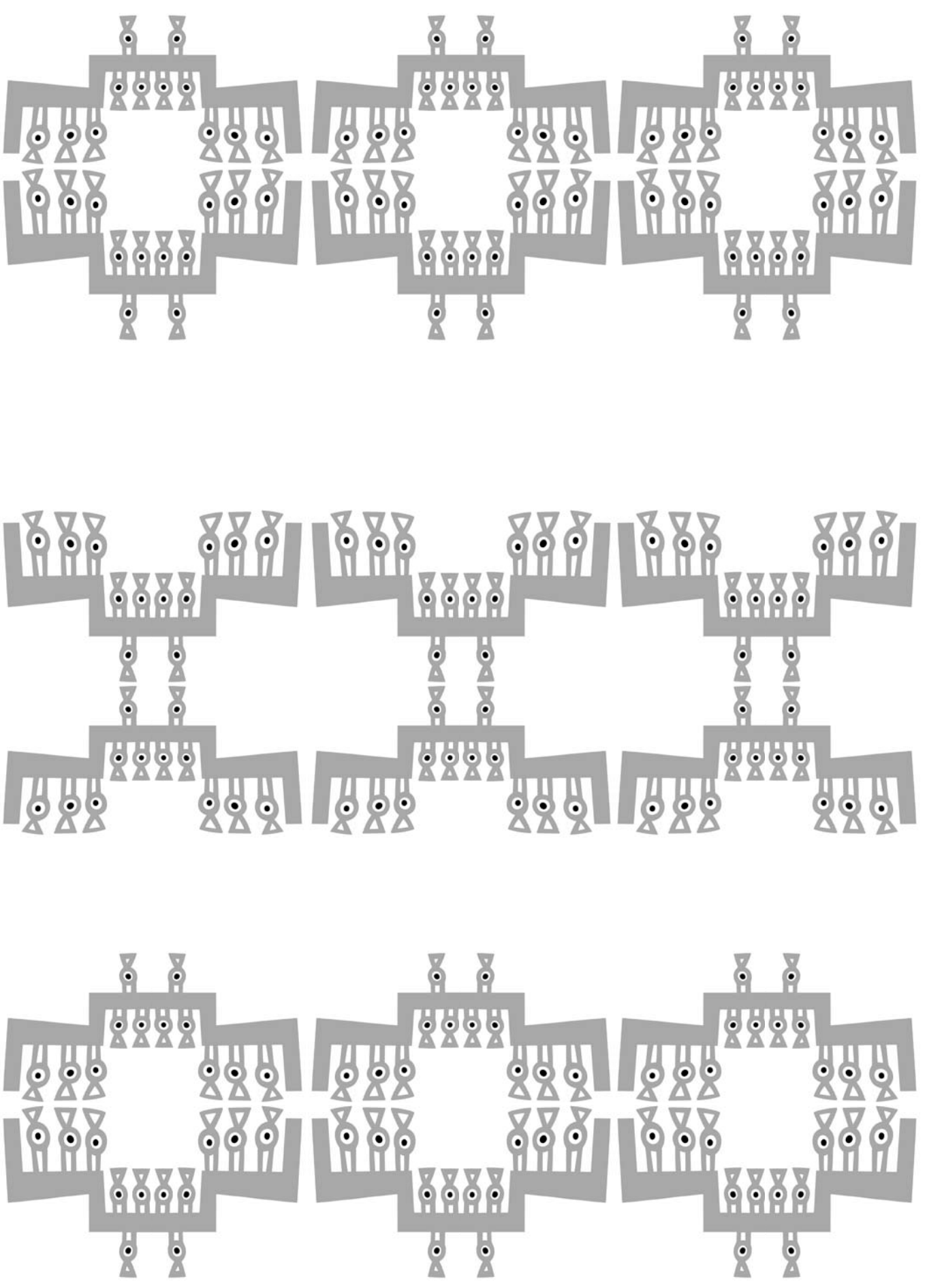
54. CSA, Hilda Sánchez: El Grupo Sindicatos OMC: estrategia y acción sindical durante 2008 284
55. CGTRA Argentina: Agostina Giardini, Marita González, y Antonio Jara. El movimiento sindical en las negociaciones de la Ronda Doha 2008: la CGTRA 303

Otras regiones

56. Mani Candan: Negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas reclamos y actividades en la India 308
57. TUCP, Filipinas, Ariel Castro: Acciones relacionadas con el NAMA en Filipinas 314

III. ACUERDOS COMERCIALES

58. CLC, Canadá. Sheila Katz y Teresa Healy: Bilateralismo asimétrico: seguridad, prosperidad y el TLC de Canadá con Colombia 322
59. CSA, Hilda Sánchez: La salida al Pacífico, APEC, Foro Arco Latinoamericano y ASEAN 339
60. CSA, Hilda Sánchez: La activa presencia de Corea frente a las negociaciones de libre comercio e inversión 367
61. Silvia Portella de Castro: Desafíos de la integración ante la crisis 386
62. Alvaro Padrón: Una nueva política internacio0nal, un nuevo sindicalismo 396
63. CSA, Alvaro Orsatti. La construcción del Acuerdo Birregional UE-ALyC 403



PROLOGO AL LIBRO

Victor Baez Mosqueira,
Secretario General de la CSA, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Las Américas

No pagaremos el costo de la crisis. Por un modelo sustentable y justo de desarrollo. Hacia una PLA ante la crisis

Los dos primeros componentes del título de esta presentación son la consigna del Foro de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas que CSA decidió organizar en Trinidad Tobago, previo a la IV Cumbre de las Américas.

Con ello, el sindicalismo repite un fuerte protagonismo continental, desde su concepción y representatividad, como el que tuvo en la anterior Cumbre (Mar del Plata, noviembre 2005), cuando presentó la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), como resultado de un proceso de varios meses de construcción de consenso con las coordinadoras sindicales subregionales, junto a las organizaciones mexicanas, canadienses y norteamericanas.

Es un hecho que hace tres años y medio, en ese final del 2005, no había una percepción clara sobre la crisis múltiple que se avecinaba, más allá de la evidencia que algo no funcionaba en el sector financiero global, señalada por la CIOSL desde hacía años. Por ello, la PLA se concentraba en dar al sindicalismo y el resto de la sociedad de la región lineamientos de tipo estructural, que pudieran ser útiles, ajustados a las particularidades de cada país, para ir en dirección a una transformación estructural de las economías de países que, en todos los casos, pertenecen al sur económico, más allá de sus tamaños y características.

En sus documentos recientes (ante actividades en Washington, Belem, Londres), la CSI ha considerado llegado el momento y la oportunidad para que todos los países avancen hacia un cambio económico, que deje atrás no solo la crisis económica-financiera, sino las "otras" crisis relacionadas (energética-medioambiental, alimentaria) y la que, con elocuencia, CSI denomina la "crisis de la justicia distributiva".

La estrategia de la CSI y sus regionales por una nueva gobernanza global incluye:

- una defensa del multilateralismo, estableciendo normas justas en materia de comercio internacional, para contribuir al desarrollo de los países y a la reducción de las desigualdades, y imitaciones a los comportamientos especulativos en los intercambios comerciales, incluidos los productos básicos y los mercados energéticos. Este multilateralismo debe incluir las cuestiones vinculadas al empleo como un elemento central.

- una cooperación global al desarrollo que retome la meta histórica del 0.7% del PBI de los países industrializados, incluyendo compromisos vinculantes y con cambios en la condicionalidad.
- la construcción de una nueva arquitectura financiera y económica mundial, ya que las instituciones existentes en este campo no tienen ni la envergadura ni la credibilidad para esta tarea. Se necesita: la participación de otros países que los que forman el G-8, reflejado en el poder de voto; reglamentaciones de las inversiones extranjeras y los flujos de capital, incluyendo una "tasa Tobin"; ampliación de los préstamos de emergencia del FMI e incremento de la ayuda del Banco Mundial y organismos de Naciones Unidas para países en desarrollo y países emergentes afectados en su balanza de pagos, con condicionalidades positivas; control de la circulación monetaria y financiera en el mundo, así como del mercado de productos derivados, limitando la especulación y concentrando el papel de los mercados en la financiación de las empresas; rendición pública de cuentas por los bancos centrales; fin a los centros financieros "off-shore" y a otros paraísos fiscales; mayor regulación de la inversión extranjera; creación de nuevos servicios financieros para la economía solidaria; reglamentación del salario de los ejecutivos del sistema financiero.
- la generación de una "gobernanza social", para enfrentar lo que parece avecinarse: una "crisis de desempleo" y "de pobreza", con centro en una "seguridad social decente", incluyendo una política protectora de los regímenes de pensiones, aumento del ingreso de los sectores bajos y medios, utilización de los salarios mínimos para establecer un piso remuneratorio; políticas de trabajo dirigidas a reducir el riesgo de desempleo; políticas focalizadas en los grupos más afectados: jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas de edad avanzada, discapacitados, trabajadores temporarios y a tiempo parcial. El aspecto social también se vincula con las políticas hacia la inversión extranjera, al introducir los dos principales instrumentos internacionales (Directrices OCDE y Declaración Tripartita de OIT).

Asimismo, se establece un "puente" entre el capítulo económico y productivo, en cuanto a la recomendación de una política de inversión pública y privada en infraestructura, para estimular el crecimiento de la demanda y aumentar la productividad en el mediano plazo.

Este capítulo no deja afuera, la exploración del potencial (bastante difícil de concretar en América Latina-Caribe, del diálogo social, en cuanto a la búsqueda de acuerdos con gobiernos y sindicatos para desarrollar programas de reestructuración empresaria, incluyendo componentes de capacitación. En esta marco, es también infaltable la apelación permanente del sindicalismo por la vigencia del derecho de los trabajadores/as a formar sindicatos libres y a negociar colectivamente la redistribución de beneficios.

Las propuestas del sindicalismo internacional antes mencionadas tienen los elementos básicos que necesitan las sociedades de las Américas. El enfoque de la CSI se detiene poco en la situación de sus regionales, interpretando que la propuesta de cambio a nivel global es una condición básica para resolver los problemas del subdesarrollo, los cuales son reconocidos, en términos de desigualdad entre regiones y países. Ello es comprensible, en el sentido de que una organización global debe concentrarse en las propuestas globales.

En este sentido, la CSA (así como las otras regionales de la CSI) tiene el papel de avanzar específicamente en las problemáticas específicas de la región. En lo referente a América del Norte, el documento de AFL-CIO y CLC dirigido a los gobiernos de sus países son un compendio del enfoque requerido por CSA para esas sociedades, proyectado también a México. En lo que respecta a América Latina-Caribe, es necesario volver a la PLA y al enfoque estructural allí desarrollado, para encontrar una aplicación de coyuntura: una "PLA ante la crisis", en sus planos internacionales y subregionales/nacionales.

Al momento de encarar esta tarea, aparecen elementos diferenciados de la propuesta global de la CSI que requieren ser interpretados. Por ejemplo, si en los países desarrollados la demanda es por una recuperación de los mayores niveles de igualdad que existían allí en décadas pasadas, esta formulación, en el caso de países con menor desarrollo, debe fijar la mirada en el hecho de que más que un "retorno", se necesita una "llegada" a una mayor igualdad social. Asimismo, en cuanto al papel del Estado, hay que recordar el hecho de que en la periferia éste ha sido, durante el ciclo neoliberal, golpeado por versiones extremas del enfoque de la desregulación y de la meta del "Estado mínimo".

La propuesta estructural de la CSA tiene como eje central la consigna de un desarrollo sostenible, asumiendo el concepto internacionalmente reconocido desde hace veinte años, que destaca tres pilares: el económico, el social y el medioambiental. Lo que caracteriza a la CSA en esta propuesta es la importancia que le da al capitulo económico, lo que no suele observarse en otras aplicaciones del concepto (sobre todo en los países industrializados), en que rápidamente se pasa a los dos restantes. Por el contrario, para CSA se necesita, como condición esencial, un desarrollo de "nuevo tipo", en que los países de la región avancen hacia economías mas justas y equilibradas en sus componentes internos y externos, que generen más y mejores trabajos, incluyendo niveles remuneratorios justos, complementados por políticas de protección social, que en su conjunto reconozcan las expectativas de las personas ubicadas en los segmentos medio y bajo de ingresos (la "base de la pirámide"), hacia un "consumo de masas".

El centro está puesto en los problemas recurrentes del subdesarrollo económico de los países de la región, manteniéndose lejana la meta de alcanzar verdaderos procesos de acumulación en el largo plazo, con componentes de autonomía que reduzcan al mínimo el impacto de factores externos, ya sea una crisis financiera o las políticas de las transnacionales.

En el logro de esta economía diferente juegan muchos factores, como la política fiscal progresiva entre ricos y pobres (y al interior de estos entre los distintos sectores sociales), las políticas estatales que hacen accesibles los bienes públicos para las clases populares, en cuanto a salud, transporte, educación, vivienda y el propio consumo de alimentos, ropa y otros elementos de la vida cotidiana. Estos factores, así como la protección social, retroalimentan el consumo, hacia un circulo virtuoso económico.

Junto al factor interno, se ubica el externo, partiendo del concepto de comercio justo en el multilateralismo, proyectándose hacia el plano de la integración regional, que desde hace casi veinte años es considerada clave por el sindicalismo latinoamericano-caribeño, especialmente entre países cercanos en cuanto a su desarrollo productivo y factores culturales. Por esta vía, se aumentan las interrelaciones comerciales y se juntan fuerzas ante otros bloques y ante los países centrales, permitiendo así su mayor capacidad para imponer sus condiciones en la "selva del mercado". También se espera que a través de la integración los países miembros alcancen un grado alto de coordinación económica, de forma que los respectivos Estados nacionales se fortalezcan a través de acuerdos.

La magnitud y extensión de la crisis actual instala un contexto diferente a estas propuestas, respecto de lo cual es necesario formularse dos preguntas encadenadas: ¿ la crisis será un riesgo o una oportunidad para los trabajadores/as y sus organizaciones? ¿ Cómo aprovechar el momento para que las políticas públicas anticíclicas de los Estados nacionales incorporen elementos del enfoque estructural del sindicalismo?

Como principio general, es claro que se necesita un doble movimiento de políticas, que enlace la reforma de las institucionales internacionales con la aplicación de programas de nuevo tipo en los países del sur. Algunos de sus elementos, que serán discutidos en el Foro, como base para propuestas estratégicas concretas de la CSA y sus afiliadas, son las siguientes:

1. El "clima de época" en relación a la crisis, ha instalado un enfoque positivo a la adopción de planes expansivos nacionales. En el norte, estos planes son también "de salvataje" de las empresas quebradas. En el sur debieran adoptar un perfil más amplio, para convertirse simultáneamente en una vía de resolución de los problemas estructurales.

En el plano productivo, la etapa de auge del comercio internacional de commodities inmediatamente anterior a la crisis (y, en sí mismo, aportante a ésta), ha llevado a la "reprimarización" de las economías latinoamericanas involucradas. Este debiera ser entonces un elemento central al momento de volver a promover sectores económicos.

En el plano social, CSA ha utilizado el término de "blindaje social" (en contraste con el financiero) para mostrar que, además de cuidar la recuperación de las empresas afectadas, se necesita atender a las personas. La existencia en las Américas de sistemas de pensiones basados en ahorros colocados en función del mercado bursátil, actualiza el debate sobre la disyuntiva entre sistemas públicos o privados, al poner en evidencia la fragilidad de este enfoque.

En un plano mixto entre lo productivo y lo social, se ubica el "crecimiento verde", un tema de amplio consenso que plantea la necesidad de que las medidas de inversión pública y privada en infraestructura, transporte colectivo y energía renovable se vinculen a la reducción de emisiones y la producción de carbono de los actuales procesos productivos. Este enfoque también favorece la estabilidad de los precios de los bienes energéticos, y presenta grandes oportunidades en materia de creación de empleo.

Los planes productivos y sociales deben también incluir el componente de trabajadores inmigrantes, los cuales pueden ser especialmente afectados por la crisis.

2. Visto globalmente, hay que recordar que ALyC es la región más desigual del mundo, por la presencia de grandes clases medias bajas, junto a polos de poder económico concentrado, produciéndose así una gran heterogeneidad. El capitulo impositivo es clave para reducir la disparidad en los ingresos, y ello es permanente, no desapareciendo en época de crisis. Las políticas de protección social para las mayorías de excluidos son viables sólo con este financiamiento no contributivo.

3. El G-20 ha planteado la necesidad de retomar, en el nuevo contexto, las negociaciones multilaterales de comercio, como una forma de neutralizar el potencial proteccionismo que puede traer la crisis, y se hacen llamamientos a una pronta finalización de la Ronda. Sin embargo, se mantienen las razones por las que la gran mayoría de los países del sur no apoyaron la conclusión de Doha. En ALyC, el Grupo Sindicatos OMC de la CSA acompañó al Grupo NAMA 11 de la CSI en la adopción de una estrategia en este tema en igual dirección.

4. La crisis trae potencialmente una nueva ola de proteccionismo, aplicada a un retraimiento de las economías nacionales al interior de sus fronteras. Incluso, cuando existen procesos de integración regional, pueden aparecer (y de hecho ello ya ha comenzado) medidas unilaterales de sus países miembros en igual dirección. Esto tiene que ser evitado, al tiempo que pueden utilizarse los propios procesos de integración para encarar los planes de reactivación, con formato supranacional, por ejemplo en el campo de la infraestructura física.

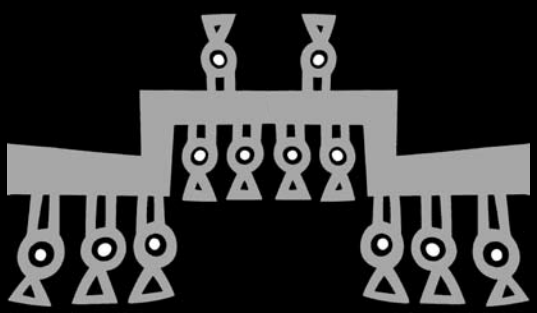
5. Es mínimo el número de países de América Latina-Caribe que podrá encarar con fondos propios programas anticíclicos. Se necesita entonces vincular esta dimensión nacional con la global, encontrando una fuente de apoyo externa, con la obvia condición de que no agrave la situación de endeudamiento externo. Existen propuestas varias en esta dirección, desde la utilización del instrumento de los Derechos Especiales de Giro (DEG), hasta de los fondos soberanos de paises emergentes.

6. La reducción de los desequilibrios económicos globale está en el corazón de la reforma al actual modelo de capitalismo global. Por un lado, los países deficitarios en su cuenta corriente externa (comenzando

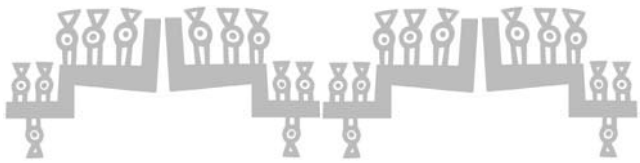
por EEUU) deberán tener una actitud macroeconómica prudente a mediado plano, apuntando a equilibrar esta cuenta, al trazar las politicas fiscales y monetarias, y al definir sus políticas referidas al consumo y a las importaciones, para moderar ambos factores. Ello no es contradictorio con que, ante la crisis, en el corto plazo adopten medidas temporales (rebajas fiscales puntuales o proyectos de inversión pública). Por otro, las economías con exceso de ahorro deben reducir progresivamente sus superávits de cuenta corriente, mediante la "inversión en sí mismos", reforzando su demanda interna en vez de colocar sus recursos en el exterior. Los recursos podrán dirigirse a mejorar sus infraestructuras productivas y sociales, favoreciendo el crecimiento económico y promoviendo el desarrollo social, para elevar el nivel de vida de su población, frecuentemente postergada en la dinámica anterior. En este contexto, aparece el recuerdo del "Bretton Woods que no fue", es decir, el enfoque (denominado a veces de "Keynesianismo Global"), planteado por el propio Keynes, como negociador por el Reino Unido.

Los artículos presentados en esta compilación reúnen entonces perspectivas nacionales, subregionales e internacionales que colaborarán sin duda para que el Foro avance hacia el objetivo de alcanzar una estrategia que refleje lo común y lo diverso de la clase trabajadora de las Amèricas hacia la exploración de las posibilidades que la actual crisis ofrece a la batalla de largo plazo por, como dice la consigna, un modelo sustentable y justo de desarrollo.

I.
CRISIS MUNDIAL



ENFOQUES GLOBALES



DECLARACIÓN DE WASHINGTON ANTE LA CUMBRE DEL G20 SOBRE LA CRISIS

Noviembre 2008

Resumen ejecutivo

Los líderes del G20 se reúnen en el momento en que la economía mundial se encuentra al borde del precipicio. El espectacular empeoramiento de la crisis financiera en septiembre y octubre de 2008, ahora ejerce un dramático impacto en la economía real. Se prevé una caída del PBI y el aumento del desempleo en los principales países industrializados.

La crisis se está extendiendo a las economías emergentes y a las economías en vías de desarrollo.

Ya varios gobiernos han tenido que solicitar préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a la paralización de sus sectores financieros, la huída de capitales fuera del país, el derrumbe de las monedas y el punto muerto en el que se encuentra el crecimiento económico.

La economía mundial se enfrenta a una grave recesión. Qué tan prolongada y profunda sea depende de cuán oportuna y bien centrada sea la acción gubernamental.

Esta crisis sistémica viene a añadirse al aumento sin precedente de los precios de los alimentos y los productos básicos experimentado a principios del año y la consiguiente crisis alimentaria en los países en desarrollo. También se produce en el contexto de un acelerado cambio climático, que sin una acción rápida afectará más gravemente a los más pobres en todo el mundo y a los grupos especialmente vulnerables, incluidas las mujeres.

La historia ha demostrado que las crisis de esta magnitud conducen a la inestabilidad social y política cuyos resultados son impredecibles y, a menudo, trágicos. Las familias trabajadoras corren un enorme riesgo en la respuesta a esta crisis. Ya desde hace más de dos décadas, la cohesión social se ha visto presionada como resultado de la creciente desigualdad que existe en la mayoría de los países. Hoy día, son los que están perdiendosu hogar, su empleo y pensión como consecuencia de la crisis financiera, de la que en modo alguno son responsables, a los que se recurre en su rol de contribuyentes para que saquen de apuros a los realmente responsables.

Los gobiernos del G20 deben reconocer la urgente necesidad de ponerse a trabajar en pos de un sistema de gobernanza de los mercados mundiales más incluyente, justo y democrático. Los sindicatos deben ocupar un sitio en la mesa de negociación y participar en las negociaciones cruciales que se llevarán a cabo en las diferentes instituciones en los próximos meses.

La actual crisis económica comenzó en los Estados Unidos como una conjunción de la crisis de la vivienda, la crisis del mercado crediticio y con una crisis creciente del empleo. Cada una de estas crisis ya es suficientemente grave de por sí, pero su interacción está creando una dinámica particularmente compleja y peligrosa en la economía real. Los precios de la vivienda se han derrumbado, han aumentado las ejecuciones de hipotecas por falta de pago y se han volatilizado billones de dólares del patrimonio de los hogares.

Los consumidores están frenando ostensiblemente la demanda a medida que su poder de compra disminuye, desacelerando la economía y obligando a los empleadores a cerrar puestos de trabajo y a recortar salarios y prestaciones sociales. El continuo descenso de los precios de la vivienda también agrava la crisis crediticia a medida que el valor de los activos con garantía hipotecaría sigue socavando el balance financiero de las instituciones financieras subcapitalizadas.

A menos que se ponga alto a este descenso en el precio de los activos y del empleo, continuará la hemorragia en el sistema bancario. Este círculo vicioso se está repitiendo ahora en otros países industrializados y economías emergentes que originalmente se pensaba serían inmunes a esta crisis.

La entrada forzada de los gobiernos en los mercados financieros para nacionalizar los bancos, los depósitos de garantía, la compra de deudas incobrables y la recapitalización de los sistemas bancarios en EE.UU. y Europa es necesaria. Sin embargo, es inaceptable que los gobiernos nacionalicen las pérdidas del capital financiero y dejen que las instituciones financieras privaticen las ganancias y beneficios.

Esta crisis económica, la más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930 debe poner fin a la ideología de mercados financieros sin restricciones, donde la autorregulación ha demostrado ser un fraude y el afán de lucro ha obnubilado el sentido común en detrimento de la economía real.

Es preciso desarrollar una arquitectura reglamentaria nacional y mundial a fin de que los mercados financieros vuelvan a desempeñar su función primera: garantizar la financiación estable y rentable de la inversión productiva en la economía real.

Además, los gobiernos y las instituciones internacionales deben establecer un nuevo orden económico que resulte económicamente eficiente y socialmente justo, una tarea tan ambiciosa como aquella a la que se enfrentó la reunión de Bretton Woods en 1944.

Los líderes de los principales países reunidos en Washington deben poner en marcha un proceso con todos los países mas allá del G20 con el fin de: Iniciar un importante plan de recuperación para estabilizar los mercados mundiales de capital, sacar rápidamente a las economías de la recesión, evitar los riesgos de una depresión mundial y volver a encaminarse hacia la creación de trabajo decente. En caso necesario, debería además combinarse con recortes en los tipos de interés. Los gobiernos deben llevar adelante los programas de inversión en infraestructura que pueda estimular el crecimiento de la demanda a corto plazo e incrementar el crecimiento de la productividad a medio plazo.

Ahora es el momento de avanzar con un "Nuevo trato verde" *(Green New Deal)* para crear puestos de trabajo mediante el desarrollo de la energías alternativas así como el ahorro y la conservación de energía. Deben introducirse medidas fiscales y de gastos para apoyar el poder adquisitivo de la población de medios y bajos ingresos.

Es preciso mantener los presupuestos de ayuda para los países menos avanzados con el fin de ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) mediante la adopción de compromisos vinculantes y un calendario para alcanzar el objetivo de la ONU de 0,7% del PIB.

Garantizar que nunca vuelva a producirse una crisis financiera de tal magnitud

Durante dos décadas, la mayoría de los gobiernos, conjuntamente con las instituciones financieras internacionales (IFI) han promovido la apenas regulada "nueva arquitectura financiera", que ha caracterizado los mercados financieros mundiales responsables de esta crisis.

Ahora, los gobiernos se han visto obligados a intervenir para salvar el sistema bancario: la contrapartida deben ser instituciones financieras debidamente reguladas.

El orden del día debe incluir: la rendición pública de cuentas de los bancos centrales; los requisitos de ajuste coyuntural de los activos y supervisar a los bancos; la regulación de los fondos de alto riesgo y el capital riesgo; la reforma y el control de las indemnizaciones a los ejecutivos y la distribución de las ganancias de las empresas; la reforma del sector de las agencias calificadoras de riesgo; acabar con los paraísos fiscales extraterritoriales; la fiscalidad de las transacciones financieras internacionales; la adecuada protección de los consumidores contra préstamos abusivos y las políticas de ventas agresivas de la banca y políticas públicas activas en favor de la vivienda y de servicios financieros basados en la comunidad.

El nuevo sistema debe reflejar las necesidades de todos los reguladores; los reguladores bancarios, fiscales y autoridades que se ocupan de la competencia así como la gobernanza y las organizaciones de consumidores en cada país. No deben aplicarse más enfoques parciales a la reforma.

Establecer una nueva estructura de gobernanza económica para la economía mundial

Esta estructura debe ir más allá de los mercados financieros o los sistemas monetarios para hacer frente a todos los desequilibrios del crecimiento y los flujos de capital que han contribuido a la crisis.

Al igual que los acuerdos económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, incluidos el fortalecimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), paralelamente a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el nuevo acuerdo posterior a la crisis debe abordar la gobernanza económica internacional. Los gobiernos deben empezar a trabajar sobre las estructuras necesarias. Sin embargo, este debate no deberá tener lugar entre banqueros y responsables del ministerio de hacienda o finanzas a puerta cerrada. Los sindicatos deben participar en este debate.

Luchar contra la explosión de la desigualdad en la distribución de los ingresos que se esconde detrás de esta crisis.

El nuevo sistema de gobernanza económica debe tratar de resolver la crisis de la justicia distributiva que ha asolado a la economía mundial. Es preciso que garantice un crecimiento más equilibrado en la economía global entre las regiones, así como en el seno de cada país, entre el capital y el trabajo, entre altos y bajos ingresos, entre ricos y pobres y entre hombres y mujeres.

La reunión del G20 debería iniciar el proceso. La agenda para el cambio debe avanzar en otras reuniones en el curso de los próximos meses; en particular en la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Doha a finales de mes.

En la posterior Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará en Poznan en diciembre, debe prometerse

ayuda inmediata de parte de los países industrializados para permitir una mayor transferencia de tecnología y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Esta óptica contribuirá además al establecimiento de la confianza que se requiere para concluir con éxito las actuales negociaciones sobre el cambio climático a finales de 2009.

Las reuniones del G8 en Italia, así como las reuniones de las instituciones financieras internacionales y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009, deben aprovecharse para lograr el máximo efecto. No puede volverse a la situación de antes.

I. Un plan coordinado de recuperación para la economía real

El creciente caos financiero está pasando factura a la economía real a través de una abrupta caída del empleo en los Estados Unidos y el Reino Unido, que ahora se está extendiendo a la zona del euro y amenaza con una recesión mundial. Se prevé el descenso del PIB en los EE.UU. y la zona del euro durante la mayor parte de 2009. Se calcula que las tasas de desempleo en los países de la OCDE se dispararán un 20% en los próximos seis meses, aunque es posible que este porcentaje haya sido subestimado.

En varios países emergentes y en desarrollo, especialmente aquellos con alto coeficiente de endeudamiento de los sistemas bancarios o con grandes déficits de cuenta corriente, se están produciendo recortes de empleo generalizados y los ingresos reales de las familias están descendiendo. El capital está huyendo de muchos países en desarrollo que no pueden permitirse la pérdida de inversión, y los problemas se están agravando debido a la reducción de las remesas de los trabajadores y trabajadoras migrantes, quienestambién están perdiendo masivamente sus puestos de trabajo.

La OIT prevé por su parte que el desempleo mundial aumentará de los 190 millones que se contaban en 2007 a 210 millones en 2009, el número de trabajadores pobres que ganan menos de un dólar diario aumentará a 40 millones y el número de los que ganan 2 dólares al día ascenderá a 100 millones.

Los jefes de Estado y los responsables de los bancos centrales no deben repetir las calamidades de la década de los años 1930, tratando de equilibrar los presupuestos, recortando los salarios y aplicando políticas monetarias y de tipos de cambio destinadas a "empobrecer al vecino". Por el contrario, los líderes del G20 deben poner en marcha un plan coordinado de recuperación dirigido a estimular la economía real tanto a escala nacional comomundial.

Tanto EE.UU. como Europa necesitan más reducciones coordinadas de las tasas de interés por parte de sus bancos centrales. Deben fortalecerse medidas estabilizadoras fiscales tales como los regímenes de subsidios de desempleo y complementarlas, en caso necesario, con programas de creación directa de empleo.

Los incentivos fiscales deberían centrarse en el aumento de la demanda agregada de magnitud suficiente para revitalizar la economía real: el empleo, los salarios y el aumento de la renta disponible de los hogares. Deben dirigirse medidas fiscales y de gasto a las familias de ingresos bajos y medios, que son las que más padecen la situación actual y que, al tener mayores tasas de consumo, las reinyectarán con toda rapidez al consumo, a la producción y, por tanto, al empleo.

En los países en desarrollo y emergentes, los gobiernos deberán contrarrestar igualmente la desaceleración económica a través de la política monetaria, mediante el apoyo a programas de creación de empleo y la ampliación o la creación de redes de seguridad social. Las instituciones financieras internacionales no deben repetir los errores de la crisis financiera asiática de hace una década presionando a los países a aumentar las tasas de interés, recortar el gasto público y permitiendo quiebras bancarias generalizadas: lo contrario de lo que están

haciendo hoy día los países industrializados. Por el contrario, deberá alentarse a los países en desarrollo a mantener los niveles de empleo y brindar ayuda pública a los sectores más vulnerables de la población.

Debe aprovecharse la oportunidad de poner en marcha un "Nuevo trato verde", como lo pidió el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OIT en el Informe sobre empleos verdes. Este es el momento para ayudar a la recuperación económica a través de la inversión ambientalmente responsable encaminada a crear puestos de trabajo a corto plazo, en particular para los jóvenes y las mujeres, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a medio plazo. Las medidas destinadas a fomentar el ahorro de energía a través de la mejora de edificios requerirán una mano de obra especialmente intensiva, lo que apoyaría a la tan afectada industria de la construcción. La inversión pública en infraestructura, transporte público y fuentes de energía alternativas también estimulará la creación de empleos verdes. La inversión a largo plazo y destinada a mejorar la productividad en infraestructuras públicas como escuelas, hospitales, agua potable y saneamiento, así como el transporte público y la energía, no sólo ayudará a las economías nacionales a evitar o a salir de la recesión, sino que también sentará las bases para que millones de personas salgan de la pobreza.

Más allá de la infraestructura, también es el momento de invertir en las personas: en su educación y salud así como en la atención a los menores y a los ancianos. Es preciso dar formación a 18 millones de nuevos docentes sólo para cumplir el objetivo de una educación de calidad para todos los niños y niñas en edad de asistir a la educación primaria para el año 2015. Son necesarios millones de docentes e instructores adicionales para la enseñanza profesional y la formación práctica, que son los puntales de la economía real, y para la reconversión de los trabajadores y las trabajadoras a medida que se produce la restructuración de las economías.

La nueva Administración de EE.UU. debe presentar un plan integral que combine el aumento de los ingresos de los trabajadores de rentas bajas y medias, al tiempo que refuerce las redes de seguridad, incluyendo subsidios de desempleo, un programa amplio de cupones de alimentos, ayuda a los gobiernos estatales y locales con un ambicioso gasto del gobierno federal en educación e infraestructura. Es preciso restaurar el derecho a sindicalizarse y que los EE.UU. hagan cumplir las normas fundamentales del trabajo de la OIT.

Japón será especialmente vulnerable en caso de que la crisis se profundice en las economías emergentes de Asia. Las autoridades deben tomar medidas para reequilibrar la economía en favor de la demanda interna, visto que el crecimiento actual se basa casi exclusivamente en las exportaciones, actualmente afectadas por la apreciación del yen. Actualmente son de crucial importancia los aumentos de los salarios reales para incrementar la demanda y deben ser respaldados por una política fiscal que apoye el consumo de los hogares y contrarreste las crecientes desigualdades.

En la Unión Europea, es preciso mejorar radicalmente la coordinación de las diferentes iniciativas de política fiscal de los Estados miembros y reunirlas en el marco de un mecanismo mejorado de gobernanza económica.

Los sindicatos europeos han pedido la creación de un fondo de inversión europeo para promover la inversión en energías renovables, los ahorros de energía, la innovación y redes de infraestructuras europeas. No deben bloquearse los proyectos de inversión a causa de una aplicación equivocada del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Banco Central Europeo (BCE), si bien se ha mostrado activo en suministrar liquidez para frenar la crisis bancaria, ha cometido el desacierto de aumentar los tipos de interés tan recientemente como el verano de 2008. El BCE debe contribuir a la recuperación en Europa y el reajuste mundial continuando la reducción de los tipos de interés. Deberá

crearse un consejo supervisor integrado por los interlocutores sociales europeos y los miembros del Comité Ejecutivo del BCE.

Asimismo, deben diseñarse paquetes de medidas de recuperación destinadas a corregir los desequilibrios económicos fundamentales que ha producido la actual crisis. En particular, el desequilibrio entre los EE.UU. y otras partes de la economía mundial, el desequilibrio entre las finanzas y la economía real y el desequilibrio de poder de negociación entre los trabajadores y sus empleadores. Las economías que presentan excedentes deberán reorientarlos de modo a sostener el consumo nacional y la inversión productiva. Los derechos sindicables deberán respetarse plenamente y también fomentarse con el fin de que los trabajadores y trabajadoras puedan mejorar su nivel de vida.

El "Nuevo trato mundial" debe ir acompañado de un nuevo enfoque de la responsabilidad fiscal. En las circunstancias actuales, el peor error sería seguir recortando aún más los presupuestos del sector público. Debe renovarse el compromiso de prestar servicios públicos de calidad y financiados con fondos públicos. Repensar las responsabilidades tanto del sector público como del privado debe incluir una financiación responsable del sector público a través de un régimen tributario equitativo y un nuevo compromiso con la eficiencia y el valor ético de los servicios públicos de calidad, en el que las organizaciones que representan a los funcionarios puedan desempeñar un papel clave.

La comunidad internacional debe ampliar rápidamente los préstamos de emergencia del FMI e incrementar la ayuda del Banco Mundial y los organismos de las Naciones Unidas para muchos países en desarrollo y países emergentes cuya situación probablemente presente un déficit de la balanza de pagos a causa de la crisis financiera y el continuo y elevado aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que entre 2004 y 2007, el número de personas desnutridas en el mundo aumentó un 9%, ascendiendo a 923 millones de personas, antes de que los precios de los alimentos se dispararan en 2008. También es preciso incrementar la ayuda oficial al desarrollo a más largo plazo. Los gobiernos de los países industrializados deben cumplir, como mínimo, con los compromisos que asumieron en la Cumbre del G8 de Gleneagles de aumentar el nivel de la ayuda oficial al desarrollo.

II. Volver a regular los mercados financieros mundiales

Durante dos décadas, la mayoría de los gobiernos, junto con las instituciones financieras internacionales, han promovido la "nueva arquitectura financiera" apenas regulada, que ha caracterizado los mercados financieros globales responsables de esta crisis: la desregulación irresponsable que favorece la excesiva influencia de las instituciones financieras (incluyendo los bancos de inversión, los fondos especulativos y el capital riesgo) y la "innovación financiera" de transferencias del riesgo crediticio de la inversión en valores, que exportan deuda incobrable bajo la apariencia de productos estructurados.

El negocio de la financiación estructurada creó la ilusión de capital de bajo riesgo y bajo costo. Como puso de manifiesto la crisis, los riesgos no eran aparentes, sino ocultos. Aunado a normativas de contabilidad bancarias "pro-cíclicas" y exigencias rígidas de capital, la crisis de liquidez que siguió al colapso de la estructura de las finanzas creó un proceso depresivo de los activos, capaz de perpetuarse a sí mismo, en el sector bancario.

Las intervenciones de los bancos centrales y los gobiernos llevadas a cabo durante las últimas semanas en un intento de restablecer la confianza y estabilizar los mercados de crédito así como inyectar capital nuevo son necesarias para salvar el sistema bancario. La crisis de solvencia bancaria es el corolario de una década de aplicación excesiva del modelo de "valor para el accionista" propio de la gobernanza corporativa y visión a corto plazo

de las empresas. El dinero desperdiciado en generosos dividendos, recompras y los grotescamente enormes paquetes de compensaciones salariales para los ejecutivos en el pasado "ciclo de crecimiento" 2003-2006 hacen cruelmente falta ahora que los bancos están a la búsqueda de dinero fresco para recapitalizar sus balances. Visto que gran parte del sistema financiero está siendo sostenido por el contribuyente, los sindicatos insisten en que los gobiernos tengan una participación accionaria y actúen como inversores activistas con el fin de proteger el interés público y garantizar que acabe por rembolsarse finalmente al contribuyente.

Los gobiernos siguen considerando pertinentes las recomendaciones de abril de 2008 del Foro sobre Estabilidad Financiera (FEF) sobre las exigencias en materia de capital propio de los bancos, la política de gestión del riesgo, la negligencia de las agencias de calificación de productos estructurados y de solvencia. Pese a la acogida favorable que pueda darse a estas recomendaciones, ahora pueden considerarse como seriamente inadecuadas. Es preciso actuar para corregir las medidas fiscales y regulatorias que han permitido a los operadores del mercado asumir riesgos excesivos.

La cooperación internacional debe ir mucho más allá de lo que es actualmente objeto de examen, mediante la revisión de las normas prudenciales para los bancos y "alentando" una mayor transparencia. Lo que necesita restaurarse es la arquitectura regulatoria nacional y mundial a fin de que los mercados financieros reanuden su función principal: garantizar la financiación estable y rentable de la economía real. Los líderes políticos deben dar luz verde al trabajo sobre un programa destinado a re-regular los mercados financieros. Este programa debe incluir:

- Garantizar que los bancos centrales sean públicamente responsables de sus actos y tengan el mandato necesario para detectar y prevenir burbujas financieras especulativas;
- Garantizar una supervisión activa, requisitos anticíclicos adecuados respecto a los activos y normas de contabilidad para los bancos y los grandes conglomerados financieros;
- Prohibir toda forma de operaciones incluidas en las cuentas de orden;
- Someter las inversiones extranjeras y los flujos de capital a una reglamentación nacional apropiada, incluido el cumplimiento de normas de gobernanza y transparencia internacionalmente reconocidas ;
- Promover servicios financieros arraigados en la comunidad tales como los sistemas cooperativos y mutualistas así como programas de microfinanciación específicos negociados con los interlocutores sociales nacionales;
- Mejorar la protección de los consumidores a fin de proteger a los hogares contra préstamos abusivos y las políticas agresivas de venta de parte de los bancos;
- Aumentar la función social de los regímenes de pensiones para proporcionar una jubilación decente, tanto en los fondos o cajas de pensiones como en la regulación de las inversiones;
- Establecer un régimen internacional para imponer un impuesto a las operaciones financieras, cuyo producto podría ayudar a las instituciones financieras a respaldar objetivos sociales, tales como los fondos de pensiones;
- Regular las transferencias del riesgo de crédito, derivados y futuros y hacer frente a la estructura oligopolística del sector de las agencias de calificación crediticia, inclusive mediante la creación de organismos públicos y el desarrollo de una calificación no financiera de la no sostenibilidad;
- Regular las empresas de inversión privada, tales como los fondos especulativos y el capital riesgo y luchar contra el arbitraje cautelar dentro de los grandes grupos financieros y entre las jurisdicciones ;
- Adoptar controles para limitar los comportamientos especulativos en los intercambios comerciales, incluidos los productos básicos y los mercados energéticos;
- Frenar la tendencia al corto plazo de las empresas mediante el fortalecimiento de la gobernanza y reglamentaciones fiscales

respecto a los paquetes de compensación de los ejecutivos, las responsabilidades del consejo de administración, la gestión del riesgo y la distribución de los beneficios de las empresas.

- Asimismo, se requieren medidas contundentes para detener la pérdida de ingresos fiscales. No puede esperarse que los contribuyentes saquen de apuros a las instituciones financieras en bancarrota, cuando las mismas instituciones han utilizado paraísos fiscales para evitar el pago de su parte equitativa de impuestos. Todos los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para proteger su base de ingresos y contrarrestar posibles reducciones sustanciales en los ingresos del impuesto a las sociedades. Para ello será necesario fortalecer el apoyo político para el trabajo de la OCDE en este ámbito.

III. Un nuevo sistema internacional de gobernanza económica

Es el momento de reconfigurar la arquitectura financiera y económica mundial a través de una nueva serie de negociaciones estilo "Bretton Woods" que vaya más lejos que el régimen de tipos de interés creado en Bretton Woods en 1944. Ninguna de las instituciones existentes tiene el alcance ni la credibilidad necesarios para poner en marcha una estructura de este tipo.

Los gobiernos deben empezar a ponerse a trabajar, pero el debate no puede llevarse a cabo entre banqueros y funcionarios del Ministerio de Hacienda a puerta cerrada. Los sindicatos representan a las familias trabajadoras de todo el mundo que son víctimas de la crisis actual y es preciso que estén presentes en la mesa de negociaciones.

La reforma institucional debe ir más allá de una regulación financiera e introducir una gestión económica destinada a reducir los desequilibrios existentes en la economía mundial. La persistencia de la cuenta corriente estructural y los desequilibrios del tipo de cambio en los países de la OCDE (en particular entre los EE.UU., la zona del euro y Asia) así como los desequilibrios con las economías emergentes también han contribuido a la crisis. La acumulación de participaciones en dólares de las economías emergentes (y las crecientes inversiones por parte de fondos de riqueza soberana) ha suministrado la tan necesaria recapitalización de patrimonio neto para los bancos e instituciones financieras gravemente afectadas. Sin embargo, ajustes desordenados dan lugar a riesgos amenazadores: una brutal reversión de los flujos de capital fuera de la zona del dólar ante la continua incertidumbre en los EE.UU.

El comercio tiene el potencial para impulsar el crecimiento económico, la recuperación y el desarrollo, pero sólo bajo las condiciones adecuadas. El restablecimiento de la legitimidad pública del sistema de comercio mundial y la conclusión de la Ronda de Doha requiere que se progrese simultáneamente en la aplicación de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras a través de todas las instituciones internacionales, incluida la OMC, y garantizar que los países en desarrollo puedan conseguir logros respecto a la recuperación económica, el empleo y un futuro desarrollo industrial.

Los gobiernos de las economías emergentes también deben ser un elemento central de la nueva estructura de gobernanza. La Agrupación Global Unions apoya firmemente una estructura de gobernanza más democrática y justa en las IFI. En el caso del Banco Mundial, cuyo mandato se centra en los países en desarrollo, se requiere una profunda y sistemática reforma que debe resultar, por lo menos, en la paridad del poder de voto entre los países en desarrollo y los países industrializados.

Ambas IFI también deben poner fin a la política de condicionalidad económica que ha caracterizado sus intervenciones en los países en desarrollo durante las últimas tres décadas. Esta condicionalidad ha reducido al mínimo, en lugar de fortalecer, la aplicación de los controles fiduciarios y el respeto de las normas acordadas internacionalmente, incluidas las normas

fundamentales del trabajo. Las condicionalidades de desregulación, liberalización y privatización de las instituciones financieras internacionales, además de interferir con las decisiones políticas de los propios países, a menudo han causado graves y perjudiciales efectos.

Es preciso cambiar este enfoque. Las normativas de la OIT y, en particular, las normas fundamentales del trabajo, debe apuntalar el nuevo sistema de gobernanza.

IV. Lucha contra la crisis de justicia distributiva

El estancamiento salarial y la falta de poder adquisitivo para las familias trabajadoras son a la vez un resultado de políticas perjudiciales y un factor importante responsable de la caída del ahorro de los hogares y la aparición de la deuda no sostenible que prendió la chispa de la crisis hipotecaria en muchos países. La desregulación financiera permitió a los prestamistas fomentar créditos garantizados por el patrimonio de los hogares como un sustituto de los ingresos. Las burbujas financieras de los precios de los activos, fomentadas por un endeudamiento excesivo y el laxismo de las normas, sustituyeron un crecimiento sostenible basado en los ingresos compartidos.

Se requiere un nuevo régimen de crecimiento que, como ocurrió durante el período de la posguerra hasta principios del decenio de 1980, garantice un aumento equilibrado de los salarios reales que coincida con el aumento de la productividad. Una fiscalidad justa responsable y progresiva no debe facilitar la acumulación de fortunas, ni ofrecer incentivos a la especulación, sino más bien contribuir al crecimiento.

La caída de las partes salariales y la creciente desigualdad en las dos terceras partes de los países de la OCDE figuran documentadas en los recientes informes de la OCDE y la OIT. Los gobiernos de los países industrializados ahora deben comenzar a fomentar y reconstruir las instituciones que ayudan a distribuir los ingresos y la riqueza más equitativamente en lugar de seguir pidiendo la desregulación de los mercados laborales y el desmantelamiento de la protección de los trabajadores y las trabajadoras.

La crisis de la justicia distributiva es aún más evidente fuera de los países de la OCDE. Aun antes de la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008 y la actual crisis financiera, el Banco Mundial señaló que en 46 países en desarrollo de los 59 examinados, la desigualdad aumentó durante la década anterior. El empeoramiento de la situación económica, a la que se añadió la explosión de los precios de los alimentos durante el año pasado, acentuará aún más la desigualdad de los ingresos y se sumará al déficit de trabajo decente en todo el mundo en desarrollo, lo cual ya ha sido identificado por la OIT.

Instamos a los gobiernos del G20 a desarrollar aún más la ayuda de emergencia del FMI a los países que se enfrentan a crisis inmediatas que se encuentran por encima de sus posibilidades para resolverlas. Este apoyo no debe acompañarse de condiciones de austeridad. Más bien debería haber una "condicionalidad positiva" que ayude a los países a restablecer el crecimiento a corto plazo, la distribución equitativa de los costos y beneficios y la sostenibilidad a largo plazo.

Del mismo modo, el Banco Mundial deberá dar prioridad a los proyectos que requieran un empleo intensivo, ampliar las redes de seguridad social a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de los países en desarrollo que actualmente carecen de protección y crear los servicios públicos y la infraestructura necesarios para un crecimiento sostenible.

Las propuestas tienen que ser concertadas con las organizaciones de los trabajadores en los países correspondientes. Los gobiernos también deben acordar respuestas de emergencia para la continua crisis alimentaria, incluidas medidas para contrarrestar la especulación en los mercados de alimentos y extender el apoyo de emergencia a los más pobres.

A medio plazo, deberán tomarse medidas para aumentar la producción sostenible

de alimentos y reconstruir las reservas de estabilización. Además de lo anterior, los gobiernos deben identificar en los meses que siguen los pasos que es preciso tomar para garantizar que cumplen sus compromisos en lo relativo a la ayuda oficial al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Subrayamos la necesidad de que los gobiernos del G20 tomen medidas para fortalecer la dimensión social de la globalización y garantizar la aplicación de las normas universales por parte de las empresas multinacionales, dondequiera que operen. Pedimos a los países en desarrollo y emergentes que apliquen las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, que son coherentes con las normas de la OIT, y a los gobiernos que las sigan, que mejoren su aplicación mediante el fortalecimiento de los Puntos de Contacto Nacionales y llevando a cabo una mayor promoción.

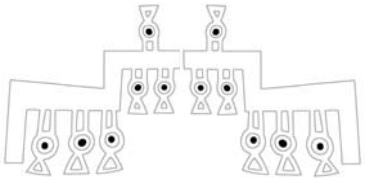
V. Conclusión

El movimiento sindical internacional ha denunciado reiteradamente la creciente divergencia existente entre los mercados financieros desregulados e incontrolables, por un lado, y las necesidades de financiar la economía real para suministrar trabajo decente, por otro.

Según la OCDE, la arquitectura financiera internacional deben juzgarse por su capacidad para "mantener la estabilidad financiera, velando por la solvencia de los participantes en el mercado", para "proteger a los inversores" contra quiebras y el fraude y "garantizar mercados financieros eficientes y eficaces". En las últimas semanas, ha quedado claro que el sistema no ha sido capaz de cumplir los tres objetivos.

Más allá de la reunión del G20, la cooperación debe extenderse a todos los niveles, (G7, G8, Europa, la OCDE y las instituciones financieras internacionales, para evitar el arbitraje cautelar y garantizar el alcance global de la nueva arquitectura.

Los trabajadores y las trabajadoras exigen participar y ocupar un sitio en estas reuniones e instituciones. Tienen poca confianza en que los banqueros y los gobiernos reunidos a puerta cerrada lo hagan bien esta vez. Debe asegurarse la plena transparencia, la divulgación de la información y la consulta. Las organizaciones de la Agrupación Global Unions están dispuestas a desempeñar el papel que les corresponde en este proceso.



DECLARACIÓN SINDICAL DE LONDRES ANTE EL G-20

Abril de 2009

I. Introducción y resumen



1. La economía mundial se encuentra sumida en una triple crisis de amplio alcance, que se inició en el mercado inmobiliario de EE UU, se extendió por todo el sistema financiero no regulado, desembocando en una crisis del mercado de créditos que se trasladaría más tarde a una crisis del empleo. Finalmente, ha evolucionado hasta convertirse en un círculo vicioso complejo y pernicioso, donde la caída de los precios de la vivienda y el creciente desempleo se combinan para alimentar la crisis del mercado de créditos. Esta crisis se está extendiendo por las economías industrializadas, emergentes y en desarrollo.

2. Cuando los líderes del G20 se reunieron por primera vez en noviembre de 2008 en Washington, el mundo se enfrentaba ya a una ralentización sin precedentes en el crecimiento, con un descenso de la producción en los países industrializados. La situación es ahora muchísimo peor. Se registraron caídas impresionantes en el PIB durante el último trimestre de 2008. En función de una tasa anualizada, el PIB descendió en un 6 por ciento en las economías del G7, la Unión Europea y la OCDE en su conjunto[1]. Se trata de las peores cifras jamás registradas. El contagio se ha extendido a las economías emergentes y en desarrollo, donde el crecimiento se ha estancado y el PIB per cápita está descendiendo – el mundo entra actualmente en una profunda recesión. El impacto de la recesión se está intensificando rápidamente en las regiones en desarrollo en 2009, a causa del fuerte descenso en las exportaciones y el agotamiento de los flujos de capital privado. Veintiséis países de bajos ingresos en África, Asia, las Américas y Europa del Este han sido identificados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como "altamente vulnerables" a los efectos adversos de la recesión global en 2009[2]. El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen objetivos mínimos para un esfuerzo global con vistas a combatir las causas originales de la pobreza, está resultando perjudicado por la crisis. Diez años de progresos en términos de reducción de la pobreza se han desvanecido en pocos meses.

3. El desempleo ha seguido aumentando en los primeros meses de 2009. Ahora parece ser que el escenario "tremendista" de la OIT que vaticinaba un incremento del

[1] Cuentas nacionales trimestrales (Quarterly National Accounts), OCDE, 18 de febrero de 2009
[2] FMI, The Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries, 2009

desempleo en 50 millones en todo el mundo para 2009 podría ser incluso excesivamente optimista[3]. Más de 200 millones de trabajadores podrían encontrarse sumidos en la más absoluta pobreza, principalmente en los países en desarrollo y emergentes, que no cuentan con redes de seguridad social adecuadas, lo que implica que el número de pobres que trabajan – que ganan menos de 2 USD al día por para cada miembro de la familia – podría llegar a alcanzar 1.400 millones. El 60% de los pobres del mundo son mujeres. Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, que están perdiendo sus puestos de trabajo y sus hogares, son las víctimas inocentes de esta crisis: una crisis precipitada por la codicia y la incompetencia en el sector financiero, pero que se fundamenta en las políticas de privatización, liberalización y desregulación del mercado laboral de las últimas décadas. Los efectos de estas políticas – salarios estancados, recortes en la protección social, erosión de los derechos de los trabajadores/as, una creciente precarización del empleo, y la financialización – se han combinado para profundizar las desigualdades y la vulnerabilidad. La escala de esta crisis sirve como testimonio del fracaso de dichas políticas. Sin una respuesta radical por parte de los gobiernos, la crisis económica más grave desde la Gran Depresión de los 1930 podría transformarse en una crisis social y, en última instancia, también política.

4. Cuando nuestras economías empiecen a recuperarse no podrá volverse a la situación anterior como si nada hubiese pasado. La crisis ha de marcar el final de una ideología de mercados financieros desenfrenados, donde la auto-regulación ha quedado en evidencia como un fraude y la codicia ha anulado cualquier consideración racional en detrimento de la economía real. Es necesario establecer una arquitectura regulatoria a escala nacional y global, que restaure a los mercados financieros su función primaria de garantizar una financiación estable y rentable de la inversión productiva en la economía real. Además de ello hace falta establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, que resulte eficiente económicamente, socialmente justo y sostenible medioambientalmente. Debe ponerse fin a las políticas que han generado enormes desigualdades en las dos últimas décadas. Esto requiere un cambio de paradigma en el establecimiento de políticas. Los líderes del G20 deben iniciar un proceso multilateral, trabajando conjuntamente con otros gobiernos, la ONU y otras instituciones, con vistas a reorientar la gobernanza de la economía mundial de manera que se asigne a las cuestiones sociales y medioambientales el mismo nivel de prioridad que tienen el comercio y las finanzas.

5. El movimiento sindical internacional insta por tanto a los líderes del G20, trabajando conjuntamente con otros gobiernos e instituciones internacionales, a desarrollar una estrategia de cinco puntos para, ante todo, abordar la crisis y por otro lado establecer una economía mundial más justa y sostenible para las generaciones venideras. La estrategia deberá:

- poner en marcha un plan de recuperación y de crecimiento sostenible pactado a nivel internacional que dé un fuerte impulso a la creación de empleo centrándose en la inversión pública, políticas activas del mercado de trabajo, la protección de los más vulnerables mediante la creación de amplias redes de protección social, así como inversiones en la "economía verde" capaces de orientar la economía mundial hacia un modelo de crecimiento con bajas emisiones de carbono. Las economías en desarrollo y emergentes deberán disponer de los recursos y el espacio político necesarios para la aplicación de políticas anticíclicas (párrafos n° 6-17);
- nacionalizar de inmediato los bancos insolventes de tal forma que se restaure la confianza y los créditos en el sistema financiero y, más importante aún, establecer nuevas reglas y mecanismos de control del sector financiero con una fuerte implicación de los interesados. Proponemos un plan de acción en ocho puntos a tal efecto (párrafos n° 18-22);

[3] Tendencias Mundiales del Empleo, OIT, 28 de enero de 2009

- luchar contra el riesgo de deflación salarial y contra el aumento de las desigualdades de ingresos, ampliando la cobertura de la negociación colectiva y reforzando las instituciones encargadas de fijar los salarios, de tal manera que se establezca una base decente en los mercados laborales (párrafos n° 23-26);
- sentar las bases para la consecución de un acuerdo internacional ambicioso y cabal sobre el cambio climático en la COP15 en Copenhague, en diciembre de 2009 (párrafos n° 27-29);
- establecer un marco de normas e instrumentos jurídicos de referencia para las instituciones internacionales en la esfera económica y social – la OIT, el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE –, y proceder a la reforma de tales instituciones, constituyendo una gobernanza económica mundial eficaz, que cuente con mecanismos de rendición de cuentas (párrafos n° 30-33).

II. Plan coordinado y sostenible de recuperación internacional

La necesidad de coordinación

6. La primera prioridad para los líderes del G20 ha de ser restaurar la confianza poniendo fin a la caída libre del crecimiento mundial y revertir el descenso del empleo. Los Gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias a tal efecto y utilizar su influencia con los bancos para conseguir que los créditos vuelvan a circular y proporcionen liquidez adicional. Desde noviembre de 2008, la mayoría de los países del G7, del G20 y otros, han anunciado o aplicado medidas fiscales para fomentar el crecimiento. Dichas medidas tendrían el doble de impacto sobre el empleo y el crecimiento de haberse coordinado y complementado internacionalmente[4]. De momento esta coordinación no existe: el plan de estímulo en EE UU es de cerca del 3 por ciento del PIB al año, mientras que las medidas nacionales en la UE anunciadas a principios de febrero de 2009 ascienden a apenas el 0,8 por ciento del PIB de la UE. El G20 debe lograr que todos los "free-riders" actúen y tomen medidas coordinadas para estimular la economía mundial, y los países con excedentes comerciales deberían tomar la iniciativa. Reiteramos nuestro llamamiento para que se apruebe un plan adicional de recuperación europeo correspondiente al menos al 2 por ciento de la producción mundial. Los bancos centrales deberían seguir reduciendo las tasas de interés y emprender una relajación cuantitativa de la política monetaria, de manera que las inversiones estatales puedan financiarse con un coste reducido en cuanto a las tasas de interés.

Gasto público orientado al empleo

7. Deben tomarse medidas además dentro de los países, a fin de tener el máximo impacto posible sobre el crecimiento y el empleo. Es necesario trazar un nuevo mapa económico, que identifique aquellos sectores que ofrecen mayores oportunidades para el futuro crecimiento. Los Gobiernos deberían emprender programas de infraestructura atrevidos que estimulen el crecimiento de la demanda a corto plazo y aumenten la productividad a medio plazo. Convendría introducir medidas y subsidios para incrementar el poder adquisitivo de los asalariados con menores ingresos, incluyendo los hogares donde entra un único salario y donde el cabeza de familia suele ser la mujer. Inyectando más dinero en los bolsillos y las carteras de las personas con ingresos bajos se estimulará la economía, puesto que dispondrán de mayores posibilidades de gastar el dinero extra rápidamente, contribuyendo a superar la recesión. Esto puede lograrse incrementando las prestaciones, con programas de creación de empleo y cambiando los niveles impositivos. Pero no deben desperdiciarse recursos mediante ineficaces recortes generalizados de los impuestos: durante una recesión, invertir en redes de seguridad social y transferencias de servicios gubernamentales locales, incluyendo educación y salud, tendrían prácticamente el doble de impacto que los recortes de impuestos.

[4] FMI, Fiscal Policy for the Crisis, 29 de diciembre de 2008

Inversiones y empleos verdes

8. No se presentará mejor ocasión que ésta para lanzar el "Nuevo Trato Verde", solicitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El programa de "Empleos Verdes" requiere que los gobiernos realicen inversiones a gran escala en infraestructuras verdes, como las que producen eficiencia energética y energías renovables – estimulando así la creación de empleo de calidad en una serie de sectores – además de incrementar el nivel de recursos financieros para investigación y desarrollo, la difusión y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la mejora de los sistemas de desarrollo de capacidades.

Servicios públicos de calidad

9. Como parte del nuevo modelo de desarrollo, los gobiernos deben mejorar el papel del sector público – a escala nacional y municipal – en la aportación de servicios esenciales de calidad, incluyendo educación, salud, agua, servicios sanitarios, cobertura legal, seguridad, bomberos y protección civil. Unos servicios públicos de calidad pueden realizar una contribución vital a la cohesión y justicia social, lo que junto con una administración ética y efectiva de la legislación y la aplicación de marcos regulatorios, constituyen las piedras angulares de unas sociedades democráticas saludables.

10. Es hora también de invertir en las personas – en su educación y salud, y en atención para los más pequeños y los ancianos. Teniendo en cuenta el ritmo acelerado de pérdidas de puestos de trabajo en las industrias afectadas por la crisis, se justifica plenamente la inversión en educación y formación para apoyar la transferencia de trabajadores/as a sectores donde se necesite más mano de obra. En los sectores de la sanidad/cuidado de personas, por ejemplo, debido entre otros factores al envejecimiento de la población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se necesitarán 4,2 puestos de trabajo adicionales en todo el mundo. En el sector educativo, es preciso dar formación a 18 millones de nuevos docentes para alcanzar el objetivo de una educación de calidad para todos los niños en primaria para el año 2015. Millones más de profesores e instructores son necesarios para la educación y formación profesional en cualificaciones que contribuyan a apuntalar la economía real y para la reconversión de los trabajadores/as a medida que se produce la restructuración de las economías. Además, los gobiernos deberán redoblar esfuerzos para reducir la pobreza entre las mujeres, que constituyen actualmente la mayoría de los pobres en el mundo.

Políticas activas del mercado de trabajo

11. La principal prioridad debe ser mantener a la gente trabajando, las plantillas en pie y a los trabajadores en activo. Las Políticas Activas del Mercado de Trabajo (PAMT) desempeñan un papel esencial, sin embargo la inversión en PAMT ha supuesto apenas una mínima parte de los paquetes fiscales adoptados por la mayoría de los países. Se necesitan políticas y programas diseñados e implementados para reducir el riesgo de desempleo y pérdidas de puestos de trabajo, además de proporcionar subsidios. En estos momentos difíciles, las empresas deben ser socialmente responsables e intentar retener a los trabajadores el mayor tiempo posible. En la OIT, trabajadores, gobiernos y empleadores acordaron que "la reestructuración debe basarse en el diálogo y consultas entre gerencia, sindicatos y representantes de los trabajadores"[5]. Las compañías que reciban asistencia pública deben respetar los acuerdos con gobiernos y sindicatos y aplicar programas de reestructuración consensuados que incluyan componentes de empleo y formación.

12. Los gobiernos deben adoptar políticas del mercado de trabajo que:

- impidan que las compañías recurran automáticamente a la reducción de plantilla al más mínimo signo de dificultades y brinden apoyo a las empresas afectadas por dificultades crediticias temporales;
- se centren en los grupos más afectados por la crisis, como los trabajadores/as

[5] OIT - Foro de Diálogo Mundial sobre el Impacto de la Crisis Financiera en los Trabajadores del Sector Financiero, 24-25 de febrero de 2009

jóvenes, mayores y no cualificados, los que tienen contratos a tiempo parcial o temporal, las mujeres y los migrantes;

- redoblen esfuerzos para eliminar la brecha salarial, que se estima actualmente en más del 22 por ciento[6];
- proporcionen subvenciones, particularmente prestaciones de desempleo ampliadas;
- garanticen el pleno respeto de las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los trabajadores en lo que respecta a la terminación del empleo;
- promuevan la inversión en recursos humanos y ofrezcan mejores oportunidades de formación para facilitar la adquisición de nuevas cualificaciones a los trabajadores/as de todas las edades;
- garanticen a los trabajadores/as migrantes los mismos derechos que a los demás ciudadanos, puesto que su estigmatización no sólo conduce a la xenofobia sino que contribuye a exacerbar la pobreza.

Apoyo a las economías emergentes y en desarrollo

13. Con el rápido aumento del desempleo, la mayoría de los trabajadores/as en el mundo no tienen derecho a recibir prestaciones de desempleo cuando pierden su trabajo, y sólo pueden recurrir a sus propios ahorros o a la ayuda de sus familiares cuando llegan a la vejez. La crisis presenta tanto una obligación como una oportunidad para establecer redes decentes de seguridad social que puedan actuar como estabilizadores automáticos en países que de momento no las tienen, independientemente del nivel de desarrollo.

14. Incrementar los ingresos de los trabajadores y ampliar la protección social serán particularmente importantes para la recuperación de las economías emergentes que habían alcanzado un alto crecimiento gracias al desarrollo orientado a la exportación y que ahora se enfrentan a un colapso de sus principales mercados de exportación. La recuperación económica en estos países y el logro de un crecimiento sostenible a más largo plazo, dependerán de su capacidad para crear una demanda doméstica más sólida. Esto requerirá un mayor respeto de los derechos de los trabajadores, de manera que los sindicatos puedan negociar incrementos salariales proporcionales a la mayor productividad, y una protección social más completa por medio de programas como pensiones de jubilación y cobertura sanitaria. Tales estrategias contribuirán a corregir los 'desequilibrios globales' en los flujos comerciales y financieros y a revertir las crecientes desigualdades de ingresos que se registran en muchos de estos países.

15. Conforme las economías industrializadas y emergentes luchan por recuperarse, existe el riesgo de dejar al margen a los países con bajos ingresos. Los pobres sufren realmente de la crisis alimentaria. Aunque los precios de los alimentos y de los productos básicos se han moderado con la recesión global, aún se dejan sentir sus efectos: los precios de los cereales, por ejemplo, siguen siendo un 71 por ciento superiores a los de 2005. La crisis económica, con un descenso de los ingresos, exacerbará aún más los efectos de la crisis alimentaria, afectando principalmente a los pobres de los entornos rurales y urbanos, los agricultores sin tierras, los hogares con una mujer como cabeza de familia y los que han quedado desempleados recientemente, incluyendo trabajadores/as migrantes. Resulta absolutamente esencial mantener y mejorar los niveles de la asistencia oficial al desarrollo (AOD). Los presupuestos de asistencia al desarrollo, particularmente para los Países Menos Avanzados (PMA) deben mantenerse, adoptando compromisos vinculantes y estableciendo un calendario para alcanzar el objetivo fijado por la ONU de destinar el 0,7% del PIB a la AOD. Los gobiernos deben seguir prestando atención a la seguridad alimentaria y trabajar de manera conjunta para lograr una capacidad de recuperación de la agricultura a más largo plazo, con objeto de asegurarse de los productos básicos resulten abordables a toda la población y ésta disfrute de un acceso seguro y sostenible a los alimentos.

[6] CSI, Desigualdad de género en el mercado laboral: Visión general de las tendencias y progresos mundiales, 2009

16. La mayoría de los países en desarrollo y algunos emergentes están aplicando políticas fiscales pro-cíclicas, porque se ven presionados por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a practicar una "disciplina fiscal" en tiempos de crisis. La comunidad internacional debe apoyar los programas expansivos de recuperación en los países en desarrollo, que resultan necesarios para evitar que la pobreza aumente aún más y para contribuir a la demanda global. Los bancos internacionales y regionales de desarrollo, así como otras agencias, pueden desempeñar un importante papel a la hora de garantizar que todas las regiones del mundo participen en el esfuerzo de recuperación. Esto requiere tanto incrementar la asistencia financiera de las IFI y los países donantes como poner fin a la dañina condicionalidad de la política económica vinculada a la asistencia por parte de las IFI. Las IFI deberían ampliar sus iniciativas destinadas al alivio de la deuda y emprender reformas de gobernanza para que los países más afectados por sus acciones tengan mayor peso a la hora de establecer sus políticas.

Restaurar el apoyo de la opinión pública hacia el sistema comercial mundial

17. El comercio se está derrumbando, pero más debido a la contracción de la economía real que al proteccionismo. Debemos evitar los errores de la crisis de los 1930 de recurrir a políticas de "empobrecer al vecino". El comercio puede promover el crecimiento económico, la recuperación y el desarrollo, pero sólo si se dan las condiciones adecuadas. Para restaurar la legitimidad y el apoyo de la opinión pública al sistema comercial mundial y concluir la Ronda Doha de negociaciones, es necesario realizar progresos respecto al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. Hace falta además que los países en desarrollo sean capaces de lograr una recuperación económica, crear empleo y garantizar su desarrollo industrial en el futuro y, cuando fuese necesario, controlar los flujos de capital a corto plazo para cumplir objetivos de desarrollo. Se requerirán igualmente medidas adicionales, incluyendo buffer stocks y mecanismos compensatorios, para proteger a los países de bajos ingresos frente a la volatilidad del mercado de productos de primera necesidad.

III Nuevas normas para los mercados financieros mundiales

18. Los líderes del G20 deben tomar medidas inmediatas para restaurar la liquidez y la solvencia del sistema bancario con el fin de que cumpla su papel esencial de financiar la inversión productiva. Además de ello, los líderes del G20 tendrán que iniciar el proceso de una auténtica reforma en el sistema financiero mundial, a fin de poner fin a la financialización que ha devastado la economía real. Los gobiernos deberán asegurarse de que no vuelva a producirse nunca otra crisis a tal escala.

Restaurar la confianza, nacionalizar los bancos

19. El sector bancario incluye gran número de bancos insolventes, que habrían ya quebrado de no ser por la magnitud de la crisis y el hecho de que son sencillamente 'demasiado grandes como para caer'. Los gobiernos tienen ante sí dos opciones: (i) crear reservas de 'activos malos' subvencionados por los contribuyentes, donde los banqueros puedan librarse de sus activos tóxicos; o bien (ii) nacionalizar todos los bancos débiles basándose en el riesgo que representan para el sistema. La primera opción no separará los activos 'malos' de los 'buenos', ni restaurar la confianza, y únicamente servirá para empeorar el estado de las finanzas públicas. Además esta forma de 'sacar de apuros' a los accionistas de los bancos equivale en realidad a efectuar transferencias de los hogares de los trabajadores a los de los más ricos del mundo, representados de forma desproporcionada entre los accionistas de las instituciones financieras. En las actuales circunstancias, la nacionalización es la única manera de restaurar la confianza, compartir los riesgos

de manera justa y garantizar que los contribuyentes salgan también beneficiados una vez se restaure la solvencia.

Reforma del sistema financiero

20. Los gobiernos deben corregir además el déficit democrático que ha caracterizado hasta la fecha los esfuerzos desplegados para diseñar la arquitectura financiera tras la crisis. No deben dejar la reforma del sistema financiero en manos de los expertos del Foro para la Estabilidad Financiera (FEF) – los mismos expertos que crearon el sistema actual que se ha hundido ahora estrepitosamente. Además el FEF no ha colaborado hasta la fecha con los sindicatos, grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas, incluyendo la ONU y la OIT, y no cuenta con una estructura de gobernanza adecuada, con los expertos ni los recursos necesarios para hacerlo en el futuro.

21. La actual crisis ha revelado los límites del enfoque de "supervisión delegada", que estipula que únicamente una parte reducida del sistema financiero (los bancos comerciales) requieren una vigilancia adecuada. Varias iniciativas posteriores a septiembre de 2008 identificaron la necesidad de revertir el enfoque de regulación ligera a las finanzas mundiales aplicado en el pasado[7]. Ha llegado el momento de adoptar unas reglas vinculantes para asegurar el control público y supervisar todas las instituciones, los productos y las transacciones financieras. Proponemos el siguiente plan de ocho puntos:

Medidas contra la economía financiera "sumergida". Los gobiernos deben asegurarse de una cobertura regulatoria absoluta de todas las instituciones, los productos y las transacciones financieras. En particular, los fondos privados de capital (fondos especulativos y *private equity)* no deben quedar eximidos de una regulación aplicable a otras entidades de gestión de activos, que garantice la rendición de cuenta a los inversores, transparencia y, cuando sea necesario, la responsabilidad del empleador. Toda forma de transacción no recogida en los estados contables en relación con los créditos deberá estar prohibida. Los productos financieros que transfieren los riesgos crediticios (como seguros en caso de impago o *credit default swaps)* y otros 'productos estructurados' opacos que se encuentran asegurados en los mercados deberán ser controlados y supervisados por parte de las autoridades públicas. Como norma general, las operaciones comerciales deberán estar vinculadas al beneficiario real. Las agencias de calificación de crédito deben estar debidamente reguladas para evitar conflictos de intereses en la valoración de productos e instituciones.

Poner fin a los paraísos fiscales y regulatorios y crear nuevos mecanismos fiscales internacionales. Los líderes del G20 deben llegar a un acuerdo para adoptar medidas internacionales de cooperación con objeto de conseguir que los paraísos fiscales, centros financieros offshore y jurisdicciones donde se aplica el secreto bancario – incluyendo los 38 territorios que figuran en la lista que mantiene la OCDE, aunque sin limitarse a ellos – estén conformes con las normas internacionales. Deberá actuarse además para poner fin a la 'carrera hacia el fondo' entre distintas jurisdicciones fiscales, que está erosionando los ingresos fiscales de muchos países. Los gobiernos deben desarrollar un paquete de sanciones destinados a proteger su base impositiva, incluyendo restricciones de inversiones para inversores institucionales y penas importantes en caso de delitos fiscales. Además, debería introducirse un impuesto internacional sobre las transacciones financieras, por ejemplo en caso de movimientos de capital a corto plazo, para financiar la deuda pública a cargo del contribuyente que se ha contraído como resultado de la crisis. Dicho impuesto contribuiría a proteger a los países en desarrollo frente a la volatilidad del mercado global.

[7] Modernizing the American Financial Regulatory System, Congressional Oversight Panel (COP), Special Report on Regulatory Reform, enero de 2009: http://cop.senate.gov/documents/cop-012909-report-regulatoryreform.pdf ; Principles for a New Financial Architecture, Stiglitz, Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, enero de 2009; http://www.un.org/ga/president/63/commission/newfinancialarchitecture.pdf

Garantizar un acceso justo y sostenible a la financiación internacional para los países en desarrollo. Los países en desarrollo han de tener acceso a términos de concesión de créditos proporcionales a sus necesidades y su capacidad de pago. Las medidas incluyen activar el programa de Derechos Especiales de Giro (DEG) de la FMI, acelerar la cooperación monetaria regional, y re-dirigir los flujos de capital de los países que registran un superávit en la balanza de pagos, incluyendo sus Fondos de Riqueza Soberana, hacia objetivos de desarrollo.

Reforma del modelo comercial de banca privada para prevenir burbujas de activos y reducir los riesgos de apalancamiento. Las normas de adecuación del capital – la cantidad de capital que los bancos deben tener en reserva para colateralizar la actividad crediticia – deben quedar más vinculados al crecimiento de las provisiones en activos del banco y al nivel de riesgo experimentado por dichos activos. Esto evitaría que los bancos se expongan a excesivos riesgos de activos. También contribuiría a orientar la asignación de activos hacia objetivos socialmente aceptables y facilitaría el control de la inflación en el precio de los activos por parte de los bancos centrales.

Controlar la remuneración de directivos, accionistas e intermediarios financieros. Los sistemas de remuneración deben regularse de forma legal para que reflejen y promuevan el rendimiento económico, social y medioambiental a largo plazo y permitan a las empresas asignar los beneficios a sus reservas para la reinversión en activos productivos. En la remuneración de los cargos directivos y financieros debe establecerse un tope, en línea con los salarios y las pensiones de los trabajadores y, en el caso de los servicios financieros, vincularlos a unas prácticas responsables de ventas y concesión de créditos. Debería prohibirse el cobro de primas y otros beneficios relacionados con el desempeño durante cinco años. Ha de evitarse que los accionistas puedan consumir toda la riqueza de las empresas durante los períodos de crecimiento por medio de dividendos y programas de readquisición, que dejan a las empresas con hojas de balance sin suficiente capitalización en los momentos de desaceleración económica. En particular el modelo insostenible de compraventas apalancadas de los private equity ha hecho peligrar millones de puestos de trabajo.

Proteger a las familias trabajadoras frente a los préstamos predadores. Los gobiernos deben tomar medidas para incrementar la seguridad de los préstamos para las familias trabajadoras, exigiendo transparencia en los contratos financieros (vivienda, tarjetas de crédito, seguros), acceso a un recurso efectivo, proximidad de los servicios y asequibilidad (topes en los tipos de interés y los recargos). La remuneración y los sistemas de incentivos de los bancos y otros suministradores de créditos deberían estar diseñados para garantizar unas prácticas comerciales y crediticias responsables que sirvan los intereses de los clientes.

Consolidar y mejorar la rendición de cuentas, el mandato y los recursos de las autoridades supervisoras. Los gobiernos deben tomar medidas para poner fin al enfoque fragmentado a la regulación financiera, que actualmente se divide en función de la actividad comercial y la jurisdicción nacional. Deberá contarse con una consolidación supra-nacional cuando sea preciso, particularmente en Europa. Las autoridades supervisoras deberán disponer de suficientes poderes de aplicación y de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas. En particular, su mandato deberá ampliarse para cubrir la supervisión de la inflación en el precio de activos. En sus estructuras de gobernanza debe contarse con la participación de los sindicatos. Además, el marco de supervisión, incluyendo 'colegios de supervisores', deberá facilitar la cooperación de las autoridades financiera con los sindicatos y otras estructuras representativas de los empleadores en el lugar de trabajo dentro del sector financiero: por ej. comités de empresa y acuerdos marco internacionales establecidos entre las Federaciones

Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales.

Reestructurar y diversificar el sector bancario. Se requieren diversos modelos de negocios y formas legales para contribuir a establecer unos servicios financieros nacionales equilibrados y robustos que beneficien a la economía real y que cubran las necesidades de las familias trabajadoras. Los gobiernos deben promover modelos alternativos a la banca comercial, como las uniones de crédito, los bancos cooperativos, las mutuas de seguros, y otros servicios financieros públicos y centrados en las comunidades. Deben tomarse medidas además para asegurarse de que no vuelvan a crearse grandes conglomerados que sean 'demasiado grandes como para caer', o que combinen distintos tipos de negocio: banca, seguros, banco de inversiones, etc. La reestructuración deberá realizarse respetando las reglas más estrictas del diálogo social y mitigar su impacto sobre el empleo.

Proteger las pensiones de los trabajadores

22. Los líderes del G20 deben tomar medidas también para proteger el régimen de pensiones basado en la capitalización. La crisis ha revelado el peligro de una inversión ilimitada de las pensiones de los trabajadores en el sector financiero 'encubierto'. Los fondos de pensiones basados en la OCDE han descendido en valor de más de USD 3,3 billones, en un 20 por ciento en términos reales, durante 2008, a causa de la disminución en valor de los valores de renta variable, los activos de renta fija, los fondos especulativos y los productos estructurados. El impacto inmediato de la crisis se hará sentir especialmente para aquellos que están cerca de la edad de jubilación, con pensiones en regímenes no protegidos de 'contribuciones definidas', donde el nivel final de jubilación depende del rendimiento obtenido por el fondo de pensiones. Los gobiernos han de tomar medidas además para garantizar una jubilación adecuada para los trabajadores con sistemas de pensiones basados en la capitalización, incluyendo asegurarse de que los empleadores asuman también su parte en cuanto a los riesgos y la financiación de las pensiones, y para reforzar los regímenes de pensiones con garantía del Estado y la regulación de la inversión de fondos de pensiones en general.

IV. Poner fin a la deflación salarial y combatir la crisis de justicia distributiva

23. La 'flexibilización' de los mercados del trabajo que ha tenido lugar en prácticamente todas las economías en los últimos 25 años ha incrementado el riesgo de una deflación salarial que contribuye a profundizar la crisis debido a los recortes en el poder adquisitivo y el aumento de la inseguridad. Los gobiernos no pueden repetir el error cometido en los 30 y permitir una deflación salarial competitiva. En lugar de adoptar políticas que debiliten la protección de los trabajadores e incrementen la precariedad del trabajo, los gobiernos deben asegurarse de que se establezcan unos valores mínimos en los mercados de trabajo, para prevenir una espiral descendente de deflación en ingresos y precios. Deben tomar medidas para proteger los derechos básicos de los trabajadores y la ampliación de la negociación colectiva, y promover la reconstrucción de instituciones que contribuyan a distribuir los ingresos y la riqueza de forma más equitativa. Los salarios mínimos deben ser lo suficientemente elevados para permitir que los trabajadores y sus familias dispongan de condiciones de vida decentes, a fin de prevenir que aumente aún más el número de los pobres que trabajan. Las mujeres representan la mayor parte de los trabajadores con condiciones de trabajo más precarias, por lo que lograr la equidad de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer en el empleo ha de convertirse en una prioridad en el programa político nacional e internacional.

24. Antes de la crisis, las desigualdades salariales habían aumentado tanto entre los países como dentro de cada nación. El aumento de los salarios se quedó atrás

respecto al tasas de crecimiento más importantes en la productividad en dos tercios de los países más ricos que componen la OCDE[8], y la proporción de los salarios en los ingresos nacionales descendió en todos los países para los que se dispone de datos. En los países en desarrollo, incluso antes de la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008 y la actual crisis financiera, el Banco Mundial señaló que en 46 de 59 países examinados, la desigualdad había aumentado durante la década anterior. El empeoramiento de la situación económica, a la que se añadió la crisis alimentaria, acentuará aún más las desigualdades existentes. En lugar de un crecimiento económico constante basado en la inversión, la productividad y la prosperidad creciente de los trabajadores y trabajadoras, hemos tenido una serie de burbujas especulativas que enriquecieron a unos pocos pero que están ahora siendo pagadas por muchos. Se requiere un nuevo modelo de desarrollo económico que resulte sostenible medioambientalmente y que garantice un crecimiento equilibrado de los salarios reales, en línea con los aumentos de la productividad. Se necesita asimismo un sistema fiscal más justo, que combata las desigualdades mediante una imposición sobre el capital y no sobre el trabajo.

25. En la mayoría de los países en desarrollo, las instituciones del mercado de trabajo son aún más débiles que en los países industrializados y una gran proporción de la fuerza laboral está pluriempleada en la 'economía informal', donde no gozan de ninguna protección. Las regulaciones básicas del mercado de trabajo – como salarios mínimos, horas de trabajo máximas, prestaciones en caso de pérdida del empleo y limitaciones en el recurso a contratos de duración determinada – resultan esenciales para proteger a los trabajadores de abusos, del mismo modo que el respeto de las normas fundamentales del trabajo para que los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente a fin de mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Las IFI no deberían promover una regulación aún mayor del mercado de trabajo en los países en desarrollo durante la actual crisis, puesto que sólo contribuiría a exacerbar la difícil situación de los trabajadores, especialmente teniendo en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores/as en los países en desarrollo no cuentan con programas de apoyo a los ingresos a los que acogerse. Las IFI deberían trabajar conjuntamente con la OIT y apoyar sus esfuerzos para promover la creación de un empleo seguro con salarios adecuados, protección social y respeto de los derechos.

26. A más largo plazo, deberían recrearse las estructuras tripartitas para la consulta económica y social y la planificación política, que sirvieron de trampolín para los 30 años de alto crecimiento económico y para mejorar el nivel de vida durante la post-guerra. Implicando a representantes de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones que determinan el empleo y el crecimiento económico no sólo resulta coherente con los principios democráticos, sino que además es beneficioso económicamente. El modelo alternativo neoliberal nos condena a repetir los errores de los años 1920 y 1990, y a mantener los niveles de creciente desigualdad que desembocaron en la inestabilidad financiera y en última instancia produjeron el crash de la bolsa.

V. Establecer las bases de un acuerdo internacional para mitigar el cambio climático

27. Los líderes del G20 deben asegurarse de que las medidas urgentes necesarias para hacer frente al cambio climático se vean desbaratadas a causa de la crisis. Más bien, tal como reclama esta declaración, los gobiernos deben aprovechar la respuesta global fiscal coordinada a la crisis para avanzar en el 'programa de la economía verde', preparando así el terreno para que en Copenhague se alcance un ambicioso acuerdo sobre cambio climático. Se trata de pasos esenciales si queremos evitar que la temperatura media mundial aumente en más del 2 por ciento dando lugar a un desastre

[8] Growing Unequal? (¿Crecimiento desigual?), OCDE, octubre de 2008

climático de gran magnitud: en el mejor de los casos, la pérdida del 5 por ciento de la producción global "ahora y para siempre" según el informe Stern, o en el peor de los casos, el colapso de las sociedades provocado por los actuales modelos de interacciones económicas y medioambientales a largo plazo. Resulta esencial que la Cumbre del G20 envíe un mensaje firme sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo en Copenhague. Dicho acuerdo ha de incluir objetivos ambiciosos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, así como una acción eficaz para lograr reducciones de las emisiones o incrementos controlados para garantizar un desarrollo bajo en carbono en los países en desarrollo.

28. Los gobiernos deben reconocer que alcanzar dicho acuerdo sobre cambio climático depende del establecimiento de un consenso político amplio y sostenible sobre los objetivos, y sobre los medios para alcanzarlos. El acuerdo ha de mostrar que los gobiernos firmantes reconocen el impacto social y económico de su implementación, incorporando una estrategia clara para hacerles frente dado que, hasta la fecha, no se han abordado debidamente los retos y los beneficios sociales para el empleo. Además, el nuevo acuerdo sobre cambio climático debe pedir a los gobiernos que consulten, planifiquen y apliquen una estrategia de 'transición justa', destinada a proteger a los más vulnerables de los riesgos asociados al cambio climático y de las consecuencias de las posibles medidas de adaptación o mitigación. Estas estrategias 'de transición' requieren entre otras cosas que se establezcan consultas con los sindicatos, las empresas y la sociedad civil, además de políticas de protección social y diversificación económica.

29. Los países desarrollados deberán aportar apoyo financiero y de otro tipo a los países más pobres, para permitirles hacer frente a los retos del cambio climático, incluyendo la contribución al Fondo de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

VI. Una gobernanza económica mundial eficaz y responsable

30. En 1944 los principales países del mundo se reunieron en Bretton Woods para establecer nuevos arreglos financieros globales que apoyasen la recuperación económica. Necesitamos ahora mostrar una ambición mucho mayor: el cambio ha de ir más allá de la regulación financiera. Esta crisis ha revelado serias faltas de solidez en los mecanismos para la gobernanza de la economía global. Aunque no hay un modelo básico para una gobernanza mundial óptima, los gobiernos pueden empezar por identificar los requisitos de la coherencia global en áreas como el medio ambiente, las finanzas, la asistencia al desarrollo, la migración, el trabajo, la salud y la energía, donde es claramente evidente que la gobernanza nacional por sí sola no basta y que se requiere una nueva arquitectura institucional en un 'gran trato global'. Para que progrese la agenda de negociaciones comerciales, es necesario incluir un pilar social mucho más firme para anticipar y suavizar las alteraciones en el empleo que ocasionará una competencia más intensa probablemente. El proceso del G20 contiene algunos elementos de este tipo, pero sigue estando marcadamente inclinado hacia cuestiones financieras. La economía real, el trabajo decente y la reducción de la pobreza están siendo tratados de manera marginal en las discusiones. Además, algunos países que representan un tercio de la población mundial no están representados en la mesa de negociación por lo que no tienen la posibilidad de influir en las labores del G20.

31. Se necesita un nuevo foro sobre políticas económicas y sociales a nivel global, que combine efectividad, legitimidad y rendición de cuentas. Un punto de partida sería la carta de gobernanza económica y social global, basada en instrumentos de la OCDE, la OMC, la OIT, el FMI y el Banco Mundial, propuesta por la Canciller alemana y el Ministro de Finanzas italiano. Constituiría una

síntesis de los principios rectores de dichos organismos, con referencias a elementos como las normas fundamentales del trabajo de la OIT, las Directrices para las EMN, la Convención para Combatir el Cohecho y los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. Se combinan así normas relativas al comportamiento de los mercados con "elementos complementarios relativos al empleo y el desarrollo de las empresas, la protección social, unas condiciones de trabajo humanas, relaciones laborales sólidas y los derechos en el trabajo"[9] de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. Exhortamos a los líderes del G20 a considerar seriamente esta propuesta y a iniciar el proceso de consultas necesario para obtener respaldo con vistas a la organización de las cumbres globales realmente autoritativas de los líderes mundiales, indispensables para gestionar nuestra economía mundial cada vez más interdependiente.

32. Los gobiernos deben iniciar el trabajo, pero no pueden dejarlo luego en manos de banqueros y funcionarios de los ministerios de finanzas que se reúnen a puerta cerrada. Los sindicatos están dispuestos a participar de forma constructiva en este proceso y piden a los gobiernos que se les permita sentarse en la mesa de negociación. Los sindicatos deben participar plenamente en las nuevas estructuras de gobernanza y asesoramiento de las organizaciones internacionales, como ocurre ya en la OCDE. En línea con el mandato acordado en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2008, la OIT debe constituir un elemento central de una nueva arquitectura multilateral, para que pueda responder de manera eficaz a la actual crisis en una globalización impulsada por los mercados situando el empleo, las prioridades sociales y la promoción del trabajo decente en el núcleo mismo de la toma de decisiones.

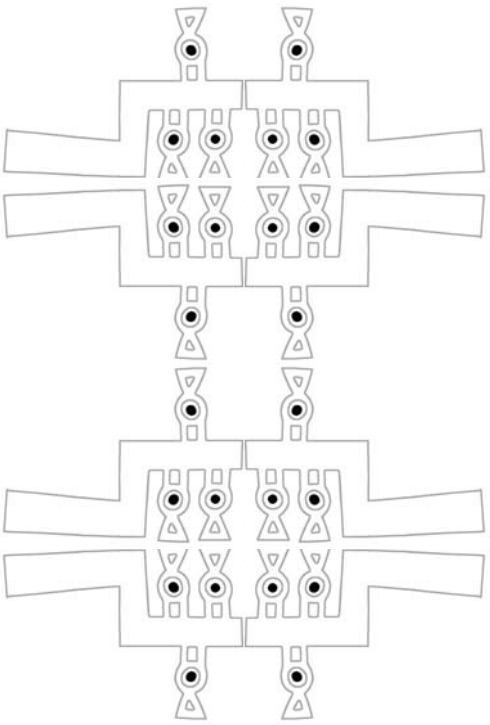
33. Es necesario incrementar la representación y el peso de los países más pobres en las instituciones y los procesos globales. Los gobiernos de las economías emergentes y de los países en desarrollo deben participar plenamente en las instituciones para un nuevo orden económico. En particular el Banco Mundial, cuyo mandato se centra en los países en desarrollo, ha de concederles un poder de voto – basado tanto en criterios económicos como sociales – que sea al menos equivalente al que tienen los países industrializados. El FMI requiere igualmente una reforma urgente y debería cambiar su estructura de gobernanza para incrementar la representación de los países 'clientes' de bajos ingresos y de las economías emergentes, cuyo papel en la economía global ha aumentado en los últimos años. Los líderes del G20 han acordado ya destinar mayores recursos a las IFI[10] pero, a cambio, tanto el Banco como el FMI deben dejar de imponer a los países en desarrollo y emergentes la condicionalidad que les obliga a adoptar políticas pro-cíclicas. Por ejemplo, los préstamos de emergencia negociados por el FMI con varios gobiernos desde octubre de 2008 incluyen subidas de los tipos de interés, reducción de salarios y pensiones, incremento de tarifas para los servicios públicos y la privatización de entidades estatales; algunos acuerdos incluyen además la obligación de efectuar reformas de la protección social que eliminarían su acceso a aquellos que no figuren entre los más vulnerables. En su lugar, el objetivo del trabajo decente y el respeto de las normas fundamentales del trabajo deben apuntalar los nuevos arreglos. Organismos regionales como la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Organización de Estados Americanos (OEA) deben tener un lugar en el G20, del mismo modo que lo tiene la Comisión Europea (CE).

VI. Conclusión

34. Los sindicatos han criticado reiteradamente el desequilibrio existente en cuanto a la prioridad relativa concedida a las ins-

[9] Declaración de la OIT, la OMC, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y Alemania, 5 de febrero de 2009 – disponible (en inglés y francés) en: http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_34487_42124384_1_1_1_1,00.html
[10] Comunicado de los Ministros de Finanzas del G20 y los Gobernadores de los Bancos Centrales - 14 de marzo de 2009

tituciones económicas y sociales, así como la creciente preponderancia de mercados financieros desregulados e incontrolables en detrimento de las necesidades de financiación de la economía real, socavando su capacidad de proporcionar trabajo decente para todos. Los gobiernos, trabajando conjuntamente con los interlocutores sociales y contando con la contribución de organizaciones internacionales relevantes como la OIT, deben crear un nuevo orden económico mundial. Se necesita un cambio de paradigma en el establecimiento de políticas, que 'sitúe a las personas en primer término'. Los sindicatos y los trabajadores a los que representamos, ya no tenemos confianza en que esta vez los banqueros y los gobiernos consigan arreglar la situación. Los trabajadores y trabajadoras deben sentarse en la mesa de negociación. Ha de garantizarse la plena transparencia, la divulgación de la información y la consulta. Las organizaciones de la Agrupación Global Unions están dispuestas a desempeñar el papel que les corresponde en la construcción de este futuro más justo y más verde.





¡NO A LA ECONOMIA CASINO!

Presentado al Foro Social Mundial,
Belem Brasil, enero 2009

La creciente precarización en las condiciones de vida y de trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo constituye una de las principales causas de la crisis a la que nos enfrentamos actualmente. La crisis que vivimos es ante todo una crisis de la justicia redistributiva, que ha desfigurado la economía mundial. La crisis financiera, escalafón de un largo proceso de financialización de la economía, ha venido a insertarse en una coyuntura ya de por sí difícil, tanto en el norte como en el sur.

Los países en desarrollo registran un enorme déficit de trabajo decente, que sus economías en crecimiento no consiguen cubrir. A esta crisis de empleo decente se viene a sumar la carestía de la vida y los efectos de la crisis alimentaria mundial, dando como resultado situaciones de pobreza endémica. Los países industrializados tampoco se quedan a la zaga. Así pues, el número de trabajadores pobres se ha multiplicado en Estados Unidos en el transcurso de los ocho años de la Administración Bush. En Europa la moderación salarial, pese a un aumento de la inflación y de la productividad, ha hecho que disminuya el poder adquisitivo de la población.

Prácticamente todos los países experimentan una precarización de las condiciones de empleo, la informalización de la relación de trabajo y una desregulación del mercado laboral. La crisis que vivimos concierne sin lugar a dudas la pobreza, pero también y ante todo es una crisis de desigualdades que se han vuelto insostenibles, no sólo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico. Las políticas neoliberales de estos últimos veinte años han llegado al límite: por los canales de transmisión aquí descritos, los trabajadores/as empobrecidos no consumen lo suficiente como para mantener la economía.

Los Estados Unidos son el primer consumidor mundial y la reducción del poder adquisitivo real de su clase media tiene repercusiones más allá de las fronteras. El nivel de consumo elevado en Estados Unidos consiguió mantenerse no tanto gracias a los salarios sino mediante el endeudamiento de los hogares, y los trabajadores estadounidenses se endeudaron más de lo que sus ingresos les permitían. La facilidad para la obtención de créditos hipotecarios, particularmente para las familias más pobres, a través de los denominados subprimes

reposaba en unos precios de la vivienda artificialmente inflados por una burbuja especulativa. Se crearon productos financieros altamente complejos para librarse de manera solapada de estos créditos dudosos en los mercados financieros.

La búsqueda desenfrenada de beneficios a corto plazo en un contexto de liberalización económica y financiera, sin ley ni orden, caracteriza los mercados financieros de hoy en día. El capitalismo de casino explica en gran parte que la crisis se haya extendido a nivel mundial. Los mercados financieros se convirtieron en un lugar donde hacer dinero fácil, dejando de lado su misión primordial, es decir la financiación de la economía real. En el transcurso de las últimas décadas, especular en los mercados financieros ofrecía muchas más oportunidades de obtener beneficios a corto plazo que aportar liquidez a las empresas que quisiesen innovar, conquistar nuevos mercados o crear empleos decentes. El futuro de los trabajadores quedaría de este modo sacrificado en aras de las cuentas bancarias "off shore" de algunos financieros sin escrúpulos. Los gobiernos y las instituciones internacionales cerraron los ojos, adoptando literalmente el principio de "laisser faire" lo que los convierte en cómplices.

Otro aspecto esencial de esta crisis guarda relación con los desequilibrios engendrados por la apertura a ultranza de los mercados, y la no intervención del Estado. Es así como China ha acumulado reservas gigantescas que le permitirían financiar el endeudamiento americano. Los trabajadores chinos, que no tienen derecho a constituir libremente sindicatos para defender de manera colectiva sus derechos, vieron aumentar su productividad de forma vertiginosa durante los últimos 20 años. ¡Trabajan con máquinas del Siglo XXI pero con salarios del XIX! Esta mundialización ha hecho que los trabajadores del norte y del sur compitan entre sí, lo que redunda en interés de las multinacionales y los fondos de inversiones privados, cuyos beneficios no cesan de aumentar.

Han surgido además desequilibrios gigantescos entre las finanzas y la economía real, entre países ricos y pobres, entre los directores con salarios colosales y los trabajadores mal pagados. Las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo considerables. Y por último, las políticas de represión y de discriminación contra los sindicalistas, que contribuyeron a la concentración de la riqueza, han influido directamente en un desequilibrio del poder negociador entre los asalariados y sus empleadores, en beneficio de estos últimos.

Pero aunque la crisis actual es a la vez financiera, económica y social, también tiene una dimensión medioambiental. En efecto, resulta ya evidente que los recursos naturales de nuestro planeta no permiten extender el modo de consumo de los países industrializados a los 6.000 millones de individuos que pueblan nuestro planeta. A ello se suman los efectos del cambio climático, que nos obligan a tomar medidas colectivas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. A este respecto las desigualdades son también patentes, puesto que los pobres sufren mucho más de los efectos negativos del cambio climático. Es necesario por tanto tomar medidas que sean no sólo ecológicamente eficaces, sino además socialmente justas.

¿Qué modelo conviene para salir de esta crisis multidimensional?

Esta crisis es la prueba del carácter insostenible de las políticas neoliberales emprendidas en el transcurso de las últimas décadas y que han promovido la desregulación y la liberación de los mercados, así como la privatización de los servicios públicos. Ese fundamentalismo de mercado ha concentrado las riquezas ignorando los bienes públicos mundiales como el medio ambiente, la salud, la protección social, la seguridad alimentaria o incluso la estabilidad financiera mundial.

Los planes de relanzamiento actual son sin duda necesarios, pero resultan insuficientes. No basta con inyectar liquidez en la economía, es necesario además cambiar los principios básicos, para que la economía

mundial aporte justicia social, desarrollo para todos, equilibrio, estabilidad y prosperidad a largo plazo.

El mundo del mañana no es hegemónico sino multipolar, conforme continúan profundizándose los procesos de integración regional. En este mundo multipolar, el multilateralismo ha de ser defendido so pena de agudizar la pobreza y de crear aún mayores desigualdades entre los países. No obstante, ya va siendo hora de abrir este multilateralismo a ciertas cuestiones sociales. Los sindicatos y el conjunto de la sociedad civil deben exigir concretamente que las cuestiones vinculadas al empleo constituyan un elemento central del mandato del nuevo sistema de gobernanza económica mundial que deberá establecerse. Desde este punto de vista, el papel de la OIT resulta esencial.

En este mundo multipolar, el Estado debe recuperar su lugar y su papel a fin de asegurar el establecimiento de un nuevo sistema económico socialmente justo y ecológicamente responsable. Sólo la intervención pública puede garantizar la cohesión social. No obstante, la corrupción de algunos organismos públicos ha de ser sancionada y combatida por la población civil organizada, particularmente en sindicatos. Los bancos centrales deben rendir cuentas públicamente y dejar de conformarse a las exigencias del poderoso lobby financiero.

Reforzar y ampliar los sistemas públicos de protección social resulta urgente. Crear un fondo mundial para la protección social, destinado a ayudar a los países más pobres, resulta necesario. Aumentar la cantidad y la calidad de ayuda pública a los países en desarrollo resulta esencial. Establecer una transición socialmente justa hacia modos de producción ecológicamente sostenibles resulta indispensable. Establecer unas normas justas en materia de comercio internacional, para contribuir al desarrollo de los países y no a la profundización de las desigualdades, resulta crucial. Determinar salarios mínimos decentes y salarios reales acordes con los incrementos de productividad resulta prioritario. Y por último, respetar el derecho de los trabajadores y a trabajadoras a formar sindicatos libres y a negociar colectivamente una redistribución de los beneficios resulta fundamental.

Habría que restaurar las relaciones entre los países industrializados, emergentes y en desarrollo. El sistema económico y financiero mundial de hoy en día no responde a los intereses de los trabajadores y trabajadoras en los países en desarrollo. El reembolso de la deuda exterior estrangula a los países más pobres. Las condiciones a las que contraen créditos de capital son injustas puesto que los hacen asumir todos los riesgos asociados a la fluctuación. El sistema actual permite a los países industrializados aplicar políticas monetarias y fiscales contra-cíclicas gracias a la imposición de políticas pro-cíclicas sobre los países en desarrollo. Esto hace que las instituciones financieras internacionales (IFI) sean en parte responsables, no sólo de las consecuencias sociales desastrosas en esos países, sino además de la inestabilidad financiera mundial. Debe ponerse fin a las condicionalidades económicas y financieras impuestas por las IFI, cuya gobernanza ha de ser justa y equitativa. Ha llegado la hora de pasar a construir una nueva arquitectura financiera y económica mundial. Pero ninguna de las instituciones existentes tiene ni la envergadura ni la credibilidad para sacar adelante esta tarea.

La regulación de los mercados financieros es una necesidad urgente. Implica limitar la especulación y concentrar el papel de los mercados en la financiación de las empresas. En particular, el comportamiento especulativo en los mercados de materias primas debería estar prohibido. Los mercados de productos derivados tendrían que estar sometidos al control de las autoridades públicas. Debe ponerse fin a los centros financieros "off-shore" y a otros paraísos fiscales. La fiscalización de las transacciones financieras puede aportar nuevos recursos para contribuir a la reducción de las desigualdades. Los salarios obscenos de los directivos, banqueros y otros intermediarios financieros deben estar reglamentados. En la reforma necesaria del

sector financiero, ha de darse prioridad a la economía solidaria, fomentando las cooperativas, mutuas y agencias de micro-crédito, también en los países en desarrollo.

El nuevo sistema económico deberá generar un crecimiento verde. Además de la urgencia de actuar para la preservación de nuestro planeta, la protección del medio ambiente presenta enormes oportunidades en materia de creación de empleo. Las inversiones públicas en infraestructura, transporte colectivo y energía renovable son necesarias en todo el mundo. Conviene apoyar la recuperación económica mediante inversiones ecológicamente responsables.

En conclusión

Ha llegado el momento de construir un sistema económico ecológicamente sostenible, socialmente equitativo y geopolíticamente equilibrado. Dicho modelo deberá tener en cuenta las aspiraciones de la población y las propuestas del movimiento sindical, así como de otros actores de la sociedad civil. De ahora en adelante, el crecimiento económico deberá contribuir a la creación de empleos decentes, al tiempo que se protege el medio ambiente, y sus frutos deberán ser redistribuidos a fin de reducir el nivel de desigualdades sin precedente que se registra actualmente.

LOS SINDICATOS COMBATEN LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL

Peter Bakvis, Director de la Oficina en Washington

Los sindicatos combaten la crisis financiera mundial

En agosto de 2007, los bancos en Estados Unidos parecieron darse cuenta, de repente, de que habían estado prestando dinero a prestatarios que no contaban con los medios para devolver los préstamos que habían recibido y de que el valor de las propiedades que habían sido adquiridas con esos préstamos estaba muy por debajo del valor de mercado. Por ende, tomaron la drástica decisión de dejar de otorgar préstamos, incluso a aquellos que antes habían sido considerados tomadores sumamente confiables.

La rápida restricción de los mercados de crédito implicó que muchos consumidores y empresas ya no pudieran obtener préstamos de sus bancos o de otras instituciones financieras para realizar compras o inversiones importantes. Los expertos en finanzas de Wall Street, del banco central de Estados Unidos (el Sistema de Reserva Federal) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) se apresuraron a asegurar que la "contracción del crédito" (credit crunch) era sólo un problema pasajero limitado a la industria de las hipotecas de alto riesgo (subprime mortage). El problema, dijeron, se resolvería mediante algunos ajustes que harían las mismas instituciones financieras y tendría apenas un impacto menor en el resto del mundo e incluso en el resto de la economía estadounidense.

El movimiento sindical mundial, que desde hacía años venía advirtiendo acerca de los posibles efectos desestabilizadores de un sistema financiero mayormente desregulado que permitía que la especulación global dominara la industria, era mucho más pesimista. Asimismo, los sindicatos llamaron la atención sobre la creciente desigualdad que la globalización dirigida por las empresas sin regulación ha creado y que ha contribuido a un sistema económico mundial intrínsecamente inestable e inviable.

A fines de 2008, estaba claro que el movimiento sindical y sus aliados tenían razón y que los apologistas del mundo financiero desregulado estaban equivocados. La "restricción crediticia" de 2007 se expandió para convertirse en un verdadero derrumbe del sector financiero estadounidense en septiembre de 2008, que rápidamente trajo aparejados colapsos financieros en varios otros países, y hacia fines de año, ya no

cabían dudas de que la economía mundial había entrado en una grave crisis económica. En enero de 2009, el FMI predijo que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial se contraería en 2009 y se producirían serias recesiones en muchas regiones del mundo.

Sobre la base de estos pronósticos de recesión económica, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) predijo que la cantidad de personas desempleadas en todo el mundo en 2009 podría superar en 50 millones la cantidad de desocupados en 2007, antes del inicio de la crisis económica, mientras que la cantidad de "trabajadores pobres" podría aumentar a 200 millones. En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, la OIT predijo que el desempleo podría pasar de 7,3% en 2008 a 8,3% en 2009, mientras que la tasa de pobres económicamente activos, definidos como aquellos que ganan menos de US$2 por día, podría trepar del 17% en 2008 a más del 20% en 2009.

A diferencia de otras crisis financieras de los últimos quince años, que se produjeron en países o regiones en desarrollo o en transición, tales como Asia del Este, Rusia, Brasil, Turquía o Argentina, la crisis de 2008 comenzó a gestarse en la economía más grande y más avanzada del mundo —Estados Unidos—, se extendió a otras economías industrializadas y luego al resto del mundo. El hecho de que la recesión se iniciara en el "corazón" de la economía mundial ha significado que aquellos países cuyas economías están más integradas al sistema financiero y económico mundial han sido las más fuertemente afectadas. Por lo tanto, el FMI predice que, en 2009, países asiáticos como China e India, que han mantenido controles de capital y han protegido de manera considerable sus instituciones financieras de las empresas extranjeras, se verán mucho menos afectados por la crisis que los países de Europa Central y del Este, que ahora están bien integrados con las economías de Europa Occidental. Dentro de América Latina, el FMI prevé un crecimiento negativo para México en 2009 debido a su gran dependencia de las exportaciones a Estados Unidos y de los flujos financieros de ese país, que ahora se encuentra en recesión, mientras que Brasil mantendrá un crecimiento positivo, aunque lento, ya que depende menos del mercado estadounidense.

La burbuja especulativa se rompe

Durante varios años, el movimiento sindical mundial ha señalado los riesgos que presentaban para la estabilidad económica y financiera mundial los exóticos instrumentos financieros nuevos basados en derivados o activos poco claros. Las inversiones en esta clase de instrumentos suelen estar totalmente desreguladas y ni siquiera aparecen en los balances de las instituciones financieras que los diseñaron. Durante más de un decenio, en declaraciones al FMI y al Banco Mundial, el movimiento sindical internacional ha propugnado medidas para limitar los movimientos especulativos de capital, incluida la aplicación de un impuesto a las operaciones de cambio de divisas internacionales (el impuesto Tobin).

En los últimos años, con la explosión de los nuevos instrumentos financieros no regulados, la CSI y las Federaciones Sindicales Internacionales han propiciado el inicio de un proceso dirigido a crear marcos internacionales para llevar adelante una reforma integral de la normativa financiera que abarcaría a la banca comercial y de inversión así como a los fondos de capital privado, los fondos de riesgo y otras actividades financieras afines. En junio de 2007, la CSI publicó un informe detallado titulado Where the House always Wins: Private Equity, Hedge Funds and the new Casino Capitalism ["Cuando la casa siempre gana: Capital privado, fondos especulativos y el nuevo capitalismo casino"], que describe el efecto perjudicial de los instrumentos financieros no regulados sobre la "economía real", y reiteró su pedido de regulación mundial de estos exóticos instrumentos financieros.

Mucho más de un año antes del desplome financiero mundial de 2008, la CSI advertía en su informe sobre fondos de capital privado y fondos de riesgo lo siguiente: "El vertiginoso aumento actual de las compras de empresas con fondos tomados en préstamo es parte de una locura especulativa que está haciendo que a diario baje la calidad… de tales adquisiciones y que sus precios aumenten. Esto está creando una burbuja. Esta burbuja, al igual que sucedió con otras burbujas especulativas –desde los bienes inmuebles hasta los mercados de valores– en algún momento se va a reventar. El endeudamiento en que están incurriendo actualmente los fondos de capital privado y los fondos especulativos representa un gran riesgo para la estabilidad de los mercados financieros. Muchos fondos están tan endeudados que si cambian las condiciones del mercado corren el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones… [P]ueden dar inicio a un efecto dominó, con consecuencias perjudiciales para los grandes mercados financieros… Se necesita verdaderamente una reglamentación nueva e innovadora".

Dado que los fondos de capital privado y los fondos de riesgo están ubicados, en su mayoría, en países que supuestamente tienen las economías más avanzadas, sus prácticas abusivas y perjudiciales fueron, en su mayor parte, desestimadas por el FMI, a pesar de que el Fondo tiene el mandato de vigilar las actividades potencialmente desestabilizadoras en todos los países. El grupo de países en desarrollo en las IFI, conocido con el nombre de G24, hizo hincapié en esta anomalía en octubre de 2007 e instó al FMI a poner "tanta atención para evaluar las vulnerabilidades [de los países industrializados] como pone en las economías de mercado emergentes". No fue sino hasta después de que cambiara la dirección del FMI y se produjera una mayor caída del sector financiero de Estados Unidos que el Fondo comenzó realmente a prestar más atención a los sistemas normativos de los países cuyos sectores financieros se suponía que eran los más seguros y los más eficientemente administrados del mundo.

En la cumbre del G20 que se celebró en Washington en noviembre de 2008, los gobiernos de los grandes países industrializados se sumaron a los países en desarrollo más grandes para reconocer que: "Los formuladores de políticas, los entes reguladores y los supervisores, en algunos países avanzados, no valorizaron ni abordaron de manera adecuada los riesgos que se acumulaban en los mercados financieros, no se mantuvieron a la par de la innovación financiera y no tomaron en cuenta las ramificaciones sistémicas de las acciones normativas en el ámbito nacional". Pero para ese entonces, el mundo ya había comenzado a experimentar la peor contracción económica desde la década de 1940.

Las desventajas de la globalización

El hecho de que los países más integrados al sistema financiero y comercial mundial sean los que más están padeciendo la crisis económica demuestra hasta qué punto los promotores de la globalización neoliberal han exagerado sus beneficios y minimizado sus riesgos. Muchos países que eliminaron los controles sobre los movimientos de capital, que abrieron sus sectores financieros a la banca extranjera o cuyos propios sectores bancarios invirtieron activamente en el exterior ahora están pagando el precio más alto. Islandia, un pequeño país europeo que ocupó el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en 2008, es un caso emblemático. El gobierno conservador de ese país había relajado la reglamentación en materia bancaria y permitido a los bancos realizar inversiones de alto riesgo en el extranjero que contaban con un apalancamiento tan grande que las carteras de inversiones de los bancos eran, en términos de valor contable, equivalentes a varias veces el PBI del país. Tras la caída del sistema financiero, en octubre de 2008 Islandia pasó a ser el primer país industrializado desde los años setenta en solicitar un préstamo al FMI.

Otros dos países europeos, Hungría y Letonia, ambos ex estados comunistas que claramente se encaminaban a sumarse al club de las economías "más avanzadas" —debido a que, entre otras razones, habían abierto por completo su sector bancario a las instituciones financieras— también debieron solicitar la asistencia del FMI después de estar al borde del colapso. En esos dos países, los bancos extranjeros habían introducido la práctica de emitir préstamos hipotecarios para la vivienda en moneda extranjera, ya sea euros o francos suizos, y cuando las monedas nacionales de ambos países se devaluaron, cientos de miles de propietarios se vieron imposibilitados de seguir pagando sus deudas y los bancos pasaron a ser insolventes.

El primer país latinoamericano en solicitar ayuda de emergencia al FMI durante la crisis actual fue El Salvador, que firmó un "Acuerdo de derecho de giro" por US$800 millones con el Fondo en enero de 2009. El Salvador es uno de los países centroamericanos más dependientes de la economía de Estados Unidos, tanto que adoptó el dólar estadounidense como moneda nacional.

Por el contrario, hasta febrero de 2009, ningún país de Asia del Este había solicitado ayuda de emergencia al FMI, dado que después de la crisis financiera asiática de 1997-98, esos países implementaron salvaguardas para proteger sus economías de la inestabilidad externa. Algunos aplicaron o reforzaron los controles de capital. En forma conjunta, aprobaron el Acuerdo de Chiang Mai, mediante el cual los países del Asia del Este acordaron compartir sus reservas de moneda extranjera en caso de sufrir una escasez de fondos repentina, antes que pedir prestado dinero del FMI y tener que aceptar condiciones poco populares para recibir un préstamo.

Tampoco ningún país africano ha solicitado asistencia al FMI en relación directa con la crisis financiera. El sector financiero en la mayoría de los países africanos no está tan integrado a las instituciones globales ni tiene un peso tan importante en las economías del continente. Sin embargo, muchos países africanos están comenzando a sentir el impacto de la caída de los precios de los minerales y otras exportaciones de productos básicos, y la mayoría de ellos ya habían sufrido fuertes efectos adversos por la anterior suba vertiginosa de los precios de los alimentos, que perjudicó especialmente a las personas de bajos recursos.

Presión para eliminar los controles de capital y privatizar las jubilaciones

En el proceso de incorporar por completo sus economías al sistema económico mundial, muchos países en desarrollo cedieron importantes instrumentos de política que podrían haberlos protegido de la clase de inestabilidad financiera y económica que existe en la actualidad a escala mundial. Uno de los instrumentos clave han sido los controles sobre los movimientos de capital, a través de los cuales los países imponen determinadas restricciones u obligaciones a los flujos de capital que ingresan y salen del país con el fin de limitar los movimientos perjudiciales de capital especulativo. En otras épocas, el FMI presionaba a los países para que eliminasen todas las formas de control de capital pero dejó de hacerlo alrededor de 2003, cuando reconoció que dichos instrumentos podían tener un papel estabilizador positivo en determinadas circunstancias. Sin embargo, la presión continuó a través de las negociaciones de tratados de inversión bilaterales o acuerdos de comercio, durante las cuales algunos gobiernos de países ricos exigieron que los países en desarrollo renunciaran al uso de dichos controles como condición para cerrar las negociaciones.

Estados Unidos, que ha negociado tratados de inversión o de comercio con 52 países, es uno de los que promovieron la eliminación de los controles de capital. Uno de los países que aceptó hacerlo fue México, que se comprometió a renunciar a esta política monetaria cuando firmó el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés) en 1992. En la actualidad, México está expe-

rimentando una caída en las ganancias por exportaciones —la mayor parte de las cuales están destinadas a Estados Unidos— así como una baja en los ingresos por remesas (en su mayoría de mexicanos que trabajan en Estados Unidos) y una salida de capitales. El gobierno no puede hacer nada con respecto a esta última dado que el NAFTA le prohíbe implementar controles de capital. Debido a estas circunstancias, el FMI espera que México registre el crecimiento más lento de entre todas las economías latinoamericanas en 2009.

En contraste, según los pronósticos del FMI, el crecimiento más alto en 2009 entre las entidades económicas más grandes del mundo ocurriría en China y en India. En ambos países asiáticos, las autoridades monetarias han ejercido controles de capital durante años y en ambos el Estado continúa teniendo un papel importante en la economía. El gobierno chino ha anunciado que las empresas estatales deberán desempeñar una función anticíclica, para lo cual deberán acelerar los proyectos de inversión durante esta coyuntura.

Otra manera en la que muchos gobiernos de países en desarrollo participaron en la globalización financiera fue a través del desmantelamiento o la reducción del alcance de los sistemas previsionales públicos, obligando a los trabajadores a aportar a sistemas previsionales privados que invertían los fondos en acciones, bonos y otros activos financieros. Desde la década de 1990, el Banco Mundial intervino en la reforma de los regímenes jubilatorios de 80 países y brindó asistencia financiera a 60 de ellos. En general, las reformas propiciadas por esta institución consistieron en crear fondos de pensión obligatorios administrados por entidades privadas que reemplazaron en forma parcial o total los sistemas previsionales enteramente públicos. Si bien en la mayoría de los países los trabajadores pudieron elegir la administradora de fondos o el tipo de inversión, no tuvieron la opción de mantener la jubilación administrada por el Estado. El Banco defendió la política por la cual obligaba a los trabajadores a pasar sus aportes previsionales a inversores privados aduciendo que la privatización de las pensiones ayudaría al desarrollo de empresas de servicios financieros en esos países.

Los trabajadores debieron pagar un precio muy alto por ayudar al sector financiero siguiendo el consejo del Banco Mundial. A raíz de la crisis financiera, todos los sistemas previsionales privatizados han perdido una inmensa parte de su valor, lo cual significa que muchos de los trabajadores que se jubilarán en el futuro cercano percibirán haberes jubilatorios considerablemente reducidos. A título ilustrativo, el Banco Mundial reveló en un documento reciente titulado The Financial Crisis and Mandatory Pension Systems ["La crisis financiera y los sistemas previsionales obligatorios"] que la rentabilidad de los fondos de pensión privados obligatorios de Perú cayó un 48% entre octubre de 2007 y octubre de 2008 para aquellos que optaron por las carteras de "crecimiento". En el caso de los que eligieron las carteras "equilibradas", la caída de la rentabilidad fue del 34%. Perú privatizó totalmente su sistema previsional en 1992-93 con el apoyo del Banco Mundial. En la Argentina, donde el sistema previsional pasó a manos privadas en 1994 una vez más por consejo del Banco Mundial, los fondos de pensión perdieron el 40% de su valor durante los primeros diez meses de 2008. Después de esto, el gobierno decidió renacionalizarlos.

Es probable que los países en desarrollo que optaron por una apertura total de sus sectores financieros y cuyas economías pasaron a ser sumamente dependientes de los préstamos y las inversiones del exterior sean los más afectados por la recesión mundial. Un informe del Banco Mundial publicado en diciembre de 2008, Global Economic Prospects 2009 ["Perspectivas para la Economía Mundial 2009"], predijo que los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo se reducirían a más de la mitad en términos reales en 2009 comparado con los niveles de 2007: "Se prevé que los flujos de deuda y capital privados netos hacia los

países en desarrollo se reducirán de la cifra récord de US$1,03 billones (7,6% del PBI de los países en desarrollo) alcanzada en 2007 a aproximadamente US$530.000 millones (3% del PBI) en 2009".

Decisiones políticas para ampliar el control del sector financiero

Como se desprende de los dos ejemplos presentados anteriormente, no fueron las fuerzas anónimas de la "globalización" las que impulsaron estos acontecimientos sino las elecciones de política conscientes y la presión económica ejercida sobre los países en desarrollo para que adoptaran medidas que, en última instancia, los hicieron más vulnerables al impacto de la crisis financiera. En el caso de la eliminación de los controles sobre los movimientos de capital, los principales agentes fueron el FMI (hasta que cambió su política hace algunos años) y Estados Unidos junto con otros gobiernos de países industrializados a través de tratados de comercio y de inversión bilaterales. En el caso de la privatización de los sistemas previsionales en los países en desarrollo y en transición, el principal agente fue el Banco Mundial.

De la misma manera, el rápido crecimiento de los "vehículos de inversión estructurados" de alto riesgo, tales como los títulos respaldados por hipotecas y las obligaciones de deuda garantizadas, cuya caída disparó la actual crisis financiera, se produjo como resultado de una decisión política. Esa decisión fue la derogación por parte del gobierno de Estados Unidos de la Ley Glass-Steagall de 66 años de antigüedad a fines de los años noventa. Aprobada en 1933 en el momento más crudo de la Gran Depresión en ese país, esta ley separaba los bancos de depósito —cuyos depósitos estarían, de allí en adelante, garantizados por un organismo del gobierno federal— de los bancos de inversiones más riesgosas. La derogación de la Ley Glass-Steagall fue iniciada por senadores del Partido Republicano en 1999 y una vez convertida en ley, hizo que todos los bancos más importantes de Estados Unidos se involucraran fuertemente en inversiones estructuradas basadas en préstamos de alto riesgo y otros activos de dudoso valor. En última instancia, estas inversiones llevaron a los bancos al borde de la quiebra a fines de 2008, quiebra que hubiese ocurrido si el gobierno estadounidense no les hubiese ofrecido salvatajes por cientos de miles de millones de dólares del sector público.

La creciente "financialización" de la economía mundial que se produjo durante la última década, es decir, la creciente dominación de las finanzas especulativas sobre la economía mundial, debe revertirse. El movimiento sindical mundial ha presentado varias medidas que apuntan a controlar las actividades especulativas perjudiciales y poner al sector financiero al servicio de la economía real. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

- Se debe prohibir la especulación en los mercados de productos básicos, que empujó a cientos de millones de habitantes de países pobres a la indigencia y la inanición en 2008 debido a los exorbitantes precios de los alimentos y los combustibles.
- Se deben cerrar los paraísos fiscales y otros centros financieros subregulados similares en el extranjero.
- Se deben gravar las operaciones financieras internacionales, a través de una fórmula como la del impuesto Tobin, de forma tal de suprimir los movimientos desestabilizadores del capital especulativo.
- Se debe establecer un marco acordado a nivel internacional para regular de manera estricta todas las actividades financieras que antes estaban subreguladas, tales como los mercados de derivados, incluidos los fondos de capital privado, los fondos de riesgo y los bancos de inversiones, así como los bancos comerciales.
- Como parte de la reforma del sector financiero, se debe dar prioridad a la

economía social mediante el fomento de cooperativas financieras, bancos comunitarios, mutualidades y otros organismos de crédito de acción local similares.

Desigualdad y crisis

El control normativo de los especuladores financieros tanto en el ámbito internacional como en el nacional es un elemento importante, aunque no el único, de la estrategia para restablecer un sistema económico mundial viable. Toda estrategia diseñada para construir una economía mundial viable debe abordar la problemática del cambio climático y la creciente desigualdad que ha asolado el desarrollo económico en los últimos 25 años. El desafío que supone el cambio climático no será analizado en este trabajo más allá de decir que la recesión económica global, a la cual docenas de gobiernos han respondido implementando masivos programas de recuperación económica, ofrece una enorme oportunidad para emplear la capacidad productiva no utilizada con el fin de hacer la transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. La estrategia de los "empleos verdes" puede, en forma simultánea, darle la posibilidad de trabajar a la gente y garantizar la supervivencia a largo plazo de nuestro planeta a través de inversiones en infraestructura que utilice la energía de manera eficiente, transporte público, energía renovable y protección ambiental.

La nueva estrategia de desarrollo también debe considerar la reducción de la desigualdad como un objetivo prioritario, dado que el sistema económico actual que le ha permitido a una minoría privilegiada enriquecerse hasta niveles obscenos mientras la mayoría veía su nivel de vida estancarse o degradarse es ciertamente insostenible. Los ahora infames préstamos basados en hipotecas de alto riesgo a través de los cuales las instituciones financieras en Estados Unidos embaucaron a millones de compradores de viviendas atándolos a hipotecas que no podían pagar se desarrollaron, en parte, debido a que el estancamiento de los ingresos en los hogares impedía a esas familias adquirir sus viviendas por otro medio. Las instituciones a menudo recurrieron a prácticas predatorias que serían ilegales en algunos países, tales como ofrecer pagos de hipotecas inicialmente bajos que (a veces sin que el consumidor lo supiera) se incrementaban en forma considerable después del primer o segundo año de la hipoteca, con la expectativa de que los consumidores se vieran obligados a sacar una hipoteca secundaria para cancelar parte del primer préstamo. Luego, las hipotecas se agrupaban y se vendían como obligaciones de deuda garantizadas a inversores de Estados Unidos y del exterior, con una calificación segura otorgada por agencias cómplices de calificación de títulos.

El sistema financiero estadounidense se construyó sobre una pirámide de incentivos individuales que alentó estas prácticas abusivas y desestabilizadoras. En el sector financiero inmobiliario, por ejemplo, los incentivos comprendían enormes comisiones y bonificaciones para una serie de actores: para el representante de la agencia hipotecaria que vendía la hipoteca con las condiciones ocultas al comprador confiado; para el ejecutivo de la agencia hipotecaria que vendía la hipoteca al banco; para el oficial de la agencia de calificación que otorgaba una calificación segura a lo que en realidad era un título riesgoso dentro del cual se había incluido la hipoteca, y para el ejecutivo del banco que vendía el título a inversores tales como fondos de pensión y otras instituciones financieras que buscaban altas tasas de rentabilidad. Estas comisiones y bonificaciones se pagaban, aun cuando el comprador que se encontraba en la base de la pirámide a la larga no pagara, como ocurrió con millones de compradores. Una vez que comenzaban a aplicarse las condiciones abusivas como los pagos de intereses inflados, y en particular, después de que estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2006, muchos compradores de viviendas se quedaron con propiedades cuyo valor era muy inferior al de las hipotecas que habían sacado por ellas.

El perverso sistema de incentivos por comisiones y bonificaciones fue una causa de la burbuja inmobiliaria, dado que se alentaba a los particulares a adquirir viviendas que estaban muy por encima de lo que podían pagar, pero muchos "expertos" en finanzas y economía de Estados Unidos proclamaron la burbuja del sector de bienes raíces y del mercado accionario como la creación auténtica de riqueza que beneficiaba a todos, incluso mientras los ingresos reales de los trabajadores disminuían. No obstante, la creciente riqueza financiera no fue para nada compartida ampliamente. Por el contrario, la explosión de la remuneración de los ejecutivos y el rendimiento de las inversiones especulativas por un lado, y el clima político desfavorable a los trabajadores que prevaleció durante la mayor parte del último cuarto de siglo por el otro, dieron lugar a un aumento acelerado de la desigualdad en la economía más grande del mundo.

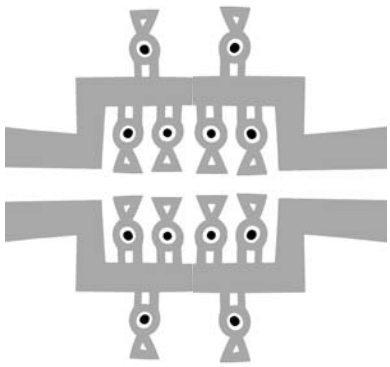
Según cálculos de un centro de estudios estadounidense —el Institute for Policy Studies— el ejecutivo más alto de las 500 compañías más grandes ganaba 42 veces el salario de un trabajador promedio en esas empresas en 1980, pero esta relación se había incrementado a 344 veces el salario de un trabajador en 2007. Mientras que la remuneración de los ejecutivos sufrió un aumento explosivo, el salario mínimo nacional no se incrementó ni siquiera una vez para mantenerse al ritmo de la inflación entre 1996 y 2007, y la tasa de sindicalización en Estados Unidos, donde los trabajadores suelen ser despedidos o intimidados por los empleadores cuando intentan afiliarse a un sindicato, cayó a menos del 13%. En la actualidad, el país del norte ostenta la mayor desigualdad de ingresos entre los países industrializados, si bien la mayoría de las demás economías avanzadas también han experimentado una mayor desigualdad en los últimos 25 años ante el apoyo otorgado por los gobiernos a iniciativas empresariales para hacer las economías más "competitivas", por ejemplo, a través de medidas que reducían la carga impositiva de las empresas y flexibilizaban los mercados laborales.

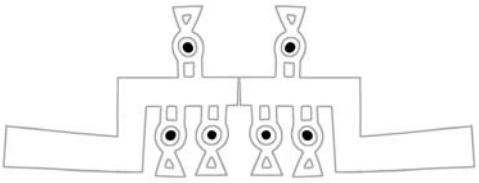
En numerosos países en desarrollo que recurrieron a la restricción de los derechos de los trabajadores y la reducción de los costos de mano de obra como herramientas estratégicas para intentar bajar los costos de sus exportaciones y alcanzar tasas de crecimiento más elevadas se produjeron aumentos de la desigualdad todavía más pronunciados. El ejemplo más destacado en ese sentido es China, que a principios de la década de 1980 comenzó a abrir en forma gradual su economía y consagró los derechos de propiedad y la libertad de empresa pero, al mismo tiempo, reprimió los derechos de los trabajadores y desmanteló algunos de los programas de protección social de mayor cobertura, como la atención médica pública, que había beneficiado a los trabajadores. Este modelo de crecimiento orientado a las exportaciones y basado, en gran medida, en mano de obra barata, ciertamente contribuyó a mantener altas tasas de crecimiento pero también convirtió a China en una sociedad muy desigual. Según las estadísticas publicadas por el Banco de Desarrollo Asiático, hacia 2004 China había pasado a ser la segunda sociedad más desigual de Asia (después del Nepal) de acuerdo con un indicador de la desigualdad denominado "el coeficiente Gini", y la más desigual si se compara el nivel de ingresos del 20 por ciento más rico de la población con aquél del 20 por ciento más pobre.

A pesar de las enormes reservas de divisas que China ha acumulado y las medidas que ha implementado para proteger su sector financiero del derrumbe financiero mundial, la economía china dependiente de las exportaciones se verá fuertemente afectada por la recesión en todos sus principales mercados extranjeros. Para que resurja el crecimiento en China es necesario que ésta pase de ser una economía que produce fundamentalmente para exportar a una economía que construya una base más sólida para el consumo interno. La manera más eficaz de que China logre

una economía focalizada en el mercado interno será mediante el aumento de los salarios de sus trabajadores y el establecimiento de programas de protección social modernos e integrales. Dicha estrategia implicaría otorgar plena libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que en este momento no existen, y ofrecer pensiones a la vejez y atención médica amplias de forma tal que los trabajadores ya no tengan que ahorrar una parte considerable de sus magros ingresos para cuando se jubilen y se enfermen.

En China, al igual que en Estados Unidos y la mayoría de los demás países, la mejora de los salarios de los trabajadores y la protección social debe ser una parte importante de la estrategia que se implemente para construir sistemas productivos más sostenibles que centren la atención en la economía real más que en los intereses de los especuladores globales. Al igual que ocurrió en Estados Unidos y en otros países industrializados durante la Gran Depresión de los años treinta, la lucha contra la desigualdad debe ser un pilar fundamental en toda estrategia que pretenda lograr no sólo una distribución más justa de la riqueza y el ingreso sino también un sistema económico estable y viable.





LA CRISIS FINANCIERA Y ECONOMICA: UNA RESPUESTA BASADA EN EL TRABAJO DECENTE

Resumen de la versión previa presentada en la Reunión tripartita de alto nivel sobre la actual crisis financiera y económica mundial (Ginebra, 23 de marzo de 2009) y en la Comisión de Empleo y Política Social del Consejo de Administración como documento (Ginebra, 17 de marzo 2009). Se publica la siguiente versión con la autorización del señor Raymond Torres del IIEL de la OIT.



La crisis mundial se está agravando…

1. La economía mundial se ha visto muy afectada por la crisis financiera, y las perspectivas son las peores desde la Gran Depresión. Los países desarrollados más grandes, y en particular los países donde se originó la crisis, ya han entrado en recesión. Inicialmente, los efectos de propagación de la crisis hacia otros países fueron reducidos; ahora, por el contrario, varias economías emergentes están siendo duramente castigadas, lo que confirma que la hipótesis del «desacoplamiento» de dichas economías era errónea.

2. También los países en desarrollo están sufriendo los efectos de la crisis, que pondrá en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (y en algunos casos incluso invertirá el proceso), incluido el trabajo decente para todos. Esta cuestión suscita una gran preocupación ya que, incluso durante el período anterior a la crisis, los modelos de crecimiento en determinadas regiones, principalmente en Africa, sólo condujeron a reducciones insignificantes de la pobreza. Un gran número de personas está todavía muy lejos de disfrutar de unas condiciones de vida y de trabajo decentes.

3. Es importante señalar que la crisis se está extendiendo por toda la economía real a través de tres canales de transmisión que se refuerzan mutuamente, a saber: la disponibilidad limitada de crédito para el capital circulante, la financiación del comercio y la realización de inversiones viables en la economía real (que en conjunto se denominan «contracción del crédito»); la prudencia en las decisiones relativas al gasto, que conduce a una disminución de la producción, el empleo y los precios, lo que genera a su vez una pérdida de confianza por parte de los consumidores y los inversores (el círculo vicioso de la depresión); y los vínculos internacionales en los ámbitos del comercio y de la inversión, así como los flujos de remesas (es decir, los canales de la globalización).

El cuadro 1 sintetiza la actual composición de APEC, como sumatoria de estructuras de menor tamaño, y destaca la vinculación con otros países no miembros: en el caso

de los dos formatos de ASEAN (Camboya, Laos, Birmania e India), así como en el caso del Foro Arco del Pacífico Latinoamericano (considerando que Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá han solicitado el ingreso.

...y entraña el riesgo de una recesión del mercado de trabajo prolongada…

4. Las consecuencias de la crisis en los mercados de trabajo han sido visibles desde 2008, especialmente en los Estados Unidos, país donde se originó la crisis. A nivel mundial y tras cuatro años de disminución sostenida del desempleo, el número de desempleados aumentó en 11 millones en 2008. Si la crisis continúa propagándose y se siguen perdiendo empleos, a finales de este año podría haber otros 40 millones de personas sin trabajo en todo el mundo.

5. El sombrío panorama del mercado laboral afecta a determinados grupos de manera desproporcionada, principalmente a las mujeres, los trabajadores migrantes y los jóvenes. En algunos países, los sectores financiero, de la construcción y del automóvil son los más afectados. En general, los sectores orientados a la exportación, que en muchos países en desarrollo son los principales proveedores de empleos formales, sobre todo para las mujeres, se enfrentan a la perspectiva de unos mercados mundiales en rápida contracción. Por cierto, los efectos de la crisis en los mercados de trabajo no se limitarán a pérdidas de empleo. En particular, aumentará la proporción de empleo informal y de trabajadores pobres, lo que agravará los desafíos preexistentes.

6. El mayor riesgo es que se produzca una recesión prolongada del mercado de trabajo. Las enseñanzas extraídas de las anteriores crisis financieras muestran que el mercado de trabajo tiende a recuperarse sólo entre cuatro y cinco años después de la recuperación económica (que en este caso no se espera antes de finales de 2009). Ello se debe a que es muy difícil invertir la tendencia de los fuertes aumentos del desempleo a largo plazo y la mayor «informalización» del mercado de trabajo, problemas que se han visto agravados por el fenómeno de los trabajadores migrantes que regresan a sus países de origen y de la migración inversa a gran escala de las zonas urbanas a las zonas rurales. Si estas tendencias persisten, los efectos negativos de la crisis serán duraderos, lo cual provocará una difícil situación social y privará a la economía de recursos valiosos.

…y una amenaza para la estabilidad social

7. La difícil situación social se agravará en los países en desarrollo, en los que la protección social suele ser limitada. Incluso en las economías emergentes y en una serie de países desarrollados, la mayor parte de los nuevos solicitantes de empleo no perciben prestaciones de desempleo. El resultado es que se dejará a millones de trabajadores sin un apoyo adecuado.

8. Los sistemas de pensiones están sujetos a importantes presiones como consecuencia del colapso de los mercados de capitales. Los fondos privados de pensiones han sufrido pérdidas considerables en sus inversiones. Aunque muchas veces las tendencias se presentan en términos excesivamente técnicos, una cosa es cierta: los derechos de pensión de los trabajadores que dependen de estos fondos se han reducido en más del 20 por ciento por término medio. En algunos países, incluso los jubilados se enfrentan a la perspectiva de una disminución de las prestaciones de jubilación. Es importante destacar que los sistemas públicos de pensiones adecuadamente concebidos se han visto mucho menos afectados que los fondos privados. Ello ha provocado un giro en las posiciones de política de algunas organizaciones internacionales, que ahora propugnan centrarse en mayor medida en unos sistemas públicos de pensiones más estables y con mayores garantías de seguridad. Esta evolución ha sido acogida muy favorablemente, aunque el daño ya está hecho y será difícil de reparar.

9. Por último, lo que preocupa es que la crisis está afectando a todos los grupos, mientras que los beneficios del período de expansión anterior a la crisis no se distribuyeron de manera equitativa.

10. En resumen, se avecina una crisis social, que sólo podrá evitarse si se toman medidas adecuadas rápidamente.

Los países han tratado de hacer frente a la crisis mediante la adopción de cuantiosas medidas de rescate financiero y el anuncio de paquetes de estímulo fiscal…

11. Hasta ahora, la mayor parte de las actuaciones se han centrado en la estabilización de los mercados financieros y en intentos por restablecer la liquidez del crédito. Al mismo tiempo, para estimular la economía muchos países han anunciado paquetes de rescate fiscal, que reducen los impuestos y aumentan el gasto, de diversa magnitud. Varios países también han adoptado medidas para paliar las consecuencias que la crisis tiene en los ámbitos social y del mercado de trabajo. Ahora bien, en la mayoría de los casos la suma asignada para las medidas de rescate financiero ha superado con creces la de los instrumentos fiscales utilizados para estimular la demanda, la producción y el empleo.

… pero hasta ahora los planes no han tenido éxito…

12. Es digno de elogio que los países hayan reaccionado con tanta rapidez, habida cuenta del intervalo de tiempo que debe transcurrir para que estos paquetes lleguen a la economía real. Aun así, hasta ahora las medidas han tenido un impacto limitado. Ello se debe a que, tal como se desprende de los más de 40 planes de rescate y estímulo examinados para la preparación del presente documento, no se han abordado plenamente los mecanismos de transmisión a través de los cuales se está propagando la crisis. Además, en muchos casos las medidas adoptadas no han logrado abordar los desequilibrios estructurales subyacentes a la crisis.

… porque no se ha reactivado el sistema de crédito…

13. En primer lugar, las medidas de rescate destinadas a los bancos, aunque de una magnitud sin precedentes, no lograron reactivar el crédito bancario. Para evitar el riesgo de un colapso sistémico, los países en desarrollo han rescatado a las instituciones financieras mediante inyecciones de capital, garantías crediticias y, a veces, haciéndose cargo totalmente de los préstamos incobrables. Efectivamente, se consideró con justa razón que la protección de la solvencia de los bancos y la restauración de la disponibilidad de créditos para las empresas y los hogares eran condiciones previas para evitar el colapso total del sistema financiero, el cual tendría consecuencias imprevisibles para la economía real. Sin embargo, el acceso a los créditos bancarios sigue siendo limitado.

… porque los paquetes fiscales no se centran suficientemente en el trabajo decente y no están coordinados, de tal forma que no logran impulsar la economía…

14. En segundo lugar, las medidas de estímulo fiscal anunciadas por los gobiernos suelen ser de menor envergadura que la ayuda de rescate proporcionada a los bancos. Además, en su mayor parte, no prestan suficiente atención al empleo y la protección social. Por ejemplo, solo unos cuantos países han anunciado iniciativas relacionadas con el mercado de trabajo; los programas de infraestructura no tienen debidamente en cuenta la necesidad de potenciar la capacidad actual de las empresas y la oferta de competencias profesionales, de modo que parte del gasto en infraestructura podría provocar un aumento de los precios, en lugar de un incremento de la producción y del empleo. Asimismo, ciertas reducciones fiscales darán lugar a un aumento del ahorro y no a un incremento de la demanda, de la producción y del empleo. Además, en estas medidas sólo se ha dado una importancia limitada al diálogo social con los empleadores y los sindicatos y no se ha previsto la coordinación entre los países.

15. Es evidente que la falta de coordinación internacional reduce el efecto general de las medidas de estímulo, y también lleva a que los países sean reacios a avanzar más rápido que sus interlocutores comerciales,

dada la estrecha interacción que hoy existe a nivel internacional. Como resultado, la aplicación práctica de los paquetes fiscales podría postergarse todavía más, agravando el ciclo vicioso de la depresión.

… porque los mercados mundiales se enfrentan al riesgo de soluciones aislacionistas, devaluaciones competitivas y deflación salarial…

16. En tercer lugar, los mercados mundiales se ven afectados por la contracción del crédito (que agota los recursos comerciales disponibles para las empresas) y corren el riesgo de que se adopten soluciones aislacionistas y medidas proteccionistas. Las repercusiones para los países en desarrollo, que tanto dependen de los mercados mundiales, serían especialmente graves. Esta es la razón por la que el sistema multilateral debería permanecer vigilante ante la necesidad cada vez más acuciante de apoyar a sectores estratégicos como el del automóvil. De igual modo, los intentos por superar la crisis mediante devaluaciones monetarias competitivas serían contraproducentes.

17. La deflación generalizada de los salarios como medio para proteger a las economías nacionales agravaría la crisis en una medida incluso mayor que si se produjese una ola de devaluaciones competitivas. De hecho, la deflación generalizada de los salarios privaría a la economía mundial de la demanda tan necesaria, y también menoscabaría considerablemente los niveles de confianza. Las políticas de apertura de los mercados, que son tan esenciales para la recuperación, correrían asimismo el riesgo de suscitar un fuerte rechazo si los trabajadores consideraran que las medidas son injustas.

… porque apenas se ha prestado atención a la dimensión de desarrollo…

18. En cuarto lugar, se ha prestado poca atención a la perspectiva de desarrollo. Las consecuencias sociales de la crisis en los países en desarrollo se han visto agravadas por el hecho de que la mayoría de los trabajadores y de las pequeñas empresas carecen de seguridad social básica. Se prevé que entre un 40 y un 50 por ciento de hombres y mujeres de todo el mundo no podrán ganar lo suficiente para superar, ellos y sus familias, el umbral de pobreza de dos dólares de los Estados Unidos al día en 2009.

19. Además, muchos países en desarrollo carecen de capacidad para realizar inversiones públicas masivas. Algunos países ya están haciendo frente a importantes déficit fiscales y de cuenta corriente, tras la crisis de los precios de los alimentos y del petróleo de mediados de 2008. Si se sigue ensanchando la brecha entre los países como resultado de las distintas capacidades para responder a la crisis, se intensificarán los desequilibrios y desigualdades a nivel mundial.

20. Los paquetes de medidas tradicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyar a los países que experimentan crisis en la balanza de pagos sencillamente no están adaptados a la situación. Dichos paquetes se basaban en un enfoque que daba por supuesto que los países afrontaban crisis locales, con respecto a las cuales los propios países eran los principales responsables. Sin embargo, la crisis actual es de escala mundial y tiene su origen en los países desarrollados. Una multiplicación de paquetes de medidas de rescate tradicionales no haría sino agravar la disminución de la demanda en el mundo y perpetuar la crisis mundial. Esta es la razón por la cual es necesario establecer un nuevo mecanismo, que funcionaría en paralelo con los paquetes de medidas de rescate del FMI, en lugar de remplazar el mecanismo existente.

… y porque no se han abordado las causas estructurales de la crisis

21. En quinto lugar, las medidas de estímulo que se han desplegado hasta la fecha no han tenido por objetivo garantizar un crecimiento mundial más equitativo y sostenible a mediano y largo plazo. Los desequilibrios mundiales, los déficit de trabajo decente y las desigualdades han contribuido de forma considerable a la crisis. De igual modo, como reflejo de la falta de reglamentación de los mercados financieros, la economía

real ha estado sometida a presiones para aumentar la rentabilidad a corto plazo, a veces en detrimento de los ingresos de los trabajadores y de los intereses a largo plazo de las empresas sostenibles. Es esencial abordar las causas fundamentales de la crisis para apoyar la recuperación, reducir el riesgo de otra importante crisis sistémica y promover un sentido de justicia. Volver a la situación anterior no es una opción.

Lo que se necesita es un pacto mundial para el empleo

22. Es esencial seguir adelante con el Programa de Trabajo Decente para apoyar la recuperación económica, evitar las crisis sociales y del mercado de trabajo y promover la cohesión social en torno a las medidas impulsadas. En el contexto de la crisis mundial, la mejor manera de lograr este objetivo es a través de un pacto mundial para el empleo.

23. Es necesario aplicar un enfoque mundial, porque, para que las medidas sean eficaces ante una crisis que tiene precisamente ese carácter, es imprescindible evitar las soluciones proteccionistas. La importancia que se asigna al empleo es coherente con la demostración hecha en el presente documento de que no será posible reactivar la economía de manera sostenible a menos que se haga mayor hincapié en la oferta de trabajo decente y productivo para las mujeres y los hombres, en una protección social bien concebida y en los derechos de los trabajadores. La mejor manera de aplicar las medidas es a través del diálogo social en el ámbito nacional, pero el impulso de una mayor cooperación en el marco internacional también puede tener ventajas sinérgicas, lo que explica la necesidad de concertar un pacto para el empleo.

24. El citado pacto mundial para el empleo se basaría en el Programa Global de Empleo de la OIT y en la declaración formulada en noviembre de 2008 por la Mesa del Consejo de Administración de la OIT. Fundamentalmente, el pacto mundial para el empleo tendrá por cometido prestar apoyo a la recuperación económica a través de políticas que favorezcan el trabajo decente, reducir el riesgo de que la crisis se extienda a otros países y allanar el camino hacia una globalización más equitativa y sostenible. Las vías para lograrlo serán las siguientes.

25. Para *restablecer la actividad crediticia, l*os gobiernos deberían considerar las siguientes posibilidades:

- Condicionar las medidas de apoyo financiero, como, por ejemplo, la compra por los gobiernos de los activos tóxicos, a que los bancos beneficiarios reanuden la oferta de crédito para proyectos viables de las empresas o de las personas, y a que se impongan limitaciones a las prácticas de remuneración de los directivos y de pago de dividendos, de modo que el apoyo del Estado no se aparte del objetivo de reactivar el crédito.
- Abrir líneas de crédito y facilitar el acceso directo a los préstamos del Estado a las pequeñas empresas (motores importantes de la innovación y el crecimiento del empleo), de modo que éstas puedan continuar sus operaciones (y aprovechar posibles nuevas oportunidades) hasta que se restablezca la demanda.

26. *Los planes de incentivos fiscales darían un impulso mucho más vigoroso a la economía y el empleo, y entrañarían un menor costo que los planes actualmente en vigor,* en el entendido de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Se debe garantizar que los proyectos de infraestructura, construcción y fomento de la vivienda refuercen la capacidad de las empresas existentes, lo que se logrará prestando apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) para que aprovechen las nuevas oportunidades, velando por que los trabajadores adquieran las competencias laborales adecuadas para las nuevas exigencias y promoviendo las dimensiones rural y agrícola de los proyectos, las cuales son esenciales para los países en desarrollo, ya que contribuirían a estimular el dinamismo económico interno y del empleo y a mitigar la crisis alimentaria que se avecina.
- Habida cuenta de los posibles desfases entre el momento de las decisiones y la

puesta en práctica efectiva de los proyectos de infraestructura, construcción y vivienda, sería útil apoyar el mantenimiento del empleo existente en las empresas viables, mediante la reducción de las horas de trabajo, la aplicación de subsidios de desempleo parcial y de subsidios de formación, la reducción de los impuestos sobre el trabajo para los empleos de baja remuneración y el incremento de la protección social a través de programas bien concebidos que favorezcan la demanda agregada y sean compatibles con los incentivos laborales. Podrían incluirse las transferencias condicionadas de fondos para mejorar el acceso a la educación y a los servicios de salud, y las transferencias no condicionadas para los países en que la pobreza está muy extendida y la capacidad administrativa limitada. Sin embargo, también se necesitan más medidas de carácter estructural, de modo que la protección social tenga un alcance general.

- En lo que atañe a las personas que han perdido el empleo o que se incorporan al mercado laboral, pero no consiguen trabajo, las medidas que se señalan a continuación demostraron su utilidad durante crisis anteriores: el establecimiento, por lo menos, de prestaciones de desempleo mínimas o de garantías de empleo para quienes no se benefician de las prestaciones de apoyo a los ingresos (la experiencia de la crisis de Asia muestra que los países que lograron superar la crisis se apoyaron en parte en estos nuevos y rentables mecanismos); los programas activos del mercado de trabajo y las actividades de formación, administrados por servicios públicos de empleo eficaces y dotados de recursos abundantes (se ha comprobado que las prestaciones de estos servicios, si funcionan correctamente, son esenciales en tiempos de crisis y resultan económicos en relación con otras medidas); y programas e iniciativas específicas para los grupos vulnerables, sobre todo las mujeres que regresan al mercado laboral después de una licencia de maternidad, los jóvenes, a quienes también se podría alentar a que prolonguen su permanencia en el sistema educativo, y los trabajadores migrantes.

- En la medida en que algunos sectores industriales específicos necesiten apoyo, éste debería quedar sujeto a criterios estrictos en los planos social y medioambiental, y ser dirigido y coordinado de manera global, en conformidad con los acuerdos de comercio internacionales.

- Es necesario potenciar el espacio fiscal, la capacidad administrativa y el apoyo técnico a los países en desarrollo en el marco de las crisis globales, quizás mediante la creación de un fondo mundial para el empleo. A diferencia de los planes de rescate del FMI, este fondo tendría carácter anticíclico. El fondo mundial para el empleo no estaría sometido a recortes en el gasto social ni a la deflación de los salarios (que no sólo deprimen la economía interna de los países, sino que afectan también a los países vecinos, ejerciendo así más presión hacia la baja de la demanda mundial). Los países beneficiarios podrían aprovechar los conocimientos técnicos de la OIT para desarrollar las diferentes dimensiones del pacto mundial para el empleo. En particular, harían participar a los interlocutores sociales en la formulación de las medidas. El reembolso de los préstamos del fondo para el empleo, que podrían tener una cuantía superior a la de los préstamos de rescate tradicionales, se facilitaría en razón del carácter anticíclico del sistema previsto; así, su funcionamiento apoyaría la recuperación global, y fomentaría la capacidad económica interna.

27. *Las medidas encaminadas a evitar la deflación de los salarios, mediante sistemas coordinados de negociación colectiva y de protección de los derechos de los trabajadores,* no sólo aportarían un apoyo adecuado a las víctimas de la crisis, sino que también servirían de estímulo oportuno a la demanda y allanarían el camino para el establecimiento de una economía más sostenible. Como tal, el pacto mundial para el empleo también abarcaría las siguientes medidas:

- Fortalecer el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es a la vez socialmente conveniente y económicamente eficaz en la perspectiva de lograr una evolución más equilibrada de los ingresos.

- Desarrollar la capacidad de los interlocutores sociales para entablar el diálogo y lograr acuerdos en distintos niveles, de modo que los salarios en la economía en su conjunto aumenten de forma congruente con el aumento de la productividad (y no por debajo de ésta, como ha sido el caso durante los dos decenios pasados). Garantizar el poder adquisitivo del salario mínimo, para que éste sirva como punto de referencia de todos los salarios.
- Evitar la deflación de los salarios, para respaldar la demanda global y reducir las tensiones comerciales.

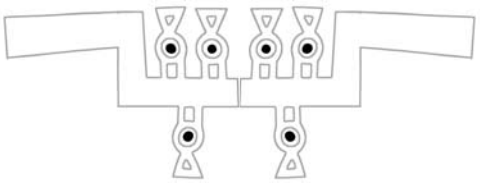
Coherencia mundial de las políticas, en aras de una prosperidad y un desarrollo compartidos

28. Es el momento de estrechar la cooperación entre las principales organizaciones internacionales. Esta es una necesidad imperiosa para acelerar la recuperación. En efecto, adoptar soluciones aislacionistas de cara a la crisis sería contraproducente. Un hecho aun más fundamental es que se trata de una crisis mundial y multifacética, por lo que ninguna organización ni país está equipado para abordar todas sus dimensiones. Por esta razón, la OIT ha reafirmado la importancia de fomentar una mayor cooperación entre los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas para apoyar una economía más fuerte, más limpia y más justa. Los interlocutores internacionales pueden reforzar la coherencia de los objetivos financieros, comerciales, sociales, medioambientales y de desarrollo. Esto también implica que se redefinan los grados de prioridad respectivos de estos objetivos, a fin de:

- asegurarse de que el sistema financiero esté al servicio de la economía real y del desarrollo social, lo que supone reformar en profundidad la arquitectura financiera y los sistemas de remuneración de los altos directivos, de manera que dicha remuneración sea de un nivel razonable y se articule con el rendimiento real de las empresas;
- reequilibrar el proceso de globalización, como se indica en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (Declaración sobre la Justicia Social) y, en particular, abordar cuestiones tales como los déficit de trabajo decente y las desigualdades excesivas de los ingresos, así como la incidencia cada vez mayor del empleo informal y de las formas atípicas de empleo que se desarrollaron durante el período anterior a la crisis;
- sentar las bases de una economía verde, es decir, favorable al medio ambiente, habida cuenta de que, en el futuro, el gasto se limitará debido a la necesidad de los gobiernos de restringir los presupuestos a fin de reembolsar la creciente deuda pública una vez que la economía se haya recuperado. Es importante observar que las tecnologías verdes suelen tener un coeficiente de empleo más elevado que las tecnologías que generan grandes emisiones de CO2 (consideración que ha impulsado las iniciativas de empleos verdes), y
- asegurarse de que la asistencia oficial para el desarrollo no resulte afectada por la crisis, y establecer nuevos mecanismos, como el fondo mundial para el empleo, que complementen las medidas actuales y apoyen el proceso de ajuste de los países emergentes y los países en desarrollo en tiempos de crisis.

29. Los debates en el G20 podrían ofrecer una oportunidad para examinar estas cuestiones y el pacto mundial para el empleo. Además, en el marco de la OIT se podría realizar un intercambio de buenas prácticas, de modo que los países se beneficien mutuamente de sus experiencias y aprovechen los conocimientos técnicos desarrollados en la OIT.

30. En suma, las respuestas a la crisis no deben tener carácter puntual y aplicarse temporalmente, para luego volver, lo antes posible, a funcionar como de costumbre. El reto que hoy se nos plantea consiste en responder a la crisis adoptando medidas que preparen el terreno para la implantación de mejores pautas de crecimiento y desarrollo.



LOS DESAFIOS DE LA CRISIS ECONÒMICA Y SOCIAL MUNDIAL

Ebrahim Patel
Secretario General del SACTWU
Miembro Trabajador del Consejo de Administración de la OIT
Portavoz del Grupo de Trabajadores en la Comisiòn de Empleo y Polìtica Social

Versión editada del discurso pronunciado el 17 de marzo de 2009 ante la Comisión de Empleo y Política Social de la Organización Internacional del Trabajo.

Todas nuestras economías y sociedades enfrentan una crisis de enormes dimensiones y en los últimos meses se ha visto una profundización de ésta, cargada de dramatismo, tragedia y desgracia para la humanidad.

El dramatismo se ve reflejado en la pérdida de US$50 billones en el valor de los activos en los mercados globales, según estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo, y en los miles de millones de pérdidas registradas durante muchos días en los mercados bursátiles al cierre de las operaciones.

La tragedia humana se escribe en las vidas de 20 a 50 millones de personas que se calcula perderán su trabajo como consecuencia de la crisis, los cientos de millones que deberán luchar para alimentar a sus familias y los jubilados que se enfrentan a la súbita realidad de recortes drásticos en sus haberes previsionales.

La desgracia se manifiesta en la codicia que florece aún en medio de la crisis, cuya expresión más reciente es la suma de US$165 millones en bonos pagados por AIG a sus ejecutivos —una empresa que fue rescatada con dinero de los contribuyentes— que impulsó al Presidente Obama de Estados Unidos a reaccionar con indignación y rechazar los pagos de los bonos en cuestión, afirmando que "Ésta es una corporación que se encuentra en una difícil situación financiera por imprudencia y codicia".

Los efectos de la crisis son brutales para los trabajadores y las empresas; su impacto está revirtiendo años de ganancias económicas sumamente modestas y sumiendo a más personas en un gran pozo de pobreza. Se trata del mayor desafío para el empleo que hemos presenciado en nuestra vida. Es por eso que cuando abordamos el análisis de las soluciones, debemos buscar respuestas de alcance y ambición comparables a los de la crisis.

Antes de responder al desafío de brindar orientación con miras al futuro, es necesario analizar cómo llegamos a la situación de caos en la que se encuentra la economía mundial.

Existen varios elementos esenciales de la crisis —causas, factores desencadenantes, razones estructurales, causas raíz— que deben integrarse a las acciones de respuesta y las soluciones de la comunidad mundial. Además, aunque resulte tentador restarle importancia a la causa fundamental de la crisis con un impaciente gesto de la mano y un "no nos concentremos en el pasado, ahora estamos juntos en esto", esto podría conducir a la receta equivocada.

La crisis no es algo inesperado, los signos de advertencia existían y los diversos intentos por llamar la atención sobre la fragilidad de esta forma de integración económica fueron ignorados o dejados de lado, entre ellos, una serie de intentos durante estos años del Grupo de los Trabajadores en el seno de la OIT.

Nosotros señalamos cinco áreas:

Primero, el modelo de globalización existente ha sido desequilibrado, tanto social como económicamente. Incluso al nivel más elemental, los resultados sistémicos del comercio y las inversiones dieron lugar a superávits mayores en algunos países y déficits en otros, fundados en una orientación obsesiva a las exportaciones en lugar de un modelo de crecimiento equilibrado, con el surgimiento de un déficit de la demanda originado por el crecimiento de la deuda y no por los ingresos.

Segundo, hemos observado un esfuerzo consciente por debilitar el papel del Estado en los mercados y la sociedad con una agenda ideológica de desregulación y una agenda comercial tendiente a maximizar las utilidades, con el consiguiente resultado de que tras dos décadas de ataques al Estado y el régimen impositivo y de coqueteo con los mercados no regulados, tenemos capacidad, recursos y legitimidad debilitados para que el sector público desempeñe su papel fundamental. Como señalaremos, esto produjo distorsiones en los resultados de los mercados financieros, comerciales y laborales.

Tercero, en el mercado laboral con frecuencia se adoptaron políticas equivocadas: hubo un retroceso de las normas de trabajo y con respecto a la negociación centralizada que debilitó la igualdad de los salarios, un desplazamiento del trabajo a áreas y empresas no sindicalizadas, un abrupto crecimiento de las formas precarias de trabajo, un debilitamiento de los sindicatos y las negociaciones colectivas y, por supuesto, del papel regulatorio del Estado, una participación cada vez menor de los salarios en los ingresos nacionales y mundiales; todo ello con un profundo impacto en el consumo y la demanda.

Cuarto, la falta de regulación de los mercados financieros que permitió una codicia desmedida y llevó a que las finanzas pasaran de ser un recurso vital para la economía a un parásito, a un precio que ahora pagan los trabajadores, las empresas, los gobiernos y los contribuyentes. Sin embargo, no es que los mercados financieros no están regulados porque alguien olvidó regularlos. La desregulación estuvo impulsada por el activo lobby a favor de los intereses corporativos. La crisis que comenzó en el sector financiero se propagó rápidamente a la economía real, las fábricas, las minas y las oficinas, así como a las sociedades, los hogares de los trabajadores y trabajadoras y al creciente número de desempleados.

Quinto, los encargados de custodiar los estados financieros y la supervisión a nivel mundial, es decir las Instituciones Financieras Internacionales y los bancos centrales de las grandes economías, no hicieron un buen trabajo. Sus recetas con frecuencia tuvieron motivaciones ideológicas o se basaron en falsos razonamientos económicos, contrarios a los objetivos del trabajo decente y económicamente inadecuados. Algunas de las recetas impuestas a los países tras la crisis de Asia del Este en realidad sentaron las bases de la crisis actual. Incluso en la actualidad, el FMI, en medio de la crisis, sigue imponiendo condicionalidades en los préstamos para las

economías en desarrollo y en transición que son de naturaleza procíclica, que reducen los ingresos y limitan el espacio de política para la intervención gubernamental.

Lo que la coyuntura actual puso claramente de manifiesto es que lo que ocurre en los mercados financieros y en otros mercados afecta a los trabajadores, las empresas y el trabajo decente y, por lo tanto, debe ser abordado por la OIT. A pesar de que muchos de estos problemas fueron evidentes durante muchos años y de que nosotros y muchos otros hicimos sonar las campanas de advertencia, no hay espacio para el regocijo ya que el precio del crecimiento económico lo pagaron los trabajadores y, ahora, también son ellos los que pagan los costos de la recesión.

Las causas raíz de la crisis se encuentran en un modelo económico que no se centra en las personas sino que promueve la codicia; tenemos un mercado que debería atender todos nuestros intereses y que, por el contrario, se convirtió en un lugar donde algunos pueden cometer saqueos con impunidad. Ahora nos encontramos en un momento en el que aquellos que generaron esta crisis esperan que los ciudadanos y los trabajadores (las víctimas de la crisis) paguen los platos rotos.

A partir de estas observaciones, identificamos algunas respuestas clave que son imprescindibles:

Es preciso abordar el debilitamiento de la demanda total, tanto el colapso inmediato de la demanda como el debilitamiento a largo plazo o estructural de ésta generado por las políticas equivocadas; es preciso abordar el impacto de la crisis en las personas pobres y en situación de vulnerabilidad. Asimismo, es necesario responder a los déficits normativos y los problemas estructurales del sistema.

Algunas de las medidas que deben adoptarse son claras y constituyeron la base de un consenso alcanzado entre los actores sociales, según lo expuesto en la Declaración de los Funcionarios del Consejo de Administración en noviembre de 2008, a saber:

- El uso de medidas fiscales y salariales para estimular la demanda interna con un rápido efecto y para asegurar el flujo del crédito para consumo, comercio e inversión.
- Extensión de la protección social y las prestaciones por desempleo, incluida la extensión de la seguridad social a todos así como un salario mínimo vital para todos los que se encuentran empleados y con necesidad de contar con dicha protección.
- Apoyo a empresas productivas, rentables y sostenibles junto con una economía social sólida y un sector público viable con el propósito de aumentar al máximo el empleo y el trabajo decente.
- Implementación de los principios fundamentales y los derechos en el trabajo, incluidos la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva.
- Tripartismo y diálogo social, dentro y a través de las fronteras como factor sumamente pertinente para lograr soluciones y cohesión social.
- Mantenimiento de la ayuda para el desarrollo y otorgamiento de líneas de crédito adicionales, así como apoyo a los países de bajos ingresos para amortiguar los efectos de la crisis.

Además de estas áreas de consenso, es necesario abordar otros aspectos de la crisis. Entre éstos se encuentran:

- Políticas económicas equilibradas que incluyan la expansión del consumo interno —en particular en los países con superávit— y políticas de industrialización interna, la satisfacción de las necesidades básicas como motor del crecimiento económico, la combinación del crecimiento con la equidad social y la consideración de los ingresos como una fuente de crecimiento y no simplemente como una consecuencia de éste. Anteriormente en el análisis oímos llamados a un mayor desarrollo de la empresa. El mero hecho de la existencia de una empresa no es lo que genera actividad económica, sino el hecho de que exista demanda, es decir, que los trabajadores tengan salarios decentes que les permitan adquirir bienes y servicios.

- Volver a orientar nuestras economías hacia un camino de desarrollo sostenible y bajas emisiones de carbono, con inversión en trabajos verdes y decentes.
- Reconocer el papel válido, vital y legítimo del Estado en las políticas industriales y sectoriales, así como el uso prudente y equilibrado de las medidas políticas de la industria y el comercio con el fin de desarrollar y apoyar nuevas industrias y empleos.
- Inversión en educación, salud y otros servicios públicos e infraestructura pública para satisfacer necesidades básicas, crear empleos y construir sociedades con igualdad de oportunidades.
- Reestructuración del sector financiero para asegurar que su función de utilidad pública de canalizar el ahorro en inversiones productivas se cumpla de manera confiable y segura.
- Reconocer las brechas importantes en la regulación, particularmente en los mercados financieros, y abordarlas para incluir límites a las actividades de inversión especulativa, ingresos excesivos y sistemas de bonos que favorecen el comportamiento riesgoso e imprudente.
- Asegurar la existencia de un nuevo marco de referencia del mercado laboral basado en los derechos con implementación de las normas del trabajo internacionales, negociación colectiva coordinada y negociación sectorial como instrumentos clave para combinar crecimiento con resultados sociales equitativos, para fortalecer el papel del salario mínimo en el establecimiento de un piso básico para que los trabajadores de todos los países tengan salarios vitales adecuados, y para reconocer la necesidad de globalizar el sistema de relaciones industriales y negociación colectiva con el fin de promover un desarrollo equilibrado y abordar las desigualdades del mundo.
- Asegurar que una nueva arquitectura financiera se complemente con una sólida arquitectura social, con un papel clave de la OIT en la promoción y el diseño de este componente social ausente en las economías abiertas, y que el sistema multilateral en su totalidad promueva el trabajo decente a través de sus áreas de mandato.

Apoyamos el concepto de un Pacto Mundial para el Empleo, elaborado con la plena participación de los sindicatos y las organizaciones de empleadores, que consta de los siguientes componentes fundamentales:

- Paquetes de estímulo basados en inversiones públicas y orientados al empleo.
- Inversiones sociales y verdes para la construcción de una economía sostenible.
- Políticas activas del mercado laboral para ayudar a los trabajadores a buscar oportunidades de trabajo decente.
- Extensión y aumento de las prestaciones de seguridad social y protección social.
- Fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y aplicación de las normas internacionales del trabajo pertinentes, incluidas las normas fundamentales del trabajo, normas laborales de gobernabilidad y un paquete de normas de la crisis económica.
- Evitar la deflación salarial y promover sistemas coordinados de negociación colectiva.
- Promover la coherencia política global para que las instituciones financieras internacionales (incluidos el FMI y el Banco Mundial) y el sistema regulatorio del comercio (la Organización Mundial de Comercio) promuevan la consecución del trabajo decente y éste sea un mandato específico para ellos.
- Establecer un Fondo Global de Empleos administrado por la OIT para permitir políticas globales de empleo anticíclicas pero que también aborde la asimetría de la capacidad fiscal existente entre países en desarrollo y desarrollados.

Creemos que una canasta de normas internacionales del trabajo pertinentes para la crisis debería constituir un elemento central de la respuesta de la OIT y de cada país a la crisis. Una medida inmediata sería que los países consideren la ratificación de este paquete completo.

Muchos países hicieron un llamamiento a responder con medidas no proteccionistas. El peligro de un proteccionismo generalizado es real y la crisis mundial no podrá ser resuelta por todos los países sencillamente limitándose a sus economías nacionales y levantando barreras comerciales generalizadas; no obstante, es importante no llegar al otro extremo de negar que el Estado tiene un papel en la preservación de los puestos de trabajo, usando un conjunto combinado de medidas.

Debemos señalar que los países desarrollados han recurrido al apoyo fiscal de determinados sectores y empresas, una forma de protección financiera. Algunos países en desarrollo, que no pueden financiar un paquete equivalente, podrían tener que usar los mecanismos comerciales previstos en la normativa de la OMC. Siempre que sean bien dirigidos, temporarios y coherentes con las obligaciones internacionales, están y deberían seguir estando permitidos. La capacidad de los países para encontrar soluciones globales a sus problemas sociales y de empleo está atada a la disponibilidad de medios e instrumentos internacionales, desde el Fondo Global de Empleos propuesto hasta un nuevo marco de referencia global para la negociación colectiva.

También se hicieron llamamientos para que los salarios crezcan de acuerdo con la productividad, medido como crecimiento del PBI de los países. Si este llamamiento se hubiese efectuado y cumplido en el pasado, el salario real de los trabajadores sería considerablemente más alto que en la actualidad.

No obstante, no podemos ignorar la historia de crecimiento salarial a una tasa inferior que la del crecimiento de la productividad en los años de auge. Esto se encuentra bien documentado en el Informe Mundial sobre Salarios.

Cabe esperar que el crecimiento de la productividad sea equivalente a cero o negativo en muchos países durante una recesión y, por lo tanto, el pedido de que los salarios tengan un crecimiento acorde a la productividad implicaría recortes del salario real, con consecuencias sociales y económicas perjudiciales.

Aún cuando no haya recortes, el resultado de la fórmula propuesta sería que la menor participación de la fuerza laboral en los ingresos nacionales y mundiales sencillamente quedaría atrincherada en estos niveles más bajos e injustos. Esto tendría efectos perniciosos, continuaría teniendo un impacto negativo en la demanda total y mantendría las raíces estructurales de la crisis.

El trabajo de la OIT debe abordar el problema de cómo reducir los niveles claramente insostenibles de desigualdad y aumentar el ingreso real de los trabajadores y sus familias.

En 2008, un grupo de veinte países, el "G20", se reunió en Washington para analizar las respuestas frente a la crisis económica. La segunda Cumbre del G20 se realizará en Londres en el mes de abril de 2009.

La OIT debe desempeñar un papel importante de cara al futuro; es más representativa que el G20 en cuanto al número de gobiernos miembros; es el único organismo de la ONU con representación directa de la economía real a través de los trabajadores y los empleadores como mandantes; tiene un mandato especial en cuanto al empleo, la justicia social y el trabajo decente y un cuerpo único de instrumentos expresado en forma de normas internacionales del trabajo.

Por lo tanto, proponemos lo siguiente:

1. Recnocimiento de la triple dimensión de la crisis y la necesidad de dar respuesta simultáneamente a estas tres áreas: financiera, económica, y social y del empleo.

2. Las respuestas deben concentrarse tanto en los problemas de corto plazo como en los estructurales, y con ello me refiero a las causas fundamentales de largo plazo y sistémicas de la crisis.

3. La Declaración sobre Justicia Social debería constituir la plataforma política para las respuestas de la OIT frente a la crisis, y el Programa Global de Empleo debería ser el conjunto de herramientas, con

especial referencia a los componentes de política macroeconómica (que se ocupa de la importancia de aumentar la demanda como base para la creación de empleo, la necesidad de abordar el problema de la deuda de los países en desarrollo, el papel importante de la regulación del mercado financiero, teniendo en cuenta también medidas como un impuesto a los flujos financieros) así como a los componentes del desarrollo del comercio y la infraestructura.

4. El Consejo de Administración de la OIT debería emitir una declaración para la reunión del G20 en Londres, que defina la dimensión social y del empleo de la crisis junto con los elementos necesarios para una respuesta, con miras a que éstos formen parte de los resultados de la Cumbre, y que comprenda lo siguiente:

- Utilización de medidas fiscales y salariales para estimular la demanda.
- Protección social.
- Apoyo a empresas públicas y privadas.
- Cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo.
- Diálogo social y tripartismo.
- Mantenimiento de la ayuda para el desarrollo.

5. Solicitar a los estados miembros del G20 que inviten a la OIT a asistir a la Cumbre como participante pleno junto con el resto de los organismos multilaterales.

6. Solicitar a los estados miembros que reconozcan la importancia de la dimensión del empleo y que logren la participación central de los Ministerios de Trabajo y los actores sociales en el diseño de las medidas de estímulo y regulatorias.

7. Solicitar a la OIT que asegure que su Programa y Presupuesto exprese las prioridades de su propio accionar frente a la crisis y que dicho accionar se lleve a cabo en un frente amplio y que su cometido abarque los diferentes aspectos de la crisis, tanto a nivel macro como micro.

8. Apoyar una gran intervención bien definida, bajo la forma del amplio Pacto Mundial para el Empleo propuesto fundado en el trabajo decente y que incluya la ratificación y la plena implementación de las normas internacionales del trabajo, además de evitar los esfuerzos tendientes a hallar soluciones por medio de la deflación del salario.

El papel de una OIT fortalecida es fundamental y deseamos respaldar a la Sede de la OIT y sus oficinas regionales en su respuesta ante a la crisis. Debemos asegurar que al hacerlo, la OIT asegure también que esta respuesta no constituirá simplemente una reagrupamiento del trabajo y los instrumentos existentes, ya que entonces no se trataría de una respuesta adecuada.

La causa de esta crisis no se encuentra en la falta de un programa "Conozca su negocio" (Know your Business), ni en la falta de programas de formación profesional, ni en las limitaciones regulatorias para las PyME; tampoco se encuentra en la productividad limitada de una empresa determinada ni en las deficiencias del empresariado. Por ende, si limitamos nuestras intervenciones exclusivamente a estas áreas, como respuesta nuestra frente a la crisis, no habrá ninguna diferencia. La lista propuesta de intervenciones de la OIT debe ser más compatible con las propuestas que llegan al corazón de la crisis. Dichas intervenciones deben tener un cometido más amplio que meramente los mecanismos técnicos de los diferentes departamentos de la OIT; deben abordar las diferentes dimensiones de la crisis y ser fieles al mandato de la OIT para examinar y analizar "todas las políticas económicas y financieras internacionales a la luz del objetivo fundamental de justicia social".

El Programa y el Presupuesto de la OIT para los próximos dos años deberían reflejar estas prioridades y este sentido de urgencia, además de volver a enfocar el trabajo de este organismo.

El consenso logrado por los mandantes de la OIT en el mes de junio del año pasado con la Declaración sobre Justicia Social y, nuevamente, en noviembre de 2008 con la Declaración de los Funcionarios del Consejo de Administración, demuestra que podemos elaborar soluciones prácticas y pragmáticas.



Pertinencia de los instrumentos de la OIT en el contexto de la crisis

La OIT dispone de un conjunto completo de instrumentos para proteger los derechos de los trabajadores.

A continuación se citan ejemplos de la pertinencia de esos instrumentos en el contexto de la crisis:

- En lo que atañe a la intensificación de las presiones sobre las empresas, el Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), y el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173), y las Recomendaciones que los complementan, establecen medidas constructivas para proteger los salarios de los trabajadores y proceder de manera justa en caso de insolvencia del empleador. En los casos de despido por reducción de plantilla, es importante asegurarse de que la terminación de la relación de trabajo no sea discriminatoria por ninguno de los motivos previstos en los convenios fundamentales. En el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), y la Recomendación núm. 166 se explica cómo se ha de proceder de manera equilibrada para poner fin a la relación de trabajo. Las disposiciones de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social podrían ser particularmente útiles para controlar los efectos de la recesión en las cadenas mundiales de suministro. El instrumento más indicado para proteger la seguridad en el empleo de los trabajadores en situaciones de empleo atípicas es la Recomendación sobre la relación de empleo, 2007 (núm. 198).

- Los instrumentos relativos a los trabajadores migrantes (el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)) también son muy pertinentes, dado que esta categoría de trabajadores es particularmente vulnerable en el contexto de la contracción de los mercados de trabajo.

- El Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94), puede ayudar a garantizar que las inversiones financiadas por los planes públicos de estímulo generen empleos con remuneraciones y condiciones de trabajo decentes. En este contexto, son también relevantes el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) así como el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

- En el contexto de la mejora de la protección social, los ocho convenios fundamentales de la OIT (Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)) pueden servir de guía en los esfuerzos por aliviar la pobreza, conjuntamente con el Convenio núm. 102, y en los esfuerzos por reforzar los sistemas de seguridad social. Los convenios fundamentales son capitales para

asegurar una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico y reducir las desigualdades excesivas, que son uno de los principales factores de la crisis.

- Como se señala en el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), y en la Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 152), así como en la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113), y en la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, los mecanismos y procesos de diálogo social deben formar parte de esta estrategia. Todo mecanismo de diálogo social presupone el respeto de la libertad sindical y en este contexto resulta fundamental el contenido del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135).

- En términos generales, el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), que trata esencialmente de políticas propicias a un empleo pleno, productivo y libremente elegido, puede proporcionar un marco global para las acciones internacionales. Un sistema adecuado de inspección de trabajo, tal como el descripto en los Convenios sobre inspección del trabajo (núms. 81 y 129) representa igualmente una herramienta esencial para prevenir abusos en cuanto a los derechos de los trabajadores.

CRISIS Y FRACASO DE LA GLOBALIZACIÓN

Julio Roberto Gómez Esguerra,
Miembro del Consejo de Administracion de OIT
Vicepresidente CSI
Presidente Adjunto CSA
Secretario General de CGT Colombia

Hacer referencia a la crisis que actualmente padece la Humanidad, es hablar del agotamiento de un modelo económico, político y social que a la luz de la globalización capitalista, tan solo se ha ocupado por la acumulación desmedida de riqueza en muy pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la población mundial, apenas devenga con que sobrevivir, en medio de enormes dificultades, sobre todo en los países denominados en vía de desarrollo, sin que ello quiera decir que la clase trabajadora en el mundo desarrollado tenga resuelta del todo su situación de empleo, seguridad social y su propio futuro, basta constatar la forma en que se tratan de eliminar los sistemas de seguridad social en países como Francia, así como los provocadores intentos por establecer la jornada laboral en 65 horas semanales.

Tal como lo plantea la OIT "La economía se ha visto muy afectada por la crisis financiera, y las perspectivas son las peores desde la gran depresión, los países desarrollados más grandes, y en particular los países donde se origino la crisis, ya han entrado en recesión. Inicialmente los efectos de propagación de la crisis hacia otros países fueron reducidos, ahora por el contrario, varias economías emergentes están siendo duramente castigados, lo que confirma que la hipótesis del desacoplamiento de dichas economías era errónea".

Con base en la anterior afirmación podemos afirmar que los países en vía de desarrollo estamos sufriendo los efectos de una crisis que no fue generada por nosotros, lo cual pone en grave riesgo las Metas del Milenio, mientras que avezados neoliberales tendrán la mejor coartada para echarle la culpa a la crisis, de todas aquellas actividades dejadas de realizaren la perspectiva de resolver los problemas más sentidos por la clase trabajadora y las poblaciones tanto en la región de Las Américas, así como en tros lugares como África y Asia.

Quiénes nos movemos en el escenario laboral, asumiendo la representación de los trabajadores debemos llamar a las cosas por su nombre; esto significa que la crisis no es un invento de nadie en particular, entre otras razones porque ella la estamos viviendo en carne propia, esta crisis se manifiesta en el desempleo, en la inseguridad alimentaria cuyo primer efecto es el hambre. Hay crisis medioambiental y de ausencia de valores y principios, crisis en materia de derechos humanos, así como una crisis de confianza

en las instituciones, en los países, en los partidos políticos, en los sindicatos, en las empresas y hasta en la religión.

En noviembre de 2008 se calculaba un número de desempleados de aproximadamente 190 millones de trabajadores y trabajadoras, sin embargo al final de ese año, el número se incremento en 20 millones, y según la OIT, de persistir la actual situación, en el año 2009 podemos llegar a tener 50 millones de nuevos desempleados, con lo cual 2009 puede terminar con un número igual o superior a 260 millones de desempleados, convirtiéndose el desempleo en una verdadera pandemia, peor que el SIDA o el cáncer.

Como quiera que no hay causa, sin efecto, entonces nos encontramos con que en la mayoría de nuestros países, el hambre se encuentra en el centro de las angustias populares, razón por la cual constatamos que en los países denominados en vías de desarrollo la hambruna carcome a las comunidades más pobres y excluidas, llevándolas a la desnutrición irreversible, a la pérdida de sus cerebros, de sus huesos, de su propia dignidad y a la muerte. El hambre tiene una particularidad es que mata lenta pero inexorablemente.

La crisis nos esta conduciendo a la desertización, a la muerte de nuestros ríos, al aumento de los índices de contaminación, las basuras nos asfixian, nos invaden las ratas, las cucarachas y toda clase de plagas, el agua escasea, los bosques están desapareciendo, los nevados se están desintegrando, mientras que casi todos permanecemos impávidos frente a estos fenómenos, como si la crisis medioambiental fuese tan solo un juego de ciencia ficción, la verdad, si la crisis global nos sirve para hacer un alto en el camino y buscar salidas a esta variable, pues entonces bienvenida.

Enfrentamos una crisis de valores y principios, como en la canción argentina "Cambalache" cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón, ello significa que presuntamente todo se vale en el actual modelo de globalización capitalista, de ahí que los presupuestos locales, municipales, provinciales, departamentales y nacionales, desaparecen como por arte de magia, la política se ha venido convirtiendo no en el arte de gobernar sino más bien de robar, de saquear, de liquidar todo lo público, con gravísimas consecuencias para la humanidad, en ese contexto se ha llevado a cabo una tenebrosa política para privatizar los principales renglones de nuestras economías dejando en las manos del sector privado y liberados a las dictaduras del mercado, el petróleo, el agua, la electricidad, las comunicaciones en su totalidad, la producción de alimentos, la educación, la salud, la seguridad social, en una palabra toda la economía.

Los efectos de la crisis en materia de derechos humanos no tiene antecedentes. Los hechos vergonzosos que se vienen presentando en Palestina, en Irak, en Afganistán, en Guantánamo(pueda ser que el Presidente Obama cumpla con el cierre y la devuelva a Cuba), la crisis humanitaria en muchas partes de África donde las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes pagan el precio más alto, además de lo que ocurre en países como Haití, en Nyamar, Pakistán, etc., son hechos que no pueden pasar desapercibidos en este breve análisis sobre la crisis. Mención especial, nos merece la caótica situación en materia de derechos humanos, en países como Colombia y Guatemala, lugares estos donde particularmente el sindicalismos ha sido sometido a un verdadero genocidio, una sociedad que no respeta los derechos humanos en forma integral, no es una sociedad viable.

Asimismo, se hace evidente el desarrollo de una profunda crisis de credibilidad y de confianza del conjunto de la sociedad al conjunto de las instituciones, con toda razón la gente cree más en un timador que en el propio sistema financiero. Existen personas que confían más en un brujo que en la medicina, los miembros de los partios políticos por sus prácticas clientelistas no gozan de la credibilidad de sus electores, las estadisticas que manejan los gobiernos no gozan de la confianza del pueblo, todo esto nos conduce

a las más profunda desinstitucionalización que socava el Estado Social de Derecho.

Todo nos indica que la clase dirigente en los ordenes nacional e internacional, no tuvo en cuenta los constantes llamados de SS Juan Pablo II cuando advirtió sobre los peligros de la Globalización capitalista, cuando se pronuncio en contra del neoliberalismo, cuando denuncio el carácter inmoral de la deuda externa, e invitó a la banca multilateral de crédito a su condonación, instando a los gobiernos de los países deudores para que renegociaran dicha deuda. Tal vez sea necesario recordar que el movimiento sindical en muchos lugares del mundo, atendiendo el llamado del Papa, insto a los gobiernos, empresarios y a la sociedad sobre la urgencia de poner en práctica modelos alernativos de desarrollo sin haber sido escuchados.

En el marco de esta crisis, la gente común y corriente, la gente como usted o como yo, no deja de preguntarse con toda razón, es evidente la existencia de una crisis, ¿Pero adonde fueron a parar todos los recursos? ¿Quién los tiene? ¿Se pueden esfumar por arte de magia cientos de miles de negocios? ¿En que bancos esta todo el circulante que desapareció del mercado? ¿Dónde están los verdaderos culpables? ¿Quién los juzga?. La verdad no hay respuestas, nadie las quiere asumir, por lo tanto, le corresponde a la sociedad civil organizad seguir presionando para que alguien de una respuesta, al menos coherente.

Lo realmente crítico de esta situación, es que según los entendidos en la materia, es que esto apenas comienza, que lo peor esta por venir y que los efectos serán devastadores; si hasta el momento la situación ha sido caótica, entonces preparémonos para lo peor, aunque en honor a la verdad la clase trabajadora tiene la suficiente claridad en cuanto a que, ni en la bonanza, ni en la crisis nos va bien, entre otras razones porque el común denominador en la sociedad neoliberal, es la privatización de las utilidades, así como la socialización de las perdidas.

Sin embargo, en momentos de crisis, no sobra recordar, insistir, hacer énfasis en propuestas viables que nos saquen del pantano, tales propuestas son:

- La elaboración y puesta en marcha de un modelo alternativo de desarrollo.
- La condonación de la deuda para los países más pobres, evitando el axioma de vivir pagando para morir debiendo.
- Adelantar programas especiales para el establecimiento de trabajo decente par una vida digna.
- Desarrollar una política muy puntual para la puesta en marcha de los Convenios Fundamentales de la OIT.
- Eliminar prácticas inaceptables de tercerización laboral(contratos basura).
- Propiciar la seguridad alimentaria por países.
- Dar los pasos necesarios para el pago de la deuda social y ecológica.

INTERVENCIÓN EN LA OIT: REUNIÓN TRIPARTITA DE ALTO NIVEL SOBRE LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA MUNDIAL

Gerardo Martínez
Miembro del Consejo de Administración de OIT
Vicepresidente, y Presidente del Comitè Regional de la ICM, Internacional de la Construcción y Madera
Secretario de Relaciones Internacionales de la CGTRA, Confederación General de Trabajadores de la R.Argentina
Secretario General de la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la R.Argentina

Sin duda si analizamos la situación global y regional nos encontramos en una situación mas critica que en la ultima reunión del g.20 y si nos detenemos y procesamos la información del director del FMI, que nos dice habrá recesión mundial y decreceremos mas o menos un 0,5 por ciento y días pasados en una conferencia el presidente del banco mundial Robert Zoelick dijo: " lo que comenzó como una crisis financieras se volvió una crisis económica y ahora se esta volviendo una crisis de empleo y dependiendo del grado en una humana y social

Es decir estamos ante la crisis "perfecta" por lo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados y tenemos un solo camino el ser agresivos porque si no somos agresivos seremos regresivos y nosotros aquí en esta casa representamos a la economía real y la cultura del trabajo, decente y con calidad de vida.

En América Latina y el Caribe la fórmula de extensos planes anticiclicos no es aplicable fácilmente porque no se tienen recursos disponibles, no es aconsejable usar la reserva acumulada y no es conveniente adquirirlo mediante endeudamiento caro.

Este escenario se complica además por la caída de la demanda desde el mercado mundial e impacto en las filiales multinacionales presentes. lo cual no es controlable en la región.

Frente a este escenario, resulta importante la defensa y promoción de un nuevo enfoque del multilateralismo, estableciendo normas justas en materia de comercio internacional, el comercio desleal esta generando el aumento de las desigualdades entre y dentro de los países. La oficina debería seguir todos estos procesos y analizar el impacto sobre el empleo de los acuerdos comerciales a nivel bilateral y multilateral de la region, ya que

en las Américas se continúan negociando TLC bajo formato OMC plus.

La propuesta de una reforma de la gobernanza global no seria completa sin hacer referencia a la construcción de una nueva arquitectura financiera y económica mundial. Hay que reformular el pacto de Bretton Woods y al mismo tiempo también un acuerdo en materia de políticas macroeconómicas globales que tengan y tiendan a levantar y sostener la demanda global. Hay que recrear la confianza quebrada como así también lograr una gobernanza social donde el empleo y el trabajo decente sea considerado como elemento central

A nivel nacional, se requieren estados que recuperen su lugar, especialmente en la fijación de mínimos laborales a través de su intervención. Solo la intervención pública puede garantizar la cohesión social, garantizando resultados socialmente equitativos y sostenibles. De lo contrario, el hambre, la pobreza y la desocupación que se vislumbra se transformarán sin duda en masivas movilizaciones de protestas de los sindicatos y quizás en acto de violencia si las respuestas no llegan y por ende lo de costumbre: la represión de las fuerzas publicas será la respuesta de los gobiernos. La región tiene paginas muy duras del conflicto social y sus consecuencias.

Se necesita una política protectora de los regímenes de pensiones y del respeto al derecho de los trabajadoras/es a formar sindicatos libres y a negociar colectivamente la predistribución de beneficios. Por ello, reiteramos la ratificación en los hechos de los Convenios 87 y 98 dado los grandes déficit de trabajo decente en nuestra América.

La OIT debe ir mas allá de los programas nacionales de trabajo decente. En el documento no hay ninguna mención a procesos de integración regional como respuesta de la crisis. El desafío de los planes anticíclicos para nuestra sociedad en las Américas es enfrentar y superar los obstáculos de la factibilidad: por lo tanto el dialogo social constituye un instrumento clave para que tales planes tengan el necesario grado de consenso los pilares del dialogo social son la libertad sindical y la negociación colectiva, la confianza, credibilidad, derecho a la información, así como voluntad y decisión política de los actores para alcanzar acuerdos, constituyen condiciones ineludibles para la efectividad del diálogo social. En este escenario el papel de la OIT es fundamental. Este es un tema prioritario a ser considerado en nuestra región que registra el mayor número de violaciones a los derechos humanos y sindicales

La transformación del sistema de gobernanza global requiere la participación de la OIT. quien debe liderar a nivel internacional una respuesta a la crisis basada en el empleo y la justicia social, por lo que consideramos que la OIT no sólo debe ser invitada sino que debe tener una participación activa en la próxima reunión del grupo G20 que se llevará a cabo en Londres.

LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN LOS SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE LA MADERA Y DE LA SILVICULTURA

Comunicado de la Conducción Mundial
Noviembre 2008

El mundo se ha visto enfrentado a una segunda crisis financiera importante en un siglo, esta vez a una crisis verdaderamente mundial, con la recesión subsiguiente y conducente a un aumento considerable del paro, especialmente en nuestros sectores.

La OIT considera que la crisis financiera actual posiblemente lleve a la pérdida de unos 20 millones de empleos a nivel mundial. Los sectores de la construcción, los bienes inmuebles, los servicios financieros y del automóvil probablemente serán los más afectados. Previsiblemente, los trabajadores migrantes serán los primeros en perder su empleo.

El sector de la construcción, al depender en gran medida de la inversión pública en infraestructura y vivienda, es uno de los más duramente afectados, a lo que siguen las repercusiones de la menor demanda de materiales de construcción y de madera. Los sectores de la construcción, de la silvicultura y de la madera están afectados en todas las regiones por la ralentización y la recesión.

Todavía no puede calcularse la repercusión de la crisis en conjunto para los sindicatos. Sin duda, la crisis someterá al movimiento sindical global y a sus miembros a una gran presión, pero también puede proporcionarnos una oportunidad de establecer un sistema de gobernanza mundial mucho más en los intereses de los trabajadores que el actual.

La crisis también debe utilizarse para intensificar los esfuerzos con el fin de apoyar y fortalecer a los sindicatos del sector de la construcción, la madera y la silvicultura a nivel mundial.

Los Sindicatos Globales, incluyendo a los sindicatos de los sectores de la construcción, los materiales de construcción, la madera y la silvicultura

a) Apelan a los Gobiernos y a las Naciones Unidas para que aseguren que el sector financiero global sea efectivamente regulado en el futuro, a fines de evitar crisis similares en el futuro. Hacen un llamamiento por un nuevo acuerdo "Bretton

Woods"1 que esta vez vaya mucho más allá de las instituciones puramente financieras e involucre totalmente un compromiso con el pleno empleo y la justicia social y el refuerzo de la OIT y con la participación directa del movimiento sindical.

b) Solicitan un nuevo plan de recuperación para estabilizar los mercados de capitales y para presentar programas de inversión de infraestructura, centrados especialmente en el desarrollo de energías alternativas y en medidas de conservación del medio ambiente.

Apoyan el lanzamiento de un "Nuevo Trato Verde", como lo piden el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OIT.

Los sindicatos de la ICM solicitan la inversión masiva en infraestructura para apoyar a los sectores de la construcción y de los materiales de construcción, duramente afectados, y también la creación de las "empleos verdes" en áreas tales como los centros de educación, los hospitales, servicios de agua salubre y sanitarios y el transporte público. Son necesarias medidas para promover la economía de energía mediante la renovación de edificios.

La formación profesional y el reciclaje son esenciales y deberán intensificarse. Son necesarios esfuerzos para encontrar soluciones comunes constructivas entre interlocutores sociales y gobiernos para contrarrestar el descenso en nuestros sectores.



CONFUSIÓN EN LA INDUSTRIA, CRISIS FINANCIERA Y LA FIP

Comité Ejecutivo, noviembre 2008



Es importante que la FIP responda a la amenaza de la crisis financiera que está dando nuevos ímpetus a la tormenta de destrucción que está amenazando con desmantelar nuestra industria. Las amenazas son fáciles de ver:

Los patronos continúan cortando hondo en los departamentos editoriales, llevando a disminuir los empleos y a debilitar los estándares;

El uso de "amateurs' aumenta y el trabajo editorial está siendo encomendado a empresas a menudo fuera del alcance de la organización sindical;

Los mismos sindicatos están eternamente bajo la presión de grupos – particularmente los miembros freelance – que están insatisfechos con el servicio que reciben.

Todo esto está creando presión en los niveles de reclutamiento de los sindicatos, e inevitablemente, sobre su estabilidad financiera. El DJV en Alemania, uno de los afiliados más grandes de la FIP /FEP, dice que está perdiendo miembros a una rata de 1 por ciento mensual.

Mientras la industria está en una gran confusión y los medios tradicionales buscan soluciones de plataforma múltiple a su crisis de caída de ingresos (unir Internet, telefonía, video y texto), es también inevitable que los sindicatos sufran. Para prevenir lo peor de la crisis, ellos deben invertir en estrategias para organizarse más allá de su base tradicional – en particular, alcanzando áreas de empleo atípico y organizando las áreas de "nuevos medios".

Debemos enfrentar una dura realidad: La reestructuración en nuestra industria pone a la FIP en riesgo. Al menos que estemos preparados para tomar pasos radicales ahora, la FIP podría simplemente no sobrevivir a la crisis que enfrentan sus miembros medulares. Ciertamente, algunos de nuestros afiliados ven venir problemas potencialmente serios.

Esta es una crisis diferente a la de comienzos de los '90, cuando pudimos aprovechar las oportunidades para reclutar nuevos miembros y extender nuestras operaciones originales hacia nuevas fuentes de financiamiento.

La información que he reunido para el libro sobre periodismo ético cuenta su propia historia de caída masiva en los mercados periodísticos. En USA 2008 ha sido un año de declive sin precedentes. Los periódicos están cerrando o cambiándose a ediciones online permanentes. Un 3 por ciento de la caída anual en la circulación japonesa se ve como una buena noticia mundial.

La crisis/recesión financiera actual está acelerando el proceso. No cabe duda de que cunado la recesión termine el periodismo estará aun presente – pero en qué forma y manera no está claro. La mejor esperanza es que todos nuestros principales afiliados en el mundo desarrollado salgan indemnes, aunque muchos estarán más pequeños y, quizás preocupantemente, con su capacidad reducida par sostener a la FIP como la conocemos.

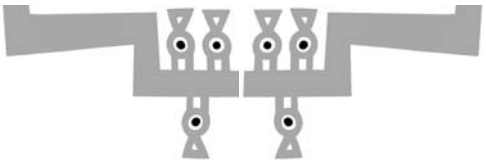
También deberíamos anticipar que la ayuda mundial – incluyendo la ayuda para el desarrollo de los medios- se reducirá, al menos en el corto plazo. Nuestros esfuerzos con el Foro Mundial par el Desarrollo de los Medios son esenciales para tratar de limitar el daño en ésta área.

Todo esto significa que necesitamos una respuesta urgente a corto plazo y repensar a más largo plazo sobre el papel, estructura y actividades de la FIP.

En el corto plazo debemos repensar nuestra estrategia de presupuestos y hacer sondeos desde lo interno de nuestra membresía principal pagadera, en relación a sus expectativas actuales y a corto plazo. Deberíamos anticipar la caída del ingreso principal en un 5-10 por ciento para los próximos dos años.

Las nuevas iniciativas que tratan de colocar la contribución de la FIP en el debate sobre el futuro de la industria –como la FEP , la cual identifica el papel central de los sindicatos y los periodistas en el fortalecimiento de la calidad en los medios, y asociaciones más sociables deben desarrollarse a todos los niveles.

Se urge al Comité Ejecutivo a que instruya al Comité Administrativo para que prepare un análisis completo con recomendaciones para la próxima reunión del Comité Ejecutivo y que prepare, si es necesario, recomendaciones para el próximo congreso sobre el futuro.



COMUNICADO DE LA SECRETARIA GENERAL

Peter Waldorff, noviembre 2008



El 15 de noviembre, los jefes de estado de los países que conforman el G20 se reunirán en Washington para analizar la crisis financiera mundial. En nombre de todos los trabajadores de los servicios públicos, la ISP exige que los gobiernos del G20 tomen medidas específicas y concretas que nos permitan salir de la crisis y resolver las serias anomalías que causaron la situación que hoy vivimos.

La ISP hizo un aporte a la declaración de la Agrupación Global Unions que se presentará a los participantes de la cumbre el 14 de noviembre (ver adjunto). Insto a nuestras afiliadas, especialmente las de países del G20, a que transmitan esta declaración a su Jefe/a de Gobierno, su Ministro/a de Economía y los miembros de sus parlamentos. Asimismo, dicha declaración puede utilizarse en discusiones con las centrales sindicales y con las ONG que luchan codo a codo con nosotros en pos de la justicia social.

Específicamente, la ISP solicita a los gobiernos nacionales que aumenten las inversiones públicas, como medio tanto para evitar una recesión y crear y mejorar el empleo como para (re)construir los servicios públicos y la infraestructura. Tales programas también ofrecerán oportunidades únicas para incorporar las prioridades relativas a la sostenibilidad del medio ambiente, algo difícil de lograr en sectores donde las utilidades a corto plazo son el factor de motivación principal debido a las privatizaciones masivas.

Llamamos a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de proveer servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos y las ciudadanas, ya sea que se trate de agua y saneamiento, salud, energía, educación o transporte público. Éstos son algunos de los servicios públicos esenciales que constituyen la infraestructura que hace que nuestras comunidades sean saludables y justas. Aconsejamos no seguir bajando los impuestos de los que más tienen ni continuar recortando los presupuestos de los servicios públicos.

La declaración de la Agrupación Global Unions recomienda cuatro líneas principales de acción:

- Un extenso plan de recuperación dirigido a estabilizar los mercados de capitales mundiales, sacar a las economías rápidamente de la recesión, reducir los riesgos de una depresión mundial y retomar el camino del trabajo decente.
- Establecer una nueva estructura que rija la economía mundial.
- Asegurar que la nueva estructura tenga instancias y medidas de supervisión eficaces.

Combatir la explosión de la desigualdad en la distribución del ingreso —en todos los órdenes— que esconde esta crisis.

No hay probabilidades de resolver esta crisis en el futuro cercano. Varias economías están entrando en recesión. El desafío que se nos presenta es ver cómo delinear las políticas para el cambio. Si aunamos nuestros esfuerzos —los sindicatos a nivel nacional y local, y la ISP a nivel regional y mundial— tenemos mejores posibilidades de presionar a nuestros gobiernos para que tomen las medidas correctas. Les solicitaré a varios sindicatos que me ayuden a definir el accionar de la ISP. Asimismo, les solicitaré a los Comités Coordinadores Nacionales de la ISP que incluyan este tema en sus agendas y me hagan llegar sus aportes. Juntos, debemos asegurarnos de que nuestros afiliados y afiliadas, nuestras familias y nuestras comunidades no sólo sean escuchadas sino también que se actúe para dar respuesta a sus necesidades.

Extractos del documento Economic Crisis and Public Service, elaborado por David Hall para el Public Services International Research Unit (PSIRU). Diciembre 2008

Compañías de servicios públicos privatizadas

Los valores bursátiles de las empresas privadas de servicios públicos parecen haber caído en la misma proporción que las acciones de otras compañías durante el último año. La recesión también implica que éstas también experimentan caídas en las ventas. Aunque el negocio es relativamente seguro, depende de las decisiones políticas. Además, como ocurre con otras compañías, las empresas de servicios públicos pueden tener problemas para refinanciar sus deudas.

Todos estos problemas pueden verse en Italia y la compañía multinacional italiana de electricidad, Enel. El consumo de energía en Italia cayó 30% en dos meses hasta diciembre de 2008. Una noticia afirmó: "La industria italiana bajó el consumo de electricidad casi un tercio en dos meses en lo que constituyó una fuerte señal de la fuerza de la recesión y un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de centro-derecha de Silvio Berlusconi por restarle importancia a la profundidad de la crisis. Terna, la empresa transportadora de electricidad de la red eléctrica nacional, registró una caída del 30 por ciento en octubre y noviembre".

Enel tiene una deuda de más de €50 mil millones, que afirma poder reducir para fines de 2008 usando ganancias, pero tiene que refinanciar €14 mil millones de deuda para 2010 y probablemente encontrar otros €11 mil millones para comprar a su copropietaria de la española

Endesa. Su capacidad de cumplimiento fue puesta en duda en diciembre debido a la incertidumbre por un decreto del gobierno italiano que pondría un "tope" a las cuentas de servicios públicos.

Aunque las empresas privadas de servicios públicos logren refinanciar sus deudas, desde el punto de vista de sus accionistas representará un considerable gasto adicional para el público. Como observó Martin Wolf (las empresas privadas ya eran una costosa manera de financiar las inversiones en redes; ahora las empresas tienen que pagar una prima aún mayor por encima de

lo que le costaría a los gobiernos. Este costo adicional se trasladará a los consumidores, a través de precios aún más altos, o a los trabajadores (por medio de reducción de costos) o a los gobiernos (a través de subsidios).

Privatizaciones y Asociaciones Público-Privadas (PPP)

Las nacionalizaciones han revertido el modelo de privatizaciones de las décadas anteriores. Además, los países han ido abandonando las privatizaciones propuestas y las asociaciones público-privadas (PPP):

- Suecia ha postergado su programa entero de privatizaciones, principalmente a causa de la caída en los mercados de valores, que ha reducido a la mitad los ingresos que podían preverse por las ventas.
- En EE.UU., el puerto de Portland, que cotiza en bolsa, abandonó los planes de vender un contrato para una terminal de contenedores alegando condiciones difíciles del mercado.
- México, por ejemplo, anunció que continuará con los principales planes de gasto en infraestructura, pero canceló los proyectos que iban a ser financiados por las PPP.

No queda claro si las PPP seguirán utilizándose como un instrumento de inversión en servicios públicos o infraestructura. Mientras los bancos aún están preparados para prestarle a los gobiernos a tasas cada vez más bajas, las tasas de interés que se les cobran a las empresas se han vuelto cada vez más altas. La diferencia entre el costo del dinero para los gobiernos y el costo del dinero para las empresas, (el "margen") ha pasado a ser más alta que nunca. Como consecuencia, esto haría que las PPP se conviertan en una manera muy poco atractiva de financiar las inversiones de capital.

Es posible que las empresas aún deseen obtener las PPP en países de altos ingresos porque se las considera maneras seguras de hacer dinero con el sostén de las garantías del gobierno. Por ejemplo, la federación europea de empleadores, UNICE, publicó un folleto en noviembre de 2008 para promover las PPP. Sin embargo, las empresas internacionales en general se han mostrado reticentes a invertir en los países en desarrollo: hay salida, y no inyección, de capital. Además, las empresas privadas pueden estar menos interesadas si hay competencia real en la licitación de las PPP: cuando Brasil aprobó una nueva ley que estipulaba la licitación competitiva para las inversiones privadas en nuevas instalaciones portuarias, la reacción de las empresas fue reclamar que la ley "alejaría a los inversores porque el proceso se convertiría en demasiado burocrático".

ENFOQUES REGIONALES Y SUBREGIONALES SOBRE LAS AMÉRICAS

CARTA DE SALVADOR

Salvador, Bahía, Brasil
15 diciembre 2008

Nosotros/as, dirigentes/as sindicales de América Latina y el Caribe, reunidos/as en Salvador, Bahía, Brasil, el 15 de diciembre de 2008 en el Encuentro Sindical da América Latina y el Caribe, y la VII Cumbre Sindical del MERCOSUR, ante la realización de la 1era. Cumbre de Presidentes de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo, anotamos la declaración final de la Cumbre de los Pueblos del Sur, y declaramos que:

El movimiento sindical de América Latina y el Caribe, saluda con entusiasmo la realización de las reuniones de Presidentes del MERCOSUR y de la UNASUR y la realización de la I Cumbre Latino Americana y Caribeña, teniendo claro que más que nunca es fundamental la unión e integración de nuestros países, para impedir que nuestra región sea penalizada por una crisis generada y provocada por la administración Bush y que rápidamente tomó una dimensión global:

La sucesión de crisis mundiales que hemos vivido en un corto período de dos años – energética, alimentaria, climática – y a la que se le agrega la crisis financiera actual, con sus perspectivas de recesión en los países ricos y sus impactos en la mayoría de las naciones en desarrollo, coexiste con la perspectiva de cambios geopolíticos en la región que ponen de relieve un nuevo momento y peso relativo de América Latina y el Caribe en el concierto mundial, hecho que se expresa políticamente por la realización de ésta Cumbre de Presidentes en Bahía.

Esta última crisis del capitalismo es el resultado de las políticas de liberalización financiera y comercial impuestas a todos los gobiernos en las últimas décadas del siglo XX. Las políticas de desregulación y de la auto-regulación del mercado están en la base de la crisis financiera actual. Una política que resultó en un proceso de financierización sin límites, que ya causó una perdida de miles de millones de dólares y viene provocando millones de despidos en varias regiones del planeta, y que podrá generar, según calculos de la OIT, unos 20 millones en todo el mundo. No hay duda de que estamos frente a una crisis estructural, de un sistema que explota a los y las trabajadoras, que concentra riquezas y que condena a millones al hambre y la miseria.

Ante el número de instituciones y empresas involucradas, la sumatoria de los valores en juego y del riesgo de propagación rápida de los efectos de la crisis sobre las inversiones, la producción y del empleo, los gobiernos de los países desarrollados y en

desarrollo han adoptado un conjunto de acciones, como la aplicación de mecanismos de socorro a las instituciones afectadas, el aumento de liquidez de la economía y las alteraciones en la tasa básica de interés y las tasas de cambio, etc. Pero estas medidas no están siendo acompañadas de contrapartidas claras y, de esta forma, se convierten en simple transferencia de dinero público para la especulación.

En nuestro continente los efectos ya son visibles – despidos en varias empresas, vacaciones colectivas, reducción de la producción. Defendemos que los estados nacionales de los países de América Latina y Caribe y organismos que administran los procesos de integración – MERCOSUR, UNASUR - intervengan activamente en este proceso y hagan valer el papel del Estado en el gerenciamiento del mercado y la promoción de la producción.

Defendemos que los gobiernos adopten medidas urgentes que garanticen la normalización de la producción, del comercio y de los niveles de inversión. Pero tenemos absoluta claridad de que la intervención de los Estados no puede significar la "socialización de las pérdidas" del sector financiero en la sociedad en general, porque en el período de crecimiento reciente, lo que se percibió fue la "privatización de las ganancias" expresada en los gigantescos lucros anuales de los bancos y de las empresas transnacionales.

La garantia del Trabajo Decente, que implica el ejercicio pleno de los derechos sindicales, el combate al cualquier tipo de discriminación en el trabajo, el dialogo social, la protección social y la protección del salario, debe ser un referente obligatorio para los gobiernos de la región al momento de adoptar salidas a la crisis.

Fue con mucha lucha que logramos mejorar en buena parte de nuestros países los niveles salariales, los beneficios sociales y lentamente reducir la precarización de los empleos. No podemos aceptar que esos derechos sean desconocidos en nombre del aumento de la competitividad para que las empresas recuperen sus niveles de exportación.

Frente a este cuadro el movimiento sindical concentrará sus esfuerzos para apoyar la profundización de la integración de nuestras economías y principalemente de nuestra capacidad productiva a favor de los pueblos. El Encuentro Sindical de América Latina y Caribe, consciente de la ilegalidad y de injusticia de la medida unilateralmente impuesta por los Estados Unidos de América, condena firmemente el mantenimiento del bloqueo a Cuba y llama al Presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, a poner fin inmediato a esa ilegalidad.

Consideramos fundamental que la unidad y la integración política entre los países de América Latina y Caribe sea la base de todas las decisiones de las reuniones de los Presidentes y Jefes de Estado los días 16 y 17 de diciembre, en Sauipe, y que principalmente tengan claro que las medidas a ser tomadas tienen que estar acompañadas de contrapartidas de las empresas com la región y de los trabajadores y trabajadoras.

MÁS QUE NUNCA ESTÁ CLARO QUE PARA NUESTROS PAÍSES NO EXISTEN SALIDAS AISILADAS Y POR ESO REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL.

Además, tomamos algunas decisiones que presentaremos a todos los Jefes de Estado y al conjunto del movimiento sindical de nuestro continente, las cuales se basan en el princípio del respeto a la dignidad humana y plena libertad.

- Realizaremos el máximo esfuerzo para que a pesar de la crisis surjan oportunidades para la mejora de la calidad de vida y la plena vigencia de los derechos humanos los máximos esfuerzos para que a pesar de la crisis surjan oportunidades para la mejoría de la calidad de vida y el pleno cumplimiento de los derechos humanos, para lo cual es imprescindible la paz del mundo y una mejor distribución de la riqueza.
- Reivindicamos que los Estados asuman su rol conductor, no de salvación del capi-

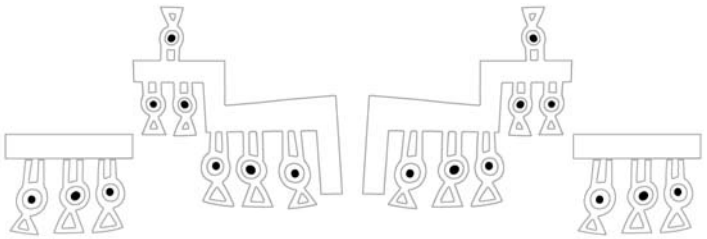
tal financiero especulativo, pero sí desarrollando inversiones en áreas productivas, sociales y servicios públicos. Defendemos que los gobiernos asuman la necesidad de establecer fuertes medidas de protección social como fundamento de las decisiones que tengan que adoptar. Nuevamente colocamos las medidas contenidas en la Plataforma Laboral de las Americas, que expresan las propuestas consensuadas por el movimiento sindical para la superación del neoliberalismo y la promoción del desarrollo sostenible en nuestros países.

- Defendemos el rol estratégico de las empresas estatales en todos los países, y mantendremos nuestra lucha contra la privatización de los servicios públicos.
- Lucharemos para defender los empleos, los salarios y los derechos de los trabajadores. Defendemos la ampliación de las políticas de generación de empleo en el sector privado y en el sector público, especialmente para los segmentos mas vulnerábles, por ejemplo las mujeres, la juventud y la poblacion negra.
- Reivindicamos la Reforma Agrária en nuestros países y la implementacion de programas especiales de generacion de empleo y renta de la agricultura a partir del fortalecimento de la Agricultura familiar y garantia de credito y precios mínimos.
- Demandamos el derecho del movimiento sindical y de otros sectores organizados de la sociedad civil que expresan las necesidades de la población de nuestros países, de participar y ser consultados sobre la construcción de las salidas a estas crisis, y solicitamos la implementación de mecanismos concretos que viabilicen esta participación a nivel latinoamericano y caribeño.
- Reafirmamos que cada vez más el movimiento sindical tiene que profundizar su unidad y tener un activo papel en todo este proceso.

En este sentido, aprobamos realizar UN DÍA CONTINENTAL DE MOVILIZACIÓN Y LUCHA para reivindicar la defensa de nuestros derechos y exigir la adopción de políticas superadoras del neoliberalismo y en favor del desarrollo productivo com justicia social, protección del médio ambiente y plena democracia.

Divulgaremos en todos los países latinoamericanos nuestras propuestas y convocaremos a todas las centrales sindicales y sindicatos a participar de los actos, movilizaciones, marchas y concentraciones publicas en defensa de nuestras reivindicaciones.

LA CLASE TRABAJADORA NO PAGARÁ LA CRISIS Y NO ACEPTAREMOS RETROCESOS. NO ACEPTAMOS LA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS, NO ACEPTAMOS LA REDUCCIÓN DE LOS DERECHOS Y LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO. EXIGIMOS LA GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS Y DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA.



DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO

Argentina: CTA, CGTRA, Brasil: CTB, CUT, UGT, Forca Sindical; Paraguay: CUTA, CUT; Perú: CGTP; Cuba: CTC; Venezuela: UNT; Italia: CGIL; España/Galicia: CIG; Portugal: CGTP; Francia: CGT; FSM; CSA; Uruguay: OLSUR y PIT CNT

27 noviembre 2008

Las centrales sindicales nacionales, regionales y mundiales reunidas en Montevideo, Uruguay en el día de la fecha, en el marco del X° Congreso del PIT CNT "Compañeros José D´Elía y Hugo Cores", insertados en una coyuntura mundial actual caracterizada por una grave crisis financiera internacional declaran:

1. Que el movimiento sindical centrará todos sus esfuerzos, para que los efectos de esta nueva crisis económica – financiera a escala mundial, no tenga como destinatarios/as a los trabajadores/as, ni a los niños/as, ni a los pueblos.

2. Que realizaremos los máximos esfuerzos, para que en medio de la crisis, surjan las oportunidades para una mejor calidad de vida y la plena vigencia de los derechos humanos, para lo cual es imprescindible la PAZ en el mundo y una mejor distribución de la riqueza.

3. La plena convicción que no existen salidas aisladas. Trabajaremos para que los pueblos del mundo, nos unamos para enfrentarlas juntos y potenciar soluciones que nos contemplen por igual.

4. Lucharemos para que se defiendan los trabajos, los salarios y los derechos laborales. Blindaje social éste, que debe ser la prioridad de nuestros gobiernos, y el eje de nuestro accionar.

5. Reclamaremos para que los Estados asuman su rol de conductor, no sólo de salvataje del capital financiero especulativo, desarrollando inversiones en áreas productivas, sociales y servicios públicos.

6. La necesidad permanente de profundizar aún más la unidad de los/as trabajadores/as de todo el mundo en defensa de sus derechos, máxime a esta hora, avanzando hacia sociedades libres, democráticas, más justas, más solidarias, con mayor igualdad y fraternidad.

AFLCIO, American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations
CLC, Canadian Labour Congress

UNA NUEVA AGENDA DE PROSPERIDAD PARA NORTEAMERICA

Comunicación al Presidente Barack Obama y Primer Ministro Stepeh Harper
Kenneth V. Georgetti, Presidente CLC
John Sweeney, Presidente, AFL-CIO
18 febrero 2009

Estimados Presidente Obama y Primer Ministro Harper,

El 19 de febrero ustedes se reunirán para discutir muchos asuntos críticamente importantes. No hay duda de que entre esos asuntos estará la necesidad de trabajar juntos los dos países para dirigir la actual crisis económica y, en el mediano y largo plazo, trabajar en cooperación a fin de sentar las bases de una más próspera Norte América. A nombre de mas de 12.2 millones de miembros sindicalistas de los Estados Unidos y Canadá, nosotros queremos tomar esta oportunidad para desarrollar unos pocos temas importantes que esperamos ustedes consideren en estos y en futuros encuentros binacionales (y trinacionales).

Nosotros creemos que hay un potencial para la gente trabajadora de Norte América, individualmente y en conjunto, para fortalecer los lazos comunes y participar en la prosperidad económica ampliamente compartida. Para hacer esto, nosotros necesitamos conducir el empeoramiento de la crisis económica de una manera coordinada, abrir y arreglar las fallas del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLC), y cambiar una serie de políticas complementarias relativas a la energía, el cambio climático y empleos verdes, política industrial, migración y desarrollo.

Es importante destacar que estos problemas deben abordarse a través de un proceso abierto y participativo. Por mucho tiempo, la gente trabajadora en ambos países ha sido excluida de los procesos de toma de decisiones que fundamentalmente han afectado sus vidas, esas decisiones han sido tomadas por elites en los cuartos traseros del poder. Nosotros pedimos a ambos gobiernos que se comprometan a tratar estos asuntos a través de consultas actuales que sean abiertas, inclusivas y totalmente transparentes. Esta es la única manera de que se tenga una visión progresiva de Norte América.

1. Respuesta Coordinada a la Actual Crisis Económica

Cada día, vemos más hogares excluidos y un catastrófico numero de trabajadores uniéndose a las filas del desempleo a través de Norte América. La recesión probablemente sea larga y abordar sus causas profundas no será ni fácil ni rápido. Una parte de la respuesta será nacional, ya que

cada gobierno tomará las medidas para hacer frente a la crisis económica, tales como promulgar un paquete de estímulo fiscal sustancial para atender las prioridades nacionales, incluyendo la reconstrucción de nuestra infraestructura y hacer una transición a fuentes renovables de energía limpia, re-regulación del sector financiero, pasando por una reforma a la ley laboral, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la desigualdad y resolución de la prolongada crisis de vivienda. Sin embargo, la crisis económica mundial no puede ser solucionada sin una coordinación de la política económica internacional concertada. Los Estados Unidos, Canadá y México pueden jugar un importante papel en esto.

Primero, el gobierno canadiense debe moverse rápido para adoptar un paquete de fuertes estímulos económicos para restaurar su economía. El gobierno de Estados Unidos debe asegurarse de que el recientemente aprobado paquete de recuperación económica es implementado de manera rápida y eficaz, con máxima transparencia y responsabilidad. Cada país debe tomar todas las medidas necesarias para incrementar la demanda de cara al empeoramiento de la recesión. La actual crisis también brinda una oportunidad de reevaluar las doctrinas económicas, acuerdos e instituciones. La comunidad internacional debe trabajar para desarrollar instituciones e instrumentos que incrementen la estabilidad e igualdad en el sistema financiero mundial. También hay una urgente necesidad de reformas en el gobierno de las instituciones económicas, más allá de la insuficiencia de las medidas tomadas hasta ahora por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las instituciones internacionales deben también abandonar las fallidas ortodoxias del pasado, que han dado lugar a un crecimiento lento y una excesiva volatilidad en muchos países en desarrollo. También hay necesidad de una cooperación mundial en el establecimiento de normas reguladoras y políticas de coordinación, incluyendo la resolución de graves desequilibrios de tipo de cambio.

Tenemos la esperanza de que trabajaremos juntos ahora para hacer frente a estos críticos asuntos transnacionales que son cruciales para la recuperación mundial. La próxima Cumbre del G20 en abril y la Cumbre del G8 en julio representan momentos clave para avanzar en esta agenda. De este modo instamos a que las respuestas políticas a la crisis sean desarrolladas con la inclusión y la participación de la sociedad civil, que se ha preocupado por largo tiempo sobre las verdaderas políticas que han llevado a la crisis actual.

2. Renegociación del TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue vendido con la promesa de que traería beneficios netos con más y mejores empleos y un rápido crecimiento. Si bien el TLC tuvo éxito en aumentar el comercio y los flujos de inversión, no (y no podría) ha creado mas puestos de trabajo relacionados con el comercio en los tres países y esos empleos que se crearon fueron a menudo menos estables, con pagos reducidos y menos beneficios, que la gran cantidad de trabajos en la manufactura que fueron desplazados. La desigualdad del ingreso aumentó en los tres países. Hay, por supuesto, muchas razones de estos resultados; sin embargo, nosotros creemos que las empresas comerciales y las políticas de liberalización de las inversiones que vinieron con el TLCAN son contribuyentes importantes en esto.

Abajo están nuestras preocupaciones centrales con el TLCAN:

Acuerdos Paralelos sobre Trabajo y Medio Ambiente: Si los beneficios del comercio internacional deben ser compartidos de manera justa, los trabajadores deben de ser capaces de ejercitar completamente sus derechos laborales fundamentales. Sin embargo, a los trabajadores en cada país se les han negado de manera sistemática sus derechos básicos por años, teniendo como resultado un largo estancamiento de salarios y el incremento de la desigualdad de los ingresos. Esta tendencia ha afectado

a todos los trabajadores, pero ha tenido un impacto desproporcionado en minorías y en comunidades de inmigrantes en ambos países. La amenaza sobre la posible salida planteada por los patrones en Estados Unidos y Canadá (y ahora de México) ha limitado más la capacidad de los trabajadores de demandar mejores salarios y condiciones de trabajo en consonancia con el crecimiento de la productividad. El Acuerdo de Cooperación Laboral con América del Norte (ACLAN) fue implementado para solucionar las preocupaciones sobre derechos laborales en una base tri-nacional. Sin embargo, ha sido un mecanismo ineficaz para mejorar los derechos laborales y los estándares en América del Norte. De hecho, bajo el TLCAN, los derechos laborales nunca han sido tratados de manera equitativa con respecto a los numerosos y amplios derechos concedidos a los inversionistas.

Similarmente, el acuerdo paralelo sobre medio ambiente estableció la Comisión de América del Norte para la Cooperación Ambiental (NACEC, por sus siglas en inglés) para manejar, sobre una base de cooperación, asuntos que pueden arreglarse entre los tres países con respecto al mejoramiento ambiental y otras materias ambientales. La NACEC estaba también encargada de administrar un proceso por el cual los ciudadanos pueden solicitar informes oficiales sobre si un país está o no está cumpliendo con sus leyes sobre medio ambiente. El establecimiento de la NACEC fue un paso en la dirección correcta. Sin embargo, los esfuerzos a lo largo de los años por utilizar la NACEC han demostrado que todavía tiene que crecer en legitimidad o ejercer una mayor influencia en la voluntad de cada nación para proteger el medio ambiente. Simplemente no tiene el poder legal o político para enfrentar los principales asuntos ambientales del tratado de comercio.

Si el TLCAN quiere ser eficaz con respecto a la promoción y cumplimiento de los derechos laborales o la protección del medio ambiente, deben hacerse varias modificaciones sustanciales. Primero, las obligaciones de estos acuerdos deben ser reforzadas mas allá de las vagas obligaciones que actualmente existen. Con respecto al trabajo, la obligación común debe ser la adhesión a los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como una eficaz aplicación de las leyes laborales nacionales. Segundo, los procedimientos para la resolución de conflictos deben ser revisados a fin de que una controversia relativa a la violación de alguna obligación de cualquiera de los Acuerdos ya sea del laboral o del ambiental sea resuelta total, justa y expeditamente, con los mismos recursos que cualquier otro conflicto relacionado con el comercio. Finalmente, cada gobierno debe demostrar la voluntad política de actuar de acuerdo a los resultados y recomendaciones que resulten del proceso de solución de conflicto. La falla en actuar de acuerdo a esas recomendaciones debe estar sujeta a inmediatas y disuasivas multas o sanciones.

Inversión: el TLCAN incluye un mecanismo para resolución de disputas inversionista-a-estado profundamente viciado, así como demasiados derechos de inversión excesivamente amplios. Nosotros creemos que los acuerdos de comercio deben basarse en la resolución de conflictos gobierno-a-gobierno en el caso de conflictos sobre inversión, como es el proceso de todos los demás compromisos. Además, la definición de una inversión compensable es demasiado amplia, la mayoría de los tipos de disputas sobre una inversión por las cuales un gobierno puede ser demandado bajo el TLCAN por inversionistas extranjeros no son válidas bajo las leyes de EEUU o Canadá. Finalmente, los paneles de arbitraje han interpretado las prohibiciones del TLCAN como expropiaciones "indirectas" y "medidas equivalentes a" la expropiación para dar injustificadas y excesivas protecciones a los inversionistas extranjeros. La regulación gubernamental que esta relacionada con objetivos políticos legítimos, como la protección del medio ambiente, salud y seguridad publica, protecciones al consumidor, la regulación de prácticas anti-competitivas, y la protección de

derechos humanos y laborales no debe estar sujeta a impugnación en virtud del acuerdo.

Energía: el TLCAN impone serias restricciones al establecimiento de un futuro energético seguro para América del Norte. La cooperación de América del Norte en asuntos energéticos debe ser guiada por principios de sustentabilidad (para evitar una catástrofe climática y salvaguardar las reservas energéticas para las futuras generaciones), solidaridad (para que el comercio y la inversión en materia energética sirvan a las necesidades de las personas y no de las corporaciones), y soberanía (en específico con respecto a los derechos de las comunidades indígenas y las prioridades de desarrollo nacional). Las previsiones energéticas del TLCAN han sido un obstáculo para lograr estos objetivos y deben ser revisadas cuidadosamente.

Servicios: el TLCAN restringe la capacidad de los signatarios de regular los servicios –incluso los servicios públicos. La creciente presión para desregular y privatizar los servicios podría aumentar el costo y reducir la calidad de los servicios básicos tales como salud y educación. El TLCAN todavía no contiene una amplia y explicita exclusión de importantes servicios públicos. Los servicios públicos sobre una base comercial o en competencia con proveedores privados son por lo general sujetos a las normas comerciales, a menos que expresamente estén exentos. Nosotros debemos asegurar que los servicios públicos permanezcan en manos del sector público, y que tales servicios sean provistos por empleados públicos. Más aún, en este tiempo de crisis económica, el sector público puede y debe jugar un importante papel en la renovación económica de nuestros países.

Agricultura: Hasta el reciente incremento especulativo en los precios, los agricultores de los tres países han visto los ingresos agrarios en constante declive, y mas agricultores han sido obligados a trabajar al menos un tiempo fuera de sus granjas para poder apoyar a sus familias y mantener su tierra. Los agricultores en México fueron particularmente golpeados por cuestiones nacionales, tales como el incremento en la concentración de la tierra y el decremento del crédito rural y la asistencia técnica, combinados con las importaciones de granos artificialmente baratos debido al TLCAN, lo que ha llevado a una crisis rural que ha forzado a entre uno y dos millones de trabajadores a salir de sus tierras. La manufactura, que se suponía serviría como motor de crecimiento, falló en producir los empleos necesarios para absorber a los desplazados del ámbito rural y a los nuevos trabajadores que se incorporan a la fuerza de trabajo, llevando a México a exportar su fuerza de trabajo a una tasa aun más dramática que antes del TLCAN. Los resultados de un pobre desempeño en la manufactura y en la agricultura han sido que medio millón de personas han huido de México cada año en busca de una vida mejor. Muchos otros migran a las ciudades mexicanas para trabajar en la economía informal sin beneficios o seguridad laboral. Pedimos a ustedes que desarrollen políticas nacionales y regionales complementarias para asegurar que los agricultores son compensados adecuadamente por su trabajo y liberados de la volatilidad de los precios que han experimentado recientemente, y que a los consumidores se les pueda garantizar un suministro seguro y fiable de alimentos a precios mas estables.

3. Políticas Complementarias

Cambio Climático y Empleos Verdes: Nosotros creemos que podemos tener un planeta fuerte, saludable, económico, con buenos trabajos y limpio. Nuestra respuesta al calentamiento global esta indisolublemente relacionada con los intereses económicos y ambientales de Norte América. El desarrollo y el despliegue de tecnologías y la infraestructura necesaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero también pueden conducir a un renacimiento en la industria manufacturera y en el comercio.

Si son apoyadas por efectivas políticas sectoriales de comercio, las inversiones públicas y privadas nacionales en infraes-

tructura energética sustentable pueden ser estructuradas para crear buenos empleos y asegurar la estabilidad de los precios de energía. Para alcanzar esto, cada país tendrá que invertir domésticamente para desarrollar una estrategia manufacturera nacional que establezca las bases de una nueva economía de empleos verdes. Esto significa promover la eficiencia energética, aumentar las inversiones en ferrocarril e infraestructura de transporte masivo, desarrollo de fuentes de energía renovable, ampliar estándares justos de eficiencia de combustible e introducir fijación de precios de carbón para promover la reducción de emisiones. Además, urgimos a trabajar con sindicatos y patrones para establecer una justa transición hacia una economía verde. Para apoyar la sustentabilidad global y metas ambientales, los gobiernos de Norte América deben unirse a la comunidad mundial para negociar e implementar planes de acción para alcanzar los objetivos para después de 2012 para las emisiones de gases invernadero.

Política Industrial en Sectores Integrados: Reconstruir nuestra base industrial es esencial para mantener nuestros estándares de vida. Como países de altos salarios en un mundo globalizado, nosotros debemos restaurar nuestra competitividad a través del desarrollo de estrategias industriales nacionales centradas en la innovación. Esto significa elevar el nivel de la inversión pública y privada, el aprovechamiento de distintivos tecnológicos y de la capacidad de organización y el desarrollo de las capacidades de nuestros trabajadores. Además, nosotros necesitamos usar el poder de compra del gobierno y atender la política social para renovar nuestras economías locales, creando las condiciones necesarias para una amplia inclusión social. No podemos seguir pretendiendo que simplemente cortando impuestos y desregulando una industria después de la otra, se constituya una estrategia manufacturera racional.

Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, de que en muchas industrias claves, la manufactura se ha convertido en mucho menos una tarea nacional que una tarea regional. Las industrias automotriz y del acero, por ejemplo, están entre las más integradas industrias en Norteamérica –un fenómeno de mucho tiempo antes del TLCAN y que solo se aceleró después de su implementación. Por supuesto, cada país debe ser responsable de una estrategia nacional en estas ya integradas industrias, sin embargo, debemos pensar regionalmente para permitir que la competitividad a largo plazo de estas industrias mejore ante el mercado mundial. Esto requerirá cooperación, tanto entre los gobiernos como entre los gobiernos, el trabajo y los patrones, para mejorar la productividad, mientras se respetan los derechos laborales y se mejoran los salarios. Canadá y los Estados Unidos tienen un interés económico compartido en la reducción de nuestros alarmantes déficits comerciales en los bienes manufacturados, particularmente con Asia.

Migración: La falla de las políticas neoliberales en la creación de empleos decentes en la economía mexicana bajo el TLCAN ha significado que muchos trabajadores desplazados y los de reciente incorporación a la fuerza de trabajo han sido forzados a una desesperada búsqueda para encontrar un empleo en otro lugar. En los EEUU y Canadá, los patrones, con acceso a una grande, vulnerable y desprotegida fuerza de trabajo de trabajadores migrantes temporales e indocumentados, han minado a todos los trabajadores al no brindar los derechos y protecciones laborales a todos. Nosotros creemos que todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, deben disfrutar los mismos derechos laborales. Los gobiernos en los tres países deben intervenir enérgicamente para evitar el robo de los salarios, terminar los ataques xenofóbicos, y detener los abusos de los reclutadores de trabajadores. Nosotros también apoyamos un ajuste inclusivo, práctico y rápido del estatus del programa, que nosotros creemos tendrá el efecto de incrementar los estándares laborales para todos los trabajadores. Finalmente, les pe-

dimos a ustedes revisen la seguridad y las acciones en la frontera que han limitado las libertades civiles.

Desarrollo: Finalmente, el desarrollo económico es una parte importante de la ecuación para una más próspera Norteamérica. Juntos, nosotros necesitamos ayudar a estimular el crecimiento económico en México y en áreas marginadas dentro de los EEUU y Canadá para asegurar que los beneficios son ampliamente compartidos. Dentro de la Unión Europea, los fondos estructurales y de cohesión proporcionaron una transferencia substancial de los fondos de inversión para generar el crecimiento del trabajo en regiones menos desarrolladas de Europa. Un fondo de inversión similar para México podría brindarse dentro del contexto de un TLCAN renegociado. Sin embargo, a cambio, México podría acceder a cambios en las leyes e instituciones que permitieran el incremento del salario de los trabajadores mexicanos mientras su economía crece. Esto incluye garantías a los sindicatos libres, salarios mínimos obligatorios, y un incremento en los costos de salud, educación y otros gastos sociales.

Nos damos cuenta de que esto es una lista muy ambiciosa. Estamos trabajando juntos para desarrollar prescripciones de políticas concretas en cada una de estas áreas, y esperamos mantener un diálogo en estos asuntos. Esperamos que los gobiernos de EEUU, Canadá y México puedan hacer progresos en esta agenda.

CRISIS SOCIAL Y FINANCIERA. OPCIONES DESDE EL MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR

Julio Franco Pérez, Secretaría Técnica

Los desequilibrios en la economía internacional que estallaron en el trimestre final del año pasado han colocado la palabra "crisis" en los titulares de todos los medios de prensa, en los discursos de todos los políticos y autoridades públicas y en la preocupación de todas las organizaciones y sectores sociales sin excepción. Para muchas generaciones, por primera vez desde la década del 30, existe conciencia que estamos en "crisis" económica.

Pero, la mayoría de esos mismos medios de comunicación y círculos políticos y sociales restringen la naturaleza, ámbito y alcances de la crisis a sólo sus dimensiones vinculadas a los grandes circuitos económicos, financieros y de consumo. Pero existe una crisis permanente que afecta a los sectores desprotegidos y excluidos de la economía, las finanzas y los mercados mundiales, es decir a la mayor parte de la población mundial.

Es necesario denunciar esta interesada visión parcial que oculta el estado de crisis que asola de manera permanente a las poblaciones pobres. Es urgente rechazar las "soluciones" que tienen como única prioridad tornar en azul las cuentas de los banqueros y especuladores que generaron esta crisis. Hay que optar por soluciones verdaderas que rescaten a lo pobres del hambre, reduzcan el desempleo y subempleo y permitan a los excluidos del mundo recuperar su dignidad.

Las crisis del imperio

Según las diversas fuentes, la actual crisis ha generado pérdidas en el sistema financiero mundial en el orden de 2 billones de dólares[1], en tanto que la suma de los programas de "salvataje", "rescate" o denominaciones similares en curso de aplicación por el anterior y el actual gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) y las demás economías desarrolladas del mundo superan los 3 billones.

No obstante, se teme que los capitales directamente en riesgo[2] en esta crisis involucren cuando menos 1 billón adicionales y que los recursos que deberán comprometer los futuros programas gubernamentales de esas mismas economías, esta vez para

[1] En este artículo se asume la siguiente equivalencia. 1 billón = 1´000,000´000,000.
[2] Indirectamente, los recursos comprometidos pueden ser diez veces mayores por la formación de reservas y la aplicación de coeficientes técnicos que inmovilizan recursos en proporciones diez veces mayores a los que se encuentran en riesgo.

ayudar no solo a los grandes bancos y empresas de capitales sino también a las grandes corporaciones industriales del mundo, deberían incrementarse cuando menos en similar magnitud.

Pero, esas cifras palidecen frente a la magnitud de otras brechas en especial en la economía de los EE.UU. En efecto, el déficit presupuestal alcanzaría cuando menos 1.2 billones el año 2009, en tanto que su deuda pública directa e indirecta casi duplica a su PBI[3] y la deuda privada también lo supera. Más de la mitad de esa deuda pública está en manos de inversionistas extranjeros.

El total del mercado de hipotecas en los EE.UU. es 10 veces más que el monto comprometido en las hipotecas subprime. Nadie puede asegurar en que medida o proporción el mercado hipotecario, el sistema financiero y el mercado de capitales en general han sido contaminados por las hipotecas de alto riesgo y los derivados y títulos sin respaldo que se generaron a partir de ellas. La suma de todos estos valores equivalen a tres veces el PBI mencionado.

Por si fuera poco, en los próximos diez años se pensionarán alrededor de 80 millones de personas, demandando un egreso fiscal varias veces superior a su PBI, en tanto que la proporción de trabajadores aportantes respecto a los pensionados sería apenas de 2 a 1. Adicionalmente, la economía de los EE.UU. está generando, por ahora, más de medio millón de desempleados cada mes.

La nación más poderosa de la tierra, el centro económico y financiero mundial, afronta pues problemas estructurales graves y se aproxima a una situación de insolvencia y de inestabilidad social.

Pero, una crisis de deuda pública e insolvencia de los EE.UU. impactaría gravemente en los valores monetarios en dólares de todos los países del mundo, colapsaría el comercio internacional y multiplicaría la deuda externa en especial de los países de menor desarrollo. Los EE.UU. sigue siendo el motor económico, financiero, productivo y de la demanda mundial, y junto con sus aliados controla las finanzas internacionales y los mercados de capitales y de bienes en todo el orbe, imponiéndo sus condiciones de financiamiento, sus términos de intercambio y trasladando a otros los efectos de sus crisis.

¿Quiénes sufrirán las mayores consecuencias? Los más pobres, que lo serán más aún acompañados por nuevos sectores empobrecidos.

La realidad de la crisis social estructural

Con todo lo pavoroso que es, el escenario dibujado en los párrafos previos es un retrato incompleto de la crisis, no refleja su verdadera magnitud y consecuencias devastadoras y no identifica la situación dramática a la que han sido arrojados los sectores sociales más afectados e indefensos frente a la crisis.

Las agencias especializadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU)[4] estiman que alrededor de 100 millones de personas se ubicarían en situación de pobreza extrema en el mundo.

En la mayoría de regiones del planeta la mitad de la población en edad de trabajar carece de empleo. En todo los caso la situación es de mayor desventaja para las mujeres. En las regiones en desarrollo uno de cada cinco trabajadores sobreviven con menos de US$1 dólar por día, en tanto que la mitad de la fuerza laboral del mundo, alrededor de 1500 millones de personas, trabaja en condiciones inestables e inseguras. Para tener un impacto decisivo y sostenible en la superación de la pobreza y en la mejora de la calidad de vida se requiere no sólo empleo, sino que este sea de calidad y permanente.

La cuarta parte de los niños menores de 5 años en el mundo padecían de desnutrición en el 2006, en tanto que más de 140 millones de niños sufrían de deficiencias nutricionales. La situación es mucho más dramática entre los niños que viven en zonas rurales.

Al mismo año, 75 millones de niños no recibían educación primaria en el mundo. Nuevamente, la situación es más dramática para los niños en áreas rurales y para las

[3] El PBI de los Estados Unidos en el ejercicio fiscal 2008 superó los 14 billones de dólares (US$ 14´000,000´000,000)
[4] NACIONES UNIDAS. Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe 2008. Nueva York. 2008. Tomado de: http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_Es.pdf

niñas. Cada año mueren 10 millones de niños menores de cinco años de edad, la mayoría por causas evitables. El 37% de tales muertes se producían dentro del primer mes de vida. Las probabilidades de que un niño menor de 5 años muera durante sus 5 primeros años de vida es 13 veces mayor a las de un niño nacido en un país industrializado.

Con apenas una fracción de los recursos destinados por las naciones desarrolladas para cubrir las pérdidas de las grandes corporaciones financieras e industriales, se podría haber destinado vacunas para inmunizar a todos esos millones de niños en peligro de muerte.

En el 2005 murieron más de 500,000 mujeres durante el embarazo, parto o las seis semanas posteriores. El 99% de estas muertes sucedieron en países en desarrollo.

Al mismo tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado aún después de firmados los acuerdos internacionales que las limitan y hoy es claro que no se alcanzarán las metas establecidas en esos acuerdos. En tanto, la polución y el calentamiento global amenazan la subsistencia de poblaciones enteras y especies vegetales y animales.

El impacto de la pobreza y la crisis social es todavía mayor, pues destruye capital humano y por tanto crea las condiciones para su perpetuación, ampliación y agravamiento, restando además capacidad para mejorar la productividad y la competitividad de las poblaciones y regiones pobres en el largo plazo.

¿No son acaso todos estas muestras claras de una grave "crisis" social que es ahora también global? ¿No es evidente que esta crisis social se ha extendido y profundizado precisamente cuando los sistemas económico, financiero y comercial globalizados, ahora en crisis, han permitido acumular a los grandes bancos y corporaciones en las diversas industriales riquezas y tecnología en magnitudes nunca antes vistas en la historia de la humanidad? ¿Por qué los medios de comunicación masiva y los círculos políticos y sociales en su mayoría no denuncian esta situación de oprobio e indignidad en que se encuentran las mayorías pobres del mundo?

Causas y responsables de la crisis social y financiera

Existe una relación de causa efecto entre la crisis social global y el sistema económico, financiero y comercial vigente en todo el mundo y que hoy está en crisis.

Las corporaciones financieras e industriales mundiales controlan los stocks y flujos de productos, los precios de las materias primas que producen los países pobres, los bienes de capital y la tecnología que nos proveen. Imponen las condiciones de rentabilidad de la inversión extranjera directa que localizan en nuestros países. Se sabe que en América Latina por cada dólar invertido retornan cuando menos otros dos a los centros mundiales de origen. La deuda externa es todavía instrumento de expoliación para los países y las poblaciones pobres.

Los términos de intercambio, las remesas de regalías y utilidades y el pago de la deuda interna han generado la mayor descapitalización en las regiones pobres, como es el caso de América Latina. Los recursos que se necesitaban para generar empleo decente, mejorar las condiciones de nutrición, educación, salud, acceso a la seguridad social solidaria, para el desarrollo científico y tecnológico, han fugado durante décadas a los centros mundiales de poder económico.

Esta lógica ha sido consolidada por las instituciones y acuerdos multilaterales dominados por los países más poderosos, alentados por los grandes bancos y corporaciones multinacionales. La Organización Mundial de Comercio penaliza a los países pobres que pretender proteger sus productos y mercados en tanto que es sospechosamente ineficaz para impedir las medidas proteccionistas de los gobiernos de los países desarrollados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y sus agencias asociadas condicionan su ayuda y auspicio a la adopción de políticas de apertura comercial,

libre circulación de capitales, flexibilidad del mercado de trabajo, repliegue del estado de sus obligaciones de protección social y a la pérdida de soberanía. Los acuerdos internacionales de garantía de las inversiones permiten embargar los fondos de los gobiernos que pretendan revertir el abuso de las multinacionales, y someten a los Estados a la autoridad de tribunales arbitrales o instancias judiciales de los países centrales.

Los acuerdos de integración, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y los foros de cooperación económica, como la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE) y el Foro Asia Pacífico (APEC), enfatizan la aplicación de las reglas del libre comercio y armonizan el diseño y ejecución de las instituciones, políticas y normas públicas, con una débil cuando no inexistente preocupación por la equidad económica y social y el desarrollo sostenible. Los tratados de Libre Comercio (TLCs.) aseguran estas reglas en el plano bilateral.

Esta arquitectura del liberalismo económico, se reproduce en el ámbito interno, configura las competencias y políticas públicas e impide las iniciativas para reorientar la inversión extranjera y nacional en armonía con el desarrollo local. Restringe las atribuciones públicas de control de las multinacionales. Marginaliza y neutraliza la eficacia de las políticas sociales. Se consolidan así los flujos que trasladan los recursos desde el ámbito público a los grupos privados de poder económico, desde el campo a las ciudades, desde los sectores más atrasados a los más modernos de la economía, desde la economía local a las corporaciones multinacionales y países centrales.

Por cierto, excluye el diálogo social y la participación de los excluidos, deteriora y precariza las condiciones de vida y de trabajo y favorece las agresiones al medio ambiente. Con ello propicia la acumulación de recursos en los sectores privilegiados[5], profundiza la pobreza y debilita la estabilidad social y la democracia.

No obstante, esta mayor concentración de recursos económicos, financieros y productivos a escala mundial, fortalecidas por los mecanismos institucionales mencionados, ha engendrado a su vez las sucesivas crisis que ha experimentado el sistema económico, financiero y comercial capitalista en especial en su fase neoliberal. Estas crisis han estallado en los momentos de mayor acumulación de capitales y recursos productivos, en los que, contradictoriamente, se han hecho evidentes el bloqueo al crecimiento de la demanda y el consumo, la pérdida de productividad y la caída de la rentabilidad media del capital. Estos patrones de comportamiento han sido ampliamente identificados por los estudiosos de los ciclos económicos cortos, medianos y largos del sistema capitalista.

Esta misma arquitectura económica e institucional, internacional y local ha sido incapaz de actuar contra los patrones e indicadores visibles que anticipaban las crisis. Más aún, bajo los mismos argumentos de libre mercado y comercio, pero también, bajo la influencia de actores claramente identificados, dejó las manos libres a banqueros, especuladores e incluso aventureros que aprovecharon las facilidades, circuitos y las (nada inocentes) debilidades de los sistemas de regulación de las finanzas, las inversiones y los mercados de capitales, para realizar y encubrir operaciones que les significaron el mayor lucro de que se tenga noticia[6].

No es extraño además que en este contexto, en que se combinan la dominación, expoliación de recursos, la exclusión económica y social y la inoperancia de los mecanismos institucionales para controlar al mercado, a las multinacionales y a sus agentes, florezcan también la corrupción, la delincuencia e incluso el narcotráfico y la acción de grupos violentistas en contra de los dirigentes y las organizaciones sindicales y populares en general.

¿Se puede entregar a esas mismas instituciones, sistemas y actores responsables de la crisis social permanente y de la actual crisis

[5] A modo de ejemplo, en la década de los 70´s en el Perú lamenta del capital equivalía a un tercio de la que correspondía al trabajo. Esta situación se invirtió paulatinamente a fines del siglo pasado.
[6] Es importante reparar en que, en ese mismo escenario de incapacidades y debilidades cómplices de autoridades e instituciones de regulación y control de los mercados financieros y las grandes corporaciones, se produjeron algunos de los casos más emblemáticos de fraude empresarial, precisamente en los centros económicos y de capitales del mundo en los Estados Unidos, Europa y el Asia.

económica y financiera internacional la conducción de las estrategias y las salidas?¿Se puede confiar en que las "soluciones" que imaginen e implementen, aún denostando en voz baja del recetario liberal[7], incorporen las prioridades del desarrollo equitativo y sostenible?¿Hemos escuchado acaso que los medios de comunicación social, los círculos políticos oficiales y los sectores sociales que les son afines incorporen las prioridades sociales en cualquier estrategia de solución a la crisis?¿No es de esperarse que, al igual que sucedió con otras crisis, las "soluciones" que se ejecuten profundizarán el dominio de la soberanía y destino de los países pobres por el capital transnacional para asegurar su renta y profundizar la pobreza y exclusión?

Soluciones ficticias y reales a la crisis global

En las sucesivas crisis económica e internacionales de diverso alcance que el mundo ha conocido en particular desde la década de los 80´s. del siglo pasado, las soluciones han sido siempre las mismas: más libertad de circulación de capitales, apertura comercial, flexibilidad laboral, debilitamiento del Estado y pérdida de soberanía. Por tanto, menos organización social, sindicatos y protección social. El efecto ha sido también siempre el mismo: mayor concentración de la riqueza en pocas manos, descapitalización, precariedad laboral y pobreza para las poblaciones y regiones en subdesarrollo, sin olvidar el deterioro del medio ambiente.

Ahora que la humanidad viene siendo testigo del mayor genocidio social de la historia, los gobiernos, instituciones y regulaciones internacionales y de los países desarrollados garantizan a un grupo de banqueros y especuladores centenas de millones de dólares de indemnizaciones por retiro, les compran las acciones de sus empresas desvalorizadas y se hacen cargo de sus cuantiosas deudas con dineros de los contribuyentes, al tiempo que propician que sus seguidores en los países en desarrollo subsidien a las corporaciones con fondos públicos que se restan a la inversión social.

Es claro además que las instituciones, sistemas y actores económicos y financieros serán incapaces de evitar las sucesivas crisis de magnitud que responden a las precariedades estructurales que residen en las finanzas públicas y en la economía de los EE.UU. y que amenazan al mundo.

Es urgente entonces un cambio de enfoque a escala global respecto a la crisis y sus soluciones.

La prioridad debe ser asegurar el consumo de los servicios y bienes esenciales, en especial los de nutrición, salud y educación, para proteger y desplegar las capacidades básicas de la población mundial, lo que a su vez incrementará la demanda y el empleo asociados a esas prioridades.

La incorporación al mercado de trabajo debe significar el acceso a empleos de calidad, que provean de los ingresos necesarios para cubrir las necesidades esenciales y acceder a una vida digna, basados en la inversión en formación profesional que mejore las competencias, pero también aproveche las ventajas de la tecnología y de los métodos modernos de gestión, para elevar la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

Los mecanismos y líneas de crédito, bajo regulación y vigilancia del Estado, y los incentivos fiscales, deben orientarse prioritariamente a las empresas que asuman el compromiso de invertir en puestos de trabajo de calidad y establezcan una relación económica positiva con las regiones y comunidades locales, por ejemplo, mediante la incorporación de trabajadores y la adquisición de productos, y que incorporen sistemas de producción y gestión amigables con el medio ambiente.

Todo esto exige la modificación de las instituciones que garantizan el sistema económico y financiero internacional y la modificación de los objetivos, prioridades, normas y políticas de los Estados nacionales en atención a las prioridades sociales.

[7] En efecto, mientras que los accionistas de las corporaciones financieras e industriales del mundo claman por la ayuda económica de los Estados y les demandan que intervengan en los mercados, los medios de comunicación social y los debates en los círculos políticos oficiales encubren con eufemismos la nacionalización de varias de estas corporaciones, vía adquisición de acciones, y están discutiendo incluso la estatización de las más grandes. más emblemáticos de fraude empresarial, precisamente en los centros económicos y de capitales del mundo en los Estados Unidos, Europa y el Asia.

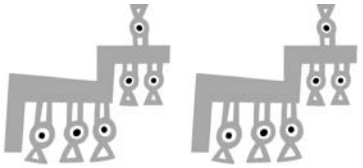
Los programas de "rescate", "salvataje" o "anticrisis" deben ser reorientados para asegurar el consumo de los bienes y servicios esenciales por la población, tornando en azul las cifras en rojo del exiguo presupuesto familiar de los pobres, en tanto que, simultáneamente, se redefinen las condiciones de los créditos usurarios y se restablece la liquidez, en especial, de los sectores vulnerables, para reconstituir la dinámica demanda-oferta, pero en un marco de desarrollo sostenible.

En otras palabras, antes que transferir más recursos desde la sociedad a los banqueros, especuladores y corporaciones que son responsables y se han enriquecido con la crisis social permanente y la crisis económica y financiera actual, hay que transferir recursos a la base social, mejorando la calidad de vida y de trabajo, generando un circuito económico y financiero virtuoso que favorezca el crecimiento económico y el desarrollo con equidad.

Estos cambios exigen una nueva correlación social y política a escala global y regional, que debe ser liderada por las organizaciones sindicales y populares.

En el plano internacional las confederaciones y organizaciones sindicales mundiales y continentales deben formular una plataforma y liderar una campaña global para la reforma de los organismos y regulaciones internacionales involucrados, por acción u omisión, en la crisis y para el establecimiento de un nuevo orden global financiero, comercial y de inversiones.

Esa campaña debe incluir el rechazo a los enfoques que ocultan la grave crisis social global, la denuncia pública de sus causas y responsables, la difusión amplia de la información y casos que demuestran la precariedad en que viven las poblaciones más pobres, la presión conjunta sobre los gobiernos y organismos multilaterales hacia el cambio de estructuras y políticas, el fortalecimiento de la dimensión social en los procesos de integración y en los acuerdos bilaterales y la convocatoria a una ronda mundial social por el desarrollo, la superación de la pobreza y el medio ambiente, bajo el protagonismo de las organizaciones sindicales y populares, colocando lo social en el centro de la economía y el comercio internacional.



CENTROAMÉRICA HACIA EL 2009, UN FUTURO INCIERTO PARA LA CLASE TRABAJADORA

Rodrigo Aguilar, Secretario General



Como organizaciones centroamericanas y del Caribe, no nos cabe la menor duda que los efectos de la crisis financiera, y sus consecuencias, en todas las actividades económicas están repercutiendo y repercutirá gravemente en la clase trabajadora, quien finalmente ser la víctima de las irresponsabilidades de quienes manejan el modelo económico

Destacamos que al 2007, de una población cercana a los 41.3 millones de personas, el 55% vive en la pobreza, y el 23% en la pobreza extrema, donde esos niveles de pobreza extrema o indigencia, vistos desde los países, alcanzan cifras excesivamente altas, que oscilan desde el 6.0% hasta el 48.1% Estos datos son resultado de un elevado nivel de desigualdad que genera el modelo de desarrollo impuesto

La pobreza no solo se manifiesta en falta de ingresos, también está manifiesta en la imposibilidad de acceder a tierra, capital, crédito, tecnología, educación, servicios básicos de salud, vivienda, etc. También la pobreza genera en forma permanente hambre, nutrición deficiente

Las políticas neoliberales han llevado a la región a niveles extremos en materia de empleo. Con una Población Económicamente Activa de 17 millones de personas, las tasas de informalidad oscilan entre el 42% y el 59.7%...

Es suficientemente conocida la relación que existe en términos de comercio e inversiones entre los Estados Unidos y los países de nuestra subregión antes del TLC y ahora con el TLC, es decir un alto porcentaje de las exportaciones van dirigidas hacia el país del Norte, y una proporción importante en inversiones en aspectos inmobiliarios y de turismo provienen también del coloso del norte.

En ambas situaciones está en juego, por un lado los ahorros de una importante cantidad de personas que ha venido cotizando para su jubilación en operadoras privadas, que han colocado parte de esos ahorro en el mercado internacional, y por otro, el empleo de millones de trabajadores y trabajadoras, que hoy están siendo amenazados con el despido, y en algunos casos con la rebaja de sus derechos y beneficios si quieren mantenerse trabajando.

A ello se agrega un problema bastante serio para algunos países y es que también el desempleo y las condiciones vulnerables que sufren millares de centroamericanos en los Estados Unidos indudablemente están teniendo ya un impacto directo en las remesas, que forman parte importante del sostenimiento económico del las familias que quedaron en los países expulsores y para el propio país que las recibe, porque ello forma parte de la economía y representa un importante porcentaje del PIB nacional

De acuerdo al Informe del Estado de la Región en Desarrollo Sostenible del 2008, "hhoy en día viven fuera de sus países de origen poco más de cuatro millones de centroamericanos, aproximadamen¬te el 10% de la población regional. La mayoría de los migrantes viven en Estados Unidos. Esta situación es el resultado de intensos movimientos emi¬gratorios experimentados en el istmo durante los últimos treinta años"

Ese mismo Informe nos dice que "En el año 2007 las remesas familiares ascendieron a 12.180 millones de dólares, casi cuatro veces más que en el 2000. La participación de Honduras y Guatemala en el total más que se duplicó durante ese lapso (pasó del 29% al 56%)."

Señala el informe señalado, las remesas han sido utilizadas por las familias principalmente para atender sus necesidades de consumo y paliar la pobreza. El peso de este financiamiento en el ingreso de los hogares es mayor en El Salvador y Honduras (cerca del 37%) que en el resto de la región; sin embar-go, es en Guatemala donde más contri¬buye a aliviar la pobreza. En ausencia de remesas, los hogares pobres en ese país aumentarían en 5,2%.

Por otra parte debemos recordar que La población estadounidense está asustada y restringirá sus compras a los artículos indispensables durante mucho tiempo, lo cual afectará a los países, según sea su nivel de exportaciones

Hacia el mercado norteamericano va el 34% de las exportaciones de Guatemala Honduras el 35%, El Salvador el 57%, Nicaragua el 28.9%, Costa Rica el 43%, y Panamá el 38.46%

Países como Costa Rica ha llegado a canalizar hasta $1.2 billones en inversiones inmobiliarias que en este momento están detenidas hasta que se pueda asegurar la viabilidad de estos proyectos. Así mismo varias importantes cadenas hoteleras anunciaron que sus proyectos de inversión serán suspendidos indefinidamente, hasta que se pueda asegurar la viabilidad de los mismos. Este tipo de decisiones representan una disminución del campo turístico en cualquiera de los países de la subregiòn.

Muchos de estos grandes proyectos hoteleros están financiados por bancos de los Estados Unidos como Lehman Brothers, que había abierto oficinas en 2008. Algunos proyectos financiados por fuentes norteamericanas incluyen el Mandarín Oriental, Hyatt, Saint Regis, Regent y Punta Cacique. La construcción de todos estos depende de la recuperación del mercado y de la estabilidad bancaria.

Nos parece que el señor Juan Somavía Director de OIT, acertó sobre esta situación cuando dijo "que la actual crisis afectará con mayor gravedad sectores como construcción, automotriz, turismo, finanzas, servicios y bienes raíces. También observó que las nuevas proyecciones "podrían resultar subestimadas si los efectos de la actual contracción económica y la potencial recesión no son enfrentados con rapidez".

No entramos a valorar la calidad del empleo que se produce en algunas de estas actividades económicas mencionadas, porque en ellas se produce indudablemente la subcontratación, que no respeta los derechos fundamentales, pero los empleos existen, aunque lamentablemente de baja calidad existen, el asunto es que vamos a una situación en el 2009 a su inexistencia, y ello traerá como consecuencia una incremento en el desempleo, y por lógica un incremento muy drástico en los niveles de pobreza, y por supuesto consecuencias muy graves para las familias de los desempleados

Algunos países en la Subregión están tratando de hace algo al respecto, en Costa Rica por ejemplo El Ministerio de Hacienda ha presentado un proyecto a la corriente legislativa para recapitalizar los Bancos Estatales, con una fuerte cantidad de dinero, y sin embargo los empresarios no se han hecho esperar y están anunciando fuertes contracciones de la economía para el año 2009 y por supuesto ninguna generación de nuevos puestos de trabajo formales, por el contrario auguran un fuerte desempleo en el sector formal, por un lado debido a la reducción de compra de productos en Estados Unidos y por otro por la ausencia de crédito y la baja de las inversiones.

Por otra parte una Centroamérica que ha venido levantando una importante recepción de turistas, se anuncia que por las mismas circunstancias, los visitantes van a disminuir, lo que también va a perjudicar a pequeños y microempresarios así como trabajadores de la industria hotelera muy severamente

Para nuestra Coordinadora si la situación en las circunstancias actuales ha sido grave en materia de derechos y de incumplimientos a los Convenios Internacionales y a las legislaciones nacionales, creemos que ahora esto se va a reforzar, y las pretensiones sobre flexibilizaciones y desregulaciones de las normas protectoras se va a intensificar, donde el alegato principal va a ser, que la crisis financiera, obliga a hacer reducciones de derechos, eso ya lo hemos visto en algunas empresas, que pretenden reducir las conquistas de los trabajadores y trabajadoras alcanzados en convenios, pactos o convenciones colectivas. Por supuesto que lo van a intentar primero en las modificaciones legislativas y reglamentarias.

Cómo aborda el Sistema de Integración la problemática

Para el Informe del Estado de la Región en Desarrollo Sostenible del 2008 "La institucionalidad regional exhibe notables debilidades de diverso orden. En parte son de carácter burocrático, derivadas de las dificultades para el desarrollo de suficientes capacidades técnicas. Sin embargo, los problemas no son puramente técnicos, ni se circunscriben a la burocracia regional. Los órganos de conducción política de la integración presentan disfunciones que van desde el desequilibrio en las relaciones entre ellos mismos, hasta la poca preparación para la toma de decisiones.

Esta situación resta calidad a los mandatos de la Reunión de Presidentes, ya que propicia un crecimiento no planificado de la agenda de integración, crea problemas de seguridad jurídica por falta de un orden procesal y afecta la previsibilidad de los mandatos encomendados a las instituciones de la integración."

Veremos si en esta crisis que amenaza a la región a una situación mucho más crítica podrá hacer funcionar el Sistema con una mayor operatividad ante el mandato de la Cumbre de Presidentes del SICA del 4 de octubre 2008 realizada en Tegucigalpa,

En este cónclave presidencial se abordó dos temas:

1- el de la crisis alimentaria por el aumento exorbitante de los precios y

2 - la crisis financiera.

De ella surgieron mandatos para las diferentes estructuras del Sistema de Integración, Consejos de Ministros, Secretarías del SICA y del SIECA, Ministros de Relaciones exteriores, para activar varias acciones

1- Buscar medidas e instrumentos para fortalecer el mercado intraregional de bienes y servicios.

2- Solicitar al Banco centroamericano, establecer líneas de crédito a los Bancos Centrales, así como a bancos comerciales públicos y privados

3- Impulsar un programa de Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Alimentaria en Centroamérica con el apoyo del BCIE, con crédito para elevar la producción.

4- Continuar fortaleciendo los vínculos con las diversas iniciativas de integración existentes en América Latina y el Caribe,

5- Elaborar un plan con medidas urgentes para afrontar el impacto de la crisis financiera internacional con el objetivo de fomentar actividades que ayuden a incrementar el empleo,

y que incentiven la producción agrícola, procurando también fomentar la inversión pública en obras de infraestructura.

6- Gestionar alianzas estratégicas con los países del Sur, el Caribe y Asia.

Cómo ve la Coordinadora el proceso de integración

Para la CSACC, la Integración en la Subregión se ha hecho a espaldas de los pueblos, es un asunto concebido exclusivamente de los actores políticos que en los últimos 16 años han fortalecido la integración económica pero no se han preocupado por los problemas de pobreza, de educación, de seguridad social, de los derechos humanos ni laborales.

Uno de los factores abordados en un principio fue el desarrollo del mercado interno, a partir de la puesta en discusión del ALCA, hubo una estrategia dirigida a lograr ese propósito, pero ante la oposición que existía en los países del sur, los países del SICA aceptaron negociar el CAFTA, que como todos sabemos no fue un proceso en que se discutiera con los Estados Unidos en forma integrada, por el contrario ,fue un acuerdo que negociaron todos los países en forma individual, donde cada uno de ellos defendió sus propias visiones, pero eso sí entre todos entregaron aspectos muy valiosos de la subregión, en materia de propiedad intelectual y de servicios, y por supuesto con una debilidad muy grande en materia laboral y ambiental

Debe recordarse que República Dominicana, se adhirió posteriormente, y Panamá no entró en dicha negociación, sino que lo ha hecho en forma totalmente individual. República Dominicana es país Asociado, y Panamá forma parte del SICA, pero no del SIECA.

En el caso del acuerdo de Asociación con la Unión Europea, están negociando en forma conjunta porque así lo exigen los europeos, especialmente en materia de integración aduanera, en materia comercial existen países como Costa Rica y el Salvador, que pulsan con mucha fuerza donde a esos gobiernos solo les interesa lo comercial, y los otros pilares, como Diálogo político y Cooperación no son de su interés, mucho menos el cuarto pilar sobre la dimensión sociolaboral propuesto por nuestra Coordinadora y la CCT, (aspecto sobre el cual tendremos un conversatorio durante los días 28 y 29 de este mismo mes con los negociadores en Guatemala). Es notable que quien tiene la vocería siempre es un representante de un ministerio de Relaciones exteriores, en realidad el peso lo llevan los delegados de los ministerios de Comercio Exterior.

En torno al último mandato de los Presidentes, vamos a ver si funcionan, tenemos algunas dudas, El gobierno de Costa Rica por ejemplo ha tomado la decisión en la visita reciente del presidente de China al país de iniciar en el 2009 la discusión de un tratado de libre comercio, con ese país, por su parte Nicaragua está vinculado al ALBA y recientemente el gobierno de Honduras aprobó incorporarse a ese organismo, o que fue ratificado por el órgano legislativo. Costa Rica también ha intentado incorporarse al APEC. Lula propuso en Honduras la firma de un tratado con Centroamérica, pero hasta el momento no tenemos noticia si se han producido decisiones en ese aspecto a nivel del sistema de integración. Algunos países han decidió individualmente adherirse también a Petrocaribe.

Tanto CSACC como CCT en nuestro lanzamiento de la Carta Social Sindical, hemos hablado de posicionar el tema de la Integración desde los pueblos en la agenda de los sindicatos base de todas las confederaciones y federaciones integrantes de nuestras organizaciones, y por lo tanto en el Foro Social celebrado en la Universidad de San Carlo en Guatemala, lanzamos una campaña en ese sentido, que con ayuda del Instituto Sindical para América central y del Caribe, ISACC, y del Instituto Centroamericano de Educación Sindical ya iniciamos un proceso de formación de formadores en los distintos países de la subregión que se extenderá durante todo el año 2009.

LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL, EL ROL DE LOS BANCOS Y LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD

Marcio Monzane, Coordinador

La Crisis Financiera Mundial

Aun que cumplieron toda las recomendaciones elaboradas por el modelo capitalista neoliberal el mercado financiero, sus actores y principalmente los trabajadores están sufriendo una de las mayores crisis de la historia del capitalismo, llegando al punto de hacer al país más capitalista del mundo, EEUU, aun en la era Bush, promover la estatización de algunas empresas del sector, así como la inyección de una pequeña fortuna – más de 700 mil millones de dólares – con el objetivo de rescatar sus bancos de la quiebra. Acto repetido en Europa como la nacionalización del RBS y el Northern Rock, en Inglaterra que era la mayor seguidora de la política monetaria estadounidenses. Los más interesantes es que estos fueron dos de los países más críticos a la política de nacionalización hecha por Chaves al Banco Santander en Venezuela.

Para comprender un poco lo que está pasando ahora y como el movimiento sindical internacional y la sociedad como tal deben actuar frente esta crisis, debemos comprender como se adoptó un modelo que podría generar tanto riesgo para el futuro, conocido como créditos de subprime.

El subprime fue una medida adoptada luego después de la crisis de los puntocom, como una forma encontrada entonces para generar más liquidez en el mercado financiero, a decir, permitir que las empresas financieras pudiera recuperarse en aquel momento frente la situación existente. Básicamente era la disponibilidad de un crédito de alto riesgo en Estados Unidos, inicialmente, para la adquisición de bienes móviles e inmuebles, a decir personas sin ingreso fijo, que no lograba conseguir préstamos, logra a recibir lo recursos necesarios para la realización de sus sueños, como casa, carros y las vacaciones de las estrellas, promoviendo una marcha acelerada a los bancos y la realización de una cantidad inestimable de hipotecas, aumentando la inversión en el subprime de uno 94 millones de dólares en 2001 para más de 600 millones de dólares a finales de 2006. La búsqueda incesante por crédito obligó a los bancos obtener más recursos, creando los famosos "instrumentos derivativos complejos", a decir, una especie de promesa de pago, muy similar a los bonos emitidos por los gobiernos, sin embargo, sin las garantías de estos. Así los compradores de estos bonos, sabrosos en aquel momento, ha contratado terceros, conocidos como bancos de inversión, que en la verdad nada más eran que intermediarios en un negocio que provocó una revolución en el mercado, especialmente

lo que dice respecto a las transacciones en Bolsa de Volares, lo más conocido de estos intermediarios es justamente JP Morgan Chase, uno de los principales actores en la crisis y uno de los primeros a pedir ayuda al gobierno estadounidenses. El valor "teórico" de estos instrumentos derivados pasó de 15 mil millones de dólares en 2005 para unos 60 mil millones en el año pasado. Con el tiempo, los compradores no pudieron pagar sus deudas y perdieron sus casas, lo que provocó el aumento de los intereses y consecuentemente una disminución del dinero disponible para consumo y así, la reducción de la producción de y por fin las demisiones, en especial, en los sectores de industria y construcción civil, además del evidente escenario del sector financiero.

El Rol de los Bancos

En la actualidad los bancos se acostumbraron a actuar en el mercado financiero sin la menor posibilidad de aceptación de reglas impuestas por la sociedad, a decir la gran mayoría de los economistas y analistas de la era neoliberal han defendido insistentemente un mercado financiero libre y sin reglamentaciones, o según ellos, sin "dificultadores" que podrían "encarecer" el valor del dinero disponible para las inversiones en producción, a decir, reglas que impactarían el spread bancario, o a groso modo, "valor del dinero". Así y por el predominio de esta visión en los gobiernos neoliberal de la década pasada, hemos observado una gran concentración del sector financiero en la mano de un grupo de conglomerados, básicamente de origen estadounidenses y europeo. Grandes empresas del sector financiero como Santander de España y Citigroup de EEUU, pasaron los últimos diez años en un proceso creciente y acelerado de incorporaciones y adquisiciones de empresas menores por todo el globo terrestre. También observamos el surgimiento en nuestra región de algunos grupos multilatinos, en especial el caso del Banco Itau de Brasil que ha logrado conseguir todo el activo del Boston en América del Sur, ganando competencia con grandes grupos multinacionales, como el propio Citigroup y BBVA de España.

Aun que definitivamente la crisis ha afectado el sector, podemos afirmar que existe una paradoja pulsante, mientras algunos bancos buscan ayuda a sus respectivos gobiernos, otros han logrando fortalecer aún más su posición en el mercado financiero. Si es verdad que la crisis afectó brutalmente grandes conglomerados financieros internacionales, tales como Citigroup, RBS y JP Morgan Chase, sin embargo, también es verdad que los resultados negativos de estas empresas son oriundos de situaciones que van más allá de la misma crisis. Citigroup, ya había presentado malos resultados en los años anteriores a las crisis y sus negocios en África y Asia habían debilitado su posición en el mercado financiero internacional, RBS recién había participado de una transacción multimillonaria, para ganar la competencia a su rival Barclays en Inglaterra, la compra del ABN AMRO, lo que ha dejado el banco con bajo poder de liquidez, debilitado y expuestos a los "rumores" de este mismo mercado. JP Morgan Chase apostó todas sus fichas en el mercado de bonos o "instrumento derivativos complejos", no se preocupando con la posibilidad de diversificar las inversiones y bajar los altos riesgo provenientes de este negocio. Podemos afirmar que en estos casos, estos grupos tomaron decisiones equivocadas y hicieron apuestas altas con el objetivo de perder todo o "quebrar la banca", llevando algunos analista a comparar al mercado financiero actual a un Casino, lo que no es tan incorrecto así.

En la otra punta de la historia tenemos bancos que optaron por diversificar más sus negocios, sea por inversiones en diferentes partes del planeta, sea por diferente productos y objetivos estratégicos. El primer de ellos es el mismo Banco Itau que en el medio de la crisis, anuncia una megafusión con el Banco Unibanco, ambos de Brasil, creando la mayor institución financiera del Hemisferio Sur del planeta, figurando entre los 20 bancos más grandes del mundo, con activos que sobrepasaron los 250 mil

millones de dólares, más de 15 millones de clientes, con la posición número uno en América Latina en los negocios de "banca privada", a decir, grandes inversiones y aun así han promovido despidos en algunos países, como Chile por ejemplo, un proceso de despidos que no se justifica, ni por la crisis ni por la situación del Banco en aquel país, como señala la Confederación de Sindicatos de Bancarios y Afines de Chile. Otro caso interesante es del banco inglés Barclays que aun con toda la crisis que enfrenta el mercado financiero en Reino Unido presentó sus balances de 2008 con sólo 1% menos que los años anteriores. Aun que sus acciones en la bolsa de valores han bajado un 80% en 2008, la diversificación de sus negocios y especialmente las inversiones en los fondos de capital privado en su mayoría del Oriente Medio hicieron con que el banco encerrara el año sin tener que recurrir a los 50 mil millones de libras que el gobierno ha dejado disponible para recuperar el sector y que sus principales competidores tuvieron que acceder. El Banco Santander es otro ejemplo en que la diversificación de negocios y mercados era suficiente para disminuir un impacto en la actual crisis, con un gano real de casi 10% en nivel mundial con mas de 9 mil millones de euros, Santander logró en Brasil un incremento de unos 3,7% en 2008, y representó 20% de las ganancias totales en el mundo y por más contradictorio que parezca, Santander ha promovido en el inicio de 2009 un conjunto bastante significativo de de despidos, alegando un proceso de reestructuración para enfrentar la crisis.

Al fin de este análisis podemos afirmar que hay una gran crisis mundial, sin embargo la situación actual de los grandes conglomerados afectados por esta crisis, está más relacionados por el tipo de la decisión de negocios adoptado por sus directivos y los riesgos provenientes de esta decisión que de la crisis misma, a decir la situación no es una consecuencia de la crisis si no causa de ella. También podemos afirmar que las demisiones que ocurren ahora el sector en su gran mayoría no tiene una relación directa con la crisis, ya que primero algunos bancos que están promoviendo despidos no fueron afectados por la crisis tan drásticamente y segundo que los programas de gobierno que recuperan los bancos han logrado producir la liquidez deseada al punto de en algunos caso, los bancos utilizaren estos recursos para inversiones en bonos de gobierno y no liberación de crédito.

La respuesta de la Sociedad

Hemos observado lo grupo de los G20, o los 20 países más rico del mundo, reunirse para discutir el problema actual, sin embargo, debemos como sociedad y principalmente como movimiento sindical exigir una profunda respuestas a esta situación. Como primero paso se hace necesario la creación de un acuerdo global que establezca la reglamentación y supervisión del sector financiero, donde las prácticas operaciones de las empresas financieras sean renovadas para que el riesgo del sector sea disminuido. Aun así los gobiernos y alto directivos de las empresas deben considerar los trabajadores y los sindicatos como parte de este proceso. Las empresas financieras deben ofrecer servicios financieros responsables y sostenibles. Por otro lado es necesario establecer mecanismos de control y denuncias a lo interior de cada conglomerado financiero y en este sentido los trabajadores tiene la total capacidad de cooperar con los gobiernos y con un proceso de reglamentación internacional, una vez que están directamente relacionados con la práctica diaria del negocio de la empresa, teniendo total y absoluta capacidad de identificar decisiones gerenciales que pueden generar alto riesgo a la empresa y la sociedad. Para esto UNI propone que el Sindicato Mundial en conjunto con sus afiliados participen en la reglamentación de prácticas en la remuneración e incentivos a los trabajadores no ejecutivos, reglamentación de prácticas en el mercado financiero de productos, entrenamiento de los trabajadores en reglamentación y normas, análisis de fraude en la reglamentación de productos y

nuevas prácticas comerciales, identificación de riesgos y tendencias corporativas y no observación de las normas. Este principio de participación deberá ser incluido en todos los niveles, a decir, iniciando en las Instituciones Financieras Internacionales, como FMI, así como los órganos gubernamentales, tales como Banco Centrales, llegando hasta los conglomerados financieros privados. Recomendamos también la creación de una guía que oriente a todo trabajador de cómo proceder en el caso de identificación de una situación de riesgo concreto, así como mecanismo que protejan a los trabajadores que presentaren denuncias.

Es necesario también desarrollar una carta de principios, discutidas con el movimiento sindical y el sindicato mundial, que incorporen la realización del negocio responsable que contenga reglas sobre remuneraciones variables, entrenamiento de los trabajadores y educación financiera.

Es necesario también una revisión de la remuneración a los directivos y executivos de los conglomerados financieros, promoviendo límites más realistas y evitando los excesos actuales, así como vincular los recursos de recuperación a los banco, oriundos de fondos públicos, con el mantenimiento de los puestos de trabajo y establecer un punto final a los despidos justificados por procesos de reestructuración.

Por fin debemos intensificar las discusiones de los Acuerdos Marcos Globales, logrando garantizar en las principales multinacionales el derecho a la negociación Colectiva, afiliación y organización de sus trabajadores en sindicatos.

REFLEXION SOBRE LA CRISIS

José Ramírez, Secretario General
Diciembre 2008

Estamos en presencia de una crisis de grandes dimensiones sociales y económicas, que viene afectando tanto los niveles de producción y el empleo de nuestra industria y otras industrias manufacturas a escala global. La crisis también afecta de manera muy particular el consumo, lo cual repercutirá de inmediato en el nivel de vida de la población en general; afectando severamente a las familias de bajos recursos y a los trabajadores que, por efecto de la crisis puedan perder sus empleos.

En noviembre de 2008, desarrollamos en la ciudad de Guatemala una importante actividad de educación y capacitación como lo fue el taller "Concepto, Contenido y Promoción del Trabajo Decente". Para ese entonces, no había estallado significativamente la crisis financiera generada en los Estados Unidos con los créditos hipotecarios del sector inmobiliario, que arrastró y está arrastrando las economías de otras naciones.

Esta nueva situación de crisis económica pudiera contrarrestar de manera negativa los enunciados y propósitos de las conclusiones del taller en Guatemala sobre la campaña exitosa por el trabajo decente. No obstante, debemos insistir hoy con mayor fuerza en que el trabajo decente debe estar en el seno de las reglas que sienten las bases del nuevo orden económico mundial a implementarse como respuesta a la crisis financiera.

Ante este panorama, los sindicatos en todas partes del mundo y particularmente en esta región y los de nuestro sector, debemos estar con los ojos bien abiertos, debido a que los empleadores utilizan por lo general en estos periodos de crisis programas de reconducción de la producción para imponer recortes de los derechos de los trabajadores, afectando básicamente los salarios, las cargas de trabajo y la estabilidad laboral.

El impacto en América Latina y Caribe

En muchos países el tema de la crisis dejó de ser un pronóstico para convertirse en realidad en empresas de nuestro sector.

- en Honduras, por ejemplo; la industria maquiladora confirmó la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en el año 2008, principalmente por la recesión estadounidense y en especial por las altas tarifas de electricidad.
- en Paraguay, la industria del cuero es una de las más afectadas, habiendo despedido 600 trabajadores, y otros 600 estén en seguro de pago.

- en Argentina, la empresa Tecotex decidió reorganizar las vacaciones de su personal para desacelerar la producción, con motivado de la retracción de la economía argentina y al ingreso de productos de países como Brasil y China; agravando el mal momento de la industria textil argentina en Tucumán.
- en Perú, los empleadores temen una disminución de un 15% de las exportaciones hacia Estados Unidos, lo que pudiera poner en riesgo unos 10.000 puestos de trabajo de los 212.000 que existen en Lima Metropolitana.
- en Nicaragua, se perdieron en el año 2008, 5.000 puestos de trabajo por la poca demanda de los mercados mundiales.
- en México, la industria del vestido perdió 36.000 empleos de los 380.000 que genera; cerrando 296 empresas y para el presente trimestre del 2009, se podrían cancelas hasta 10.000 puestos de trabajo adicionales, debido a la crisis y a la caída de las exportaciones hacia los Estados Unidos.
- en República Dominicana, en 2008 se perdieron más de 43.000 puestos de trabajo; y Colombia prevé una disminución de sus exportaciones hacia Estados Unidos en más de un 35%, lo que está generando un sinnúmero de desempleos en las pequeñas y medianas industrias.

El caso Camboya

En otras regiones, es interesante analizar el caso de Camboya, donde la recesión en los Estados Unidos podría afectar una campaña contra la explotación laboral. Camboya exporta el 70% de su producción de ropa hacia EE.UU, y esta industria representa aproximadamente el 80% de las exportaciones totales del país, estimándose que se emplean hasta un millón de personas de una población de 13 millones que dependen directa o indirectamente de esa industria.

El gobierno de Camboya y el de EE.UU, bajo la administración de Clinton, formaron un tratado comercial que vinculaba la cuota de exportación de textiles a los Estados Unidos uniendo esfuerzos para erradicar la explotación laboral en el sector. Bajo este tratado, Camboya tenía que reformar su legislación laboral, aceptar la formación de sindicatos y permitir a la O IT monitorear fábricas y publicar sus hallazgos. Esto hizo de Camboya un gran experimento. La pregunta era si funcionaría, y funcionó. La industria creció y las condiciones laborales y sociales mejoraron enormemente.

El tratado comercial expiró en enero de 2005, cuando Camboya se incorporó a la OMC.. Washington desarrolló una serie de cuotas de transición denominada "sistema ligero de cuotas" para asegurar que China no exportara más de un cierto volumen de textiles en ciertas categorías. Estas medidas para salvaguardar la industria textil de Camboya, perdieron su vigencia a fines del 2008. A muchos les preocupa que la industria, aún nueva según estándares internacionales, pudiera ser abrumada por poderes como China y Vietnam, donde las condiciones laborales y sociales no son tan buenas.

Estas medidas expiran en momentos de una potencial recesión global cuando los consumidores estarán buscando los productos más baratos. Como es sabido, cuando empiezan las presiones económicas lo primero que se hace es apuntar al desmejoramiento de las leyes laborales y de las condiciones sociales.

Este es un momento crucial para la industria de Camboya y está en riesgo de perder este experimento increíble. Los observadores están de acuerdo en que vincular las cuotas comerciales a los estándares laborales fue el mayor impulso a Camboya para que trabajara en mejorar las condiciones laborales. Otro factor fue un innovador programa de la OIT llamado "Mejores Fábricas en Camboya". Nuestra Internacional está incorporada activamente en el desarrollo de este programa, logrando con los trabajadores, no sólo la organización sindical, sino la firma de contratos colectivos aceptables para los trabajadores.

Para poder obtener un permiso de exportación, las fábricas textiles debían afiliarse

al programa y acordar ser monitoreadas regularmente por equipos de la OIT. Este proceso de monitoreo, a cuyo sostenimiento contribuyen los empleadores, incluye visitas sin aviso y auditorías exhaustivas para evaluar el desempeño de las fábricas en 500 áreas. Aunque los informes detallados son confidenciales, las fábricas los entregan a pedido de los compradores.

La mayoría de los observadores están de acuerdo con que el programa de la OIT ayudó a evitar la crisis, que muchos creen se hubiera dado después de que expirara en 2005 el tratado de comercio original firmado con EE.UU. bajo la administración Clinton. También le ayudó a Camboya a construir una base sólida, de cara a las desventajas significativas de su industria.

Reflexiones finales

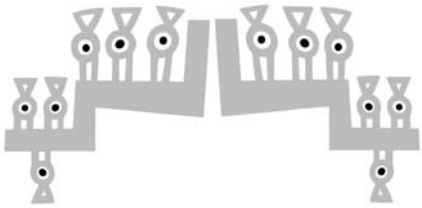
Quisieramos dedicarle un espacio particular a señalamientos muy importantes que hiciera recientemente el periodista y luchador social mundial, Antonio Martins, cofundador de Foro Social Mundial, quien afirmó que sólo en los EE.UU. se han invertido hasta ahora unos 5.000 billones de dólares, con el sólo propósito de evitar la quiebra del sector financiero. Este hecho desmiente por si sólo la idea según la cual los Estados (los gobiernos) sólo gastan lo que recaudan. El Estado, al ser el único emisor del dinero, también redistribuye (o reconcentra) la riqueza por medio de intervenciones fiscales y monetarias. Es por ello –señala Martins- que tenemos el derecho a preguntarnos ¿Si es posible destinar 5.000 billones de dólares para salvar los bancos, por qué una cantidad similar no se emplea para asegurar una vida digna para todos? Los 5.000 billones representarían unos 770 dólares para cada habitante del planeta, ó 2.1 dólares al día sobre una base anual.

Según el Banco Mundial, este es un mundo donde 2.7 mil millones de personas sobreviven con menos de 2 dólares por día, y 1.1 mil millones de personas con menos de un dólar por día. Por otro lado, se puede cuestionar también ¿por qué no destinar esos 5.000 billones de dólares para infraestructuras y servicios públicos en todo el mundo? Al mismo tiempo debemos tomar la iniciativa para demostrar con datos de la misma Naciones Unidas que estos recursos serían suficientes, por ejemplo, para reducir el hambre en el planeta, disminuir significativamente el contagio a las muertes provocadas por pandemias y enfermedades como el SIDA o la diarrea, para asegurar la educación universal, etc.

En verdad, estamos viviendo momentos de inquietud con respecto al futuro, y esta legítima y razonable preocupación obedece a la incertidumbre del impacto que pudiera producirse en la vida cotidiana de los trabajadores en relación al empleo, los ingresos y la seguridad social. Son momentos difíciles y de lucha activa para no permitir que esta crisis, que pudiera ser progresiva, afecte el desarrollo social de nuestros representados, disminuyendo así el ya deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores aumentando con ello la miseria y la pérdida de empleos.

La experiencia y la misma historia han demostrado que cuando se han presentado crisis del capitalismo como esta, por lo general, los gobiernos transfieren fondos públicos al sector privado como está ocurriendo en estos momentos. En consecuencia, ante la presencia de la amenaza de mayor desempleo, más fragmentación de la producción y la eliminación de los beneficios sociales, es conveniente intensificar, como ya ha sido acordado y aprobado en las resoluciones y conclusiones del taller de Guatemala antes mencionado: la construcción de una plataforma permanente de movimientos sociales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta unidad de acción es fundamental y básica para llevar hasta sus últimas consecuencias nuestras demandas y exigencias de modo tal de no permitir que esta crisis la paguen, como suele suceder, los trabajadores.

Ante la crisis, prudencia, prudencia y más prudencia, innovación, y sobre todo, unidad de criterio para la acción.



¿EN MEDIO DE UN CAMBIO DE PARADIGMA? LA CRISIS FINANCIERA, AMERICA LATINA Y EL FUTURO DEL CAPITALISMO

Kristian Weise,
Asesor Internacional de la Confederación de Sindicatos Daneses (LO)
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen exclusivamente al autor.
Marzo 2009

Mientras el mundo lucha por superar la crisis financiera, gran parte de las políticas más dominantes de los últimos años y décadas han quedado totalmente desbaratadas. Se está reviendo la sabiduría convencional y algunos de los comentaristas internacionales más conservadores —como el *Economist* y el *Financial Times*— están cuestionando el futuro del capitalismo. Por lo tanto, a largo plazo, es posible que los resultados de la crisis actual sean no sólo los derrumbes financieros, el desempleo masivo y el aumento de la pobreza sino también un cambio de paradigma en la política económica. No obstante, si bien ese cambio es necesario, nada permite asegurar que vaya a producirse.

Para comprender la dinámica de la formulación de políticas económicas a la luz de la crisis, debemos entender los factores que impulsaron la crisis y las discusiones en torno a ella. Por lo tanto, en este artículo presento una reseña general de la crisis, con un énfasis particular en su impacto en América Latina. Antes de analizar sus causas, hago una comparación con la crisis de los años treinta y luego explico cómo se ignoraron las advertencias que indicaban que se avecinaba una crisis como la actual. Por último, vuelvo a referirme a la probabilidad de que se produzca un cambio de paradigma.

La crisis financiera estalla y se convierte en una crisis económica

Si bien los orígenes de la crisis actual se remontan a los acontecimientos que tuvieron lugar antes de que la gente comenzara a hablar acerca de la crisis, la crisis en sí misma comenzó a cobrar forma hace poco más de dos o tres años, con un agravamiento visible en el último trimestre de 2008.

Los primeros signos de una crisis financiera y, más tarde, económica aparecieron cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2006. Los títulos con respaldo hipotecario perdieron su valor de inmediato pero no fue hasta el verano de 2007 que se derrumbó por completo el mercado de las hipotecas de alto riesgo *(subprime)*. Cuando eso sucedió, los bancos

comerciales perdieron la confianza entre ellos, y el mercado interbancario, que es el ámbito donde los bancos se prestan unos a otros, comenzó a agotarse. Más tarde, una vez que las pérdidas bancarias ya se habían hecho más evidentes, las tensiones en el mercado interbancario se intensificaron y muchos bancos de Estados Unidos debieron recurrir a Asia y Medio Oriente para obtener capital adicional.

En el verano de 2007, un fondo de riesgo del banco de inversión Bear Sterns quebró y el banco británico Northern Rock experimentó una corrida bancaria como no se había visto en décadas. A principios de 2008, Northern Rock fue nacionalizado por el Estado británico y Bear Sterns, vendido a un 6% de su valor de mercado a J.P. Morgan Chase en una operación que incluyó la garantía por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de US$30.000 millones en activos incobrables.

Desde septiembre hasta octubre de 2008, la crisis financiera entró seriamente en erupción. El banco de inversiones Lehman Brothers colapsó y desencadenó una serie de fallas en otras instituciones bancarias y de inversión. El Bank of America tomó control de Merril Lynch, AIG Insurance recibió US$ 85.000 millones del gobierno estadounidense y bancos grandes como el Washington Mutual y Warchovia se fueron a la quiebra. En Islandia estalló una crisis bancaria y se nacionalizaron varios bancos del Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos. El precio de las acciones se desplomó y la mayoría de los países de Europa aprobaron paquetes de rescate financiero. En efecto, para salvar al sistema financiero, los gobiernos movilizaron efectivo y otros fondos como nunca antes lo habían hecho.

Con un colapso casi inédito del mundo de las finanzas —la pérdida estimada de riqueza financiera a nivel mundial asciende a US$50 billones o el equivalente del PBI mundial de un año— la crisis financiera se tornó económica. Durante 2008, las proyecciones económicas se subestimaban continuamente. A principios de año, se esperaba que el crecimiento en 2009 en Estados Unidos, Europa y Japón fuera del 2% ó 3%; a fin de año se predijo que estas economías se contraerían entre el 1% y el 2%. Gran parte del mundo ya había entrado en recesión hacia la segunda mitad de 2008, y en el último trimestre de ese año se registraron algunas de las caídas de producción más grandes de Europa, América del Norte, Japón y Corea del Sur. El comercio internacional, que ha aumentado año tras año durante decenios, recibió un duro golpe y cayó en forma precipitada a una velocidad que nadie había imaginado. Si no hubiese sido por el crecimiento estable de algunas de las economías emergentes más grandes, todo el mundo habría entrado en recesión.

Hoy, somos mucho más conscientes de las consecuencias de esta crisis. La OIT ha estimado que el desempleo puede sumar otros 50 millones de desocupados en 2009 y que alrededor de 200 millones de trabajadores podrían caer en la indigencia. La cantidad de trabajadores pobres —es decir, aquellos que trabajan pero que no pueden mantenerse a sí mismos y a sus familias por encima de la línea de la pobreza de 2 dólares— podría incrementarse y alcanzar los 1.400 millones. Esto representa el 45 por ciento de las personas empleadas en todo el mundo. También en América Latina el desempleo, que se mantuvo al 7,3%, en 2008, va camino de agravarse[1].

El impacto en América Latina

Mientras se extendía la crisis financiera, muchos observadores especularon con que podría haber un desdoblamiento entre las economías avanzadas de América del Norte y Europa por un lado y las economías emergentes y en desarrollo en el resto del mundo por el otro. Sin embargo, ya hacia fines de 2008, resultaba evidente que ese desdoblamiento no se estaba produciendo. En cambio, tal como lo expresó el Economista Jefe de la OCDE, estábamos presenciando un súper acoplamiento. Ninguna parte de la economía mundial estaba a salvo de la crisis. Rápidamente, todas las economías se vieron

afectadas en el terreno financiero, a través de su economía real o en ambos frentes.

América Latina ha demostrado una mayor resistencia a la agitación financiera que otras partes del mundo y que otras regiones de las economías emergentes también, en especial Asia. Los bancos comerciales en América Latina no quedaron considerablemente expuestos a los activos financieros "tóxicos" que fueron la causa directa de la mayor parte de las pérdidas bancarias en 2008. Se concentraron más en los mercados internos, por lo que fueron menos vulnerables a los shocks externos. Más aún, la región se vio beneficiada por una mayor supervisión y reglamentación preventiva que otras partes del mundo, lo cual es un legado de las crisis de los últimos diez a quince años.

No obstante, el impacto ha sido sustancial. Las pérdidas de valor financiero debido a la crisis hasta el momento se han estimado en US$2,1 billones o el 57% del PBI. En Asia, por otra parte, esas pérdidas representan el 109% del PBI. De las pérdidas registradas en América Latina, US$1.261 millones se produjeron en los mercados accionarios; US$291 millones, en deuda pública y privada, y US$567 millones en otros activos bancarios. Desde junio hasta diciembre de 2008 solamente, el índice del mercado accionario en Argentina cayó un 51%; en Brasil bajó un 49% y en México las valuaciones disminuyeron un 29%.[2] La depreciación de muchas monedas latinoamericanas en relación con el dólar estadounidense incrementó el valor en dólares de todos esos quebrantos.

Si bien es posible que América Latina se haya visto menos afectada por el derrumbe del sector financiero, la crisis de la economía real será muy seria. La restricción de las condiciones crediticias y la desaceleración de la actividad económica mundial ya están incidiendo fuertemente en la región. Por consiguiente, se espera que el crecimiento económico en América Latina caiga del 4,5% del año anterior a menos del 1% en 2009, posiblemente a alrededor de la mitad de un punto porcentual.

Fuentes de ingresos y ganancias en baja

América Latina se ve afectada por los acontecimientos que se suscitan en el comercio, las remesas y el turismo así como en los flujos de inversión extranjera directa. Como ya he señalado, los volúmenes de comercio están cayendo por primera vez en muchos años y, según el FMI, se espera que lo sigan haciendo al menos un 3% en 2009. En general, las economías de América Latina estuvieron más abiertas al comercio internacional durante la década de 1990 y mantuvieron una relación relativamente estable de las exportaciones respecto del PBI del 21% antes de la crisis. La caída de los precios de los *commodities* —que en total bajaron un 45% en la segunda mitad de 2008 después de haber tenido un efecto de tipo burbuja— ya provocó una baja abrupta en los ingresos por exportaciones de muchos países, sobre todo en aquellos que dependen de las exportaciones de materias primas. De hecho, para por lo menos nueve países latinoamericanos, los ingresos de los *commodities* representaron al menos el 2% del PBI entre 2002 y 2007. Para Trinidad y Tobago y Bolivia, respectivamente, esta participación fue recientemente del 22% y del 12% del PBI[3]. La disminución del comercio y los precios de las divisas afectará tanto la balanza de pagos como las cuentas corrientes.

No obstante, la devaluación de muchas monedas latinoamericanas frente al dólar puede compensar algunas de las pérdidas en exportaciones, dado que ello reduce el precio relativo de los productos de la región. En los últimos seis meses de 2008, el real brasileño cayó un 45%; el peso mexicano, un 35%, y el peso argentino, un 14%. Las devaluaciones fueron, en parte, la consecuencia del fortalecimiento de la divisa estadounidense en relación con las monedas más importantes del mundo, pero también fueron el resultado de una disminución de la demanda mundial de exportaciones latinoamericanas y fuertes presiones sobre los mercados financieros de la región.

Las remesas se convirtieron en un canal importante de ingresos para muchos países

latinoamericanos durante los últimos quince años. Si bien los méritos generales de una mayor movilidad de grandes cantidades de trabajadores a puestos de trabajo en países industrializados son cuestionables, el impacto de las remesas resultantes a sus países de origen ha sido significativo. México se encuentra entre los mayores beneficiarios de remesas del mundo mientras que en Honduras las remesas ascienden al 25% del PBI. En 2008, aproximadamente US$70.000 millones de remesas se destinaron a América Latina.[4] Estos flujos han sido relativamente estables y actuaron como fuerza anticíclica en los países receptores. Aún así, son sumamente sensibles a las condiciones económicas en los países de origen. En el orden mundial, y por primera vez en 25 años, las remesas comenzaron a caer en 2008. Las perspectivas para 2009 son igualmente desalentadoras con consecuencias adversas para el poder adquisitivo de muchos millones de hogares de América Latina.

Si bien durante las últimas décadas la inversión extranjera directa (IED) fue cobrando cada vez más importancia en América Latina, también va camino de reducirse. El flujo de IED hacia América Latina se incrementó de US$35.000 millones en 1980 a US$481.000 millones en 2000 y a US$909.000 millones en 2006. Además, América Latina también aumentó su participación total en la IED mundial del 6% al 8%.[5]

A comienzos de 2008, los flujos de capital hacia los países en desarrollo ya habían comenzado a desacelerarse pero luego, en la segunda mitad del año, cayeron bruscamente, reflejando la crisis financiera. Al final, los flujos acumulados para el año fueron tan sólo la mitad de aquellos registrados en 2007, con bajas pronunciadas en América Latina. Según las proyecciones, la caída continuará en 2009. El Instituto de Finanzas Internacionales estima que los flujos netos para América Latina caerán un 75% de su nivel pico de 2007.[6]

Por último, mientras los mercados financieros se mantienen volátiles, existe una considerable incertidumbre acerca de la capacidad de los países latinoamericanos de renovar sus deudas. El riesgo percibido de las inversiones ha traído aparejado un aumento repentino en las primas de riesgo, con incrementos particularmente marcados en Argentina, Ecuador y Venezuela. Lo único que probablemente compense esta situación es el mayor acceso al financiamiento oficial y multilateral. Por ende, después de un período en el que los gobiernos y las empresas latinoamericanas pensaron que no tendrían que depender del financiamiento de las instituciones financieras internacionales, es posible que tengan que rever este enfoque.

A fines de enero de 2009, el estímulo fiscal mundial destinado a superar la crisis ascendió a casi US$1 billón para 2008 y 2009 combinados, con unos US$650.000 millones más en 2010. De estos montos, la mayor parte —más de cuatro quintos— han sido comprometidos por las economías avanzadas. En América Latina, los dos países que anunciaron los paquetes más grandes en comparación con su PBI son Chile, con un 2,2%, y Perú, con un 2,5%. Ambos países tienen bajos niveles de deuda y, en el caso del primero, las autoridades han estado constituyendo un fondo de estabilización exitoso. Todos los demás países han anunciado paquetes que representan alrededor de un 1% del PBI —por ejemplo, Argentina 1,2%, Brasil 1,0% y México 1,1% —, lo que se considera el máximo que pueden afrontar. En última instancia, la mayoría de los países latinoamericanos tendrán que depender del efecto de los paquetes de estímulo de las economías más grandes, además del efecto de sus propias acciones.[7]

Comparaciones con la crisis de los años treinta y otras lecciones de la historia

A tres meses ya de iniciado el año 2009, nadie discute que la crisis actual es la peor crisis financiera y económica que padeció el mundo desde la Gran Depresión de los años treinta. Sin embargo, la situación todavía no está tan mal y, con suerte, no llegará a

estar tan mal como en aquella época. Desde 1929 hasta 1933, 2.500 bancos cerraron en Estados Unidos y el crédito otorgado por las entidades bancarias se contrajo un tercio. El mercado accionario perdió el 75% de su valor, el PBI cayó de manera drástica y el desempleo trepó a más del 25%. En el lapso de un par de años se extendió a otros países y la consecuencia final fue recesiones profundas en todo el mundo. En el Reino Unido, el desempleo creció más del doble hasta llegar al 20% mientras que en Alemania se elevó al 30%. América Latina también fue severamente golpeada, sobre todo en Chile, Perú y Bolivia, en especial a raíz de los crecientes lazos económicos con Estados Unidos en las décadas que antecedieron la crisis.

Las similitudes entre la crisis de la década de 1930 y la actual son claras. Ambas son de naturaleza financiera: primero paralizaron los bancos y luego afectaron la economía real. Ambas estallaron en Estados Unidos y luego se esparcieron al resto del mundo. Y ambas se basan en cierto grado de desequilibrio de la economía mundial así como entre el capital y el trabajo en las economías nacionales.

Sin embargo, también hay diferencias marcadas entre ambas, lo cual indicaría que la crisis de hoy será menos profunda y más corta que la de entonces. Con la ayuda de los gobiernos, los cierres de entidades bancarias no llegaron al mismo nivel y las pérdidas de depósitos así como otros reclamos a los bancos fueron mínimos. La deflación era mucho más fuerte entonces —de alrededor del 5% por año durante varios años— de lo que podemos esperar hoy. El comercio internacional cayó de manera muy pronunciada y se vio limitado aún más por un aumento en los aranceles que, una vez más, no es lo que se espera en esta oportunidad. Y en esa época la cooperación internacional era muy limitada: Estados Unidos actuaba por su cuenta y Europa estaba dividida y demasiado debilitada para actuar. Hoy, la cooperación internacional —con la reunión del G20 de noviembre de 2008 y la próxima de abril de 2009— ha sido mucho más ágil y parece ser auténtica y decidida.

Al parecer, se aprendieron muchas de las lecciones que dejó la Gran Depresión: la más importante, la de actuar con rapidez y de manera agresiva e integral. La Gran Depresión alcanzó semejante grado de severidad porque los formuladores de política siguieron métodos ortodoxos que permitieron que se contrajera el crédito, colapsaran los bancos y la crisis se alimentara a sí misma durante los primeros cuatro años posteriores al crac inicial del mercado accionario. El proteccionismo excesivo y las políticas de "empobrecer al vecino" permitieron que la crisis persistiera y acentuara el desmoronamiento de la economía real.

Del mismo modo, se aprendieron muchas cosas de las crisis de Japón y Suecia de la década de 1990. En Japón, durante varios años no se abordó el estallido de las burbujas de los precios de las acciones y de los inmuebles y el efecto resultante sobre los bancos, las corporaciones y la economía en general, lo cual contribuyó a una década de crecimiento débil. En Suecia, en cambio, el gobierno intervino con rapidez para salvar a sus bancos pero sin ofrecerles simplemente un rescate financiero. En lugar de hacerse cargo de las deudas incobrables, el gobierno hizo que los bancos aceptaran sus pérdidas y luego tomó el control como nuevo propietario con capital fresco. Esto estabilizó a los bancos suecos y evitó que los contribuyentes tuvieran que pagar cuentas excesivas por los planes de rescate.

Otra cosa que ha demostrado la historia son los efectos desastrosos de la disminución de los salarios en una crisis. En los años treinta, fueron los salarios en baja los que sostuvieron y extendieron las presiones deflacionarias y eliminaron el piso de la demanda interna. Y fueron la consiguiente caída de los ingresos, la rebaja de los niveles de vida y todo lo relacionado con ello los que dieron lugar al fascismo y el nazismo en los años subsiguientes. Sin embargo, todavía se desconoce si se aprendió esa lección. La crisis actual está ejerciendo presión sobre

los salarios en la mayoría de los países del mundo y aún no se ha visto un compromiso verdadero de los gobiernos de poner un freno a esta espiral descendente que afecta los salarios de los trabajadores.

Las causas inmediatas y las causas raíz

No debería haber duda de que la crisis actual es multifacética y tiene una variedad de causas. No se puede recurrir a un único fenómeno para explicar cómo y por qué ocurrió. Pero ciertamente hay un conjunto de disparadores que merecen nuestra atención. Por un lado, éstos han sido objeto de mucha investigación y descripción durante la última mitad de año. Por el otro, la explicación de estos factores y su dinámica merece mucha más atención de la que yo puedo dedicarle en este artículo. Por consiguiente, sólo mencionaré estas causas inmediatas en forma sucinta y luego dedicaré más tiempo a tratar las causas raíz de la crisis.

En pocas palabras, la crisis fue causada tanto por la desregulación de los mercados financieros y la innovación de una variedad de productos financieros nuevos como por los desequilibrios mundiales y el crecimiento económico basado en el endeudamiento. Durante los últimos tres decenios, se liberalizaron los mercados financieros y se desreguló el sector financiero a un ritmo apabullante. Se autorizó a los bancos comerciales y de inversión a combinar sus actividades, lo cual derivó en el predominio de la cultura de estos últimos sobre todo el sistema bancario. Asimismo, se dio luz verde a los bancos para que aumentaran su apalancamiento —es decir, sus relaciones deuda-capital— y se alejaran de la banca tradicional, donde los préstamos están equilibrados con los depósitos. Con el surgimiento de una amplia gama de prácticas y productos financieros nuevos —como los *credit default swaps* (canjes por incumplimiento crediticio) y otros derivados así como por la llamada "securitización", en la que los bancos revenden todos o la mayoría de los préstamos que otorgan a otros actores— los banqueros se convirtieron en alquimistas. Obtuvieron utilidades espectaculares por dividir y mover enormes sumas de dinero de un lugar a otro. Y tuvieron acceso a estructuras de incentivos que los motivaban a obtener altos rendimientos en el corto plazo sin preocuparse por la rentabilidad de las operaciones en el largo plazo de nuevo.

Al mismo tiempo, la liquidez de dinero inundó el sistema. Los intereses se mantuvieron a tasas muy bajas en muchas partes del mundo y ayudaron a aumentar los niveles de deuda hasta formar burbujas infladas. Los superávit comerciales en países como China, en parte debido a una moneda subvaluada combinada con una demanda constante y fuerte de dólares, hicieron que la economía estadounidense se expandiera utilizando la deuda externa como si fuera un combustible gratuito. Los recortes impositivos para los ricos fueron considerados el equivalente moderno de las sanguijuelas —aplicados por George W. Bush cada vez que la economía necesitaba un nuevo impulso— y condujeron a una mayor especulación financiera. La deuda estaba presente en todas partes mientras que el riesgo de incumplimiento de pago era subestimado por las agencias de calificación, cuyo negocio se basaba en serios conflictos de intereses.

Durante años la economía mundial floreció. El PBI mundial aumentó a una tasa promedio que no se veía desde principios de la década del 70, en su mayor parte atribuible al fuerte crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo. En términos generales, la inflación estaba contenida a pesar de la suba de precios de *commodities* como el petróleo y los minerales. Los precios de los activos se dispararon vertiginosamente sin límites perceptibles. Los economistas, los ejecutivos de empresas, los periodistas y los formuladores de políticas hablaban de un nuevo orden económico, donde el crecimiento podía continuar sin los riesgos y las restricciones del pasado. El mundo estaba en una nueva era.

Sin embargo, una vez más, tal como habíamos presenciado en los últimos tiempos, eso no era cierto. Lo que era nuevo, sin

embargo —y a mí entender son las causas raíz de la crisis—, era el papel que jugaban las finanzas en nuestras economías así como un nuevo equilibrio entre el trabajo y el capital. En las décadas que precedieron la crisis, la importancia y el dominio de las finanzas crecieron tanto en nuestras economías nacionales como en el ámbito empresarial. Al mismo tiempo, los trabajadores perdieron poder de negociación frente a sus empleadores, los salarios se estancaron en muchas partes del mundo, se incrementó la desigualdad y el capital acaparó una parte aún mayor del ingreso nacional.

Financialización

El antecedente más importante de la crisis actual es el hecho de que en las décadas que precedieron la crisis, el dominio de la industria financiera en la suma total de la actividad económica se incrementó en forma considerable. Cada vez más, los mercados financieros determinaron el estado de la economía general mientras que las demandas financieras dictaminaron la conducta empresarial. Los cambios en las tasas de interés y los precios de las acciones moldearon cada vez más los ciclos económicos y las preocupaciones financieras. Y aquellos que expresaban esas preocupaciones tuvieron una influencia aún mayor en la definición de las estrategias corporativas. En resumen, las actividades financieras lograron una preponderancia sobre la producción de bienes y servicios.

Este proceso se produjo a través de cambios que se dieron en diversas partes de la economía. A nivel de empresa, se vinculó al abordaje de "valor para el accionista" del gobierno corporativo, el modelo que adquirió un impulso en Estados Unidos y el Reino Unido a partir de la década de 1980. Éste promueve la financialización de la empresa ya que sostiene que el propósito de su existencia es aumentar al máximo el valor de sus acciones en lugar de sus utilidades a largo plazo. Ve a la empresa como un conjunto de activos que generan diferentes retornos sobre las inversiones y considera que su finalidad es la de incrementar las utilidades a corto plazo manipulando esos activos a través de fusiones, adquisiciones y otras operaciones similares. Se utilizan diferentes ardides financieros, como la recompra de acciones, para elevar el precio de las acciones de la empresa. En síntesis, significa que las empresas dedican más y más recursos a la actividad financiera a expensas de sus actividades centrales.

La importancia de los diversos aspectos de las finanzas se incrementó en forma sustancial con la financialización. En Estados Unidos, entre 1979 y 2005, la contribución del sector de finanzas, seguros e inmuebles al PBI trepó del 15,2% al 20,4%. El empleo como porcentaje del empleo total del sector privado en esos sectores aumentó del 6,6% al 7,3%. Los cambios fueron todavía más marcados en la división de las utilidades corporativas nacionales entre los sectores financiero y no financiero. Por lo tanto, entre 1973 y 2005, las utilidades totales pasaron del 7,3% al 10,3% del PBI. La participación del sector financiero en las utilidades registró un crecimiento especialmente sólido. De ahí que en 1973 las utilidades de las empresas del sector financiero representaron el 25,7% de las utilidades corporativas no financieras pero hacia el año 2000 se habían elevado al 49,7%. Sólo en los últimos años, cuando se produjo un fuerte incremento en las utilidades de empresas no financieras cayeron un poco, llegando al 43,2% en 2005.[8]

De la misma manera, desde hace algún tiempo ya el valor de los activos financieros ha venido aumentando con mucha mayor rapidez que el PBI. Sólo entre 2003 y 2007, la relación de los activos financieros respecto del PBI en todo el mundo aumentó un 45%, de modo que los activos se mantuvieron al 490% a fines de 2007. Esto también ocurrió en América Latina, si bien allí el incremento de la relación fue un poco más modesto, ya que pasó de 135% a 176%, el equivalente a un incremento del 30%.[9]

En el proceso de financialización, el sector financiero asumió una cantidad creciente de deuda. En consecuencia, en Estados Unidos la deuda total del sector financiero se

disparó del 22% del PBI en 1981 al 117% en el tercer trimestre de 2008. En el Reino Unido, donde la actividad financiera tuvo un papel todavía mayor en la economía, la deuda bruta del sector financiero rozaba el 250% del PBI antes de la crisis.[10]

Distribución y desigualdad del ingreso

En las décadas anteriores a la crisis, se intensificaron las presiones sobre los trabajadores en gran parte del mundo. En muchos países los sindicatos se debilitaron y enfrentaron condiciones menos favorables para organizar a los trabajadores y negociar. El aumento de la competencia por los mercados de exportación y la inversión extranjera directa así como la amenaza de la tercerización agregaron todavía más tensiones. Cuando a fines de siglo la cantidad de trabajadores disponibles en el mundo efectivamente se duplicó, se cimentó el predominio del capital sobre el trabajo. El resultado fue el estancamiento de los salarios, con una pequeña porción de los ingresos destinada a los trabajadores, y la creciente desigualdad de las ganancias.

Si bien los salarios se estancaron y redujeron, el crecimiento económico fue, a menudo, sólido y las ganancias corporativas experimentaron una suba vertiginosa. En todas las economías del *G7* —es decir, Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Canadá e Italia— la participación de las utilidades en el ingreso nacional alcanzaron su nivel máximo. Antes de la crisis, las ganancias después de la aplicación de impuestos en Estados Unidos llegaban a su punto máximo como proporción del PBI de los últimos 75 años, y las utilidades corporativas en la eurozona y en Japón también rondaban sus niveles más altos de por lo menos los últimos 25 años.[11]

La participación del trabajo en la actividad económica y el ingreso nacional, por otra parte, prácticamente nunca había sido tan baja. En Estados Unidos, la porción del ingreso nacional destinada a los salarios y los trabajadores en 2006 llegaba a su nivel más bajo en 75 años. La situación era similar en muchos otros países ricos, como por ejemplo en Alemania desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad.[12] Pero no sólo en las economías adelantadas estaba cayendo el porcentaje del ingreso nacional destinado a los trabajadores. En la mayoría de los países pobres, la participación del trabajo en el ingreso nacional se ha venido erosionando desde 1960 hasta la fecha, con una disminución un poco más rápida desde 1993.[13]

Como consecuencia de estos acontecimientos, los trabajadores en muchos países, en especial en Estados Unidos, han tenido que pedir prestado para poder gastar. Por cierto, se ha señalado que la clase trabajadora estadounidense ha experimentado la mayor fiebre de préstamos de todas las clases trabajadoras de cualquier país de todos los tiempos.[14] En general, los cambios en la distribución del ingreso nacional dieron lugar a un estado de subconsumo, que sólo podía ser compensado con una expansión de la deuda.

Advertencias ignoradas

En la actualidad, la mayoría de los formuladores de políticas, los gobiernos y sus organizaciones internacionales se encuentran ocupados expiando sus pecados. La mayoría de ellos sostienen que la crisis actual llegó sin previo aviso y que nadie podría haberla predicho. En Estados Unidos —el punto de inicio de la crisis— culpan a una variedad de idiosincrasias de bancos, ejecutivos de empresas y aquellos que se suponía debían supervisarlos. En el resto del mundo, apuntan a Estados Unidos e insisten en que las causas de la crisis son todas externas y que sus consecuencias son inevitables en la era de la globalización.

Pero hubo advertencias. No muchas, pero las hubo. En los años anteriores al estallido de la crisis, en particular el movimiento sindical internacional expresó su preocupación por la creciente dependencia del endeudamiento en el mundo empresarial. Tal fue el mensaje central de un informe que yo redacté para la Confederación Sindical Internacional (CSI) en la primavera de 2007

y que fue dado a conocer unos meses antes del derrumbe del mercado de las hipotecas de alto riesgo. El informe trataba sobre los fondos de capital privado y los fondos especulativos, que son considerados los protagonistas más visibles de la financialización. Sin embargo, las advertencias fueron más generales:

"No se está lejos de que se produzcan colapsos financieros y bancarrotas de empresas. Éstos podrían ser detonados por empresas individuales o problemas de los fondos, masivas cesaciones de pagos de bonos de empresas, inflación o aumento de las tasas de interés. En efecto, la historia ha mostrado que cuando el endeudamiento desempeña un papel en el desarrollo de un mercado fuerte a menudo las cosas terminan mal. Si quienes reglamentan las finanzas no toman medidas con respecto a los riesgos, si no se lleva a cabo una fuerte evaluación general de los créditos y si las empresas no analizan los valores mínimos de su endeudamiento, la historia podría una vez más demostrar que se repite".[15]

En cuanto al nivel excesivo de endeudamiento, el informe específicamente señalaba que ese uso de la deuda "…crea mayor volatilidad en los mercados y plantea riesgos y preocupaciones sistémicas muy amplias. El exceso de liquidez puede estar pasando de un mercado a otro, afectando en primer lugar los bienes inmuebles –donde ya se han hecho grandes ajustes, en Estados Unidos por ejemplo— y luego empresas (o "capital privado", como se las denomina en la jerga de inversiones). El costo de tomar capital en préstamo eventualmente se ajustará hacia arriba. Cuando esto suceda, los precios de los bienes tendrán que bajar y la mayor parte de los actores de capital privado que trabajan con endeudamiento tendrán problemas".[16]

El informe reconocía que la mayoría de los actores financieros parecían más fuertes que nunca pero insistía en que esto era así sólo cuando se los miraba en forma superficial. Por lo tanto, decía que "…aunque en este momento parecería no poder detenerse este auge del endeudamiento, el mismo podría finalizar mucho antes de lo esperado. Su fuerza aparente y su atractivo pueden, en realidad, terminar siendo también su punto débil". El informe era claro al referirse a la naturaleza inflada de los precios de los activos, aunque señalaba que podía ser posible tanto un aterrizaje suave como un descenso dificultoso: "…antes de que la burbuja reviente por sí sola, pueden pincharla los encargados de la reglamentación".[17]

Sin embargo, no sólo el movimiento sindical manifestó su preocupación. A medida que la crisis de las hipotecas de alto riesgo se extendía, surgieron varias nuevas advertencias sobre la posibilidad de un colapso financiero a gran escala, pero igualmente no hubo nadie que reaccionara seriamente. Tal vez la profecía más precisa provino del profesor de Economía Nouriel Roubini. En febrero de 2008, su mirada al futuro indicaba lo siguiente:

"…existe ahora una probabilidad cada vez mayor de que se produzca un resultado financiero y económico "catastrófico", es decir, un círculo vicioso en el que una recesión profunda agrave las pérdidas financieras y en el que, a su vez, las pérdidas financieras considerables y crecientes junto con un derrumbe financiero profundicen aún más la recesión (…). Esa situación —aunque extrema— presenta una probabilidad significativa y cada vez mayor de ocurrencia (…). Luego se producirá una recesión económica mundial a medida que los quebrantos financieros y crediticios y la contracción del crédito se esparcen por todo el mundo. El pánico, las liquidaciones totales, la caída en cascada de los precios de los activos exacerbarán el malestar financiero y económico real al tiempo que una cantidad de grandes instituciones financieras importantes para el sistema quiebran. (…) En esta situación hipotética de derrumbe, los mercados financieros de Estados Unidos y del mundo experimentarán su peor crisis del último cuarto de siglo".[18]

Pero nadie parecía escuchar ni las advertencias de los trabajadores ni los avisos de los académicos. Antes de la crisis hipoteca-

ria, eran ignorados por ser ideológicos. Y con la crisis ya instalada, eran descartados en el convencimiento de que con el tiempo los mercados recobrarían su equilibrio. Por cierto, en la primavera de 2008 —meses antes de la exacerbación de la crisis— el FMI, la Reserva Federal de EE. UU. y el Bank of England difundieron el mensaje de que la peor parte de la contracción del crédito bien podría haber terminado.

Éste fue el punto álgido de una era ideológica y sus promotores todavía no estaban listos para cuestionar su fe en la liberalización y la desregulación totales. Eran escépticos en cuanto a que pudieran tener alguna falencia y creían que la fijación incorrecta de precios del mercado —para ellos eso era la restricción del crédito— sólo sería temporaria. En efecto, estaban seguros de que cambiaría la marea y la situación pronto volvería a ser "normal": alto crecimiento y el sector financiero al frente de la conducción de la economía. Esto sólo era posible porque, durante tres décadas, se habían dicho unos a otros que así era como funcionaba el mundo.

¿Cambio de paradigma?

Hoy esta creencia está cada vez más cuestionada. El péndulo se está moviendo. Es posible que la corriente dominante esté pasándose de la derecha a la izquierda. Algunos de los defensores más acérrimos del mercado han manifestado su preocupación por la falta de autorregulación de los mercados y solicitado mayor supervisión por parte del gobierno. En el ámbito de la formulación de políticas económicas, las antiguas virtudes de Keynes y las economías mixtas están volviendo a lo grande. En efecto, en la actualidad un clásico conservador como el Presidente francés Nicolas Sarkozy es citado a menudo por sus dichos de que "o refundamos el capitalismo o lo destruimos".[19]

Incluso algunas de las instituciones más estrechamente vinculadas a la globalización capitalista están poniendo en tela de juicio las creencias del mercado y admitiendo que han cometido errores. De ahí que el FMI recientemente culpara a los formuladores de políticas por "una creencia general en una regulación benévola basada en el supuesto de que la disciplina de los mercados financieros acabaría con las conductas imprudentes y que la innovación financiera no estaba concentrando el riesgo sino diseminándolo. Estas dos suposiciones resultaron estar equivocadas, y la consecuencia fue una enorme burbuja de los precios de los activos…". En relación con la advertencia sobre la crisis, señaló que "Pese al peligro creciente, ni el FMI ni otras instituciones alertaron con urgencia a las autoridades, ni promovieron una respuesta coordinada".[20]

Hay otros signos de cambio también. Mientras lidian con la crisis, cada vez más países se inclinan por políticas dirigidas a la demanda y utilizan el estímulo fiscal para reactivar sus economías. Los actores más convencionales y ortodoxos respecto de las reformas estructurales —como el FMI y la OCDE, que durante mucho tiempo se mostraron a favor de los estados pequeños y la austeridad en el gasto público— ahora están proponiendo la inversión pública masiva como respuesta de política preferida a la dimensión económica de la crisis.[21]

En muchos lugares ya se está colocando dinero donde se necesita. Esto implica un nuevo equilibrio entre la pata privada y la pata pública de las economías nacionales. Así, la cantidad de dinero dedicada al manejo de la crisis solamente en 2008 es igual a aquella destinada a algunos de los procesos de privatización que se llevaron a cabo en décadas anteriores. Hacia diciembre de 2008, el valor total de la renacionalización de bancos y compañías de seguros en Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de Europa equivalía aproximadamente a revertir la mitad de todas las privatizaciones en todo el mundo de los últimos 30 años. Y la renacionalización de la aseguradora AIG fue, en sí misma, equivalente a revertir todas las privatizaciones que se llevaron a cabo en los ex estados comunistas de Europa Central y del Este desde el final de la guerra fría.[22]

La era de la liberalización y la desregulación que prevaleció hasta la crisis actual comenzó allá por la época en que en su primer discurso de asunción como Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan afirmaba que "el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema". Hoy, nadie parece discutir esto. En efecto, el gobierno ha sido la solución, incluso en opinión de los banqueros y financieros más conservadores. La pregunta, no obstante, es si el gobierno aún mantiene su hegemonía como solución. Y, por consiguiente, si el paradigma está realmente cambiando.

Si bien el FMI ha sido, en general, tajante al asesorar a los países ricos a ampliar su gasto público y, en consecuencia, aplicar políticas anticíclicas, a los países pobres que piden prestado al FMI se les dice que ahorren, que reduzcan costos y que aprueben políticas procíclicas y, por ende, no están recibiendo ninguna flexibilidad más en la política fiscal que la que solían tener. Entonces, si hay un nuevo modelo de política, tal vez sólo esté dirigido a los más acomodados. De la misma manera, las conversaciones con la OCDE dan la impresión de que el cambio en la orientación de políticas sólo es temporario. Una vez estabilizada la economía y restablecido el crecimiento, los gobiernos deberán volver a las bien conocidas políticas de reforma estructural que prescriben baja de impuestos, menor intervención estatal y mercados de trabajo más liberales.

Además, hay otras fuerzas enlenteciendo y tratando de cambiar la dirección del péndulo. Los conservadores ya están arguyendo que esta crisis no fue provocada por la falta de regulación e intervención del gobierno sino precisamente por la existencia de ella. La Reserva Federal de Estados Unidos se equivocó cuando conservó dinero demasiado barato durante demasiado tiempo, engañando temporariamente al mercado, según dicen. Y fueron los organismos gubernamentales los que insistieron en prestar dinero a los particulares que no podía pagar las viviendas que estaban comprando, agregan. Y sostienen tercamente que no fueron los mercados sino la interferencia del gobierno lo que ocasionó los problemas.

Y uno puede tener la seguridad de que una vez que la economía vuelva a estar en forma, los conservadores y los neoliberales —con una voz todavía más fuerte— enumerarán las veinte cosas que los gobiernos hicieron durante las últimas décadas, que en efecto hicieron, y trazarán una línea que conecte esas cosas con la crisis que, para entonces, ya habrá pasado. A partir de eso llegarán a la conclusión de que fueron precisamente esas acciones las que generaron el desastre actual. Y argumentarán que el futuro sólo será benigno si hay menos regulación e intervención gubernamental.

Entonces, ¿estamos en el medio de un cambio de paradigma? ¿O esto no es más que un período de desvíos menores? Todavía no podemos dar una respuesta definitiva. No obstante, el movimiento sindical y los progresistas en general sin duda tienen una gran tarea por delante para asegurarse de que ocurra lo primero y no lo segundo.

1 *Tendencias Mundiales del Empleo 2009,* OIT, enero de 2009

2 ADB, *Global financial turmoil and Emerging Market Economies: Major contagion and a shocking loss of wealth?* [La agitación financiera mundial y las economías de mercado emergentes: ¿un fuerte contagio y una escandalosa pérdida de la riqueza?], marzo de 2009

3 Banco Mundial, *Swimming Against the Tide: How Developing Countries are coping with the Global Crisis* [Nadar contra la corriente: cómo están sobrellevando la crisis mundial los países en desarrollo], marzo de 2009.

4 Banco Mundial, *Swimming Against the Tide: How Developing Countries are coping with the Global Crisis* [Nadar contra la corriente: cómo están sobrellevando la crisis mundial los países en desarrollo], marzo de 2009

5 ADB, *Global financial turmoil and Emerging Market Economies: Major contagion and a shocking loss of wealth?* [La agitación financiera mundial y las economías de mercado emergentes: ¿un fuerte contagio y una escandalosa pérdida de la riqueza?], marzo de 2009

6 ADB, *Global financial turmoil and Emerging Market Economies: Major contagion and a shocking loss of*

wealth?, [La agitación financiera mundial y las economías de mercado emergentes: ¿un fuerte contagio y una escandalosa pérdida de la riqueza?], marzo de 2009

7 ADB, *Global financial turmoil and Emerging Market Economies: Major contagion and a shocking loss of wealth?,* [La agitación financiera mundial y las economías de mercado emergentes: ¿un fuerte contagio y una escandalosa pérdida de la riqueza?], marzo de 2009

8 Thomas I. Palley, *Financialisation: What It Is and Why It Matters* [Financialización: qué es y por qué importa], diciembre de 2007

9ADB, *Global financial turmoil and Emerging Market Economies: Major contagion and a shocking loss of wealth?* [La agitación financiera mundial y las economías de mercado emergentes: ¿un fuerte contagio y una escandalosa pérdida de la riqueza?], marzo de 2009. Nota: Estos activos incluyen instrumentos financieros con garantía (títulos valores respaldados por hipotecas o *MBS* y obligaciones garantizadas por deuda o *CDO)*. No incluyen el complejo grupo de derivados financieros como los *CDS (Credit Default Swaps* o canjes contra incumplimiento crediticio) que multiplicaron aún más el tamaño del mercado financiero.

10 Martin Wolf, 'Seeds of its own destruction' [Semillas de su propia destrucción], *Financial Times*, 8 de marzo de 2009

11 'Corporate profits: Breaking records' [Utilidades corporativas: rompiendo récords], *The Economist,* 12 de febrero de 2005

12 Hansjörg Herr, *From financial crisis to depression and deflation* [De la crisis financiera a la depresión y la deflación], enero de 2009

13 Harrison, Ann E., *Has Globalization Eroded Labor's Share? Some Cross-Country Evidence* [¿La globalización ha erosionado la participación del trabajo? Algunas pruebas de todo el país], UC Berkeley, San Francisco, 2002

14 Rick Wolf, '*Capitalism Hits the Fan'* [El capitalismo choca contra el ventilador], diciembre de 2008

15 CSI, *Cuando la casa siempre gana – Capital privado, fondos especulativos y el nuevo capitalismo casino,* junio de 2007

16 CSI, *Cuando la casa siempre gana – Capital privado, fondos especulativos y el nuevo capitalismo casino,* junio de 2007

17 CSI, *Cuando la casa siempre gana – Capital privado, fondos especulativos y el nuevo capitalismo casino,* junio de 2007

18 Roubini, Nourel: *The Rising Risk of a Systemic Financial Meltdown: The Twelve Steps to Financial Disaster [*El riesgo creciente de un derrumbe financiero sistémico: los doce pasos para el desastre financiero] 5 de febrero de 2008

19 'Merkel and Sarkozy call *for global* 'economic security' council' [Merkel y Sarkozy piden consejo de "seguridad económica" mundial], *euobserver.com,* 9 de enero de 2008

20 'Las lecciones de la crisis: el FMI insta a replantearse el control del riesgo sistémico mundial', Encuesta en línea del FMI, 6 de marzo de 2009

21 Véase *Apuesta por el crecimiento 2009,* OCDE, marzo de 2009; 'Fiscal Policy for the Crisis'[Política fiscal para la crisis], FMI, diciembre de 2008

22 David Hall, *Economic crisis and public services* [Crisis económica y servicios públicos], PSIRU, diciembre de 2008

ENFOQUES NACIONALES DESDE LAS AMÉRICAS

LA RENOVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS

Consejo Ejecutivo
13 Noviembre 2008

Cuando la economía se desmorona, las familias trabajadoras son las más castigadas por el impacto de cada etapa de la crisis. Los trabajadores somos los chivos expiatorios, que vemos nuestros salarios reales estancarse durante varios decenios mientras el poder de negociación de los trabajadores se erosiona frente a los ataques contra los sindicatos y las viciadas políticas de la globalización. Son nuestros ahorros jubilatorios los que se desvanecen y nuestros sueños de ser propietarios de una vivienda los que se esfuman cuando colapsa el experimento de la desregulación financiera, implosiona el mercado inmobiliario y fallan los bancos. Y nos quedamos con esos recibos de color rosa que la empresa nos entrega cuando se da cuenta de que ya no queda nada del motor del consumo que hace funcionar nuestra débil economía.

También debemos estar allí, sentados a la mesa, cuando nuestro gobierno por fin se decide a tomar medidas para hacer frente a la crisis y cuando se han agotado los fondos de los contribuyentes. Esta semana, dirigentes sindicales de los países que conforman el G-20 se reúnen en Washington anticipándose a la cumbre económica convocada por el Presidente saliente George W. Bush con sus contrapartes del G-20. Hoy los dirigentes sindicales mundiales emitieron una declaración conjunta que esboza una posición sindical común para abordar la crisis financiera mundial.

Nos unimos a nuestros compañeros y compañeras de todo el mundo para llamar a nuestros gobiernos a que actúen en forma oportuna, sustancial y coordinada para reducir la profundidad y la duración de la crisis económica mundial.

Sin embargo, el accionar de los gobiernos debe focalizarse en las causas raíz que subyacen a la crisis así como en el inmediato derrumbe financiero. Para que la recuperación económica aquí, en Estados Unidos, sea sólida y sostenible, debemos renovar los cimientos de nuestra economía, reconstruir nuestra clase media, reformar nuestro destruido sistema de salud, restaurar la integridad

de nuestros mercados de capital e invertir en nuestra propia capacidad productiva.

La declaración de la Agrupación Global Unions menciona cuatro elementos clave y cada uno de ellos es importante. La primera prioridad debe ser elaborar un plan de recuperación coordinado para la economía real y un plan sistemático para la inversión continua en la mejora de la productividad de la economía estadounidense en el largo plazo. La semana pasada tomamos conocimiento de que el desempleo llegó al 6,5% en octubre, y hemos perdido 1.200.000 puestos de trabajo desde enero, siendo los sectores de la fabricación y la construcción los más golpeados. Este año, más de un millón de estadounidenses probablemente pierdan sus viviendas ya que se ejecutarán sus hipotecas y un millón de trabajadores desempleados agotarán sus prestaciones. En el último año, billones de dólares de los hogares se evaporaron en propiedades, acciones y fondos previsionales. Todos los indicadores señalan una profunda y prolongada recesión.

Instamos al Congreso a actuar de inmediato y elaborar un paquete sólido de medidas de emergencia para la recuperación económica. Consideramos que para poder ser eficaz, ese paquete deberá ser lo suficientemente grande para compensar la contracción económica proyectada, que ronda el 3% del PBI o, dicho de otro modo, los $450.000 millones. Este importante nivel de inversión es necesario para llevar adelante una reorientación fundamental que permita transformar la economía de burbuja de activos en una economía productiva. Así como el Departamento del Tesoro ha solicitado flexibilidad para redefinir y redimensionar el paquete de salvataje financiero, debemos mantener una postura flexible respecto del paquete de recuperación económica, y modificarlo o aumentarlo según sea necesario, a la luz de los acontecimientos económicos. Y así como el Congreso no dudó un momento en asignar los fondos que se consideraran necesarios para rescatar al sector financiero, tampoco debe dudar en garantizar que el tan necesario estímulo fiscal para Main Street incluya los elementos adecuados, cuente con la debida supervisión y sea de una envergadura apropiada para afrontar la crisis económica.

El paquete de medidas de recuperación económica deberá concentrarse en ayudar a las personas necesitadas y hacer gastos tangibles para incrementar la productividad y la eficiencia. Para ello, deberá incluir una prórroga del seguro de desempleo y vales canjeables por alimentos para ayudar a los más vulnerables a sobrellevar la actual coyuntura económica. Deberá incluir, además, un alivio fiscal considerable en el ámbito estadual y municipal a fin de asegurar que los estados y los municipios puedan continuar proporcionando los servicios vitales de educación, salud, seguridad pública y otros además de empleos. La manera más eficaz de hacerlo es aumentando los fondos del gobierno federal destinados a Medicaid y los subsidios en bloque para el desarrollo de las comunidades y manteniendo el financiamiento para la educación.

El plan de recuperación deberá acelerar la inversión en infraestructura necesaria y en energías no contaminantes para crear buenos puestos de trabajo en el país, lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía y reconstruir nuestro sector manufacturero, que es crítico. A fin de aumentar al máximo el impacto positivo en el empleo de las inversiones en infraestructura y en energías "limpias", el paquete debe contener cláusulas estrictas que promuevan la compra de productos de fabricación nacional (Buy America). Con la intención de evitar el colapso de la vital industria automotriz, el paquete de recuperación deberá incluir una inyección inmediata de capital en las empresas automotrices de modo que puedan mantener su base de empleo estadounidense, junto con asistencia para permitirles cumplir con sus obligaciones de pago de las prestaciones de salud a los trabajadores jubilados.

De la misma manera, el paquete de recuperación deberá estabilizar la previsión social de los trabajadores estadounidenses a través del auxilio a los patrocina-

dores de los planes de pensión que están experimentando déficits de financiamiento debido a la contracción de la actividad económica. Asimismo, resulta esencial que el gobierno intervenga para ayudar a las familias a permanecer en sus hogares y reestructurar sus hipotecas.

Debido a la urgencia de la crisis económica que enfrentan las familias trabajadoras, el Congreso deberá promulgar el paquete de medidas para la recuperación económica en su última sesión bajo gobierno republicano. Si la Casa Blanca o los líderes republicanos obstaculizan este paso esencial, el paquete de recuperación deberá ser tratado inmediatamente el año próximo como prioridad número uno de la nueva administración.

En su reunión, los líderes del G-20 también deberán analizar cómo coordinar el estímulo fiscal en el orden internacional, en un intento por arribar, en lo posible, a un acuerdo de reducciones coordinadas de las tasas de interés.

Más allá de la necesidad inmediata de contar con un paquete de recuperación económica, también es esencial que nuestro gobierno comience, de manera sistemática, a resolver nuestras falencias en cuanto a infraestructura moderna con uso eficiente de la energía a nivel país, desarrollo de la fuerza laboral y atención médica universal. No podemos esperar competir exitosamente en una economía mundial dinámica y en rápida evolución como país de altos salarios si somos incapaces de hacer estas inversiones cruciales.

Un Programa Nacional de Competitividad cubriría el déficit actual de infraestructura de US$1,7 billones mediante la inversión en una infraestructura de nivel mundial que le permita al país prepararse para la economía del futuro. Estas inversiones incluirían información y comunicaciones, escuelas, sistemas de agua y transporte. Asimismo, deberíamos desarrollar una estrategia de innovación que nos permita aprovechar las ventajas de nuestras universidades y laboratorios de investigación y convertirlos en recursos más útiles para las empresas que compiten en la economía mundial.

Una estrategia de competitividad también debe concentrarse en crear una fuerza de trabajo de primer nivel a través de la formación de los jóvenes desarrollando al máximo su capacidad e interés y la capacitación de nuestra fuerza laboral —tanto activa como desplazada— de modo de prepararla para realizar las tareas de mayor valor agregado que sean capaces de cumplir. Necesitamos equipar a los trabajadores con una amplia gama de calificaciones transferibles que los ayuden a conseguir empleo, progresar profesionalmente a través de ascensos, desempeñarse con eficacia en ámbitos laborales de alto rendimiento y adaptarse a los cierres de plantas y los despidos. Los programas de desarrollo de calificaciones pueden mejorar las relaciones entre la dirección y los trabajadores, aumentar la productividad y fortalecer la seguridad en el empleo y la movilidad de los trabajadores.

La reforma integral de la salud, anclada en un nuevo programa público de seguro y dirigida a controlar los costos de la atención médica y ampliar la cobertura a todos los ciudadanos, también ayudará a impulsar la economía al reducir la presión sobre los salarios de los trabajadores así como el costo de hacer negocios de los empleadores.

El segundo elemento para abordar la crisis económica deberá ser la re-regulación de los mercados financieros mundiales a cambio de la intervención gubernamental en el rescate de entidades bancarias y compañías de seguros. La desregulación de los mercados de capital, el apalancamiento excesivo en grandes bancos comerciales y la proliferación de productos financieros complejos y poco transparentes han precipitado la actual crisis financiera mundial.

Debemos restaurar la integridad de nuestros mercados de capitales mediante una reforma fundamental de la normativa financiera. Ello debe incluir: una Comisión Nacional de Valores (Securities and Exchange Commission) revitalizada, rendición de cuentas pública de los bancos centrales,

requisitos de activos anticíclicos y supervisión pública de las entidades bancarias, regulación de los fondos de riesgo y de capital privado, reforma y control de la remuneración de los ejecutivos, reforma de la industria de calificación crediticia, fin de los paraísos fiscales en el exterior, protección adecuada de los consumidores contra los préstamos predatorios y la agresiva política bancaria de ventas, y políticas públicas activas de servicios financieros para la comunidad y la vivienda.

Además, instamos a los líderes del G-20 a analizar la viabilidad de instituir un arancel para las operaciones financieras, tal como lo propuso el Presidente Obama durante su campaña. Dicho arancel —aun cuando se fije a un nivel modesto— podría llegar a producir ingresos de hasta US$100.000 millones por año que podrían utilizarse para compensar la erogación por el salvataje de Wall Street o para ayudar a financiar el paquete de medidas para la recuperación económica. Idealmente, dicho arancel podría ser aplicado por todas las principales economías de manera coordinada.

En tercer lugar, debemos establecer una nueva estructura de gobernabilidad económica para la economía mundial. La declaración de la Agrupación Global Unions llama a redefinir la arquitectura financiera y económica a través de nuevas negociaciones que van más allá del régimen cambiario creado en Bretton Woods en 1944. Los sindicatos deben tener un lugar en la mesa en la que se llevan a cabo estas deliberaciones a fin de asegurarse de que se tomen en cuenta los intereses de las familias trabajadoras de todo el mundo. En estas conversaciones se deberá debatir cuál es la mejor manera de reducir los desequilibrios que existen en la economía mundial a través de la reforma de las normas y las instituciones internacionales que rigen el comercio, replanteando la misión y el papel de las instituciones financieras internacionales y mejorando la transparencia y la responsabilidad en todas las entidades financieras. En particular, el Fondo Monetario Internacional debe desarrollar mecanismos más eficaces para abordar las burdas distorsiones de los flujos comerciales mundiales que se produjeron como resultado de los desequilibrios monetarios.

En cuarto lugar, y muy importante, debemos llegar al corazón del problema y ocuparnos de la explosión de la desigualdad en la distribución del ingreso que se esconde detrás de la crisis. La declaración de la Agrupación Global Unions pide que se garantice "un crecimiento más equilibrado en la economía mundial entre regiones así como dentro de los propios países, entre el capital y el trabajo, entre los trabajadores de altos ingresos y aquellos de bajos ingresos, entre los ricos y los pobres, y entre los hombres y las mujeres". El estancamiento de los salarios y el desgaste del poder de negociación de los trabajadores son el producto de políticas erróneas y un factor importante que contribuyó a la disminución de la capacidad de ahorro de los hogares y la explosión de deuda que precipitó la crisis hipotecaria. La desregulación financiera exacerbó el problema al facilitar préstamos para la compra de viviendas en un momento en que el crecimiento del ingreso era inadecuado. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, toda la estructura, que pendía de un hilo, se desmoronó.

Ahora bien, todos debemos tener en claro que no es posible sostener una economía saludable orientada al consumo sobre la base de salarios bajos, deuda creciente y burbujas de activos. Necesitamos reconstruir la economía real y necesitamos volver a equilibrar el poder de negociación, en especial entre los trabajadores y los empleadores.

Aquí, en Estados Unidos, la aprobación y la implementación de la Ley de Libre Elección del Empleado (Employee Free Choice Act) es un elemento fundamental para la renovación de nuestra economía, no sólo para los próximos seis meses sino para nuestro futuro. Esta ley allana el camino para proteger la libertad de los trabajadores de formar sindicatos y negociar mejoras salariales y mayores prestaciones, sin sufrir acoso ni intimidación. Bajo las actuales leyes laborales

desarticuladas, los trabajadores no tienen poder para negociar salarios decentes, mientras que los presidentes de las empresas exigen contratos y beneficios exorbitantes para sí mismos y reciben paracaídas dorados mientras sus empresas caen en picada. En un momento en el que nuestra economía se ha derrumbado —como consecuencia del poder empresarial excesivo y los niveles grotescos de desigualdad— debemos reconocer que el restablecimiento y la protección de la libertad de los trabajadores de elegir un sindicato es la clave para ayudar a la clase trabajadora a contrarrestar el poder de las empresas y reconstruir la clase media.

Como dijo Barack Obama en Golden, Colorado, el 16 de septiembre cuando estalló la crisis: "Lo que hemos visto en estos últimos días no es nada menos que la sentencia definitiva sobre una filosofía económica que ha fracasado por completo". Nuestra tarea es transformar esta sentencia definitiva en un programa de renovación económica coherente y amplio para nuestro país y hacerlo en forma coordinada con nuestros aliados de todo el mundo.

UN ACUERDO NACIONAL ANTE LA CRISIS

Joaquin Gamboa Pascoe, Secretario General
Intervenciòn durante la firma del Acuerdo Nacional a favor de la Economia Familiar y el Empleo
7 Enero 2009

Se ha dicho por cada uno de mis antecesores en el uso de la palabra, algo de lo que todos estamos concientes, que México se encuentra ante un verdadero problema de carácter económico, una crisis, que es la que nos convoca a reunirnos y que en su momento se deberá firmar un acuerdo.

Lo que pretende el señor presidente es encontrar soluciones y medidas para aplicarlas, de tal manera que esta crisis no llegue a avanzar y sumirnos en una verdadera recesión, creo que debo hacerlo por estricta justicia, ya que el sr. Presidente de la república, tiene un alto compromiso para afrontar y plantear situaciones que atiendan a los objetivos que se mencionan. Con gran dirigencia y oportunidad nos hace el planteamiento de 25 puntos para que se afronte este problema y dentro de ellos mi principal reconocimiento es que le da un sentido muy particular y especial para los que más necesitan. Hace una referencia específica a los trabajadores, esta muy conciente de que están siendo objeto de despidos y una serie de circunstancias, es necesario darles la oportunidad y la restauración económica y que se les incorpore en la mejor defensa de esta nación tan lastimada por las circunstancias económicas que he mencionado.

El objeto de los que hemos hablado, es señalar la idea y el compromiso que adoptaremos ante esta situación, hay que llevarla adelante para poderla superar, porque si esperamos que una crisis se resuelva de forma contemplativa, no se encontrara solución, además tampoco es un problema que por su gravedad el sr. Presidente lo pueda resolver por si solo, ni por cada uno de los gobernadores, sino que todos y cada uno de los mexicanos tenemos la obligación de participar conforme a nuestras posibilidades y alcances para hacer la aportación que corresponda, solo sumando esfuerzos para superar esta crisis, podremos darle a México y a su pueblo un respiro de vitalidad, crecimiento, seguridad y la constancia de que el gasto público se destine a fines positivos, que creen oportunidades de empleo e infraestructura.

Se les da una consideración especial a los trabajadores del sector obrero que tengo el honor de representar en este momento y a nombre de ellos quiero dar las gracias al sr. Presidente.

Independientemente de esta circunstancia, entrando concretamente a lo que puede aportar el sector obrero, nos hemos adelantado un poco, ya lo estamos haciendo, porque somos los primeros en sentir el golpe de estas situaciones, hemos recibido noticias de nuestros compañeros de haber sido despedidos de empresas que están en condiciones de cerrar y esto agrava los problemas que enfrentamos.

Los señores gobernadores son testigos de lo que estoy hablando, ya que por nuestra parte hemos visitado 22 estados de la república y en todos nos hemos reunido con grandes masas de trabajadores en los que hemos señalado los principios siguientes:

En primer lugar que no se siga creyendo que los trabajadores consideren a inversionistas y empresarios como enemigos, eso puede ser un rezago histórico cuando la explotación dio motivo a los movimientos de Cananea y Río Blanco y que fueron superados por un movimiento revolucionario y al final de cuentas se creó la constitución que nos regula, porque México es un país de leyes, de orden, que debe luchar por recuperarlos y por mantenernos. Y en este problema es necesario el aporte de nosotros. En cada una de las reuniones también hemos señalado, y los trabajadores han estado conformes, de que si no hay empresas e inversionistas no hay trabajo para mis compañeros; y que si los trabajadores no dan su rendimiento o lo limitan, hay un daño para las empresas, por lo que se necesita entender que no se trata de un enfrentamiento, sino de una obligada relación de acrecentamiento de los valores económicos que nos dan los patrones en su inversión la justa remuneración que corresponda, y a los trabajadores las condiciones de vida que les permitan a ellos y a su familia mayor integridad y superación satisfactorios.

Por otra parte, hemos encontrado gran respuesta de las Empresas cuando ventilamos estos problemas. En Monterrey se reunieron entre 200 y 400 empresarios y me preguntaron cual es el propósito del sector obrero en esta lucha que estamos emprendiendo conjuntamente, y les expuse que como empresarios e inversionistas merecían nuestro respeto y cooperación, que la Capacitación es una obligación para los trabajadores pero que se requería del apoyo de los empresarios, porque deben contar las empresas con sistemas avanzados para la competencia, para que la productividad se pueda hacer en condiciones apropiadas en el lugar de trabajo.

No creemos en quienes se dedican a obstruir las calles, en quienes tienen parada la Ciudad días completos, a quienes creen que se esta dando una lucha, cuando lo único que hacen es afectar a la ciudadanía que esta cansada de esos abusos, limitando una economía que se ve lastimada cuando los comerciantes se ven afectados por ese tipo de actividades que ni aceptamos ni compartimos; tampoco aceptamos aquellos que creen que la solución son los paros generales o las huelgas. Tenemos una Constitución que nos da el derecho de defendernos, que da derecho a nuestros principales sistemas que descansan en el artículo 123 para estar unidos y ser más fuertes y defendernos emprendiendo nuestra propia lucha; nos da también la contratación colectiva y la huelga que solo se usa en casos indispensables, tan es así que me remito al Secretario de Trabajo y Previsión Social a que pudiera señalar si están en existencia una cantidad extraordinaria de huelgas, ya que la CTM, CROC y el Congreso del Trabajo somos muy parcos y respetuosos de llegar en último caso a este tipo de acciones.

Seguiremos al pie del cañón, los trabajadores no son los mas favorecidos económicamente en la línea social de México, pero su cantidad, presencia y por su aportación para el crecimiento del país, tienen un derecho pleno de participar en todo acto social, económico y político al que el país atañe. Nos sentimos participes de esto, en estas condiciones este pacto tiene un sentido positivo y plural, todos estamos de acuerdo y coincidimos que atravesamos en México un momento difícil y que nos tocara dar lo mejor a todos para llegar a una solución.

Estoy muy contento de que en el Pacto que se firmará, se señale como una situación preferente que cualquier modalidad que corresponda a la relación laboral, deberá ser normativa, y tendrán necesariamente que respetar los derechos de los trabajadores que consigna el artículo 123, eso es lo que los trabajadores están aportando y lo seguiremos haciendo.



POR UN CAMBIO DE RUMBO ECONOMICO Y POLITICO EN MEXICO

Presidencia Colegiada
Enero 2009

El Gobierno Federal presentó el *Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo*. Con este programa el Ejecutivo pretende salir al paso de las crecientes críticas que, desde distintos frentes, se habían realizado debido a la actitud pasiva y autocomplaciente de las autoridades gubernamentales ante la crisis económica mundial. En la presentación de las 25 acciones que integran este proyecto, el Titular del Ejecutivo reconoció por fin que la grave recesión de los Estados Unidos afectará el desempeño de la economía mexicana pero minimizó este hecho con una clara pretensión electorera, reiterando que con una rígida disciplina fiscal y sus reformas estructurales, nuestro país estará en mejores condiciones para sortear los efectos de la crisis. Esta es la idea que determina los alcances y el tono mismo del proyecto gubernamental que pretende aminorar las secuelas negativas de la crisis para evitar, de esta manera, el voto de castigo en los próximos comicios electorales. Un breve análisis de las medidas planteadas por el Ejecutivo servirá para dar cuenta de lo anterior.

En materia de empleo el presunto *Acuerdo* considera cuatro medidas: la aplicación de apoyos hacia las empresas afectadas por la crisis a fin de prevenir los recortes de personal; la ampliación del programa de empleo temporal, es decir, precario y sin derechos; incrementar en cuatro meses el tiempo en que el Seguro Social puede atender a los trabajadores que pierdan su empleo, cuando en realidad ya lo habían reducido de seis a tres meses y mayores facilidades para que los trabajadores despedidos se autofinancien gastando su propio fondo de ahorro para el retiro. Esta última medida, en el fondo, perjudica a los trabajadores porque, en el caso de que más adelante vuelvan a acceder a un empleo formal, los obligará a trabajar durante más tiempo para tener derecho a jubilarse, pone en riesgo, en consecuencia, su futuro patrimonio.

Para apoyar la economía popular se incluyen, entre otras acciones, el congela-

miento en los precios de las gasolinas y la reducción en un 10% de las tarifas del gas LP, medidas positivas, ciertamente, pero que se asumen tardíamente, ya que los incrementos de diversos productos y servicios, como consecuencia del encarecimiento experimentado por estos combustibles en los últimos meses, ha erosionado severamente la economía de las familias mexicanas, sin que el gobierno, hasta la fecha, haya establecido algún tipo de medida para resarcir el daño infligido al poder de compra de la población.

Es de llamar la atención que, para efecto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se impulse la reducción de las tarifas eléctricas para consumo industrial, pero que no ocurra lo mismo con el consumo doméstico. El proyecto del gobierno, parte de la falsa tesis de que basta con aportar algunos apoyos al sector empresarial para que en automático los beneficios correspondientes se derramen al resto de la sociedad.

Paradójicamente, la cuantía de los recursos comprometidos para incrementar el programa de construcción, de infraestructura, ampliar el crédito agropecuario y fortalecer la acción de la banca de desarrollo, parece quedarse muy por debajo de los requerimientos de un país, en el que, la generalización del desempleo y el subempleo se ha convertido en un problema crónico y que próximamente deberá enfrentar a la expulsión de la mano de obra migrante en los Estados Unidos.

Finalmente, las medidas propuestas para dotar de una mayor transparencia al ejercicio del gasto del sector público, representan un reconocimiento implícito de la manera discrecional con que los últimos gobiernos, incluido el actual, manejan estos recursos. Dicha propuesta no es un verdadero avance, ya que la obligación mínima constitucional del gobierno es, justamente, la de ejercer su presupuesto con equidad y transparencia. Las omisiones en esta materia, han generado fuertes reclamos de las organizaciones civiles y campesinas por políticas arbitrarias, como la modificación unilateral de las reglas de operación o el subejercicio del presupuesto social.

Blindar los programas sociales del gobierno federal a fin de garantizar su aplicación oportuna y equitativa, evitando el uso corporativo, clientelar y electorero, es una necesidad impostergable que deberá asumir el poder legislativo ante la fuerte desconfianza que la conducta del actual gobierno suscita en amplios sectores sociales.

En síntesis, el llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo que no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el del crónico déficit fiscal, indispensables para obtener los recursos que el gobierno necesita para impulsar las inversiones productivas, las exportaciones y el consumo, tampoco toca la política financiera, monetaria y bancaria, por lo que podemos afirmar que, con este programa, no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir algunas medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros.

El Ejecutivo Federal no sólo pretende ocultar la verdadera dimensión de la crisis global, sino que también soslaya las dificultades que nuestro país enfrenta desde hace varios años para lograr un crecimiento económico aceptable y generar empleos. Problemas que se han reflejado en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis del campo y el estancamiento del mercado interno.

Ello explica las grandes ausencias y omisiones de este programa gubernamental, en el que no se contemplan programas para el fomento del desarrollo industrial que permitan restablecer las cadenas productivas, severamente dañadas por las políticas de apertura comercial a ultranza aplicadas en los últimos años, ni la concertación de acciones para alentar la producción de alimentos básicos. Mucho menos se considera la aplicación de pro-

gramas para controlar los precios de los artículos que integran la canasta básica, ni para recuperar gradualmente y mediante diversas medidas directas e indirectas, el poder adquisitivo de los salarios.

El ejercicio real de la libertad, la democracia y la autonomía de las organizaciones sociales, como garantía para el establecimiento de compromisos reales para superar la crisis, es otra de las grandes ausencias del proyecto del Ejecutivo; lo mismo ocurre con otros temas que son esenciales para el bienestar de los trabajadores, como la posible autorización de incrementos salariales superiores a la inflación; el fortalecimiento del crédito al salario; la ampliación de los servicios de servicios de salud; educación, transporte y alimentación gratuitos y de calidad; el establecimiento del seguro de desempleo y de un régimen solidario de pensiones y jubilaciones; la reducción sustancial de las tasas de interés crediticio, como las tasas de referencia del Banxico para disminuir el costo del financiamiento, las tasas de interés de la banca comercial y de las tarjetas de crédito y, finalmente, la generación de empleos dignos, estables y con plenos derechos.

Un elemento esencial para sustentar estos y otros planteamientos, es la contratación colectiva auténtica; por ello, resulta indispensable erradicar los mecanismos de simulación laboral que en los últimos años han servido para privar a sectores importantes de trabajadores de sus derechos laborales más elementales. Tal es el caso de los contratos de protección patronal, los esquemas de subcontratación y tercerización o los contratos por honorarios, entre otros. La activación real de negociaciones de estímulos a la productividad, salarios y condiciones laborales en las empresas por medio de los Contratos Colectivos de Trabajo es un factor de primera necesidad en la ruta para superar los efectos sociales de la crisis.

El programa dado a conocer por el Ejecutivo contiene medidas que no pueden desecharse. Sin embargo, deja de lado asuntos torales para el desarrollo del país, como los arriba mencionados y ratifica, con algunos matices de corto alcance, las líneas generales de una política económica que ha resultado incapaz de resolver los graves problemas de la planta productiva nacional y que ha profundizado la concentración del ingreso nacional y el estancamiento del mercado interno.

Por si todo esto fuera poco, el supuesto Acuerdo fue firmado de manera corporativa por las organizaciones oficiales del sindicalismo empresarial, laboral y campesino que no representan a las familias mexicanas y mucho menos, defienden la economía popular, ni garantizan el bienestar y la participación de los principales actores de nuestra economía: las trabajadoras y los trabajadores.

Es necesario hacer notar que el gobierno, en ningún momento, convocó a las organizaciones sociales para discutir las posibles alternativas ante la crisis. Lo que hoy se pretende presentar como un acuerdo nacional es en realidad una colección de acciones que provienen, en su mayoría, de programas gubernamentales que ya están en ejecución. Medidas que el gobierno federal modificó levemente para diseñar su programa anticrisis. Se trata de un programa en el que los principales destinatarios de las tímidas acciones de apoyo gubernamental son los mismos empresarios que se han beneficiado por las políticas de desregulación y libre mercado aplicadas desde hace mas de 20 años y que, ahora que la

crisis se profundiza, insisten en que los trabajadores deben compartir los costos de la misma, moderando sus demandas y aceptando los paros técnicos y la reducción de sus prestaciones.

En la propuesta del gobierno federal, por otra parte, no se menciona ni media palabra acerca de las pérdidas sufridas por los ahorros de los trabajadores afiliados al régimen de las AFORES, ni del problema de la venta de la cartera vencida del INFONAVIT. Lo que demuestra el carácter

inequitativo de un proyecto concebido, en realidad, para respaldar a los empresarios y transferir los costos de la crisis a los trabajadores.

Por todas estas razones la UNT no puede avalar una propuesta como ésta, que en el mejor de los casos, resulta insuficiente para enfrentar la crisis. Desde hace al menos 2 años, hemos denunciado el peligro que enfrentaba el país y presentamos propuestas para transformar el régimen político y cambiar el rumbo de la política económica de nuestro país. Hoy, justamente cuando está por cumplirse el segundo aniversario de que se diera a conocer la Declaración del Zócalo, reiteramos que la alternativa para resolver los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, requiere de una transformación radical de la política económica, en la que la revitalización del mercado interno se convierta en el eje de las políticas públicas, de manera que se garantice el desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía.

En este marco, las acciones de fomento a la industria y al desarrollo agropecuario, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación salarial funcionará como palanca para reactivar la actividad económica. Para ello, se necesita una reforma fiscal progresiva y multianual que aporte los recursos necesarios al gobierno federal. Si los empresarios en verdad desean compartir los costos de la crisis, un buen comienzo puede ser que se decidan a cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales. Ineludible, resulta también, una reforma a fondo del sector financiero que, entre otros objetivos, evite el cobro de comisiones y tasas de interés usureras, aliente la inversión productiva en el campo y la industria, que fortalezca además la banca de desarrollo y evite el manejo especulativo de los recursos que manejan las compañías financieras.

Para construir esta alternativa, desde luego se requiere de un gran acuerdo NO CORPORATIVO de todos los sectores sociales con el gobierno; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, un acuerdo que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas, mediante instrumentos como el Consejo Económico y Social de Estado.

En los próximos días acudiremos a diversos foros como el que convoca el senado a explicar nuestro proyecto y junto a otras fuerzas del sindicalismo democrático, de las organizaciones ciudadanas y del movimiento campesino, nos movilizaremos el próximo 30 de enero para exigir del gobierno federal y el Congreso de la Unión una respuesta satisfactoria a nuestros planteamientos. Apoyaremos los proceso de revisión salarial y contractual de las organizaciones afiliadas a la UNT, ya que a través de ellos será posible avanzar en la construcción de las alternativas de la sociedad ante la crisis, en esta vía promoveremos las alianzas con otros referentes sociales para avanzar en la transformación democrática de nuestra nación e impulsar un nuevo modelo de economía al servicio de las mayorías de nuestro país.

POR UN NUEVO PACTO SOCIAL Y DEMOCRATICO
México, D. F.
"POR LA UNION DEMOCRATICA DE LOS TRABAJADORES"

OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE Y OTRA SALIDA A LA CRISIS, TAMBIÉN. ESCENARIOS DE LAS AMÉRICAS EN EL 2009 Y LOS RETOS DEL MOVIMIENTO SINDICAL

Héctor de la Cueva, Coordinador Ejecutivo del CILAS
y miembro de la ASC, Alianza Social Continental

Aunque sea ya un lugar común para el análisis, es cada vez más dramáticamente claro que la crisis económica global es el factor determinante para todo este periodo y marca los escenarios, aunque de manera desigual, para las Américas. El reto mayor es, especialmente para los trabajadores y sus organizaciones, no sólo la resistencia frente a los efectos nocivos inmediatos, sino sobre todo la salida que tendrá, el modelo económico que surgirá de ella. Indudablemente, el modelo de integración será también un componente fundamental en esa salida. Representando de manera abierta y reconocida una crisis del modelo neoliberal padecido en las últimas décadas, significa también, efectivamente, una oportunidad para plantear y empujar una salida y un modelo alternativo desde la visión del pueblo trabajador. Pero vamos por partes.

Efectos y salida a la crisis: resistencia y alternativas

Como se ha señalado ya repetidamente, la crisis que vive la economía capitalista es aún más grave que la Gran Depresión de 1929 y que otras crisis experimentadas en el Siglo XX. Es más global en la medida misma en que la globalización avanzó en las últimas décadas; es de carácter estructural y no sólo financiera. Como se analizaba en un seminario realizado por la ASC a fines del año pasado, "engloba a su vez otras crisis, como la energética, la alimentaria, la climática. La crisis actual es resultado de un modelo económico en el que ha sido mejor negocio especular financieramente que producir bienes reales", hasta que las burbujas creadas explotan.

Ésta no es una más de las crisis cíclicas del capitalismo; la de hoy es mucha más profunda, pues además de la inevitable sobreproducción que conlleva de suyo el capitalismo, significa la explosión de un modelo económico basado, como dice una declaración signada por numerosas redes sociales internacionales, "en la autorregulación y alimentado por la acumulación por una minoría de beneficios a corto plazo; en desequilibrios financieros internacionales, la repartición desigual de riquezas, un sistema comercial injusto, la perpetración y acumulación de deuda irresponsable, ecológica e ilegítima, el pillaje de recursos naturales y la privatización de servicios públicos. Esta crisis afecta a toda la humanidad, empezando por los más vulnerables (trabajadores, desempleados, campesinos, migrantes, mujeres,…) y los países del Sur, que son víctimas de una crisis de la que no son responsables".

Sin embargo, los desastrosos efectos han comenzado en dimensiones gigantescas en el mismo centro de la economía mundial donde estalló la crisis. En EU se perdieron 2 millones 600 mil empleos en 2008 y los sindicatos informan que siguen desapareciendo empleos a razón de 600 mil por mes!

En México, cuya suerte los gobiernos neoliberales han subordinado a la economía de EU, la CEPAL calcula que en 2009 habrá 380 mil despidos, además de las 541 mil personas que perdieron su empleo de noviembre de 2008 a enero de 2009, según la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se pronostica que el crecimiento económico de México será negativo para 2009, es decir, de 0% o menos.

La CEPAL calcula que se perderán un millón 800 mil empleos tan solo en América Latina y el Caribe durante 2009, y la OIT señala que serán cancelados 20 millones de puestos de trabajo en el mundo en 2009. De acuerdo con esa misma institución los desocupados en el mundo sumarán 210 millones de personas en 2009.

Y las peores consecuencias de la crisis aún están por delante. Como afirma la ASC "las economías que más sufrirán sus efectos serán aquellas que estén más acopladas a los circuitos económicos mundiales, quienes dependen de las exportaciones a los países desarrollados y también quienes más han castigado o perdido su mercado interno debido al neoliberalismo".

Ello significa, desde luego, que el impacto en las Américas será diferenciado, pues ahora también es evidente que los países de Sudamérica que en mayor o menor medida han conseguido recuperar soberanía, no estar completamente subordinados a una potencia, impulsar realmente su desarrollo interno, promover una integración más complementaria, están en mejores condiciones para enfrentar el vendaval.

Sin embargo, es claro que en todas partes el movimiento sindical enfrentará un escenario adverso y defensivo, pues los impactos en el empleo son enormes y esto es usado, para variar, como un instrumento de chantaje para congelar o reducir salarios, para precarizar, flexibilizar y tercerizar aún más, para reducir derechos y, con todo ello, restringir el radio de acción de los sindicatos. La crisis, incluso, está siendo usada como pretexto aun en sectores o áreas en las que no necesariamente tiene un impacto directo, y para profundizar pérdida de derechos. Por ejemplo, en México se pretende volver a colocar una reforma laboral flexibilizadora y regresiva supuestamente como parte de un paquete de emergencia frente a la crisis.

El primer reto, entonces, para el movimiento sindical es conseguir construir una estrategia de resistencia y defensa de las conquistas alcanzadas, de las condiciones de trabajo y de los derechos básicos, pasar la prueba de la crisis preservando lo fundamental. De por sí, esta crisis proviene de treinta años de transferencia de ingresos del trabajo al capital, y el movimiento sindical, en alianzas amplias con el movimiento social, debe hacer eje de la exigencia de que los costos de la crisis no los cargue más el pueblo trabajador, sino los que la propiciaron y se han enriquecido desmedidamente todos estos años. Los estratosféricos recursos utilizados para paliar la crisis están dirigidos a socializar pérdidas para salvar al sistema financiero y a las grandes compañías causantes del cataclismo actual. "Rescatar", en cambio, a la población trabajadora permitiría crear palancas para fortalecer los mercados y el ahorro internos, porque además no puede atribuirse a la protección o mejoramiento de los ingresos una presión inflacionaria, pues la dimensión de su participación en los costos reales de las empresas ha disminuido drásticamente en las últimas décadas.

Más aún, no puede aceptarse que la crisis deba implicar pérdida de derechos; los derechos no cuestan. Toda una reflexión estratégica debe hacerse para impedir que se de marcha atrás en el objetivo de garantizar el trabajo decente con el pretexto de la crisis.

Sin embargo, el reto más importante para el movimiento sindical no es la respuesta inmediata a los efectos de la crisis –que es vital levantar–, sino si a partir de ésta puede,

junto con otros sectores sociales, construir una estrategia que influya en una salida a la crisis diferente a la que pretende imponer el capital. Es decir, la crisis terminará algún día y, como siempre, habrá quien la termine capitalizando. De la última gran crisis de los setentas-ochentas nació precisamente el neoliberalismo que hemos padecido durante décadas. La pregunta es si nuevamente el capital conseguirá recomponerse e impondrá otro modelo de acumulación que implique para los trabajadores y las naciones salir de la crisis con derechos y condiciones aún más recortados o si será posible que desde la sociedad se empuje un modelo alternativo.

El propio Carlos Slim, el mexicano multimillonario que es el segundo hombre más rico del mundo, dijo recientemente que "quizá esta situación económica y financiera sea una oportunidad para tener la visión no sólo de cómo trabajar en ella, sino cómo salir de ella y dónde queremos estar cuando acabe". La aseveración no podía ser más certera. Desde luego, la oportunidad es diferente según el lado en que se esté. Pero para el movimiento social existe también, indudablemente.

La crisis ha venido a probar la falsedad y el fracaso de la ideología neoliberal y sus defensores, que plantearon el dogma de la mano invisible del mercado que lo autorregulaba. Ahora aplauden que la 'mano visible del Estado' los salve, cuando en los últimos 25 años han predicado que éste sólo debe garantizar seguridad y evitar intervenir en cualquier asunto económico.

El "libre mercado", pieza clave de la globalización neoliberal, también está en cuestión, pues cada vez es más claro lo que el propio Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, ya decía hace algún tiempo: "sobre todo, los acuerdos de libre comercio han sido un desastre para los países en desarrollo y en segundo lugar para el sistema global de comercio; la negociación entre Estados Unidos y países en desarrollo no es negociación. Especialmente bajo Bush, ha sido un tómalo o déjalo; no ha sido acerca de comercio de bienes, sino acerca de perder soberanía; no ha beneficiado a ningún país. De hecho, el acuerdo de libre comercio con México fue el más fuerte, pero la brecha entre México y Estados Unidos se incrementó en la primera década. No son acuerdos de libre comercio. No tratan acerca de libre comercio. Y son manejados para dar ventajas a Estados Unidos a costa de los países en desarrollo". Más claro ni el agua.

La cuestión es que el modelo económico que hemos estado combatiendo está en crisis, cuestionado y a la defensiva públicamente, cayendo en evidentes contradicciones. Esto representa indudablemente una oportunidad no sólo para resistir, sino para impedir que de la "superación" de la crisis surja otro modelo quizá más perverso basado en una mayor disminución de derechos; para delinear y empujar un modelo económico y social más justo como salida a la crisis y en prevención de éstas. Es necesario construir y consensar en el movimiento social alternativas concretas en medio de la crisis y para lo que debe surgir después de ésta. Como dice la declaración de las redes sociales internacionales, "el mundo no sólo necesita regulaciones, sino también un nuevo paradigma que ponga las finanzas al servicio de un nuevo sistema democrático fundado en la satisfacción de todos los derechos humanos, el trabajo decente, la soberanía alimentaria, el respeto del medio ambiente, la diversidad cultural, la economía social y solidaria y un nuevo concepto de riqueza".

En fin que, por la crisis global estamos frente a una nueva ola de ataques, pero también en las mejores condiciones para plantear un modelo alternativo al neoliberalismo y el "libre mercado".

Obama en el escenario

Junto a la crisis, indudablemente el otro factor que es necesario tomar en cuenta para determinar los escenarios continentales es el factor Obama, es decir, la interpretación de su elección y lo que puede significar para el rumbo de la política hemisférica de Estados Unidos. En la ASC hemos caracterizado a las Américas como un continente polarizado, confrontado entre la dinámica progresiva que avanza desde el Sur y el bloque duro

neoliberal que encabezaban los tres "cowboys" de EU, Canadá y México. Algo está empezando a cambiar?

Por un lado, no puede minimizarse el hecho de que la elección de Obama representa una victoria contra el racismo. Sobre todo, antes que las intenciones de Obama mismo, debe tomarse muy en cuenta el sentido del voto popular, antibush y contra la continuidad ortodoxa de su política conservadora neoliberal, cuyo modelo fue vinculado fatalmente a la crisis; ante todo, es este sentido del voto del pueblo norteamericano el que crea mejores condiciones y oportunidades tanto para las fuerzas progresistas dentro de EU como eventualmente para las de América Latina y el Caribe. Puede suponerse que en la administración de Obama exista más susceptibilidad a las presiones sociales. Desde luego, por otro lado, no debe dejarse de considerar que, más allá de sus intenciones, Obama puede tener las limitaciones que implica representar también los grandes intereses económicos y políticos de Estados Unidos, y aún está por verse qué tanto se aleja de Bush su política hacia América Latina.

Dejando la dimensión hemisférica para el final, lo más paradójico de la elección de Obama está en su significado en América del Norte, pues mientras que, en cualquier medida, se respiran cambios incluso en EU, en Canadá y México el conservadurismo neoliberal, el bushismo sin Bush, se mantiene así sea con muy escasa legitimidad.

En Canadá, los conservadores consiguieron volverse a imponer, aunque con un margen muy estrecho.

En México, el presidente –"ilegitimo" para muchos pues se le acusa de fraude electoral– Felipe Calderón ha pretendido ser "más papista que el Papa"; aunque cuestionado socialmente de manera permanente y en medio de una cruenta "guerra al crimen organizado", ante la crisis que azota ya dramáticamente al país ha insistido en que "esto no quiere decir que la economía de mercado esté muerta o que la economía global haya terminado. Se necesita ahora, más que nunca, más mercado y más economía global, más comercio y más inversión global", coincidiendo explícitamente con Bush, a la vez que expresaba públicas discrepancias con los presidentes de Argentina y Brasil en este tema.

"México rechazará el neoproteccionismo para enfrentar la recesión", advertía Calderón, aunque poco después caía en las contradicciones que presenciamos en todas partes al anunciar un plan que incluía la intervención del estado y el reciclamiento del viejo slogan "lo hecho en México está bien hecho" que había desaparecido con la apertura indiscriminada neoliberal.

El gobierno mexicano sigue representando al "bushismo" en el G-20 y en los demás escenarios (OMC, UE, APEC), y mantiene abiertas "discrepancias" con el Sur. Desde luego, no es favorable a participar en algún bloque del Sur o, en todo caso, cuando intenta incluirse en alguno es como un Caballo de Troya de EU.

Incluso, el gobierno de Calderón ha polemizado abiertamente con Obama respecto a una posible renegociación del TLCAN, oponiéndose a ello a pesar de las desastrosas consecuencias que ha tenido el tratado para México. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano sigue pidiendo un "liderazgo fuerte" de EU, en la vieja dirección.

Ciertamente, la crisis económica sumada a la social, a la de seguridad y, en general, al ambiente de ingobernabilidad que se vive en el país, combinada al menos en el imaginario de la gente con los centenarios de la Independencia y la Revolución en el 2010, parecieran configurar un coctel molotov en México, pero es mejor no hacer pronósticos.

La V Cumbre de las Américas, a realizarse en el mes de abril en Trinidad y Tobago, será altamente significativa, pues es la primera después de la derrota del ALCA en Mar del Plata y de la asunción de la nueva administración de Obama, el que se encontrará con un continente en el que se han extendido los procesos que escapan a la hegemonía de EU desde la última cumbre y en medio de la catástrofe del modelo que encabezó su antecesor.

FRENTE A LA CRISIS INTEGRACIÓN

A través de largos años, diversas instituciones y personas han venido prestando atención a los cada día más acuciantes problemas de pobreza e inequidad que se presentan en decenas de países en el mundo.

Prestigiosos estudiosos se han referido, por ejemplo, a las graves situaciones de miseria e incluso hambrunas que se producen en vastas regiones como el continente africano, donde cientos de miles fallecen a causa de la falta de alimentos, escasa o inexistente atención médica y graves pandemias como consecuencia de las causas antes referidas, así como de migraciones masivas forzosas a causa de situaciones de guerra, entre otras.

Aunque en menor cuantía, no es ajena a la crisis de la pobreza la región latinoamericana y caribeña.

América Latina está catalogada como la región del mundo de mayor inequidad en la distribución de la riqueza y, a partir de la implantación del modelo neoliberal imperante, se ha presenciado la disminución del empleo, aumenta la emigración de la población trabajadora y el Producto Interno Bruto de las naciones se estanca, retrocede o crece muy por debajo de lo necesario.

Han contribuido a esta situación la fuga de capitales, la transferencia neta de recursos como resultado de abultados intereses sobre préstamos, el consecuente crecimiento de la deuda externa, cuyos servicios han llegado a absorber en algunos países hasta el 50% del PIB y masivos procesos de privatizaciones a ultranza acometidos en la región.

Muestra de ello fue que en el 2003 el PIB regional por habitante fue inferior al de 1997 y continuó elevándose la tasa de desempleo, mientras creció también el número de pobres.

Es por ello que, a pesar del supuesto crecimiento en algunos indicadores en lo macro en los últimos dos años, lejos está nuestra región, y el llamado mundo subdesarrollado en general, de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio impulsados por Naciones Unidas para la reducción de la pobreza en el 2015.

Podemos asegurar que en América Latina, se está presenciando el fracaso del Consenso de Washington y de la política neoliberal impuesta a ultranza en la mayoría de los países.

Sin embargo, en estos graves momentos, en que el mundo se ve sacudido por una crisis múltiple, que se manifiesta en crisis energética, crisis alimentaria, crisis económico financiera y crisis medio ambiental, los grandes ideólogos de la globalización, es decir, los representantes de la ideología neoliberal que sólo defienden los intereses del gran capital privado, representado por las Corporaciones Transnacionales, sólo proponen cambios cosméticos cuyo único objetivo es la preservación del sistema capitalista mundial, imponiendo planes, acuerdos y otras inicia-

tivas contentivas de simples paliativos, pero todas basadas en el mercado como centro y solución de todos y cada uno de los males que golpean a los pueblos.

Es preciso recordar que ante la difícil situación que enfrentaban muchos de los países del orbe, y que se evidenciaba en un creciente reclamo de las organizaciones sociales y los pueblos, se efectuó en marzo de 1995 la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en Copenhague, Dinamarca, en la cual 117 jefes de Estado o de gobiernos asumieron el compromiso de "crear un entorno económico, político, social y legal, que les permita a las personas lograr el desarrollo social".

En esta Cumbre se subrayó la importancia de la equidad, la participación y la solidaridad y se recogió en su Declaración y su Programa de Acción que: "el desarrollo social no sólo dependería del crecimiento económico y de enderezar los llamados fundamentos de la política macroeconómica, sino también de la política social y de una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento".

En tal sentido se pronunció también en su Declaración la IX Cumbre Sindical Iberoamericana, la que reconoce que "la aplicación del modelo neoliberal ha significado la fragmentación social…..reflejada en un creciente deterioro de los niveles de vida de amplios sectores de la población afectados por la creciente desocupación, tercerización, flexibilización, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, incremento de la pobreza, persistencia de la explotación laboral infantil, crecimiento de la desigualdad social."

Esta crisis múltiple, originada en los grandes centros del poder económico mundial, principalmente los Estados Unidos, tiene como una de sus consecuencias principales el desempleo creciente que representa una amenaza brutal contra los trabajadores del mundo.

Si analizamos las predicciones que en materia de empleos publicó recientemente la OIT, constatamos la inmensa gravedad del fenómeno que está ya presente y que se vaticina con mucho mayor impacto.

Esta prestigiosa organización ha previsto diferentes hipótesis para el comportamiento del desempleo, vaticinando que, según el comportamiento de la crisis en el presente año, el índice de desempleo mundial pudiera variar desde 6,1%, con 18 millones más de desempleados, hasta un 7,1% en cuyo caso se agregarían al gran ejército de desempleados existente en el mundo en la actualidad, la respetable cifra de unos cincuenta millones más.

El desempleo en América Latina alcanzó el 7,3% de la fuerza laboral, mientras en el mundo desarrollado y la Unión Europea- donde se ha producido el aumento más significativo, según la OIT- alcanzó un 6,4%, alcanzando la impresionante cifra de 32,3 millones de desempleados, 3,5 millones más en sólo un año.

En Estados Unidos, por su parte, en ocasiones se han eliminado en un solo día 50 mil empleos, alcanzando la mayor cifra de desempleados desde 1945, superando la cifra de 11 millones, y se espera que el índice de desempleo ascenderá aun más hasta un 8,5%.

Asimismo, España ha llegado a la nada envidiable cifra de unos 3 208 000 personas (13,9% de la fuerza laboral) y ostenta el impresionante record de encontrar en el 2009 más de 800 mil familias en las que todos sus miembros están desempleados., mientras Alemania ascendió a casi 3,5 millones de parados, al tiempo que más de 400 mil han sufrido recortes de jornada y de salarios.

Por otro lado, según la misma fuente, el número de trabajadores cuyos salarios miserables no les permite mantenerse a sí mismos y a sus familias, pudiera llegar a la cifra de 1,400 millones, equivalente al 45% de los trabajadores del mundo.

Resulta paradójico que en momentos en la propia OIT conduce una cruzada mundial por el llamado Trabajo Decente, lo que se produce y multiplica en el mundo es el desempleo creciente, la precariedad y la inseguridad, haciendo que una considerable proporción de la población laboral, ante la amenaza del desempleo, se vea obligada a

aceptar cualquier tipo de empleo o forjarlo ella misma, sin importar sus condiciones o miserables retribuciones.

Y en medio de esta escalofriante situación de crisis mundial, resulta indignante conocer que un número importante de miembros del Parlamento Europeo disfrutarán de un considerable aumento de sus salarios, con un incremento de unos 4 mil euros mensuales.

Y mientras en Estados Unidos y otros países desarrollados se vienen aprobando gruesos paquetes de ayuda fiscal a los grandes consorcios bancarios y grandes corporaciones, y a los altos ejecutivos de éstas se les ofrecen bonificaciones multimillonarias. ¡a los mismos que condujeron al mundo a esta crisis! en Europa los Ministros del Trabajo insisten en la aplicación de la directiva que ampliaría la jornada laboral a 65 horas, vulnerando de esa forma el primer Convenio de la OIT que garantiza la jornada de 8 horas, así como el papel negociador de los sindicatos, al imponer la negociación bilateral obrero individual-patrono, todo lo que pone en riesgo el poder, el prestigio y la propia existencia del sindicalismo en esa área.

La CTC y los sindicatos cubanos creemos que este no es momento de depositar la confianza en las gastadas y desacreditadas instituciones que, incluso en instantes de tan aguda crisis, insisten en la aplicación de medidas sólo para salvar a los grandes consorcios, financieros o productivos, con el fin de preservar el mismo sistema que, crisis tras crisis, ha venido demostrando su falencia y su poca capacidad para dar respuesta a las crecientes necesidades de tantos millones de ciudadanos del mundo.

Los sindicatos y trabajadores debemos convencernos, de una vez por todas, de que la crisis no es solo producto de la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, u otras que nos tratan de presentar, sino se trata de un problema sistémico. Es el neoliberalismo el que ha demostrado su inoperancia, lo que queda demostrado con la gran contradicción que se presenta, cuando en momentos de crisis las grandes corporaciones imploran que el Estado acuda en su ayuda, y se produce la intervención estatal en los grandes consorcios privados, a costa de las contribuciones públicas, Es, en resumen, el sistema capitalista, con su carga de inequidades, ambiciones, egoísmos y abusos, el que debe ser erradicado.

No es el mercado a través de la promoción desmedida del consumo y las desigualdades, el que aportará la solución a los problemas del mundo, sino la promoción de la comprensión, el trato justo, la promoción del desarrollo con equidad, el acceso a las tecnologías y el intercambio justo y solidario, teniendo en cuenta las asimetrías entre países, el que puede asegurar un desarrollo que alcance a todos los pueblos.

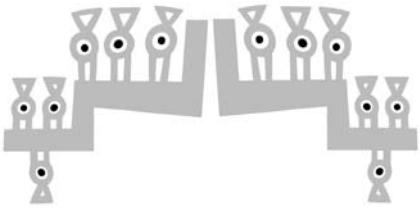
No es el mercado, ni los llamados Tratados de Libre Comercio, sino la cooperación desinteresada la que promoverá el desarrollo y la salida de las crisis.

Es la promoción de inversión productiva que genere empleos dignos y el control estatal sobre los mercados financieros, y no la especulación financiera lo que se impone.

En ese camino, algunas naciones de América Latina y el Caribe marchamos hacia una integración verdadera, no basada solo en el comercio, sino en la colaboración mutua, la complementariedad y la solidaridad, no en la brutal y egoísta competencia que caracteriza las relaciones de los grandes centros de poder con sus vecinos menos desarrollados, sino en el trabajo común por la promoción del desarrollo en lo económico y lo social, haciendo énfasis en importantes programas sociales que nos conducen a la eliminación del analfabetismo, la promoción de la salud, la seguridad energética, la seguridad alimentaria, y la promoción de la cultura, entre otros importantes rubros.

Este es el momento de exigir nuestros derechos tan largamente desconocidos y despreciados.

Para los trabajadores del mundo el momento es de unidad en la diversidad, de unir nuestras mentes y acciones en defensa del empleo, la educación, la salud y la seguridad social como derechos consustanciales al ser humano.



UNIDAD FRENTE A LA CRISIS

Gabriel del Río Doñé, secretario general
Elpidio Santos, asesor



Lo primero que hay que admitir es que la actual crisis que hoy vive el mundo a unos niveles sin precedentes, no es más que el fracaso de neoliberalismo como máxima expresión de Capitalismo salvaje, cuyos ideólogos pensaron que las leyes del mercado estaban por encima del ser humano haciendo del trabajo una mercancía y apartando al Estado como ente regulador, para convertirlo en un simple observador.

Hoy vemos como estos mismos actores en momentos de la actual crisis Internacional recurren precisamente al Estado para que vaya en su auxilio para salir del descrédito y la quiebra en la cual han sucumbido, muchas instituciones financieras.

Lo triste de esta situación es que precisamente todos los efectos de la crisis se quiere revertir en contra de la clase trabajadora. En Republica Dominicana, ello se está traduciendo en el cierre de empresas, como es el caso de la Falcon Bridge Dominicana (Mina de Ferroniquel), con la cual se perdieron cientos de empleos, luego del cierre de la misma, tomando como pretexto la caída de los precios en los mercados Internacionales.

Igualmente, la empresa Curning Cable Systems, que se dedicaba a la fabricación de fibras ópticas, se ha retirado a México, en busca de mejores facilidades luego de más de 20 años de operación en el país, dejando sin empleo a más de 1,500 trabajadores en forma directa, alegando falta de competitividad en el país. A estas acciones se ha sumado la perdida de empleo de cientos de trabajadores/as en las Zonas Francas Industriales, básicamente en el sector texti. Según los mismos ejecutivos de este sector estiman que en los primeros meses de este año se podrían perder alrededor de 15,000 empleos solamente en este sector.

A esta grave situación de los empleos se le suma el hecho de que contamos con bajos salarios mínimos en el sector privado, ya que el más alto es de RD$ 7,360.00 mensuales, equivalente a US$210.00 (dólares) mensuales, frente a una canasta

familiar (alimentos y servicios) por encima de los RD$ 20,000.00 mensuales para una familia promedio de 3 personas.

Ante este escenario, el movimiento sindical lleva seis meses luchando frente al sector empleador por un aumento general de salarios, sin tener respuesta de los mismos, los cuales hoy frente a la crisis y en nombre de la misma están desarrollando una estrategia de que hay que reducir costos a como de lugar y mantener en lo posible los empleos, sin importar la precariedad en que se desenvuelven, llegando inclusive a proponer una revisión de las cargas sociales.

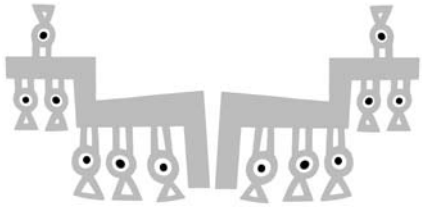
Todo esto crea mayor incertidumbre en un ambiente de falta de libertad sindical y la negociación colectiva, cuyos aspectos reflejan cada día un mayor déficit expresando el gobierno una falta de voluntad en los propios compromisos que ha asumido en la firma de los compromisos del Libro Blanco de la OIT, donde se compromete a trabajar en las áreas fundamentales que tocan los derechos de los trabajadores, además del Plan Nacional de Trabajo Decente, el cual se ha quedado solo en literatura. Esto ha obligado al movimiento sindical a elaborar una agenda sindical común, junto a la OIT, tomando como base el PNTD.

Hoy quienes por muchos años han creado grandes fortunas, pretenden que seamos los trabajadores los que tomemos la carga más pesada de la crisis. Se perderán nuestros empleos, se crearán más pobres, se agudizará la crisis en los principales servicios, faltará seguridad ciudadana, aumentará el narcotráfico, flagelo de nuestra juventud, aumentará la corrupción a todos los niveles, etc..

Las centrales sindicales estamos participando en la cumbre por la Unidad Sindical frente a la crisis, la cual ha sido convocada por el Gobierno, como un esfuerzo de que los Interlocutores Sociales, busquemos formulas que nos permitan identificar soluciones posibles.

REPUBLICA DOMINICANA

CNTD, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos



ENFOQUE FRENTE A LA CRISIS

Jacobo Ramos, Secretario General

La crisis capitalista mundial que todo indica tiene sus orígenes en una gran especulación y corrupción en los centros financieros internacionales, ha golpeado de manera inmisericorde no solo a los llamados países en vía de desarrollo, sino también a aquellos de economías fuertes o del primer mundo, y cuyas manifestaciones mas expeditas se expresan en el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores.

Como muestra de lo que decimos, en nuestro país, por ejemplo, en menos de un mes han despedido de las empresas de zonas francas a más de 150 mil trabajadores, ante la falta de pedidos de mercancías por parte de sus compradores en los mercados internacionales por una ostensible disminución de la demanda, así como por la incapacidad de inversión de capitales en empresas sin tasas de retorno.

Aquí, como en casi todo el mundo, el sector empleador entiende que la mejor forma de reducir costos a los niveles de inversión para producir determinadas mercancías, es con el despido de sus trabajadores lo que de hecho implica un incremento en los niveles de pobreza y marginalidad.

Las principales fuentes de ingresos de divisas en el país, a saber, remesas, turismo y zonas francas, han sido afectadas considerablemente por los efectos de esta crisis dada la delicada situación económica de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

La remesas que envían los dominicanos en el extranjero es el fuerte de nuestra economía, se ha visto reducida por la gravedad económica en Estados Unidos como en países de Europa, principalmente España, naciones en al que viven millares de dominicanos.

En los últimos meses del año pasado, se redujo la visita de extranjeros al pais dado el estallido de la crisis económica mundial, y el turismo que es nuestro segundo renglón económico, se resintió. Muchas de las empresas de zonas francas han despedido a miles de trabajadores pese a que el gobierno acordó subsidiar el empleo en este sector a razón de 2500 pesos por cada trabajador empleado, equivalente a mas de 70 dólares al mes, como forma de evitar que sea cesanteado.

Uno de los renglones mas afectados por esta crisis económica es el agrícola, por el

incremento d e los costos en los insumos, lo inestable del mercado local e internacional reducido en sus posibilidades de compra porque la demanda disminuye con el desempleo de un lado y la especulación del otro.

Como consecuencia de esta realidad se incrementa la marginalidad y la exclusión social en los estratos más bajos de la sociedad donde la delincuencia y los vicios atrapan a la juventud por el desempleo que al respecto vale decir registra el más alto índice de desocupados de la región centroamericana.

El 56% de la mano de obra ocupada es informal, se trata de empleos mal remunerados, sin seguridad social ni protección alguna de las leyes laborales, puestos de trabajo a merced de los vaivenes del mercado que casi siempre conspira en su contra.

Del 2004 al 2007 se crearon en el país 294 mil empleos de los cuales el 86 mil se quedaron en el sector informal.

Es decir que la nuestra es una economía en su mayoría de menesterosos que trabaja el día a día en busca de recursos para suplir sus necesidades elementales.

Esta realidad tiene su historia. En el informe sobre Desarrollo Humano del año 2005 del PNUD, en una de sus notas introductorias refiere que la Republica Dominicana ha sido el país cuyo crecimiento del PIB ha sido el más alto en los últimos 50 años, pero esa riqueza fue apropiada en su mayoría por empresarios y políticos que dejaron tras de si una estela de pobreza y miseria, al extremo de que al día de hoy, de sus 9 millones de habitantes mas de la mitad vive en condiciones de pobreza.

Somos el tercer país que menos fondos destina al gasto social en América Latina. En el periodo 2004-2007 apenas un 6.3%, incluso por debajo de Bolivia, un 17%, país considerado entre los cuatro mas pobres del continente.

Como ejemplo, vale decir que el año pasado, el gobierno debió invertir unos 73 mil millones de pesos en educación, equivalente al 4% del PIB, y sin embargo solo invirtió alrededor de 30 mil millones de pesos, menos del 2%.

Modelos fracasados

El estremecimiento del modelo neoliberal impuesto por el gran capital en la década de los 90 en el manejo de las economías parece que llegó a su fin. Excesivo interés en las ganancias, explotación sin par de la mano de obra, reducción del gasto social, apertura de mercados donde los más fuertes se comieron a los más chiquitos, corrupción en el manejo de las finanzas privadas y públicas, poca transparencia, trajo como consecuencia un sombrío panorama en muchos países.

La práctica demostró que los conceptos neoliberales de gobernar impuesto por las grandes corporaciones multinacionales y el capital local, redujeron las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de los pueblos latinoamericanos. Redujo la producción local y por tanto las posibilidades de crear riquezas a raíz de incrementar las exportaciones y multiplicar los empleos, mientras exigía cada vez una menor presencia del Estado en los asuntos económicos, pero al mismo tiempo le reclamaba subsidios.

El resultado fue más pobreza acompañada de un innegable resquebrajamiento institucional que abrió las puertas a la especulación y la corrupción sin controles, situación que hoy se registra en los mercados internacionales reflejados en la actual crisis económica.

El clamor de muchos sectores hoy de que el Estado asuma un mayor control de la cosa pública, y que haya una mayor participación de los diferentes sectores en la toma de decisiones para establecer políticas publicas.

Aportes para una estrategia sindical

La política neoliberal aplicada por los gobiernos privatizó la mayoría de las empresas del Estado con el argumento de que era necesario terminar con el subsidio que se les daba para mantenerlas. El empleo fabril fue profundamente afectado lo que se reflejo en el cierre de la mayoría de los ingenios azucareros y otras empresas industriales

del consorcio estatal. Con el cierre de estas empresas vino el desempleo y la pobreza y la desaparición de un sector sindical caracterizado por su lucha y por lograr grandes conquistas económicas y sociales. Igual situación ocurrió en empresas del Estado. La matricula sindical se redujo considerablemente lo que afectó a las organizaciones laborales. Muchos sindicatos desaparecieron.

En la economía dominicana de hoy predominan el turismo, remesas y zonas francas, son las que aportan la mayor cantidad de recursos el erario. Es por eso que el diseño de una estrategia sindical debe estar estructurado a la organización de estos sectores.

Los efectos de la crisis económica internacional nos fuerzan a rediseñar formas de organización sindical que nos permitan crecer y fortalecer nuestras estructuras a partir de esa realidad.

Por lo tanto creemos que para cumplir tales propósitos es necesario lo siguiente:

- Procurar una reforma del Código de Trabajo para lograr por ley que se permita la sindicalización de sectores hasta ahora prohibidos, así como su adaptación al comercio internacional y fijar reglas claras con relación a la participación de la mano de obra extranjera.
- Desarrollar trabajos de organizaron sindical en el sector turístico, comercio, tecnológico y financiero.
- Garantizar una mayor participación en los órganos de dirección del Estado para la elaboración de políticas públicas.
- Implementar programas de difusión del libro blanco.
- Desarrollar amplias campañas de concienciación sobre el concepto libertad sindical, a propósito de la declaración por la OIT del 2009 como AÑO DE LA LIBERTAD SINDICAL.
- Continuar la campaña en defensa del trabajo decente.
- Incorporar el movimiento sindical a los grupos y organizaciones de base de las comunidades y compartir con ellos sus luchas por reivindicaciones propias de sus sectores.

REPUBLICA DOMINICANA

CNUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical
CASC, Confederacíón Autónoma Sindical Clasista
CNTD, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL

CNUS, CASC, y CNTD, afiliadas de CSA/CSI plantearon su posición y propuestas desde la perspectiva del sector sindical, en la Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Económica Mundial, que se inicio el 28 de enero de este año 2009 y que el 18 de febrero se conocieron las propuestas concertadas por los diferentes sectores en una primera ronda, que el 27 de febrero en el discurso de Asamblea Nacional el Presidente de La Republica planteó encaminar las ejecutorias de soluciones a corto plazo. Las propuestas fueron presentadas en el siguiente orden:

1. Planteamiento y reflexión sobre las causas de la crisis

La situación actual nos debe servir para no cometer los errores del pasado, pues sin animo de buscar culpables, todos sabemos que en el origen de todo esto se encuentra el culto al neoliberalismo sustentado en el Consenso de Washington y sus políticas de desregulación financiera, monetaria y laboral, para hacerle el camino mas fácil a las poderosas corporaciones multinacionales; políticas desreguladoras promovidas e impuestas, por los organismos financieros internacionales, que trajeron como consecuencia la debilidad del estado, disminuyendo sus posibilidades de acciones afirmativas de política social y económica, pero que contradictoriamente no eliminó las posibilidades de los déficit públicos ni el endeudamiento.

En ese orden, llamamos la atención de que no podemos implementar las mismas recetas neoliberales que han conducido al mundo a una crisis sin precedente en la historia.

Tal como ha planteado la OIT, la promoción del empleo, la protección social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social, constituye un conjunto eficaz de políticas para responder a la crisis económica actual.

2. Medidas a corto plazo

2.1. Libertad Sindical y Negociación Colectiva

El reconocimiento y respeto de las partes es esencial en el dialogo social, para el fortalecimiento de la democracia y garantizar la gobernabilidad, por ello, en primer lugar y antes que nada, debemos concretar

un acuerdo en torno a garantizar el ejercicio pleno del derecho de sindicación y de negociación colectiva, que es uno de los mas sanos ejercicios democráticos y una poderosas herramientas de redistribución de las riquezas, es otro nivel de dialogo social que permite que los acuerdos marcos suscritos se traduzcan en un lenguaje llano, o sea, se aterricen a nivel de empresa. Este compromiso incluye la parte del gobierno, que como Estado esta obligado a garantizar el ejercicio de estos derechos, a través de la aplicación efectiva de la ley y la promoción de los mismos. De manera especial el gobierno tiene el compromiso de gestionar la modificación de las leyes que se ha comprometido[1] para fortalecer estos derechos fundamentales.

De parte de los empleadores, además de respaldar los proyectos de ley que elaborara la Secretaria de Estado de Trabajo que tienen por objeto garantizar el ejercicio del derecho de sindicación y de negociación colectiva, deben asumir el compromiso de permitir que sus trabajadores ejerzan plenamente el derechos de sindicación y de negociación colectiva, absteniéndose de implementar practicas antisindicales y de intervenir ante las empresas afiliadas a las diversas organizaciones de empleadores que participan en el dialogo nacional para hacer frente a la crisis, cuando en estas se cometan practicas antisindicales instándoles a resolver la situación conforme al derecho. Se trata de traducir el requisito fundamental del dialogo social, que es el reconocimiento de los actores, desde el nivel macro en las discusiones de temas de trascendencia nacional, a nivel de empresa y ocupación, para de esa manera superar lo que ha sido la gran debilidad del dialogo social en nuestro país.

Para asegurarse de que el progreso social no se vea menoscabado, es necesario reconocer la importancia y el significado especial de los derechos fundamentales, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

2.2. Aumento salarial

Para hacer frente a esta crisis es imprescindible estimular el consumo mediante el gasto y la inversión pública y privada, de manera especial devolviéndole al salario su poder adquisitivo. El gobierno debe dar muestra de su compromiso con la protección del poder adquisitivo de sus poblaciones, por ello es impostergable el aumento de salario que desde el año pasado estamos exigiendo de un 40% desde los salarios mínimos hasta 20 Mil pesos y de los 20 Mil pesos a los 30 Mil pesos un 25%.

2.3. Costo de la Vida

En nuestro país se ha hablado mucho de blindar la economía, la CNUS plantea que además de blindar la economía, es imprescindible blindar los sectores más vulnerables de la población.

En ese sentido es indispensable reducir y a partir de la reducción mantener estabilizados los precios de los productos que mas consume la mayor parte de la población y que resultan indispensable para la propia subsistencia de la familia dominicana, como; el arroz, el pollo, la leche, el pan, la azúcar, el café, habichuelas, carnes, vegetales, víveres, etc., los productos de limpieza (detergente, cloro, etc.) y de aseo personal, (Jabón de baño, pasta dental, pañales desechables, toallas y papel sanitario, etc.)

2.4. Creación de Empleos de Urgencia

La perdida de empleos desde el 2do. semestre del año 2008, y los primeros meses del año 2009, ha sido una de las manifestaciones mas sentida de la crisis económica en nuestro país, por ello, debemos priorizar el diseño y puesta en marcha de un programa

[1] En ámbito del "Libro Blanco", el gobierno dominicano se comprometió en modificar el Código de Trabajo con la finalidad de facilitar la negociación colectiva, en especial el Art. 109 que exige al sindicato afiliar a la mitad mas uno de los trabajadores de la empresa, lo mismo que para la huelga, así como para la constitución de confederaciones, tal como se lo ha sugerido la OIT en mas de 12 oportunidades. En el sector publico, el gobierno tiene el compromiso de promulgar el decreto para el Reglamento de la Ley 41-08, en el cual, los requisitos y procedimientos para la creación de asociaciones de servidores públicos, deben estar dispuesto para facilitar y no para obstaculizar estos derechos fundamentales.

de empleos de urgencia, incentivando la construcción publica y privada, las actividades agrícolas, incentivos y facilidades técnicas y crediticias a la micro y pequeña empresa, articulación de actividades de producción de rubros agrícolas, artesanías diversas y otras actividades con las actividades turísticas por comunidad. Este programa de empleos de urgencia debe incorporar un componente de reconversión laboral y de ayudas o indemnizaciones adicionales que debe proporcionar el gobierno a las personas mas necesitadas ante la perdida del empleo.

2.5. Seguridad Social

En momentos de crisis como la actual hay que proteger a las personas más expuestas. Las medidas que se apliquen con tal finalidad deberían comprender de manera prioritaria la extensión de la protección social a los sectores más vulnerables, es necesario extender los beneficios de los subsidios, de las pensiones y sus montos, para evitar que mas personas caigan por debajo de la línea de pobreza, por ello proponemos: La ampliación de la cobertura del Régimen Subsidiado y el aumento de las pensiones a un mínimo de RD$7,000.00, mensuales.

Garantizar los servicios de salud a toda la población, permitiendo que las personas tengan la opción de recibir los servicios por parte del estado, aun cuando aparezca registrado en otro régimen de financiamiento que no sea el subsidiado[2]. Es necesario revisar la situación del Seguro Familiar de Salud (SFS) y garantizar la naturaleza social de la seguridad social, sobre todo en el ámbito de la salud que es vital para el desarrollo de la sociedad.

Inversión de los fondos de pensiones en actividades que promuevan la creación de empleos y el desarrollo del país y en la construcción de viviendas económicas.

En pensiones, sigue siendo sintomática la gran cantidad de recursos acumulados y la baja cantidad de pensiones otorgadas, tanto por discapacidad como por sobrevivencia, el sesgo financiero que tiene el sistema hace que las AFP logren acumular grandes de cantidades de recursos que no se traducen en beneficio de los afiliados, ni en el desarrollo de la sociedad, tal como plantea la ley que dispone que para la inversión de los fondos de pensiones se deberán priorizar la colocación de recursos en aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales y agropecuarias, entre otras.

La salvaguardia de los sistemas de pensiones constituye una prioridad, así como en la diversificación de los fondos de pensiones, de manera especial en la construcción de viviendas económicas. La concentración de los fondos de pensiones en el sector financiero constituye un peligro además de ser una enorme contradicción con la ley, sobre todo en estos momentos de emergencia de creación de empleos, que es una de las formas mas factible y practica para combatir la crisis por su impacto en la dinamización de la economía, tal como se esta haciendo o proyectando hacer en Europa, México, Estados Unidos.

3. Mediano Plazo

3.1. Indexación Salarial

La política salarial es un medio para redistribuir ingreso, generar empleo y satisfacer las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, las centrales sindicales proponemos el diseño y ejecución de una verdadera política salarial, la cual debe estructurarse como un medio para la revisión de brechas salariales internas, en los estímulos a los grupos de menores ingresos, en la capacitación permanente y el reconocimiento económico a esa capacitación. En ese contexto, el mantenimiento del

[2] La Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece 3 regimenes de financiamientos: El contributivo que abarca a los trabajadores asalariados públicos y privados financiado por los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador. El régimen subsidiado que protegerá a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado fundamentalmente por el Estado Dominicano. Y el régimen contributivo subsidiado que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador. De estos tres regimenes solo ha iniciado la aplicación integral del régimen contributivo.

poder de compra es un requisito mínimo de viabilidad para garantizar que el salario no pierda poder de compra, a través de la indexación salarial.-

Esta política salarial, conlleva a mediano plazo que el gobierno aplique un programa económico consistente, con metas claras y aceptables de reducción de la inflación, enfrentando las causas estructurales que provocan dicha inflación, entre las que se destacan la devaluación monetaria, las altas tasas de interés, entre otras.

3.2. Creación consistente y sostenida de empleos decentes

El 30 de junio del 2005 se suscribió en Tegucigalpa Honduras, la "Declaración Tripartita para el Fomento del Empleo y el Trabajo Decente en Centroamérica y la República Dominicana" que sostiene la necesidad de incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad según los parámetros de la OIT en el centro de la política macroeconómica, igualmente, en agosto del año 2007, el país adopto el Programa Nacional de Empleos Decentes, que procura contribuir en el desarrollo económico y social de República Dominicana, a través de la generación de empleo y trabajo decente de forma sostenida, en un marco de eficiencia, productividad, competitividad y justicia social. Esto significa, que el país tiene que diseñar y ejecutar un verdadero programa de creación de empleos decentes, además de a corto plazo como señalamos precedentemente, a mediano y largo plazo, articulado con el conjunto de medidas y programas macroeconómicos, como una acción permanente del Estado.

3.3. Seguridad Social

En el ámbito de la seguridad social, a mediano plazo, se hace indispensable revisar el funcionamiento y las razones de hecho y de derecho que obstaculizan el ejercicio de los derechos de los afiliados en los seguros Familiar de Salud (SFS) de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) y de Riesgos Laborales (SRL).

Igualmente, tomar las medidas e implementar las acciones para el inicio del régimen contributivo subsidiado, para ampliar la cobertura de la seguridad social al sector informal, los trabajadores por cuenta propia y los profesionales liberales.

3.4. Energía Eléctrica

En el mundo contemporáneo la disponibilidad de energía eléctrica constituye un requisito indispensable para el progreso económico y social de los pueblos, pues la relación entre electricidad, actividad económica y bienestar de la población es obvia, por ello, el Estado tiene que asumir su rol, pues tal como hemos observado en los últimos años la privatización de la energía eléctrica ha sido un total fracaso, ahora el subsidio es mayor y el servicio mas deficiente y a un costo imposible para la gran mayoría.

Si la privatización del sistema y las consiguientes enmiendas que se han hecho como el acuerdo de Madrid, etc., no han permitido definitivamente establecer en la Republica Dominicana un sistema energía eléctrica confiable, es obvio que el Estado debe recuperar la autoridad sobre el mismo.

3.5. Seguridad ciudadana

Los cambios que se han dado en la sociedad, reflejan un mayor uso y abuso del alcohol, las drogas, la prostitución infantil, el terrorismo, el fraude, y con todo ello nace una nueva la cultura del crimen, que complementada con las acciones delictivas tradicionales, tienen en ascuas a las familias y todos reclamamos la necesidad de que el estado garantice la seguridad ciudadana, pero esta no se combate con mas violencia y las espantosas ejecuciones que hemos observado por parte de los organismos de seguridad que son los mas llamados a respetar el estado de derecho y los derechos humanos.

Sin que esto implique una justificación a los delincuentes y criminales, pero el ensanchamiento de la brecha social, la afrenta del crecimiento desmesurado de riquezas sin ningún control que se exhiben frente a la mas deplorable pobreza, los salarios de

miseria, la falta de empleos decentes, una educación limitada y deficiente, son causales del aumento de la delincuencia, que sumado a la corrupción y descomposición en el estado y los organismos de seguridad, nos han conducido a esta situación.

Entonces, para combatir la delincuencia, además de las acciones de fuerza en el marco de la Ley, deben ser acompañada por esas necesarias medidas, la mayoría de ellas contenidas en esta nuestra propuesta.

4. Aplicación, seguimiento y monitoreo de los acuerdos

La CNUS, CNTD Y CASC conciben su participación en la Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Económica Mundial, como un ejercicio democrático, en el marco del compromiso que tenemos con el país y de manera especial con el desarrollo del dialogo social, el cual debe contar con ciertas condiciones que faciliten su efectividad, entre ellas aceptar el pluralismo social y el objetivo de reconciliación mutua de intereses con el compromiso de afrontar los problemas de manera conjunta, pero teniendo siempre presente el rol del Estado en la redistribución del ingreso para evitar la ampliación de la brecha entre los mas ricos y los mas pobres.

El diálogo social, que implica la aplicación y seguimiento de los resultados obtenidos con la participación y concurso de los sectores más representativos de la sociedad, es ahora más pertinente que en cualquier otro momento de los últimos años y es imprescindible para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social, por ello, cualquier ejercicio de esta naturaleza debe conllevar el compromiso expreso de la aplicación de los resultados del mismo y de medios de seguimiento y monitoreo efectivo.

En el seguimiento y monitoreo deben incorporarse instituciones especializadas, que como la OIT, puede coadyuvar en que las medidas que se apliquen en el ámbito laboral se enmarquen en el contexto del trabajo decente y garanticen el ejercicio de los derechos laborales, en especial los derechos fundamentales.

POR UN MODELO DE DESARROLLO ENFOCADO EN LA JUSTICIA SOCIAL Y EL BIENESTAR HUMANO

Informe Polìtico del Primer Congreso Ordinario
Febrero 2009

La crisis mundial del neoliberalismo y el espejismo generado por su economía de espuma fortalecen la construcción del consenso social alrededor de las nuevas políticas del gobierno sandinista y su estrategia de nuevas relaciones de cooperación y complementariedad con otros países de América Latina en el marco del ALBA. La desregulación de la actividad económica en muchos países y el cierre de empresas estatales ha llevado a la acumulación y concentración de capital privado en empresas que ahora se han constituido en monopolios exclusivos.

Nicaragua a pesar de tener un crecimiento sostenido del PIB en los últimos 15 años superior al 2% promedio anual ha sufrido un profundo deterioro social. Esto demuestra los efectos perversos del Modelo de Desarrollo Neoliberal impuesto a Nicaragua por EE.UU y Europa a través del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

Es bueno recordar que las dificultades de extrema pobreza a las cuales estamos enfrentados hoy, como la falta de empleo, falta de ingresos en los hogares, prostitución, presencia de niños y niñas en los semáforos de las ciudades, incremento de la inseguridad ciudadana, hacinamiento y promiscuidad por falta de vivienda, de hambre y miseria en miles de hogares, no son producto de medidas del gobierno sandinista hoy, sino, el resultado de la aplicación de políticas económicas y sociales que los gobiernos neoliberales de la oligarquía han venido aplicando con rigor desde 1990.

En los años ochenta, la Revolución Popular Sandinista redujo el analfabetismo del 45 al 12%, expandió los servicios públicos de salud y educación totalmente gratuitos y con una cobertura sin precedentes en la historia nacional, y entregó más de 2.5 millones de hectáreas de las mejores tierras a más de 100 mil familias del campesinado sin tierra. Pero la extrema derecha aprovechó la derrota electoral del sandinismo y el desgaste provocado por la guerra y el bloqueo económico para tratar de desmontar estos avances y logros..

Se privatizaron más de 350 empresas del gobierno y desempleado a más de 272 mil trabajadores en el sector público, y se han monopolizado los servicios de telefonía,

energía, además de la importación y venta de medicinas, azúcar; arroz, etc. La falta de control de la inversión extranjera directa de corto plazo, ha permitido la entrada masiva de toda suerte de casinos, gasolineras y night clubs que sirven más para el saqueo, lavado de dinero y de espejismo de progreso frente a una población desesperada por las condiciones de desempleo y pobreza.

Un desafío estratégico del FNT siempre ha sido nuestro compromiso de lucha para cambiar el modelo capitalista neoliberal que. enfocado al incremento de los resultados productivos, ha llevado al país al desastre económico y social por la alta concentración de renta y capital que genera.

Los intereses de los trabajadores son irreconciliables con el de empresarios neoliberales no patrióticos y su libre mercad. Tenemos la tarea de apoyar al gobierno para avanzar definitivamente en el cambio de Modelo y Sistema. El movimiento sindical representado por el FNT acompañará al FSLN con toda su dirigencia y en la lucha hasta que logremos construir un Modelo de Desarrollo enfocado en la Justicia Social y el Bienestar Humano.

Cambiar y revertir esta situación es el principal desafío de la Revolución Sandinista y de sus fuerzas revolucionarias.

En este sentido el FNT ha ratificado su pleno e incondicional respaldo a la forma de gobernar y a las políticas económicas y sociales del gobierno sandinista y las hace propias en tanto sirven de base para garantizar los intereses de clase del pueblo trabajador pobre de Nicaragua.

El compromiso del FNT es avanzar a un cambio de Modelo de Desarrollo definitivo enfocado en la justicia y el bienestar humano. Para ello, moviliza a sus bases y desarrolla, junto con la Coordinadora Social, una campaña sostenida de educación ideológica hasta desterrar para siempre el sistema y modelo capitalista neoliberal.

El Primer Congreso Extraordinario "Unidos con el Movimiento Social, para derrotar el Modelo Neoliberal" (febrero 2008) y definió líneas de Trabajo de Acción Estratégicas para conducir la lucha del movimiento obrero revolucionario en esta etapa.

Retos y desafíos – Tareas del nuevo periodo.

Recuperar el rol y función de protección social y de bienestar del Estado, evitando que se haga negocio privado con las compras del gobierno. El FNT ha desarrollado una campaña permanente y sostenida para alcanzar este objetivo y ya existe una iniciativa de ley introducida en el parlamento por el FSLN. El FNT ha denunciado permanentemente el negocio privado con la compras del gobierno. Hace falta reformar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

Lucha permanente para que se nacionalice y estatice todo el sector energético y evitar que multinacionales y empresarios privados especulen y chantajeen al gobierno. El FNT ha desarrollado una estrategia de alianza social con más de 40 organizaciones populares que permanentemente discuten en su agenda de trabajo la defensa nacional del sector de energía. Producto de la presión popular el gobierno se vio obligado a intervenir a Unión Fenosa y hoy comparte la dirección de la empresa con un 16% de las acciones.

Hacer una profunda Reforma Fiscal progresiva, para que los que tienen y generan renta paguen más que los que no tienen. Este objetivo es el más estratégico. Este objetivo todavía no se ha logrado y falta mucha organización y movilización para alcanzarlo.

Demandar que se incremente para los trabajadores a C$ 120 mil córdobas anuales, el techo de exoneración del IR y se obligue a los ricos a pagar el 30%. De aproximadamente US$ 1,200 millones de dólares que recoge el fisco en impuestos, cerca de U$300 millones provienen de impuestos a la Renta. De estos, el 80% son aportados por los asalariados, lo cual quiere decir que la mayoría de empresas no pagan o evaden el pago del IR. El impacto inmediato es la incapacidad del gobierno para hacer inversiones públicas que permitan resolver los problemas de pobreza y desempleo. Por

el momento ya se introdujo en el parlamento una iniciativa de ley del FNT para ampliar la base de exoneración de los asalariados hasta los C$120 mil por año. La iniciativa cuenta con el pleno respaldo de la bancada del FSLN en el parlamento.

Movilizar a todos los sindicatos, cooperativas y trabajadores del país para que se reglamente el Banco de Fomento. Monitorear el plan de Inversiones Públicas en cada municipio, para que se incrementen los fondos de apoyo para financiar los programas "Hambre 0" y "Usura 0"

Exigir Referéndum frente a cualquier TLC potencias extra-regionales, para garantizar la soberanía nacional y la fuerza del Estado en ejercerla. El FNT ha movilizado a los sindicatos para que rechacen los TLCs, y ha introducido en la Corte Suprema de Justicia un recurso de Inconstitucionalidad contra el TLC con los EE.UU. También nos hemos opuesto y rechazado a los procesos de negociación de otros acuerdos comerciales, particularmente con Canadá y Europa. Esta misma posición será consensuada con todos las organizaciones Centroamericanas en el marco de la PSCC con el objetivo que sea la posición oficial de todo el movimiento sindical de la región.

Exigir que los fondos de reserva de la seguridad social no continúen enriqueciendo los Bancos de los ricos, y sirvan para organizar el Banco de los Trabajadores. Mientras no se logre esta condición, los Fondos de Reserva se continuarán depositando donde lo decida el Consejo Directivo del INSS.

Exigir que el Estado garantice un Sistema de Salud y Educación Gratuita, y se reestatice y nacionalice totalmente todos los servicios publicos. El FNT ha desarrollado campañas sostenidas para que la educación, la salud, la energía, las comunicaciones, el transporte colectivo, sean totalmente públicas y bajo responsabilidad del Estado. FETSALUD logró desde finales del año 2006 eliminar los privados de los hospitales públicos y actualmente se brinda atención con medicinas totalmente gratuitas. Por su parte, ADNDEN logró eliminar todo tipo de cobro voluntarios en todas las escuelas de primaria y secundaria del país, lo cual permitió que la matrícula estudiantil se incrementara en aproximadamente 300 mil alumnos más a partir del año 2007

Denunciar la naturaleza depredadora y de saqueo neto de recursos del país realizado por la Industria de Maquila. Esta industria ha sido otra ilusión mal contada por los gobiernos neoliberales. La mayoría de ellas son inversiones golondrinas de bajo componente tecnológico y funcionan a través de intermediarios y no de empresas multinacionales reconocidas en los mercados de consumo del primer mundo. Ninguna demanda es posible a este tipo de empresas por daños ocasionados en un país. Sólo entre el 2006 y 2007 en Nicaragua se perdieron cerca de 24 mil puestos de trabajo en este sector debido a la caída de la demanda en el mercado norteamericano. Además de la alta explotación de una fuerza de trabajo escasamente calificada, no paga impuestos ni asume responsabilidad social por los daños ambientales y humanos a las comunidades. Miles de trabajadores (principalmente mujeres jóvenes) ven su futuro truncado cuando se enferman producto de las condiciones inadecuadas de trabajo. Esto tensiona adicionalmente la capacidad del gobierno de brindar servicios de salud que generalmente no cubren las empresas maquileras. . El FNT ratifica que este no es un modelo de empresa que sirva para sacar de la pobreza a Nicaragua. Más bien, es una industria depredadora, y uno de los sectores que más pobreza y drenaje de recursos provoca al país.

Iniciar una lucha permanente y constante en contra de los intentos de privatización de los recursos de agua y de su explotación. En conjunto con la Coordinadora Social y a nivel de todos los municipios del país. se está impulsando una agenda de vigilancia para defender la no privatización del agua y se protejan los mantos acuíferos además que se obligue a las empresas a pagar por la explotación de agua que realizan en pozos perforados particularmente para tal fin.

CATS, Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños

CRISIS INTERNACIONAL Y DEFINICION DE LA ESTRATEGIA SINDICAL

Francisco Quijano, Secretario General.[1]

La experiencia histórica enseña que las organizaciones de este *tipo son un elemento indispensable de la vida social,* especialmente en las sociedades modernas industrializadas. Esto evidentemente no significa que solamente los trabajadores de la industria puedan instituir asociaciones de este tipo. Los representantes de cada profesión pueden servirse de ellas para asegurar sus respectivos derechos. Existen pues los sindicatos de los agricultores y de los trabajadores del sector intelectual, existen además las uniones de empresarios. Todos, como ya se ha dicho, se dividen en sucesivos grupos o subgrupos, según las particulares especializaciones profesionales.
Juan Pablo. II, Laborem Exercens, 1981.

El propósito de esta reflexión es contribuir al diseño de un plan estratégico que permita contraponer los intereses revitalizados de la clase trabajadora a la fuerza impasible del capital.

Para poder diseñar estrategias certeras, eficaces y significativas sobre el manejo, combate o corrección de la crisis es esencial que, sin caer en ideologizadas distorsiones conceptuales, se identifique la dimensión que de ésta se genera en la subjetividad de cada uno de los trabajadores, en tanto estos son componentes de una fuerza social opuesta a aquella que controla y planifica sobre el capital. Así pues, y en términos generales, podemos hablar de esta crisis como aquel fenómeno social que expresa la desintegración de la unidad ontológica de cada uno de los elementos y relaciones que componen el mapa de la organización social, por lo que se refleja la presencia intrínseca de la crisis en los individuos y sujetos sociales, en los aparatos e instituciones económicas, políticas, jurídicas, sociales, culturales, y aún, en las realidades inmateriales como lo son los conceptos, categorías, valores éticos y espirituales, que entrelazados todos ellos dan sustancia a aquello que denominamos sociedad. Es decir, que la crisis, en el sentido que la entendemos, es un hecho antropológico y no natural.

[1] Equipo Jurídico, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Oficios y Profesiones diversas de El Salvador (SITOPDES). Afiliado a CATS

Tal enfoque permite abordar teóricamente a la crisis desde una multiplicidad de situaciones sociales, pues ésta presente en todas y cada una de ellas, revestida únicamente por la caracterología específica de cada situación social concreta. Sin embargo, la crisis, como fenómeno desintegrador, no implica por si misma la anulación de la organización social sino la desconfiguración de su orden preestablecido. Es por ello que, tradicionalmente, se ha vinculado al concepto crisis el concepto de oportunidad, porque esta situación no solo permite sino que obliga el reordenamiento de toda la serie de relaciones sociales que al aparecer sobre las demás profundamente afectadas por esta crisis se encuentran más fragmentadas en la unidad de que se hablaba y por consiguiente más necesitadas de una reestructuración

Así mismo, es importante acotar que la crisis como fenómeno particularizado y cristalizado en una coyuntura debe captarse tanto en el imaginario individual como en el colectivo como el resultado de un proceso social aún más complejo, proceso que formalmente ha expresado a su vez un determinado orden social, el orden social que ahora es atacado por la crisis, y cuyo eje central ha sido montado sobre la lucha encarnizada de los mismos elementos y relaciones que componen tal orden, lo que en esencia viene a caracterizar a éste como un proceso político. Esto implica que a pesar que el orden se presente externamente como un fenómeno estático es ante todo internamente dinámico.

El orden desencadenador de la crisis que ahora se analiza es lo que las ciencias sociales han denominado como capitalismo neoliberalista. La conexión entre ambos elementos (proceso y crisis) es fundamental no solo para identificar la dimensión actual del problema, sino para encontrar una coherencia en las propuestas dirigidas a enfrentar esta crisis, en tanto el examen actual de cada situación social vinculada a ella debe corresponder al examen histórico de los elementos y relaciones configurantes de esa situación dentro del proceso mismo.

Por ejemplo la situación de precariedad en la que actualmente se encuentran las y los trabajadores, en particular los sindicatos; aunque adquiere un cariz específico ante el fenómeno crisis, no puede dejar de verse sino como el resultado del esquema social asumido por este orden neoliberalista en cuanto a la condición social a la que se ha sometido a los trabajadores, esquema denominado bajo el eufemismo flexibilidad laboral. Durante todo este proceso los sindicatos han venido siendo desactivados, los contratos colectivos cancelados, las prestaciones individuales de trabajo violentadas, orillando a la clase trabajadora precisamente a una fase de desfragmentación social que se ve cuantitativamente extrapolada ante la declaración de crisis, pero no siendo ésta última ni con mucho su génesis. Por el otro lado, los sujetos alineados económicamente al Capital han enfrentado su propia lucha cuerpo a cuerpo, bajo el juego mortal de la libre competencia versus monopolización de mercados, en una expresión desencarnada del mítico término "darwinismo social", la desmantelación de grandes sociedades comerciales, la bancarrota de otras tantas, la adquisición y fusión de muchas más, producto, todas ellas, de la especulación financiera, es solo muestra de esa lucha económica que trajo la desintegración desde arriba a otros sujetos sociales por una vía opuesta a la desintegración impuesta por estos mismos sujetos a la de los trabajadores.

Es decir que aunque trabajadores y capitalistas han compartido el mismo proceso configurante que los ha llevado a ambos a una crisis general, el sentido de sus pasos ha sido diferente. Esta inversión de sentidos dentro de una vía unidireccional no solo indica las posiciones de poder específicas de estos sujetos dentro del proceso y dentro del orden en crisis, sino también la distancia entre esas posiciones, pues, aunque la crisis los encuentra juntos, bajo la calidad social que corresponde a cada uno de ellos, la crisis para los primeros no significa ni significará nunca lo mismo que para los segundos. Así, se puede decir que esta crisis es igualitaria en

su contacto pero diferencial en su significado, de manera que se entiende como, finalmente, la crisis respeta las desigualdades sociales en el orden de la organización social.

Por ello se renueva la importancia de uno de los elementos medulares del proceso como es lo político, porque a través del ejercicio del poder se rearticulan las relaciones sociales dañadas. Cada orden social, sin distinciones, necesita un sistema político que vincule al ser humano a un determinado aparato de producción, imponiéndole a su vez aquella función social orgánica requerida para asegurar la operatividad del orden en la organización. En esta razón todas las instituciones del neoliberalismo han girado en torno a la fijación social del ser humano en un mapa donde el mercado aparenta existir sin reglas.

El anterior consenso político entre trabajadores, capitalistas y gobierno estatal, llamado Estado de Bienestar, el cual suponía ciertos logros sociales de la clase trabajadora, queda ahora desarticulado y contra éste se reemprende la misión tan efectiva del capitalismo liberalista del siglo XIX como lo es la atomización del ser humano en tanto trabajador, lo que no entraña una vinculación identitaria entre éste y el orden, sino, como se dijo, la asignación de una posición orgánica individualizada.

Así lo podemos ver en la realidad salvadoreña, donde el diseño de las políticas económicas y sociales siempre han sido diagramadas en los conclaves empresariales, como ENADE, cuya característica esencial ha sido la no inclusión de sectores que representen suficientemente los intereses de la clase trabajadora, como podrían ser los sindicatos u otras asociaciones de trabajadores. Ello en virtud del acuerdo pactado entre la clase política enquistada en los órganos de gobierno y la clase económica oligárquica de utilizar la imagen de los trabajadores únicamente para los procesos electorales.

A partir de esto podemos encontrar, en el fenómeno crisis, la ubicación de dos representaciones igualmente importantes, aunque cualitativamente diferentes. La primera es una representación simbólica y la segunda una representación significativa. La representación simbólica del fenómeno crisis en el orden neoliberal viene dada por la ruptura del edificio teórico de ese orden, o sea, la asunción de la autarquía omnipotente de la figura del mercado, puesto que todo el saber y el poder emanado de ese edificio aparecen ahora, ante la sociedad, resquebrajados, deshechos. El ser humano se ha enterado que todo el orden construido sobre él y a través de él, por el proceso capitalista, es inoperante en tanto que sus propias fuerzas lo han conducido hacia una implosión, y que el rescate de la organización social implica la negación sobre su propio orden, sobre sus postulados y axiomas, sobre sus reglas de anomia.

Por otro lado, la representación significativa de la crisis está contenida en el continente de lo humano, extendiéndose además a todos los esfuerzos culturales que lo rodean. Es el ser humano el origen y fin de la crisis, su objeto primordial. La crisis atraviesa a los hombres y mujeres, desintegrándoles precisamente su humanidad, siendo ejemplo masivo de esto la decadencia colectiva de la sociedad, su infección espiritual, su malestar cultural; las explosiones de violencia colectiva, la insensibilidad intersubjetiva, la neurosis individual y el resto de padecimientos psico-sociales que mantienen al ser humano en un constante estado de guerra contra sus congéneres.

No es difícil entonces pensar en las raíces humanas de la crisis sindical. Una sociedad con un carácter colectivo malsano solo producirá instituciones equivalentes. Si el sistema económico y político coloca en franca competencia a los individuos que constituyen las fuerzas laborales y a sus, cada vez más grandes, reservas laborales pasivas, es coherente pensar en las serias dificultades de conformación que tendrán las organizaciones sindicales, ya que éstas requieren para su funcionamiento, básicamente, la coordinación solidaria de los sujetos que las integran.

Así las cosas, es preciso entender que el entretejido de medidas dirigidas al enfrentamiento eficaz de la crisis pasa irremediablemente por lo político, y la aprehensión que de este ejercicio vital hagan las fuerzas

sociales cruzadas por la crisis es inevitable para ser participes en la conducción de la transformación de la realidad social.

Todo poder, al poseer una naturaleza relacional, está inexorablemente condenado a enfrentarse a una resistencia, la resistencia frente al poder es, por tanto, un contrapoder. En este sentido, y a pesar de la suma de dificultades que se acumulan en la realidad sindical, el solo reconocimiento de la pervivencia de entes sociales tan importantes como lo son las asociaciones sindicales es un aliciente importante a la hora de diagramar las estrategias de poder o contrapoder que traten de redefinir el orden de la organización social en función de los intereses de las grandes colectividades populares.

Por consiguiente deben recuperarse y generalizarse los valores de solidaridad en que se apoyan estas asociaciones, comprendiendo empáticamente que la realidad compartida de la clase trabajadora permite trazar intereses comunes no sólo consigo misma sino con todos aquellos sectores, en especial con los históricamente excluidos de la distribución de la riqueza social, que pretendan democratizar los accesos disponibles a los recursos requeridos para la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos.

Pero para lograr tal democratización es necesario no sólo reafirmar las relaciones de los sindicatos ya vigentes, sino además impulsar la creación de nuevos sindicatos que posibiliten masificar el ejercicio de resistencia más allá de los límites tradicionalmente impuestos, de tal modo que permita volcar la actual estructura jerarquizada en que se establece el orden capitalista mundial.

Tomando en cuenta lo anterior podríamos establecer algunas propuestas políticas sindicales de transformación como las siguientes:

1. Deben incorporarse no solo a los trabajadores sindicalizados sino también a los no sindicalizados a que se unan a la campaña de visibilización de las fuerzas laborales, con el objeto de crear un extenso campo de resistencia que sea capaz de oponerse eficazmente a los aparatos de poder que han impuesto el orden neoliberal actual.

2. Tomar en cuenta que cualquier acción dirigida por estas fuerzas laborales en la reconfiguración de la organización social tiene que tener como base y fin al ser humano, a su dignidad, y al trabajador como sujeto vital para la obtención de la riqueza social, que tradicionalmente le ha sido arrebatada, tanto desde su dimensión de hombre y espíritu.

UNSITRAGUA, Union Nacional de Sindicatos Independientes de Trabajadores de Guatemala

GUATEMALA: UNA CRISIS ESTRUCTURAL

Febrero 2009

Guatemala es un país que ha vivido sumido en una crisis permanente desde el año 1954 y en donde la característica fundamental ha sido el ataque a la libertad sindical y a la eliminación de la interlocución social de los sindicatos.

Estas condiciones han permitido que, tanto las políticas económicas y sociales de los distintos gobiernos que se han sucedido, respondan a los intereses de determinados grupos de poder y, consecuentemente, lejos de llevar al país al desarrollo, han recrudecido las desigualdades, incrementado la inestabilidad social y polarizado la sociedad.

Desde el año 1986 Guatemala vive en una democracia formal; no obstante, a 23 años del retorno a la democracia y a 12 años de la finalización del conflicto armado interno, esta democracia se encuentra lejos de ser realmente participativa y representativa teniendo en cuenta que la tasa de sindicalización ha decaído en más de un 500% en comparación con los niveles de sindicalización existentes aún durante el conflicto armado interno situándose hoy día en su punto más bajo, 0,49% de la Población Económicamente Activa, según los datos proporcionados por el Gobierno al Comité de Libertad Sindical de la OIT en el año 2004.

Las condiciones de debilitamiento del movimiento sindical en Guatemala se recrudecen a partir de la firma de los acuerdos paz y esencialmente durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen, gobierno durante el cual el sector empresarial, cuya expresión política era en ese momento el denominado Partido de Avanzada Nacional –PAN- copa todos los espacios de poder en los tres poderes del Estado y en la propia Corte de Constitucionalidad.

Es durante este período que se promulga el Decreto 35-96 del Congreso de la República, que básicamente elimina las posibilidades de acceder al ejercicio del derecho de huelga por parte de las trabajadoras y trabajadores del Estado al reformar el Decreto 71-86 del Congreso de la República eliminando la posibilidad de reinstalación por represalias dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social; se aprueba el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y se promulga la Ley de Contrataciones del Estado que regulan la posibilidad de

contratar trabajadores mediante contratos no laborales institucionalizando el disfraz de la relación de trabajo, se generaliza la contratación temporal y la triangulación de relaciones laborales con empresas privadas en servicios públicos y la Corte de Constitucionalidad sienta jurisprudencia que debilita la protección contra represalias durante el conflicto colectivo de carácter económico social y admite la cuestión previa como punto de derecho como una excepción a la regulación expresa de la ley, propiciando la lentitud de los procesos en materia de negociación colectiva.

En ese orden de ideas, desde ese período, en Guatemala se sientan las bases del sistema de impunidad y de precarización de las condiciones de trabajo en el país; estructuras que, sobre la base de la propia estructura del Estado, eliminan la positividad de las garantías laborales y generan condiciones de imposibilidad real para el ejercicio de la libertad sindical.

No obstante, no toda la situación actual del movimiento sindical en Guatemala es producto de factores externos; de hecho, el movimiento sindical ha hecho mucho por su propio debilitamiento mediante la dispersión y el impulso de un sindicalismo de carácter corporativista que reduce a los sindicatos de interlocutores sociales a gestores de mejoras salariales dentro del centro de trabajo, con lo cual, la oferta sindical se limita exclusivamente a la defensa de sus agremiados y a la negociación colectiva, cuyo alcance, en medio de un sindicalismo de empresa, se limita al interior del centro de trabajo.

Esto, sin lugar a dudas, ha sido aprovechado por el gobierno y el sector empresarial y han echado a andar estrategias que impiden tanto la sindicalización dentro del centro de trabajo, como que la negociación colectiva, como principal oferta sindical, otorgue cada día menos resultados.

Tanto el disfraz de las relaciones laborales como la triangulación de las mismas y el aprovechamiento por parte del sector patronal de las debilidades de la legislación común que admiten utilizar figuras como la sociedad anónima a manera de escudos jurídicos que permiten la ocultación del capital real al no existir coherencia entre el capital y el monto de los derechos y obligaciones que contraen creando un escenario en donde tanto derechos como obligaciones a favor de los trabajadores y trabajadoras pierden totalmente su certeza jurídica.

En este escenario, se ha operado también un cambio radical en el mercado laboral, en donde más del 24% de la PEA en relación de dependencia se encuentra bajo relaciones laborales disfrazadas; en donde el sub empleo rebasa el 15% de la PEA, en donde menos del 20% de personas se encuentran bajo una relación de dependencia sin que ello signifique que gozan de un trabajo decente y, en donde el resto de la población económicamente activa se desempeña en el trabajo por cuenta propia, mal denominado Economía Informal.

De la misma forma, las condiciones creadas por los tratados de libre comercio y, en sí, por la globalización económica, impulsada desde la perspectiva neoliberal, ha producido también un cambio en el panorama productivo del país. En la última década, se ha operado un leve crecimiento del sector primario de la economía, un estancamiento y reducción del sector secundario y un crecimiento sin precedentes del sector terciario.

Paralelo a esto, de manera paulatina, el sector secundario se ha visto sumamente influenciado por industrias como la maquila; en donde ni los capitales acrecientan el capital del país ni ofrecen condiciones laborales que representen una industria socialmente rentable.

En estas condiciones, la economía nacional, depende fundamentalmente del devenir del mercado internacional ya que, por una parte se produce materia prima y, por la otra, bienes de consumo en donde el valor agregado no produce redistribución de la riqueza en el país en donde se produce.

La respuesta del actual gobierno a esta situación, ha sido la de impulsar un programa de cohesión social de carácter esencialmente asistencialista cuyo objetivo pasa más

por la intención de generar una plataforma política que por mejorar la capacidad productiva del país dejando de lado aspectos que debiesen ser fundamentales como el impulso del trabajo decente como instrumento de redistribución de la riqueza.

En materia sindical y de diálogo social, el gobierno ha apostado a generar un movimiento sindical y social mediatizado, sin capacidad crítica y cuyo papel sea meramente instrumental para legitimar las medidas impulsadas por el gobierno. Para ello ha recurrido a impulsar el paralelismo sindical y a ubicar a figuras afines con el partido de gobierno en condición mayoritaria en los espacios institucionales de diálogo social, esto con la finalidad de debilitar la influencia de las organizaciones más representativas y cuya visión de país, pasa fundamentalmente por la necesidad de resolver los problemas estructurales que le aquejan.

El sector empresarial, por su parte, ha centrado sus objetivos en la precarización de las condiciones de trabajo mediante el debilitamiento de las protecciones sociales al trabajo, situación que ha sido advertida por la Organización Mundial del Comercio –OMC- que en su informe del año 2009 respecto a Guatemala ha señalado precisamente la falta de medidas antidumping y la ausencia de medidas de salvaguarda social.

En este panorama, la crisis que afecta actualmente la economía mundial se constituye en un argumento más para recrudecer la impunidad y precarizar en extremo las condiciones laborales toda vez que la estrategia comercial tanto del gobierno como del sector empresarial parten del dumping social, tanto atraer la inversión como para asegurar la rentabilidad de las empresas en un mercado competitivo. En otras palabras, el paradigma se centra en la competitividad a costa de la desprotección social del trabajo.

Un ejemplo claro de esto es que actualmente tanto el gobierno como el sector empresarial, como parte del plan de emergencia para superar la crisis, se encuentran impulsando la ratificación por parte de Guatemala del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre el trabajo a tiempo parcial, aún y cuando las condiciones del país, evidenciadas tanto en el informe de CSI sobre los Derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la Misión de Alto Nivel de la OIT que recientemente visitó Guatemala, en Guatemala no existen las condiciones básicas para que dicho convenio se aplique de otra forma que como un instrumento de precarización laboral.

Debemos señalar que, el convenio 175 forma parte de una estrategia planteada por el sector empresarial desde el año 2000 en su plan de Desarrollo Económico y Social que ha pasado tanto por la fijación del salario mínimo por productividad (posibilidad descartada por la CEACR); la desregulación del derecho del trabajo que hoy día se impulsa vía la impunidad (contraria al trabajo decente) y que ahora encuentra su expresión en un convenio cuyos efectos en la realidad guatemalteca serían destructivos de cualquier expectativa de generación de empleo decente.

En su momento, los argumentos eran prepararse para la competencia generada por el libre comercio; ahora, que el libre comercio sin salvaguardas sociales efectivas ha desencadenado la crisis, esta se convierte en el argumento para impulsar las mismas medidas que a nivel mundial la han generado.

Ante esto, UNSITRAGUA junto a las organizaciones más representativas y legítimas del país, como CGTG, CUSG, FNL, CNSP, CNOC y CCDA, han coincidido en la necesidad de abandonar el esquema de dispersión sindical e impulsar un sindicalismo de naturaleza sociopolítica como pasos primordiales para salir de la crisis tan crónica como estructural que se vive en Guatemala.

De hecho, desde hace más de dos años, se ha generado la unidad de acción denominada Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- como un espacio permanente que permita un planteamiento estratégico más allá de la respuesta

coyuntural que el movimiento sindical había ofrecido como regla general siendo lo realmente valorable de este esfuerzo que hasta ahora, ha obtenido logros significativos a pesar de la falta de recursos para ejecutar programas de acción y proyección social más agresivos, para contar con un respaldo técnico de mayor espectro y para contrarrestar los esfuerzos para su invisibilización y destrucción que se han operado.

Este esfuerzo de unidad, sin embargo, está teniendo su costo en compañeras y compañeros asesinados, en la intensificación de actos de autopenetración y paralelismo, en la pérdida de espacios de designación gubernamental en los mecanismos de diálogo social, en persecución contra colaboradores y colaboradoras y que, a pesar de su intensidad, aún no consiguen doblegar la convicción que priva en CGTG, CUSG, FNL, CNSP, CNOC, CCDA y UNSITRAGUA no solo en cuanto a mantener la unidad sino la de profundizarla a nivel de bases en sus respectivas áreas de influencia.

En ese orden de ideas, UNSITRAGUA, como parte del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, coincide con el resto de organizaciones que lo integran en que la unidad es la mejor estrategia para enfrentar la crisis desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras y; sobre la base de la misma, virar hacia un sindicalismo sociopolítico que permita a la vez, reafirmar la legitimidad de la interlocución social de los sindicatos, ampliar la oferta sindical, propiciar un diálogo social efectivo y de buena fe que permita resolver los problemas estructurales que impiden el libre ejercicio de la libertad sindical, la eliminación de la impunidad y la generación de condiciones de trabajo decente como elemento fundamental para que el sistema productivo sea socialmente rentable y generador de desarrollo social.

COLOMBIA
CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia

RESQUEBRAJAMIENTO DEL MODELO NEOLIBERAL

Apecides Alvis Fernàndez, Presidente

La crisis

El sismo que sacudió el Wall Street, en Septiembre de 2007, otro Septiembre que tiene origen en Estados Unidos, no solo sacudió las bolsas de valores, sino que resquebrajó la economía mundial sumiéndola en la más profunda crisis de la historia contemporánea y la precipitación de la caída de una faceta del capitalismo salvaje, la era del neoliberalismo generando como consecuencia lógica y al estilo del efecto dominó la crisis económica que tambalea al mundo o tal vez será más objetivo en términos humanistas plantearnos la crisis a la humanidad, por los efectos nocivos que genera en la sociedad, lo que significa el desencadenamiento de la agudización del desempleo, pobreza, y miseria a millones de hombres y mujeres; igualmente mayores desequilibrios entre las naciones y pueblos por los desniveles y asimetrías en sus desarrollos, lo que aunado al impacto de las medidas proteccionistas que puedan asumir los países altamente desarrollados, son hechos que necesariamente perturban la realidad socio-económica de América Latina.

La quiebra del neoliberalismo no significa que conceptuemos "el fin del capitalismo", pero sí el fracaso del modelo (con excesivos costos sociales), por lo tanto en el reacomodamiento del capitalismo no es aceptable que promueva, otro modelo perverso, sin equilibrio entre las naciones altamente industrializadas y las no industrializadas ni equidad social.

La crisis mostró la incapacidad del mercado para regular el sistema en el escenario de un descontrolado activismo económico al servicio de ricos y poderosos en un marco especulativo y despilfarrador del aparato financiero, epicentro de la crisis por sus prácticas neoliberales perversas tales como la máxima "privatizar las utilidades y socializar las perdidas".

No debemos extrañarnos que la crisis económica guarde estrecha relación con la unipolaridad, que le permitió al modelo la permicidad de la extravagancia, el despilfarro y desmedido afán por obtener rentabilidad a corto plazo que terminó generando el fenómeno de la quiebra

inmobiliaria, financiera y crediticia a la primera potencia del mundo.

Se registran estos hechos en una época en que en el mundo hay un vacio de poder de la izquierda internacional que social y políticamente promueva junto al sindicalismo internacional e intelectuales independientes un modelo alternativo de crecimiento democrático y participativo con justicia y equidad, diferente a la absoluta solución y regulación del mercado. En el contexto de este enunciado, creemos que el "Foro Económico Mundial" en Davos-Suiza no deja mensaje de esperanza a los trabajadores y a las naciones subdesarrolladas.

La regìón de Amèrica Latina

Los organismos multilaterales (BM y FMI) y algunas agencias especializadas en la región, prevén alguna solidez para capotear los efectos de la crisis, siempre que los países del área, observen y practiquen determinados comportamientos, de política económica y social, planteados por el BM, "medidas de creación de empleos, desarrollo de obras públicas y protección social". Somos escépticos en la observancia del concepto, de la solidez de América Latina en las consecuencias de la crisis, por considerar que los riesgos son inminentes, según los factores macroeconómicos de la región, igualmente expuestos por los mismos organismos unilaterales tales como: crecimiento para América Latina 1.1%; perdida de 2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil) empleos; reducción del 50% del flujo de capitales; recesión en varios países como México; posible deflación en Estados Unidos; y las voces proteccionistas en las políticas económicas de algunos países altamente industrializados. Sin duda sus consecuencias serán social y económicamente desastrosas para el comercio internacional de la región, que conllevará a la reducción y baja de precios a nuestras exportaciones, especialmente de productos primarios, como consecuencia de la misma crisis.

La Naciòn: Colombia

En Colombia, contrario a los pronósticos de contar con un relativo estado económico en que puede galopar la crisis inicialmente. Consideramos que al igual que al resto del mundo, la afecta profundamente, así lo muestra el comportamiento de la economía nacional, según los indicadores económicos. De ahí que el primer paso hacia la recuperación esté en liberarse de la ortodoxia del libre mercado e incursionar en políticas económicas autónomas basadas en la realidad nacional del país, en la participación democrática de su diseño y aplicación y en el replanteamiento de sus objetivos reorientándolos hacia la inclusión y justicia social.

Los indicadores económicos son contundentes. En el último trimestre del 2008 el sector industrial se contrajo en un 10%, y el desempleo, el subempleo y la informalidad se han disparado a cifras sin precedentes, con la pérdida de 500.000 empleos, mientras que las previsiones de crecimiento del PIB para el año de 2009 se sitúan en el 2.0%, lo que sin duda agudizará la pobreza, dadas las modalidades de contrataciones laborales hoy existentes en el país, a través de la Tercerización y las Cooperativas de Trabajo Asociado, que son el peor sistema de explotación laboral existente, la falta de una política de empleo de antes, que permita a la población participar en el consumo nacional.

Las condiciones económicas de Colombia en materia de comercio exterior por las implicaciones de la crisis, teniendo en cuenta que sus socios comerciales más importantes en su orden son Estados Unidos y Venezuela, el primero el mayor afectado de la crisis mundial y el segundo sujeto a los precios internacionales del petróleo, su política interna y sus índices económicos, todo lo cual tendrá repercusiones en el desarrollo económico y de empleo en el país.

Las políticas del Banco de la República, como contribución a la superación de la crisis, ha estado dirigidas a suministrar

liquidez generalizada al sistema económico. Es obvio que en tiempos recesivos y de incertidumbre, la propensión a invertir por el sector privado y a endeudarse por el público en general, se disminuye sustancialmente, de ahí que la oferta de estos recursos no sea lo suficientemente demanda por los agentes económicos privados.

Frente a esta situación, el Estado debe ser el demandante de estos recursos e invertirlos en programas de adecuación de la infraestructura pública, de urgente necesidad estructural de realizarse, como es el caso de las vías y puertos, en programas de vivienda social e infraestructura social: escuelas, hospitales, centros de atención ciudadana.

Una política de esta naturaleza implica expansión del déficit fiscal que debe ser asumida por el Estado por sus efectos positivos en la generación de empleo y en la ampliación de la oferta de bienes públicos.

Con el fin de contrarrestar sus posibles efectos inflacionarios, una política de esta naturaleza debe ser complementada con la expansión, en el corto plazo, de la oferta de bienes de consumo básico, principalmente alimentos.

Estas inquietudes están referidas a la coyuntura recesiva actual. Somos conscientes que es necesaria una revisión más de fondo de la economía y sociedad colombiana para redefinir y reestructurar su composición estructural, porque su conformación actual está viciada, por un lado, de privilegios y en el otro extremo por la exclusión y negación de los derechos básicos a las mayorías nacionales.

ESTRATEGIAS SINDICALES EN FAVOR DEL AGUA COMO DERECHO HUMANO

I. CAMPAÑA MUNDIAL DE LA ISP: MUJERES, AGUA Y TRABAJO - FUENTES DE VIDA

Agripina Hurtado Caicedo,
Coordinadora Comité Nacional de Mujeres ISP, Colombia

La campaña mundial de la ISP "Mujeres, Agua y Trabajo Fuentes de Vida" surge en el Comité Mundial de Mujeres de la ISP, por la constante preocupación que tiene nuestra federación, por los Servicios Públicos de Calidad, los cuales constituyen un componente esencial en todas las sociedades democráticas. Por tanto no es solo un problemas sindical, porque el agua en particular es un Derecho Humano fundamental, un recurso de gran valor social, cultural, ambiental político y económico.

Fue novedoso ver como el agua y la mujeres relacionadas como fuentes de vida se complementan, y mucho más. unido estrechamente con la discriminación y la histórica inequidad de genero de que somos objeto las mujeres porque, las mujeres y las niñas somos las encargadas de proveer este recurso en el hogar, por ser una labor doméstica. De ahí la importancia y el enfoque de la campaña, para visibilizar cómo la privatización del agua incide en los niveles de pobreza de las mujeres debido a que los roles, necesidades y responsabilidades de las mujeres y hombres en la sociedad se dan en una relación de desigualdad.

El acceso al agua potable es un tema prioritario para las mujeres de las zonas rurales como para las de las zonas urbanas. El Comité Permanente de la Región Andina para la Defensa del Agua ha decidido lanzar una campaña por el derecho constitucional al agua en Colombia con motivo de las jornadas de acción organizadas en torno al tema "Agua, mujer, trabajo: fuentes de vida" (marzo 2009). En Cali, las afiliadas de la ISP Sintraemcali, Sintracuavalle, Sintraemsdes y Sintraemsirva participarán junto con asociaciones comunitarias locales en una campaña para conseguir firmas a favor de un referéndum.

En Perú y Colombia los sindicatos afiliados a la ISP, y especialmente los Comités nacionales de mujeres, a través de las organizaciones cuyas empresas pertenecen al sector del agua, hemos hecho presencia constante vinculándonos a actividades que promuevan no solo la difusión de la campaña, sin que también nos han permitido

generar espacios de dialogo y discusión de sobre este tema, participando en programas de radio y televisión, ferias del agua, a los cuales hemos sido invitadas.

Estos espacios nos han posibilitado la oportunidad de intercambiar opiniones y crear alianzas con organizaciones sociales y comunales, ayudando asi a la creación de conciencia ciudadana frente a la defensa del agua, como patrimonio publico y recurso humano fundamental, pero sobre todo en contra de su privatización por el impacto que tiene en la vida de todos los/as seres humanos, especialmente en los/as mas pobres, por las altas tarifas que hacen que su acceso se vuelva inalcanzable.

Hemos visto como donde este servicio es prestado por empresas privadas, como en la costa atlántica y pacifica, los cortes por no pago de facturas han obligado a las mujeres a salir a buscar agua, que no está tratada, muchas veces contaminada. Igualmente es critico este servicio en los sectores rurales donde la economía gira en torno a la agricultura, la cual depende exclusivamente del agua, y son las mujeres campesinas casi siempre las encargadas de esta labor.

Es muy grave que esto pase, cuando Colombia es un país tan rico en recursos hídricos y donde la política estatal es privatizar los servicios públicos, y no se le da importancia al manejo de las cuencas hidrográficas. Ni siguiera se tiene en cuenta la participación ciudadana, la cual en muchos sitios ha dinamizado la construcción de procesos de sustentabilidad, para resolver problemas socio ambientales, y son muchas las comunidades sobre todo indígenas que han asumido el manejo de este recurso natural, por que la ausencia del estado es total.

Por el modelo patriarcal, se nos ha encomendado de proveer este servicio en el hogar, y somos las que sufrimos cuando no hay agua, y en los sitios donde no hay este recurso tenemos que salir a buscarla, muchas veces de mala calidad y no apta para el consumo humano ni siguiera para preparar los alimentos, lo cual liga esta situación a incrementar los índices de pobreza, en el mundo, y sobre todo en el mundo de las mujeres.

II. DE GOTA EN GOTA, EL AGUA Y LA VIDA SE AGOTAN

Denisse Delgado Bonilla. SINTRAEMCALI

Quizá esta perspectiva sea un tanto dramática pero a la par del agotamiento del agua, este preciado recursos hídrico, indispensable para nuestra vida; son muchas las cosas que se agotan: se agota paciencia, se agota la tolerancia, se agota la justicia, se agota la sangre, se agota la sábila, se agota el sudor, se agota la vida, se agotan.... las gotas.

Así como se agota el agua, uno de los recursos más preciados del planeta, tan necesaria y siendo un derecho humano primordial; igualmente es vertiginosa la carencia de fuentes de empleo.

Es el empleo para la humanidad, lo que el agua para la madre naturaleza. Son su fuente primaria de sustento, sin las cuales le sería imposible subsistir. La primera para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, la segunda para satisfacer las de la propia tierra. El agotamiento simultáneo de las dos lleva a la destrucción del ser humano, a la destrucción de los ecosistemas, a la destrucción de las comunidades, a la destrucción de la tierra, a la destrucción de la humanidad.

Las políticas gubernamentales internacionales tienden a privatizar el suministro de este recurso hídrico, así como a privatizan las fuentes de empleo. Esto ha generado un caos en el orden mundial y lo que era un derecho inalienable pasó a ser el privilegio de algunos pocos.

Las constantes luchas de las organizaciones sindicales y las no menos luchas de los grupos ecológicos se han convertido en

réplicas cada vez mas silenciadas, cada vez menos visibles.

Porqué si somos muchos más los que padecemos de la falta tanto de la una como del otro, nuestra actitud frente a estos graves problemas tiende al conformismo? Porqué nos silencian? Porqué no luchamos? Porqué?

Quizá porque el sistema de monopolios está tan bien estructurado que para esta época en que vivimos aún la vida misma tiene un precio. La tierra nos dona gratis el agua, el monopolio nos la cobra a un alto precio. Los obreros producen a precio de sudor, el capital para enriquecer a los que ya tienen mas de lo merecen.

Qué desleal tratado; que infamia cometen los opresores; que pocos recursos le quedan a los oprimidos!

Dice un refrán popular: tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe! Tanto mal se le acarrea a la naturaleza hasta que por fin cobra el mas alto precio (calentamiento global = destrucción letal).

Para recapacitar te dejo que tu mismo/a construyas el símil en el ámbito laboral.

III. CAMPAÑA DEFENSA DEL AGUA SINTRACUAVALLE

Margarita López, SINTRACUAVALLE

Colombia es un país megadiverso, "potencia" hídrica, con algunas de las más importantes cuencas del planeta pero en el que muchas personas padecen sed, enfermedades y graves dificultades a causa de la inadecuada gestión del agua. El acceso al agua es esencial para eliminar la pobreza y realizar todos los objetivos de desarrollo social, económico y político; máxime cuando los cambios climáticos se han convertido en una gran amenaza para el medio ambiente y nuestras fuentes de agua.

Nuestra lucha como veedores es constante para proteger este recurso vital y hacer sostenible nuestra empresa en el tiempo, lamentablemente las políticas de Estado y la posición del gobierno nacional en nuestro país, es cada vez más sensible a la protección de este recurso esencial para la vida en manos públicas y al contrario cada vez confían menos en lo público impulsando la entrega a multinacionales y la incursión de privados en el manejo del agua tratándola como una mercancía que se puede vender al mejor postor.

No es menos cierto que a ello se suma la falta de presencia del estado en la protección de los ecosistemas, la conservación y recuperación de nuestras fuentes y del medio ambiente.

Sintracuavalle, como filial de la ISP y de la Red Vida, se une al propósito impulsado por Ecofondo. Es una organización conformada por ambientalistas, no gubernamentales, comunitarias, de pueblos indígenas y afrodescendientes, sin ánimo de lucro, que se concibe como un espacio democrático y participativo de incidencia en política y gestión ambiental. "La defensa del agua como derecho humano y patrimonio público"

En este propósito, buscamos detener los procesos de privatización y mercantilización del agua por medio del voto, mecanismo que promovemos mediante el postulado de un referéndum constitucional que permita con la voluntad del pueblo, elevar a nivel constitucional el derecho humano fundamental al agua.

La Registraduría Nacional del Estado civil emitió en marzo 2008 un pronunciamiento en el cual reconoce al Comité de Promotores del Referendo por el Agua como un derecho humano. Con la meta de una reforma constitucional mediante un referendo, recolectamos más de dos millones de firmas, que fueran presentadas al Congreso de la Republica.

Propuesta de articulado para modificar la Constitución mediante el referendo.

Primer elemento: "El agua derecho fundamental" se incluye en el Título II, Capítulo I. Luego y siguiendo la secuencia que trae la Constitución se incorpora la: "Protección especial para los ecosistemas estratégicos

en el ciclo hidrológico y para los pueblos indígenas y afrodescendientes en su relación con el agua". Aquí se desarrollan en un parágrafo conceptos que aparecen en el texto constitucional actual pero que son remitidos a definiciones y tratamiento en la Ley. Se elevan entonces las disposiciones legales al rango de norma constitucional, que ofrece más garantías. De otra parte se refuerza la condición especial de los territorios indígenas en relación con el agua.

Finalmente el carácter público del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado y por consiguiente la exclusión de su privatización se establecen en un parágrafo que se propone para el artículo 365, desarrollando allí una excepción que está prevista en la misma norma. Dicha excepción prevista por vía legal se hace en la misma Constitución para el servicio mencionado. En este sentido no se deroga una parte del artículo, lo cual sería cuestionable jurídicamente pues el referendo que proponemos es aprobatorio y no derogatorio, sino que se desarrolla algo previsto en el mismo artículo como excepción que si consagrarse por vía legal con mucha mas razón puede hacerse por vía constitucional.

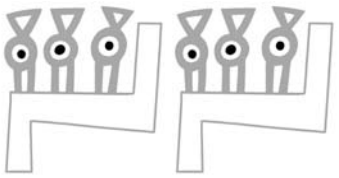
En ese mismo parágrafo se incluye la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado por "comunidades organizadas".

Articulo nuevo. El acceso al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas. Para garantizarlo habrá un mínimo vital que se suministrará gratuitamente a todas los habitantes del territorio nacional.

Segundo elemento: protección especial para los ecosistemas estratégicos en el ciclo hidrológico y para los pueblos indígenas y afrodescendientes en su relación con el agua.

Tercer elemento: gestión pública y directa del servicio público de acueducto y alcantarillado. Articulo 365 (actual) Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

ICEM, Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas



LA CRISIS ECONOMICA Y EL DIALOGO SOCIAL EN COLOMBIA

Carlos Bustos, Coordinador de proyectos



A pesar de que el gobierno nacional viene manifestando que el país está blindado frente a la crisis económica que afecta en este momento a los principales países del mundo, comenzamos a notar efectos que están golpeando fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Las empresas minero energéticas y de la química, por el descenso en precios del petróleo, del níquel y del carbón, están abocadas a menores ingresos que se traslucen de inmediato en la parte más débil de la cadena y por tal motivo anuncian cierres de líneas de producción y el consecuente despido de trabajadores. El barril del petróleo llegó al precio de más de 150 dólares, la tonelada de carbón a 100 dólares y esos precios a hoy han bajado vertiginosamente. Algo similar ha sucedido con la producción del níquel.

Las tierras más fértiles de Colombia están en este momento dedicadas a la producción de la palma africana, a la caña de azúcar y el proyecto esta direccionado a producir también remolacha, todos estos productos utilizados en la producción de biodiesel. Esto trae como consecuencia que más del 70% de los productos agrícolas que se consumen en el País son importados, mientras que nuestros campesinos desplazados por la violencia deambulan por las calles de las grandes ciudades pidiendo limosna, con sus familias, en los semáforos.

Uno de los mecanismos que utilizamos para enfrentar los efectos de la crisis, es el proyecto de Empresas Multinacionales para el acuerdo social, buscando salidas que permitan afrontar el problema sin necesidad de despedir a los trabajadores.

El proyecto se ejecuta en medio de un arduo conflicto, que toca todas las estructuras de la sociedad de la que hacen parte las Empresas en Colombia y principalmente las Multinacionales, consideradas por los actores del conflicto armado, como permeables a la vacuna o extorsión, para el financiamiento de sus estructuras. De otra

parte los dirigentes sindicales, venimos siendo víctimas aun, de los grupos al margen de la ley, con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos.

Quienes desarrollamos este proyecto y estamos comprometidos con él, consideramos que es un espacio y una buena oportunidad para el fortalecimiento de los sindicatos por la vía del diálogo social y la concertación, analizando y dando soluciones a casos como el despido de trabajadores, de los tercerizados y/o sub-contratados por las Empresas.

Los diez puntos o enunciados de las Naciones Unidas, que sirven como base para el ACUERDO GLOBAL, lo mismo que los convenios de la OIT en materia social, económica y de derechos humanos, han sido una muy buena herramienta de trabajo, de la misma manera las relaciones con autoridad que ha mantenido la ICEM con las oficinas matrices de las Empresas.

Cuando adelantamos la investigación sobre las 9 Empresas Multinacionales donde tenemos presencia a través de nuestros Sindicatos afiliados y convocamos la primera conferencia nacional el 11 de octubre de 2004, sentíamos una incertidumbre de enfrentar lo desconocido, sentimos la desconfianza de las Empresas, lo que necesitó de la Coordinación de ICEM en Colombia y de sus sindicatos, un mayor esfuerzo que redundó en el éxito de ese evento ya que de nueve Empresas convocadas, SMURFIT, LINDE, OWENS ILLINOIS, ENDESA, UNION FENOSA, GLENCORD, BILLINTON, XSTRATA ANGLO AMERICAN, REKITT, asistieron siete, solo faltaron la OWENS ILLINOIS y LINDE, pero debemos anotar que tanto LINDE como la OWENS ILLINOIS, accedieron a participar en el proceso después de la presión que se les hizo en las casas matrices. Asistieron además, SINTRAELECOL, SINTRAQUIM, SINTRACARCOL, SINTRAVIDRICOL, FENALTEC Y SINTRACARBON, organizaciones filiales de la ICEM en Colombia, que tienen socios en estas Empresas y están comprometidas con el proyecto.

Durante este tiempo hemos llevado a cabo seminarios conjuntos de empresarios y trabajadores, varias conferencias nacionales, seminarios sobre VIH-SIDA en el sitio de trabajo, sobre tercerización. De todos los eventos hemos tenido compromisos y han dado como resultado mecanismos más efectivos en la solución de problemas. En este tiempo se han enfrentado conflictos colectivos derivados de la negociación colectiva y se han firmado convenciones colectivas de trabajo, con la solidaridad permanente y el respaldo de la ICEM. El caso más reciente fue este año entre Sintracarbón y Carbones del Cerrejón.

No es fácil este trabajo, sobre todo en Colombia donde existe una cultura antisindical por parte de los patronos, sin embargo seguimos adelante con nuestro propósito, que es el de perfeccionar las mesas de trabajo en las que a la luz de los convenios internacionales y el Global Compact, logremos parar la subcontratación del trabajo y por ende la afectación negativa que esta produce en las organizaciones sindicales. Hemos realizado una investigación sobre la tercerización o subcontratación en siete empresas y hemos realizado varios seminarios conjuntos sobre el tema en los que participan los Empresarios y los trabajadores. Es de anotar que nuestro trabajo es concordante con las campañas mundiales de ICEM, sobre VIH-Sida y Tercerización o Subcontratación, con sus respectivas investigaciones.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

- CARBONES DEL CERREJON (BILLINTON, XSTRATA Y ANGLOAMERICA)
- UNION FENOSA (ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE)
- OWENS ILLINOIS (GRUPO EMPRESA RIAL PELDAR)
- ENDESA (CODENSA Y ENGESA)
- LINDE DE ALEMANIA (AGAFANO)
- Las Empresas REKITT Y SMURFIT, salieron del proceso, REKITT por cambios en su Dirección y SMURFIT por una negativa rotunda a hacer parte del dialogo social.

LOS SINDICATOS

- SINTRACARBON
- SINTRAELECOL
- SINTRAVIDRICOL
- SINTRAQUIM
- SINTRACARCOL
- FENALTEC

OTRAS ENTIDADES

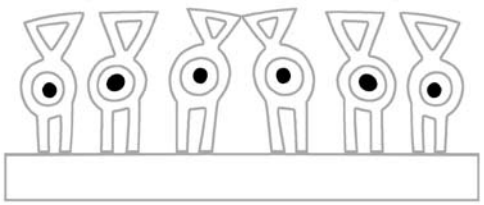
- MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, ONUSIDA, NACIONES UNIDAS, GLOBAL COMPACT.

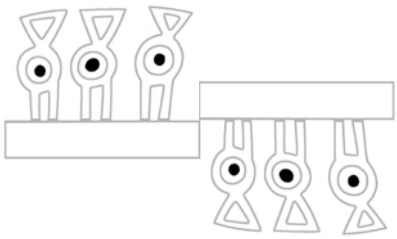
TEMAS

- VIH-SIDA
- TERCERIZACION
- SEGURIDAD PARA LOS DIRIGENTES SINDICALES
- NUEVAS RELACIONES LABORALES:
- PRODUCTIVIDAD
- HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
- CONFERENCIAS NACIONALES

Fraternalmente,

COMITÉ COORDINADOR ICEM-COLOMBIA





ANTICRISIS NEOLIBERAL: MAS ESPECULACION, MAYOR PRECARIZACION LABORAL Y DESIGUALDADES EL SINDICALISMO EXIGE CAMBIOS

Julio César Bazán, Presidente

Los trabajadores de las América en general, indistintamente de la Subregion en la que nos desenvolvamos, estamos viviendo en carne propia la profundización de las políticas de desempleo, de precasrisacion del trabajo, de desconocimiento de los derechos laborales fundamentales, de pauperización y mayor exclusión de la seguridad social y de debilitamiento de las organizaciones sindicales y de manipulación demagógica del dialogo social: producto de la crisis global imperante del fracaso del modelo neoliberal.

La crisis ha puesto de manifiesto la artificialidad de la bonanza del crecimiento económico de los últimos años, extendiendo hacia las empresas las graves consecuencias de deterioro y descomposición que durante años ha venido azotando exclusivamente a los trabajadores; demostrando que el crecimiento en el modelo de libre mercado tiene en su base el dominio de la economía especulativa que no genera empleo productivo duradero y se sustenta en la explotación de los trabajadores

En el caso de los países predominantemente primario exportadores como todos los de la subregin andina, la recesión amenaza por cuanto los precios de estos productos han caído estrepitosamente demostrando la fragilidad de las economías dependientes y subordinadas a la suerte de los mercados de las grandes potencias. En ese sentido los países más afectados serán el Perú, principal exportador de oro, cobre y zinc y Venezuela, exportador de petróleo,

En el caso peruano, las exportaciones son materias primas en un 75%, y de ellas 62% de minerales, cuyos precios han caído en más de 60% solo en el último trimestre. El cobre que en junio del año pasado costaba US $3,70 (y se acercó a US $4) la libra, hoy está alrededor de 1,40, mientras que el zinc cayó en 49% entre Enero 2008 y Enero 2009; Igual caída han tenido los precios de los productos agroindustriales de exportación y los textiles.

Como consecuencia de la contracción del mercado externo y la caída de precios se viene produciendo una notable caída de

nuestras exportaciones, lo que se traduce en menor trabajo y salario para los trabajadores, y menos ingresos para el Estado. En el 2008 las exportaciones que alcanzaron a 32,000.00 millones de dólares, en el 2009 se estima que se reducirán a no mas de 24,000.00 millones de dólares, es decir 8,000 mil millones menos -si no 10,000- en un año.

De otro lado, con la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos y el TLC con Chile y la persistencia de suscribir elTLC con China y otros países, las importaciones se incrementaran –mientras las exportaciones caen- afectando aún más el aparato productivo naciona y aumentando la salida de divisas que encarece el dólar. El Gobierno peruano hasta ahora ha podido controlar el alza del precio del dólar haciendo uso de más de 7 mil de millones de las reservas, las cuales han disminuido de 35 mil a 28 millones de dólares

En el Perú, el gobierno de Toledo y el actual, después de la recuperacion de la democracia, mantuvieron el modelo economico primario exportador de nuestra economía y el control extranjero sobre los principales rubros del aparato productivo, comercial y financiero, lo que nos mantuvo frágiles y vulnerables a las crisis de precios internacionales. Hoy pagamos el precio de no haber desarrollado un proceso de industrialización propia, de haber abandonado la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario, y la entrega de nuestra soberanía en el manejo de nuestros recursos naturales.

Las medidas anticrisis implementadas por las grandes potencias capitalistas, demuestran a su vez que los neoliberales no tienen ningun escrúpulo cuando de proteger sus intereses se trata. Todos hemos visto que en medio de la crisis han recurrido a los fondos públicos para poner en marcha operaciones de rescate y estatizaciones destinadas a evitar la quiebra del sistema financiero (bancos, aseguradoras, inmobiliarias, etc.). Asimismo han elevado los seguros a los depósitos para evitar la corrida de los ahorristas, contraviniendo sus propios dogmas

En Alemania por ejemplo el seguro cubre, ahora, el 100% de los ahorros sin límites. En otros casos han reducido la tasa de interés para los préstamos en dólar y euros; la tasa de interés en los EE.UU. está hoy en 0,25% anual, y en Europa en 2,0% anual, mientras que en el Perú se mantenía en 6.0% a octubre pasado.

Debemos resaltar que en en el Perú las medidas anticrisis se concentran en más privilegios para las inversiones, asegurándoles las más altas tasas de rentabilidad de AL, en base a una mayor sobreexplotación del trabajo con salarios deprimidos, privilegios tributarios y garantías estatales. Y que abandonan el lado de la demanda de la población: salarios, mejores precios agrícolas, abaratar crédito, apoyo a mypes, etc., a la vez que no hay ningún cambio de rumbo en curso.

El Plan Anticrisis, se sustenta fundamentalmente en la inversión pública dirigida a obras de infraestructura, y fundamentalmente a mega proyectos de larga maduración, que en esencia favorecen al capital transnacional y no a obras de corta maduración y de generación extensiva de mano de obra. Por ello, se mantiene la política tributaria basada en los impuestos indirectos, persistiendo en alas exoneraciones a las grandes utilidades, como es el caso de la Bolsa de Valores y la minería de oro que sigue lucrando insaciablemente, llegando hasta privatizar el pago de impuestos al canjearlos por obras que ejecuten directamente las empresas.

De otro lado se mantiene la política arancelaria de apertura a las importaciones que le significa al Estado más de 3 mil millones de soles de menores ingresos. Así mismo, la crisis es una extraordinaria oportunidad de desarrollar nuestro mercado interno y de fortalecer nuestros lazos de unidad con países vecinos y latinoamericanos para fortalecer un desarrollo autónomo y un crecimiento con equidad y respetuoso del ecosistema y de los derechos de los pueblos. Sin embargo, el gobierno no está dispuesto a un cambio

de rumbo ni a reformas parciales que sean mas equitativas.

En suma el plan del gobierno esta dirigido a los ricos, se olvida de los productores del campo, sobre todo los de la agricultura tradicional que producen para el consumo interno, de los pequeños y medianos industriales que generan más del 70% del empleo. Se olvida de los trabajadores cuya capacidad adquisitiva se ha deteriorado, empobreciéndolos cada vez más puesto que son los más afectados con el alza de los precios de los alimentos, por cuanto destinan el 70% de sus salarios a la compra de productos de subsistencias.

Para mantener esta política que descarga el peso de la crisis en las espaldas de los más pobres el gobierno acentúa la represión, criminaliza la protesta, persigue a los líderes políticos, sindicales y populares de oposición y reprime brutalmente las protestas populares, a la par que persiste en su estrategia de dividir y debilitar las organizaciones populares, propiciando y financiado desde el gobierno organizaciones paralelas, que utiliza para enfrentar, a las organizaciones representativas de los trabajadores y del pueblo.

Los organismos financieros internacionales, y las grandes potencias vienen trabajando frenéticamente en la elaboración de medidas de "regulación", "humanización" y "reforma" del actual sistema económico. Pero creemos que la actual crisis mundial no tiene salidas reales y de fondo, en el marco de las actuales recetas ya fracasadas, del neoliberalismo y el Consenso de Washington.

Frente a ello se coloca en la orden del día del sindicalismo Sociopolítico, la necesidad encarar la crisis de manera efectiva y darle solución, en función de los intereses nacionales y de las grandes mayorías nacionales. Ello exige hacer un balance exhaustivo de nuestros avances y limitaciones y avanzar a la renovación, ampliación y fortalecimiento de espacios unitarios, apuntando a la construcción de un sentido común y Visión de país alternativa,. Para ello urge un Proyecto de País, discutido en todo el país, y también un plan alternativo para enfrentar la crisis elaborando desde las organizaciones sociales y políticas

En ese sentido en el Perú desde la CUT venimos contribuyendo a la forja de la unidad de todo el pueblo participando en la constitución del Comité Promotor de la Asamblea Nacional de los Pueblos, apuntando a colocar en el debate y en la conciencia de la gente la Visión de un Nuevo Perú, de una Refundación de la República descentralista, plurinacional y pluricultural y de un nuevo manejo de la política, la economía y la vida social. Así como una nueva política internacional soberana, latinoamericanista.

La actual crisis debe resolverse sobre la base de un nuevo orden internacional más democrático, más pacífico, más equitativo y más justo para los trabajadores y los pueblos, generando un mundo multipolar, desarrollando la América Latina como uno de los polos mundiales, con autonomía de los EEUU, y fortaleciendo nuestros mercados internos y economías nacionales, abandonando los proyectos primario exportadores y dependientes.

Por ello no compartimos las recetas ya fallidas de las grandes potencias capitalistas, que instrumentalizan y dominan la ONU, el FMI, el BM, el Banco Central Europeo, la OTAN y otras instituciones que emergieron después de la gran crisis, capitalista de los años 30 del siglo pasado y después de cinco años de Guerra Mundial, que desembocaron en los acuerdos de Breton Woods, que dieron nacimiento a la actual institucionalidad que ha devenido en obsoleta e inoperante frente a la crisis.

Necesitamos propiciar la construcción de un paradigma alternativo y una nueva gobernanza de la economía global que garantice, en primer lugar, equidad y derechos fundamentales para todos, así como respeto a los ecosistemas y la naturaleza. Urgimos coherencia de las políticas y de los sistemas financieros económicos y comerciales con el interés del desarrollo y el trabajo digno, como componente fundamental. Asimismo asegurar relaciones pacíficas entre las

naciones, comercio justo, y, al mismo tiempo, promover una justa distribución de la riqueza creada y de los recursos generados en la economía sobre la base del protagonismo del trabajo decente como mecanismo generador de empleo, protección social, sindicalización, diálogo con resultados y derechos en el trabajo.

Las crisis siempre han ido de la mano con situaciones de enorme inequidad y desigualdad, perdida de capacidad de regulación y redistribución del Estado, y debilitamiento de la sindicalización y organización de los trabajadores y productores. Por ello, y bajo los conceptos mencionados, la crisis debe traducirse en una oportunidad para democratizar la sociedad, universalizar los derechos a la educación, la salud, la nutrición, la vivienda y el trabajo decente, para defender la soberanía e impulsar el desarrollo nacional, para proteger y respetar nuestros ecosistemas, es decir para asumir la recta del progreso social, elevar la calidad de vida de las mayorías nacionales y afirmar la soberanía nacional.

Como ya demostraron otros momentos de la historia, los trabajadores y los pueblos pueden, si se unen, determinar el curso de los acontecimientos económicos sociales y políticos, arrancar al gran capital importantes concesiones bajo los intereses de las masas, impedir una dictadura corporativa y, ciertamente, abrir el camino de profundas transformaciones de carácter progresista y revolucionario, en el sentido más hondo del término. Ese debe ser el contenido de la estrategia que requerimos para enfrentar la actual crisis mundial.

NEOLIBERALISMO EN CHILE, ESTADO Y TRABAJO: EN BUSCA DE NUEVAS OPORTUNIDADES

José Manuel Díaz Zavala. Secretario de Relaciones Internacionales.
Roberto Morales Farias. Secretario Ejecutivo, Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL

Presentación

Para los chilenos la crisis financiera y económica actual tiene un especial significado, especialmente para quienes por años, tratamos de demostrar que el "milagro chileno" que se ha vendido al mundo por los políticos y economistas de derecha de nuestro país, no era un milagro para todos y que tarde o temprano, este modelo "haría agua" por alguna parte.

No por nada fuimos los primeros en experimentar en neoliberalismo y nada menos que acompañado por una sangrienta dictadura militar.

Neoliberalismo y autoritarismo al parecen se entienden y potencian, esto nos sucedió a los chilenos y chilenas que debimos soportar esta letal combinación.

Pero toda crisis por definición es también una oportunidad, si por cierto esta es aprovechada para entender que las cosas pueden hacerse de otro modo, en nuestro caso que los paradigmas que por años nos impusieron la derecha autoritaria y neoliberal pueden ser cambiados.

Esta crisis nos ha permitido repensar el rol del Estado, el concepto de desarrollo y no solo de crecimiento como nos habían acostumbrado, nos ha permitido revalorar el trabajo como factor central del desarrollo de las personas y de los pueblos, revalorar la política y la democracia y por sobre todo entender que una sociedad que no tiene a las mujeres y hombres como centro de su quehacer no tiene sentido.

Este articulo una reflexión que parte presentando nuestro drama, la implementación del sistema neoliberal en Chile y sus impacto, por supuesto de manera resumida y prosigue con la presentación de las propuestas del rol que a nuestro juicio debe cumplir el Estado en esta nueva etapa y por cierto el de los trabajadores organizados.

Chile y el neoliberalismo.

En abril de 1975 con la presentación del denominado "Plan de Recuperación Económica"[1], que incorporan las medidas de shock económico, se da inicio a la implementación en pleno del modelo neoliberal en nuestro país, es Chile entonces, la primera experiencia profunda de implementación a nivel de una economía nacional que se haya hecho de las teorías desarrolladas principalmente por Milton Friedman y Friedrich Hayek.

La implementación de este modelo económico no fue inicialmente obra de la doctrina o propuestas que tenían los militares golpistas de 1973, mas bien fue impuesto por un grupo de economistas tecnócratas de derecha, que ya años antes habían diseñado lo que podría ser una alternativa para nuestro país, esto se conoció como el denominado "El Ladrillo"[2], y que esperaron pacientemente a que se diera el escenario para implementarlo. Lo anterior concuerda con la teoría presentada por Naomi Kleim en su mas reciente obra, en el sentido que la única manera de llevar adelante el desarrollo de las políticas neoliberales es aprovechando o creando una "crisis" lo más profunda posible y en ese escenario proponer una política de shock, de refundación y no solo de cambios sobre lo ya existente.

Es impactante ver como el proyecto político y social de la junta militar fue acomodándose a la propuesta de los "chicagos boys" y viceversa también. El proyecto neoliberal necesita de un modelo político y social autoritario que lo sustente y al parecer el "proyecto" poco definido originalmente de los militares chileno fue alineándose paulatinamente a las propuestas neoliberales, esto no sin disputas internas entre los militares y civiles que participaban en el gobierno.

Hace algunos meses atrás, la periodista canadiense Naomi Kleim, estuvo en nuestro país presentando su ultimo trabajo "La doctrina del shock"[3] en donde presenta su teoría que aunque no nueva para nosotros, que ya la vivimos en carne propia, resulta muy interesante pues nos ratifica la política explicita que en nuestros casos los "chicagos boys"[4] y posteriormente distintos grupos de seguidores de Hayek y Friedman han desarrollado en distintos países y regiones del mundo para implementar sus propuestas económicas, esto es crear o aprovechar una crisis profunda, normalmente presentada de tal manera que justifique su línea de intervención, e implementar con políticas de shock, en un estilo de "reingeniería", es decir "refundando", dejando olvidado lo mas posible las bases sobre las cuales se aplicaran sus propuestas, descalificándolas y culpándola de todos los fracasos vividos.

En nuestro caso esta "doctrina de Shock" no fue aplicada automáticamente con el golpe de estado, sino que por mas de un año las indefiniciones de la junta militar y las dos visiones dentro del régimen los que defendían una posición "restauradora" ligada al centro político nacional y los que proponían una visión "refundacional" con un soporte en los grupos autoritarios inclusive dentro de este grupo existían matices no menores de cómo entender este proceso.

De acuerdo a Ricardo Ffrench Davis[5] entre 1973 y 1981 se puede distinguir la primera etapa del modelo neoliberal en Chile, que este autor lo califica como de la etapa ortodoxa o pura, nosotros señalamos que en realidad este periodo se inicia en 1975, pero mas allá de las fechas exactas, si es cierto, que este periodo marca la etapa mas dura en la implementación de las medidas neoliberales, hoy podemos buscar una explicación en la política de Shock, que plantea que identificada una crisis, debe aplicarse fuertemente y de una ves las medidas "salvadoras".

Las principales "reformas" implementadas fueros; la eliminación de los controles de precio; apertura indiscriminada de las importaciones; liberación del mercado financiero interno; liberalización de los flujos

[1] Plan de Recuperación Económica. El Mercurio 30 de abril de 1975; en P.Vergara 1985.
[2] El Ladrillo. Centro de Estudios Públicos. 1992.
[3] La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre. Naomi Klein. 2008. Paidos.
[4] Denominación que se da a un grupo de economistas chilenos que se formaron en la Universidad de Chicago.
[5] Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad. Tres décadas de política económica en Chile.2008

internacionales; reducción del tamaño del Estado; privatización del sistema de pensiones; devolución a sus antiguos dueños de empresas y tierras expropiadas; privatización de empresas publicas; suspensión de los derechos sindicales; reforma tributaria.

Entre las medidas antes mencionadas, hay tres que pueden destacar en forma importante en la construcción de un nuevo ordenamiento económico y productivo que se buscaba implementar.

En el año 1978 se procedió a una rebaja unilateral de los aranceles aduaneros que gravaban a los productos extranjeros, quedando fijado el arancel en un valor parejo del 10%. Con esta medida se buscaba estimular una mayor eficiencia en las empresas nacionales, que se vieron obligadas a competir con los productos importados que inundaron el mercado local, y se privilegio el desarrollo de aquellas unidades productivas que fueran capaces de adaptarse a las nuevas exigencias.[6]

En el mundo del trabajo la nueva legislación que impone la dictadura buscó terminar con el carácter regulador de las relaciones laborales que tenía el código del trabajo vigente desde principios de los años treinta.

En términos más específicos la nueva ley elimina ciertas normativas que restringían el despido de los trabajadores por parte del empleador y también otros artículos que impedían la subcontratación de terceras empresas por parte de una entidad matriz.

Sin perder de vista la importancia que tienen los cambios antes descritos, hay que considerar que desde una perspectiva estratégica, la meta más ambiciosa que se propusieron las autoridades militares reside en la declarada intención de eliminar o reducir al mínimo posible la influencia del movimiento sindical.

Si bien los sindicatos mantuvieron su existencia legal, se les despojo de la mayoría de las atribuciones que les permitían realizar una negociación efectiva frente al empresariado, ya que en el nuevo código laboral se prohíbe la negociación colectiva por ramas de la producción, y también para los sindicatos interempresas y transitorios, y sólo se mantiene este derecho para los sindicatos de empresa.

Al mismo se limitaron al máximo los derechos sindicales, particularmente el derecho a la huelga, pues se establece que la duración de la misma puede extenderse por un máximo de sesenta días, período durante el cual se permite el reemplazo temporal de los operarios en huelga.

Además se fomenta la atomización de la organización en la medida que se establece el carácter voluntario de la afiliación sindical y se permite la constitución de más de un sindicato por empresa.

Este renovado código laboral institucionalizo un importante aumentó en el excedente de explotación de la fuerza de trabajo. Es más la transferencia de recursos de los asalariados no sólo aumento los ingresos de los empresarios, sino que también permitió incrementar la modernización vía inversión de los sectores ejes del aparato productivo.

Una conclusión preliminar indica que las reformas estructurales que emprende la dictadura efectivamente buscan despojar al estado de la mayoría de sus capacidades de intervención en la vida económica del país.

No obstante hay que considerar que estas reformas tienen un alcance que sobrepasa con creces el ámbito económico, pues también contemplan el traspaso a manos privadas de aquellos servicios sociales que resultan más rentables, y es por esta vía como el mercado logra introducirse en ciertas áreas sociales que tradicionalmente habían estado vedadas para el capital.

La dictadura impulso además la privatización total de la seguridad social y se avanzo en un proceso de privatización parcial en el ámbito de la salud y la educación. En estos últimos dos sectores continuaron operando en el sistema público, aunque en condiciones extremadamente desmedradas.[7]

En el caso de la privatización del sistema de seguridad social, ése se realiza a través de la creación de las denominadas Administradoras de Fondos de pensiones (AFP)

[6] Alejandro Foxley. Experimentos Neoliberales en Latinoamérica. Estudios Cieplan N°50. 1982.
[7] Daniel Núñez. Breve Balance de dos Décadas de Neoliberismo en Chile. Instituto Alejandro Lipchust.

y la consiguiente liquidación del antiguo sistema de previsión basado en un reparto solidario, curiosamente para las Fuerzas Armadas, mantuvieron el antiguo sistema de reparto, mientras los demás chilenos y chilenas se les obligaba a asumir un sistema de capitalización individual.

Por diversas razones no fue posible privatizar todo el sistema público de salud, entre otros motivos se evaluó que el impacto social que podría haber alcanzado una medida de estas características es demasiado elevado, y considerando además, que cubrir las necesidades de salud de los sectores de menores ingresos no constituye una actividad que reporte utilidades económicas.

Se opto por crear un sistema privado que atienda las necesidades de salud de los sectores de más altos ingresos, dando paso a la creación de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En forma paralela se produce la desarticulación del Sistema Público de Salud, a través de la creación de los Servicios de salud regionales "autónomos", y con el traspaso de la atención primaria que dependían del ministerio de salud a la administración municipal.

Además de las reformas estructurales antes mencionadas, la dictadura también desarrolló desde 1973, varias oleadas privatizadoras que afectaron a una gran cantidad de empresas estatales, más de 32 empresas fueron entregadas a manos privadas, varias de ellas monopolios estatales como los servicios Telefónicos, de generación y distribución de electricidad y diferentes empresas productivas de la talla de la siderúrgica de Huachipato y la Compañía encargada de la refinación del Azúcar.

A contar de 1982 y hasta 1989, se identifica la segunda etapa de la implementación del modelo en Chile, que a juicio de Muñoz[8], se introdujeron ciertas medidas mas bien pragmáticas, entre otras razones se plantea que el poder del gobierno fue debilitándose, el impacto de la deuda externa fue muy fuerte y el éxito económico aparente de fines de los años setenta que se había basado en los altos niveles de endeudamiento, ya no era posible de mantener. Esto provoco un clima de descontento y la aparición de nuevos movimientos sociales.

Entre las acciones tomadas que destacaron en ese periodo, podemos mencionar, las sucesivas devaluaciones del peso, la introducción de ciertas protecciones arancelarias, bandas de precio para las principales importaciones agrícolas, subsidios a las exportaciones no tradicionales, mayor regulación al sistema financiero, ayudas financieras masivas al sector privados y por ultimo un cambio sustancial de la política fiscal, que muestra un fuerte déficit de 3,4% del PIB en 1983-85.

Manuel Castells[9], a denominado al modelo económico social implementado por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, desde 1989, como " modelo democrático liberal incluyente" en contraste del "modelo liberal autoritario excluyente" es interesante esta denominación de Castells, pues incorpora en su análisis al aspecto económico, también componentes sociales y político, algo que al parecer fue una característica de lo implementado en dictadura, un modelo económico, sustentado en un modelo autoritario políticamente y con amplia exclusión social.

Ricardo Ffench Davis,[10] establece que solo entre 1973 y 1981, es posible identificar un modelo "neoliberal puro", desde 1982 ya se introducen ciertos pragmatismos que hacen que dicho modelo ya no cumpla con las características de un modelo neoliberal, si se quiere ser rigurosos y desde 1990 se incluiría las reformas al sistema como tal, impuestas por los gobiernos de la Concertación.

Tres son los ejes que identificaría al "modelo"[11] aplicado desde 1989 en Chile:

- Gobernabilidad política basada en una coalición de partidos de centro izquierda que constituyese un bloque político mayoritario que le diera estabilidad democrática al país.
- Aceptación de las reglas del mercado para organizar la economía, profundizán-

[8] El modelo económico de la Concertación. 1990-2005 ¿Reformas o cambio? 2007.
[9] Castells, Manuel. Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial. 2005.
[10] Ffrench –Davis. 2007
[11] Muñoz. 2007

dolas mediante una política activa de integración comercial con el resto del mundo, el desarrollo de una institucionalidad reguladora de los mercados e impulsadota del emprendimiento, todo ello en un marco de estabilidad macroeconómica y financiera.

- Alta prioridad política al pago de la deuda social con los secretos más empobrecidos de la sociedad, para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.

Nuevo Estado, nueva sociedad.

Uno de los aspectos que ha caracterizado la doctrina neoliberal, es desmantelar el Estado y culparlo de todas las desgracias de la sociedad y de sus ciudadanos. El paradigma creado para este efecto, es que "siempre lo privado es más eficiente", con esto han traspasado al sector privado gran parte de las responsabilidades económicas e incluso sociales, han desmantelado en parte importante la estructura de un Estado, que al menos en el caso chileno, fue determinante para el desarrollo de nuestra sociedad hasta el año 1973.

Para nosotros lo avanzado en los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia [12] si bien no ha sido lo esperado por el mundo de los trabajadores organizados, reconocemos que ha avanzado en la línea correcta. Nuestra propuesta va por construir un Estado social, democrático y solidario[13], en donde lo central sea el bienestar de todas las mujeres y hombres pertenecientes a dicho estado.

Un Estado Social, que este ligado a los derechos de las personas. No será posible construir este Estado sin establecer como base de diseño, el derecho de todas y todos lo ciudadanos a tener una vida digna, en condiciones de libertad, justicia y equidad social, política y principalmente económica.

Un Estado Democrático, que reconozca y respete las ideas y manifestaciones ideológicas, culturales, de expresión, derechos y deberes, donde se respete el derecho soberano del pueblo. Para esto creemos necesario contribuir en el fortalecimiento de los procesos democráticos, pues creemos que un Estado incluyente y en una acepción amplia de ese concepto, es la única forma de avanzar en esta línea.

Un Estado Solidario, reconociendo este como un valor esencial que nada tiene que ver con el asistencialismo ni con el populismo, un Estado solidario que ayuda a crecer a la gente y ofrezca las mismas oportunidades a todos.

Es decir debemos trabajar por construir una nueva sociedad, una sociedad basada en los derechos de sus ciudadanos, en donde estos sean el eje de acción de las políticas publicas y del quehacer de todos los actores que participan en el desarrollo de la misma.

La CUT, ha propuesto que para avanzar en lo anteriormente planteado existe, en el caso chileno, una plataforma minima de modificaciones en las relaciones laborales, económicas, políticas y sociales en nuestro país, entre ellas[14]:

Reformas Laborales: La CUT demanda una respeto a la libertad sindical; Mas fiscalizadores y sanciones ejemplificadoras a los infractores de la ley; Negociación colectiva real, fortalecimiento de la negociación en la empresa, fin al reemplazo y el descuelgue durante la huelga, derecho a negociar para todos los sindicatos y negociación por rama. Exigimos el inmediato ingreso al parlamento de la Ley que crea el defensor Laboral.

Una Nueva Institucionalidad Previsional: que termine con el actual sistema de AFP y de paso ha un sistema de pensiones con garantía estatal, de carácter público, con una tasa de reemplazo del último salario de los trabajadores y con cobertura de seguridad social.

Un Proyecto de Desarrollo Nacional de País: para enfrentar el desempleo, con énfasis en las regiones más deprimidas. Que implique entre otras cosas una reforma a la CORFO para que recupere el rol que le dio origen, fomento a las Mypimes, industrialización, apoyo en tecnología e investigación a la agricultura nacional. Para eso el país dispone de recursos suficientes.

Los trabajadores no son responsables de la crisis, es por eso que demandaremos me-

[12] Grupo de partidos políticos de centro izquierda que gobierna Chile desde el termino de la dictadura militar
[13] Propuesta desarrollada por la CUT a partir del año 2004.
[14] Plataforma de lucha refrendada en el ultimo Consejo Nacional Ampliado realizado en enero de 2009

didas que permitan paliar el endeudamiento de los miles de chilenos para quienes su única opción es el crédito.

Recuperación de Nuestros Recursos Naturales: Nuestras riquezas naturales mineras, pesqueras, el agua, entre otras, no pueden seguir en manos de privados transnacionales, deben transformarse en la base de un proyecto de desarrollo nacional propio.

Defensa del medioambiente en una línea de desarrollo económico sustentable con lo que se refiere a trabajo decente, en materia de condiciones sanitarias sanas y seguras para los trabajadores.

Una Reforma Tributaria: Que permita mejorar la distribución de la riqueza, donde paguen más impuestos los que más ganan, de tal forma que permita estrechar la brecha salarial expresada en grandes diferencias tanto en el sector público como privado.

Fortalecimiento de la Educación Pública: Demandamos una verdadera reforma a la educación Chilena que asegure el acceso igualitario a ella, eliminar el lucro, y toda situación de discriminación, entendiendo que la educación es un instrumento fundamental de movilidad social y de lucha contra la desigualdad.

Mejoramiento de la Salud Publica: Eliminando las listas de espera, integrando nuevas enfermedades al plan AUGE y mejorando también la infraestructura realizado hospitalaria. Del mismo modo exigimos una reforma a la ley de ISAPRES que termine con el negocio y la especulación de quienes han convertido la salud en un bien transable en el mercado, obteniendo con ello suculentas ganancias mientras que sus usurarios deben cancelar planes exagerados.

Un Sistema de Transporte Público de Pasajeros: Se requiere de un sistema que tenga como base a los ciudadanos, esto no puede seguir en manos de los privados, el Estado debe hacerse cargo de asegurarle a los ciudadanos de todo el país el uso de este bien necesario e importante en su vida diaria.

Por una verdadera protección de la alimentación para el pueblo de Chile: Se requiere una Política de Gobierno que no sólo garantice la producción de productos alimenticios, sino que le proporcione los medios para dicha producción, esto debe garantizarlo la Constitución Política del Estado.

Nueva Constitución Política y Fin a la Exclusión: Demandamos impulsar un referéndum

donde los ciudadanos ejerzan el derecho a votar por una Constitución Democrática que rija los destinos de los chilenos, que modifique un sistema electoral, termine con la exclusión política y asegure a cada uno de los chilenos sus derechos ciudadanos, humanos, de libertad y la justicia social.

Para lo anterior la Cut esta desarrollando una estrategia de ampliación de sus niveles de influencia a nivel nacional y las alianzas políticas y sociales con otros actores relevantes en el devenir nacional.

CRISIS FINANCIERA Y FONDOS DE PENSIONES

Ignacio Arraigada Fernández,
Federación de Sindicatos de la Salud Privada y la Seguridad Social
Diciembre 2008

Introducción

La Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, "la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social" (numeral 18 del articulo 19) por lo tanto este derecho debe ser protegido y garantizado por el Estado chileno.

La existencia de un Sistema de Seguridad Social tiene que ver con el convencimiento de la sociedad, de proveer un conjunto de condiciones básicas para proteger a las personas que están impedidas individualmente, de resolver sus necesidades en previsión, salud, educación, vivienda, justicia, etc.

Definiciones

AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones. A principios de 1980, la dictadura militar comenzó a aplicar salvajemente un modelo económico que llevó a la privatización de los sistemas de seguridad social, entre ellos salud, educación, previsión. Es así como sin debate ni oposición, se estableció un nuevo sistema de pensiones en Chile con el Decreto Ley N° 3.500, que establece en el artículo 23 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son sociedades anónimas, cuyos únicos objetivos son: administrar un fondo, denominado Fondo de Pensiones, y otorgar las prestaciones y beneficios que establece dicha ley.

Los Fondos de Pensiones entonces quedan constituidos: a. por las cotizaciones obligatorias de los afiliados a una AFP (10% de renta imponible) en su Cuenta de Capitalización individual; b. por las cotizaciones

voluntarias, depósitos de ahorro previsional voluntario, o depósitos convenido acordados con el empleador (artículo 20); c. por los depósitos efectuados en la cuenta de ahorro voluntario (artículo 21); d. por los Bonos de Reconocimiento; e. por sus inversiones y rentabilidades de éstas, deducidas las comisiones de la Administradora; f. otros.

Prestaciones y Beneficios. Las AFP no pueden otorgar a sus afiliados, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley. Tales prestaciones y/o beneficios son: pagar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y pagar de la cuota mortuoria.

Cuenta o Fondo de Capitalización Individual. Es una Cuenta o Fondo de Ahorro Previsional que el trabajador tiene en una AFP, donde se registran en forma contable todas las operaciones o movimientos que respecto de ese afiliado se realizan. En ella quedan anotadas las cotizaciones que mensualmente ingresan, los reajustes e intereses ganados, las comisiones cobradas, etc. Es una Cuenta de Capitalización personal y única con el objetivo de acumular un monto de dinero para financiar las pensiones del afiliado y sus beneficiarios.

Hasta el año 2000, los trabajadores chilenos tenían un único Fondo Individual, pero la Ley 19.705, introdujo un Segundo Fondo de Pensiones, para hacer más democrático el sistema y que los trabajadores pudieran elegir en que fondo colocar sus cotizaciones por los riesgos de inversión.

Los trabajadores más jóvenes pueden invertir con más riesgo en el largo plazo, en cambio los de más edad y próximos a pensionarse prefieren no arriesgar sus recursos en rentas variables, eligiendo invertir en rentas fijas.

Basándose en la misma idea, en febrero del 2002, se volvió a modificar la ley estableciéndose que cada Administradora de Fondos de Pensiones debe mantener cinco Fondos de Pensiones, denominados Tipo A hasta Tipo E. La ley establece grupos etáreos para determinar por qué fondos deben optar los afiliados. Es así como indica en el artículo 23, que los hombres hasta los 55 años de edad y las mujeres hasta los 50 años de edad podrán optar por cualquiera de los Fondos mencionados, para los mayores se determinan fondos de menor riesgo.

Inversiones. De acuerdo a lo previsto en el artículo 45, los Fondos se invierten en instrumentos financieros, autorizados por el Decreto Ley 3.500. Para resguardar la seguridad y rentabilidad de los Fondos, se establecen por el Banco Central normas de diversificación de los riesgos de la cartera, tomando en cuenta los tipos de instrumentos. Se clasifican los riesgos por una Comisión Clasificadora de Riesgos (art. 99), integrada de acuerdo a lo previsto en el artículo 100 por: el Superintendente de A.F.P, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el Superintendente de Valores y Seguros y cuatro representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, elegidos por éstas. En esta Comisión no se considera la participación de representantes de los trabajadores que somos los únicos que aportamos a los Fondos, por tanto somos los únicos dueños de ellos.

Crisis Financiera Actual

La crisis financiera que estamos viviendo comenzó en Estados Unidos a fines de 2006. Ellos venían de un largo período de bonanza, por lo tanto, tenían un mayor poder adquisitivo.

Entonces los bancos flexibilizaron sus políticas y comenzaron a otorgar préstamos para compras de inmuebles, otorgando mayor cantidad de créditos subprime, que son un tipo de préstamo más riesgoso dirigido a clientes poco solventes, pero con un alto interés y de carácter hipotecario, de tal manera que si el cliente no pagaba su deuda, la propiedad comprada pasaba a poder del banco. Es decir el cliente pagaba más o el banco se quedaba con la casa o el departamento.

Como era buen negocio, se produjo una oferta excesiva de viviendas, como hubo poca preocupación por la solvencia de los

clientes, muchos no pudieron con los altos intereses y no pagaron sus deudas, pasando sus viviendas a manos de los bancos. Así entonces los bancos tuvieron muchas casas y departamentos, pero no tenían liquidez y debieron comenzar a rematar. Pero como había tantas viviendas en el mercado, su valor disminuyó drásticamente. Así los bancos no recuperaban lo invertido y comenzaron a perder.

Un problema de tipo inmobiliario se transformó en una crisis financiera, la caída de esos bancos en Estados Unidos, provocaron el desplome de las Bolsas de Comercio del mundo, donde se transan los valores de las acciones o títulos de propiedad de una sociedad anónima o compañía.

¿Como impacta esta crisis nuestros Fondos de Pensiones?

Para nadie será una sorpresa que esta crisis afectará muy negativamente nuestros Fondos de Pensiones y por consiguiente nuestras futuras pensiones. Pero no sólo esta crisis afectará las pensiones de los trabajadores, el modelo de AFP creado 1981 es el principal responsable de las pensiones miserables que, con crisis subprime o sin crisis subprime, tendremos los chilenos.

Por su administración de carácter privado y con fines de lucro, por su forma de financiamiento, por su carácter individualista, por estar orientado para una situación ideal de 45 años de trabajo continuo y con una remuneración por sobre la media; es decir, por el cómo está diseñado este sistema de AFP, nunca ha garantizado una pensión promedio cercana al 70% de la remuneración como lo garantizaba el antiguo sistema de reparto solidario.

La actual crisis sólo viene a confirmar lo que venimos diciendo desde que se privatizó la Seguridad Social y se nos impusieron las AFP, que tal como fueron creadas, estas no pagarán nunca una pensión promedio como la que entregaba el antiguo sistema de Cajas Previsionales.

Mas oscuro es el panorama cuando la crisis actual, como es de conocimiento público, ha generado una perdida en el Fondo General de Pensiones de millones de dólares; muchas son las cifras que se dan, pero todas dependen de los rangos de fechas que se tomen: por ejemplo en Marzo 2008 el Fondo tenía U$ 121.000 millones y en Octubre el Fondo acumulaba sólo U$69.000 millones, esto producto de las rentabilidades negativas que han afectado a las inversiones efectuadas por las AFP.

Según lo informado por la Superintendencia de Pensiones, durante el año 2008, los cinco tipos de Fondos de Pensiones terminaron con rentabilidades negativas: Fondo A -40%, Fondo B -30%, Fondo C -19%, Fondo D -10%, y Fondo E - 1%

Lamentablemente esta pérdida es irreparable, aunque algunos quieren hacernos creer que si se recuperará, considerando la forma en que están diseñadas las AFP esos dineros ya no se encontrarán en las cuentas individuales de cada afiliado y si las pensiones ya eran deficientes con esta crisis se hacen más miserables, generando en las personas mayores, próximas a pensionarse, una gran angustia.

Estrategia de Acción Sindical

Para los trabajadores esta crisis es muy preocupante, son muchas las señales de lo dificultoso que será este año 2009.

En el Gran Santiago, el desempleo llegó a 9,7 por ciento en diciembre pasado según la última "Encuesta de Ocupación y Desocupación" realizada por la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile. El estudio correspondiente al mes de diciembre de 2008 arrojó que la tasa de desempleo es mayor en 0,8 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo del año anterior (8,9%).

Las últimas acciones del empresariado y del gobierno ante la crisis ya empiezan a afectar a miles de trabajadores. El Gobierno hace todo lo posible por dejar satisfechos a los empresarios con la ley de sueldo Base y la Semana Corrida. Por el contrario la empresa Cencosud informó el cierre de las obras de Costanera Center, que dejará a cientos de cesantes.

Muchas deben ser las acciones que el movimiento sindical realice durante el 2009, probablemente eso signifique ir abordando los temas más coyunturales; por otro lado seguramente aparecerán distintas propuestas, que de no ser consensuadas entre los trabajadores y nuestras organizaciones, terminarán como siempre ocurre: no escuchadas o con soluciones impuestas por las autoridades.

Ciertamente hay aún muchas diferencias entre los dirigentes sindicales; algunos apoyan la iniciativa de crear una AFP Estatal. La CAT ha sostenido desde siempre que el sistema de AFP al no cumplir los principios de lo establecidos por la OIT para los Sistemas de Seguridad Social, es un engaño para los trabajadores, es una estafa legalizada, es un sistema de ahorro forzoso que solo ha servido para profundizar las desigualdades sociales y para que unos pocos sean hoy mucho más ricos con los dineros de los trabajadores y trabajadoras de Chile.

Una AFP Estatal, sin duda alguna, es más de lo mismo. La CAT plantó en su momento y lo sigue haciendo hoy, la creación del FONAPE (Fondo Nacional de Pensiones) un sistema de reparto solidario, con financiamiento tripartito y administración compartida. Similar propuesta hace la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Trabajo, señalando que "es preciso propiciar un nuevo sistema basado en un fondo de reparto solidario que permita asegurar una pensión digna a los trabajadores", lo mismo vienen planteando la Consfetracosi Confederación de Trabajadores del Comercio Oficinas Servicios Industrias, los trabajadores del INP y varias otras Organizaciones.

El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, indica que las AFP serán incapaces de superar la actual crisis, y "quedará al desnudo la locura que la pura capitalización individual pueda proveer de por vida pensiones definidas, dignas y no discriminatorias, a millones de trabajadoras y trabajadores chilenos".

Responsabilidad del Estado

Sin desconocer el carácter subsidiario que tuvo la última "Reforma Estrella" al Sistema Previsional, lo alcanzado por la presidenta Bachelet, sólo apunta a proporcionarle oxigeno a un sistema que está en el lecho de enfermo grave.

Si el Estado, según la Constitución otorga un derecho, entonces asume la responsabilidad de hacer posible el ejercicio eficiente de la Seguridad Social; si el Sistema se materializa a través de administradores privados, que en forma obligatoria para el afiliado, administran los fondos acumulados y que son de propiedad del trabajador, cobrando además una comisión por ello. Si este sistema se caracteriza por ser imperativo, sin opciones para el afiliado; entonces el Estado no puede eximirse de responsabilidad por la pérdida patrimonial que están teniendo los trabajadores, en la administración privadaza del sistema.

El Estado debe adoptar urgentemente las medidas para prevenir que se siga profundizando el deterioro de los fondos individuales de pensiones.

El Estado debe informar transparentemente, cuales son y serán las verdaderas repercusiones que tendrá la actual pérdida de los Fondo de Pensiones para los trabajadores.

Toda acción del movimiento sindical durante el 2009, relacionada con el sistema de pensiones, debe estar encaminada a presionar para que el gobierno definitivamente presente un proyecto donde el Estado entregue a los trabajadores chilenos un sistema con los valores y principios que plantean las organizaciones internacionales, para que el trabajador tenga verdadera libertad de elección, con un sistema solidario, de reparto, donde todos aporten y tengan la posibilidad de alcanzar una pensión más cercana a las remuneraciones promedios.

LOS TRABAJADORES NO PAGARAN LA CRISIS. LA SOLUCIÒN A LA CRISIS ES LA GENERACIÒN DE EMPLEO E INGRESO

Dirección Ejecutiva Nacional
Noviembre 2008

Reunida los días 5 y 6 de noviembre de 2008, en San Pablo, la Dirección Ejecutiva Nacional de la CUT debatió las causas, consecuencias, perspectivas y acciones frente a la crisis financiera que asola actualmente la economía internacional.

La CUT posee una concepción de desarrollo según la cual el Estado tiene un papel central en la organización de la economía y en la construcción de políticas de distribución del ingreso y valorización del trabajo. Consideramos imprescindible la modificación de la política económica (en especial las políticas monetaria y fiscal), una reforma tributaria socialmente justa y mecanismos de democratización del presupuesto de la Unión.

En el momento actual, la economía capitalista atraviesa la más grave crisis desde 1929. Es una crisis estructural del sistema que explota a los/las trabajadores/as, que concentra ingreso y que condena a millones al hambre y la miseria. Este sistema, desde las últimas décadas del siglo XX, se ha guiado por políticas de liberalización financiera y comercial. Las políticas de desregulación y de autorregulación del mercado están en la base de la crisis financiera actual. El resultado de esta libertad sin controles fue un proceso de financierización sin límites, cuya expresión es la existencia de una brecha entre la riqueza producida en forma de papeles (títulos públicos, acciones y derivados) y la riqueza real alcanzada por la producción y por el trabajo. De acuerdo a datos del Bank for International Settlements (BIS), la riqueza en papeles denominados "derivados y otras innovaciones financieras" es de cerca de US$ 600 billones, comparada con un valor de producción efectiva de riquezas, medida por el PBI mundial, de US$ 65 billones. El colapso del sistema de financiamiento inmobiliario estadounidense es sólo la cara más visible de una crisis más profunda.

Frente al número de instituciones y empresas involucradas, a la suma de los valores en juego y al riesgo de propagación rápida de los efectos de la crisis sobre las inversiones, la producción y el empleo, los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo vienen adoptando un conjunto de acciones, como la aplicación de mecanismos de "auxilio" a las instituciones afectadas, el aumento de la liquidez en la economía y las alteraciones en las tasas de interés y en las tasas de cambio, entre otras. Pero estas medidas no están acompañadas de contrapartidas claras y, de esta forma, se convierten en simples transferencias del dinero público hacia la especulación.

La economía brasileña presentó tasas de crecimiento notables entre 2004 y 2007: tasa anual promedio de crecimiento del PBI del 4,4% contra el 2,1% en promedio anual en las dos décadas anteriores. Este desempeño se fundamentó, en gran medida, en la expansión de la economía interna y en tres vectores fundamentales: el aumento de las exportaciones, el incremento del crédito y las medidas de distribución del ingreso, especialmente las políticas de valorización del salario mínimo y el Programa Bolsa Família. Como consecuencia, en el Gobierno de Lula, se expandió la contratación de empleos formales en los diversos sectores de la actividad económica y se inició un proceso de recuperación de los salarios en general, por medio de las negociaciones colectivas.

La CUT contribuyó directamente a este escenario positivo, por intermedio, entre otros, de sus propuestas y movilizaciones, como las marchas a Brasilia, que fueron determinantes para la ejecución de la Política de Recuperación del Salario Mínimo; de los acuerdos de actualización de la tabla del Impuesto a las Ganancias; de las negociaciones que tuvieron como resultado la reducción de las tasas de interés en los préstamos con descuento en el recibo; de la presión para obtener más inversiones en políticas sociales como educación y salud y por recursos adicionales para la agricultura familiar.

Los efectos de la crisis financiera internacional sobre la economía brasileña ya comienzan a hacerse sentir, como el anuncio de vacaciones colectivas y la suspensión de las inversiones programadas en sectores importantes de nuestra economía. Por lo tanto, es fundamental una intervención rápida, correcta y decisiva del Estado brasileño, para impedir que estos efectos se expandan a varios sectores, interrumpiendo bruscamente el referido proceso de crecimiento económico. Más aún, la intervención es esencial, porque, en un escenario de propagación de la crisis, los trabajadores son, sin duda, las mayores víctimas por la vía de la pérdida del empleo y de la rápida caída del nivel de ingreso, entre otras.

El gobierno brasileño ha adoptado medidas para salvaguardar el funcionamiento del sistema de crédito en Brasil y preservar de la crisis a la economía real, como la medida de liberación del pago obligatorio o el permiso para que los bancos públicos (Caja Económica Federal y Banco de Brasil) puedan incorporar instituciones financieras y no financieras en dificultades. La CUT sostiene que medidas como éstas sean obligatoriamente acompañadas de contrapartidas para el Estado y los trabajadores.

La CUT entiende que la intervención del Estado no puede significar la "socialización de las pérdidas" del sector financiero con la sociedad en general, siendo que, en el período de crecimiento reciente, lo que se percibió fue la "privatización de las ganancias" expresada en las gigantescas ganancias anuales de los bancos, que alcanzan el valor de decenas de miles de millones de dólares en Brasil.

Ante este diagnóstico y frente a las posiciones históricas de la CUT, la Dirección Ejecutiva de la CUT discutió y deliberó acerca de la presentación al Gobierno, a la sociedad brasileña y a los espacios y foros internacionales en los que la Central participa del siguiente conjunto de directrices de propuestas para enfrentar la crisis:

a) Defensa y Garantía del Empleo

1) Ningún despido. Estabilidad en el empleo.

2) Ratificación del Convenio N° 158 de la OIT.

3) Reducción constitucional de la jornada máxima de trabajo a 40 horas semanales sin reducción de los salarios y limitación de las horas extras según propuesta de la CUT.

4) Ampliación de las políticas de generación de empleo en el sector privado y en el sector público, especialmente para los segmentos más vulnerables, como las mujeres y la población negra.

5) Programa especial de generación de empleo e ingreso en la agricultura a partir del fortalecimiento de la agricultura familiar y garantía de precios mínimos.

6) Reforma Agraria: Establecimiento de límite de propiedad de la tierra, actualización de los índices de productividad, garantía de instrumentos legales de control de compra de tierras por extranjeros, lucha contra el trabajo esclavo.

b) Inversiones

7) Fortalecimiento de la política de valorización del salario mínimo y de las jubilaciones y las políticas públicas de salud y educación, garantizando la ampliación de recursos del presupuesto público para las áreas sociales (EC29, FUNDEB, etc.) y los programas de transferencia del ingreso.

8) Fin del superávit primario y ampliación de las inversiones en obras de infraestructura, la valorización del servicio público y de las políticas sociales, como los Territorios de la Ciudadanía.

9) Ampliación de la capitalización del BNDES y de los recursos para el presupuesto corriente de la institución, tendiendo al financiamiento de las inversiones y, de esta forma, a la reducción de la tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP).

10) Derogación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

c) Crédito

11) No se debe conceder ningún recurso financiero a la especulación.

12) Toda institución financiera que presente estado de quiebra debe ser estatizada.

13) Creación de mecanismos como multas, tasas, sanciones administrativas, entre otras, que aseguren la concesión de crédito a la economía y que los recursos liberados por el gobierno federal lleguen a la economía real, no siendo utilizados por los bancos para otros fines.

14) Todo "auxilio" que el gobierno resuelva conceder a las instituciones financieras y no financieras que presenten problemas en función de la actual crisis internacional debe tener contrapartidas, a partir de los siguientes criterios:

14.1 Garantía de mantenimiento del nivel de empleo en las instituciones financieras y no financieras.

14.2 Garantía de estabilidad de empleo en los procesos de fusiones e incorporaciones.

14.3 Que los volúmenes de recursos de los programas de apoyo sean devueltos al Estado, en cuotas y plazos previamente determinados.

14.4 Limitación de las utilidades de los ejecutivos de las instituciones financieras y no financieras.

15) Ampliación de las acciones para garantizar crédito y seguro para la agricultura familiar, como también el crédito inmobiliario, para combatir el déficit habitacional.

d) Medidas de Emergencia

16) Estructuración por parte del Gobierno Federal del Plan de Renegociación de Deudas para pequeñas empresas, asalariados y trabajadores en general.

17) Reducción del impacto de la devaluación del real en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, por medio, entre otros, de la reducción de los impuestos internos, con la contrapartida del mantenimiento de precios.

18) Construcción del Contrato Colectivo Nacional de Trabajo.

19) Constitución, con carácter de emergencia, de Cámaras Sectoriales, especialmente en los sectores más afectados por la crisis del crédito y retracción de la actividad económica (construcción civil, textil y calzado, alimentación, etc.), de manera que las iniciativas de apoyo del Estado representen contrapartidas en el área de la garantía del empleo y mejora de las relaciones de trabajo en cada sector.

20) Valorización del salario mínimo, con la incorporación de la variación de los precios de los alimentos ya en el reajuste de 2009.

21) Interrupción de los procesos de privatización del patrimonio público (Embrapa e Infraero), el remate de las reservas petrolíferas, así como derogación del marco regulatorio heredado del Gobierno de FHC, de modo que la riqueza de la capa pre-sal sea aprovechada en beneficio de la Nación.

22) Retiro del Proyecto de Ley que propone el establecimiento de las Fundaciones Estatales de Derecho Privado.

e) Garantías de los Derechos de los Trabajadores

23) Ampliación de los derechos de los trabajadores y retiro de los proyectos de flexibilización existentes hoy en el Congreso Nacional, como el PL N° 4302/1998, que trata sobre el trabajo temporario y la tercerización.

24) Garantía de cumplimiento pleno de los acuerdos colectivos firmados con los empleados públicos en todas las esferas de gobierno (federal, estadual y municipal) y ratificación del Convenio N° 151, que prevé la negociación colectiva para los empleados públicos.

25) Garantía de cumplimiento de la ley que establece el Piso Nacional del Magisterio.

f) Políticas Económicas

26) Sistema de Metas de Inflación más flexible, con el uso efectivo del intervalo de tasas de inflación admisibles, sin determinar cuál es la meta-centro.

g) Sistema Financiero Nacional e Internacional

27) Reglamentación del artículo N° 192 de la Constitución Federal, que trata sobre la regulación y el papel social del Sistema Financiero.

28) Fortalecimiento del papel social de los bancos públicos.

29) Por medio de una amplia articulación desarrollada en el ámbito de la CSI y de la CSA, promover una agenda de debates y acciones que tiendan a la estructuración de un nuevo orden financiero internacional, que, entre otros, establezca un mayor control de las operaciones de las instituciones financieras y del flujo de capitales entre los países, de modo de minimizar los impactos generados en las economías nacionales.

30) Fortalecimiento del Mercosur como forma de reducir los impactos de los flujos de salida de capitales externos. Este fortalecimiento debe enfatizar los aspectos de complementariedad de los proyectos y el desarrollo de la dimensión social, con el establecimiento de contrapartidas y aplicación de la Declaración Sociolaboral.

¡LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS NO QUIEREN Y NO VAN A PAGAR LA CUENTA DE LA CRISIS FINANCIERA!

BRASIL EN LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL

Ricardo Patah, presidente
Enero 2009

La crisis financiera mundial preocupa a los trabajadores brasileños y a sus dirigentes sindicales por el estilo gerencial históricamente adoptado en las empresas brasileñas.

Vivimos en un país en el que los empresarios tienen la costumbre de usar a sus empleados para presionar al gobierno para conseguir préstamos (o ventajas fiscales) y, por eso, se anticipan a cualquier síntoma de crisis (real o imaginario) para despedir personal primero, reducir derechos, recortar beneficios, hacer alarde de esos despidos en la prensa y negociar ventajas ante los cofres públicos. Algunas de esas medidas, hay que decirlo, son usadas, en algunos casos, por las empresas para hacer caja para después costear las rescisiones laborales.

Los dueños de las empresas despiden personal sin preocuparse por las consecuencias económicas o sociales. El reemplazo sistemático de trabajadores por otros con salarios más bajos es una práctica sistematizada, conocida como rotatividad, que genera, inclusive, ganancias para los empresarios que la adoptan. En el documento de la UGT entregado al Presidente Luis Inácio Lula da Silva, defendemos la posición de que la rotatividad debe terminar.

Según el DIESSE (Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos), en 2007 representó un índice anual del 43,9%. Esto permite a las empresas cambiar todo el plantel de empleados en menos de dos años. En este sentido, la UGT defiende la admisión de nuevos trabajadores siempre con un salario idéntico al de los despedidos en ese cargo, de modo de reducir la rotatividad.

La facilidad para despedir es tal que las empresas la adoptan para reducir sus nóminas de personal. Los salarios de los trabajadores admitidos en el trienio 2005-2007 fueron siempre inferiores a los de los trabajadores despedidos. Los porcentajes de reducción fueron 11,42% en 2005, 11,06%, en 2006 y 9,15% en 2007, generando una reducción gradual

y sistemática del salario promedio. Y esto en un escenario anterior a la actual crisis financiera global.

Ahora bien, con los impactos de la reducción mundial del crédito, de la caída de los precios de los *commodities* y de la retención interna del crédito, en una política deliberada de los bancos privados brasileños, que además de apoyarse en la tasa básica de interés (Selic) del 12,75% (una de las más altas del mundo), adoptan un spread del 45% también estratosférico, las empresas brasileñas encuentran el escenario ideal para acelerar los despidos, ampliar la presión sobre las arcas públicas y hacer que la crisis financiera tenga contornos perversos para la clase trabajadora brasileña. Las empresas brasileñas —sean del sector productivo o del financiero— quieren aprovechar la crisis para desregular el mercado de trabajo mientras que, al mismo tiempo, defienden la regulación del "casino financiero".

Una de las empresas brasileñas más sólidas y una de las que pagan los salarios y beneficios más altos a sus altos ejecutivos, la empresa Vale do Rio Doce, fue una de las primeras en despedir a 1.300 empleados en noviembre del año pasado, incluso antes de que la crisis financiera mundial hubiera afectado seriamente el balance del último trimestre del año, que se iba a cerrar un mes después, en diciembre. La decisión fue tan arbitraria que perjudicó seriamente la imagen institucional de la compañía, que tuvo que valerse de avisos pagos en los grandes periódicos para tratar de justificar el corte brutal de su fuerza de trabajo.

Hasta aquellos sectores que fueron los primeros que ayudó el gobierno brasileño con baja de impuestos, como es el caso de la industria automotriz, no tuvieron problema en realizar recortes y reducir el número de empleos temporarios alegando la crisis mundial.

Con este comportamiento típico de los empresarios brasileños, que despiden en forma irresponsable sin preocuparse por las consecuencias para el mercado interno o por las repercusiones sociales de sus iniciativas, la crisis financiera mundial tiende a llegar a Brasil en forma muy severa y preocupante.

La alternativa que la Unión General de Trabajadores (UGT) viene adoptando es presionar directamente al gobierno federal, a través de audiencias permanentes con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para exigir contrapartidas sociales y mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas que hagan uso de préstamos públicos. Para ello, el 19 de enero presentamos al gobierno federal las propuestas anticrisis defendidas por la UGT, que están expresadas en el documento titulado "Superar la Crisis y Avanzar Rumbo al Desarrollo", que contiene las propuestas de la UGT, tanto las de carácter de emergencia como las de carácter estructural y macroeconómico. Nuestras propuestas tuvieron amplia repercusión en la prensa nacional y en el propio movimiento sindical brasileño.

Exigimos también la reducción acelerada de la tasa referencial de intereses, Selic, y combatimos en forma contundente la práctica de los bancos, públicos y privados, de adoptar uno de los mayores spreads del mundo, actualmente del 45% aproximadamente.

En el Congreso Nacional, a través de nuestro vicepresidente, el diputado federal Roberto Santiago, proponemos que el gobierno brasileño firme el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo que pondría fin al despido arbitrario y evitaría que los patrones despidieran en forma irresponsable, sin evaluar las consecuencias sociales de sus decisiones.

No basta con enfrentar y superar la crisis; tenemos que construir el futuro con un nuevo modelo de desarrollo que combine democracia, crecimiento económico con distribución del ingreso, modernización con justicia social, desarrollo sostenible con una integración soberana y competitiva de la economía brasileña a la economía mundial. Y tal futuro, es necesario decirlo, no se construirá por medio de la destrucción de las conquistas históricas de los trabajadores

Anexo 1

Reivindicaciones de la UGT al Presidente Lula para Combatir la Crisis

"Superar la Crisis y Avanzar Rumbo al Desarrollo"

I. Establecimiento de una Medida Provisoria que fije un criterio de emergencia para las contrataciones y ejecuciones de gastos públicos dirigidos a la inmediata recuperación y ampliación de la infraestructura vial y portuaria nacional. Tales contrataciones deberían darse, en la medida de lo posible, por medio del Pregón Electrónico, para garantizar transparencia, isonomía y economicidad.

II. Establecimiento, en la misma Medida Provisoria, de un Fondo de Emergencia de Fomento al Crédito a ser practicado por los Bancos Públicos (BB, CEF, BNDES, BASA, BNB). Tal Fondo sería provisto con recursos del Tesoro o con títulos de la Deuda Pública y se desdoblaría en dos segmentos:

- Un Fondo de Aval para complementar garantías imposibles de proveer por potenciales mutualistas.
- Un Fondo de Ecualización de Intereses para disminuir la tasa al tomador del préstamo, compatibilizándola con el retorno de su actividad económica.

Este Fondo de Emergencia se destinaría a facilitar la efectivización de la contratación de crédito, que es la moneda necesaria para que circulen bienes y servicios. En ese sentido generaría, con una sintonía de mercado más afinada por el análisis de crédito de los bancos, un importante flujo de demanda, adicional al generado por el gasto público directo.

III. Establecimiento de un Impuesto Patrimonial Sobre la Cartera de Títulos Públicos de los Bancos, con la finalidad de generar mayor volumen de recursos fiscales para dar soporte al gasto público. Ese impuesto cobraría la diferencia a la mayor entre las tasas de interés internas y las tasas de interés externas, reponiendo al Estado los recursos de los contribuyentes que se esterilizan en el pago de las tasas extraordinarias de interés practicadas en los títulos de la Deuda Pública Brasileña.

IV. Aceptación de la expansión temporaria de la Deuda Pública, si es necesario, para dar soporte al aumento de los gastos públicos.

V. Establecimiento inmediato de un agresivo Programa de Substitución de Importaciones de Bienes de Capital y de Agregación de Valor en las Exportaciones Brasileñas, con incentivos de crédito y tributarios.

VI. Seguimiento gerencial de la expansión del crédito macroeconómico por el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES), de manera de presionar a los Bancos Públicos para que alcancen la meta de sostener el volumen general de crédito en un nivel equivalente al existente antes de la crisis.

VII. Reducción inmediata de la Tasa Selic y redefinición de la Política Monetaria por un Consejo que incorpore, en forma paritaria, a representantes de la actividad Agropecuaria, de la Industria, del Comercio y de los Servicios, en donde se incluirían los provenientes del Sistema Financiero.

Estos puntos constituyen la propuesta más inmediata de la Unión General de los Trabajadores (UGT) para combatir la crisis e impedir su profundización con las graves consecuencias que se desdoblarán del plano económico al político.

LA GLOBALIZACIÓN Y LOS ACUERDOS DE COMERCIO

Paulo Pereira da Silva (Paulinho), Presidente
Enero 2009

La globalización ha desencadenado una serie de cambios de gran amplitud, de los cuales difícilmente alguien escape. La apertura económica y las nuevas tecnologías crearon un mundo interconectado que tiende a la interdependencia creciente en el área de las relaciones económicas (comercio, inversiones, finanzas y organización de la producción a escala mundial) y consecuentemente, a la interacción social y política entre las organizaciones y los individuos en el mundo entero.

Este proceso ha generado impactos negativos y desastrosos en materia de distribución del ingreso, pobreza, desocupación, migración, informalidad, desigualdades sociales, guerras y, lo que es más grave, el daño causado al ecosistema, que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos del planeta.

Las crisis —financiera, alimentaria, energética, ambiental y social— se convierten en una oportunidad para que los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad civil en general se movilicen para garantizar los derechos, ampliar las conquistas e intervenir en las definiciones de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que considere al ser humano y al ecosistema como su principal objetivo y prioridad.

El respeto por los derechos de los trabajadores deberá estar en primer lugar, antes que los acuerdos comerciales firmados por cualquier país o gobierno.

En este contexto, consideramos importante el fortalecimiento del movimiento sindical nacional e internacional, la democracia y la solidaridad efectiva. Será necesaria la articulación y unidad de acción con las diversas corrientes sindicales internacionales en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la implementación de la agenda de Trabajo Decente de la OIT, la construcción de propuestas alternativas para el desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida para todos los pueblos del mundo.

LA CRISIS GLOBAL Y LOS TRABAJADORES: UNA REFLEXION DESDE LA ARGENTINA

Hugo Yasky, Secretario General
Febrero 2009

Para los trabajadores Argentinos y del mundo todo, la actual crisis económica global ha adquirido una dimensión extremadamente preocupante pues, como siempre, en la lógica capitalista los platos rotos los terminamos pagando los trabajadores y los sectores populares.

La crisis no es el resultado de equivocaciones de políticas económicas y de malas prácticas de los gestores y directivos de los fondos de inversión y de los bancos, sino de la aplicación a escala global de un modelo económico y político basado en profundizar las desigualdades, favorecer la concentración, la especulación financiera y la aniquilación del medioambiente.

En definitiva, se trata del fracaso rotundo del las políticas neoliberales que se convirtieron en dogma durante la década de los 90 a partir del Consenso de Washington.

De dónde venimos y donde nos encontramos

Los acuerdos de Bretton Woods en 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, constituyeron el último gran ajuste del sistema internacional. La creación de instituciones como el FMI, y el Banco Mundial, fue concebida, en aquel momento, en un mundo en que los actores convocados eran los Estados nacionales, en la búsqueda de un nuevo escenario de paz mundial y la instalación del "Modelo de Bienestar", con mayor producción, empleo y distribución de la riqueza. Este modelo que se desarrolla hasta principios de la década del 70, implicó una etapa importante de la organización social y política de los trabajadores, los mimos participaban del 50% de la riqueza. Un relevante rol del Estado, tanto en su actividad de planificación y control en la vida económica y productiva de los países, como en lo que hace a las políticas sociales de carácter universal con un fuerte rasgo distributivo. La búsqueda de espacios de diálogo social y concertación que mejorara la calidad de vida de las mayorías populares y fue el instrumento utilizado para poner límites y racionalidad a las desmesuradas ansias de lucro del capital.

En este contexto y temerosos frente a los avances del campo popular, cada vez más organizado y disputando, palmo a palmo, no sólo la distribución riqueza sino la integralidad del sistema político y económico, se produjo la reacción de los factores de poder que utilizando las más diversas y deplorables metodologías (fraude, mentiras, inestabilidad política, golpes de estado, genocidios, guerras, etc.) acceden al control de los gobiernos de las principales potencias mundiales y comienzan una sistemática acción de imposición de una nueva visión del mundo, la que conocemos como la

consolidación a nivel planetario del modelo neoliberal o pensamiento único.

Como parte de ese proceso los organismos multilaterales, como el FMI o Banco Mundial entre otros, se convirtieron en los principales instrumentos de imposición de las políticas definidas por el poder central, relegando a los Estados nacionales de los países al papel de mero gestor de las mismas.

En la actualidad han irrumpido nuevos actores y nuevos espacios económicos globales. Estos grupos económicos, que han generado una concentración de riqueza y poder político inconmensurable, hoy actúan, completamente des-regulados, por encima de los Estados imponiendo sus mezquinos intereses por sobre el interés general.

La grave crisis del sistema financiero en los países del norte, cuyo detonante fue las hipotecas basura, se ha trasladado a la economía real, que se encuentra con dificultades de financiamiento crediticio y fuerte retracción de la demanda y consumo. Como consecuencia, lo que parecía en un primer momento que eran dificultades de liquidez, se ha puesto de manifiesto como una crisis sistémica.

Desde hace tiempo los trabajadores venimos advirtiendo sobre los peligros que entrañan la expansión económica ficticia sustentada en el juego de la especulación financiera. Además de las inestabilidades e incertidumbres estos procesos especulativos facilitaban el enriquecimiento excesivo de unos pocos, de forma rápida y fácil. Las operaciones de ingeniería financiera, los paraísos fiscales y las emisiones de bonos de alto riesgo sin control contribuyó a alimentar la hegemonía del capital financiero. Todo esto, totalmente desvinculado de la economía real, de la producción de bienes y rentabilidades razonables.

El estallido de esas burbujas fue la crónica de una muerte anunciada, que los gobernantes prefirieron no ver mirando hacia otro lado. Tanto es así que muchos de los bancos que hoy son arrastrados a la quiebra pretendían actuar como rectores de desempeño de las economías de los países periféricos. Este capitalismo enfermo, sin capacidad civilizatoria, profundizó además las desigualdedes y modelos económicos concentrados en medio de mares de exclusión social, condenando a la gran mayoría de los habitantes del planeta a la más humillante situación de hambre y miseria.

Como los que bailaban en el salón de lujo del Titanic, los años de expansión y de euforia del supuesto boom económico de las naciones centrales era elogiado y puesto como modelo por los grandes medios de comunicación y las fundaciones que actúan como usina ideológica de los grandes intereses económicos a nivel planetario.

Lo cierto es que ahora nos estrellamos de frente contra la realidad, enfrentados a los que puede ser una verdadera catástrofe en términos sociales. En pocos meses la economía mundial ha perdido un cuarto de su riqueza.

Para explicarlo en términos muy sencillos: el capitalismo contemporáneo es un sistema fuera de control. No hay normativas ni instituciones de escala global capaces de regular los flujos virtuales de capital, sea que se trate de especulación financiera, sea que se trate de bienes o servicios. La expansión del capitalismo ha entrado en su fase global, pero el ámbito político mundial sigue anclado a una estructura arcaica y cada día más descompuesta. Hoy no se trata sólo de tomar medidas duras en el ámbito nacional y, ni siquiera basta que la Unión Europea o Estados Unidos adopten políticas enérgicas frente a la crisis.

Los principales indicadores económicos y sociales nos señalan que la crisis se acelera y que el aumento de ritmo apunta hacia una gran involución, cuyo alcance todavía resulta difícil de prever.

El Estado militarista e interventor de Norteamérica nunca se retiró de la escena, y en las otras grandes potencias la intervención voluntarista del Estado estuvo siempre presente, aunque al servicio de un capitalismo globalizado y financierizado cuya dinámica terminó por desquiciar y corromper profun-

damente a los sistemas institucionales en los que se apoyaba.

Lo cierto es que en una suerte de efecto dominó que se inició en aquel país, la mayor parte de los países europeos están pasando de la recesión a la depresión. Japón sigue el mismo camino, mientras China transita hacia una fuerte baja en su tasa de crecimiento del PBI. Brasil y Rusia, por su parte, ya se han acoplado a este desinfle global.

Algunos datos sobre la gravedad y profundidad de la crisis

Tal como lo afirmábamos al principio, serán los trabajadores quienes paguen con desempleo y pobreza las consecuencias de la codicia sin límites y la depredación impuesta por la lógica del neoliberalismo.

Según la OIT durante el correr del próximo año se perderán 50 millones de puestos de trabajo. Para fin de este año habrá 230 millones de desocupados en todo el mundo. Esto significa que este nuevo aluvión de desocupados volcaría a 200 millones de personas a situación de pobreza extrema. Sólo en enero del 2009 en Estados Unidos se perdieron 600.000 puestos de trabajo, de los cuales 234.000 eran hispanos residentes en ese país.

No hay duda de que estamos frente a una crisis estructural, de un sistema que explota a los trabajadores/as, que concentra riquezas y que condena a millones al hambre y la miseria.

Dada la gravedad de la crisis, que en principio cuestiona seriamente la subsistencia de importantes empresas e instituciones, con riesgo de propagación rápida sus efectos sobre las inversiones, la producción y del empleo, los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo han implementado una serie de medidas, que suman cifras multimillonarias de los recursos fiscales, como fondos de salvataje a los grupos empresarios e instituciones afectados, rebajas tributarias, el aumento de liquidez de la economía y las alteraciones en la tasa básica de interés y las tasas de cambio, etc.

Destacamos que estas medidas no están siendo acompañadas de contrapartidas claras, de exigencias mínimas a los receptores de estos recursos. Tampoco existen programas de asignación directa de fondos a los verdaderos afectados que son los sectores populares. Son acciones de rescate que paradójicamente son usufructuadas por los mismos los empresarios irresponsables y, de esta forma, se vuelve al circuito de la transferencia dinero público para la especulación.

La crisis y la Argentina

Debemos recordar que la Argentina viene de sufrir las consecuencias de la aplicación de estas políticas antes descriptas a lo largo de las últimas décadas y con más profundad en los años noventa. Esto derivó en el estallido social del 2001, quizás la crisis política y económica más profunda de su historia. Basta tener en cuenta que la tasa de desocupación se acercó al 25 % de la PEA y el índice de pobreza superó el 50% de la población. La constante precarización de las condiciones de trabajo y pérdida sistemática de derechos laborales, fue el precio que debieron pagar los que conservaron sus puestos de trabajo. Es decir que la aplicación del experimento neoliberal dejó como resultado un pueblo arrojado a la marginalidad y la miseria. El correlato de esto en lo económico fue la suspensión del pago de la asfixiante deuda internacional y un fuerte proceso de desarticulación de la economía interna que se evidenció en la explosión del sistema financiero, una incontrolada fuga de capitales, y una mega devaluación del tipo de cambio, con la brutal pulverización del poder adquisitivo de los asalariados.

Luego del proceso de recuperación económico iniciado en el 2003, la crisis encuentra a nuestra nación en una situación de menor vulnerabilidad que en otras ocasiones, dado que hoy existe un elevado nivel de reservas internacionales, acompañado de un superávit en el comercio internacional, un saldo positivo de las cuentas públicas.

Sin embargo, en el terreno social todavía existen 14 millones de pobres y casi 4 millones de indigentes que no tuvieron noticias de este crecimiento sostenido de la economía a tasas asiáticas del 8 al 9 % anual. Esto quiere decir que nos estamos acercando a la tormenta de esta crisis global con una deuda social todavía pendiente.

Hoy ya son palpables los efectos de esta crisis importada. La incertidumbre está generando comportamientos defensivos por parte de los empresarios que rápidamente recurren a los despidos preventivos y a la reducción de las horas de trabajo. En lo concreto esto se traduce en suspensiones y despidos que por el momento afectan más al sector de los trabajadores contratados y precarios. Debe señalarse que en la mayoría de los casos, estas medidas están más vinculadas a decisiones impuestas por las casas matrices de las multinacionales, que transfieren programas de ajuste a sus subsidiarias del tercer mundo, que a la realidad económica y productiva local.

Estamos ante una situación en la cual algunas industrias importantes que vienen de varios años de gran crecimiento con elevadas ganancias, ante una perspectiva de menores ventas a futuro, automáticamente descargan el ajuste sobre los trabajadores y reclaman al Estado recursos para mantener intacta su rentabilidad. Por otra parte, la sobreactuación del escenario de crisis les permite condicionar a la baja las demandas salariales con la extorsión de cambiar salario por trabajo.

También muchas de estas actitudes se gestaron a partir del denominado conflicto rural, que marcó el ritmo político más que el económico, ya que lo que estuvo en discusión fue la potestad del gobierno de intervenir en la puja distributiva.

Algunas ideas de cómo enfrentar la crisis

Ante una nueva demostración del fracaso de las ideas neoliberales, que endiosaban al mercado, se hace imprescindible recuperar el papel regulador del Estado, cuya responsabilidad ineludible es ocuparse de mantener los equilibrios de la economía y garantizar la calidad de vida de las personas. Sabemos que la tarea no es fácil y que hoy el Estado se encuentra muy debilitado y con pocas herramientas eficaces para hacer frente a este desafío. Sabemos también que es fundamental el papel que nos toca jugar a los trabajadores organizados para poder recuperarlo. Sin movilización popular y sin capacidad de imponer una agenda que plantee una salida a la crisis desde los intereses de los asalariados será imposible evitar que se termine imponiendo la lógica de los grupos dominantes. Creemos por lo tanto que el movimiento obrero y las organizaciones sociales tenemos por delante el compromiso de construir las correlaciones de fuerza que impida que la propia inercia del mercado vaya resolviendo la crisis con profundización de la desigual social.

Para ello debemos garantizar un nuevo papel para el Estado en esta etapa post-neoliberal que tenga como objetivo central la redistribución de la riqueza a través de la política fiscal. Es necesario también disputar por el aumento y correcta aplicación de los recursos presupuestarios, sabiendo que la asignación del gasto público constituye un elemento redistribuidor tanto en dinero como en especie.

Hay que reorientar el gasto hacia la prestación de servicios de calidad a la comunidad, en especial en lo referente a salud y educación. Una sociedad más inclusiva, requiere que todas y todos tengan acceso a niveles adecuados de atención de la salud y elevada instrucción escolar, desde la primaria a la universitaria. Y una buena estructura de transporte, para que las personas se puedan movilizar fácilmente y sin grandes costos. Por ello se precisa diseñar sin dilación un mega plan de obras públicas, que fomente la economía y el empleo.

En este aspecto, la formulación de presupuestos participativos en los distintos niveles de gobierno, resulta esencial para lograr el adecuado direccionamiento y ejecución del gasto.

Estas demandas sobre el gasto público para mejorar la distribución del ingreso plantean el principal desafío a cualquier gestión publica, que es generar los recursos suficientes para sostener el gasto necesario.

En esta dirección la ley impulsada por el gobierno argentino que permitió recuperar el sistema provisional solidario, contó con el entusiasta apoyo de las centrales que representan a los trabajadores, puesto que además de reparar un atropello brutal como fue la privatización del sistema jubilatorio, "otorga una base adicional de sustentación al Estado en las turbulentas circunstancias actuales" (Documento Plan Fénix).

Otra necesidad imperiosa debería ser, así como se fue a fondo con la medida que terminó con el negocio de las AFJP, avanzar decididamente con una reforma tributaria que instale la "igualdad de sacrificio" por la cual debe aplicarse igual tributo a igual capacidad contributiva, pero desigual tributo a desigual capacidad contributiva, es decir, que pague más quien más gane.

En este plano también se debería aprovechar la crisis, para avanzar con una nueva legislación que grave y a la vez establezca controles sobre el flujo y las transacciones del capital financiero.

En el ámbito del sector externo, que es el canal a través del cual impacta la crisis internacional, se requiere un fuerte protagonismo del gobierno. Sostenemos que las divisas son bienes públicos y por lo tanto su circulación debe ser rigurosamente regulada, y deben establecerse normas que regulen el ingreso y egreso de divisas, para aminorar el impacto la crisis de los países centrales, de acuerdo a los intereses de la política cambiaria y monetaria.

Estamos ante un gran desafío pero también ante una gran oportunidad Consideramos imprescindible que los gobiernos de los países de América Latina y Caribe y organismos que administran los procesos de integración – MERCOSUR, UNASUR - intervengan activamente en este proceso y revaloricen el papel del Estado en la regulación del mercado, gerenciamiento de la economía y la promoción de la producción.

La integración sudamericana es una de las opciones estratégicas de los gobiernos de la región y por lo tanto debe constituir un tema central en las definiciones políticas del movimiento gremial organizado. La lógica de los sectores del capital de defender el lucro de sus negocios sin mirar más allá de sus narices puede dejarnos encerrados en la lógica de eventuales salidas individuales que a la larga resultarán contraproducentes. Va en el interés de la clase trabajadora de todos nuestros países profundizar los procesos regionales de integración, implementando circuitos productivos de complementación, basados en la expansión de los mercados internos, mejorando la calidad de vida sectores populares para incorporando masivamente al consumo

Es clave el papel que juegue la CSA y, en el Cono Sur, la CCSCS, para posibilitar que los coletazos de esta crisis sean enfrentados desde perspectiva regional. La derecha política y económica de nuestros países va a intentar utilizar la crisis exactamente para lo contrario, intentar resquebrajar el proceso de integración regional fragmentando el mapa de sintonías progresistas que las luchas de nuestros pueblos ha instalado en nuestra región.

Por ello constituye un desafío de esta etapa fortalecer las condiciones de paz y desarrollo integral para evitar que los factores de poder, en complicidad con los grandes medio de comunicación intenten activar reflejos xenófobos o chauvinistas, como ya está sucediendo en algunos países de Europa. Por el contrario la consigna para las centrales sindicales de la región debe ser avanzar hacia un futuro de mayor integración y desarrollo, a pesar de las dificultades y desafíos que para este proceso imponen las fuertes asimetrías entre los países. Hoy más que nunca ningún país aislado podrá hacer frente a los desafíos que se nos imponen.

En el plano interno, tal como se hace imprescindible interpelar a los gobiernos a que

adopten medidas urgentes que consoliden un verdadero blindaje social que garanticen el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores. Si queremos mantener el crecimiento hay que preservar el empleo, mejorar el salario real y poner límite a las ganancias empresarias. De ninguna manera podemos aceptar que los cuantiosos recursos fiscales pongan la intervención de los Estados al servicio de la "socialización de las pérdidas" del sector financiero y productivo. Subsidiar a los grupos empresariales sin garantizar contrapartida por parte de estos y un modelo distributivo más justo significará seguir cortando el hilo por lo más delgado. Es responsabilidad indelegable de las organizaciones que representamos a los trabajadores accionar en pos de la plena vigencia de todos los derechos laborales y sindicales, la lucha contra la precarización de los empleos, la protección social con la aplicación de políticas universales para los más vulnerables, la defensa del salario. Este deberá ser el nuevo paradigma del accionar de los gobiernos.

Debemos exigir para ello que orientados hacia una mejor distribución de la riqueza los Estados asuman su rol conductor del proceso económico, desarrollando inversiones en áreas productivas, sociales y servicios públicos y no de salvador al capital financiero especulativo.

Llegó el momento de impulsar un profundo cambio de modelo productivo y económico heredado de la década de los noventa. En esa línea profundizaremos nuestra lucha contra la privatización de los servicios públicos, rescatando el papel estratégico de las empresas estatales. En el horizonte de ruptura con el modelo neoliberal es necesario inscribir también la nacionalización de la banca y la redefinición de las instituciones crediticias que en nuestros países se limitan a canalizar los prestamos sólo hacia aquellos que ya poseen capital.

La CTA junto con otras organizaciones que agrupan a pequeños productores de la ciudad y el campo, elaboró el siguiente plan de medidas anticrisis :

Para proteger el trabajo y la producción

- Defender los empleos, los salarios y los derechos de los trabajadores. Proponemos la sanción de una ley de emergencia ocupacional, prohibiendo por la ruptura del vínculo laboral y los despidos sin causa justificada.
- Propiciar el proceso de discusiones paritarias con el objetivo de sostener el nivel adquisitivo de los salarios, para incentivar la capacidad de demanda de los sectores populares apostando a fortalecer el mercado interno.
- Discutir la aplicación de políticas para la generación de empleo, tanto en el sector privado como en el sector público, atendiendo a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
- Crear un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados, tendiendo a universalizar una asignación por hijo comenzando con los hogares indigentes y pobres.
- Incrementar los beneficios de las prestaciones previsionales para reparar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Establecer una asignación universal para todos los mayores excluidos de la seguridad social.

Para construir un nuevo modelo económico y productivo

- Aplicar políticas de fomento que privilegien a las pequeñas y medianas empresas y a la actividad regional.
- Impulsar un Plan nacional agropecuario, que mediante la intervención reguladora del Estado transparente los mercados y las cadenas de comercialización de los productos agropecuarios y combata la concentración de la producción y la distribución, preservando a los pequeños productores y asegurando la soberanía alimentaria.
- Demandar la ejecución de un fuerte plan de inversiones públicas que sostenga la actividad económica, favoreciendo la inversión reproductiva e implementando

planes sociales de viviendas con fuerte efecto multiplicador.

- Rediseñar el impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y las ganancias de capital.
- Discutir en el marco regional políticas arancelarias que armonicen los distintos intereses de los países de la región.
- Sancionar una nueva Ley de Entidades Financieras que interprete al sistema financiero como un servicio público, con una regulación que tenga en cuenta los intereses sociales y del desarrollo económico del país y fomente los ahorros de la población y el crédito productivo.
- Crear un verdadero banco de desarrollo, para poder generar préstamos a largo plazo para la inversión productiva, con la participación de los bancos especializados en este segmento. Impulso de la banca pública y cooperativa, y a las sociedades o fondos de garantía públicos.
- Aplicar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, entre otras, a las inversiones en empresas públicas que aseguren el repago de los fondos en el largo plazo y a la creación de planes de vivienda social para los aportantes al sistema.
- Desarrollar políticas firmes y un marco normativo coherente para enfrentar el elevado deterioro de las condiciones ambientales que sufre nuestro país, como resultado de la acción depredatoria ejercida sobre los recursos naturales. Se deben establecer controles sobre la explotación minera y se debe se debe frenar el avance de la frontera agrícola sobre los bosques nativos y humedales.
- Profundizar la integración con las naciones de América Latina avanzando hacia la definición concertada de un modelo regional productivo, energético, monetario y alimentario, basado en la complementación para potenciar nuestras capacidades ante las turbulencias de las economías de los países centrales.

Conclusión

El desafío que se nos presenta hacia delante nos impone la necesidad de superar las visiones de corto plazo y de trascender los límites corporativos que, no pocas veces, nos terminan aislando de otros sectores populares. Resulta esencial desarrollar articulaciones con las distintas expresiones del campo popular para evitar que las presiones de la crisis nos terminen empujando al callejón sin salida de la lucha de pobres contra pobres.

Solo la clase trabajadora organizada puede asumir un rol conciente que permita avanzar en los cambios necesarios para achicar la brecha de la desigualdad social y profundizar el proceso de democratización de nuestra sociedad. En ese camino nuestros aliados son los estudiantes, los campesinos, los pequeños productores del campo y la ciudad y las fuerzas progresistas que levantan las banderas de los derechos humanos y la lucha por la igualdad social.

Hoy más que nunca adquiere un valor estratégico la unidad mundial y continental del movimiento sindical cuya bandera, tal como lo expresara la CSA, es verdaderamente convocante:

LA CLASE TRABAJADORA NO PAGARÁ LA CRISIS Y NO ACEPTAREMOS RETROCESOS

ESCENARIO 2009: GRANDES RIESGOS, GRANDES OPORTUNIDADES

Eduardo S. Paladín, Asesor de la Secretaria de Relaciones Internacionales de la UOM/ Grupo de Trabajo en Comercio, Empleo y Desarrollo, FITIM.
Febrero 2009

La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua." (Karl Marx; El Capital; Tomo I / Vol. 3; Editorial Siglo XXI.)

Introduccíon

En los actuales momentos de incertidumbre y angustia para millones de trabajadores en la Argentina y en el mundo, la declaración de la CSI en el Foro Social Mundial en Belém do Para, Brasil, entre el 27 de enero y el 1 de febrero de 2009, sintetiza certeramente la crisis y el escenario que se presenta: "La crisis que vivimos es ante todo una crisis de la justicia redistributiva, que ha desfigurado la economía mundial." Esto es tan cierto como que la crisis solo se resolverá volviendo a la justicia social, la distribución equitativa de las riquezas, y la plena participación política de los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

Partiendo de esta afirmación, que consideramos explica de manera meridiana la esencia de la crisis actual, es posible avanzar a partir de allí, en dos direcciones distintas. Podemos enumerar minuciosamente las consecuencias de la crisis o podemos por el contrario plantear soluciones posibles. Optamos por ensayar sobre estas últimas ya que de las primeras se encargan, en letra catástrofe, la tapa de los periódicos. Pareciera que ese ampararse en los anuncios dramáticos sobre desempleo es funcional a los argumentos de los empresarios a la hora de negarse a discutir un justo e imprescindible cambio de modelo en la distribución de las riquezas generadas por el trabajo.

En este punto se encuentra hoy el sector metalúrgico en la Argentina. ¡¡Cuidado con la crisis!! Dicen los empresarios. La advertencia debería servir para que los trabajadores se conformen con mantener su puesto de trabajo y resignen como les pide el capital, un salario digno. "En base a las predicciones del FMI de noviembre de 2008, la tasa de desempleo en el mundo podría aumentar

hasta un 6,1% en 2009, en comparación con el 5,7 % en 2007, lo que representa 18 millones de desempleados más en 2009 que en 2007."[1] Sobre la base de esta tendencia se estaría hablando, según la OIT, de un 45 % de trabajadores pobres a nivel mundial. Datos terribles que inhibirían cualquier tipo de acción por parte de los trabajadores.

A causa de la crisis el 2009 será para la Argentina un año en el que las Convenciones Colectivas de Trabajo de los distintos sectores se convertirán en "la arena" donde se diriman, por un lado, quien soportará los efectos más negativos de la crisis en la cual los trabajadores no tienen responsabilidad alguna, aunque como siempre, serán estos las victimas más castigadas por aquella. Por otro lado se pondrá a prueba la capacidad del Estado, que durante los últimos siete años viene reconstruyendo sus funciones como regulador y planificador del sistema capitalista, que por demasiados años había sido abandonado a la voracidad del mercado.

La década del '90 presentó un crecimiento sostenido del mercado local/argentino, que durante largos años y en pos de la competitividad, había sido entregado sin restricciones a los designios voraces de la libre empresa. Esta última fue la impronta que dejó la década de 1990. Años en los que la economía mundial pareció desfrutar un crecimiento sostenido, aunque el mismo expresara una diferencia sustancial con la anterior etapa de crecimiento y pleno empleo (1945 – 1973). El siglo XX cerró con un marcado incremento del comercio internacional, que se intensificó ubicándose muy por arriba del aumento que hubo de la producción mundial, aun considerando el vigoroso impulso que esta producción tuvo en virtud de la vertiginosa industrialización de la región del Pacifico. Es que ya desde fines de los años setenta, la economía real y la producción fueron perdiendo dinamismo frente a la aceleración de los circuitos financieros y comerciales internacionales, esta asimetría indujo la configuración de un sistema económico mundial en el que la valorización financiera terminó por subordinar a la economía real y en consecuencia al mundo del trabajo también.[2] Resultado de ello fue un crecimiento sostenido de la economía mundial en paralelo a una creciente generación de pobres. Este modelo de concentración y exclusión es el que estalla a fines del 2008 y nos abre un sombrío panorama para el 2009, que es al mismo tiempo un campo de oportunidades como trabajadores si las aprovechamos inteligentemente.

Un Mercosur que resiste

El contexto regional por su parte comienza a sentir el impacto de la crisis global. Ninguno de los miembros del MERCOSUR puede sustraerse y el principal impacto ya se deja sentir en las dos principales economías del Cono Sur. Producto de la creciente tensión son las reuniones bilaterales entre Brasil y Argentina como la realizada el 26 de enero de 2009, durante la cual se trato un sector sensible para el sector metalúrgico como es la línea blanca (lavarropas, heladeras, cocinas, etc.) Brasil reclama a la Argentina por el ingreso de productos extra Mercosur al mercado domestico de éste último, como es el caso de las cocinas, donde la importación desde Brasil si bien cayó un 60% en unidades sigue manteniéndose como principal proveedor con el 65% de lo importado, mientras en las heladeras sostiene el 80% del total de las importaciones. Estos porcentajes solo muestran una tendencia que se explica en estas reuniones bilaterales, donde al margen de los anteriores datos y reclamos puntuales, se pone de manifiesto el inicio de un año 2009 signado por la creciente protección a la industria nacional, tanto por parte de Argentina como de Brasil, y por supuesto de Paraguay, Uruguay y los demás países que

[1] OIT, Comunicado de Prensa del 28 de enero de 2009. Principales pronósticos del informe de Tendencias Mundiales del Empleo

[2] Basualdo, Eduardo M., Estudios de historia económica argentina; Editorial Siglo XXI; Argentina, 2006. La presente cita deja en claro por qué la falta de "justicia distributiva" ha "desfigurado la economía mundial" al mostrar que: "…se estaban transfiriendo 13 puntos porcentuales del PBI desde el trabajo hacia el capital - se llegó a los 18 puntos en 1977, equivalente a una reducción del 40% de la participación del salario en el ingreso vigente en 1975…"[…] "La Reforma Financiera fue la primera expresión institucional de un cambio radical en el enfoque de la política económica: la subordinación que tenía el sistema financiero respecto de la expansión de la economía real – especialmente de la producción industrial – se invirtió, y así la evolución de la economía real pasó a estar en función de los fenómenos y equilibrios monetarios."

están en proceso de incorporarse, aunque en estos últimos, el grado relativo de industrialización relativice también las medidas de protección que deban adoptar.

El prematuro optimismo demostrado al inicio de la actual crisis, que para algunos tiene fecha precisa de nacimiento el 15 de septiembre 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, y el estallido del pánico generalizado en las bolsas del mundo, se está borrando rápidamente ante una realidad que muestra, una importante caída del comercio con Brasil en el primer trimestre del año (2009). En enero las exportaciones argentinas a Brasil llegaron a la suma de U$S 608 millones, representando el menor valor desde abril del 2006 y significa una reducción interanual del 46,1% y supera el mínimo registrado por las exportaciones durante los años de la crisis argentina del 2001cuando éstas llegaron a una caída del 41%. Por su lado nuestro país compró a Brasil U$S 641 millones que representa una reducción del 51% respecto al mismo mes del 2008.[3] Estas son las primeras respuestas de dos economías que se necesitan, quizás una más que la otra, frente a los primeros signos de la crisis actual. Algo similar cabría esperar del resto de las economías del mundo.

Al observar estas cifras y recurrir a la historia, no parece posible pensar que sea el comercio internacional el que brinde las soluciones para una recesión que muchos comparan con la registrada por la economía mundial en 1929. Como en aquella oportunidad cada país intentará mantener un delicado equilibrio entre una economía que definitivamente se encuentra ante una severa recesión y la estabilidad política jaqueada por las crecientes demandas ya no solo de los trabajadores (hoy casi un sector privilegiado) sino por los millones de excluidos que se van sumando desde hace ya varias décadas. En este punto sería importante rescatar algunas reflexiones históricas donde las coincidencias con las últimas tres décadas vividas por nuestro país y podríamos decir gran parte del mundo, confirman a nuestro entender lo expuesto por la CSI en Belem do Para, Brasil. En esas reflexiones sobre la crisis del '29 se sostiene: *"…la productividad en las principales industrias manufactureras creció más rápidamente que antes. Los sindicatos eran muy débiles, de tal forma que en su mayor parte los beneficios se invertían o se distribuían entre los accionistas. La desigualdad en la distribución de la renta aumentó, lo que hizo que el mercado de bienes de consumo duraderos se contrajera."*[4]

En el caso particular de Argentina, es evidente que los ingresos de los trabajadores iniciaron su pronunciado declive con el advenimiento de la última dictadura militar de 1976, dando comienzo así a un largo proceso de deterioro que alcanza su punto más crítico al estallar la crisis de la convertibilidad en los años 2001 – 2002. Si bien con los gobiernos post convertibilidad, hubo una recuperación económica productiva considerable, por lo menos esto es lo que se evidencia en el último lustro, dicha recuperación no se tradujo en un reducción sustancial de los niveles de pobreza y exclusión. Aún reconociendo que se avanzó mucho, sería imprescindible mantener las condiciones y niveles de crecimiento que se registraron entre el 2002 y mediados del 2008 para recuperar una situación de equidad que permita reconstruir una trama social desquiciada por años de políticas neo-liberales. Este aspecto sea quizás el más doloroso a la hora de pensar que la actual crisis impactará justamente sobre los mismos sectores que no habiendo terminado de recuperarse, son nuevamente - y por segunda vez en el nuevo siglo apenas iniciado - las víctimas de la crisis gestada por la especulación financiera global.

Frente a las cifras expuestas más arriba y la historia que parece negar esa posibilidad, el Mercosur afronta un 2009, con importantes liderazgos en cada uno de los

[3] Informe de comercio bilateral con Brasil; ABECEB.com
[4] Willi Paul Adams; Los Estados Unidos de América; Historia Universal Siglo XXI; Editorial Siglo XXI; México, 1986. Capítulo VI, Los Estados Unidos entre las dos guerras, 1919 – 1941, página 257. Este mismo autor sostendrá más adelante y citando a Charles P. Klindleberger, en su obra Die Weltwirtschaftskrise, 1929 – 1939, Munich, 1973, página 121, que: "Resulta imposible concebir un aumento del consumo que justificara aquellas inversiones [se refiere a las de fines de la década de 1920] Las interpretaciones en la línea del <<subconsumo>> son manifiestamente incorrectas; lo que sucedía podría definirse con más exactitud como una <<sobreinversión>>: "El subconsumo es lo contrario de la sobreinversión; se produce desviando el poder adquisitivo hacia la Bolsa o haciendo que los salarios queden por detrás de las ganancias."

países miembros, que habilitaría pensar en el sostenimiento de un comercio regional equilibrado. En un mapa político caracterizado por fuertes coincidencias en la gestión de la política regional, se busca con voluntad pero dificultosamente una salida como bloque, que asegure cierto margen de acción frente a un "resto del mundo" que se torna amenazante en términos económicos, aunque no exclusivamente.

La única verdad es la realidad

La verdad, es que la realidad para el sector metalúrgico, se muestra para el primer trimestre del año 2009, sumamente complejo e incierto. Esta realidad se pone de manifiesto en los actuales 8.300 trabajadores despedidos y 4.500 suspendidos, según las cifras brindadas por el Secretario General de la UOMRA, quien igualmente resalta el fuerte impacto que la crisis está teniendo en el sector de maquinaria agrícola y en la rama automotriz considerada como la actividad más ligada al sector externo de la industria metalúrgica. A nivel de las distintas seccionales y según el Secretario Adjunto de la UOM Quilmes, se prevé una severa retracción en el sector siderúrgico y de autopartes, estrechamente conectado en la cadena de valor de las automotrices. Aún con las cifras antes indicadas respecto a la situación laboral de miles de trabajadores metalúrgicos, las consecuencias aún no se han manifestado plenamente y, hoy por hoy se podría decir que se abre un compás de espera hasta marzo próximo (2009). Es evidente que para la Argentina, al sector externo no se lo ve ya como factor dinamizador en la creación de empleo. Ante los primeros efectos de la crisis que proviene del centro económico mundial, la respuesta inmediata desde las principales empresas automotrices radicadas en el país – que olvidan años de bonanza con importantes ganancias – es conceder a sus trabajadores, un adelanto de vacaciones y reducción de la jornada de trabajo o en algunos casos reducción de salarios a un 65% para evitar llegar a las suspensiones o despidos. Los ojos de los dirigentes están puestos en marzo, mejor dicho una vez que este mes finalice, hasta esa fecha, todo ha sido acordado y en ella se centran las expectativas para evaluar como arranca el 2009. Sin embargo, dos palabras sintetizan la visión desde los trabajadores metalúrgicos en este año, incertidumbre y pesimismo.

OMC, Estado y los "intereses nacionales".

Para los trabajadores metalúrgicos, los tiempos de crisis que corren, tienen el aliciente de un acompañamiento en sus demandas por parte de las políticas llevadas a cabo desde el Estado. De manera rotunda ese compromiso por sostener los recuperados niveles de empleo y no sacrificar un solo puesto de trabajo en el altar del libre comercio se plasmo en el marco de la última reunión de negociaciones de la Ronda Doha de la OMC en julio de 2008. En esa reunión, la Argentina, junto a otras economías emergentes y en el marco del G-20, rechazó la firma de un acuerdo inaceptable por sus desequilibrios y asimetrías. El Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina definió durante un seminario el concepto de "interés nacional" donde señaló que se trata de un concepto producto de la escuela del realismo político, pero que por su grado de ambigüedad, su definición requiere del consenso de la Nación. Así, desde el la óptica de la Argentina, comprometida con el sistema multilateral de comercio, ese interés Nacional aplicado a la OMC, se definiría como la pretensión de un "sistema multilateral equitativo".[5] Similar respuesta han recibido por parte de los trabajadores metalúrgicos y del Estado, las permanentes presiones por avanzar en el camino de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

El gran desafío

Como siempre en la construcción de la histórica, los trabajadores tienen mucho que decir, el final queda abierto. Se trata de poner de manifiesto la falacia de los enunciados neoliberales, tan profusamente predicados a lo largo de las últimas tres

[5] Foro de Comercio Exterior; Año I, Septiembre – Octubre de 2008. Sección Actualidad Nacional; "Ronda Doha y el interés nacional. ¿Éxito o fracaso? Por Sixto Portela. Página 14.

décadas, para lo cual y por supuesto, contamos con certezas en cuanto a las medidas que se deberían tomar para evitar una profundización de la actual situación.

Primero, abandonar el mito de un libre comercio esencialmente bueno y que a su vez se pretende presentar como solución de la crisis actual. Segundo, generar los mecanismos de protección a las industrias nuevas en proceso de consolidación. Tercero, recuperar la preeminencia del mercado interno como dinamizador de la economía. Cuarto, incentivar ese mercado interno con salarios que permitan recuperar una demanda orientada a bienes de consumo masivo y de producción nacional, donde los salarios no solo sean justos hoy, sino de salarios que actúen, junto al sistema tributario como factor de redistribución y eliminando la alta concentración económica producida durante las últimas décadas. Quinto, dar al proceso de integración regional Mercosur su verdadera dimensión, evitando su desmembramiento a manos de un comercio mundial ávido de nuevos mercados. Sexto, sacrificar algunas aspiraciones de hegemonía y protagonismo regional que pudieran evidenciarse en algunas de las partes, en aras de una profunda integración Latinoamericana, realista y centrada en el antes mencionado "interés nacional", para desde allí pasar a la instancia regional. Séptimo, recuperar el control del Estado sobre empresas ligadas a la producción o servicios de carácter estratégico. Octavo, desarmar cualquier distorsión respecto a los puntos anteriores que pueda generar sentimientos de xenofobia y de nacionalismo extremo. Noveno, generar condiciones de comprensión y participación de los trabajadores en el contexto internacional y la intervención de sus organizaciones como factor esencial en la solución de la actual crisis de carácter global. Decimo, necesidad de tener presentes las particulares dinámicas históricas que condicionan y rigen las decisiones nacionales.

PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores-
Convención Nacional de Trabajadores

LAS MEDIDAS ECONOMICAS FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL EN URUGUAY

Departamento de Relaciones Internacionales del PIT CNT e
Instituto Cuesta Duarte

Presentación

Dado el notorio empeoramiento en el contexto económico internacional, a principios de diciembre el equipo económico de gobierno dio a conocer algunas medidas a implementar tendientes a neutralizar, al menos parcialmente, los principales impactos negativos sobre la economía nacional.

En primer lugar, el equipo económico ratificó su voluntad de que el tipo de cambio siga flotando de acuerdo a las presiones de la oferta y la demanda del mercado, aunque también aclaró que seguirá interviniendo en el mercado para evitar cambios demasiado bruscos.

En segundo lugar, en relación al debatido tema del gasto público, se aclaró que el país no está en condiciones de llevar adelante una política fiscal anticíclica que permita expandir el gasto en un contexto de desaceleración del crecimiento económico, pero se indicó que la situación fiscal y financiera permiten mantener los aumentos de gasto que ya fueron proyectados.

De todas formas, sí se especificaron varias medidas relacionadas al ámbito fiscal. En líneas generales, el gobierno planteó tres grandes ejes de medidas tendientes a: reorientar parte del gasto público ya comprometido; preservar los ingresos del Estado; que los puntos anteriores viabilicen medidas concretas para apoyar al sector productivo y al empleo.

En relación al primer punto, se proyecta obtener ahorros en el entorno de 5% del gasto no estratégico en varias unidades ejecutoras. Entre los rubros que formarían parte del ahorro, se encuentran la reducción de misiones oficiales y viáticos y el ahorro en suministros, energía eléctrica, combustible, telefonía celular y publicidad. Esto permitirá priorizar gastos en otras áreas consideradas estratégicas o de mayor impacto económico y social.

Sobre las medidas para mantener los ingresos públicos, entre otras medidas se plantea incentivar el cumplimiento tributario ampliando los regímenes de retención en sectores con riesgo fiscal.

En relación a las medidas concretas para apoyar al sector productivo y al empleo, se anunciaron las principales novedades. Acerca del estimulo a la inversión privada, se planteó que la "nueva ley de promoción de inversiones" incrementará la exoneración de IRAE para aquellos proyectos de inversión que se concreten en 2009 y que cumplan con los requisitos especificados en el proyecto entre los que se destaca la generación de empleo. Además, como forma de estimular determinado tipo de proyectos, se resolvió incrementar los ponderadores de evaluación referentes a la creación de empleo y a la capacidad exportadora de las mismas.

Por otro lado, también se declararán como sectores promovidos a la industria automotriz, electrónica y naval, lo que implica exonerarlos de IRAE por determinado período. En relación a la inversión, la última novedad se relaciona con el estímulo que se otorgará a la participación de privados en obras de infraestructura en energía, puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias por el importante monto de 1.000 millones de dólares.

Otro segmento de medidas se aboca a apoyar al sector exportador. Una de ellas tiene como objetivo otorgar liquidez al sector, ya que se podrán canjear en el BROU los certificados de devolución de impuestos (que antes sólo se utilizaban como medios de pago en la DGI). También se destaca la decisión de aumentar la tasa de prefinanciación de exportaciones hasta diciembre de 2009, lo que permite disminuir el costo financiero de la operación. Para el sector textil-exportador se resolvió mantener las tasas preferenciales que actualmente detenta. En relación a sectores productivos concretos, se mencionaron medidas específicas para el sector lácteo y turismo. Para el primero las medidas apuntan a facilitar el acceso al crédito y en lo que respecta al turismo (exportación de servicios), se plantearon varias medidas de promoción, como regalar 30 litros de combustible a vehículos con chapa extranjera.

Un tercer grupo de medidas se centran en facilitar el acceso al crédito. En este sentido, se planteó un préstamo del BID multisectorial por 125 millones de dólares para proyectos de inversión y prefinanciar exportaciones. Por su parte, el BROU duplicará su fondo destinado a financiar inversiones relacionadas con la vivienda y el Ministerio de Vivienda diseñará estímulos no especificados para la construcción de vivienda.

Por último, la batería de medidas también incluye algunas para fomentar las PYMES. Se garantizó que en marzo se activará el Fondo Nacional de Garantía que facilite el acceso al crédito y además en esta rendición de cuentas se aprobó un programa de contratación pública para este tipo de emprendimientos.

Comentarios acerca de las medidas adoptadas

Evidentemente, las medidas anunciadas por el equipo económico en Uruguay son de menor envergadura que las que se llevarán adelante en las mencionadas economías de la región. La actual situación fiscal del gobierno, si bien no es preocupante, no le permite –como el propio equipo económico reconoció- llevar adelante políticas fiscales activas que actúen contra cíclicamente y contrarresten el esperado enlentecimiento en el ritmo de crecimiento económico. Por otra parte, la política fiscal –como fue reconocido recientemente en la reunión del G20 - es uno de los más potentes instrumentos de política económica para enfrentar una crisis como la actual.

Adicionalmente, en la economía uruguaya, a diferencia de lo sucedido en Argentina y Brasil, la crisis financiera internacional todavía no ha impactado fuertemente, aunque es esperable que esto ocurra en los próximos meses. En el marco de una crisis internacional, las mejores políticas a adoptar son aquellas que selectivamente intentan mitigar los efectos de la crisis en los sectores más afectados por la misma, particularmente cuando los recursos son escasos. Las políticas más generales, parten del supuesto de que todos los sectores son igualmente afectados por

[1] El G20, compuesto por las 8 mayorías economías del mundo y las principales economías emergentes, se reunió a mediados de noviembre en Washington para discutir acciones coordinadas para enfrenar la actual crisis financiera internacional.

la crisis, lo que normalmente no se cumple. En la medida en que en Uruguay, la crisis internacional hasta el momento no golpeó muy duramente la actividad económica, es difícil anticipar en qué sectores impactará más duramente el cambio de contexto internacional.

Evidentemente, el sector exportador va a ser el que se encuentre mayormente afectado, tanto por la caída de la demanda mundial como por la disminución de los precios internacionales de los principales productos de exportación. Sin embargo, este sector –de los más dinámicos en los últimos años- se encuentra mucho menos vulnerable que en años previos para enfrentar un contexto externo más adverso: la diversificación de mercados de exportación es un claro ejemplo de reducción de vulnerabilidades en este sector, ya que pese a que la crisis se generalizó a todo el mundo, han sido hasta el momento las economías más avanzadas, las más afectadas por la misma. Adicionalmente, la disminución de precios de las *commodities* (en particular del petróleo) también implica para el sector una reducción en los costos de los insumos, que ayudará a paliar la caída experimentada en los precios de exportación.

En síntesis, si bien las medidas anunciadas por el gobierno son escasas, las mismas son fundamentalmente una señal del equipo económico hacia los distintos agentes, del rol activo que adoptará la política económica ante la crisis. Por otra parte, la "escasez" de las medidas adoptadas hasta el momento, se encontraría justificada por la moderación con la cual la crisis económica internacional se ha expresado en la economía uruguaya.

Nuestra Central, desde octubre pasado ha planteado la necesidad de realizar un blindaje social entendiendo por tal, la defensa de los puestos de trabajo, la defensa de los derechos de los trabajadore/as y la defensa de los salarios y jubilaciones. Ante la ofensiva empresarial, reclamamos el respeto de los incrementos salariales estipulados en los Consejos de Salarios.

A la crisis no se la enfrenta con más crisis.

Reafirmamos nuestra posición: la crisis no la deben pagar los trabajadores

Hemos constituido un Comité de Crisis con todas las áreas productivas involucradas a los efectos de delinear una estrategia para ser presentada y analizada con el Gabinete Productivo del Gobierno y realizar un seguimiento permanente de los efectos de la crisis.

Finalmente creemos que a nivel regional es el momento oportuno para que MERCOSUR de un salto en calidad como bloque regional ante si y ante otros actores u otros bloques regionales y estamos convencidos de que no existen salidas individuales.

PARAGUAY

CNT, Convención Nacional de Trabajadores

LA CRISIS Y SUS IMPACTOS DESDE LA VISIÓN DE LOS TRABAJADORES

Miguel Zayas Martínez, Secretario General
Rodolfo Romero Garcete, asesor

Siempre hemos sostenido que vivimos un tiempo histórico caracterizado por la crisis de cultura y civilzación que es al mismo tiempo generalizado y recurrente, es decir, que afecta a las estructuras, a la mente humana y se reproduce en forma continua.

Podemos llegar al extremo de afirmar que tenemos una civilización depredadora embarcada en una guerra por el control de los mercados, y una cultura alienante, atrapada por un espejismo consumista. pero al mismo tiempo, se están generando cambios profundos en nuestras sociedades. Es posible sintetizar a la situación con una visión triádica: estamos en un escenario de crisis, con un panorama de violencia, guerra e incertidumbre, y siendo testigos de un proceso de cambio que puede denominarse como un deslizamiento epocal.

Asistimos a los síntomas de agotamiento del modelo neoliberal y de profundas fisuras del sistema capitalista.

Esto nos reconfirma en la perspectiva de que toda crisis es al mismo tiempo una oportunidad para generar una alternativa. indudablemente el Foro Social Mundial ha dado en lo cierto: "otro mundo es posible", al que agregamos y es necesario.

Una muestra clara es la crisis financiera desatada en los EEUU, que es en verdad el estallido de una crisis más profunda, generalizada y que no sabemos hasta donde puede llegar. el propio presidente de Francia llegó a plantear la necesidad de refundar el capitalismo. en todo caso, por primera vez Davos entró en la era de la confusión e inicia su propia crisis.

Veamos los acontecimientos en desarrollo. La primera constatación es que la crisis impacta a la economía real que hoy se declara en situación de grave recesión, y trastoca todo el intercambio comercial en el mundo.

El segundo aspecto es que la crisis pone al desnudo las contradicciones de las bases ideológicas que sustentan al capitalismo salvaje que se ha implantado con el monitoreo del FMI, Banco Mundial, BID y OMC. Lo más llamativo de esta contradicción es que quienes sustentan la mano mágica y la capacidad de autorregulación del mercado, y niegan en forma sistemática el papel del Estado en la economía y en las finanzas, buscan desesperadamente los recursos públicos para salvar al mercado que reveló sin atenuantes sus limitaciones y su lógica perversa de buscar la maximi-

zación de los beneficios para acumular y concentrar la riqueza sin límites y sin miramiento alguno.

El tercer aspecto a considerar es que el libre mercado -libre comercio que nos predicaron e impusieron- es una gran mentira, ya que se aplico la lógica del asaltante: el asaltado es sometido y obligado a entregar sus recursos naturales y las llaves de su casa-territorio para instalarse en ellas las corporaciones transnacionales, y así apoderarse indefinidamente de la producción, intercambio y consumo que se realiza; mientras, el asaltante dicta la política, diseña la cultura individualista, crea la figura tramposa de la propiedad intelectual de las corporaciones, monta el mecanismo más escandaloso del pago de la deuda externa, crea tribunales, internacionales totalmente controlados para resolver las supuestas controversias, vende la tecnología y los armamentos y aplica en su casa-territorio el proteccionismo mas descarado. sin embargo, busca imponer la firma de tratados de libre comercio.

La cuarta lección que nos ofrece ésta crisis es desentrañar objetivamente las infames reglas de juego que nos impusieron sin ningún acatamiento por parte de quienes lo imponen. la síntesis de estas reglas de juego podemos ordenarlas así:

- el Estado debe retirarse de la economía.
- el trabajo es mercancía y consecuentemente la relación de trabajo no existe, sino una simple relación individual de carácter civil y comercial.
- debe desaparecer la ley laboral, la contratación colectiva (hablan de relación pluri-individual) y el derecho de huelga.
- la deuda externa es deuda eterna (por sus funestas consecuencias, es denominado asesino silencioso). sin embargo, el más grande deudor, no paga nunca y se da el lujo de acrecentar su deuda externa.
- en nombre de la modernización debe privatizarse todo, hasta las joyas de la abuela.
- la soberanía nacional no existe, en sustitución se prohíja una supuesta soberanía del consumidor.
- la defensa del medio ambiente es una cuestión ideológica. ee.uu. no firma el protocolo de Kioto, siendo el principal responsable de la contaminación del planeta.
- los sindicatos no tienen razón de ser. el mejor sindicato es el que no existe.
- el terrorismo y la amenaza es atributo exclusivo del imperio que impone las reglas de juego, sin poder ser penalizado.
- no debe existir ley de salario mínimo, ya que el mercado fija el precio de la mercancía de trabajo.
- libre mercado- libre comercio- nada de frontera ni aranceles.
- libre movilidad del capital, pero no del trabajo.

Toda esta regla de juego tuvo y tiene una funcionalidad concreta: la superexplotación del trabajo humano – verdadera deshumanización –, la explotación sin límites de los recursos naturales – verdadera depredación-, un intercambio comercial sobre bases injustas y, la asimetría en el desarrollo y el empobrecimiento de nuestros pueblos (apartheid social). el propósito final es convertirnos es un gran supermercado sin alma y sin destino. así, de la era colonial, pasar a la era satelital.

El quinto aprendizaje es poner al descubierto la voracidad sin escrúpulo alguno de los mercaderes que pasaron a controlar en sistemas de monopolio – oligopolio las finanzas, las actividades económicas y el comercio nacional e internacional. la vida misma se tradujo en términos mercantiles. la cultura, el deporte, la música, la danza y las mismas manifestaciones espirituales se convirtieron en negocio con alta rentabilidad.

La crisis moral no tiene límites. el pragmatismo, el eficientismo y la lógica del exitismo no eran sino máscaras para justificar todos los atropellos a las instituciones democráticas y mimetizar las violaciones de los derechos humanos. la especulación, la estafa, la mentira y toda la maquinaria perversa y de violencia asfixiante instalada para instaurar un nuevo desorden nacional e internacional, salieron a la luz. Así se patentó un nuevo espécimen: el bankgans-

ter, que hasta la fecha ha logrado total impunidad. Es dramático el caso: no existen responsables, culpables ni se aplican sanciones. los ladrones ni siquiera piden perdón. ellos saben que fueron consecuentes con los principios neoliberales. no tienen de que arrepentirse.

Mientras tanto, a un trabajador se le aplican altas multas y se le juzga de acuerdo a una supuesta ley antiterrorista por participar en una movilización denunciando estos y otros desmanes. así se criminaliza la lucha social, y se hace la vista gorda ante el delito del robo millonario de quienes ya son ricos y poderosos.

Una sexta lección es que colapsó el pensamiento único: la ideología neoliberal y su fundamentalismo de mercado. como ya lo dictaminaron importantes expertos: el mercado no puede convertirse en una referencia para organizar la sociedad. el mercado es simplemente un medio y no un fin. mucho menos puede ser una religión, o una referencia cultural para organizar la sociedad. neoliberalismo y democracia están en entredicho.

Una séptima ponderación es saber que se agotó el unilateralismo implantado en la era Bush por el imperio más poderoso del planeta, que comienza a percibir la declinación de su prepotencia hegemónica mundial. lo precisa muy bien el nuevo presidente de los EEUU, Barack Obama, cuando declara: "recibo una economía en crisis y un país en guerra". Por eso una de sus primeras medidas de carácter económico-financiero es solicitar más de ochocientos mil millones de dólares para enfrentar la recesión y no aumentar las quiebras de las empresas y el desempleo de la gente. Este monto se suma a los más de setecientos mil millones de dólares ya acordados al gobierno de Bush en el momento de su triste partida, y que según denuncias muy fundadas, fueron despilfarrados una gran parte por los ricos y millonarios ejecutivos de las empresas en proceso de quiebra.

El noveno dato angustiante es la recesión en los EEUU y en Europa, los dueños de las crisis son los países ricos que ahora entran en etapa de recesión, afectando al mundo entero por la lógica de la glObalización que ellos mismos impulsaron y le dan vida.

Este hecho indica que se produce la declinación del ahorro y de las inversiones, la marcha hacia el menos cero del crecimiento, la disminución de la demanda, la reducción de las exportaciones, cierre de empresas y despidos masivos, aumento de la pobreza, agravamiento de la hambruna y la postergación de las oportunidades de trabajo digno – empleo decente de los hombres y las mujeres, en especial de los jóvenes de nuestros países. Se menciona que en el presente año se superará la cifra de cincuenta millones de desempleados.

La décima consideración es que los pueblos y los trabajadores pagarán por vía del erario público la estafa y la desfachatez de los ejecutivos del sistema financiero internacional y de las aseguradoras y consultoras de riesgo que ni previeron ni anticiparon medidas para evitar o aminorar la hecatombe. Mientras, la familia de camaleones cómplices sigue disfrutando de sus fechorías.

El dato decimoprimero es la conclusión de que existe una verdadera crisis en el modelo de crecimiento y acumulación pregonado por el neoliberalismo y aplicado por el capitalismo salvaje. el modelo y sus pregoneros perdieron toda credibilidad y toda autoridad moral, política y económica.

Ante estos impactos brutales y profundamente aleccionadores, en especial para el movimiento sindical y todo el movimiento de los trabajadores, los hombres y las mujeres de las Américas, en especial los dirigentes y los cuadros, tenemos una gran responsabilidad.

Nuestro principal desafío es comprender en toda su compleja dimensión el tiempo histórico que vivimos, analizar y captar toda la trama de la crisis actual para así asumir con más claridad y resolución la tarea de ofrecer respuestas y formular propuestas alternativas coherentes y factibles.

Los trabajadores de las Américas debemos redescubrir nuestra propia potencialidad,

imaginación y creatividad para enfrentar la crisis del capitalismo que es presa de su propia voracidad sin límites y se enreda en sus contradicciones irresueltas.

Toda crisis, teniendo la virtualidad de ofrecer nuevas oportunidades para dar saltos superadores, sin embargo cobra altos precios, siendo sus principales víctimas los más carenciados, los más pobres, los más débiles, los menos organizados.

Esta circunstancia pone nuevamente a prueba nuestra solidaridad de clase. Más que nunca y más que siempre necesitamos poner en marcha una gran red de solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras que más tienen y más pueden con los trabajadores y trabajadoras que menos tienen y menos pueden, sabiendo que nadie puede cruzarse de brazos. no es la hora de mendigar, ni la hora de ser indiferente. es la hora de solidaridad.

Es por ello que nuestra primera respuesta es acerar nuestras organizaciones, fortalecerlas y equiparlas estructural, funcional y metodológicamente para los viejos y nuevos desafíos para la lucha de todos los días.

Los años 2009 y 2010 son años de grandes desafíos e inmensas tareas. en nuestras bases debemos avanzar en proceso de afiliación y participación, debemos mejorar nuestro método de acción y perfeccionar la práctica de formación de nuestros miembros, cuadros y dirigentes.

Debemos prepararnos mejor para defender nuestros derechos esenciales, para lo cual será preciso asumir la campaña por la libertad sindical como tarea prioritaria, como también la defensa y promoción de la contratación colectiva y el derecho de huelga.

La defensa y promoción de los derechos humanos, en especial los derechos laborales es nuestro norte.

Debemos fundamentar en la onda de la crisis y de su superación, nuestras reivindicaciones fundamentales, y realizar los estudios para proponer las alternativas en materia de políticas públicas concertadas.

Las diferentes organizaciones nacionales, sectoriales, subregionales y la continental deben asumir iniciativas y presentar planes de acción dentro de una línea política estratégica coherente como respuesta a la crisis.

Una cuestión de fondo para el movimiento sindical y para el conjunto del movimiento de los trabajadores es asumir la crisis como una gran oportunidad para protagonizar los cambios que son imprescindibles, y para relanzar en el escenario de las Américas nuestro protagonismo como instrumento de solidaridad de clase, de defensa de los derechos humanos- laborales y promotores de la democracia real, participativa, libertaria y con justicia social.

En esta perspectiva, es inequívoca la posición de combatir el proceso de globalización en los términos conocidos, como la lucha contra los tratados de libre comercio que sabemos representan una trampa para los trabajadores y para nuestros pueblos.

No podemos olvidar lo que reiteradamente expresa el premio nobel de economía Joseph Stiglitz: "la globalización produce efectos devastadores en los países pobres".

La respuesta a la globalización capitalista, es apurar los pasos en la dirección de avanzar el proceso de integración y desarrollo de América Latina-Caribe - Unasur es un avance, ALBA-CLAN es una perspectiva. la cumbre y resoluciones de Bahia- Brasil indican un nuevo despertar y mayor madurez política y estratégica. se afirma la autonomía.

Es parte del proceso acompañar con visión estratégica los cambios que se van operando en varios de nuestros países latinoamericanos- caribeños para avanzar en la democratización de las estructuras económicas, políticas, culturales, sociales, ambientales y espirituales de los mismos.

La perspectiva del Foro Social Mundial se convierte ante la crisis del proyecto de Davos, en el camino futuro a recorrer por el movimiento sindical, el conjunto del movimiento de trabajadores y todas las organizaciones sociales, políticas, culturales y espirituales que asumimos la necesidad de la transformación profunda de la realidad actual para construir una nueva sociedad, a la medida de nuestras esperanzas de

un mundo de libertad, democracia real, justicia social y paz mundial.

En la situación en que nos encontramos, nuestra batalla principal seguirá siendo la defensa y promoción de políticas públicas para generar trabajo digno – empleo decente. debemos luchar para poner en marcha inversiones públicas – privadas y sociales para promover el empleo y combatir la pobreza.

Parte de nuestra lucha es exigir la eliminación de las discriminaciones de género, raza, religión, ideologías, opciones políticas, como la explotación de la niñez, el abandono de los pueblos aborígenes (originarios) y el abandono de los adultos mayores. debemos estar alertas ante el posible nuevo auge de la economía informal y de la maquila, para diseñar políticas de organización, acción y formación en esos sectores.

Debemos asumir la responsabilidad política de exigir la puesta en marcha de verdaderas reformas agrarias para resolver el gran problema de la relación del hombre y la mujer con la tierra, y así poder abordar con políticas productivas la soberanía y seguridad alimentaria.

No podemos prescindir de preocuparnos directamente de las políticas educativas, de salud y vivienda, ya que la crisis amenaza toda política social de signo popular.

Debemos ser conscientes de que tenemos la gran responsabilidad de abrir espacios y ofrecer oportunidades de participación a la juventud y a la mujer trabajadora.

Dentro del panorama de tantas exigencias, desafíos y retos que tenemos, nosotros sabemos que nuestro principal enemigo es el desempleo, los salarios de hambre y la ausencia de una buena y eficiente seguridad social.

Como también sabemos que enfrentamos a diario los atropellos patronales, las represiones gubernamentales, los atentados contra la libertad sindical, las dificultades para la firma de las contrataciones colectivas, las violencias de todo tipo y nuestras propias falencias.

Pero reiteramos, la crisis es también la gran oportunidad para el relanzamiento, el redimensionamiento, la renovación y la reestructuración del movimiento sindical en la perspectiva de construir el gran movimiento de trabajadores, inspirado en principios, valores y objetivos de liberación humana y social, con identidad cultural, con proyecto histórico político alternativo y con poder socio político para construir la democracia real con justicia social y participación popular.

Estas reflexiones se corresponden con le pensamiento y la acción de la CNT, de todas sus organizaciones filiales y de todas las mujeres y los hombres de la ciudad y del campo que la conforman. Por su importancia, pone a consideración de la CSA y de todas las organizaciones y movimientos que están comprometidos con el proceso de cambio de nuestro país y en toda América Latina-Caribe.

OTRAS REGIONES

CRISIS ECONÓMICA Y CAMBIO DE MODELO

Javier Doz, Secretario de Internacional
Enero 2009

¿Podría llevarnos la primera crisis económica general de la globalización a un cuestionamiento real del modelo neoliberal, el único con el que la hemos conocido? ¿Podría abrir una transición hacia otro modelo más justo y solidario, más humano? ¿O estamos ante una crisis del sistema capitalista tan profunda que puede llevar al cuestionamiento de su existencia desde una opción revolucionaria? Una vez constatado que no sólo no habíamos llegado al "fin de la Historia", sino que ésta se vuelve a dejar escribir pletórica de incertidumbres, ¿qué papel debería jugar el sindicalismo en la encrucijada histórica que nos está tocando vivir?

¿Cuando tocará fondo la crisis financiera?

Conviene tomar con cuidado las previsiones sobre la profundidad y duración de la crisis mundial, ya recesión económica en todo el mundo desarrollado. Los economistas y políticos que mayor confianza me merecen han dicho que no lo saben. En buena medida porque nadie es capaz de prever con un margen de error razonable la dimensión del inmenso agujero negro que la práctica quiebra del sistema bancario y financiero internacional ha creado. Cuando las ayudas públicas para impedir su real quiebra técnica suman ya billones de dólares, aproximadamente el 5% del PIB mundial, todavía no se sabe –a mediados de febrero de 2009, 19 meses después de comenzar la crisis con el apartado de las hipotecas *subprime*- cual es el volumen de activos financieros tóxicos, de nulo o escaso valor, que tienen almacenados en sus bodegas algunas de las principales entidades financieras del mundo. Para dar una idea de cual podría ser el volumen de estos derivados financieros –*subprimes, credit default swap (cds),* etc, paquetes estructurados que los agrupan y camuflan-, en poder de los bancos puede servir de botón de muestra esta información tomada de *The Economist*: para asegurar el valor de los activos financieros de riesgo que, por valor de 43.000 millones de dólares,

poseía Goldman Sachs en sus *hedge funds,* el mayor banco de inversión de los EE UU suscribió cds, que supuestamente los aseguraban, por valor de un billón de dólares -¡23 veces su valor!-, *cds* que, como otros derivados financieros, infectan apenas sin valor todo el sistema. Esta era una de las razones por las que el director general del FMI, Dominique Strauss Khan, reunido con una delegación sindical de la CSI, a mediados de noviembre de 2008, en la víspera del G20 de Washington, decía que la crisis financiera que estalló en su plenitud el pasado septiembre no estaba todavía superada, a pesar de las ingentes ayudas publicas comprometidas, y que "tal vez lo peor estaba por llegar". Lo estamos viendo.

Crisis de la economía real

Pero la crisis financiera ya ha afectado de lleno a la economía real y la recesión, o la drástica caída de las tasas de crecimiento, están alcanzando a todas las regiones del mundo. Estamos pues ante la primera crisis general de la globalización, la más grande de la Historia económica por el número de países afectados. Si hace unos meses las previsiones más negativas se referían a las economías nacionales que sumaban a los problemas financieros el estallido de una burbuja especulativa en su sector inmobiliario – EE UU, Reino Unido, Irlanda, España, etc.- en el momento de escribir estas líneas han pasado a la primera línea de caída del crecimiento los grandes países exportadores: Alemania, China y Japón.

El impacto de la crisis en China, primera potencia de los países emergentes, puede ser especialmente grave, a pesar de conservar tasas de crecimiento que serían envidiables en otras latitudes. No se puede olvidar los efectos de la amplitud de la caída de la tasa de crecimiento, que puede pasar del 13,5% en 2007, a menos del 5% en 2009. Ya en el último trimestres de 2008 el crecimiento de la economía china cayó al 6,5%, como consecuencia, ante todo, de la caída de las exportaciones debida a la caída de la demanda mundial. En enero de 2009, la caída de las exportaciones en tasa anual fue del 17,5%. Esta drástica disminución de la tasa de crecimiento está suponiendo un incremento masivo del paro, con los consiguientes riesgos de inestabilidad social y política. El número de trabajadores migrantes internos[1] en paro se situaría ya ,según informaciones fiables, en 20 millones, lo que supone aproximadamente el 15% de una cifra total de trabajadores migrantes de contornos estadísticamente imprecisos. El ejemplo más descollante de los efectos de la crisis en China se encuentra en la industria juguetera de Guangdong. Casi el 50% de sus 8.610 empresas han cerrado en los últimos meses, en concreto 4.222. O también, que en tres meses los parados en la industria textil han aumentado en tres millones.

Por lo tanto, la crisis financiera de los países desarrollados en sus orígenes – conectada a la inmobiliaria en una parte de ellos-, se está extendiendo como crisis de la economía real por todas las regiones del mundo. Su intensidad tiene grados diferentes pero es casi siempre importante y sus plazos se irán solapando, pero su velocidad de contaminación es muy alta.[1] Apenas confirmada la crisis en los países emergentes, ya se está manifestando en los menos desarrollados y más vulnerables por la acción combinada de la caída del comercio internacional, la muy aguda caída de los precios de prácticamente todas las materias primas –tras el espectacular alza sostenida hasta mediados de 2008-, y de las remesas de sus inmigrantes, a los que podrían sumarse los recortes en la cooperación internacional de una parte de los países desarrollados. Y hay que recordar que estos países no tienen recursos para planes de rescate ni de relanzamiento de ningún tipo. Por lo que la crisis, que especuladores financieros sin escrúpulos han producido, puede terminar en crisis humanitaria de enormes dimensiones entre los más pobres del mundo.

Una de las primeras preguntas que surgen al conocer la génesis de la actual crisis es: ¿cómo es posible que se haya producido

[1] Se denominan así a aquellos trabajadores que estando censados como campesinos trabajan en la industria y los servicios en las grandes ciudades o en las ciudades del mundo rural. Verdadero ejército de reserva de la economía china es la componente esencial de la flexibilidad del mercado laboral chino por ser trabajadores con escasísimos derechos. Su número total se sitúa según fuentes, entre 150 y 200 millones de personas.

un proceso de especulación tan gigantesco sin que gobiernos, autoridades reguladoras, instituciones financieras internacionales y agencias de calificación de riesgos dijeran nada sensato para advertir de sus peligros y consecuencias? ¿Cómo no hubo nadie con poder o influencia capaz de advertir de las consecuencias que forzosamente iba a tener el que esa especulación estuviera basada en el apalancamiento, en el recurso temerario al sobreendeudamiento? No cabe duda de que el dinero abundante y fácil ciega a casi todos y compra a casi todos, sobre todo en el ambiente ideológico, político y moral predominante desde los años noventa y más aún si, además, no existen normas internacionales que regulen las transacciones financieras.

¿Algo más que la avaricia y la irresponsabilidad en un sistema sin regulación?

El clima ideológico, moral y político que el mundo desarrollado ha vivido a partir de la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, en los ochenta, pasando por la caída del muro de Berlín y las profecías sobre el fin de la Historia, hasta llegar a los insufribles últimos ocho años de gobierno de George W. Bush y los *neocons* en los EE UU, ayuda a entender la magnitud de la irresponsabilidad de quienes a la cabeza de las instituciones financieras, los organismos reguladores y los gobiernos han producido y permitido fenómenos especulativos de la dimensión de los que han originado esta crisis. En cualquier caso hay que recordar que los procesos de especulación y el tipo de conductas que los originan recorren la Historia del capitalismo y de sus crisis, en particular de aquella con la que ya se empareja la presente, la gran depresión de los años treinta del Siglo XX.

Algunos rasgos propios de la actual crisis, como la rapidez de su propagación son fácilmente explicables porque, hoy sí, los mercados financieros son estrictamente globales y sus transacciones en tiempo real no necesitan ni siquiera de una acreditación rigurosa de la propiedad de los activos que se compran y venden: sólo se requiere un *password*.

Por supuesto que hay que hablar de la avaricia, la irresponsabilidad y la inmoralidad de los directivos del mundo financiero; de la colusión de intereses de las compañías auditoras con los directivos de las empresas auditadas –pensemos en la pareja Enron-Arthur Andersen-; del escándalo de las agencias privadas de calificación de riesgos –las tres hermanas: Moody's, Ficht y Standard and Poors- otorgando espléndidas calificaciones a Lheman Brothers, Goldman Sachs,…, y ¡Madof!, mientras pontifican sobre el riesgo de las deudas soberanas de las naciones; hay que hablar también de la ceguera -ideológica o fruto de los sobornos- de los reguladores financieros nacionales de carácter público. Todas estas denuncias deberían ayudarnos a cimentar la base política y moral de una alternativa justa y solidaria al desorden actual. Pero son sólo manifestaciones de corrientes más profundas.

La globalización, a caballo de los acontecimientos políticos producidos a partir de los años 80 que hemos mencionado, se ha construido desde un modelo neoliberal que ha querido romper o, por lo menos erosionar fuertemente, el pacto social de la posguerra mundial, basado en los principios del New Deal estadounidense y del Estado de Bienestar europeo. Una de las consecuencias sociales, perceptibles a escala planetaria es el gran aumento de la desigualdad, la disminución del peso de las rentas del trabajo en la renta nacional de los países desarrollados, el masivo incremento del trabajo asalariado –hasta superar los 3.000millones de personas en el mundo- en paralelo a la disminución de los derechos del trabajo asalariado, el retroceso en los modelos de distribución más justa de la riqueza. Se ha propiciado que los ricos ganen más -algunos muchísimo más, escandalosamente más los directivos no propietarios de las grandes empresas- y paguen menos impuestos, en detrimento del resto de clases y capas sociales. Si los trabajadores y las clases

medias destinan su capacidad de consumo a fomentar la demanda de la economía real, la sobreabundancia de las capas más privilegiadas de la sociedad produce un exceso de liquidez que se orienta a los mercados financieros y bursátiles, propiciando así la hegemonía de la economía financiera y la especulación.

Pero además, la hegemonía de la economía financiera, ejemplificada por la economía de los EE UU y su capacidad de innovación financiera que ha llenado el mundo con sus innovadores activos tóxicos, puede ser también fruto de una necesidad. Me refiero a la necesidad del capitalismo estadounidense, incapaz de competir con las economías emergentes en la producción de bienes y en el suministro de una parte de los servicios, de crear riqueza en otro campo, el de la innovación financiera. La financiarización de la economía hasta los peligrosos extremos que estamos conociendo podría ser la equivocada respuesta a la pérdida de competitividad de la economía de los EE UU y otros países desarrollados, singularmente del Reino Unido.

Desendeudamiento y desigual reparto de las cargas

Una forma de entender los procesos que se están produciendo en esta crisis es verlos, en esencia, como necesarios procesos de desendeudamiento de los agentes privados –instituciones financieras, empresas y familias- que habían venido acumulando una enorme deuda desde hace muchos años.

El problema principal es que la deuda de los bancos y otras instituciones financieras, cuyos préstamos para empresas y familias son imprescindibles para el funcionamiento del sistema, ha sido utilizada por buena parte de ellas–no todas hay que resaltar- para invertir en activos financieros especulativos –"tóxicos"- que han perdido casi todo su valor. Un muy dañino factor de incertidumbre es que 20 meses después del estallido de la crisis de las *subprime* todavía no se sabe cual es el volumen de las pérdidas de la banca internacional. El FMI ha aventurado la cifra de 2,2 billones de US$; otros analistas la elevan a 3,6 billones. Teniendo en cuenta cualquier prudente estimación de lo que pudiera corresponder de esa cifra al sistema bancario de los EE UU, cuya capitalización actual es de unos 400.000 millones de US$, es fácilmente deducible lo holgadamente en quiebra que está.

En una parte de los países desarrollados, los más afectados por la caída de los precios de la vivienda, las familias se han endeudado para comprar unas viviendas que han perdido parte de su valor; para bastantes de ellas este último valor es ya inferior al de la hipoteca suscrita. Las empresas endeudas tienen que hacer frente simultáneamente a las restricciones crediticias, tanto para asegurar su liquidez como para renegociar sus deudas, y a la caída de las ventas.

Estamos asistiendo a un gigantesco proceso de desendeudamiento de los agentes privados de la economía, una parte de los cuales tienen que asimilar la pérdida de valor de aquello por lo que se endeudaron. Aún si el proceso es escalonado y cuenta con la ayuda de los gobiernos y las instituciones públicas, será un proceso doloroso –de asimilación de la pérdida de riqueza- durante el cual los agentes privados no estarán en condiciones de impulsar el relanzamiento de la economía.

Por eso es imprescindible la intervención del sector público, de los gobiernos, que forzosamente tienen que recurrir al endeudamiento para evitar la quiebra del sistema financiero y relanzar la economía. Pero el tener que hacerlo simultáneamente y por un volumen descomunal plantea el problema de cómo se va a financiar y quien lo va a hacer. La suma de los planes de rescate del sistema financiero y de relanzamiento de las economías de los países desarrollados y China ronda, en estos momentos, los 5 billones de dólares, es decir cerca del 9% del PIB mundial.[2]

La necesidad de coordinar la acción de los gobiernos para hacer frente a la

[2] La estimación del PIB mundial, a finales de 2008, es de poco más de 57 billones de US$.

primera crisis general de la globalización es evidente. Hasta ahora la coordinación ha sido escasa y tardía y esto contribuye a que no se vislumbre la luz de salida del túnel. El sistema de Naciones Unidas y sus actuales agencias económicas y financieras tienen demasiadas insuficiencias como para proporcionar el marco adecuado. Pero un área económica integrada con instituciones políticas, como es la Unión Europea, también está lejos de realizar, en su ámbito, los imprescindibles deberes que se le deben exigir. El G20, tras su reunión del pasado noviembre en Washington, aparenta querer asumir la responsabilidad de la coordinación de las políticas para salir de la crisis. La Declaración de Washigton explicita algunos objetivos para una regulación del sistema financiero internacional y realiza algunas recomendaciones de tipo keynesiano para la reactivación de las economías, trufadas con alabanzas al juego del libre mercado. La próxima reunión del G20, el 2 de abril en Londres, será determinante para conocer si este grupo de países desarrollados y emergentes está realmente en condiciones de asumir la responsabilidad de coordinar las políticas económicas mundiales para salir de la crisis.

El peligro del proteccionismo y el nacionalismo económico

Sin conocerse todavía las propuestas de los grupos de trabajo que están preparando la Cumbre de Londres del G20, sí se han empezado a manifestar preocupantes síntomas de proteccionismo comercial y nacionalismo económico: del nuevo fracaso de las conversaciones para desbloquear las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC al *Buy American,* del Plan Obama para la reactivación de la economía de los EEUU, aún en su versión finalmente suavizada, pasando por diversas decisiones o declaraciones de gobiernos nacionales. Todavía se está lejos de la contribución que supuso para entrar de lleno en la Gran Depresión de los años 30, la aprobación, en 1930, por las cámaras norteamericanas de la Ley de Tarifas Smoot-Hawley, desencadenante de la guerra de los aranceles comerciales, pero a veces parece que no se aprende de un hecho históricamente indiscutible: el proteccionismo comercial es un combustible magnífico para agudizar la recesión económica.

Reparto justo frente a la inmoralidad

Pero a los sindicalistas nos tiene que preocupar ante todo, un hecho: que los sacrificios de la crisis se repartan de una manera justa, de modo que aporten más los que más tienen y que no se exijan más sacrificios a quienes no pueden sacrificarse más, sino que, por el contrario, estos, y no sólo los bancos, reciban ayuda. Sería intolerable que el reparto de las cargas fuera el espejo de la injusticia del extremadamente desigual reparto de las ganancias de la época anterior de crecimiento especulativo. Y ya hay síntomas escandalosamente obscenos de que algunos pretenden que sea así: los directivos de la banca de los EE UU, responsables directos de la crisis financiera, se embolsaron, en 2008, 18.000 millones de dólares en concepto de bonus y primas, a pesar de que el sistema financiero sólo sigue funcionando por los cientos de miles de millones de dólares de dinero público que los contribuyentes pagarán con mucho esfuerzo. ¡Increíble premio a los más directos responsables de la quiebra! En el otro extremo, los gobiernos de los países desarrollados siguen sin cumplir sus compromisos para que se alcancen, en 2015, los Objetivos del Milenio (ODM) de Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza extrema. A pesar de las varias veces en que los principales dignatarios del mundo se han hecho fotos –de la Conferencia de Monterrey a las sesiones del G8- reafirmando sus compromisos con los ODM, sigue sin cubrirse el desfase de 50.000 millones de dólares necesarios para cumplirlos. ¡La cifra sólo es el 1% de los recursos destinados a los planes de rescate y relanzamiento de los países desarrollados y China!.

Es necesario un cambio profundo del modelo económico

La distribución equitativa de las cargas de la crisis requiere un cambio profundo del modelo de crecimiento y de distribución de la riqueza. No puede posponerse el cambio de modelo a la salida de la crisis. Algunas medidas deberán realizarse en paralelo a las medidas de reactivación de las economías y de regulación del sistema financiero internacional. Y, además, habrá que tener en cuenta las "otras crisis" que convergen en la financiera y económica, las crisis energética, alimentaria y medioambiental. Si algunas de sus manifestaciones –elevadísimos precios del petróleo, las materias primas y los alimentos hasta septiembre del pasado año- han cambiado drásticamente de signo al encaminarse la economía mundial hacia la recesión, las cuestiones de fondo que plantean estas crisis siguen siendo prioritarias en la agenda mundial, por no hablar de los profundos cambios que hay que poner en marcha para enfrentarse al cambio climático construyendo una economía baja en emisiones de carbono.

Estamos, pues, ante un problema político de una gran magnitud y complejidad. El movimiento sindical no puede esperar a tener perfilada una alternativa fruto de muchas sesiones de análisis y debate para intervenir con propuestas en los foros regionales y mundiales en donde se están tomando las decisiones más importantes. En estos momentos es el G20 en donde se van a tratar las cuestiones básicas de la crisis a nivel mundial.

El estado de la izquierda política es de una gran debilidad, especialmente en Europa. En América Latina gobierna democráticamente en una mayoría de sus naciones, con opciones reformistas y populistas. Pero a la hora de realizar propuestas supranacionales y mundiales las cosas se complican, porque a todos los gobiernos les cuesta sobrevolar por encima de la defensa de los intereses nacionales, incluso en ocasiones dejar de practicar el nacionalismo. En cuanto a la Internacional Socialista, hace tiempo que dejó de ser un organismo político de referencia, por su incapacidad para cumplir la función que tenía la obligación de cumplir en la era de la globalización: haber impulsado de un modo coherente una alternativa de izquierdas al modelo neoliberal que se sostuviera tanto ante los organismos multilaterales como en las prácticas nacionales y regionales de gobierno y oposición.

Por lo tanto, sin renunciar a alianzas y convergencias con movimientos políticos y sociales democráticos y progresistas, el sindicalismo internacional tiene que construir su propia capacidad de propuesta y movilización ante la crisis, incluida la de carácter supranacional. El pasado 7 de octubre, con la Jornada Mundial sobre el Trabajo Decente, la CSI mostró el camino por donde habrá que transitar más veces. Sus resultados fueron importantes pero también nos señalaron lo muchísimo que queda por hacer. Lo primero de todo, alejar las prácticas sindicales nacionales del proteccionismo y el nacionalismo económico. Observo al respecto, con mucha preocupación, la presión del sindicalismo de los EE UU sobre le Gobierno de Obama para que establezca, especialmente en su Plan de reactivación de la economía, medidas obligatorias en la línea del *Buy America*.

La victoria de Obama y del Partido Demócrata en las elecciones de los EE UU, además del significado histórico de que una persona de raza negra sea Presidente de la primera potencia mundial, supone el fin de uno de los períodos de gobierno más conservadores e incompetentes de su Historia, el de Georges W. Bush. ¿Podrá significar, también, una poderosa ayuda al fin del modelo neoliberal?. Esto no está escrito ni será fácil, pero la crisis y la recesión mundiales, por sus orígenes, consecuencias y responsabilidades, hacen que las bases políticas del modelo neoliberal, sintetizadas en los preceptos del "Consenso de Washington", estén hoy profundamente desprestigiadas. Desregulación, reducción del papel del Estado y de los servicios públicos, disminución del gasto público, privatizaciones, etc. no son recetas que puedan aplicar hoy gobiernos de cualquier signo. Pero, sin duda, se intentará que se vuelva a ellas en cuanto parezca que la crisis empieza a superarse.

¿Crisis final del capitalismo?

Debemos seguir hablando de cambio de modelo, concepto que implica transformaciones profundas pero que no cuestiona que la iniciativa de los agentes privados siga teniendo un papel importante en la economía. No es el momento de pensar que se puede propiciar la "crisis final del capitalismo" para volver a llegar al socialismo. Aún sin espacio suficiente en los límites de este artículo para argumentar más ampliamente este tema afirmaría, aunque sea esquemáticamente que: (i) después del hundimiento del "socialismo real", por su combinación de ineficiencia económica con dictadura política (en bastantes períodos de signo totalitario), tendrá que pasar mucho tiempo antes de que pueda construirse, en democracia, un modelo socialista superador de la economía de mercado; por supuesto, siempre después de aclarar en qué consiste el socialismo hoy; (ii) propiciar la agudización de las contradicciones sociales para promover el "hundimiento del capitalismo", con ocasión de esta su crisis general, conduciría probablemente a salidas autoritarias de derechas; y, (iii) eliminar los aspectos socialmente más injustos de la economía de mercado, democratizando la economía y el gobierno de las cosas del mundo es la orientación general que debiera, a mi juicio, adoptar el sindicalismo internacional en estos momentos. Es la que la CSI ha decidido emprender. Necesita un gran apoyo de las centrales sindicales nacionales y de las organizaciones regionales para llevarlo a cabo.

Algunos comentarios a las propuestas de la CSI

El documento que la CSI y *Global Unions* presentaron en el G20 de Washington, a pesar del diferente grado de desarrollo de sus distintos apartados y de algunas lagunas, constituye una buena guía programática para actuar en los diferentes ámbitos en que debemos movernos. Terminaré realizando algunos comentarios sobre sus propuestas.[3]

La exigencia de regulación internacional del sistema financiero, que incluya normas de obligado cumplimiento para todas las instituciones y países, es una decisión que no se puede demorar por más tiempo si se quiere seguir apelando a nuevos aportes de dinero público para seguir sosteniendo un sistema en gran medida en quiebra. Frente a la opción de compra pública de los activos tóxicos, a un precio casi imposible de fijar con objetividad, hay que defender la nacionalización de los bancos intervenidos con todas sus consecuencias, aunque sean nacionalizaciones temporales. Los paraísos fiscales deben dejar de existir. Su mera existencia, las prácticas que realizan, el hecho de que sean el punto de encuentro de todas las organizaciones de la economía criminal (entre el 5% y el 10% del PIB mundial), los grandes evasores de impuestos y las terminales de los bancos del mundo que recogen el dinero negro, una vez lavado, y que esto se conozca con detalle, y que no se haya hecho nada hasta ahora es un escándalo político, intelectual y moral absoluto.

El G20, con una discutible legitimidad, está tomando en sus manos la responsabilidad del "gobierno de la economía mundial", en el sentido débil de la expresión, único permitido hasta el momento por esa conjunción de intereses nacionales y de los poderes económicos mundiales que tienen la opinión más determinante en estos asuntos. Debería ser Naciones Unidas y sus agencias económicas las que se hicieran cargo de esta responsabilidad. Este apartado es tal vez el más flojo del documente de la CSI. Pienso que no se puede dejar este tema en un segundo plano. Hay que retomar y desarrollar la propuesta que, entre otros, formuló el ex –presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors: creación de un Consejo de Seguridad Económico y Social, que daría cuenta de sus actividades al Comité Económico y Social de la ONU, reforzado en sus funciones y democratizado en su funcionamiento. Del Consejo de Seguridad dependerían las organizaciones económicas y financieras –OMC, FMI y BM-, la OIT, la FAO y otras agencias como

[3] La Declaración de Washington se puede encontrar en: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0811t_gf_G20_es.pdf

PNUMA y PNUD, que deberían también democratizarse en su funcionamiento. En cada una de estas instancias y en el Consejo de Seguridad Económico y Social, las organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores –CSI y IE- deberían tener reconocido un estatus reforzado como interlocutores necesarios en cualquier proceso de toma de decisión.

La coordinación de las políticas económicas para la salida de la crisis tiene que ser el punto en el que se introduzcan los factores de cambio de modelo de mayor calado: inversión pública coordinada para el desarrollo de infraestructuras, formación y mayor protección social; desarrollo sostenible con energías limpias y empleos verdes; cierre de la Ronda de Doha con principios de comercio justo; cumplimiento de los ODM y desarrollo de políticas que pongan fin a la crisis alimentaria; y, siempre, universalización de los principios del Trabajo Decente.

Este último objetivo nos enfrentará con los patronos y los políticos en bastantes casos. Se está volviendo a pretender que para reactivar la economía y crear de nuevo empleos es necesario sobre todo disminuir los costes laborales y para ello reducir los derechos de los trabajadores.¡Como si el origen de la crisis tuviera algo que ver con ello! Este es otro de los síntomas más claro de las grandes resistencias que van a tener las medidas encaminadas a cimentar un cambio de modelo económico. Nadie puede decir que será un proceso fácil. No olvidemos que la "revolución conservadora" que se inicio en los 80 y que ahora tenemos la obligación moral de enterrar, fue preparada durante muchos años por sus mentores ideológicos y una pléyade de *think tanks,* y que los éxitos y potencialidades de la innovación financiera eran *mantras* en los medios financieros más inteligentes hasta un cuarto de hora antes de la quiebra de *Lehman Brothers.*

EL SINDICALISMO INTERNACIONAL FRENTE A LA CRISIS GLOBAL

Hacia un nuevo paradigma de desarrollo basado en la justicia social

Antonio Lopez, Secretaria Confederal de Política Internacional de UGT
Febrero 2009

El sindicalismo mundial para combatir las razones profundas de la crisis actual deberá buscar soluciones a largo plazo que impliquen el desarrollo de un nuevo paradigma que tenga como eje principal el trabajo decente. Para ello es necesario un enfoque integrado de un desarrollo humano sostenible que ponga freno a la estrategia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) para imponer el neoliberalismo en todas las partes del Planeta.

A los Estados debe asignárseles un nuevo papel de regulación e intervención estratégica a fin de garantizar que la economía esta al servicio de las personas y produzca trabajo decente para todos. Deben desarrollarse políticas que promuevan la redistribución de la riqueza para fomentar el crecimiento y resolver el problema del estancamiento de los salarios y las desigualdades.

A los países debe otorgárseles el espacio político de manera democrática y participativa a fin de que estos puedan establecer sus objetivos de desarrollo, el derecho a una protección social adecuada, el tripartismo y dialogo social como herramientas de desarrollo sostenible que permitan fortalecerse a nivel nacional e internacional, políticas comer–ciales concebidas con la finalidad de tener en cuenta las necesidades y problemas de los ciudadanos en materia de empleo, poner mayor énfasis en las normas internacionales del trabajo y en el papel que corresponde a la OIT como organismo de normalización mundial.

Al plantear este titulo para un articulo que hable e ilustre sobre la crisis, corremos el riesgo de escribir mas de lo mismo en el mar de tinta que nos inunda diariamente con el tema crisis. Conviene antes de nada saber que el sistema capitalista desde los anos 60 ha generado mas de 120 crisis a los largo y ancho del planeta, teniendo cada una de ellas su propio espacio geográfico y su tiempo. Es mas, los economistas registran desde hace mas de un siglo su retorno periódico, sin poder emitir una hipótesis plausible sobre su origen, prevención y solución. Solamente desde una análisis ideológico podemos dar respuestas a sus mecanismos de causa, desarrollo y soluciones que cuando se desencadenan en el mundo civilizado, arruinan fortunas por millares y destruyen los productos y los medios de producción por centenas de millones a los trabajadores.

Naturalmente las anteriores no han sido de esta envergadura. Podemos decir que esta es la primera crisis a nivel mundial que además es combinada entre la economía financiera y la economía real. Por ello las soluciones de futuro pasan por un nuevo y urgente orden mundial del funcionamiento y estructuras de Naciones Unidas donde:

- Se reformen las Instituciones Financieras Internacionales, IFI, (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) y sus mecanismos de gobierno.
- El nuevo orden financiero internacional tenga presente el modelo social y los derechos laborales y humanos.
- Las instituciones internacionales de Naciones Unidas integren a los agentes sociales en la búsqueda de soluciones, prevenciones y en el gobierno democrático de las mismas.
- El Parlamento Mundial del Trabajo, representado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), forme parte de la gobernanza global de la economía mundial.

Resulta curioso observar como afloran en las librerías viejos títulos de antiguas publicaciones que en mi modesto entender forman parte de nostalgias ideológicas de economías planificadas afortunadamente superadas por la humanidad. Será quizás por aquel manido sentimiento de que *buscando en el baúl de los recuerdos cualquier tiempo pasado nos parece mejor.*

Yo soy de la opinión, y defiendo, que sin valentía, idealismo, utopía, espíritu de superación y decisión, la humanidad seguiría hoy en la edad de piedra. Naturalmente todo ello en equilibrio con el realismo y pragmatismo necesario para acometer las reformas sociales e institucionales necesarias con total responsabilidad y sentido común en beneficio del bienestar común y desarrollo que exige el mundo actual. Ello no requiere desechar las viejas teorías ideológicas, que nadie niega que fueron en algunos aspectos acertadas y siguen a pesar del tiempo pasado siéndolo, pero si se hace imprescindible actualizarlas y adaptarlas a la realidad actual si no queremos engañarnos a nosotros mismos y verdaderamente queremos buscar y encontrar soluciones a los problemas y retos a los que nos enfrentamos.

Evidentemente nuestros clásicos ideológicos de la izquierda analizaron brillantemente el *lado oscuro del capital* y nos pueden seguir sirviendo de conocimiento y reflexión. No obstante, hoy a lo que nos enfrentamos no es solamente a la cara conocida y deshumanizada del capitalismo, sino a las aristas poliédricas del capitalismo globalizado que no se ven, pero que si nos han influido notablemente a través del, camuflado con piel de oveja, neoliberalismo.

Deliberadamente quiero evitar dar cifras macroeconómicas que creo que, salvo en análisis económicos, no contribuyen a la explicación racional de la crisis para los trabajadores. Todos las escuchamos a diario y ya nos estamos haciendo inmunes a su significado por lo astronómicas que suenan y que en nuestros parámetros son en si mismas un casi "sin sentido". Quizás lo que mas nos crispa es ver las indecentes retribuciones que tan detestables personajes del mundo financiero y empresarial justifican y perciben como recompensa a la estafa global que ha llevado a la humanidad a esta crisis financiera, alimentaria, energética, ecológica y me atrevería a decir también de empobrecimiento ideológico de valores, incluidos también los de cierta izquierda.

Sorprende ver a estas alturas que algunos mandatarios, supongo que por imperativo circunstancial, apoyen ahora erradicar los paraísos fiscales. No quisiera quitar valor a una de las pocas propuestas sensatas para acabar con la pobreza en el mundo, pero a veces resulta difícil encajar esa imagen en boca de quienes las han propiciado. Recordemos que la lista de esos paraísos fiscales en la OCDE la componen 38 Estados (Gibraltar, Andorra, Mónaco, Liechtenstein, etc. por solo citar a los mas cercanos y polémicos de nuestro entorno). Quizás habría que evaluar si estos "paraísos terrenales" no son efecto y causa de un crimen contra la humanidad bajo la acusación de ser cómplices de que 1400 millones de personas tengan que sobrevivir

en la pobreza extrema, que 155 millones de niños no estén escolarizados, que 10 millones de niños mueran cada año (30.000 cada dia) por enfermedades prevenibles o curables, que medio millón de mujeres mueran cada ano durante el embarazo, que1000 millones carecen de acceso al agua potable y millones mueren literalmente de hambre.

Se ha dicho y escrito tanto de esta crisis que a fecha de hoy nadie es capaz de decirnos en que etapa de la misma nos encontramos. Si sabemos que los fallos del sistema en materia de igualdad, justicia social y regulación financiera nos han llevado a la actual situación y por lo tanto este puede ser un punto de partida para restablecer valores que nunca deberíamos haber dejado en manos de especuladores sin escrúpulos.

Es cuando menos llamativo que lideres políticos, partidarios ideológicos del mercado desregulado, de menos Estado, amigos y promotores de las privatizaciones y de todos los demás encantos del capitalismo, hoy se rasguen las vestiduras en pro de un nuevo orden financiero auspiciado por la ética, criticando la perversión del capitalismo, tachando el actual sistema de inmoral, etc. etc. etc., implorando el *mea culpa* (supongo que para alcanzar el perdón de sus pecados terrenales).

Creo que no debemos quitarle valor al hecho de que impere aceptar la idea de que el Estado debe rescatar a los bancos y las compañías de seguros cuando se encuentran en quiebra. Sabemos que si eso ocurre de forma descontrolada llevaría inexorablemente a innumerables quiebras empresariales, un desempleo a gran escala, , desahucios y embargos de viviendas, seguridad social colapsada, seguro de paro desbordado y por consiguiente una situación social de tal tensión que estaría avocada a previsibles disturbios que bien podrían provocar desordenes sociales que cuestionen lo construido hasta ahora y que reclamen por la fuerza cambios difíciles de dirigir y controlar para cualquier Estado debilitado.

Los trabajadores y los sindicatos, opino, no debemos oponernos por principio a las políticas publicas de rescates financieros, aunque sabemos, y tenemos que ser muy conscientes de ello, se hacen con el dinero de todos nosotros. A cambio debemos exigir que no se nos utilice como salvavidas coyunturales y, al mismo tiempo, plantearnos que estas intervenciones estatales en la economía financiera sirvan para quedárnoslas y que las ganancias generadas sirvan al bien común de crear mas Estado del Bienestar para todos.

Nos encontramos en un momento histórico donde la izquierda debe recuperar su espacio sin complejos. No se puede tolerar que en esta crisis se cargue el peso de la salida sobre los trabajadores tratando de hacernos creer que lo que hay que reformar es el mercado laboral abaratando el despido y bajando salarios. Con las pruebas que tenemos sobre la mesa es un insulto a la inteligencia impresentable, injustificable, innegociable y despreciable para con aquellos que así lo proponen.

¿Como se pueden defender semejantes tesis cuando sabemos que la cuarta parte de la riqueza mundial se encuentra oculta en los paraísos fiscales?

¿Como pueden permitirse tales propuestas cuando sabemos que la economía financiera es cinco mil veces superior a la economía real?

¿Como se pueden hacer esas propuestas cuando los ejecutivos que gestionan los despidos de millones de trabajadores tienen contratos millonarios y blindados?

Hasta los ideólogos conservadores coinciden en que la crisis actual ha sido fruto de fallos sistemáticos de los sistemas de control financieros, en que es una crisis de modelo y no solamente financiera.

Ante estos ataques a la clase trabajadora y a sus representantes, el sindicalismo mundial no debe pasar pagina alegremente sobre las causas y los orígenes de esta crisis. Estamos en la obligación de explicar la desigualdad, el caos y la ingobernabilidad creada por el sistema si queremos buscar salidas.

La oportunidad de que a través de esta crisis se restablezcan valores de lo que es importante para los trabajadores, la tenemos

bajo la responsabilidad de todos nosotros y seria imperdonable que no la aprovechásemos a nuestro favor. Necesitamos como izquierda progresista, determinismo ideológico, sin optimismo ni pesimismo, ante la crisis y sus causantes.

No olvidemos la historia y lo surgido en Alemania durante la depresión de los anos 30, que salvando los tiempos, y si bien es verdad que en esa época los países europeos se veían entre si como potenciales enemigos, tampoco podemos perder de vista que pese a la actual unidad europea vemos intentos de maniobras proteccionistas de índole nacionalista que perjudican a todos en su conjunto. Aquí no es cuestión de que uno haga y tome medidas para que los otros se aprovechen, de lo que verdaderamente ese trata es de que todos tomen las mismas medidas, al mismo tiempo, en igualdad de condiciones y en función de sus capacidades y responsabilidades.

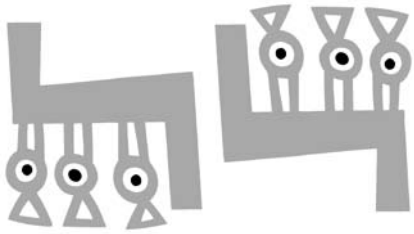
Europa sufrió el mayor revés con la no aprobación de su Constitución que nos hubiese garantizado una postura común, entre otras cosas, ante la crisis. No obstante hoy mas que nunca tenemos que aprovechar mucho mas lo que tenemos de Europa y ponerlo en valor, desarrollándolo y llevándolo al camino de la unidad que sus enemigos han tratado de aparcar, pero estando seguros de que no podrán parar en su inexorable rumbo hacia el lugar en el mapa político mundial que por nuestro peso y valor nos corresponde en la historia.

En el plano sindical mundial el camino emprendido por la Confederación Sindical Internacional (CSI), va en la dirección de mantener por un lado una acción sindical internacional, y en otra en el seguimiento y participación en todas las cumbres mundiales que se celebran con el fin de que nuestras demandas sean tenidas en cuenta al mas alto nivel de las instituciones de gobernanza mundial. Paralelamente se esta haciendo un tremendo esfuerzo de movilización sindical mundial sin precedentes que ya se puso en escena el pasado 7 de octubre con la campaña mundial por el trabajo decente.

Los objetivos son claros para todos los sindicatos que deben aunar esfuerzos y no caer en políticas sindicales proteccionistas de puestos de trabajo en el corto plazo a costa de rebajas sociales para los trabajadores. Eso seria nuestro mayor error y de una miopía sindical que pasaría factura al conjunto de la clase trabajadora. tenemos que situar el trabajo como valor central de la economía productiva, reforzar los derechos laborales y sociales y el propio papel de la OIT, así como promover el dialogo social y el trabajo decente y productivo en el mundo.

Nuestro sindicalismo mundial, democrático, de valores de izquierda, no puede permitir que en la tormenta de ideas actuales para la salida de la crisis que tienen posibilidad de generar un cambio real de valores, se apropien de ellas los que ven la situación como otra oportunidad para hacer dinero. En nuestras manos esta también crear conciencia social de clase, y con ello no pretendo desenterrar la lucha de clases, que haga que nuestro comportamiento, no pocas veces consumista compulsivo, pase a ser responsable y consciente del poder que el consumo responsable tiene para generar cambios en los modelos sociales. No olvidemos a quienes viven en la pobreza real que nosotros desconocemos a pesar de la crisis. En definitiva que esta sea una oportunidad que nos haga mas solidarios y conscientes de que toda la clase trabajadora va en el mismo barco y que con una redistribución justa de la riqueza nadie en el planeta debería sufrir pobreza ni crisis en la economía real.

Los sindicatos debemos velar por los derechos de los trabajadores que no pueden estar supeditados a ningún otro tipo de interés. Y nuestra lucha sindical mundial nunca puede perder de vista el reconocimiento del trabajo como un derecho universal, es el derecho que tenemos a ganarnos la vida dignamente, y un deber que es el de aportar nuestro esfuerzo al bien común.



¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO?

José María Zufiaur, Miembro del Consejo Economico y Social Europeo, CESE
Noviembre 2008

Cuando los gurús económicos no hacían sino asegurar una y otra vez que se habían acabado los ciclos económicos y que el crecimiento, que ya duraba 15 años, se iba a prolongar indefinidamente.

En un tiempo en que las empresas conocían cifras de beneficios nunca vistas, que las Bolsas superaban niveles de cotización jamás alcanzados y que los gestores de las grandes corporaciones se hacían multimillonarios con remuneraciones exorbitantes y se "arriesgaban" con contratos blindados escandalosos.

En el momento en el que corría la especie de que cualquiera podía hacerse rico endeudándose y de que para asegurarse la vejez lo arriesgado eran los sistemas públicos de pensiones y lo seguro los privados. Cuando el capitalismo se había convertido en "turbo capitalismo" y en "capitalismo total" y el liberalismo de los padres fundadores, Smith, Ricardo o Malthus, había quedado arrinconado por el ultraliberalismo de Milton Friedman, para el que el equilibrio óptimo es el que proviene del mercado y que, por tanto, cuanto menos reglas se establezcan más fácil será que dicho equilibrio se alcance.

Alcanzado el momento histórico en que ese tipo de capitalismo ya no tenía, como decía la Sra. Tatcher, alternativa. En la hora en que cualquier regulación o intervención por parte del Estado, salvo para favorecer la regulación pro-mercado, era considerada una herejía. Mientras que, según algunos de sus exegetas, la Responsabilidad Social de las Empresas "ha venido para quedarse", cuando, en la práctica, se generalizaban en algunos sectores – como la banca - los comportamientos empresariales más irresponsables; y de la idea de partenariado se había pasado a la de la defensa exclusiva del "valor del accionista".

Llegada la hora en la que ya hasta quienes se afirmaban de izquierdas consideraban que bajar impuestos no era una práctica de derechas, como tampoco el mantener el gasto público en los niveles más bajos posibles. Una vez demolidos, en gran parte, los derechos laborales, debilitadas las organizaciones sindicales y alcanzados niveles de desigualdad social incluso disfuncionales para el propio sistema. Habiéndonos llegado a creer que España era un modelo económico de éxito a exportar por el

mundo. Y que la Unión Europea realmente constituía una Unión supranacional capaz de representar un modelo de capitalismo diferente del anglosajón y de protegernos, a los ciudadanos europeos, frente a la mundialización ultraliberal. Cuando estábamos en esas, hete aquí que el "capitalismo de casino" viene estando aquejado de un infarto prolongado desde hace más de un año. Víctima de su propia auto-"regulación", de la avaricia de los capitalistas y de la codicia de sus gestores, víctima de la dejación de responsabilidad de los poderes públicos y de su propia lógica generadora de escasez y desigualdad, víctima de su propio éxito.

Y, de pronto, pareciera que nos hayamos caído de un guindo y que lo que ayer era imposible y aberrante hoy es posible y loable. Así, ahora resulta que, para socializar pérdidas, es muy bueno que intervengan los Estados. Y que la presumida impotencia de éstos ante el poder omnímodo de los mercados se ha esfumado: ahora sí pueden. En realidad, siempre han podido ya que el neoliberalismo no hubiera sido posible sin la re-regulación política realizada por los Estados. De golpe descubrimos que un gestor de empresa puede ganar en un año lo que a un asalariado medio le costaría ganar dos siglos. O que en 15 días sí podemos dar a los bancos el dinero que todos los países dan en un año en concepto de ayuda al desarrollo. Alemania descubre que las empresas prototípicas del "capitalismo renano" son las mejor preparadas para afrontar la crisis y Japón comienza a valorar los efectos devastadores de la precariedad laboral y social. La realidad de la Unión Europea se ha relevado como una Unión de Estados más que como una construcción "comunitaria" y menos aún como una entidad federal. Y, en España, empezamos a pensar que más que a California nos parecemos a Florida, con una economía basada en el turismo, el ladrillo, la precariedad laboral, el endeudamiento de las familias y el déficit con el exterior. En fin, la opinión pública mundial descubre, con espanto, que las materias primas, como el petróleo, o los alimentos han sido objeto de especulación y que el libre y desenfrenado juego del mercado produce catástrofes sociales, económicas, ecológicas. Incluso hemos vuelto a descubrir que el capitalismo sigue existiendo, o, al menos, de nuevo parece normal utilizar el término.

Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Remedando el verso de Bertold Brecht y del pastor Niemöller, primero fueron a por los trabajadores, luego atacaron las políticas públicas y, finalmente, la economía financiera fue sustituyendo a la economía real.

Restituir dos principios esenciales del capitalismo: el excedente empresarial y la valoración social del empresario

La crisis que ahora estamos viviendo como consecuencia de un capitalismo absolutamente desbridado, tiene su inicio en los años 60 cuando el capitalismo empieza a poner en cuestión el pacto – llamado pacto keynesiano o pacto socialdemócrata – que se había ido conformando tras la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Y, sobre todo, después de la segunda guerra mundial y la instauración de un mundo bipolar, con los acuerdos de Yalta. Sobre dicho pacto – que implicaba salarios reales crecientes, pleno empleo, derechos sociales y laborales, seguro de desempleo, educación obligatoria y gratuita, sanidad pública, pensiones por invalidez o jubilación - se edificaron los llamados Estados del Bienestar.

Pero, como tan bien nos explicó David Anisi, el pleno empleo y la seguridad derivada de la protección social habían incrementado el poder de los sindicatos y el espacio de la provisión de servicios al margen del mercado. Con ello se ponían en cuestión, de acuerdo con un eminente economista llamado Schumpeter, dos principios esenciales del capitalismo: el excedente empresarial y el "clima social" favorable a los empresarios. La retribución de los salarios ganaba terreno sobre los beneficios empresariales, el gasto público había dejado de ser una oportunidad de inversión para

el sector privado y la valoración social de los empresarios era claramente peyorativa. Había llegado el momento de disciplinar a los trabajadores y de revalorizar la función social de los empresarios. Un economista americano, Lester Thurow, sentenció que "el capitalismo declaró la guerra a la clase trabajadora, y la ganó". Llegaron Reagan y Tatcher y decretaron más mercado y menos Estado, más empresa y menos sindicato, menos impuestos y menos gasto público. El capitalismo decretó el final del "pacto keynesiano" y del Estado del Bienestar.

Aprovechando las crisis del petróleo de 1973 y de 1978 y, sobre todo, la caída del muro de Berlín, en 1989, el nuevo capitalismo se dedicó a "disciplinar" a la fuerza de trabajo. En primer lugar, el pleno empleo deja de ser un objetivo de la actuación de los gobiernos, con lo que la inseguridad se cebó en los trabajadores y los sindicatos perdieron capacidad reivindicativa. Con ello y con las repetidas "reformas" laborales se consiguió que los salarios crecieran por debajo de la productividad, aumentó la precariedad laboral (actualmente, según CEDEFOP, de 220 millones de asalariados europeos, 108 están en situación precaria y 30 millones de entre ellos son pobres) y disminuyó la capacidad de presión y negociación colectiva de los trabajadores. A su vez, la internacionalización de la economía ha creado un mercado de trabajo mucho más amplio, con un exceso global de mano de obra, generando una gran presión sobre las rentas salariales y continuados procesos de deslocalización empresarial. Como consecuencia de estas políticas, en todo el mundo desarrollado asistimos a una dramática erosión del mercado de trabajo y de los salarios, al tiempo que crece la distribución a favor de las empresas. A causa de esta deriva, desde hace más de veinte años los países desarrollados crecen la mitad de lo que crecían durante los "30 gloriosos" (entre 1945 y 1975) y en torno a un tercio de su población (bastante más en el caso español) es pobre, desempleada o precaria. Este modelo de capitalismo, genera crecientes desigualdades y está en la base de que cada vez más trabajadores voten a favor de opciones pujadistas y xenófobas o de que simplemente no voten. Ese es, igualmente, el factor que hace tan grave la crisis financiera y real en la que estamos inmersos y esa es, asimismo, la causa que está detrás de los pronósticos que la anuncian tan larga.

Este primer asalto del capitalismo contra el Estado del Bienestar se ha sustentado en unos valores que han modificado profundamente las conquistas sociales alcanzadas por el movimiento obrero durante dos siglos de luchas. En primer lugar, se ha ninguneado la dignidad del trabajo: en nombre del empleo se pretende que esté justificada casi cualquier medida sobre la calidad y la dignidad del trabajo (desde la ruptura del principio de igualdad de trato al aumento del tiempo de trabajo, pasando por la más completa inestabilidad en las trayectorias profesionales). La idea de que "más vale un mal empleo que ninguno", ha hecho furor. En segundo lugar, se ha ido transfiriendo progresivamente el riesgo a los trabajadores: éstos se han convertido en la primera variable de ajuste; se ha acrecentado su inseguridad ante los avatares de la existencia (desempleo, enfermedad, vejez, incapacidad); bajo el concepto de empleabilidad se pretende que los trabajadores sean, como se ha dicho por algunos teóricos de la "tercera vía", los empresarios de sí mismos; y aumenta el porcentaje de trabajadores "autónomos" pero económicamente dependientes. La seguridad – garantías de rentabilidad, contratos blindados – para los accionistas y los gestores, la inseguridad para los trabajadores. Finalmente, asistimos, por procedimientos diversos cuya manifestación más emblemática es la Responsabilidad Social de las Empresas, a la creciente sustitución de los procedimientos obligatorios – ley, convenio – por los voluntarios – códigos de conducta, labels, indicadores, orientaciones, etc-, como vía, en el fondo, de auto-regulación social y laboral. De nuevo, la filantropía, la caridad, queriendo sustituir a los derechos.

La demolición de lo público

En el segundo asalto, el capitalismo colocó en el centro de mira de su tarea para recuperar tasa de beneficio e influencia social, a las políticas públicas. A la desregulación, o mejor cabría decir re-regulación, laboral siguió la privatización. En el objetivo antedicho, le resultada imprescindible abrir al beneficio privado a todos los nichos rentables que estaban en manos del poder público: los transportes, la energía, las telecomunicaciones, los bancos, la enseñanza, la sanidad, las pensiones, la cultura. Con el argumento de que, así, serían más eficientes y baratos. Basta, para darse cuenta de la falsedad del argumentario, recordar lo que pasó en EEUU con el huracán Katrina; lo que sucedió con los ferrocarriles británicos; el ejemplo de eficiencia y austeridad que están dando las entidades financieras; la calidad del servicio que prestan algunas de las empresas de servicios esenciales tras ser privatizadas; la "seguridad" de los fondos de pensiones: los americanos han perdido desde que se inició la crisis financiera unos 1.500 millardos de euros, más del 20% de su valor; la "eficiencia" del sistema sanitario estadounidense que, gastando más del doble de lo que gastamos nosotros los españoles, deja sin asistencia a 47 millones de personas; etcétera.

Particularmente negativas han sido las políticas orientadas a "reformar" los sistemas públicos de pensiones. Reformas y contrarreformas guiadas siempre por dos objetivos: recortar, por diversos procedimientos, el gasto y las prestaciones públicas e incentivar, con gasto público, las pensiones privadas. Como si éstas fueran más baratas, más seguras o no estuvieran afectadas por los cambios demográficos. Reformas también guiadas por una premisa: nunca se puede actuar sobre los ingresos – cotizaciones, fiscalidad, aportaciones del Estado – ni sobre el reparto de la riqueza del país. Tampoco sobre las medidas que aseguren una mayor tasa de empleo de los jóvenes o de las mujeres; o una mayor permanencia en el empleo de las mujeres o de los trabajadores mayores, por ejemplo, para garantizar a largo plazo los sistemas públicos de pensiones.

No menos pertinaz ha sido la ofensiva dirigida a reducir los impuestos, sobre todo de las rentas más altas (según P.Krugman, el 40% de la reducción de impuestos de Bush ha favorecido a personas con rentas anuales superiores a 210.000 euros). La eliminación del impuesto del patrimonio en España, por ejemplo, supone una pérdida anual de ingresos de 1.400 millones de euros, mientras que no hay dinero para financiar la Ley de Dependencia. Desde hace treinta años, con el inicio de la revolución ultraliberal, se ha producido una enorme redistribución negativa de las rentas y de la riqueza: los ricos son más ricos y los pobres bastante más pobres. En ello ha jugado un papel central las reducciones fiscales directas y el aumento continuado de la imposición indirecta sobre el consumo. El tipo máximo del impuesto, en el promedio de la OCDE, bajó desde el 67% en 1980 al 43% en el 2000 (en EEUU, pasó del 70% al 35%, y en España del 66% al 43%). Las consecuencias han sido, y están siendo, evidentes: deterioro de la calidad de los servicios públicos, como sanidad o educación, y aumento de las desigualdades y de la exclusión social.

En el terreno de los valores, esta segunda ofensiva ha ido acompañada por la idea de que la solidaridad tiene que ser una solidaridad entre pobres (los funcionarios tienen que sacrificarse para que suban las pensiones; las pensiones más altas no tienen que crecer conforme a la riqueza del país sino moderarse para que puedan subir las mínimas, y así sucesivamente) y de los pobres hacia los ricos, con menos impuestos directos y más indirectos, por ejemplo. Y si necesario fuera, que lo ha sido, mediante la salvaguardia de los depósitos de los ahorradores. También se ha caracterizado por la progresiva sustitución de la idea de igualdad por la de no discriminación. Sin duda, para que haya igualdad no tiene que haber discriminación. Pero, igualmente, la igualdad tiene otros componentes – el poder de los

trabajadores para influir en la distribución de la riqueza, la enseñanza pública para propiciar la igualdad de oportunidades, un sistema fiscal progresivo para financiar servicios esenciales de calidad – que han sido arrinconadas en las prioridades políticas.

La apoteosis financiera del capitalismo

Limitado, mediante la desregulación, el poder de los trabajadores para incidir en la distribución de la riqueza – desconexión entre salarios y productividad -; reducida la capacidad de ahorro de la población, mediante los recortes del Estado del Bienestar – desconexión entre riqueza y solidaridad – el paso siguiente consistía en responder a la cuestión de cómo, en esas condiciones, se podía seguir creciendo y produciendo beneficios en los países ricos. La respuesta consistió en desconectar los gastos de los ingresos, estimulando el consumo mediante el crédito. El capitalismo seguía creciendo mediante un endeudamiento rampante. Por ejemplo, EEUU, gracias a la globalización y a los privilegios del dólar, había adquirido la costumbre de vivir muy por encima de sus medios: su endeudamiento total alcanza el 316% de su PIB, recibe el 80% del ahorro mundial y el déficit de su balanza comercial supera los 500 mil millones de euros.

La economía crecía también mediante la especulación (40 dólares en títulos por cada dólar real), favorecida por todo un conjunto de mecanismos de ingeniería financiera. Innovación financiera que liberaba de riesgos a los bancos para seguir prestando y trasladaba tales riesgos, a través de productos derivados, de una forma totalmente incontrolada e irresponsable. El exprimer ministro francés, Michel Rocard, ha dicho que a esas prácticas habría que llamarlas por su nombre: robo.

Esa carrera hacia la especulación financiera estuvo, de entrada, alimentada por la liberalización de los tipos de cambio y, posteriormente, de los tipos de interés de la tutela de los Estados. La volatilidad incesante de estas variables implicaba potencialmente consecuencias nefastas para las empresas (un beneficio anticipado se podía convertir en fuertes pérdidas como consecuencia de la variación en la tasa del tipo de cambio monetario). Mediante formas de innovación financiera, se comenzaron a ofrecer productos para poder asegurarse contra las variaciones de precios (tasas de cambio y de interés), productos derivados que luego fueron centrándose cada vez más, con el boom inmobiliario, en operaciones puramente especulativas. El resultado de todo ello ha sido la creación de una enorme fosa entre la esfera financiera y la esfera productiva de la economía: en 2005, del total de transferencias interbancarias, el 2,2% correspondían a la economía real y el 97,8% a la economía financiera. Consecuencia: una economía financiera mundial a la deriva y una gran depresión sobre la economía real.

Este nuevo tipo de capitalismo, de hegemonía financiera, es profundamente unidimensional: sólo le interesa el beneficio y el valor del accionista; tiene una profunda desconsideración hacia la naturaleza; equipara bienestar a riqueza producida, al margen de su reparto; considera que el único regulador ha de ser el mercado y no las instituciones políticas democráticas, nacionales o mundiales. Es un capitalismo que hace tabla rasa del pacto social y que no se nutre, como sucedía antes, del aumento de otras rentas (para que consuman las riquezas producidas) sino de la punción que realiza sobre las mismas. Este nuevo capitalismo financiero es un capitalismo sin proyecto que limita la posibilidad de inversión productiva, de crecimiento e innovación; que provoca un fuerte desplazamiento de la solidaridad fiscal y de la distribución de la riqueza producida; que se basa y produce grandes desigualdades sociales; que amenaza el equilibrio económico, social, político, ético y ecológico del planeta.

Y ahora ¿qué?

Muchos son los que opinan que este es el final del capitalismo de casino, del ultraliberalismo. Es posible, pero tampoco es nada

evidente. Es cierto que hace mucho tiempo que el capitalismo no ha estado tan al borde de su propia auto-destrucción y que probablemente nunca como ahora tantas cuestiones esenciales dependen de que se aborde una profunda transformación y regulación del mismo. Pero ello requeriría una acción coordinada y conjunta de la comunidad internacional. Y esa es una primera condición que no parece garantizada. Las tentaciones hacia respuestas proteccionistas, xenófobas y nacionalistas pueden ser muy fuertes, si no se adoptan políticas que protejan realmente a las poblaciones. La elección de Obama es un factor que resulta positivo para una respuesta multilateral y solidaria.

La segunda condición es que exista una masa teórica capaz de proponer, como sucedió con las aportaciones de Keynes durante la gran depresión de 1930, una salida regulada a la economía de mercado. La concesión del Premio Nóbel de Economía a Krugman y la notoriedad de otros economistas poco fanáticos de la mano invisible del mercado y decididos regulacionistas, como Stiglitz o Rodrik, puede indicar que el clima ideológico está cambiando. Pero no es seguro que los Jefes de Gobierno sigan sus postulados. A favor de un cambio de modelo puede jugar, igualmente, la creciente influencia de algunos países emergentes que, como Corea del Sur, China o India, han asentado su prosperidad económica sin seguir los postulados del consenso neoliberal. Pero, también aquí existe un pero, no está claro que tales países no quieran apostar por un capitalismo sin democracia.

El que exista una masa crítica de cambio es el tercer pre-requisito. Que tampoco parece asegurado. Ello requeriría un cambio radical del discurso económico de la izquierda de gobierno (que se ha mimetizado, en no escasa medida, con los postulados neoliberales) e incluso de una parte de la derecha liberal. También una decidida política de refuerzo del movimiento sindical y el establecimiento de nuevas alianzas entre las fuerzas políticas y los movimientos sociales. Pocas son las señales, reflexiones o pronunciamientos que se observan en ese sentido todavía. Pero es posible que la crisis termine siendo tan profunda que esa resulte la única alternativa para evitar, de nuevo, la emergencia incontrolable de fuerzas populistas, reaccionarias y autoritarias.

Una vez asegurada la liquidez de los bancos, restablecida la capacidad crediticia y la garantía de los depósitos, habrá que abordar otra serie de políticas para afrontar la crisis. Establecer, por ejemplo, una nueva regulación internacional del sistema financiero, con reglas obligatorias y mecanismos de seguimiento y de sanción. La eliminación de los paraísos fiscales que sustraen 250.000 millones de dólares de ingresos fiscales a los Estados. Proteger al capitalismo de los capitalistas: regulando las remuneraciones astronómicas de los gestores, estableciendo criterios de remuneración más sostenibles a largo plazo para los accionistas y apoyando sistemas de gobierno de las empresas basados en la participación real de los trabajadores. Restablecer, en suma, el papel regulador del poder público en el ámbito internacional, nacional y local. Parece, en este sentido, esencial dotar a la UE de las facultades que se han echado en falta en esta crisis: un gobierno económico común, la facultad de crear impuestos, dotarse de un presupuesto suficiente y de endeudarse como gobierno europeo, la vinculación de la autoridad monetaria a los poderes políticos, la capacidad de una regulación común.

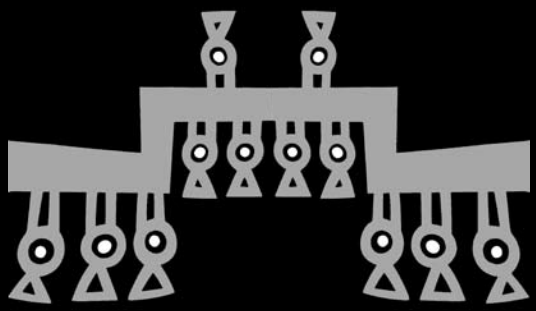
Para salir de esta crisis, con los menores daños posibles para la mayoría, será imprescindible, así mismo, recurrir al gasto público. Al objeto de impulsar el crecimiento y la creación de empleo. En España, por ejemplo, que es un país que tiene muy poco porcentaje de la población activa empleada en servicios públicos, como enseñanza, educación, servicios sociales, guarderías, servicios a domicilio – el 9%, frente al 15% de promedio en la UE y el 25% en algunos países nórdicos -, tendría que ser el momento de crear empleos vinculados a la ley de dependencia, a la ley de igualdad y la creación de guarderías, a la enseñanza

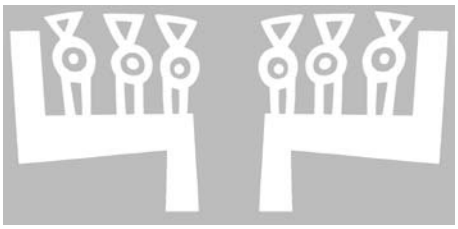
o la sanidad. Además de en otros sectores industriales, como todo lo vinculado con el ahorro energético y el cambio climático, o de servicios. Los Estados han de volver a situar el objetivo del pleno empleo en el centro de sus objetivos, Y recurrir a un esfuerzo equivalente al que realizaron en los años 30 y 40 del siglo pasado para evitar una recesión como aquella y los daños que de la misma pudieran derivarse en todos los órdenes.

Igualmente, en una situación en la que el crecimiento no va a poder seguir siendo alimentado por el endeudamiento, y en el que las profundas desigualdades se han convertido en nuestras sociedades en un freno al crecimiento, será imprescindible asegurar el incremento de los salarios al mismo nivel que la productividad. Y reivindicar, de nuevo, como está sucediendo en EEUU con la promesa de establecer un sistema sanitario universal, la protección a los parados, la finalización de los regalos fiscales, la consolidación y profundización de la protección social pública. Es necesario de nuevo establecer las condiciones para garantizar la seguridad a la gente. Porque si los ciudadanos tienen miedo, todos los desastres son posibles. Poner freno al ultraliberalismo es apostar, por tanto, por la seguridad – ante las deslocalizaciones, ante el paro, ante el futuro- mediante una vuelta a las políticas públicas. En realidad, la gran conquista del movimiento obrero fue una mayor seguridad para la gran mayoría. Eso ha significado el Estado del Bienestar. Mientras que el neoliberalismo significa ¡ustamente lo contrario: la vuelta desde la seguridad a la inseguridad, al miedo. Por eso tenemos que volver a regular el capitalismo. Porque la inseguridad, además de generadora de profundas desigualdades e injusticias, es la madre de todos los desastres.

II.

MULTILATERALISMO





¿CUÁL ES EL ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES EN LA OMC Y QUÉ DEBEMOS ESPERAR?

Esther Busser, Directora Adjunta, CSI Oficina de Ginebra
Enero 2009



La Ronda de Doha en la OMC continúa estando dominada por las negociaciones sobre la Agricultura y los Productos Industriales (Acceso a los mercados para los productos no agrícolas – NAMA, por la sigla en inglés). En 2008, continuó la discusión de los textos de negociación y se logró un mayor avance en la resolución de algunos de los temas en ambas áreas. Entre los acontecimientos más destacados de 2008 podemos mencionar la reunión miniministerial de julio, que vio la urgencia de concluir las modalidades para la Agricultura y el NAMA, y el intento de diciembre por terminar de definir las modalidades una vez más. El presente artículo ofrece un resumen de las negociaciones que se llevaron a cabo en la OMC durante 2008 y hace un balance de la situación a comienzos de 2009 al tiempo que ofrece algunas reflexiones sobre lo que podría ocurrir en 2009.

Reseña general de 2008

Tanto la Agricultura como el NAMA continuaron dominando las negociaciones de la OMC en Doha en 2008. Las principales cuestiones planteadas en las negociaciones sobre Agricultura se relacionaron con los pedidos para que Estados Unidos reduzca los niveles de ayuda interna, para que la UE y otros países desarrollados ofrezcan acceso a los mercados para aquellos productos agrícolas que son de interés para los países en desarrollo, y para que éstos limiten las salvaguardias y los productos especiales. En el ámbito del NAMA, los principales temas de discusión continuaron siendo las reducciones arancelarias para los productos industriales en los países en desarrollo, el desequilibrio entre los compromisos asumidos por los países en desarrollo y aquellos de los países desarrollados, las exenciones y las excepciones de las reducciones aran-

celarias para diferentes grupos de países, y algunas otras cuestiones como la erosión de las preferencias.

Lo que reviste una importancia particular es el equilibrio y las concesiones recíprocas *(trade-offs)* entre la Agricultura y el NAMA así como la percepción de dicho equilibrio. Los países desarrollados pretenden obtener una gran cantidad de flexibilidades en la Agricultura y, hasta el momento, han recibido esas flexibilidades debido a que han sido capaces de identificar productos sensibles que estarán sujetos a menores reducciones arancelarias. Estados Unidos deberá reducir sus niveles de ayuda interna en la agricultura a aproximadamente USD15.000 millones, aunque igualmente podrá aumentar sus niveles de gasto actuales. Por lo tanto, se ha prestado debida atención a los puntos sensibles de los países desarrollados. Por otra parte, las sensibilidades de los países en desarrollo en la Agricultura, como los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial (MSE), han traído aparejadas arduas discusiones en las que se intentó evitar otorgar demasiadas flexibilidades a los países en desarrollo para proteger su producción y el empleo en esas áreas. La crisis de los precios de los alimentos permitió tomar conciencia de que los países en desarrollo sí necesitan un mecanismo para proteger y aumentar su producción de alimentos interna y la seguridad alimentaria. Más aún, si se consideran las negociaciones sobre el NAMA, las reducciones que efectuarán los países desarrollados serán mucho menores que las que aplicarán los países en desarrollo que están sujetos a reducciones de fórmula. Las flexibilidades para estos últimos siguen siendo limitadas para una amplia gama de productos, incluso para países que todavía se encuentran en etapas distintas, y a veces tempranas, de industrialización y, por consiguiente, requieren una mayor cantidad de flexibilidades.

En 2008, la atención se centró, principalmente, en obtener modalidades definitivas para la Agricultura y el NAMA. El borrador de modalidades para ambos sectores fue presentado a principios de julio, antes del inicio de la miniministerial. Al mismo tiempo, se hicieron preparativos para hacer coincidir una conferencia sobre servicios con la miniministerial con el fin de obtener algún indicio sobre las ofertas y los compromisos relativos a los servicios de los principales jugadores en las negociaciones en ese ámbito.

Miniministerial de julio

Lamy convocó una miniministerial para el 21 de julio. Si bien asistieron ministros de alrededor de 30 - 35 países, las negociaciones se llevaron a cabo principalmente en el G-7, compuesto por la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, India, China, Japón y Australia. Al principio, el G-7 no podía llegar a un acuerdo. A fines de la semana, el 25 de julio más precisamente, Lamy preparó un texto con elementos de acuerdo sobre temas de Agricultura y NAMA. Dichos elementos fueron presentados al G-7 para que los países los tomaran o los dejaran. El texto de Lamy no abarcaba todos los temas de Agricultura y NAMA. El G-7 podía llegar a un acuerdo en prácticamente todos los elementos excepto en cuanto al Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE) y algunas cuestiones del NAMA como el texto de las negociaciones sectoriales y la cláusula anticoncentración, que no tenían plena aceptación. Tal como lo proponía el texto, India y China no aceptaban el MSE y, por ende, no era posible lograr un consenso sobre la totalidad de los elementos. Por lo tanto, la miniministerial se disolvió sin tomar decisiones sobre cuestiones clave, pero también sin negociar algunos temas centrales como el algodón. Más aún, muchos países quedaron descontentos con el hecho de que no habían participado en las negociaciones, que esencialmente se desarrollaron sólo en el G-7.

En agosto, los presidentes de los grupos de Agricultura y NAMA elaboraron un informe en el que indicaban en qué temas se había arribado a un acuerdo en julio durante la miniministerial. Sin embargo,

no pudieron redactar un nuevo texto de modalidades debido a que no había pleno acuerdo sobre todos los elementos debatidos en esa oportunidad.

La sección del paquete de Lamy correspondiente a la Agricultura habría conducido a reducciones considerables de la ayuda interna en la Unión Europea y Estados Unidos, pero no en el gasto real, que en el caso de Estados Unidos aún podía incrementarse en forma sustancial partiendo de los niveles actuales. Las reducciones arancelarias en los países desarrollados no redundarían en mejoras considerables en el acceso a los mercados ya que los productos sensibles continuarían estando protegidos. No se abordaba el tema de los subsidios al algodón. El mecanismo de salvaguardia especial, tal como fue propuesto, sería insuficiente para proteger la producción agrícola en los países en desarrollo.

La sección de la propuesta de Lamy relativa al NAMA hacía referencia a la participación en negociaciones sectoriales (para los aranceles cero), vinculándolas al coeficiente. Además, incluía un coeficiente de 8 para los países desarrollados y de entre 20 y 25 para los países en desarrollo (según la cantidad de flexibilidades). La controvertida cláusula anticoncentración contenida en el texto de Lamy establecía la aplicación de reducciones arancelarias totales basadas en la fórmula a un mínimo de o bien [20] por ciento de las líneas arancelarias nacionales o [9] por ciento del valor de las importaciones de los miembros en cada capítulo del Sistema Armonizado. La cláusula fue propuesta por la UE con el objeto de evitar que los países en desarrollo excluyeran sectores enteros o casi enteros de las reducciones arancelarias al utilizar las flexibilidades.

La conferencia de manifestación de intenciones sobre los servicios también se celebró en julio. La intención era reunir a un grupo de 30 países interesados en las negociaciones sobre servicios e intercambiar posibles ofertas. En su mayoría, los participantes fueron países en desarrollo, en cuyos mercados los peticionarios *(demandeurs)* de la reunión de alto nivel sobre servicios están buscando obtener concesiones más amplias y más profundas en diversos sectores. En contraste, las principales demandas de los países en desarrollo giraron en torno a conseguir mayor acceso para sus proveedores de servicios temporarios (desplazamiento de personas físicas o modo 4 de suministro de servicios) y servicios transfronterizos, tales como la tercerización de servicios empresariales (modo 1). Los países desarrollados como los de la UE y Estados Unidos se mostraron dispuestos a admitir más compromisos de modo 4, si bien mayormente vinculados al modo 3 y únicamente para el personal altamente calificado. El 17 de julio, el Embajador Fernando de Mateo, Presidente de las negociaciones sobre servicios, presentó un borrador de propuesta sobre los elementos necesarios para concluir las negociaciones sobre servicios.

En julio no se abordaron otros temas polémicos, tales como los subsidios a la pesca y las medidas *antidumping*.

El período posterior a agosto

Después del receso estival, en septiembre se reanudaron las negociaciones. El G-7 llevó a cabo una reunión con el propósito de llegar a un acuerdo sobre el Mecanismo de Salvaguardia Especial, dado que este tema era considerado (injustificado) el punto clave que había impedido el acuerdo en julio. Una vez más, el G-7 no logró ponerse de acuerdo. Las diferencias entre Estados Unidos por un lado y China e India por el otro continuaban siendo demasiado grandes.

En el ámbito del NAMA se designó un nuevo presidente, el Embajador Luzius Wasescha de Suiza. Éste consultó con los miembros del grupo y continuó las negociaciones sobre la base del texto de Stephenson del 10 de julio, dado que no había acuerdo respecto de tomar el texto de Lamy o el informe de agosto de Stephenson como punto de partida para las negociaciones ulteriores. Se mantuvieron negociaciones sobre varios temas menos importantes como el tratamiento que

se les concedería a los miembros de reciente adhesión y las economías pequeñas y vulnerables, entre otros. La UE y Estados Unidos continuaron presionando para establecer algún tipo de participación obligatoria en las negociaciones sectoriales pero el NAMA 11 continuó haciendo énfasis en la naturaleza voluntaria de la participación en aquéllas.

Si bien muchos países del NAMA 11 estaban dispuestos a aceptar los rangos de coeficientes y flexibilidades propuestos en el texto de Lamy de julio, Argentina mantuvo su firme oposición y Sudáfrica continuó pidiendo más flexibilidades individuales. El NAMA 11 emitió una declaración a fines de octubre en la que resaltaba que las negociaciones sectoriales en el ámbito del NAMA debían seguir siendo voluntarias, reiterando la Declaración Ministerial de Hong Kong. El NAMA 11 ha quedado severamente debilitado debido a que algunos países, como la India y Brasil, habían aceptado un coeficiente bajo (20-25) durante la reunión ministerial de julio.

Asimismo, se avanzó en las negociaciones sobre Agricultura desde septiembre, aunque lentamente, pero todavía quedan algunas cuestiones difíciles de resolver. En octubre se llevaron a cabo conversaciones sobre la creación de cupos arancelarios, la simplificación de aranceles, el mecanismo de salvaguardia especial, los productos sensibles, la ayuda interna del Compartimento Verde, y el algodón. En lo que concierne al Mecanismo de Salvaguardia Especial en la órbita de la Agricultura, el tema principal de la polémica era, y sigue siendo, en qué circunstancias (si las hay) se podrían aumentar los aranceles por encima de los niveles previos a Doha. En lo que respecta a los subsidios al algodón, no se logró ningún avance hasta el momento.

Una vez más, en diciembre se hicieron intentos para organizar una miniministerial para cerrar el tema de las modalidades para la Agricultura y el NAMA. Se elaboró un nuevo texto para el NAMA y la Agricultura a comienzos de diciembre, que partía del avance logrado en la reunión ministerial de julio. Sin embargo, había pocas probabilidades de poder concluir las modalidades en una reunión ministerial y se decidió no convocar a los ministros para una reunión en Ginebra. Los textos de diciembre ahora parecen haber sido aceptados por la mayoría de los miembros de la OMC como base para negociaciones ulteriores.

Conclusiones y expectativas para 2009

A partir de los textos de diciembre de Agricultura y NAMA, se puede concluir que los compromisos asumidos en el ámbito agrícola no reducen el gasto real en subsidios (OTDS, por la sigla en inglés) y no ofrecen un acceso al mercado sustancial a los países en desarrollo para los productos que son de su interés. Tampoco logran diseñar un mecanismo de salvaguardia adecuado para que los países en desarrollo protejan su producción y desarrollo agrícola. Hasta el momento, no se ha dado suficiente tratamiento al tema clave de los subsidios al algodón.

En lo atinente al NAMA, los coeficientes correspondientes a los países en desarrollo se mantienen bajos, y los recortes arancelarios son profundos. Según los rangos de coeficientes y flexibilidades, diversos sectores de los países en desarrollo sufrirán efectos negativos en el empleo. Es probable que todos los países en desarrollo enfrenten dificultades y limitaciones en términos de desarrollo industrial futuro y empleo. Las negociaciones sectoriales continúan siendo un tema preocupante y la participación en ellas debería continuar siendo voluntaria dado que éstas apuntan a reducir los aranceles a cero en sectores seleccionados. De la misma manera, la cláusula anticoncentración es problemática ya que restringe aún más las flexibilidades de por sí bajas y elimina parte de los beneficios logrados en las negociaciones sobre flexibilidades. El coeficiente de 8 en el NAMA para los países desarrollados conducirá a reducciones y pérdida de puestos de trabajo en algunos sectores protegidos de los países desarrollados sin que exista la posibilidad de excluir sectores o de aplicar una reducción arancelaria menor.

Resulta claro que los países desarrollados no son para nada sensibles a los argumentos de los países en desarrollo en cuanto a sus preocupaciones por el desempleo y los efectos negativos en el desarrollo industrial. Los compromisos asumidos por los países en desarrollo en el ámbito del NAMA y el impacto negativo en el empleo y el desarrollo son mucho mayores que los compromisos asumidos por los países desarrollados tanto en el NAMA como en la Agricultura.

La elección de Barack Obama como nuevo presidente de Estados Unidos ha planteado algunos interrogantes acerca de la posición estadounidense respecto de la Ronda de Doha así como de sus compromisos con la ronda. Es probable que Obama revea la posición de su país en relación con las negociaciones de Doha, lo cual podría significar menos compromisos de Estados Unidos o más demandas de ese país sobre otros miembros de la OMC. Será necesario que transcurra el tiempo para formular esta nueva posición y, en consecuencia, aminorar la marcha de las negociaciones al menos en los primeros dos meses del año. Los presidentes de los grupos negociadores ya han expresado su deseo de continuar trabajando en las cuestiones técnicas y el cronograma de compromisos más que en las grandes decisiones políticas que deben tomarse, lo cual también indica que no hay expectativas de que se tomen tales decisiones políticas en el futuro cercano.

Sin embargo, hay otra gran nube negra acechando las negociaciones. La crisis financiera y la consiguiente crisis económica que han mantenido en vilo a la economía mundial también están afectando las negociaciones de Doha. Si bien algunos aconsejan evitar las medidas proteccionistas y ven la finalización de la ronda de Doha como un instrumento eficaz contra tal proteccionismo, no es muy realista esperar que los países asuman compromisos sustanciales durante un período de crisis. Tales compromisos afectarían el empleo y acentuarían aún más la desocupación ya causada por la recesión. Los países preferirían optar por una cantidad máxima de instrumentos de política disponibles para hacer frente a la crisis y garantizar una respuesta adecuada a esta coyuntura en términos de creación de empleo. Los primeros pedidos y signos de proteccionismo ya están dejándose ver en Europa y Estados Unidos, y los países en desarrollo no deberían ser obligados a abrir sus mercados en este momento.

Asimismo, es probable que, debido a la crisis económica, la ronda de Doha deje de ser la prioridad de los formuladores de políticas de Estados Unidos. Dado que la crisis golpea con particular fuerza a ese país del Norte, Obama deberá aunar todos los esfuerzos y dirigirlos a tratar las consecuencias de la crisis. Se centrará en el mercado interno y las negociaciones de Doha simplemente no estarán dentro de sus prioridades.

En la reunión del Consejo General de diciembre de 2008 se anunció que se continuaría trabajando en la agenda de Doha durante 2009. Pascal Lamy reiteró la necesidad de concluir las modalidades en el ámbito del NAMA y la Agricultura pero también solicitó que se prestara atención a otros temas como, por ejemplo, los servicios y las normas. Además, llamó a los miembros a intentar cosechar logros en forma temprana en temas como la facilitación del comercio, el acceso a los mercados libre de derechos y cupos, el algodón y las bananas. Más allá de Doha, también anticipó algunas modificaciones a raíz de un posible cambio de rumbo en el programa de trabajo de la OMC. Es probable que la OMC extienda su trabajo a algunos de los problemas más amplios y reales tales como el comercio y el cambio climático, la crisis alimentaria, la crisis energética, y la crisis financiera, en particular el financiamiento del comercio (debido a las limitaciones crediticias que afectan el comercio). Una de las respuestas en ese sentido podría ser la movilización de recursos. En respuesta a la crisis financiera y económica, se proporcionarían análisis y actualizaciones permanentes sobre las consecuencias

comerciales de la crisis así como informes sobre las medidas comerciales adoptadas en el período posterior a la crisis financiera, como los paquetes de estímulos. Esas medidas serán debatidas en el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Por último, Lamy solicitó que se elabore una hoja de ruta para el trabajo sobre la Ayuda al Comercio en 2009.

Una vez más, ésta es una señal de que la Ronda de Doha probablemente reciba menos atención en el futuro inmediato. Si bien es probable que se lleve a cabo una reunión ministerial a fines de 2009 con el fin de concluir la Ronda de Doha, dicha reunión también se centraría en el programa de trabajo y las prioridades a futuro de la OMC, con una menor dependencia del avance en las negociaciones de Doha.

Si bien será sumamente necesario que los sindicatos hagan un seguimiento de las negociaciones del NAMA en 2009, debido a la posible desaceleración de las negociaciones durante la primera mitad del año, es poco probable que se requiera alguna movilización. No obstante, es necesario no bajar la guardia y trabajar para reevaluar algunos de los compromisos asumidos por algunos gobiernos, en particular los de Brasil, India, Indonesia, Filipinas, Egipto y Túnez, durante la reunión ministerial de julio. A su vez, es preciso mantener un apoyo y un seguimiento constante de las negociaciones específicas de Sudáfrica y Argentina con otros miembros de la OMC. Otras cuestiones que deben ser abordadas y requieren un monitoreo son las negociaciones sectoriales y la cláusula anticoncentración.

EL GRUPO DE SINDICATOS NAMA 11: GENERALIDADES Y LOGROS

Esther Busser, Directora Adjunta, CSI Oficina de Ginebra
Febrero 2009

A fines de 2006, algunos de los sindicatos del grupo NAMA 11 sintieron la necesidad de establecer una colaboración y coordinación más estrecha en las negociaciones de Acceso a los Mercados para productos No Agrícolas (ANMA o NAMA, por su sigla en inglés) en vista de los serios impactos que estas negociaciones tendrían sobre el empleo y el desarrollo industrial de sus países. Se decidió crear un grupo de sindicatos del NAMA11 en apoyo al grupo de gobiernos del NAMA 11 en la OMC. Comenzó con unos pocos sindicatos de países miembros del NAMA 11 y se expandió gradualmente a la mayoría de los países que integran el NAMA 11, y algunos sindicatos tomaron un rol más activo que otros. La principal finalidad era coordinar la acción sindical nacional e internacional referida al NAMA, seguir las negociaciones más de cerca, responder rápidamente a eventos cruciales en las negociaciones e informar a todos los miembros del grupo sobre las distintas actividades que se están desarrollando a nivel nacional con respecto al NAMA.

Los miembros del grupo son representantes de sindicatos de Argentina (CGT), Brasil (CUT), Sudáfrica (COSATU), Túnez (UGTT), India (HMS), Indonesia (KSBSI), Filipinas (TUCP y APL) y Namibia (NUNW). Los sindicatos de Egipto y Venezuela aún no han tenido una participación activa, pero han suscrito algunas de las declaraciones. Otros sindicatos que fueron incluidos como signatarios de algunas de las declaraciones son FEDUSA (Sudáfrica) y CITU (Indonesia).

Los principales canales de comunicación entre los miembros del grupo sindical del NAMA 11 son una lista de correo electrónico y las conferencias telefónicas a intervalos regulares. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2009, se llevaron a cabo más de 30 teleconferencias.

Desde que se creó el grupo, sus miembros han elaborado una serie de declaraciones con el fin de responder a las diferentes etapas de las negociaciones y comunicar, en forma periódica, la posición de los sindicatos respecto de las diferentes propuestas sobre el NAMA.

La posición original del grupo en lo concerniente a las negociaciones del NAMA se caracterizaba por los siguientes aspectos:

- Presionar a los países desarrollados a hacer ofertas incondicionales de mayor acceso a los mercados en Agricultura, que deben ser ajenas al NAMA. Es probable que los beneficios del acceso al mercado en agricultura fluyan a unos pocos países solamente y que favorezcan la agricultura intensiva en capital. El desarrollo industrial y los puestos de trabajo en manufactura en nuestros países no deben ser cedidos a cambio de ellos. Incluso en países que se benefician con el acceso al mercado en agricultura, no es correcto hacer una concesión *(trade-off)* entre el crecimiento industrial futuro y el desarrollo del sector agrícola.
- Asegurar que los países en desarrollo puedan aplicar una reducción de aranceles que esté alineada con su etapa de desarrollo, de conformidad con el principio consensuado de "reciprocidad menos que plena", y que debe ser sustancialmente menor que los cortes adoptados por países desarrollados y las propuestas de reducciones arancelarias actualmente sobre el tapete.
- Asegurar que las flexibilidades del "párrafo 8" de los países en desarrollo, tal como se describen en el marco de julio de 2004, se expandan sustancialmente. Las flexibilidades deberían permitir *tanto* la exención de líneas arancelarias como menores recortes arancelarios para una cantidad de líneas arancelarias. Los países en desarrollo no deberían ser obligados a elegir entre estas dos opciones. Al mismo tiempo, estos porcentajes deberían incrementarse a un porcentaje considerablemente mayor que los niveles actuales en corchetes, y los criterios con respecto al valor de la importación deberían dejarse de lado. Esto ayudaría a los países en desarrollo a manejar el ajuste de sectores sensibles y a prevenir la conmoción social causada por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas como consecuencia de una mayor liberalización; estas flexibilidades también deberían permitir cambios en el tiempo en las líneas arancelarias que se seleccionarán para ser cubiertas por el párrafo 8, de modo de responder de manera flexible a necesidades futuras de desarrollo industrial.
- Mantener su unidad en la OMC frente a la presión de países desarrollados.
- Asegurar que la Ronda de Doha para el Desarrollo beneficie a los países en desarrollo. Al dar su consentimiento a algunas de las propuestas actualmente sobre la mesa o al relajar las posturas actuales del grupo, esta ronda no cumplirá su finalidad de promover el desarrollo para los pobres del mundo. A lo sumo, los mantendrá en puestos agrícolas y de extracción de minerales de bajo nivel.

Estos reclamos continuaron siendo la base de intervenciones subsiguientes y declaraciones por parte de este grupo.

El grupo preparó una segunda declaración a propósito de un encuentro ministerial del NAMA 11 celebrado en Ginebra el 11 de junio de 2007. Los Ministros del NAMA 11 invitaron a los sindicatos del NAMA 11 a una reunión. Todos los sindicatos del NAMA 11 estuvieron presentes en esa ocasión[1]. El reclamo principal que plantearon fue que el grupo NAMA 11 mantuviera su posición en las negociaciones sobre el NAMA y se abstuviera de hacer concesiones adicionales, dado que su posición actual ya constituía un compromiso desde el punto de vista de los sindicatos, es decir, el pedido de una diferencia de coeficientes entre los países desarrollados y en desarrollo de por lo menos 25 puntos, y que asegurara que los países pudieran realizar reducciones arancelarias de acuerdo a sus niveles de desarrollo, respetando al mismo tiempo el principio de reciprocidad menos que plena. Más aún, el grupo de sindicatos planteó firmemente su reclamo de mayores flexibilidades, incluyendo el pedido de que las flexibilidades puedan cambiarse en el tiempo, en función de las necesidades de desarrollo específicas.

En junio, la asamblea del Consejo General de la CSI en Bruselas (20 al 22 de junio) aprobó una resolución sobre el NAMA. Esta resolución pide que los países en desarrollo no sean presionados a hacer concesiones

[1] Sindicatos de Argentina, Brasil, Venezuela, Egipto, Túnez, Namibia, Sudáfrica, India, Indonesia y Filipinas.

en el NAMA a cambio de beneficios en la agricultura o reducciones arancelarias que afectarán negativamente sus economías, empleo y desarrollo industrial futuro. También exige que se amplíen sustancialmente las flexibilidades del párrafo 8 en NAMA, de modo de permitir tanto la exención de ciertas líneas arancelarias como menores recortes arancelarios en otras líneas arancelarias, y que los países puedan hacer cambios en sus opciones de flexibilidades con el tiempo sobre la base de sus necesidades de desarrollo industrial futuras. La resolución también llama a un profundo análisis *ex ante* por parte de la OMC y la OIT acerca de las consecuencias de la liberalización comercial propuesta en la Ronda de Doha para el nivel de trabajo decente. Finalmente, llama al secretariado de la CSI y sus afiliadas así como a las organizaciones sindicales regionales a aumentar la acción y el *lobby* sobre el NAMA en apoyo de las afiliadas de países en desarrollo y los sindicatos del NAMA 11.

En julio de 2007, se emitió el texto borrador sobre modalidades relativas al NAMA. En respuesta a este texto, el grupo de sindicatos del NAMA 11 preparó otra declaración. La declaración criticaba el borrador de modalidades por proponer sólo un rango acotado de coeficientes muy bajos (entre 19 y 23) para los países en desarrollo, que no respeta el principio de reciprocidad menos que plena y tampoco respeta una diferencia de 25 puntos entre el coeficiente para países desarrollados y aquél para países en desarrollo (mientras que se propuso un coeficiente de 8-9 para países desarrollados sin ninguna flexibilidad). Las simulaciones realizadas por la CSI mostraron que los coeficientes propuestos en las modalidades ocasionarían cortes en tasas aplicadas en una cantidad de sectores en un número importante de países en desarrollo. Al mismo tiempo, tales coeficientes harían un recorte profundo en los aranceles consolidados de los países que conduciría a reducciones del 60%, lo cual ocasionaría nuevos aranceles consolidados de entre 12% y 14% para la mayoría de los países, nivel considerado muy bajo como base para la industrialización. Los sindicatos del NAMA 11 enviaron una carta (así como la declaración de los sindicatos latinoamericanos) a los gobiernos del NAMA 11. La carta también se envió a todas las misiones con asiento en Ginebra, al Presidente de las negociaciones sobre el NAMA y a la prensa. Al mismo tiempo, los sindicatos del NAMA 11 enviaron la carta a sus delegados sindicales ubicados en la capital y a la prensa local. El mensaje central de la carta era apelar a los gobiernos para que no aceptaran el borrador de modalidades como base para negociaciones ulteriores, dado que los coeficientes y las flexibilidades propuestos eran sumamente bajos y no reflejaban para nada la postura de los sindicatos del NAMA 11. Además, las modalidades del borrador no daban lugar a negociaciones posteriores y, por lo tanto, podían ser consideradas casi como modalidades definitivas, mientras que en Agricultura quedaban muchas cuestiones por negociar. Nuevamente, los sindicatos del NAMA 11 llamaron al grupo NAMA 11 a adoptar una posición fuerte y unida.

Después del receso de verano, cuando se hizo evidente que el texto sobre el NAMA no serviría como base para negociaciones ulteriores, el grupo de sindicatos preparó una carta para expresar agradecimiento por oponer resistencia a un texto sobre el NAMA desequilibrado. Durante este período, el grupo NAMA 11 recibió muchas presiones de los países desarrollados, el presidente del NAMA, el Director General Pascal Lamy, y otros países en desarrollo, para que aceptara el texto como base para negociaciones futuras. En diversas ocasiones se advirtió al grupo que se culparía al NAMA 11 si las negociaciones permanecían en punto muerto a causa de la oposición al texto sobre el NAMA.

Durante el otoño, tuvieron lugar los preparativos para las reuniones de presión del grupo de sindicatos del NAMA 11 en Ginebra. No obstante, a causa de la falta de avance en las negociaciones sobre el NAMA, esas reuniones se pospusieron.

Sin embargo, el grupo inició acciones en respuesta a las presentaciones de algunos países desarrollados ante la OMC en diciembre de 2007. Estas presentaciones señalaban que los coeficientes presentados en el texto de julio eran consideraban equilibrados. No provocarían reducciones de los aranceles aplicados y cumplirían el principio de reciprocidad menos que plena. También indicaban que no se podían extender más flexibilidades a los países en desarrollo más allá de las que ya estaban sobre la mesa. Una comunicación de Estados Unidos y la Unión Europea fue incluso más lejos y propuso reducir las flexibilidades todavía más allá de aquellas contenidas en el borrador de modalidades de julio. El grupo de sindicatos del NAMA 11 reaccionó con una declaración que subrayaba la importancia de las flexibilidades para los países en desarrollo y la necesidad urgente de permitir más flexibilidades en lugar de menos. La declaración también abogaba por la posibilidad de cambiar las flexibilidades con el tiempo, en caso de que las necesidades de desarrollo industrial requirieran tales modificaciones. Esta declaración, nuevamente, fue ampliamente difundida.

El 8 de febrero, el Presidente de las negociaciones del NAMA presentó un nuevo texto borrador de modalidades. Este texto proponía nuevamente un rango de coeficientes para los países en desarrollo de entre 19 y 23. En esta ocasión, los porcentajes de las flexibilidades se dejaron abiertos en el texto, pero podían ser ajustados tanto hacia arriba como hacia abajo. Frente a este borrador de modalidades, el grupo de sindicatos del NAMA 11 preparó una respuesta en la cual rechaza el rango de coeficientes propuesto para los países en desarrollo. A pesar de la oposición a estos coeficientes por parte de los gobiernos del NAMA 11 en julio de 2007, el Presidente continuó incluyendo este rango en el texto. El grupo de sindicatos del NAMA 11 consideró que este rango afectaría seriamente el empleo y el desarrollo industrial en sus países y, por lo tanto, no debería constituir la base para negociaciones futuras. Con respecto a las flexibilidades, los sindicatos recibieron de buen grado el hecho de que éstas todavía eran tema de discusión, pero instaron a los miembros a aumentar las flexibilidades mucho más que antes. El grupo de sindicatos también hizo un llamamiento a los países miembros del NAMA 11 a mantener el grupo NAMA 11 unido.

En marzo de 2008, unos catorce representantes de las organizaciones sindicales del NAMA 11 y de sindicatos latinoamericanos realizaron reuniones de presión en Ginebra. El programa incluyó reuniones con los negociadores del NAMA 11, los negociadores latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos, el Presidente de las negociaciones del NAMA, Embajador Stephenson, y la prensa.

En el mes de julio, el Presidente presentó un nuevo texto de modalidades para el NAMA (TN/MA/W/103/Rev.2) elaborado sobre la base de los anteriores, justo antes de la miniministerial organizada por el Director General Pascal Lamy. Alrededor de 35 ministros se hicieron presentes en Ginebra, incluidos ministros de la mayoría de los países del NAMA 11. Una vez más, se organizaron reuniones sindicales de *lobby* para contrarrestar la presión que recaía sobre los gobiernos presentes en las negociaciones. Sindicalistas de Brasil, Argentina, Filipinas e India se reunieron en Ginebra y prepararon una declaración conjunta con el grupo sindical latinoamericano. Se realizaron conferencias de prensa y diversas actividades de *lobby*.

Las negociaciones se llevaron a cabo principalmente en un grupo pequeño de siete países: Brasil, India, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón y Australia. Si bien las discusiones apenas avanzaron, a fines de la primera semana Lamy presentó un texto que contenía una cierta cantidad de temas para buscar el acuerdo con la premisa de "tómalo o déjalo". El G-7 aceptó prácticamente todo el conjunto de temas, excepto el mecanismo de salvaguardia especial en Agricultura. Algunos también expresaron su reticencia respecto de las negociaciones

sectoriales y la cláusula anticoncentración en el ámbito del NAMA. Sin embargo, India, Brasil y China aceptaron los números correspondientes a los coeficientes y las flexibilidades en el NAMA para los países en desarrollo. La propuesta (véase también JOB(08)/96) incluía tres posibilidades: un coeficiente de 20, con flexibilidades de 6,5% ó 14%; un coeficiente de 22 con flexibilidades de 5% ó 10%; o un coeficiente de 25 sin flexibilidades. Estos coeficientes, al igual que los anteriores, redundarían en altas reducciones arancelarias y pérdidas de empleo, no reflejarían el principio de reciprocidad menos que plena y socavarían la industrialización. Estas propuestas no reflejan ni la posición del NAMA 11 ni la postura de los sindicatos del NAMA 11. Más aún, las flexibilidades que se ofrecieron permanecieron a un nivel demasiado bajo, a pesar de haber sufrido un leve aumento.

Sin embargo, la aceptación de la sección del texto de Lamy relativa al NAMA por parte de India, China y Brasil tuvo serias consecuencias para la posición del NAMA 11. La separación de estos países de la postura conjunta, sin consulta previa, no fue muy bien recibida y generó además una gran desilusión entre los sindicatos. Los miembros del NAMA 11 que no pertenecen al *G-7* se dividieron todavía más. La mayoría de ellos decidieron aceptar los rangos de coeficientes y flexibilidades propuestos ya que no querían ser vistos como "rompeacuerdos", como Filipinas, Indonesia, Túnez y Egipto. Venezuela optó por la condición de Economía Pequeña y Vulnerable, dada su dependencia del petróleo. Sólo Sudáfrica y Argentina se opusieron realmente al texto de Lamy y no pudieron aceptar los coeficientes y las flexibilidades propuestos.

El grupo de sindicatos del NAMA 11 también se encontró en una posición difícil, ya que un motivo importante para establecer el grupo había sido respaldar y presionar a los gobiernos del NAMA 11 para que asumieran una posición sólida respecto del NAMA. Los sindicatos del NAMA 11 continuaron intentando modificar las posturas de los gobiernos y CUT Brasil comenzó a analizar los impactos sobre el empleo con el gobierno, basándose en la posición de Brasil en el *G-7*.

Otra situación que se produjo en la miniministerial fue la intervención de algunos sindicatos sectoriales europeos (metalmecánicos, con el apoyo de los textiles y los trabajadores de la química y la minería) en apoyo del pedido de la Comisión Europea de abrir los mercados en los países en desarrollo. Esta posición era contraria a la resolución del Consejo General de la CSI que respaldaba a los sindicatos del NAMA 11 y de los países en desarrollo en su oposición a los pedidos injustos de NAMA de parte de los países desarrollados. Por lo tanto, los reclamos de los sindicatos europeos sorprendieron mucho. Los sindicatos del NAMA 11 sintieron que habría sido útil discutir el tema antes de que las organizaciones europeas asumieran esa postura y les costaba entender por qué lo habían hecho. Dado que las propuestas relativas al NAMA no revisten interés para los países en desarrollo (recortes arancelarios demasiado altos que llevan al desempleo y la desindustrialización) ni para los sindicatos de los países desarrollados (pérdida de puestos de trabajo en Europa en algunos sectores sin ninguna flexibilidad), habría sido mucho más lógico unir fuerzas y apoyarse mutuamente en la oposición a las actuales propuestas relativas al NAMA. En cambio, los sindicatos del NAMA 11 sintieron una clara falta de apoyo de parte de sus colegas europeos, lo cual puso en duda la solidaridad sindical internacional.

A partir de septiembre, el NAMA 11 se reagrupó pero centró su atención en una variedad de otros temas relativos al NAMA en torno a los cuales se podía lograr un consenso. Éstos eran las negociaciones sectoriales y la cláusula anticoncentración. La posición del NAMA 11 plantea la participación no obligatoria en las negociaciones sectoriales, como se señala en la Declaración Ministerial de Hong Kong de 2005. A su vez, esta posición es apoyada por los sindicatos del NAMA 11, dado que las negociaciones sectoriales apuntan a eliminar aranceles en los

diferentes sectores que fueron seleccionados para este enfoque y que podrían tener un impacto muy negativo sobre el empleo en esos sectores en los países del NAMA 11.

En diciembre de 2008, el nuevo presidente de las negociaciones del NAMA, Luzius Wasescha, presentó un texto sobre modalidades revisado (TN/MA/W/103/Rev.3), basado en los textos anteriores y con propuestas para los coeficientes y las flexibilidades que reflejaban el texto de julio de Lamy. Se está negociando un tratamiento diferencial para Sudáfrica, Argentina y Venezuela.

Sudáfrica y Argentina continuaron negociando en forma bilateral con varios miembros de la OMC los coeficientes y las flexibilidades que les aplicarían. No pueden aceptar los rangos de coeficientes para los países en desarrollo y manifestaron la necesidad de tener coeficientes más elevados y más flexibilidades. Los sindicatos en estos dos países continúan apoyando a sus gobiernos sobre esta base. No se han obtenido resultados definitivos aún, si bien las negociaciones de Sudáfrica parecen estar más avanzadas que las de Argentina.

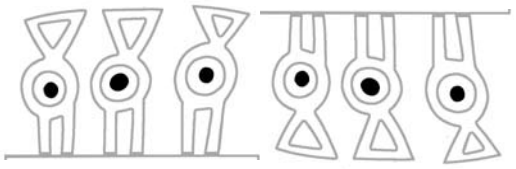
Las actividades en el grupo de sindicatos del NAMA 11 no sólo se llevaron a cabo en el ámbito internacional. Muchos de los sindicatos participantes también han continuado con una labor a nivel nacional, a través de reuniones con sus respectivos ministerios de comercio, trabajo con la prensa, desarrollo de capacidades e investigación. En esta publicación se presentan diversos ejemplos de las actividades sindicales individuales realizadas a nivel nacional.

El trabajo en el grupo de sindicatos del NAMA 11 obtuvo el apoyo adicional de la FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas), que tiene un gran interés en las negociaciones sobre el NAMA dados los impactos de éste sobre el empleo en su sector. En ese sentido, en 2008 el Observatorio Social de Brasil llevó a cabo un estudio sobre los impactos de las negociaciones relativas al NAMA en el empleo en el sector metalúrgico .

Los principales resultados del trabajo del grupo de sindicatos del NAMA 11 hasta ahora son los siguientes:

- El trabajo sobre el NAMA entre distintos sindicatos del NAMA 11 de distintas partes del mundo ha creado un grupo fuerte, con un clima positivo y un sentimiento de solidaridad.
- El trabajo ha demostrado que el *lobby* puede ser eficaz, que juntos es posible mantenerse fuertes y tener un impacto.
- La eficacia de las actividades depende de una fuerte coordinación, el acceso continuo a la información e intervenciones en el momento justo.
- Las intervenciones a nivel tanto nacional como internacional son importantes y complementarias.
- La eficacia de las intervenciones en el orden nacional depende de la fortaleza de los sindicatos, la regularidad de la participación, los canales de participación y la capacidad de los sindicatos en relación con el comercio.
- Las relaciones con la prensa son importantes. El grupo ahora es considerado una figura importante en las negociaciones sobre el NAMA que tiene influencia en las posiciones y la unidad del NAMA 11 y, por lo tanto, en el resto de las negociaciones.
- Ha habido buena cooperación con el grupo sindical latinoamericano respecto de acciones específicas y ambos grupos se complementan y refuerzan entre sí.
- El trabajo ha demostrado que los sindicatos de los países en desarrollo pueden mantenerse fuertes juntos, que pueden marcar una diferencia, pero ello requiere compromiso.

No está claro cuán activo continuará siendo el grupo de sindicatos en 2009. Ante la probable desaceleración de las negociaciones durante la primera mitad de 2009, es posible que el trabajo del grupo también se reduzca, fundamentalmente, a una labor de monitoreo de las negociaciones. No obstante, el grupo ha demostrado una sólida capacidad para movilizarse con rapidez en los momentos críticos y continuará haciéndolo en el futuro.



TRABAJO SEGURO PARA UN FUTURO SEGURO

Carla Coletti, Directora de Relaciones Internacionales



La Federación Internacional del Metal, FITIM, prepara su 32° Congreso en medio de una dramática crisis cuyas consecuencias a largo plazo sobre la industria manufacturera son difíciles de estimar.

Desde un principio ha quedado claro que el impacto sobre el empleo, los salarios y las condiciones de trabajo será gravísimo, tanto en los países grandes productores industriales como en los de industrialización más reciente. Sin embargo, en el momento en que se escriben estos apuntes, aún no están claras las repercusiones a más largo plazo. En especial, nos preguntamos cuáles serán las consecuencias sobre las perspectivas de desarrollo de los países emergentes, sobre los desequilibrios regionales internos en cada país, la distribución de la riqueza, los derechos fundamentales de ciudadanía y el acceso a la sanidad, a la educación, al agua y a la comida.

Otra pregunta sin responder es la que se refiere a los posibles desarrollos de la liberalización del comercio. Este tema ha sido planteado por algunos como simple recordatorio de la urgencia de cerrar positivamente la negociación en la OMC a fin de evitar una deriva proteccionista. Otros, en cambio, han liquidado esta recomendación como un hueco llamamiento ritual. Hemos oído a expertos de la UNCTAD manifestar que, ante la crisis, preocuparse por la Ronda de Doha sería como quitar el polvo de los libros para limitar los daños causados por un tsunami.

Independientemente de lo que se opine, es indudable que la crisis ha colocado con fuerza la cuestión del empleo en el orden del día. La FITIM, junto con otras organizaciones sindicales internacionales y nacionales, ya ha indicado que el empleo es un tema clave y debe afrontarse también, y en especial, en el marco de las negociaciones multilaterales y bilaterales de apertura de los mercados.

Comercio y empleo

A lo largo del pasado año ha habido varios intentos, todos ellos fracasados, de llevar a buen puerto la negociación OMC, la llamada Ronda de Doha de Desarrollo. Se había intentado llegar a un acuerdo de compromiso, según el cual los países emergentes aceptaban abrir sus mercados de forma significativa a los productos industriales europeos y norteamericanos. Los sindicatos de Sudáfrica, Argentina, Brasil e India habían repetidamente alertado sobre las fuertes repercusiones previsibles sobre el

desarrollo y el empleo en esos países, no sólo en cuanto al número sino también a la calidad de los puestos de trabajo.

Ese posible compromiso fue el resultado de una estrategia agresiva de los países más industrializados, tendiente a conseguir un mayor acceso a los mercados de los países emergentes y en vías de desarrollo. A este fin, las empresas multinacionales no habían dejado de presionar, amenazando con el arma de la deslocalización en nombre de la competitividad, con el evidente interés de enfrentar a los trabajadores y trabajadoras de los países emergentes con los de los países más industrializados. Indudablemente, se trata de una táctica patronal nada nueva, más aún, antigua como el mundo, pero que desgraciadamente a menudo funciona, hasta el punto de tener alguna acogida incluso en el mundo sindical.

La postura asumida por la Confederación Sindical Internacional ha sido inequívoca, con la clara petición a los países industrializados para que asuman sus responsabilidades a fin de contribuir a una mínima equidad en el sistema comercial mundial.

En repetidas ocasiones la CSI había denunciado los riesgos para el empleo y para las perspectivas industriales en los países en vías de desarrollo. Había pedido, además, que los países del Norte presionaran para conseguir reducciones arancelarias menos drásticas, obligando de tal forma a los países emergentes a sacrificios menos gravosos a cambio de concesiones mínimas sobre la protección a la agricultura en los países más desarrollados.

En realidad no sorprende que la negociación OMC no haya tenido éxito hasta ahora. El problema clave, de hecho, no estriba en un punto porcentual arriba o abajo en el cálculo de los coeficientes de reducción arancelaria. Y es que el sistema multilateral está demostrando ser inadecuado para hacer frente a los auténticos desafíos de la globalización. Es indudable que ésta ha creado nueva riqueza, pero también nueva pobreza, disparidades más profundas, injusticias dramáticas y una creciente desigualdad, tanto en los países ricos como en los más pobres.

A la base de todo se halla la obsesión por el libre mercado, la competencia a la baja, el recorte de los costes y los derechos, la desregulación salvaje, la ilusión del enriquecimiento rápido y de los beneficios garantizados por el mercado virtual de las finanzas.

La primera y fundamental victima de todo ello es el trabajo. El trabajo ha dejado de ser el valor básico de la sociedad. Ya no es considerado un objetivo ni el instrumento fundamental para el desarrollo. El trabajo ya no tiene seguridad, ni la ofrece. El trabajo de calidad se destruye y puede ser substituido por trabajo precario, sin reglas y sin ninguna consideración para el medio ambiente y la salud.

La crisis ha puesto en evidencia, de forma brutal, una realidad que los sindicatos, sobre todo en los sectores históricamente más organizados como el metal, han ido denunciado desde hace ya mucho tiempo: la precarización del trabajo.

La relación entre empleo y desarrollo es el gran desafío que los gobiernos miembros de la OMC no tienen el valor de afrontar, y es la razón fundamental del fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha. La FITIM ha estado alertando a los negociadores sobre la necesidad de establecer reglas democráticamente acordadas entre los países a fin de garantizar que un comercio más libre repercuta en beneficio de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, para reducir la pobreza, las desigualdades y promover el respeto de los derechos laborales fundamentales. Tanto los gobiernos de los países miembros de la OMC como la organización misma deben asumir la responsabilidad de una valoración del impacto social de los acuerdos comerciales. Lo mismo vale, lógicamente, para las instituciones financieras internacionales.

La voz de la FITIM ha sido una de las primeras en levantarse para denunciar esta debilidad del sistema multilateral, de la OMC, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Desde hace años, los

metalúrgicos están trabajando en el análisis y el estudio –tanto cuantitativo como cualitativo- del impacto que tiene la liberalización del comercio sobre el empleo. Los gobiernos no pueden limitarse a creer ciegamente en los efectos benéficos del comercio. Tienen el deber de estimar, de forma creíble, los efectos esperados antes de cerrar acuerdos comerciales y de inversión, tanto a nivel multilateral como bilateral. De la misma manera, durante años hemos venido denunciando –sin que nadie nos escuchara- la ausencia de cualquier consideración acerca del impacto sobre el empleo en las políticas de lucha a la pobreza del Banco y del Fondo Monetario.

Si hace algunos años la FITIM fue una de las pocas organizaciones en denunciar sistemáticamente cómo el sistema multilateral en su conjunto infravaloraba gravemente las repercusiones sobre el empleo, esta preocupación ha ido creciendo a medida que se deterioraban las condiciones del trabajo, tanto en los países ricos como en los más pobres, aunque, como es obvio, con consecuencias distintas en unos y otros.

Ya lo habíamos dicho

La precarización del trabajo y la relación entre empleo y desarrollo serán cada vez más el banco de pruebas para medir las políticas internacionales. Ello estaba claro desde hace tiempo, y desgraciadamente la crisis de los últimos meses lo ha confirmado indiscutiblemente. No sorprende que con motivo de recientes encuentros entre los dirigentes del movimiento sindical internacional y los máximos exponentes de las instituciones financieras internacionales, éstos no hayan escatimado generosas declaraciones de comprensión no sólo de las dificultades sino incluso de la "rabia" de los trabajadores. ¿Y entonces qué? La pregunta sale espontánea: ¿por qué no lo pensasteis cuando –hace tan solo unos meses- seguíais repitiendo una y otra vez vuestro mantra, ensalzando el libre mercado y la desregulación del trabajo? ¿Por qué esta obsesión? ¿Quizá porque incluso entre los gobiernos más democráticos son muchos los que, de hecho, escuchan más a las sirenas del capital transnacional que a la voz de sus ciudadanos y trabajadores?

En efecto, es difícil resistir la tentación de decir «nosotros ya lo habíamos dicho». Porque es cierto, lo habíamos dicho.

Hoy, en plena crisis causada por un mercado financiero sin reglas y por la triunfante ideología de la flexibilidad y la desregulación, asistimos a repentinas conversiones a la "transparencia", al "papel del Estado", a la "necesaria reglamentación de los mercados financieros". Estos llamamientos, sin embargo, parecen rituales huecos y aún no se ve una precisa y concreta voluntad de afrontar los problemas de raíz, con valor. Esto exigiría admitir los graves errores cometidos y renegar de décadas de destrucción social y medioambiental.

En lo inmediato es indudable que es necesario tomar una serie de medidas urgentes que puedan evitar el colapso de las economías nacionales, con consecuencias trágicas para las familias trabajadoras. Un ejemplo para todos es la situación de la industria del automóvil, en todos los países. Sin embargo, más allá de las acciones inmediatas para evitar millones de parados, especialmente entre los trabajadores y trabajadoras con trabajos precarios, es necesario mirar más allá y reconocer las responsabilidades y las causas que han originado la crisis.

Ya lo habíamos dicho.

En un documento aprobado por su Comité Central en 2003 (*), la FITIM señalaba *"estrategias para una globalización alternativa", con el objetivo de "apoyar acciones concretas para alternativas económicas que rechacen la globalización y sus efectos negativos para los trabajadores.....alternativas basadas en los siguientes cuatro pilares de un programa económico: creación de empleo y poder adquisitivo; reglamentación de los movimientos de capitales, incluida una tasa Tobin; anulación de la deuda, y reforma de la OMC y de las instituciones financieras internacionales".* Sencillo, ¿no?

Y en efecto lo habíamos dicho.

"El principio rector de la globalización que presenciamos es que simplemente hay que desreglamentar y globalizar los mercados y

permitir que el capital se desplace con mayor libertad y lo más posible para obtener consecuencias benéficas. A este respecto..... hay pruebas clarísimas de que no se han conseguido los prometidos beneficios, y que en muchos casos los efectos han sido adversos"

¿Qué objetivos alternativos? *"....el crecimiento y el desarrollo equitativo y sostenible. El crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo económico. Ni el crecimiento ni el desarrollo son necesariamente equitativos o sostenibles, como lo muestran los resultados de la globalización actual"* a menos que puedan *"proporcionar suficiente trabajo decente para todos....en la metalurgia....como en el sector público....y en la agricultura"*. Es indispensable que la evolución tecnológica no quede en manos de los incentivos del mercado bajo la influencia de las empresas, a fin de garantizar que las tecnologías sean ecológicamente sostenibles y contribuyan a los objetivos de desarrollo.

A partir de enero de 2009 hemos empezado a escuchar afirmaciones de este tipo, incluso en televisión en las campañas publicitarias de los productos más diversos. De forma parecida, en lo discursos de los líderes nacionales oímos ahora indicar una serie de objetivos que nosotros, como otros muchos, habíamos apoyado desde hace tiempo sin que nadie nos escuchara.

El ya citado documento estratégico de la FITIM daba protagonismo, entre los objetivos para una reorientación de la globalización, a la creación de empleo y al poder adquisitivo: *"Hay que establecer un plan de estímulo global que tenga como principal objetivo político el pleno empleo. Es preciso invertir la actual presión para políticas económicas restrictivas"* a favor de *"políticas fiscales, monetarias e industriales que generen empleos decentes para todos, que protejan el empleo de calidad y contribuyan a él, y que impulsen ampliamente el poder adquisitivo"*.

Y, por último, *"es preciso crear una nueva arquitectura financiera internacional para hacer frente a la inestabilidad causada por la liberalización de los mercados de capitales nacionales e internacionales"*.

Lo habíamos dicho y, sinceramente, no era demasiado difícil ver los riesgos que nos acechaban, especialmente tras la crisis asiática de pocos años atrás. Pero no nos vale con decir que teníamos razón. El problema, de hecho, es que no hemos sido lo bastante fuertes como para hacer valer la voz de los trabajadores.

Hoy, por tanto, frente a la crisis más espantosa que nuestra generación haya conocido nunca, debemos ser capaces de aumentar nuestro nivel de unidad y solidaridad, en un momento en el que el miedo y la incertidumbre sobre el futuro nos lo ponen especialmente difícil. El desafío fundamental para el movimiento sindical frente a la crisis es precisamente el de la defensa del trabajo para todos.

Empleo de calidad para todos

Con la globalización de la producción y de los mercados de productos y capitales, el trabajo ha perdido su protagonismo y, además, se ha convertido en la principal contradicción que el movimiento sindical debe afrontar**.** La escasez de puestos de trabajo es hoy donde se mide la solidaridad, igual e incluso más que en otros momentos de la historia de la industrialización. La capacidad de unión entre los trabajadores y trabajadoras fijos y precarios, los de los países más industrializados y de los emergentes y en vías de desarrollo, y entre los de distintas generaciones, marcará el futuro del movimiento sindical y, probablemente, también la salida de la crisis.

No es suficiente repetirnos que "ya lo habíamos dicho". Debemos trabajar para imponer una agenda de trabajo concreta, porque la clave para la solución de la crisis es la creación de empleo sostenible.

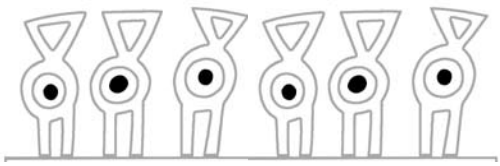
El Secretario General de la FITIM, Marcello Malentacchi, recientemente (**) subrayó que *"la medida del éxito de las políticas que se adoptan hoy está en las iniciativas capaces de generar empleo permanente y promover la redistribución de la riqueza, y no en volver a la volatilidad de los mercados y a la carrera de los beneficios a corto plazo. La actual crisis*

(*) "Estrategias para una globalización alternativa", Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, Ciudad del Cabo, diciembre de 2003.
(**) IMF News article, 28 de enero de 2009, www.imfmetal.org

deberá ser la señal de alarma para replantear nuestro modelo económico y social. Se debe reformar la agenda de la organización económica y social a fin da dar prioridad a una mayor seguridad para trabajadoras y trabajadores y a una dimensión de humanidad y de ética de la solidaridad. Es escandaloso que hayan sido suficientes un par de semanas para que los gobiernos de la parte rica del mundo reunieran miles de millones de dólares para salvar a los bancos, a las aseguradoras y a otras instituciones financieras que se encontraban al borde de la bancarrota, cuando en cambio sabemos que hace diez años Naciones Unidas pidió una fracción de esa suma para reducir la pobreza que azota al mundo pobre, y prácticamente nadie movió un dedo".

La FITIM cumplirá con la parte que le corresponde en el esfuerzo colectivo que el movimiento sindical debe desplegar para que la salida de la crisis se base en la búsqueda de justicia y equidad. Instrumento fundamental para este fin es la negociación colectiva que, junto con la libertad de organización sindical, debe constituir los cimientos de una nueva estructura económica y social que nos saque de la crisis y garantice que no volvamos nunca más a ser rehenes del mercado.

La prioridad estratégica que ha acompañado el debate de los metalúrgicos en todo el mundo, de cara al 32° Congreso de la FITIM, ha sido la de luchar contra el trabajo precario en todas sus formas. El eslogan elegido por el Congreso es: "Trabajo seguro para un futuro seguro". Puede parecer algo obvio, incluso banal, para un congreso sindical. Pero hoy, éste es el auténtico desafío que debemos afrontar, porque el futuro del movimiento sindical estará marcado por su capacidad de asegurar la protección de los más vulnerables y la solidaridad en la defensa del trabajo para todos.



UN BALANCE DE CASI SIETE AÑOS DE LA RONDA DE DOHA

Kjeld Jakobsen, ex-secretario internacional de la CUT Brasil, ex-secretario internacional de la Alcaldia de São Paulo y actualmente consultor en relaciones internacionales

La Ronda de Doha es la novena ronda de negociaciones comerciales internacionales si consideramos las que se realizaron desde 1947 en el marco del antiguo GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y la primera bajo el auspicio de la OMC (Organización Mundial del Comercio), organismo multilateral que lo sucedió a partir de 1995.

La ronda se inauguró en la IV Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en la ciudad de Doha, Emirato de Qatar, en noviembre de 2001. A pesar de que no había consenso entre sus miembros sobre la conveniencia de iniciar una nueva ronda de negociaciones, la misma se aprobó, principalmente, en función de la insistencia y presión política de los países industrializados, representados por Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, grupo conocido como el "Cuadrilátero". Estos países estaban particularmente interesados en profundizar los acuerdos de liberalización de tarifas industriales, servicios, inversiones y compras gubernamentales.

Los gobiernos de estos países recibieron el apoyo de Brasil, Argentina, Australia y otros países interesados en negociar un nuevo acuerdo en el área de comercio de bienes agrícolas, dado que el resultado obtenido en la Ronda Uruguay del GATT, cuando se negoció este tema por primera vez, prácticamente no modificó el proteccionismo de los países desarrollados en relación con la agricultura. La resistencia de los demás países miembros a iniciar una nueva ronda cedió la mañana del 14 de noviembre, casi un día después de la fecha prevista para la finalización de la Conferencia, cuando varias delegaciones ya habían partido, gracias a una maniobra del presidente de la mesa de trabajo que simplemente leyó una resolución y la consideró aprobada por el plenario.

De esta forma, al Consejo General de la OMC se le encargó organizar los grupos de trabajo de los técnicos de la sede de la entidad en Ginebra, bajo la coordinación del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) para iniciar las negociaciones so-

bre 19 temas agrupados en seis áreas de actuación. Entre los temas se destacaban agricultura, servicios, acceso a mercados no agrícolas (NAMA), los llamados "Temas de Singapur" (inversiones, políticas de competencia, compras gubernamentales y facilitación del comercio), evaluación de la implementación de los acuerdos sobre los ADPIC (propiedad intelectual) y las MIC (inversiones), creación de grupos de trabajo sobre transferencia de tecnología, deuda y finanzas, y algunos temas nuevos como el comercio electrónico.

Además del comienzo de la nueva ronda, también denominada "Ronda del Desarrollo" prevista para concluir el 1° de febrero de 2005, la Conferencia aprobó una medida de flexibilidad importante en el acuerdo sobre los ADPIC que consistió en la posibilidad de soslayar las patentes para la fabricación de medicamentos genéricos para enfrentar enfermedades como el SIDA y el paludismo. Aún con este importante logro en la conferencia, iniciar la Ronda de Doha fue un gran error, pues no se resolvió una serie de asuntos pendientes de la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT, la economía de los países en desarrollo no se había recuperado aún de los efectos de la apertura económica de los años 1990 y la agenda comercial, una vez más, estuvo determinada por los intereses de los países industrializados.

La V Conferencia Ministerial se realizó en setiembre de 2003 en Cancún, México, de acuerdo con el cronograma previsto. Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión debido a la resistencia de los países industrializados a hacer concesiones en el tema Agricultura y debido a la oposición de la mayoría de los países en desarrollo a discutir los "Temas de Singapur" argumentando que muchos puntos aprobados en las conferencias anteriores no habían sido implementados aún y que no tenía sentido negociar nuevos temas antes de que esto ocurriera.

En esta Conferencia se inauguró también la actuación de una nueva coalición de países coordinada por Brasil, India, Argentina y Sudáfrica, denominada G-20 debido al número inicial de miembros. Su foco era la negociación de bienes agrícolas. Si bien no era la primera iniciativa para formar grupos de interés entre países miembros de la OMC, fue la primera vez que se articuló un grupo de países en desarrollo cuya mayoría era de gran tamaño, como los cuatro coordinadores además de China, Pakistán, Indonesia y Nigeria, entre otros. Otro factor interesante es que no todos son exportadores de bienes agrícolas. Muchos son, inclusive, importadores de alimentos y en varios de ellos, como en la India, la mayoría de la población vive en el campo, lo que exige políticas amplias para este sector, principalmente, en lo relativo a la protección de los intereses de los pequeños productores y de los trabajadores asalariados. Ahora bien, la eliminación de las distorsiones que caracterizan las políticas agrícolas de los países desarrollados unifica sus intereses.

El fracaso de la Conferencia de Cancún y la creación del G-20 dieron lugar a una reunión a mediados de 2004 entre los miembros del "Cuadrilátero", Brasil e India representando al G-20 y Australia representando al "Grupo de Cairns", que es otro grupo de interés sobre comercio agrícola más antiguo, del cual Brasil y otros miembros del G-20 también forman parte. En esa reunión nació una propuesta que el Consejo General de la OMC ratificó en agosto de 2004, reduciendo la agenda de las negociaciones a cinco temas: NAMA, agricultura, servicios, implementación del acuerdo sobre los ADPIC y facilitación del comercio. En la práctica esto significó reducir la negociación sustantiva a los dos primeros temas, pues la decisión sobre la liberalización del comercio de servicios por medio del GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) ya había sido tomada antes y lo que faltaba definir eran los sectores de servicios que cada país podría poner sobre la mesa para negociar. La implementación se refiere a algunos

aspectos del acuerdo sobre los ADPIC que aún no están definidos y la facilitación del comercio se relaciona con procedimientos aduaneros y otras medidas para desburocratizar y agilizar los procesos de exportación e importación.

Si bien la reducción de la agenda fue una victoria importante del G-20, porque fue la primera vez que los países en desarrollo consiguieron superar la hegemonía de los países industrializados sobre las negociaciones comerciales internacionales, la combinación de la negociación sobre NAMA, de interés para los países industrializados, y sobre Agricultura, de mayor interés para los países en desarrollo, fue un nuevo equívoco y creó una trampa para los países en desarrollo que cuentan con algún nivel de industrialización, como la Argentina, Sudáfrica y Brasil, entre otros.

Es que no es posible comparar y equiparar las ventajas de la liberalización de dos productos tan distintos. La "Teoría de las Ventajas Comparativas" sostiene que un país gana cuando hay liberalización comercial de un bien en cuya producción es más competitivo, aunque sea en compensación por la liberalización de otro producto con respecto al cual su competitividad sea menor, favoreciendo a otro país. Pero, como los dos están especializados en sus respectivos productos, el comercio de ambos tiende a crecer y los dos, teóricamente, ganan. Sin embargo, cuando uno de estos productos es industrial y el otro es agrícola, es muy arriesgado aceptar la competencia entre bienes industriales producidos nacionalmente y los importados solamente a cambio de aumentar la exportación de bienes agrícolas. Porque las pérdidas y ganancias en la industria son claras y derivan del arancel externo, de las reglas de excepción que la negociación comercial defina y de la gestión de la producción, mientras que las ganancias en la agricultura, aunque esté liberalizada, son inciertas y dependientes de muchos otros factores como el clima, la presencia o no de plagas, los precios internacionales, el acopio, la oferta y la demanda, entre otros.

Además, si se amplía el acceso a los mercados agrícolas de los países desarrollados esto presupone la ampliación de la producción agrícola en los países en desarrollo generando ganancias para los productores en un primero momento, pero esta ampliación de la oferta hará que los precios internacionales caigan en un segundo momento sin que los productores tengan control sobre ellos. Esto no debe ser tomado como un factor de desestímulo a la búsqueda de acceso de mercados, pero demuestra la complejidad de la relación entre costo de la importación de bienes industriales a cambio de la exportación de productos primarios, que, por otra parte, es una cuestión histórica en la relación económica y política entre los países de la periferia y los países centrales.

El Profesor Jagdish Bhagwati, liberal y ferviente defensor del libre comercio enseña que en las negociaciones comerciales de agenda ampliada como las actuales, no conviene mezclar los temas a negociar, pues en ese caso alguien perderá y, obviamente, será aquel que dependa del bien de menor gobernabilidad en cuanto a volúmenes de producción y precios. Por lo tanto, intercambiar ganancias en NAMA para los países industrializados por ganancias en la agricultura para los países en desarrollo, aunque tengan ventajas en el corto plazo, tenderá inmediatamente a producir pérdidas irrecuperables en la industria.

Estas pérdidas se refieren a la posibilidad de desarrollo y a la generación de empleos. Más del 60% de los empleos en los países en desarrollo se encuentran en la industria y los servicios, mientras que eventuales ganancias en la agricultura no generarían empleos en número suficiente para compensar aquellos que se pierdan en el sector industrial y tampoco serían empleos de igual calidad y remuneración.

El gobierno brasileño y otros argumentan, con razón, que, además de reducir las barreras arancelarias de bienes agrícolas de los países desarrollados, es necesario modificar la disciplina que actualmente rige su producción agrícola, como el uso de subsi-

dios internos que se pagan a los productores rurales para asegurar los precios y niveles de producción y de subsidios directos a su exportación. Estos subsidios, que representan aproximadamente US$ 1000 millones por día, generan una competencia desleal con los países productores de bienes agrícolas que no utilizan este mecanismo para ganar espacio en el mercado mundial.

Ahora bien, si la prohibición de subsidios a la producción industrial, así como de otros mecanismos de *dumping* comercial, forma parte de los principios del GATT, la OMC y los acuerdos de comercio en general, aceptada por todos desde el comienzo, ¿por qué este mismo principio no se aplica directamente a la producción de bienes agrícolas en lugar de ser parte de la agenda de negociaciones? La respuesta es simple. La liberalización comercial no es tan liberal como se dice, pues adoptar este principio en la industria era beneficioso para que los países desarrollados compitieran entre sí en pie de igualdad, pero no lo es cuando se trata de competir con países que tienen mayores ventajas competitivas que ellos en la agricultura.

Por lo tanto, la existencia de un "trade-off" entre un acuerdo en NAMA y un acuerdo en Agricultura será esencialmente política para prestigiar el sistema multilateral de comercio en lugar de un acuerdo comercial con buenos resultados para todos.

Entre la reunión del Consejo General de la OMC de agosto de 2004 y la VI Conferencia Ministerial en Hong-Kong en China en diciembre de 2005, las discusiones se dieron en torno a fórmulas para reducir aranceles en NAMA, fórmulas para reducir aranceles y subsidios en Agricultura y listas positivas de nuevos servicios a ofrecer para su liberalización.

La presión de los países industrializados por una fuerte reducción de los aranceles de bienes no agrícolas –NAMA– fue muy intensa, pues sus aranceles externos son, en promedio, mucho más bajos que los de los países en desarrollo, un 3% contra un 14% en promedio estimado. Su ambición es reducir la diferencia entre estos dos valores alrededor del 4% porque, principalmente, las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea quieren ampliar aún más sus exportaciones a los países en desarrollo de mercados mayores.

El mecanismo de reducción arancelaria negociada en rondas anteriores normalmente era lineal y se aplicaba sobre cada línea arancelaria consolidada en la OMC o sobre el promedio de las mismas. Brasil actualmente ha consolidado 98 sectores arancelarios no agrícolas en la OMC que componen un Arancel Externo Común en el Mercosur (AEC) de 8.822 líneas arancelarias. Es importante recordar que las variantes de cada producto significan líneas diferentes. Por ejemplo, en el caso de un tejido de algodón, cada color y textura serán tratados como bienes diferentes y, por lo tanto, se definirán como líneas arancelarias con valores específicos.

Los tipos consolidados en la OMC son los resultantes del proceso histórico de negociaciones comerciales para cada país. Sin embargo, en la práctica acaban por aplicar aranceles menores en función de realidades específicas como el Mercosur, en donde existe el AEC de los cuatro países en relación al resto del mundo cuyo promedio es menor que el promedio de los aranceles consolidados. En el caso de Brasil, su arancel promedio consolidado en la OMC es de 29,9%, el aplicado de 12,7% en promedio y el AEC medio es de 10,8%. La diferencia entre los dos últimos se debe a que existen excepciones para el AEC, pues el Mercosur es una Unión Aduanera Incompleta.

Por ejemplo, para el sector del calzado esto significa un tipo consolidado ante la OMC del 35% mientras que el AEC aplicado es de sólo el 19,6%. En el caso del sector automotor, los mismos índices son, respectivamente, 31,7% y 19,4%.

Mantener esta diferencia entre aranceles aplicados y consolidados, conocida en la jerga comercial como "agua", permite a los países en desarrollo elevar aranceles hasta el límite del porcentual consolidado en un

momento de amenaza competitiva inesperada. Si se aprueba la posición de los países desarrollados en cuanto a NAMA, esta posibilidad dejará de existir y se perderá otro mecanismo de manejo macroeconómico.

Antes de la conferencia ministerial de Hong-Kong, algunos países como Estados Unidos simplemente llegaron a proponer la reducción de todos los aranceles de bienes industriales al 8% en promedio hasta 2010 y a cero hasta 2015. Sin embargo, durante las discusiones surgió la propuesta de otra fórmula menos radical, aunque también perjudicial para los países en desarrollo, la llamada "fórmula suiza", que provocaría reducciones mayores en los aranceles más altos. Esta fórmula se contrapuso a la preferencia de los países en desarrollo por recortes lineales o medios que preservaran algún espacio entre los aranceles aplicados y los consolidados.

La fórmula suiza tiene menor impacto sobre los aranceles cuando su coeficiente es alto, pues en este caso las reducciones son menores, pero ocurre lo contrario cuando los coeficientes son bajos. Por ejemplo, un coeficiente 60 significa una reducción de un tercio en el tipo consolidado; el coeficiente 30, una reducción del 50%, y el coeficiente 15 representa una reducción de dos tercios. La fórmula que define las tarifas finales es *tl = A x to / A + to*, donde "to" es el arancel consolidado, "A" es el coeficiente a ser definido y "tl" es el arancel final. Veamos qué significaría el coeficiente 15 para el tipo consolidado de Brasil, que es del 29,9% en promedio: tl = 15 x 29,9 / 15 + 29,9 = 448,5 / 44,9 = 9,99.

En esta opción, el nuevo arancel consolidado promedio de 9,99% sería menor que el arancel medio aplicado por Brasil del 12,7% y que el AEC promedio del 10,8%, lo que significaría la perforación de 5.480 de líneas arancelarias, el 62% del total, lo que provocaría notables aperturas comerciales en varios sectores importantes para la economía de Brasil y, consecuentemente, para el Mercosur como el del calzado, el automotor, el químico y otros. Además del perjuicio de su desempeño económico, pondría en riesgo más de un millón de empleos directos en Brasil sólo en estos sectores.

La conferencia de Hong-Kong no llegó a ningún acuerdo específico sobre nuevos valores para aranceles y subsidios, y el texto resultante sólo definió parámetros para las negociaciones, principalmente, en NAMA y Agricultura. En el caso de NAMA, se acordó adoptar "una fórmula suiza" para definir la reducción de aranceles. Fue el tercer error del proceso porque en el caso más favorable a los países en desarrollo, la fórmula sólo disminuiría en el "agua". Pero la mayor probabilidad, aceptado el principio que encierra la fórmula suiza, sería la adopción de un coeficiente que redujera efectivamente el tipo aplicado, y es lo que se planteó en la mesa posteriormente.

La evolución de las negociaciones después de la Conferencia de Hong-Kong

El tratamiento de los temas en la ronda se realiza en grupos de trabajo específicos, en donde los respectivos presidentes ("Chairs") presentan textos de resolución que marcan el rumbo de las negociaciones y que evolucionan o no en dirección a un acuerdo según las propuestas de los países miembros y de la creatividad de los presidentes para transformar los diferentes deseos de los países miembros en propuestas viables.

Además de las reuniones de los grupos de trabajo, hay otros mecanismos de consulta y negociación. La instancia superior es la Conferencia Ministerial, pero para armar la arquitectura de las negociaciones y aprobar medidas se realizan diversas reuniones informales intermedias con participación más limitada de países miembros, como las miniministeriales y las "green rooms"[1], además de reuniones como la ya mencionada que provocó la reducción de la agenda en 2004 y otra realizada en 2008 en Londres entre Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil para sondear la posición brasileña sobre

[1] Reuniones "Green Room" son aquellas a las que se invita a participar sólo a los gobiernos considerados más influyentes. El nombre viene del color verde de la sala en la sede de la OMC en donde suelen realizarse. Uno de los factores que llevó a la Conferencia Ministerial de Seattle al fracaso en 1999 fue la gran cantidad de reuniones "Green Room" que excluían a la mayoría de los miembros de la OMC de las discusiones.

las nuevas posibilidades de flexibilidades en NAMA que mencionaremos más adelante.

Los textos inicialmente presentados por los presidentes de los grupos de NAMA y Agricultura no posibilitaron ningún consenso ni acuerdo a lo largo de 2006 y 2007, aún habiéndose realizado reuniones fuera de cronograma, como por ejemplo, la realizada después de la Cumbre del G-8 en Heiligendamm, Alemania, en junio de 2007. La arrogancia dispensada por los negociadores europeos y norteamericanos a los ministros de relaciones exteriores de Brasil y de la India en esta ocasión provocó que éstos se retiraran de la reunión antes de que terminara.

Hasta fines de 2008 la Ronda de Doha no llegó a una conclusión con resultados concretos, en particular, el equilibrio reivindicado por el gobierno brasileño y por el G 20 de reducción de aranceles en NAMA en un nivel inferior al propuesto por los países desarrollados y respetando el mandato de "Reciprocidad Menos que Plena"[2] aprobado en la Conferencia de Doha en 2001; reducción de subsidios agrícolas internos de los Estados Unidos al nivel aproximado de US$ 10.000 millones por año; eliminación significativa de los subsidios europeos a la exportación y reducción arancelaria de los productos agrícolas a un nivel proporcional a las reducciones que fueran a ser definidas en NAMA.

El año 2008 se inició con la presentación de un texto sobre NAMA con propuestas de reducciones arancelarias muy superiores a las tradicionalmente admitidas por el gobierno brasileño y por el grupo de países de industrialización relativa que forman parte del G-20, conocido como NAMA-11. Posteriormente, el "Chair" del Grupo de Negociación sobre NAMA presentó una nueva propuesta que preveía una fórmula suiza con coeficientes entre 19 y 23 con la posibilidad de excluir el 5% de las líneas arancelarias e importaciones, consideradas sensibles o vulnerables, de la aplicación de la fórmula, además de la reducción del 50% de la fórmula sobre otro 10% cuya aplicación fue después flexibilizada por el "Chair" por medio de varios agregados a la propuesta. A principios de diciembre de 2008 los textos de NAMA y Agricultura fueron revisados y presentados nuevamente incluyendo diversos aportes que surgieron durante la fracasada reunión de ministros en Ginebra en el mes de julio, pero no por eso fueron más convincentes.

Vamos a analizar numéricamente el significado de las propuestas surgidas desde comienzos de 2008 hasta la negociación ministerial de julio.

a) Evaluación de los coeficientes.

El coeficiente en discusión, aunque sin obtener consenso, propuso una variación entre 19 y 23 para los países en desarrollo y de 8 a 9 para los países desarrollados sobre la situación de las líneas arancelarias en noviembre de 2001. Si aplicamos la fórmula suiza sobre los aranceles medios de los países en desarrollo (14%) y los desarrollados (3%), las reducciones serán más significativas para los primeros. Si tomamos los coeficientes mayores, 23 y 9, tendremos:

tl1 = 23 x 14 / 23 + 14 = 322 / 37 = 8,7% (reducción media del 37,9%).
tl2 = 9 x 3 / 9 + 3 = 27 / 12 = 2,3% (reducción media del 23,3%).
Si utilizamos los coeficientes menores de 19 y ocho:
tl1 = 19 x 14 / 19 + 14 = 266 / 33 = 8,1% (reducción media del 42,1%).
tl2 = 8 x 3 / 8 + 3 = 24 / 11 = 2,2% (reducción media del 27,7%).

En el primer ejemplo, la diferencia entre las reducciones propuestas para los países en desarrollo y los países desarrollados es de 14,6 y en el segundo, de 14,4. Sin entrar a evaluar los valores de los coeficientes, pero considerando que el mandato de la Ronda de Doha es el de contribuir al desarrollo, los países desarrollados tendrían que conceder más por medio de la "Reciprocidad Menos que Plena". En ese sentido, los

[2] Este mandato determinaba que la Ronda de Doha debería privilegiar el desarrollo y conceder condiciones más favorables a los países en desarrollo.

miembros del NAMA-11 han argumentado que las reducciones son demasiado altas y que debería haber una diferencia mínima de 25 entre las reducciones de los dos grupos de países.

La aplicación de los coeficientes 19 y 23 significa reducciones arancelarias, respectivamente, del 60,9% y 56,5%, y provocaría los siguientes resultados sobre el tipo consolidado medio de Brasil del 29,9%:
tl19 = 19 x 29,9 / 19 + 29,9 = 568,1 / 48,9 = 11,7%
tl23 = 23 x 29,9 / 23 + 29,9 = 687,7 / 52,9 = 13%.

En este caso, el número de perforaciones del AEC variaría entre aproximadamente 3.500 y 5.000 con mayor impacto sobre las líneas arancelarias de calzado, sector automotor, muebles, textiles y vestimenta, material de transporte, entre otros.

b) Evaluación de las sensibilidades.

Como ya se ha mencionado, el texto presentado el 28 de febrero por el "Chair" propuso la exclusión de hasta un 5% de las líneas arancelarias y de las importaciones que cada país miembro considere sensibles a la competencia comercial, así como aplicar sólo el 50% de la fórmula de la reducción arancelaria sobre hasta un 10% de las líneas y comercio. Sin embargo, no se permitiría exceptuar capítulos arancelarios enteros. Estos números permitirían, en el caso de Brasil y demás países del Mercosur, exceptuar 441 líneas arancelarias y aplicar sólo el 50% de la fórmula sobre otras 882 líneas arancelarias, lo que significa que podría haber alguna excepción para un máximo de 1.323 líneas.

Además de ser poco en la actual situación de los países en desarrollo, también contradice el texto sobre Agricultura, donde no hay límites al número de productos sensibles. En particular en el caso de los países del Mercosur, hay un agravante que es el AEC, pues éste que define la relación comercial del bloque con el resto del mundo y difícilmente sus cuatro miembros adoptarían los mismos productos como sensibles. Por ejemplo, vamos a suponer que Argentina y Brasil quieran incluir líneas arancelarias del sector automotor como sensibles y Paraguay y Uruguay no. Estos dos pueden convertirse en la puerta de entrada a la importación de automóviles a Brasil y Argentina, pues adoptarán el nuevo arancel negociado en la OMC y como el arancel entre los cuatro países es cero, esto desviaría el comercio a los dos primeros.

Por lo tanto, para contemplar las sensibilidades que cada uno necesita considerar y sin causar perjuicios al conjunto del Mercosur, los actuales porcentajes de sensibilidades son bajos. Los gobiernos del Mercosur propusieron la adopción de un mínimo del 16% de exenciones para superar este problema, lo que permitiría mantener 1.412 líneas arancelarias como están.

c) Evaluación de los agregados del "Chair".

El "Chair" del grupo de negociaciones de NAMA introdujo algunas modificaciones y comentarios en el texto con el que el grupo venía trabajando, los que, por un lado, atendían a las diversas demandas de los países de menor desarrollo relativo y de otros que mantenían un número menor de tipos consolidados en la OMC y, por otro lado, abrieron posibilidades de modificaciones en relación a las sensibilidades y plazos de implementación que siempre son cuestiones importantes para los países en desarrollo en general.

Vamos a atenernos a las cuestiones que afectarían a este grupo de países. Sobre el tema sensibilidades, abrió ocho posibilidades diferentes que combinaban coeficientes para la fórmula con diferentes posibilidades para exceptuar productos sensibles de reducciones arancelarias o para que éstas fueran menores. El objetivo de esta iniciativa era provocar a los países del NAMA-11 a reducir sus objeciones a los números presentados hasta ese momento. Si bien ninguno de ellos estaba de acuerdo con ninguna de las propuestas o números, varios se dispusieron a trabajar con diferentes opciones. Entre éstas había tres que ofrecían mayor número de líneas arancelarias sensibles a cambio de

reducciones arancelarias más altas después de aplicada la fórmula suiza, había dos propuestas que relacionaban directamente el valor del coeficiente con el porcentaje de líneas beneficiadas por las flexibilidades, había otra opción que combinaba diferentes flexibilidades y estaba la opción ocho, que proponía una reducción arancelaria al estilo de la reducción de aranceles de bienes agrícolas de la Ronda Uruguay del GATT con reducción de los promedios y establecimiento de un techo arancelario.

La Argentina y Venezuela se dispusieron a analizar esta opción, aunque era considerada poco realista por los especialistas en el tema, porque contrariaba el espíritu de la fórmula suiza, ya aceptada por todos desde 2005. El gobierno indio no se pronunció sobre eventuales preferencias y manifestó que la iniciativa del "Chair" buscaba simplemente dividir el NAMA-11. El gobierno sudafricano declaró que ninguna de las opciones le interesaría dado que se encontraba en una posición muy incómoda en las negociaciones de NAMA, pues prácticamente no existía "agua" entre el promedio de su tipo consolidado y el promedio practicado. Cualquier reducción arancelaria tendría efectos inmediatos y, por lo tanto, sus esfuerzos se dirigían más a elevar los coeficientes de la fórmula que a lograr flexibilidades.

El gobierno brasileño demostró interés en analizar posibilidades en el marco de la Opción 2, en particular su segunda alternativa, con el objetivo de aprovechar esta concepción para presentar una contrapropuesta. La Opción 2 era una combinación de coeficientes con porcentuales de líneas arancelarias sensibles con total exclusión de reducciones y con disminución del 50% en las reducciones.

Esta alternativa no proponía flexibilidades si el coeficiente fuese 24. Pero proponía exclusión de las reducciones para el 10% de las líneas y reducción del 50% de la fórmula para el 5% de ellas en el caso del coeficiente 21 y exclusión y 50% para el 14 y el 7% de las líneas, respectivamente, en el caso de adoptar el coeficiente 19. Transformando esto en porcentuales de reducción y cantidad de líneas arancelarias exentas de reducción o con reducción del 50% de la fórmula tendríamos:

a) Coeficiente 24 significaría una reducción del 55,5% y generaría un nuevo tipo promedio consolidado del 13,3% provocando cerca de 3.000 perforaciones del AEC. En este caso no habría flexibilidad para exceptuar líneas arancelarias.
b) Coeficiente 21 significaría una reducción del 58,9% y generaría un nuevo tipo del 12,3% provocando, aproximadamente, 4.000 perforaciones del AEC, pero con la posibilidad de excluir 882 de ellas y reducir el daño en otros 441, en un total de 1.323 líneas preservadas de alguna manera.
c) Coeficiente 19 significaría una reducción del 60,9% y generaría un nuevo tipo promedio del 11,7% provocando un poco menos de 5.000 perforaciones del AEC, pero con la posibilidad de excluir 1.235 de ellas y reducir el daño en 618, lo que preservaría de alguna forma un total de 1.853 líneas.

A pesar de la variación entre la cantidad de perforaciones, la opción por el coeficiente mayor no excluiría a los sectores industriales mencionados anteriormente de los riesgos de ser sustituidos por productos importados, incluso porque la propuesta no permitía excluir sectores industriales enteros representados por los capítulos arancelarios consolidados.

Las flexibilidades previstas en el caso del coeficiente 19 se acercaban mucho a la cantidad reivindicada por el Mercosur; sin embargo, los problemas de origen de la negociación persistirían y serían principalmente las reducciones arancelarias profundas provocadas por la fórmula presentada y reiterada por el presidente del Grupo de Negociación sobre NAMA, en ese momento el canadiense Don Stephenson, reemplazado posteriormente por el suizo Luzius Wasescha.

La cuestión central que involucraba la negociación de coeficientes y flexibilidades fue bien explicitada oportunamente por el representante del gobierno sudafricano des-

pués de la presentación de las ocho opciones: "primero vamos a definir el nivel de ambición de liberalización (fórmula de reducciones arancelarias) y después las excepciones".

d) Evaluación de las negociaciones en Agricultura.

Desde el punto de vista de propuestas concretas en términos de números, poco presentó al comienzo el Grupo de Negociaciones sobre la Agricultura. Los principales puntos eran:

- reducción arancelaria, incluida la liberalización casi total de productos tropicales; productos sensibles; disciplina para subsidios internos y de exportación, y productos especiales vinculados a la seguridad alimentaria y a la agricultura familiar. El texto del Presidente del Grupo, el neozelandés Crawford Falconer, propuso algunos valores para la reducción arancelaria que, sin embargo, eran lineales y modestos en comparación con las propuestas presentadas en NAMA y aún así fueron fuertemente cuestionados por los países desarrollados.

Además se lanzó la hipótesis de adoptar cupos con aranceles menores para algunos productos, dependiendo de la capacidad de absorción de la competencia por parte de los países desarrollados. También se evaluaban posibles avances en la reducción arancelaria para productos tropicales, dado que éstos no competirían con la producción local en estos países.

No hubo una propuesta para limitar la exención de los productos considerados sensibles de reducciones arancelarias como ocurrió en las negociaciones de NAMA.

- redefinición del contenido del "compartimiento verde" y la reducción o limitación de la aplicación de los subsidios internos. La propuesta difícilmente irían más allá de definir techos por sector equivalentes al 50% de lo realizado hasta el momento, lo que en el caso de Estados Unidos significaría un subsidio máximo de US$ 25.00 por tonelada de soja y el fin de los subsidios al algodón. Es bueno recordar que esta situación del algodón deriva de la victoria de Brasil en un litigio en la OMC contra los subsidios internos que el gobierno norteamericano aplicaba a este producto, aunque el tema haya sido incluido en las negociaciones.
- disminución de los subsidios a la exportación, particularmente, de la Unión Europea. No hubo novedades prácticas.
- política específica para los productos especiales y aquellos vinculados a la agricultura familiar. Ha sido defendida por Brasil y la India, pero no tenía consenso entre todos los miembros del G-20 y de a poco fue abandonada en función de la prioridad gubernamental en relación con los demás temas.

e) Evaluación de los demás puntos

Tampoco hubo avances favorables a los países en desarrollo en este aspecto. La oferta de nuevos servicios beneficiaría más a los países desarrollados que están preparados para exportar servicios o instalar empresas para su explotación en terceros países. Los aspectos ligados a este sector que podrían beneficiar a los trabajadores de los países en desarrollo, como el libre acceso para prestar servicios legalmente en países desarrollados, la libre remesa de dinero de trabajadores migrantes hacia sus países de origen, entre otros, no fueron contemplados. La facilitación del comercio continuó chocando con la pretensión de los países desarrollados de mantener sus barreras no arancelarias como el sistema *antidumping* estadounidense, y tampoco se arribó a un acuerdo en cuanto a la implementación de los ADPIC en lo que respecta a patentes de biodiversidad. El gobierno brasileño planteó discutir el asunto y, en el caso de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales, que los responsables de su patentamiento deberían comprobar su origen, y que se compartirían los beneficios con los habitantes de los lugares de origen.

Las negociaciones en julio de 2008

Entre el 20 y el 29 de julio se hizo un intento de realización de un "proceso hori-

zontal" donde los ministros buscarían cerrar un acuerdo general y componer los números finales emanados de los grupos de negociación. El principal argumento favorable a la realización del proceso horizontal consistía en la presentación de la nueva fórmula de flexibilidades en NAMA que generó la impresión de que las negociaciones se habían destrabado y que existía la posibilidad de entendimientos en Agricultura, como el techo a los subsidios internos y la adopción de cupos con aranceles menores para ciertos productos.

Varias entidades empresariales estadounidenses, como la poderosa Coalition of Services Industry (CSI), se dirigieron a Ginebra para hacer *lobby* ante los países en desarrollo, particularmente, Brasil, India y China, entre otros, en favor de la ampliación de ofertas en el área de servicios como correos, entregas, bancos, telecomunicaciones, y demás. Sus representantes amenazaban con presionar al Congreso de Estados Unidos para que no se aprobara el acuerdo si estos países no hacían mayores concesiones.

Además de los supuestos "avances" que se estarían alcanzando, se argumentaba también que era el momento final para alcanzar un acuerdo que pudiera ser absorbido por el gobierno estadounidense aún durante el mandato de Bush, pues a la nueva administración de Estados Unidos, fuera cual fuese, le llevaría mucho tiempo definir su política de comercio exterior y, en consecuencia, su posición respecto de la Ronda de Doha, lo que podría extender el impasse, posiblemente, dos años más por lo menos.

Había posiciones, inclusive, a favor de un proceso horizontal que involucrara sólo NAMA y Agricultura para después, eventualmente, incluir los acuerdos sobre los demás temas.

Por comentarios entre bastidores, el gobierno brasileño era considerado uno de los principales promotores del proceso horizontal rápido, debido a su preocupación por preservar el espacio multilateral de negociaciones comerciales y por el esfuerzo que hizo para mantener las negociaciones en marcha, aún en los momentos de mayores dificultades.

Además, la presión interna del sector de agronegocios brasileño a favor de la aceptación de un acuerdo era muy grande. Un artículo publicado el 12 de marzo en el diario *O Estado de São Paulo* por André Nassar, Presidente del ICONE (entidad especializada en negociaciones comerciales de agricultura) expresó claramente que lo alcanzado hasta ese momento en términos de disciplina de los subsidios agrícolas era suficiente, representaba un importante avance y era el momento de concluir la ronda.

El Director General de la OMC, Pascal Lamy, presentó un proyecto de texto para el acuerdo el día 25 de julio, cuyo contenido sobre NAMA preveía un reducción media del 54% con las flexibilidades mencionadas anteriormente y algunas excepciones como, por ejemplo, para los países del Mercosur, que podrían exceptuar hasta el 14% de las líneas arancelarias. Los países desarrollados tendrían un plazo de cinco años para implementar lo acordado y los países en desarrollo, diez años.

En cuanto al comercio de productos agrícolas, él también propuso una reducción media del 54% en los aranceles externos y la limitación de los subsidios internos estadounidenses a US$ 14.500 millones por año, así como una disminución del 80% en los subsidios europeos para llegar a US$ 36.000 millones por año.

El gobierno brasileño estuvo de acuerdo con esta propuesta, diferenciándose de la posición de otros miembros del G-20 como la Argentina, que no estaba dispuesta a aceptar los coeficientes para NAMA, y la India, que quería la introducción de salvaguardas contra el crecimiento desmesurado de su importación de productos agrícolas. Proponía el derecho a la aplicación de salvaguardas para protegerse siempre que la importación de determinado producto agrícola superara el 10% del volumen promedio de los últimos tres años y contaba con el apoyo de China en este punto.

Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea sólo aceptarían la adopción de salvaguardas cuando el volumen promedio

fuera superado en un 40%, punto en el que fueron discretamente apoyados por Brasil y otros miembros del G-20, y en el caso de la propuesta para NAMA, el gobierno estadounidense reivindicaba que, además de estar prohibido proteger sectores arancelarios enteros por medio de la flexibilidad, deberían definirse algunos sectores en los que los aranceles serían reducidas a cero o algo cercano a este valor.

Esta reivindicación de Estados Unidos fue parcialmente solucionada por la alternativa de adhesión a la liberalización sectorial total con carácter voluntario, pero la diferencia en los porcentajes en cuanto a las salvaguardas reivindicadas por la India y China no se resolvió y la reunión finalizó sin haber acuerdo.

A pesar de las dificultades para retomar las negociaciones en el segundo semestre, teniendo en cuenta que los negociadores estadounidenses estarían representando a un gobierno en el fin de su mandato, la reunión de los gobiernos de las 20 principales economías del mundo[3] realizada el 15 de noviembre en Washington incluyó el reinicio de las negociaciones de la Ronda de Doha entre sus resoluciones, para enfrentar la crisis económica mundial.

A principios de diciembre, los presidentes de los grupos de negociación de NAMA y Agricultura presentaron nuevamente sus textos con revisiones para retomar las negociaciones y se inició un nuevo proceso de consultas de Pascal Lamy a los miembros de la OMC.

Ahora bien, los textos revisados mantuvieron los mismos desequilibrios en el tratamiento entre países desarrollados y en desarrollo respecto a NAMA como los había entre la propuesta de NAMA y Agricultura en propuestas anteriores. La mayor parte del contenido de esos nuevos esbozos ya formaba parte de los textos de comienzos de 2008 y del texto presentado por Lamy el 25 de julio. El "Chair" del Grupo de Negociación sobre NAMA llegó a incluir la exigencia de Estados Unidos de eliminar totalmente los aranceles en ciertos sectores como el químico, por ejemplo, atendiendo al *lobby* de las multinacionales estadounidenses de la industria química.

Ante este cuadro de pocas modificaciones y después de la realización de la consulta, el Director General de la OMC anunció que no era el momento de iniciar una nueva conferencia ministerial y aprovechó para anunciar su candidatura a un nuevo mandato en el cargo.

Conclusión

Toda negociación posee sus técnicas y la mejor propuesta sólo surge al final, pero por los comportamientos y manifestaciones de los actores a lo largo de estos siete años y por las pocas modificaciones en los textos de los presidentes de los grupos negociadores, cualquier acuerdo en este momento sería rebajado en términos de contenido. Considerando el resumen de las negociaciones sobre NAMA, Agricultura y Servicios, podemos concluir:

- Los coeficientes en NAMA representan reducciones mayores de los que países en desarrollo pueden soportar sin perjudicar a sectores industriales importantes y no se está respetando el concepto de "Reciprocidad Menos que Plena".
- En Agricultura no hay reducciones relevantes en los aranceles y en los subsidios a la exportación, pues los subsidios internos estadounidenses en 2007 fueron de US$ 10.000 millones y el presupuesto del Programa Agrícola Común de la UE prevé llegar al valor de US$ 36.000 millones, propuesto por el "Chair" en 2012. Tampoco hay límites para productos sensibles y algunos subsidios practicados podrían ser movidos al "Compartimiento Verde" del acuerdo agrícola del antiguo GATT para ser legalizados. La reducción de algunos subsidios internos, como el del algodón en Estados Unidos, ya estaba asegurada por decisión del mecanismo de solución de controversias de la OMC, aunque formara parte de la agenda de negociaciones para atender a las reivindicaciones de algunos países menos desarrollados.

[3] Este grupo también se denomina G-20, si bien no tiene relación con el agrupamiento que tiene el mismo nombre, en la OMC.

- Los principales sectores de servicios en los que los países desarrollados reivindican aperturas, como telecomunicaciones, energía eléctrica, agua y saneamiento básico, bancos, y demás, no tienen restricciones a la participación externa en Brasil. La cuestión es mantener las reglas nacionales o someterlas al régimen de la OMC, del que no hay retorno. En esta área hay más que perder que ganar con el rechazo de los países desarrollados a aceptar la libre circulación de mano de obra y de facilitar las remesas de dinero del exterior hacia los países de origen de los trabajadores.

La perspectiva de una "Ronda del Desarrollo" dejó de existir con los varios equívocos mencionados, y a pesar de la importante iniciativa de creación del G-20 y del NAMA -11, los tradicionales acuerdos dictados por los países industrializados en función de sus intereses parecen estar de vuelta. El esfuerzo del gobierno brasileño y de otros hasta aquí para alcanzar un acuerdo equilibrado fue totalmente en vano.

Las negociaciones en la OMC difícilmente serán retomadas en el corto plazo. Además de las cuestiones circunstanciales, como las elecciones presidenciales en Estados Unidos a fines de 2008 y las elecciones en la India a mediados de 2009, cuando el Partido del Congreso actualmente en el poder disputará la mayoría parlamentaria con el BJP, un partido nacionalista de derecha, se da la coyuntura de la crisis económica más grave en el mundo desde 1929. Momentos como éste nunca favorecieron la liberalización comercial, pues la tendencia de cada país es, en la medida de lo posible, proteger la industria y el empleo.

El riesgo para los países menos desarrollados, en este caso, es la presión de las grandes potencias para obtener concesiones comerciales en el ámbito bilateral o plurilateral, lo que sólo puede ser superado por la existencia de foros multilaterales. El problema es que la OMC, a pesar de su carácter multilateral, posee reglas que tratan a todos los países como si fueran iguales, y obviamente no lo son. Tal vez la crisis genere la oportunidad de rever sus principios y reglas de funcionamiento.

GATS/OMC: El MODO 4 Y LOS TRABAJADORES

Mike Waghorne
Ex Secretario General Adjunto retirado de la ISP, Internacional de Servicios Públicos.
Febrero 2009

Conforme al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por la sigla en inglés) de la OMC, existen cuatro formas en las que puede ocurrir el comercio de servicios llamadas "modos de suministro" en la jerga de la OMC. Este artículo se refiere al denominado "modo 4", es decir, el traslado temporario de un prestador de servicios (persona física o jurídica) a otro país para prestar servicios.

En términos generales, se ha aceptado que las personas involucradas son:

- Ejecutivos de jerarquía superior de empresas multinacionales que son enviados al país anfitrión por un período corto (traslados internos).
- Personas que visitan a clientes o posibles clientes en el país anfitrión con el cual han celebrado o procuran celebrar un contrato de suministro de servicios.
- Prestadores de servicios por contrato, a menudo profesionales independientes como arquitectos, ingenieros, especialistas en tecnología informática, supervisores de proyectos que trabajan en edificaciones, construcción de aeropuertos, etcétera.
- Pasantes: trabajadores enviados por su empleador a una filial o sucursal ubicada en el país anfitrión para entrenarlos o capacitarlos.

Hasta ahora, se consideraba que los trabajadores comunes de la mayoría de los sectores no estaban incluidos dentro del Modo 4, ya que la mayoría de los países no desean asumir compromisos irreversibles conforme al AGCS que permitan el ingreso de cualquier tipo de trabajadores migrantes al mercado laboral del país anfitrión.

Es imposible evaluar si los compromisos relativos al Modo 4 implican o implicarán alguna diferencia en el volumen del movimiento temporario de prestadores de servicios. Esto se debe a que cuando los gobiernos asumieron sus primeros compromisos relativos al Modo 4 cuando se firmó el AGCS en 1995, en su mayoría, no hicieron mención alguna a este tema o sólo se comprometieron a seguir aplicando la práctica vigente en ese momento: no se abrieron nuevos mercados. Desde entonces, no se han asumido otros compromisos, por lo que se desconoce el efecto que podría tener cualquier compromiso nuevo.

Teniendo esto en cuenta, los únicos indicadores de posibles efectos son los ejemplos de la llamada migración temporaria de trabajadores conforme a las políticas comunes implementadas por los gobiernos. En este sentido, debemos señalar que los sindicatos promueven el respeto de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores migrantes y su entrada legal en condiciones debidamente reguladas. Sin embargo, a los sindicatos les preocupa que gran parte de los esfuerzos de los gobiernos, ya sea en países desarrollados o en desarrollo, y en relación con la migración relativa al Modo 4 o la migración común, están dirigidos a reemplazar la migración permanente por la migración temporaria.

Los compromisos asumidos conforme al Modo 4, en el contexto del AGCS, son fijos y difíciles de modificar, y se fundan en una creciente liberalización, lo cual no es apropiado para la naturaleza cíclica de la demanda laboral, especialmente en los puestos de trabajo relacionados con servicios.

Los sindicatos sostienen que, en razón de todo lo que sugiere este artículo acerca de los posibles efectos sobre las condiciones, las normas y los mercados laborales de los países anfitriones, la idea de que la OMC pueda utilizarse como espacio para negociar estas cuestiones fuera del ámbito de la OIT o de los ministerios de trabajo e inmigración es inaceptable. Por ende, nuestro argumento es que el Modo 4 establecido en el AGCS no guarda relación alguna con la OMC, sino con aspectos laborales, migratorios y sociales que pertenecen a la esfera de los gobiernos nacionales, la OIT y la ONU, y no la OMC.

Sin embargo, si los gobiernos hacen ofertas en el contexto del Modo 4 que incluyan el movimiento temporario de trabajadores, dichas ofertas deben acordarse previamente con los sindicatos involucrados y garantizar:

- El cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo y el derecho laboral interno (que incorpore y amplíe dichas normas) del país en el que se prestan los servicios;
- El cumplimiento, por parte de todos los contratantes, de los convenios colectivos vigentes en el país anfitrión, en relación con todos los trabajadores involucrados;
- La plena participación de la OIT, especialmente en lo relativo a normas de trabajo aceptables;
- La protección de los trabajadores involucrados contra cualquier forma de discriminación y explotación; y
- La transferencia de los aportes de los trabajadores a los sistemas de seguro y seguridad social.

Sin estas condiciones, las negociaciones y compromisos relacionados con el Modo 4 del AGCS no deberían avanzar.

La actual preferencia de muchos gobiernos por migrantes temporarios en lugar de migrantes permanentes o a largo plazo tiene dos consecuencias:

- Los trabajadores migrantes subsisten en una zona intermedia de inseguridad en la que se los puede expulsar si la situación económica empeora, tal como sucede actualmente en la Unión Europea y los Estados del Golfo; y
- A estos trabajadores se les niegan derechos laborales comunes, como crear o afiliarse a sindicatos y recurrir a la legislación laboral para protegerse de los abusos y la explotación, ya que dicha legislación suele no aplicarse a los migrantes temporarios.

En sentido estricto, la interpretación tradicional del texto del AGCS deja en claro que el Modo 4 debería aplicarse a las cuatro categorías descriptas al comienzo de este documento (visitantes comerciales y demás) y que se refiere al movimiento temporario. Sin embargo, el texto no hace explícita esta interpretación y no existe una definición común de 'temporario': algunos países consideran que temporario significa varios meses, mientras que muchos otros entienden que significa entre tres y cinco años. Según el dogma de la OMC, el Modo 4 no implica migración y no permite el acceso de los prestadores de servicios al mercado laboral del país anfitrión.

No obstante, en la ronda actual de negociaciones sobre el AGCS incluida dentro

de la Ronda de Doha de la OMC, muchos países en desarrollo están procurando ampliar las clases de trabajadores que estarían cubiertos y permitir que el ingreso temporario sea renovable. En otras palabras, buscan instalar la posibilidad de que un grupo variado de trabajadores pueda trabajar durante 10 a 15 años en el país anfitrión. En consecuencia, a pesar de los reclamos sobre el hecho de que el Modo 4 no implica migración o acceso al mercado laboral, los compromisos relativos al Modo 4 podrían suponer una migración real, acceso al mercado laboral de los países anfitriones o efectos sobre dicho mercado, tal como surge de los siguientes ejemplos de patrones actuales de migración temporaria:

- La Organización Mundial de la Salud tiene pruebas de la existencia de un grupo de enfermeras y enfermeros bengalíes que trabajan en hogares de ancianos en el noroeste de Inglaterra. Todos provienen del mismo distrito bengalí y la comunidad local prepara a un nuevo grupo de personas para que viajen al Reino Unido cuando vencen los permisos del grupo anterior. Los hogares se benefician y la comunidad bengalí tiene incentivos para garantizar el envío de trabajadores bien capacitados, que aseguren el retorno de calificaciones y remesas. Aunque se trata de trabajadores temporarios, existe una presencia permanente en la fuerza laboral británica.
- Existen pruebas de la utilización de la migración temporaria como 'pasantía' para transformarse luego en migración permanente. Se ha afirmado que las enfermeras y enfermeros sudafricanos que han trabajado en forma temporaria en el Reino Unido y que son considerados empleados idóneos, al regresar a Sudáfrica, reciben ayuda de sus empleadores británicos para obtener puestos de trabajo permanentes en el Reino Unido. La OMC y la mayor parte de los datos relativos a inmigración no reflejan esta clase de arreglos, tan solo señalan que el trabajador temporario regresó a su país de origen.
- El sindicato alemán de trabajadores de la construcción da el ejemplo de la incorporación de trabajadores temporarios migrantes a la industria alemana de la construcción mediante contratos a corto plazo, lo cual ha tenido efectos perjudiciales sobre los salarios y las condiciones de trabajo en el resto del sector.

En general, los sindicatos no tienen inconvenientes con los traslados internos de las empresas, los visitantes comerciales o los prestadores de servicios por contrato (por ejemplo, arquitectos, ingenieros, y otros cuyo trabajo se basa en proyectos), ya que éstos son los prestadores de servicios temporarios típicos del Modo 4. Existen algunas inquietudes, sin embargo, sobre la inclusión de pasantes, por parte de la UE, dentro del alcance del Modo 4 ¿Se trata realmente de una capacitación o de un sistema de pasantías pretencioso y barato (o gratuito) en el que estas personas realizan tareas que normalmente forman parte del mercado laboral regular?

Como hemos explicado, muchos países en desarrollo procuran obtener contratos 'temporarios' renovables por períodos más largos para una gama mucho más amplia de ocupaciones y calificaciones que podrían afectar el mercado laboral interno. Las inquietudes de los sindicatos en este sentido son las siguientes:

- La reducción de los salarios mínimos en el resto del sector en el país anfitrión;
- El empeoramiento de las condiciones laborales y las normas de seguridad e higiene. Cabe señalar que, según *Migranté Internationale,* cada día regresan dos trabajadores filipinos muertos a su país de origen como resultado de las condiciones en las que trabajan en muchos países. Existen numerosas pruebas de que la implementación defectuosa de políticas migratorias permite que las mujeres y los niños, en particular, queden expuestos a una grave explotación;
- La pérdida de derechos laborales y sindicales. Como ya hemos indicado, en muchos países, los trabajadores migrantes no están cubiertos por la legislación laboral, no pueden afiliarse a sindicatos o ser representados por ellos y no tienen acceso

a procedimientos de queja o reclamaciones por discriminación. Por ende, no sorprende que la central estadounidense AFL-CIO, por ejemplo, haya llegado a la conclusión general de que el descuido de los derechos de los trabajadores migrantes debilita los de todos los trabajadores, por lo que debemos impedir que los empleadores hagan competir a los trabajadores, y

- El nivel y las condiciones de vida de estos trabajadores están en peligro. A veces, sus salarios son muy bajos (quizá tan bajos como los de sus país de origen) pero deben pagar todos los costos de vivir en el país anfitrión. Podría argumentarse que esto queda anulado por el hecho de que el 'empleador' paga los costos de alojamiento y gastos diarios, inclusive la comida, pero:
- Existen numerosas pruebas de que los importes suministrados están muy por debajo de los parámetros aceptables, y
- A menudo se violan los Convenios de la OIT sobre la administración de estas 'prestaciones' pagadas por el empleador.

Existe un gran debate acerca de si la migración temporaria incluida en el Modo 4 supone una fuga, una entrada o una circulación de cerebros. De hecho, las pruebas parecen apoyar los tres fenómenos, con variaciones según el país, el sector y el tiempo. Sin embargo, al evaluar este asunto, es necesario tener en cuenta dos cuestiones:

- En algunos casos, no es el movimiento masivo de personas lo que provoca un una fuga de cerebros significativa, sino la pérdida de una o dos personas clave en un país pequeño. Un país caribeño tuvo que cerrar su única unidad de terapia intensiva porque perdió a su único anestesista. Necesitamos acuerdos de contratación éticos y eficaces entre los gobiernos de los países de origen y los países de destino para que éstos últimos no 'roben' trabajadores clave y para que toda pérdida (costos de formación en el país de origen) sea compensada.
- Muchos países hacen más hincapié en las remesas que en los efectos de la fuga o entrada de cerebros sobre el desarrollo. Claramente, algunos permiten o incluso alientan la explotación de sus ciudadanos en el extranjero para mantener el flujo de remesas. En el continente americano, el control de los flujos migratorios todavía está determinado por criterios económicos rígidos y la supuesta preocupación por la seguridad nacional, y no por los esfuerzos para defender los derechos de los trabajadores migrantes.

En lo personal, conozco el siguiente caso de un país del sur de Asia: el agregado laboral de este país se encontraba en un Estado del Golfo en el que había muchos trabajadores de su país. Observó la grave explotación que sufrían sus compatriotas y se puso en contacto con la capital de su país para preguntar si debían presentar una queja ante el gobierno del país anfitrión. La respuesta fue inequívoca: *Mantenga la boca cerrada. Si nos quejamos, expulsarán a nuestra gente y la reemplazarán por ciudadanos de otro país del sur de Asia.* Definitivamente, lo que importa son las remesas, no los derechos.

Algunos países en desarrollo incluso han solicitado, en negociaciones en curso sobre el AGCS, que ni siquiera se respeten las normas mínimas sobre trabajadores incluidos en el Modo 4. Varios países en desarrollo se oponen a los pedidos de que sus trabajadores puedan ejercer todos los derechos laborales y sindicales del país anfitrión, como en el caso de la India, que ha sugerido que pagar el salario mínimo constituye un obstáculo injusto para la contratación de ciudadanos indios en el exterior (para mayor información, véase más adelante).

La supuesta razón de este pedido de 'eliminar las normas locales' es el mito de que respetar los derechos de los trabajadores provoca la pérdida de la ventaja competitiva que la mano de obra proveniente de países en desarrollo puede tener: *si nuestros ciudadanos tienen que recibir el mismo trato que los trabajadores locales, nadie los contratará.* ¿Cuáles son los hechos?

- Estos trabajadores suelen realizar las tareas sucias, peligrosas o degradantes que los trabajadores del país anfitrión no quieren

realizar. Pagar salarios acordes y respetar las condiciones laborales establecidas en convenios colectivos no disminuirá la cantidad de trabajadores migrantes que hacen este tipo de trabajo ni las ofertas de trabajo que reciban.

- Áreas rurales y urbanas pobres: varios países han aportado pruebas de que los médicos, enfermeras y docentes y demás profesionales que migran están dispuestos a trabajar en áreas rurales y en las zonas urbanas más pobres, lugares a los cuales los profesionales locales no van. En el Reino Unido, Francia, Australia y Nueva Zelanda, muchas de estas áreas no contarían con médicos, enfermeras ni docentes si los profesionales migrantes no estuvieran allí. Esto no impide que cobren buenos salarios y disfruten de buenas condiciones; de hecho, en algunos países, ganan más o reciben prestaciones especiales porque los gobiernos ofrecen incentivos para que los profesionales trabajen en estas áreas.
- Trabajo por turnos y trabajo dominical en el ámbito de la salud: la OIT tiene pruebas de que los trabajadores de la salud migrantes están más predispuestos a trabajar durante el turno noche y los días domingos —horarios que los trabajadores locales consideran 'no sociales'— y, nuevamente, esto suele tener como resultado el pago de sumas adicionales y no de salarios más bajos. Los datos de las Encuestas de Mano de Obra de la OIT para países europeos muestran que el 13% de los trabajadores migrantes trabajan más de 40 horas por semana, frente al 7% de los trabajadores nativos, y que la cantidad de médicos y enfermeras migrantes que trabajan durante la noche y los días domingos duplica a la de trabajadores nativos.

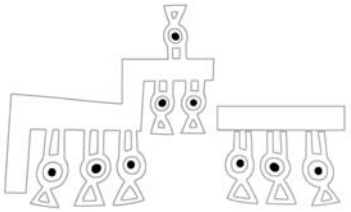
Insistir en un trato igualitario para trabajadores migrantes y locales no disminuirá las oportunidades laborales para los trabajadores de los países en desarrollo. El problema radica en lograr que realmente se les dé ese trato.

Algunos se preguntan si los sindicatos no estarán enviando un mensaje oculto para que no se permita migrar a los trabajadores, en especial a los trabajadores clave. Por el contrario, los sindicatos apoyan la libertad de tránsito y la libertad de permanecer en el país de origen. Muchos migrantes no abandonarían sus familias, comunidades y países para ir en busca de buenos salarios y condiciones laborales si tuvieran acceso a esos salarios y condiciones en su propio país. Este factor 'de expulsión' genera mucha migración (especialmente la llamada 'migración ilegal') y todos los sindicatos de los países desarrollados y en desarrollo han respaldado campañas para obligar a los gobiernos y empleadores del sector privado a pagar salarios decentes, respetar las condiciones de trabajo decentes e implementar en forma íntegra las normas fundamentales del trabajo de la OIT, para que los individuos puedan permanecer en sus países de origen y contribuir a su desarrollo sostenible.

Es importante respetar ambas libertades (a migrar o a permanecer), porque, como todos sabemos, la migración hacia los Estados Unidos y otros países desarrollados desde Latinoamérica u otros países en desarrollo se relaciona en forma creciente con el tema del tráfico y trabajo esclavo de mujeres, niños y migrantes. No deseamos ni apoyamos la coacción en ninguno de los dos extremos de la cadena.

Como ha expresado el XIV Congreso: "El creciente dinamismo de la migración laboral en el continente instala un nuevo desafío para los países emisores: reducir la tendencia a migrar mediante, según el concepto de la CIOSL, 'la contratación de trabajadores' en lugar del 'envío de empleados a trabajar'. En otras palabras, debemos asegurarnos de que las personas no sólo gocen de su derecho a emigrar sino también de su derecho a no hacerlo, abordando las expectativas de los sectores más proclives a migrar, como por ejemplo, los jóvenes".

De una u otra manera, los sindicatos insisten en que el Modo 4 no tiene lugar en la OMC.



EL LIBRE COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS CONTRIBUYE A LA PROFUNDIZACIÒN DE LA CRISIS

Myriam Vander Stichele, Investigadora principal
Febrero 2009



Los servicios financieros cumplen una función especial en la sociedad

La crisis financiera que comenzó en EE. UU. en 2007, puso al descubierto el papel central que tiene el sector financiero en las economías y sociedades de la mayoría de los países. También demostró que el dejar este delicado sector librado a los mercados suponiendo que éstos podían autocorregirse tuvo consecuencias desastrosas. En realidad, las compañías financieras fueron tratadas como cualquier otra empresa, al tiempo que se creía que la existencia de una débil reglamentación y supervisión era suficiente para lidiar con su particular condición y función pública. De hecho, los servicios financieros, los bancos y el sistema financiero cumplen una importante función en la provisión de créditos a los sectores agrícola, industrial y de servicios y su comercio. La crisis actual demuestra que la falta de crédito crea diversos problemas y tiene un importante impacto en el comercio y las empresas productoras para exportaciones, así como en los empleados y trabajadores de estos sectores. Se calcula que la crisis económica, que es consecuencia de la crisis financiera, aumentará el desempleo masivamente en todo el mundo. Los cálculos indican que en los próximos años el número de trabajadores pobres y aquellos que viven con menos de un dólar por día aumentará 40 millones, y el número de quienes viven con 2 dólares por día, 100 millones.

Por otra parte, los mercados financieros no regulados atendidos por la industria financiera han impulsado a las empresas a obtener incluso más ganancias a corto plazo. Asimismo, el sector financiero ha creado instrumentos financieros altamente especulativos que tuvieron efectos cada vez más desestabilizadores en la sociedad. El ejemplo más claro es la especulación en los precios de los alimentos que fue, entre otras cosas, consecuencia de la crisis financiera y de inversores en busca de utilidades incluso mayores o iguales. Al crear servicios financieros especulativos en el sector de la alimentación, a la industria financiera no le importó si la consecuencia era una crisis alimentaria con altos precios de los alimentos y hambre. Del mismo modo, los grandes instrumentos

financieros para especular con las tasas de cambio están desestabilizando dichas tasas, arrasando en un día con las cuantiosas ganancias que podrían haberse obtenido por el crecimiento en las exportaciones.

El sector financiero también es el responsable de haber creado una sociedad no sostenible y desigual al otorgar créditos y un conjunto de otros servicios financieros a proyectos y empresas que producían y comercializaban de manera no sostenible procurando obtener ganancias a corto plazo mientras se achicaban los ingresos de los demás eslabones de la cadena de abastecimiento, incluidos los trabajadores y los empleados. Además, con frecuencia vendían productos de consumo que no eran sostenibles. No es de extrañar que la creciente brecha entre ricos y pobres, así como la crisis climática y ambiental ocurran al mismo tiempo. La operatoria de los fondos de capital privado y de alto riesgo, que son empresas no reguladas financiadas por los ultra ricos para obtener utilidades extraordinarias gracias a la especulación y el financiamiento excesivo (pidiendo prestado 10 a 30 veces más dinero que el capital que tenían) fue un problema particular para los trabajadores durante los últimos cinco años. Aquellos adquirieron empresas con enormes préstamos otorgados por los bancos, que obtuvieron una buena ganancia por esa operación, y luego traspasaron la deuda a la empresa que luego recortaba costos y empleos para cancelar la deuda y vender la empresa en un plazo muy corto, obteniendo enormes ganancias.

Expansión acelerada de los servicios financieros extranjeros

Las enormes ganancias obtenidas por grandes bancos financieros y compañías de seguro les permitió llevar a cabo una expansión mundial para obtener aún más ganancias. Durante la segunda mitad de la década del noventa, hubo un drástico y muy acelerado aumento en la propiedad extranjera de bancos y actividades de la banca extranjera en varios países en desarrollo. Las cifras indican que la presencia de bancos en América Latina aumentó un 364% durante el período 1996-2000, mientras que el aumento en los países del este asiático fue del 59% para el mismo periodo, 1996 y 2001.

Esta expansión fue posible gracias a que los países en desarrollo permitieron el ingreso de bancos extranjeros a sus mercados. Esto con frecuencia ocurrió bajo la presión impuesta por la condicionalidad de los préstamos del Banco Mundial y el FMI, que exigían la privatización de los bancos nacionales. Como consecuencia, los bancos extranjeros compraron estos bancos privatizados y los fusionaron con sus propios conglomerados. Durante este proceso, los bancos extranjeros a menudo recortaron puestos de trabajo de los bancos privatizados para hacerlos más rentables, como sucedió en Brasil. Por otra parte, los empleados en América Latina no fueron tratados tan bien como en el país de origen, por ejemplo, de ABN AMRO.

Uno de los argumentos empleados para abrir el sector bancario y de seguros a los operadores financieros extranjeros fue que los bancos y compañías de seguros extranjeros eran más eficientes. No obstante, este argumento no contempló las situaciones específicas de los países y la operatoria particular de los bancos y compañías de seguros extranjeros. En 2002, un estudio de caso del Banco Real, que en aquel momento estaba controlado por el banco holandés ABN Amro en Brasil, demostró que no era más eficiente que los bancos nacionales que habían sobrevivido diversas crisis financieras. Sin embargo, muchos confiaron en su estatus de banco extranjero, lo que atrajo a los más ricos que estaban dispuestos a pagar más.[1] En México, los bancos extranjeros controlaban más del 85% del total del sector bancario, pero otorgaban escaso financiamiento a las empresas locales para estimular el crecimiento económico. Los hogares y las PyME difícilmente tenían acceso al crédito a tasas razonables. Los políticos y los supervisores expresaron sus dudas sobre la decisión del pasado de abrir el sector bancario a la competencia extranjera. Durante las épocas

[1] M. Vander Stichele, Liberalisation in Banking Services Does not Have the Stated Effects - Summary of a case study of ABN Amro in Brazil, SOMO/Amsterdam, December 2001 (www.somo.nl) (M. Vander Stichele, La liberalización de los servicios bancarios no tiene los efectos declarados – Resumen de un estudio de caso de ABN Amro en Brasil), SOMO/Amsterdam, diciembre de 2001.

de crisis en América Latina, los bancos extranjeros están menos dispuestos aún a ofrecer sus servicios a clientes más pequeños como las economías de hogares y PyME, lo que subraya uno de los riesgos de la presencia de bancos extranjeros. Por otra parte, los bancos extranjeros frecuentemente retiran el capital en épocas de crisis financiera. En el caso de la crisis argentina de principios de siglo, los bancos extranjeros se negaron a recapitalizar sus sucursales y filiales[2].

Los acuerdos de libre comercio aumentaron el riesgo de crisis financieras

Desde el comienzo, en 2007, de la actual crisis financiera en EE. UU, faltó un importante elemento en las diversas deliberaciones y propuestas para reformar el sistema financiero e impedir que la crisis financiera se propague aún más. No se discute la amplia liberalización y desregulación de los servicios financieros, los movimientos de capital y la industria financiera internacional a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales o regionales. Estos tratados de libre comercio han convertido la liberalización y apertura del mercado a la industria financiera extranjera en algo casi permanente en muchos países. Esto significa, por ejemplo, que los países sólo pueden decidir volver a los bancos estatales únicamente, por ejemplo, para los servicios bancarios básicos, si compensan a todos los países que reclaman que sus bancos privados están perdiendo futuros negocios.

Asimismo, estos tratados de libre comercio en realidad imponen una desregulación extrema de los servicios financieros y los controles de capital, que promueven el lucro y las estrategias de expansión de las grandes empresas financieras. Si bien hasta los países que previamente instauraron políticas neoliberales y dejaron el sector financiero en manos del libre mercado exigen nuevas normativas y supervisión, ninguno de los gobiernos, expertos o medios que exigieron nuevas normas para la industria financiera tuvo en cuenta hasta qué punto las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés) y los tratados de libre comercio han hecho de la desregulación algo permanente. Peor aún, los jefes de gobierno de los países del G-20 que se reunieron el 15 de noviembre de 2008 para analizar cómo debe realizarse la reforma del sistema financiero pidieron la finalización de la actual "Ronda de Doha" de negociaciones de la OMC para liberalizar el comercio. Los países occidentales han ignorado hasta ahora que la liberalización y desregulación de los servicios financieros es parte de las continuas negociaciones del AGCS que están demoradas porque el avance de éstas está a la espera del avance de las negociaciones en agricultura y el sector industrial (NAMA, por la sigla en inglés). Cuando en febrero de 2009 se le preguntó a un funcionario de alto nivel de la Comisión Europea, que negocia tratados de libre comercio para la Unión Europea (UE), si la UE continuaría negociando la liberalización de servicios financieros bajo el AGCS, la respuesta fue "por supuesto", ya que la estrategia de la UE consiste en abrir más mercados, incluidos aquellos para su rentable industria financiera. Asimismo, EE. UU. ha venido presionando constantemente durante las negociaciones del AGCS y de TLC para abrir los mercados en forma desregulada para su enorme industria financiera en expansión que alguna vez logró imponentes ganancias (las ganancias de Citigroup en 2004 fueron de US$ 17 mil millones).

Liberalización sin regulación

El AGCS fomentó la competencia despiadada en la industria financiera por ganancias aún mayores. La industria financiera de la UE quería competir especialmente con el sector financiero de EE. UU. que ya llevaba la delantera por tener un gran mercado interno, modernos bancos de inversión y un bajo nivel de regulación. La industria financiera europea competía para lograr las mismas ganancias cuantiosas que sus contrapartes estadounidenses. En nombre de la competitividad, se dedicaron grandes esfuerzos a hacer lobby

[2] L.R. Reynoso, Argentina: la justicia inhibida, la Argentina de pie, en Correos para la emancipación, nr. 234, 12 de febrero de 2004.

para convencer a los gobiernos de origen y anfitriones de desregular, en especial los productos especulativos que contribuyeron al surgimiento de la crisis. ¡El argumento de que la regulación imponía costosas barreras se ha perdido ahora en los contribuyentes que tienen que hacerse cargo de la factura de la desregulación!

Las negociaciones del AGCS y los TLC incluyen la apertura de los mercados de servicios financieros pero no cuentan con mecanismos para asegurar, al mismo tiempo, que exista regulación y supervisión suficientes. Tampoco hubo demasiada preocupación por asegurar que la liberalización mejore el acceso universal de todos a los servicios financieros. Dada la actual arquitectura financiera internacional, los bancos extranjeros están supervisados principalmente por el supervisor en su país de origen a expensas de los intereses del país anfitrión. Además, no existe un supervisor que posea toda la información sobre las transacciones mundiales de un conglomerado financiero que opera en actividades bancarias, de seguros o de compraventa de títulos.

El AGCS no permite prohibir productos financieros riesgosos

Muchos países miembros de la OMC ya acordaron permitir que bancos o compañías de seguros extranjeros originarios de cualquier otro país miembro de la OMC se establezcan y ofrezcan (algunos de sus) productos y servicios financieros conforme a las normas del AGCS. Este acuerdo de la OMC sobre "comercio de servicios" también liberaliza la presencia y la inversión extranjeras en el sector financiero así como los servicios comercializados en forma transnacional (es decir, proporcionando créditos transfronterizos a través de Internet).

Algunos países en desarrollo como Argentina, Ghana y Sudáfrica también acordaron permitir que operadores financieros extranjeros ofrezcan productos y servicios financieros de alto riesgo aunque el comercio de estos derivados es ampliamente reconocido como el principal causante de la crisis financiera. La comercialización de derivados en el sector de la alimentación dio lugar a una gran especulación sobre los precios futuros de los alimentos y contribuyó al alza de los precios y la crisis alimentaria. Algunos países incluso han atado los servicios financieros que tienen un importante efecto social, como seguro de salud o administración de fondos de jubilación y pensión, a las restricciones del AGCS sobre regulación. Los países que están procurando prohibir cualquier producto u operador financiero de riesgo bien podrían encontrarse en conflicto con las normas del AGCS.

Asimismo, los servicios ofrecidos por empresas de servicios financieros pueden incluir grandes transferencias financieras transfronterizas que pueden tener un efecto desestabilizador sobre las divisas de un país. Sin embargo, las normas del AGCS estipulan que el país anfitrión debe permitir todas las transferencias financieras vinculadas a un servicio financiero liberalizado por el país, lo que va en detrimento de la adopción de medidas para evitar los retiros de fondos repentinos y prevenir una crisis.

Si los países quieren retirar sectores de servicios sensibles de las medidas restrictivas del AGCS, este acuerdo exige que los países compensen la pérdida de futuras oportunidades de negocios a otros países de la OMC que solicitan compensación. De este modo, India pudo manejar la especulación de los precios de los alimentos prohibiendo el comercio de derivados especulativos en este sector, mientras que Sudáfrica y Argentina prácticamente no pueden hacerlo porque, conforme al AGCS, se han comprometido a mantener a sus gobiernos al margen del negocio de la regulación de la comercialización de derivados.

Normas del AGCS que desregulan

Los países miembros de la OMC pueden decidir si liberalizan o no, o desregulan, los servicios financieros conforme al AGCS, pero varios países en desarrollo lo han hecho. Esta opción es mucho menos posible durante las negociaciones de los TLC porque las normas

del AGCS determinan que un TLC que abarca servicios debe incluir compromisos de liberalización y desregulación considerables, aunque los países en desarrollo pueden liberalizar algo menos que los desarrollados. La UE y EE. UU. siempre presionan constantemente para que los servicios financieros estén comprendidos en los TLC de modo que los países tengan que admitir más bancos extranjeros y otros servicios financieros.

Muchas normas del AGCS que liberalizan los servicios financieros y de otro tipo se repiten en los TLC. "Liberalización" y "acceso al mercado" significa que los gobiernos tienen restricciones al elegir qué operadores financieros quieren en sus territorios y cómo pueden regular los operadores y productos financieros extranjeros. A menos que se estipulen exenciones explícitas al momento de la negociación, los gobiernos y países miembros de la OMC que firman un TLC con la UE deben:

- Permitir el 100% de control extranjero del sector y los operadores financieros;
- no imponer restricciones sobre el tamaño y la cantidad de los operadores financieros, ni sobre el volumen de sus operaciones;
- tratar a los operadores financieros extranjeros como mínimo tan favorablemente como a los operadores internos (¡mientras que los servicios financieros extranjeros y sus proveedores pueden recibir mejor tratamiento que los nacionales!).

Una de las consecuencias es que la magnitud o el volumen de las operaciones de la industria financiera extranjera es muy difícil de limitar. Si no pueden imponerse restricciones sobre el porcentaje de control extranjero, los bancos extranjeros pueden tomar el control de la totalidad del sector bancario de un país y tornarse demasiado grandes para quebrar.

Como parte de las negociaciones del AGCS que ya se realizaron en el ámbito de la Ronda de Doha, la UE solicitó que varios países en desarrollo eliminen normas preventivas específicas que se habían instrumentado tras la crisis financiera en Asia, o que ahora se consideran como soluciones para la crisis financiera. Dichas negociaciones comerciales secretas sin la participación de organismos reguladores y supervisores, y menos aún de representantes parlamentarios y de la sociedad civil, que actualmente se encuentran trabajando sobre nuevas normativas y supervisión deben evitarse.

Las normas del AGCS y los FTA exigen que los bancos extranjeros sean tratados como bancos nacionales aunque los primeros se comporten de manera diferente en diversos aspectos, también en épocas de crisis, como se explicó anteriormente (por ejemplo, otorgamiento de menos crédito, retiro de capitales). Si la OMC liberaliza aún más los productos (procesados) agrícolas y no agrícolas (NAMA), esta falta de crédito debilita aún más la capacidad de los productores nacionales de competir con los productos importados, principalmente producidos o comercializados por multinacionales (un tercio del comercio internacional actual se desarrolla entre multinacionales y otro tercio entre filiales y multinacionales).

Durante la actual crisis financiera, los países desarrollados rescataron o respaldaron financieramente a los bancos más grandes que también operan en los países en desarrollo. Esto significa que los bancos extranjeros cuentan con respaldo y están subsidiados en su país, a diferencia de lo que ocurre con los bancos de países en desarrollo. Por ende, exigir que los bancos extranjeros reciban un trato no menos favorable que los bancos nacionales conforme a las normas de tratamiento del AGCS y los TLC genera una competencia desigual que podría causar un debilitamiento de los bancos nacionales, sus servicios y sus empleos.

Las normas especiales del AGCS y los TLC no favorecen las nuevas reglamentaciones

Además de las normas del propio AGCS, la mayoría de los países desarrollados se han comprometido a un conjunto aún más extremo de medidas de desregulación del sector de servicios financieros. Este "Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros" del AGCS prohíbe una

mayor regulación y exige que a los inversores extranjeros se les permita ofrecer cualquier nuevo servicio financiero. En consecuencia, las propuestas surgidas en EE. UU. para volver a regular o prohibir los productos financieros riesgosos que desataron la crisis financiera, como frenar las ventas en descubierto de acciones (tomar préstamos en acciones para venderlas con ganancias), los préstamos de alto riesgo (o subprime) o la clasificación de productos financieros riesgosos, irían en contra de dichas normas. Esto también ocurriría en el caso de posibles propuestas emanadas de la UE para regular los fondos de riesgo, que contribuyeron sistemáticamente al surgimiento de crisis económicas. Aunque otro Anexo del AGCS relativo a servicios financieros permite que el gobierno instrumente "medidas preventivas", esa cláusula es limitada porque también requiere que dichas medidas no perjudiquen la apertura de mercados del AGCS. Estas disposiciones no permiten que los gobiernos implementen las reglamentaciones, o incluso las prohibiciones, que son necesarias para evitar o manejar una crisis financiera. La UE y otros países desarrollados solicitaron durante las negociaciones de la Ronda de Doha que los países en desarrollo "emergentes" más grandes también liberalicen de conformidad con este "Entendimiento".

Si bien esta disposición del AGCS relativa a permitir nuevos servicios financieros se aplica principalmente a los países desarrollados, el NAFTA o un TLC con la UE (por ejemplo, con Chile, México, los países del Caribe) también exige que los países en desarrollo permitan la introducción de nuevos servicios financieros extranjeros en sus territorios en aquellos sectores financieros que se liberalizaron conforme a dichos acuerdos. Esto significa que pueden introducirse productos financieros altamente riesgosos como el comercio de derivados especulativos, una práctica que condujo, en gran medida, al surgimiento de la crisis. Aunque los acuerdos permiten ciertas regulaciones y supervisión, decidir qué regulación está permitida queda librado al criterio de los tribunales comerciales. Por ende, los TLC pueden igualmente dificultar en gran medida que los países prohíban la especulación en los precios de los alimentos a través de la prohibición del comercio en derivados de alimentos que contribuyen a la aparición de la crisis alimentaria.

Asimismo, la UE procura imponer, por medio de sus TLC, la instrumentación de diversas normas internacionales no vinculantes para los organismos reguladores financieros en los países en desarrollo. Sin embargo, estas normas no lograron, en absoluto, prevenir la crisis financiera y actualmente están siendo revisadas mientras la mayoría de los países en desarrollo no tuvieron, ni tendrán, voz ni voto en el diseño de éstas.

Los TLC ponen freno a los controles de capital

Durante una crisis financiera, o con el fin de evitarla, es importante que los países puedan controlar los flujos de entrada y salida de capitales, que se mueven principalmente a través de los bancos. Sin embargo, el modelo de TLC empleado tanto por la UE como por EE. UU. obliga a los países a eliminar las restricciones sobre los movimientos de capital y a facilitar los flujos de capital transfronterizos, más allá de lo acordado en el AGCS. En el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los países del Caribe, no se permiten restricciones sobre las transferencias de capital entre residentes de los países signatarios, ni siquiera sobre grandes transferencias de cuentas de capital relacionadas con inversiones. Los países tienen permitido frenar las desestabilizadoras transferencias de capital sólo en "circunstancias excepcionales". Asimismo, todas las medidas preventivas adoptadas para frenar los flujos de capital o de comercio que generan una desestabilización financiera están restringidas por diversas condiciones, que atentan contra muchas de las políticas internas destinadas a proteger las economías y las sociedades.

La peligrosa combinación de los TLC y los TBI

Lo que con frecuencia se olvida es que los inversores financieros extranjeros que

ingresan a un país bajo un TLC pueden hacer uso de los tratados bilaterales de inversión (TBI) existentes para iniciar juicios contra los gobiernos anfitriones que introducen nuevas regulaciones sociales o ambientales. Por ejemplo, más de 30 empresas iniciaron juicios contra Argentina por las medidas adoptadas durante su crisis financiera (2000-2001). Los inversores extranjeros ya hicieron uso de un TBI para demandar a Sudáfrica por sus políticas para revertir el legado del apartheid y aumentar el control negro en el sector minero. Esto también podría ocurrir en el sector de servicios financieros, donde también se decidieron políticas de "empoderamiento negro" que apuntan a lograr un mejor acceso a los servicios financieros para los pobres y las comunidades negras. En el pasado, la industria financiera con frecuencia trató de ejercer presión para evitar las obligaciones de atender a las comunidades pobres, como la ley estadounidense de reinvertir en las comunidades donde operan los bancos.

Es indispensable revertir el olvidado aporte del AGCS y los TLC a la crisis financiera

Las actuales normas negociadas del AGCS y los TLC significan que la liberalización y desregulación de los servicios financieros dan lugar a que los bancos puedan tener una expansión mundial, se hagan demasiado grandes como para quebrar y luego necesiten ser salvados con fondos públicos mientras una vasta crisis financiera se propaga en todo el mundo. A menos que los países recobren el espacio político necesario para regular la industria financiera, el problema del rescate persistirá. Estos acuerdos protegían los intereses de los grandes de la industria financiera y, al mismo tiempo, carecían de instrumentos para hacer que ésta rinda cuentas cuando se cometen graves errores con consecuencias devastadoras para las sociedades en las que se les permite operar. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de crear conciencia entre los ciudadanos, los tomadores de decisiones políticas y los foros internacionales que se ocupan de la nueva normativa y supervisión financieras sobre los efectos de las disposiciones del AGCS y los TLC en materia de servicios financieros.

Además, las discusiones para reformar el sector financiero deben enfocarse en el establecimiento de normas para dar a las finanzas una finalidad productiva en lugar de especulativa y poner freno a la inversión en empresas y proyectos que son social y ambientalmente perjudiciales. Con el propósito de detener el aporte del sector financiero a las crisis mundiales de alimentos, climática/ambiental y social, debe revertirse la extrema desregulación y apertura de los mercados impuestas por los TLC y el AGCS. Cualquier norma nueva debe respaldar el financiamiento de una sociedad sostenible con trabajos decentes y sostenibles.

Las medidas concretas que pueden adoptarse para ese fin y que reclaman grupos de la sociedad civil como la red "Nuestro mundo no está en venta" (OWINFS, en inglés) son:

- Detener todas las negociaciones relativas a servicios financieros en el AGCS y los TLC.
- Permitir a los países revertir sus compromisos actuales de liberalización de servicios financieros conforme al AGCS y los TLC sin tener que pagar compensación por ello.
- Permitir que los países tomen todas las medidas necesarias para prevenir crisis financieras, sociales y ambientales sin amenazas de represalia basadas en las normas del AGCS y los TLC.
- Eliminar la liberalización de servicios financieros y del capital de la OMC y el AGCS, así como de todos los TLC.
- Regular los servicios financieros para apoyar urgentemente la formación de sociedades sostenibles, incluso atendiendo primero a las comunidades más pobres. Las nuevas normas del AGCS y los ALC deberían apoyar esta medida, en lugar de socavarla como ocurre en la actualidad.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA FINANCIACION PARA EL DESARROLLO: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOLIDARIDAD GLOBAL

Andrea Maksimovic, Coordinadora de Cooperación Internacional
Febrero 2009

Introducción

Mientras las consecuencias de la crisis financiera tienen un grave efecto en el mundo en desarrollo, también crece la preocupación porque el pequeño avance logrado en los últimos años para asegurar que los países ricos provean recursos financieros adicionales destinados a la lucha contra la pobreza irá desapareciendo gradualmente a medida que el Norte globalizado comience a controlar sus recursos financieros y los gobiernos den marcha atrás en sus compromisos de ayuda. Abrumados por sus propios problemas económicos internos, como los anuncios casi diarios de pérdidas de puestos de trabajo, y reticentes a renunciar al poder para tomar decisiones que actualmente tienen en las principales instituciones económicas y financieras, los gobiernos de los países ricos están apelando a soluciones políticas simplistas como recortes en los presupuestos de ayuda y reducciones de los cupos de inmigración.

Sin embargo, la crisis, que es el resultado de varias políticas económicas obstinadas también representa una gran oportunidad para una reforma de escala global del orden económico mundial. La liberalización del comercio y las inversiones, que erosionó la agricultura y la industria nacionales, debilitó drásticamente los ahorros internos y los ingresos fiscales y aumentó la desestabilizadora fuga de capitales, finalmente comienza a ser cuestionada por los principales economistas y responsables de formular políticas. Esto abre la posibilidad de crear un nuevo sistema que permita que los países en desarrollo se beneficien de la ayuda al tiempo que se reforman las normas que actualmente les impiden invertir en desarrollo humano y financiar los programas sociales y la inversión en trabajo decente y, a su vez, invertir en tecnologías verdes y mecanismos de adaptación al cambio climático.

Este documento analiza una posibilidad de reforma a través del llamado "proceso de Financiación para el Desarrollo". En las Conferencias de la ONU de Monterrey y Doha sobre la Financiación para el Desarrollo en 2002 y 2008, respectivamente, los países reconocieron que muchos aspectos del sistema financiero y económico internacional ejercen un efecto en detrimento del desarrollo y la reducción de la pobreza. Los compromisos acordados en Monterrey y Doha requieren que los gobiernos enfrenten estos problemas para mejorar el desarrollo. La decisión de si se implementarán y mejorarán estos compromisos y la manera en que esto ocurra tendrá un gran impacto a la hora de asegurar que el mundo rico ponga sus promesas de solidaridad en práctica.

¿Qué es la financiación para el desarrollo?

En 2002, los gobiernos internacionales acordaron el llamado "Consenso de Monterrey" sobre financiación para el desarrollo, un documento que define los compromisos en seis áreas fundamentales: movilización de los recursos nacionales; inversión extranjera directa, comercio internacional, cooperación técnica y financiera, deuda externa y cuestiones sistémicas. Como proceso, el Consenso de Monterrey reside en la Naciones Unidas. El consenso emanado de la reunión de 2002 en Monterrey fue débil en algunas áreas pero, de todas maneras, abrió una ventana de oportunidad para el análisis de los temas en el escenario internacional.

En noviembre y diciembre de 2008 en Doha, Qatar, el avance en relación con estos temas se analizó en la *Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey.* El objetivo de la Conferencia de Doha consistió en evaluar los avances logrados desde el Consenso de Monterrey de 2002.

El acuerdo de Monterrey estableció un conjunto de responsabilidades entre países ricos y pobres, entre el sector público y el sector privado y sobre la totalidad de la escala del esfuerzo requerido. Las soluciones para los problemas de desarrollo se presentaron de manera holística mediante la promoción de un enfoque integral del desarrollo. La idea era optimizar sinergias entre la movilización de recursos internos, ayuda, comercio internacional, flujo de capitales privados y alivio de la deuda. Monterrey produjo crecientes compromisos de Asistencia de Desarrollo en el Extranjero (es conforme a Monterrey que los gobiernos de los países desarrollados se comprometieron a otorgar el 0,7 de su PBI para asistencia), nuevas iniciativas en Barcelona y Gleneagles, cierto alivio de la deuda y la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda.

Sin embargo, desde entonces, a pesar de los esfuerzos para que la comunidad de donantes cumpla con su palabra, como las grandes movilizaciones populares en 2005 bajo el estandarte del "Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza", las promesas hechas fueron claramente inciertas. Las promesas hechas en 2008 por la UE de cumplir su compromiso de 0,56% para 2010 están perdiendo credibilidad, y las recientes decisiones de Francia, Italia e Irlanda de demorar el ritmo de los aumentos de la ayuda podrían considerarse como señales de la pérdida del compromiso. Del mismo modo, las promesas del G8 con respecto a la ayuda no se han materializado mientras que el déficit ya asciende a alrededor de $30 mil millones al año, o el 30% de las promesas hechas en la cumbre de Gleneagles en 2005.

Todo esto en el mismo año en que las naciones en desarrollo fueron golpeadas primero y más severamente por la crisis del petróleo y los elevados aumentos de los precios de los alimentos, y ahora que empiezan a sentirse los graves efectos de la crisis, investigaciones realizadas por el Instituto de Desarrollo en el Extranjero (ODI, por su sigla en inglés) indican que es probable que los flujos financieros totales de los países en desarrollo se contraigan diez veces la ayuda adicional prometida por el G8 en Gleneagles: $300 mil millones o el 25% de los flujos actuales.

A fines de 2008, la OIT calculaba que la crisis podría aumentar el desempleo en 20 millones y la cantidad de trabajadores pobres (los que trabajan pero viven con menos de dos dólares al día) otros 100 millones, sumándose a la mitad de la fuerza laboral del mundo que ya lo hace. También habrá un aumento de la pobreza, que se sumará a los 100 millones que fueron empujados a quedar por debajo de la línea de pobreza por los marcados aumentos en los precios de los alimentos en 2007 y 2008. El Banco Mundial calcula que por cada caída del 1% en el crecimiento, otros 20 millones de personas caerán en la indigencia absoluta.

El Documento de Resultados de Doha, la declaración oficial emanada de la conferencia de revisión, sencillamente no estuvo a la altura de la situación ya que no logró obtener el compromiso de los gobiernos para solucionar los diversos problemas sistémicos que condujeron a la crisis en la que se encuentra sumida el mundo, y éstos tampoco se mostraron dispuestos a definir claramente de qué manera cumplirían con sus compromisos de ayuda. Sin embargo, el documento contiene algunas oportunidades útiles que quienes abogan por el desarrollo sostenible pueden usar para colocar el trabajo decente en el centro de la erradicación de la pobreza.

La importancia de la financiación para el desarrollo

En el centro de las deliberaciones sobre la Financiación para el Desarrollo se encuentran los desafíos fundamentales de la redistribución y el reequilibrio de la transferencia de recursos que fluyen del Norte al Sur. El proceso de la financiación para el desarrollo abre una ventana de oportunidad porque reconoce la naturaleza injusta del sistema financiero internacional y el impacto, con frecuencia grave, que puede tener en los países en desarrollo.

Cada vez queda más claro que no sólo los aumentos en los flujos globales de capital no han sido correlativos con la reducción de la pobreza, sino que el crecimiento económico en los países en desarrollo no significa necesariamente crecimiento para los pobres y, en realidad, con frecuencia significa mayor desigualdad dentro de un país. La ayuda es una manera de abordar estos problemas, pero se ha reconocido ampliamente que no puede ser eficaz sin un cambio sistémico más amplio del sistema económico internacional.

En este sentido, SOLIDAR junto con su sindicato y otros actores de la sociedad civil en la alianza Trabajo Decente, Vida Decente aprovecharon la oportunidad de Doha para destacar el hecho de que el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como dimensiones de una política central deben establecerse principalmente a través de todas las áreas temáticas del Consenso de Monterrey.

La prosperidad compartida, con trabajo decente y una vida digna para todos, debería ser el centro de atención del furor actual del estímulo fiscal y la re-regulación. En realidad, el período anterior a la crisis financiera se caracterizó por un crecimiento satisfactorio del PBI pero esto no logró generar empleos decentes y extender los beneficios a las personas trabajadoras y a los pobres. Un nuevo impulso para poner en marcha la economía mundial debe adoptar un paradigma alternativo que fomente la distribución justa de la riqueza creada y los recursos generados en la economía, basado en la centralidad del trabajo decente como mecanismo para la creación de empleo, la protección y el diálogo social y los derechos en el trabajo.

¿Qué sucedió en Doha?

El Documento de Resultados de Doha, a diferencia del Consenso de Monterrey, reconoció el trabajo decente como parte central de las estrategias de desarrollo y la erradicación de la pobreza. El texto específico del Párrafo 12 de la Declaración expresa:

"El desarrollo humano sigue siendo una prioridad fundamental y los recursos humanos son el bien más preciado y valioso de un país. La realización del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos[1]

[1] Sindicatos de Argentina, Brasil, Venezuela, Egipto, Túnez, Namibia, Sudáfrica, India, Indonesia y Filipinas.

es indispensable. Continuaremos invirtiendo en el capital humano a través de políticas sociales de inclusión, entre otras, sobre salud y educación, de conformidad con las estrategias nacionales".

Tampoco es un tema menor que en este momento de desaceleración económica mundial, el Consenso de Monterrey se haya defendido en su totalidad y reafirmado. La igualdad de género se promueve como fundamental para lograr un desarrollo equitativo en la Declaración de Doha, y esto se extiende más allá del Consenso de Monterrey de 2002. Los gobiernos también llegaron a un acuerdo sobre el escabroso tema de convocar a una conferencia de la ONU para abordar el impacto de la crisis financiera para los países en desarrollo. Ésta fue una exigencia clave de los países en desarrollo que fue bloqueada en repetidas ocasiones por Estados Unidos y otros gobiernos industrializados que consideraron a la reunión de gobiernos del G20 como el foro adecuado para analizar la crisis. El acuerdo de obtener un documento de resultados surgió como consecuencia de la presión de gobiernos progresistas, los sindicatos y la sociedad civil, lo que muestra claramente el valor de trabajar en alianzas.

Como resultado, el Presidente de la Asamblea General de la ONU ha convocado a la Conferencia de la ONU al más alto nivel sobre la crisis económica y financiera y su impacto en el desarrollo, que se realizará en mayo de 2009. La Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de la ONU sobre reformas del sistema monetario y financiero internacional, encabezada por Joseph Stiglitz, hará una presentación en esa conferencia. La etapa preparatoria de esta conferencia brinda una importante oportunidad para poner a una ONU transformada y fortalecida en el centro de la reforma del sistema económico internacional.

No obstante, en general, el lenguaje de la Declaración de Doha es no preceptivo y no establece compromisos claros ni objetivos que sean fáciles de supervisar. Los Estados Miembros simplemente prometieron hacer lo posible por cumplir con los compromisos y formular políticas para abordar los temas del Consenso de Monterrey con vistas a alcanzar los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los ODM. Cada una de las secciones del documento contiene los compromisos clave asumidos que puede utilizar la sociedad civil para responsabilizar a los gobiernos y asegurar que en el proceso de seguimiento se lleven a cabo reformas significativas.

El Documento de Resultados de Doha y el trabajo decente

El siguiente es un análisis de cada capítulo del documento, el llamado "Documento de Resultados de Doha" finalmente acordado, de lo que ocurre en relación con el trabajo decente y cómo puede aplicarse el documento en la práctica.

1. Movilización de recursos nacionales para el desarrollo. La aplicación de impuestos es una de las principales maneras mediante las cuales los gobiernos tienen acceso a los recursos para invertir en gasto público, incluida la protección social, que es un componente clave del trabajo decente. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos establezcan o fortalezcan regímenes progresivos que impongan las mayores obligaciones tributarias sobre las ganancias de capital y los ricos, y que proporcionen un alivio de la carga impositiva para las familias de bajos ingresos y los pobres. En relación con este tema, la declaración alienta a los estados a desarrollar "sistemas impositivos más a favor de los pobres" pero no hace referencia a sistemas impositivos "progresivos", que es lo que la sociedad civil exigía.

Otro tema importante en este capítulo es la regulación de los paraísos fiscales y jurisdicciones de secreto bancario. Muchos países desarrollados, incluidos los europeos, tienen un importante papel en el mantenimiento de las jurisdicciones con secreto bancario (paraísos fiscales) a través de las cuales los países en desarrollo pierden aproximadamente 350 mil millones por año en fugas ilícitas de capitales, dos tercios de

las cuales incluyen transferencia y fijación errónea de precios, y evasión fiscal por parte de diversas empresas multinacionales. Los gobiernos deben acordar detener estas pérdidas para que esos fondos estén disponibles en los países en desarrollo para destinarlos a su propio desarrollo. Deben adoptarse medidas eficaces para volver a captar estos recursos perdidos y éstos, a su vez, deben canalizarse hacia la consecución de objetivos de trabajo decente y el apoyo de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP), por ejemplo, que han demostrado tener importantes efectos beneficiosos para la erradicación de la pobreza y la falta de equidad general.

La sociedad civil ha solicitado a los gobiernos que adopten el objetivo de cerrar los paraísos fiscales. Sin embargo, el Documento de Resultados de Doha sólo se refiere a la necesidad de "combatir eficazmente la evasión fiscal" y esto dentro del contexto del lavado de dinero, bienes robados y flujos de capital con intención criminal y corrupción. En ese párrafo no se mencionan los flujos ilícitos relacionados con actividades comerciales.

Finalmente, la sociedad civil también impulsó el fortalecimiento de la arquitectura institucional dentro del sistema de la ONU para abordar la cooperación internacional sobre asuntos tributarios. El objetivo de esta demanda fue trasladar estos debates del ámbito de la OCDE, que actualmente se encarga de estas cuestiones, a la ONU, que no sólo es más inclusiva y universal, sino también más propensa a proporcionar el tipo de asistencia técnica que necesitan los países en desarrollo para estos problemas.

El Documento de Resultados de Doha finalmente reconoció la necesidad de fortalecer el comité de cuestiones tributarias de la ONU: "En este aspecto, reconocemos la necesidad de promover aún más la cooperación en materia de asuntos fiscales y solicitamos al ECOSOC que examine el fortalecimiento de las organizaciones institucionales, como el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación". Este texto abre la oportunidad para un mayor desarrollo de esta propuesta.

2. Movilización de recursos internacionales para el desarrollo, incluida la inversión extranjera directa y flujos de capitales en cartera. Esta sección del documento se ocupa de la necesidad de asegurar que herramientas tales como la inversión extranjera directa se usen para aprovechar el potencial de desarrollo de un país y no para perjudicarlo. Con esto en mente, solicitamos mecanismos de consulta tripartitos y normas fundamentales de trabajo como componentes explícitos de "mecanismos ejecutables" bajo la creencia de que cualquier práctica corporativa socialmente responsable debe ser coherente con los objetivos de trabajo decente, incluso en las zonas de maquilas, donde la mayoría de las personas trabajadoras son mujeres. Afirmamos que el cumplimiento pleno de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT debe ser promovida por el Documento de Resultados de Doha como parte esencial de la inversión extranjera directa socialmente responsable.

En segundo lugar, este capítulo se ocupa de las llamadas "fuentes innovadoras de financiamiento", es decir, la necesidad de buscar financiación adicional para ayudar a enfrentar algunos de los problemas más difíciles de nuestro tiempo, como la adaptación al cambio climático. En la práctica, esto significa que el mundo rico, que es mayormente responsable de la degradación del medio ambiente y cuyos efectos las personas ya están experimentando, necesita encontrar fuentes nuevas e innovadoras para financiar el costo de abordar el problema. Si impusiéramos un simple impuesto de 0,005% sobre la especulación financiera, podríamos recaudar miles de millones de dólares para desarrollo, una sugerencia que ha circulado durante mucho tiempo pero que hoy más que nunca es una cuestión de peso. Nuevamente, se trata de la sencilla cuestión de que los gobiernos tengan el valor de gravar las transacciones financieras que tuvieron un papel tan destructivo en el

sistema actual. El Documento de Resultados de Doha no refleja nuestras demandas, a pesar de las pruebas abrumadoras de que el sistema actual de inversión extranjera directa necesita un cambio fundamental.

3. El comercio como motor de crecimiento y desarrollo. Este siempre fue uno de los capítulos más controvertidos del Consenso de Monterrey, dado el hecho de que no existe consenso sobre el interrogante de cómo y si el comercio hace algún aporte al desarrollo económico, o para expresarlo de un modo más preciso, qué tipo de capacidad y marco regulatorio necesitan los países en desarrollo antes de poder beneficiarse plenamente del comercio.

El movimiento obrero llamó a los Estados Miembros a usar el proceso de financiación para el desarrollo de Doha como oportunidad para reformular las negociaciones de Doha de la OMC con miras a una verdadera ronda de desarrollo. A los fines de la coherencia política, los resultados deberían estar plenamente alineados con los objetivos de desarrollo acordados a escala internacional, incluidos los ODM, así como con los objetivos de trabajo decente y el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo. Deseábamos que el documento reconociera que la presión para que los países en desarrollo implementen una rápida liberalización financiera y del comercio los deja en una posición de vulnerabilidad frente a los mayores riesgos de desaceleración económica en la crisis actual. A los países en desarrollo se les debe otorgar el espacio político para determinar si y cómo eligen abrir sus mercados a una competencia aun mayor. Esto es crucial sobre todo en el sector de los servicios públicos, que tiene un papel clave en la promoción de la inversión en trabajo decente a través de la educación, la salud, las jubilaciones, etc.

Desafortunadamente, durante las negociaciones clave sobre este capítulo surgieron divergencias entre el *G77*, EE. UU. y la UE. El *G77* quería introducir un lenguaje más crítico en el documento de resultados, sobre todo para asegurar que los países en desarrollo tengan el espacio político adecuado para desarrollar sus propias industrias y mantener el sector agrícola. Esto no fue tenido en cuenta por EE.UU y la UE.

El documento de resultados simplemente solicita una conclusión rápida de la Ronda de Doha, párrafo 32: "procuraremos reanudar con urgencia las negociaciones y llegar a un acuerdo sobre modalidades que permitan concluir con éxito, a más tardar a fin de año, el Programa de Doha para el desarrollo de la Organización Mundial de Comercio"

Si esto se lleva a cabo bajo las actuales modalidades, el empleo y la provisión de servicios públicos en los países en desarrollo se verán gravemente afectados. En la crisis actual, los países en desarrollo no pueden darse el lujo de flexibilizar su posición y negociar el espacio político que les permite regular e intervenir, y las barreras comerciales son uno de los pocos medios que les quedan para hacerlo. Además, los países industrializados no tienen interés, en medio de la creciente crisis de empleo, de dar más acceso a los mercados a los países en desarrollo, por lo que la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo de promoción del desarrollo es más remota que nunca. También es extremadamente irónico que la conclusión de la última ronda en la OMC sea considerada como algún tipo de panacea para la crisis, dado que las conversaciones sobre servicios financieros durante la Ronda de Doha desregularán aún más este sector y difundirán más los productos financieros riesgosos, que fueron los causantes de la crisis financiera en primer lugar.

4. Aumento de la cooperación para el desarrollo. La sociedad civil se ha encargado de recordarles a los gobiernos que el trabajo decente constituye el centro de la eficacia del desarrollo y debería ser un objetivo importante de la cooperación para el desarrollo, un tema incluido en la reunión sobre la Eficacia de la Ayuda, realizada en Ghana en abril de 2008. La ayuda sólo puede ser eficaz si el proceso de distribución y desembolso se democratiza por medio de asociaciones auténticas y responsabili-

dad mutua, con plena participación de la sociedad civil. La apropiación democrática de las estrategias de desarrollo por parte del pueblo a través de instituciones políticas representativas y organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos, es el desafío más grande para la gobernanza efectiva del desarrollo.

Defendimos fuertemente nuestra posición de que el programa de Eficacia de la Ayuda necesita hacer avances importantes con respecto a la liberación de la ayuda, la eliminación de peligrosas condicionalidades políticas y la promoción de compras locales. La adopción de políticas de compras locales sería coherente con los objetivos de empleo y trabajo decente como parte del proceso de fortalecimiento de los sistemas de los países.

No obstante, y lo que resulta decepcionante, el documento de Doha no avanza más allá de los resultados de las dos reuniones de alto nivel que se llevaron a cabo sobre este tema en París (2005) y Accra (2008). Sólo se limita a recibir con beneplácito estos acontecimientos y menciona brevemente los principios fundamentales consagrados en las declaraciones de eficacia de la ayuda, como "apropiación, alineación, armonización y gestión por resultados". Esperábamos un lenguaje más exigente sobre la necesidad de poner freno a la condicionalidad política o liberar plenamente la ayuda. Sin embargo, lo máximo que se logró en el Documento de Resultados de Doha fue una mención general de la "creciente necesidad de contar con maneras más sistemáticas y universales de seguir la cantidad, calidad y eficacia de los flujos de ayuda… como el Foro de Cooperación para el Desarrollo (FCD) de la ONU". No obstante, no se acordaron papeles específicos para el FCD de la ONU.

Más decepcionante aún es que, si bien los gobiernos del G20 reconocen los efectos potencialmente graves de la crisis en los países más pobres, no se hicieron promesas en la Cumbre para aumentar los compromisos para la asistencia oficial al desarrollo (AOD). La crisis económica mundial, los aumentos de precios de los alimentos y el petróleo hacen que los incrementos de la ayuda temprana y predecible sean mucho más críticos y SOLIDAR sostuvo que los gobiernos de los países industrializados no deberían aprovechar la actual crisis financiera como excusa para no cumplir con sus compromisos para la AOD. Sin embargo, el Documento de Resultados de Doha sólo logró volver a exponer el viejo compromiso de los países industrializados de alcanzar el 0,7% del PBI para la AOD (párrafo 42), ya mencionado en el Consenso de Monterrey. Seis años después, la brecha en la implementación se agrandó a medida que los países industrializados dejaron de cumplir con sus compromisos de ayuda. El Documento de Resultados de Doha logró incluir una referencia de la disminución de los niveles de AOD en 2006 y 2007. En la UE, muchos gobiernos ya dieron señales de un recorte en sus presupuestos de ayuda y las desventuras de la economía de EE.UU. harán probablemente que éstos continúen pronto. Esto representará un importante desafío para la solidaridad Norte-Sur.

5. La deuda externa. La sociedad civil ha solicitado que la conferencia de Doha adopte la implementación de procesos imparciales y de transparencia con vistas a resolver los conflictos de la deuda para enfrentar de manera eficiente y equitativa las futuras crisis de la deuda. Sin embargo, el documento de resultados no menciona la legitimidad de los reclamos de la deuda, si bien este lenguaje apareció en algunos borradores negociados en Nueva York y antes de ir a Doha. Esta es una gran decepción para la sociedad civil y algunos gobiernos progresistas, como el de Noruega, que proponían que el tema de la ilegitimidad se incluyera en el documento de resultados. Del mismo modo, la mención de eliminar las condiciones de política económica de la cancelación de la deuda se quitó en la versión final del Documento de Resultados de Doha.

Se reconoce en parte la necesidad de "asegurar que la resolución de la deuda sea una responsabilidad compartida por todos los deudores y acreedores… (y que las soluciones

deben ser) transparentes y aceptadas por todos" (párrafo 61). Sin embargo, esto dista mucho de ser lo que esperaba la sociedad civil. Es desafortunado que el último párrafo de la sección sobre la deuda constituya claramente un paso atrás con respecto al Consenso de Monterrey, que se refería a la necesidad de considerar el establecimiento de un "mecanismo internacional de reestructuración de la deuda (párrafo 60 del Consenso de Monterrey).

Peor aún, el documento de resultados otorga un papel central a las instituciones de Bretton Woods, siempre criticadas por la sociedad civil por no haber abordado adecuadamente los problemas de los países del Sur de manera significativa y equilibrada. El documento da pocas esperanzas de que la reestructuración y resolución de la deuda tenga en cuenta las necesidades de desarrollo humano de estos países en lugar de las políticas macroeconómicas. En la actual contracción económica y financiera es probable que muchos más países enfrenten grandes problemas de deuda en los próximos años.

6. Cuestiones sistémicas y coherencia política. La sociedad civil defendió la reforma sistémica a escala total de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI, las llamadas instituciones Bretton Woods. Estas instituciones han estado a la vanguardia de la defensa de tipos de políticas que han causado la competencia destructiva entre economías nacionales, incluida la competencia tributaria, privatizaciones, falta de inversión en servicios públicos y desregulación del mercado laboral, lo que llevó a la explotación y los déficits en el trabajo decente que observamos en la actualidad. El mundo rico está excesivamente representado en su estructura de gobernanza y cualquier reforma del sistema económico mundial debe incluir una renovación completa de estas instituciones y sus normas de manera que pongan el desarrollo sustentable y el trabajo decente en el centro de sus políticas e incluyan a los países en desarrollo en sus procesos de gobernabilidad. En el actual contexto de crisis económica mundial, estas reformas son más necesarias que nunca.

Los gobiernos de los países en desarrollo están ampliamente excluidos de las decisiones sobre aspectos clave del sistema financiero. Ni el G7, la OCDE, el Banco Mundial o el FMI los incluyen de manera igualitaria. Esto debe cambiar. No obstante, las discusiones sobre la modificación del sistema de gobierno del FMI hasta ahora sólo han producido un cambio mínimo y ni siquiera se acercan a los objetivos adoptados en Monterrey.

Además, y vinculado al tema de la gobernabilidad democrática internacional, se trató el tema que generó a una gran controversia entre los diferentes grupos de delegaciones: la reforma del sistema financiero y económico internacional y qué organismo debería ser el encargado de tomar las decisiones necesarias para una revisión del actual sistema. EE. UU., Japón y otros argumentaron que la ONU no era el lugar indicado para tomar tales decisiones y que deberían dejarse en manos del G20. El G77 y algunos países europeos se opusieron ya que una vez más los pobres del mundo se verían excluidos del proceso de toma de decisiones que tienen impacto en su vida. Querían que la ONU fuera parte de esta toma de decisiones.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre EE. UU., la UE y el G77 y se declaró que "las Naciones Unidas realizarán una conferencia al más alto nivel sobre la crisis económica y financiera mundial y sus efectos sobre el desarrollo. La conferencia será organizada por el Presidente de la Asamblea General y las modalidades se definirán a más tardar en marzo de 2009" (párrafo 79).

Este es un paso importante para abordar los problemas sistémicos y las múltiples crisis de la economía mundial. Lo percibimos como un compromiso para fortalecer la cooperación internacional y el multilateralismo para la promoción del desarrollo sostenible, haciendo uso del espacio inclusivo y democrático de la ONU donde todos los estados miembros tienen igual voz, y donde los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil con estado consultivo del ECOSOC pueden participar plenamente en

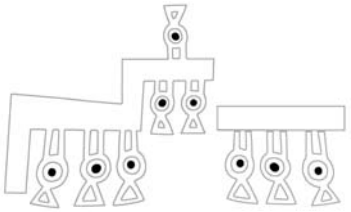
el proceso. Es evidente que el compromiso podría y debería haber sido más fuerte, y mencionar que la conferencia en realidad debía realizarse antes, y no después, del G20; sin embargo, constituye una gran victoria de los países en desarrollo en esta conferencia, ya que estuvo amenazada en todo momento y no estaba claro que EE. UU. cedería en este punto.

Seguimiento de la financiación para el desarrollo

El Documento de Resultados de Doha sobre la financiación para el desarrollo debe comprometer a los Jefes de Estado a acuerdos decisivos y acciones de seguimiento en relación con un conjunto de temas cruciales para el trabajo decente y el desarrollo. En realidad, los cambios principales en la gobernabilidad de la economía mundial deben ser elaborados y promovidos por el nuevo organismo intergubernamental propuesto de Financiación para el Desarrollo (párrafo 65 del Documento de Resultados de Doha). La prioridad del programa de este nuevo organismo debe ser una referencia para asegurar la coherencia política entre los sistemas económicos, financieros y comerciales que redunde en beneficio del desarrollo, con trabajo decente como componente fundamental, conforme a la Declaración sobre justicia social de la OIT. Deben implementarse mecanismos de consulta en este nuevo organismo tendientes a asegurar la continua participación de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos en el seguimiento y la aplicación de medidas para la gobernabilidad efectiva de la economía mundial, la restauración del crecimiento mundial y prosperidad compartida para todos.

Cualquiera sea la modalidad o forma que adopten las cumbres y reuniones propuestas —solicitadas a raíz de la crisis financiera— tememos que haya intentos por tratar de emparchar las fallas de un sistema quebrado y de crear soluciones a corto plazo que nos llevarán de regreso al estado habitual de nuestra actual economía desregulada y libre para todos. Solamente un volver a pensar las cosas completamente puede asegurar que lo que estamos viviendo no vuelva a repetirse y que no olvidamos las promesas que los países ricos han hecho al mundo en desarrollo. Este proceso de reconsideración sólo debe darse en un ámbito verdaderamente internacional, con preferencia el de las Naciones Unidas. Los días en que los ricos se reunían para discutir el destino de los pobres se acabaron. Ahora que nuestras economías y nuestros destinos están más entrelazados que nunca es cuando debemos apelar a soluciones verdaderamente internacionales que permitan que todos participen en su desarrollo y que fortalezcan la solidaridad mutua en tiempos de crisis, en lugar del egoísmo ciego. El movimiento obrero, con su larga historia de solidaridad internacional, tiene que desempeñar un papel clave para asegurar que esto ocurra.

ENFOQUES AMERICANOS REGIONALES Y NACIONALES



EL GRUPO SINDICATOS OMC. ESTRATEGIA Y ACCIÓN SINDICAL DURANTE 2008

Hilda Sánchez, asesora



A dos años, de haberse creado el Grupo Sindicatos OMC, las organizaciones participantes han celebrado 30 teleconferencias, coordinadas por la CSA, conjuntamente con la CSI y el Centro de Investigación Económica y Política(CEPR)/OWINFS.

En este grupo han venido participando las siguientes organizaciones: CTA y CGT Argentina; CUT Brasil; CTRN Costa Rica; CLC Canadá; CUT Colombia; CUT y CAT Chile; UNT, CROC y CTM México; CEOSL Ecuador; CGTP Perú; Convergencia Sindical, de Panamá: PIT-CNT/ Instituto Cuesta Duarte (ICUDU) Uruguay; CNUS República Dominicana; la CST Nicaragua; la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe (CSACC); la Coordinadora de Centrales Sindicales Andina (CCSA), la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), afiliadas de la FITIM regional: UOM Argentina, UTRAMMICOL, CNM-CUT y SITMM, así como OWINFS, quién junto a CEPR, son miembros de la Alianza Social Continental.

Hasta enero del 2009, el Grupo Sindicatos OMC formuló seis declaraciones sobre el proceso de negociaciones de NAMA y en general de la OMC, alertando sobres su impacto socio laboral y a nivel del desarrollo sostenible en Las Américas, y una séptima declaración sobre La Crisis Financiera Global y la OMC.

En cuanto a acciones de lobby se han coordinado dos delegaciones sindicales a Ginebra, donde han participado miembros del Grupo para hacer presente las propuestas sindicales en torno a las negociaciones de la Ronda Doha. La primera fue realizada a principios de marzo del 2007, unos meses después de la reactivación de negociaciones multilaterales, y la otra fue en julio del 2008, durante la semana previa al colapso de las negociaciones.

Por lo que respecta a actividades de formación, el Grupo ha venido desarrollando diferentes actividades de formación sobre el tema de las negociaciones comerciales y de inversión multilaterales y bilaterales, de manera articulada para promover la participación

[1] Acompañando a la CSI/ITUC en el proceso de seguimiento de las negociaciones comerciales de la actual Ronda de Doha, el 8 de febrero del 2007, en una 1ª teleconferencia sindical, varias organizaciones sindicales afiliadas y fraternas de la ahora CSA-CSI, decidieron crear el grupo Sindicatos OMC, para dar seguimiento, articular acciones y hacer presente el enfoque sindical en las negociaciones comerciales de la OMC, particularmente en las de Acceso a Mercados No Agrícolas (AMNA/ NAMA en inglés).Asimismo, con el objetivo de contar con una perspectiva integral de los actuales procesos de negociaciones comerciales y de inversión a nivel regional, el grupo también decidió hacer parte de su agenda lo referente a los procesos de TLCs, Tratados de Libre Inversión y TIFAs, en la medida que todos estos carriles de negociación se retroalimentan y sientan precedentes para futuras negociaciones.

[2] La agenda definida para cada una de las teleconferencias le ha permitido al grupo ir articulando diferentes enfoques y estrategias sindicales a nivel de la región, así como con el Grupo Sindical de NAMA11.

de organizaciones afiliadas y fraternas de la CSA, FITIM/IMF, IE/EI, ISP/PSI, así como de las Coordinadoras Sindicales Regionales.

En cuanto a difusión y elaboración de documentos, el Grupo Sindicatos OMC cuenta con un list server y en el Congreso de creación de la CSA/TUCA(marzo 2008, Panamá) presento el libro "Estrategia y Acción Sindical frente a la OMC y TLCs", el cual incluye mas de 20 documentos de análisis y evaluación de dirigentes sindicales sobre la acción desplegada durante el 2007 en el tema de negociaciones comerciales y de inversión a nivel multilateral y bilateral.

El Grupo articula también con: el Grupo Sindical de NAMA11 en el cual participan las centrales sindicales de los países miembros del Grupo Gubernamental NAMA11, creado justo antes de la Conferencia Ministerial de Hong Kong en el 2005, a los efectos de tener un papel más activo en la negociación de los recortes de aranceles industriales; y con el Grupo de Trabajo de Integración Hemisférica (GTIH) de la CSA, el cuál se encuentra bajo la dirección del Secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenible, Rafael Freire Neto.

En algunas oportunidades han participado por CSA/TUCA el Secretario General, Víctor Báez, y el Secretario de Políticas Económicas y de Desarrollo Sostenible, R. Freire. Asimismo, lo han hecho Teresa Healy, de la CLC Canadá, y Molly McCoy, de la oficina Global Unions en Washington.

Hasta enero del 2009, el Grupo Sindicatos OMC ha formulado seis declaraciones sobre el proceso de negociaciones de NAMA y en general de la OMC, alertando sobre su impacto socio laboral y a nivel del desarrollo sostenible en Las Américas.

Dichas declaraciones, han tenido una amplia difusión a nivel de los negociadores comerciales de la OMC en Ginebra, en diferentes organismos de integración regional, así como entre los Ministros de Economía y Comercio a nivel nacional, contando además con un importante nivel de adhesión de las organizaciones sindicales de las Américas, de las coordinadoras sindicales, así como de la mayor parte de las regionales de las Federaciones Sindicales Internacionales/GUF.

El enfoque estratégico y la acción sindical desarrollada por el Grupo Sindicatos OMC, desde su inicio hasta el momento actual, atendiendo a los registros de las 30 Teleconferencias realizadas así como a las citadas declaraciones emitidas en este periodo, han destacado los siguientes puntos.

- La gran preocupación respecto de que lo que prometía ser una Ronda de Desarrollo se convierta en todo lo contrario: un impedimento estructural al logro de un desarrollo sostenible que de respuesta a las necesidades y los derechos de los sectores más pobres y de los trabajadores y trabajadoras de nuestros pueblos, tal cual ha sido planteado por el sindicalismo en la Plataforma Laboral de las Américas (PLA).
- No realizar un trade off entre Agricultura y NAMA, ya que ambos sectores son fundamentales para el desarrollo de los países.
- No aceptar que las negociaciones en servicios conduzcan a una presión hacia la desregularización y privatización de este sector, particularmente de los servicios públicos esenciales como el agua, la educación y la salud, considerados derechos sociales.
- Fortalecer la posición de los grupos de países en desarrollo como el G90, NAMA-11, G-20 y el Grupo de Economías Pequeñas y Vulnerables para asegurar que los resultados de las negociaciones cumplan con los compromisos de desarrollo asumidos en Doha en el 2001.
- En cuanto a las negociaciones de NAMA, mantener una diferencia de por lo menos 25 puntos entre los coeficientes de países desarrollados y en desarrollo. Ello se fundamenta en que una diferencia menor conduciría a severos cortes en las tarifas aplicadas, afectando los ya de por sí bajos niveles de empleo, imperantes en los países en desarrollo. Asimismo, reducirían el importante espacio de política que se necesita para construir y diversificar el desarrollo industrial a futuro. Las reducciones que se les han venido solicitando a los países en

[3] Los miembros del grupo sindical NAMA11 son representantes de los sindicatos de Argentina (CGT), Brasil (CUT), Sudáfrica (COSATU), Túnez (UGTT), India (HMS), Indonesia (KSBSI), Filipinas (TUCP y APL) y Namibia (NUNW). Los sindicatos de Egipto y Venezuela no han tenido participación activa, pero han suscrito algunas de las declaraciones. Otras dos organizaciones también han sido signatarios de algunas de las declaraciones: FEDUSA (Sudáfrica) y CITU (Indonesia).

desarrollo son mucho más elevadas que las de los países desarrollados.

- Respetar el principio de reciprocidad menos que plena, aumentar el nivel de flexibilidades para los países en desarrollo sin atarlos a bajos coeficientes para de esta forma estar en capacidad de proteger a las industrias intensivas en mano de obra, exigir la posibilidad de elegir entre líneas arancelarias que estarían exentas de cortes arancelarios y líneas arancelarias que estarían sujetas a la mitad de cortes de la fórmula Suiza y, finalmente, permitir que los países en desarrollo tengan la posibilidad de modificar dichas flexibilidades en el tiempo (las líneas tarifarías elegidas) en base a las necesidades desarrollo que los mismos países vayan presentando y al impacto que se haya observado a nivel del desarrollo industrial y empleo formal.
- Identificar por parte de los negociadores comerciales de los países en desarrollo, con la claridad y responsabilidad necesarias, las líneas tarifarías y sectores que requieren de flexibilidades adicionales al ser sectores intensivos en mano de obra. Los niveles de desempleo, precarización e informalidad son ya demasiado elevados en dichos países, como para comprometer aún más la posición de un mayor numero empleos formales a través de los cortes arancelarios propuestos en las actuales propuestas de NAMA que están en la mesa de negociaciones.
- Reiterar la recomendación formulada por la CSI/ITUC de que los Ministerios de Trabajo soliciten un trabajo conjunto de la OIT y la OMC, dirigido a disponer de un profundo análisis ex ante de las consecuencias sobre el trabajo decente y el desarrollo sostenible de la liberalización comercial que se esta impulsando en la Ronda de Doha.

Durante el primer semestre del 2008, el Grupo Sindicatos OMC también tomó nota, por un lado, de cómo la crisis alimentaria internacional no varió la posición de EUA y la UE en las negociaciones de Agricultura sobre todo en su posición sobre subsidios, aranceles y acceso a mercados, productos especiales y medidas de salvaguardias especiales; y, por otro lado, al hecho de las IFIs junto a la OMC vinieron utilizando el argumento liberal de que era necesario un acuerdo en la Ronda Doha para dotar de mayor confianza al sistema multilateral y ofrecer un paliativo a la crisis financiera y alimentaria a nivel mundial.

Desde la perspectiva de las organizaciones sindicales, dicho argumento era y sigue siendo falso, ya que de haberse aprobado las propuestas de liberalización que aún siguen estando en las mesas de los negociadores en la OMC, estas solo vendrán a profundizar dichas crisis. No es posible pensar que mientras el tema de la reducción de subsidios (UE) y de aranceles / apertura de mercados agrícolas (EUA) no sea resuelto, se podrán atender las necesidades de desarrollo y emergencia alimentaria de los países más pobres. La apertura agrícola que se derive de este acuerdo beneficiara esencialmente a las grandes empresas multinacionales agroexportadoras.

A partir de mediados del 2008, los sindicatos fortalecieron la acción nacional convocando a sus gobiernos para que hubiera una total transparencia con las partes interesadas clave como son los sindicatos, un acceso rápido y adecuado a información y consulta, y que las negociaciones fueran plenamente inclusivas. Previamente al inicio de la llamada mini-ministerial en julio en Ginebra, en varios países latinoamericanos las organizaciones sindicales de manera coordinada enviaron comunicaciones a sus gobiernos alertando sobre los riesgos presentes en la que apareciera como una etapa final de las negociaciones.

Algunas de las comunicaciones tuvieron respuesta por parte de los principales negociadores comerciales y/o de los Ministros de Comercio. En otros casos, el envío de cartas derivó en encuentros con negociadores del gobierno.

Durante todos estos meses, los grupos Sindicatos OMC y NAMA 11 Sindical también se mantuvieron activos para informar a las organizaciones sindicales y de la sociedad civil, posibilitando acciones conjuntas de las

centrales nacionales y de otras organizaciones sociales, para posicionar nuevamente las propuestas contenidas en sus declaraciones, entre las cuales destacan aquellas que apuntan a poner el comercio al servicio del desarrollo y al establecimiento de un sistema multilateral de comercio más justo, transparente e inclusivo.

Hacia finales del 2008, dentro de un escenario de plena crisis internacional, el Grupo Sindicatos OMC, emitió el 7 de octubre, su séptima declaración en relación a "La Crisis financiera y la OMC", en la cual plantea que:

- La actual crisis financiera es la dramática confirmación de que el enfoque de políticas basado en la desregulación y la financiarización de la economía llevan al desastre. Ello se aplica de forma directa a dos de las prevenciones que el sindicalismo ha mostrado en relación a negociaciones realizadas en el marco de la OMC: la apertura de los sectores financieros nacionales, como parte del GATS; y la desprotección a los sectores industriales y agrarios, que pueden quedar atrapados en la lógica financiera especulativa, en vez de ser convertidos en un eje central de las políticas de desarrollo en todo país que no tiene aún una estructura económica integrada.
- El retorno a políticas estatales reguladoras de gran tamaño, como las que se observan en estos días por parte de los países industrializados, debe ser visto como el entierro final del enfoque inverso, llevándose consigo a lo que quedaba de las supuestas enseñanzas del Consenso de Washington.
- Por lo anterior, las organizaciones sindicales demandamos a nuestros gobiernos y a los negociadores comerciales en Ginebra, que el conjunto de negociaciones comerciales en la Ronda Doha y a nivel bilateral, que pudiera ser retomado en esta coyuntura, debe quedar intersectado por el enfoque que pone en el centro al desarrollo sostenible, donde el comercio justo y equitativo es un elemento indispensable.
- Convocamos a los negociadores comerciales a cumplir con la recomendación expresada en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa de la OIT, la cual llama a todas las organizaciones internacionales y regionales a promover el trabajo decente, "dado que la política comercial y la política de los mercados financieros repercuten en el empleo".
- Coincidimos con la CSI/ITUC cuando afirma que "La solución de la crisis financiera debe ir de la mano con una acción internacional concertada para estimular el crecimiento y el empleo a fin de que el peligro inminente de recesión mundial se evite, y las economías se pongan en marcha en vías de un desarrollo justo y sostenible"

Hacia finales del 2008, el Grupo Sindicatos OMC continúa dando seguimiento al lento proceso de reactivación de las negociaciones multilaterales, en el escenario de nuevos intentos por parte del Director General de la OMC por alcanzar un acuerdo en la Ronda Doha antes del cierre del año. En noviembre, algunas de las organizaciones sindicales pertenecientes al Grupo, así como CILAS y NALEDI, y el Secretario General de la CSA, se reunieron en un Taller de Trabajo en Montevideo con el apoyo de FESUR y OWINFS, para realizar un ejercicio de construcción de escenarios de negociaciones comerciales y de inversión hacia el 2009, analizando su impacto a nivel del desarrollo sostenible y el empleo. En dicha ocasión se incorporó la reflexión sobre la dimensión de negociaciones bilaterales Norte/Sur y Sur /Sur, que se vienen celebrando con la UE, Asia Pacífico, EUA y Canadá, con el mismo objetivo de identificará líneas estratégicas de acción sindical.

Un punto importante de la agenda de trabajo en dicha reunión, lo constituyó el tema del posicionamiento del sindicalismo mundial frente al impacto de la crisis económica y financiera global y el enfoque

[3] Tal fue el caso de la CUT Chile que recibió la respuesta del Ministro Foxley; el de la CTRN Costa Rica que recibió la respuesta de el Ministro Vinicio Ruiz; y, el de Convergencia Sindical que recibió la respuesta del Ministro Shefer. En otros casos, el envío de cartas derivo en encuentros con los ministros o negociadores comerciales como fue el caso de la CUT Brasil con el Ministro Azevedo; el de la CGTA con diferentes encuentros con el Canciller Niscovolo; el de la CGTP con negociadores del gobierno comerciales de Perú: el de la CTM,CROC, UNT,COR,CROM, CNT de México con el negociador de Acceso a Mercados; y nuevamente el de Convergencia Sindical de Panamá que organizó un Seminario sindical con presencia del Ministro Negociador de Panamá en la OMC.

aperturista neoliberal a nivel del comercio y la inversión, que aún siguen instrumentando el FMI, el BM y la OMC mostrándolo como una solución a la crisis.

En dicho escenario, se concluyo que era previsible que se agudicen aún más las presiones competitivas a nivel de los mercados por parte de las empresas multinacionales, a expensas de los derechos de los trabajadores. Al respecto, se destaco la importancia de reiterar lo establecido en la "Declaración de Washington" de la CSI/ ITUC y Global Unions, la cual ha señalado que "El comercio tiene el potencial para impulsar el crecimiento económico, la recuperación y el desarrollo, pero sólo bajo las condiciones adecuadas. El restablecimiento de la legitimidad pública del sistema de comercio mundial y la conclusión de la Ronda de Doha requiere que se progrese simultáneamente en la aplicación de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras a través de todas las instituciones internacionales, incluida la OMC, y garantizar que los países en desarrollo puedan conseguir logros respecto a la recuperación económica, el empleo y un futuro desarrollo industrial".

Finalmente, el grupo Sindicatos OMC considera que el proceso de negociaciones de la Ronda Doha ha dado cuenta inequívoca de que las actuales propuestas de NAMA que aún siguen en la mesa de negociaciones, particularmente las impulsadas por EEUU y la UE, siguen representando un grave riesgo a nivel del empleo formal, de los ingresos y de los derechos de los trabajadores tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, por lo que resulta urgente y fundamental articular una posición sindical internacional conjunta contra los acuerdos desleales de libre comercio que obstaculizan que nuestros países puedan generar trabajo decente y avanzar en el desarrollo sostenible. Este fue precisamente el motivo que animó una vez más al Grupo a preparar una nueva delegación sindical conjunta de los Grupos Sindicales de NAMA11 y Sindicatos OMC, para asistir a Ginebra en diciembre, para estar presentes en lo que podría ser el último esfuerzo del Director General de la OMC, Pascal Lamy, por llegar a un acuerdo en las negociaciones de la Ronda Doha. Sin embargo, el 12 de diciembre del 2008, Lamy comunico públicamente la falta de "voluntad política" para llegar a un nuevo acuerdo por parte de China, India y EEUU. El tema de la "obligatoriedad" de las negociaciones sectoriales y el de los mecanismos de salvaguardia, junto a las subvenciones al algodón, fueron los puntos centrales para no llegar a un acuerdo entre India y EEEUU lo cual hubiese permitido a Lamy convocar a la Ministerial para el 17 -19 de diciembre.

Las negociaciones se fueron al freezer y según algunos diplomáticos solo saldrán de ahí después de un buen tiempo[3].

[3] Según se informò por la prensa:" El Ministro de Comercio Kamal Nath rechazó de plano las demandas "maximalistas" formuladas por la Representante de Comercio de EEUU, Susan Schwab en una vídeo conferencia telefónica el miércoles por la noche. Schwab insistió en que Nueva Delhi debería sumarse a las negociaciones sobre la eliminación zero para zero de productos químicos y el mecanismo de comprobación cruzada de precio para los productos agrícolas para ser sometido a obligaciones de salvaguardia especial, dijo a los negociadores comerciales. La conferencia fue organizada por el director general de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, quién no esta dispuesto a acoger una reunión ministerial que tiene poco o ningún entusiasmo entre los miembros. Nath de Nueva Delhi,dijo que nunca aceptará las irrazonables exigencias sobre la eliminación arancelaria sectoriales para algunos productos industriales y el mecanismo de salvaguardia especial (SSM) para las importaciones agrícolas. Estas dos cuestiones, junto con las subvenciones al algodón, se identifican como el make-or-mar en las negociaciones de las modalidades de Doha, las cuales sugieren el nivel de reducción de aranceles y de subvenciones para los productos agrícolas y para los productos industriales. Schwab insistió en que Nueva Delhi no sólo debe unirse a las conversaciones sobre la eliminación arancelaria sectorial sobre los productos químicos, junto con otros dos sectores de la elección por Washington, sino también aceptar los compromisos de eliminación arancelaria en el análisis final. Las conversaciones sobre la eliminación arancelaria sectorial implican llevar a cero los aranceles en los sectores decididos por los miembros de la OMC. En una respuesta firme, dijo Nath que con respecto a la tarifa conversaciones sectoriales la India se guió por el mandato de Doha. Dijo que este no llama a una participacion obligatoria. India consideraría la posibilidad de su participación, sin perjuicio de los resultados y no está obligado a aceptar compromisos finales, agregó. Nueva Delhi, dijo, dijo tomaria parte de buena fe, solo 45 días después de que se decidan las modalidades de Doha (de referencia) en la agricultura y de apertura de los mercados para los productos industriales. China también ha adoptado una posición similar a la de la India en su conferencia de vídeo por separado con los EE.UU. y el jefe de la OMC. El país se mantuvo firme en el rechazo de la participación obligatoria en las conversaciones sobre la eliminación de tarifas sectoriales, dijo un alto funcionario chino. Aunque el mandato de Doha dice claramente que la participación en las conversaciones sobre sectoriales era voluntaria, los EE.UU. han hecho una condición de que China, India y Brasil tomen parte en las conversaciones sobre los sectores de productos químicos, maquinaria industrial, eléctricos y electrónicos, sectores sobre los que hay interes de sus

En el actual escenario de crisis económica, donde según cifras de la OIT se perderán más de 20 millones de empleos a nivel mundial, las organizaciones sindicales deben exigir a sus gobiernos mayores niveles de flexibilidades en las negociaciones de apertura arancelaria de NAMA, para proteger aquellos sectores industriales intensivos en mano de obra tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Desde esta perspectiva, el Grupo Sindicatos OMC, con el apoyo de OWINFS, avanzo en la coordinación de un conjunto de aportes sindicales de organizaciones afiliadas y fraternas a la CSI-CSA, con vistas a la definición de estrategias de acción sindical para el 2009, las cuales pudieran ser parte de una publicación que se daría a conocer en una próxima actividad sobre el tema de la crisis económica internacional de la CSA en abril dentro del marco de la Cumbre de Las Américas.

Finalmente, agradecemos a todos los compañeros y compañeras que nos han permitido contar con este cúmulo de experiencias para ser conocidas por las organizaciones sindicales, no sólo de Las Amèricas, sino también de otras regiones.

ANEXO

Declaración Sindical Latinoamericana sobre las negociaciones de NAMA en la OMC. 17 de enero de 2008

Las organizaciones sindicales abajo firmantes hemos venido dando seguimiento al proceso de negociaciones de la OMC, y, particularmente, a las de Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (AMNA/NAMA). En declaraciones anteriores a nuestros gobiernos y a los negociadores comerciales en Ginebra, hemos acompañado las demandas planteadas por los Sindicatos del grupo de Países de NAMA11 respecto a que las flexibilidades del párrafo 8 deben ser incrementadas para los países en desarrollo más allá del 5% y del 10% actualmente contenidas en corchetes en el texto de modalidades. Esta demanda se fundamenta en la necesidad de proteger el empleo actual y futuro en sectores intensivos de mano de obra así como el desarrollo industrial en nuestros países, lo cual no lo asegura dichos porcentajes.

Vemos con preocupación que la presión ejercida por los países del Norte sobre los países en desarrollo sigue caracterizando la dinámica de las actuales negociaciones, lo cual queda reflejado en las recientes comunicaciones formuladas por Canadá, la Comunidad Europea, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos (TN/MA/W/95) referentes a las modalidades revisadas del texto en NAMA, así como en la más reciente comunicación presentada por la Unión Europea y los EE.UU. (TN/MA/W/96) las cuales incluyen propuestas para restringir el nivel de flexibilidades de las que podrían disponer los países en desarrollo.

Rechazamos enérgicamente el contenido de dichas comunicaciones de los países del Norte las cuales no hacen sino desconocer la grave crisis de empleo que prevalece en nuestros países, manifestada en crecientes niveles de desempleo, precarización e informalidad que afectan principalmente a las mujeres y lo/as jóvenes. Este proceso causado, en gran medida, por las políticas diseñadas en el marco del Consenso de Washington, podría verse agravado con los acuerdos sobre apertura industrial que se al-

lobbies industriales. Nath y Schwab también seguían divididos con respecto a la SSM para los países en desarrollo. La SSM está destinado a frenar los aumentos repentinos imprevistos de las importaciones de productos agrícolas internas que socavan los productos agrícolas y los agricultores afectados. Por ejemplo, ya existe un mecanismo para los países industrializados de esta forma, pero los EE.UU. y otros exportadores agrícolas han insistido en una serie de condiciones para el engorroso uso de la SSM. La cuestión central entre las dos partes el miércoles fue la de si un país en desarrollo podrían seguir imponiendo SSM incluso después de la caída de los precios, y debería haber un mecansismo de comprobación cruzada de precio. Los EE.UU. sostuvieron que la India no puede imponer la SSM si los precios están bajando después de la imposición de deberes SSM, una demanda que fue rechazada por la India. Debido a las posiciones maximalistas adoptadas por los EE.UU., las modalidades de las conversaciones de Doha han entrado en una fase de congelación profunda que sólo puede volver a la vida después de la administración Obama asuma el cargo, dijeron varios diplomáticos" .Fuente: http://www.business-standard.com/india/news/doha-talks-headed-for-deep-freeze/01/03/343031/

cancen en el NAMA, y a los cuales vendrá a sumarse, indiscutiblemente, el impacto social y laboral de los Tratados de Libre Comercio ya firmados con los Estados Unidos, y los que, con igual formato, se decidan en el futuro próximo con los países de la Unión Europea y Asia-Pacífico.

Por lo anterior, concordamos con el enfoque de las organizaciones hermanas de los países del NAMA 11, por considerar que su diagnóstico y propuestas se corresponden también con las realidades de nuestros países, demandando a nuestros gobiernos y negociadores comerciales en la OMC:

* El asegurar a los países en desarrollo que pueden aplicar una reducción de tarifa que esté en línea con su etapa del desarrollo, en conformidad con el principio convenido de reciprocidad menos que plena, y que debe ser substancialmente más baja que los cortes emprendidos por los países desarrollados y las propuestas por cortes de tarifas actualmente en la mesa;

* El asegurar que los flexibilidades del "párrafo 8" para los países en desarrollo, como esta precisado actualmente en el texto de julio de 2004, se amplíen substancialmente. Las flexibilidades deben permitir para tanto la exención de un porcentaje de las líneas de tarifa de cortes, así como menos cortes de tarifa para un número de líneas tarifarias. Los países en desarrollo no deben tener que elegir entre estas dos opciones.

* Estos porcentajes se deben aumentar a un porcentaje considerablemente más arriba que el de los niveles actuales (de 5% y 10%), y los criterios con respecto a valor de la importación deben ser reducidos. Esto ayudará a los países en desarrollo en el manejo de la adaptación de sectores sensibles y en la prevención de la crisis social causada por pérdidas del trabajo y el cierre de las empresas que resultaría de la liberalización adicional;

* Dichas flexibilidades deben también permitir de hacer cambios en la selección de las líneas en el futuro, para responder a las necesidades futuras del desarrollo industrial.

Finalmente, reafirmamos que ninguna propuesta debe ser presentada, con el intento de romper las agrupaciones de países en desarrollo como la de NAMA o las agrupaciones regionales de integración.

Signatarios

Víctor Báez Mosqueira
Secretario General de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores
CSI ORIT

Rodrigo Aguilar
Secretario General
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe
CSACC

Juan José Gorriti
Secretario General
Coordinadora de Centrales Sindicales Andina
CCSA

Adolfo Aguirre
Secretario de Relaciones Internacionales
Central de Trabajadores de Argentina
CTA ARGENTINA

Francisco Gutierrez
Secretario de Relaciones Internacionales
Unión Obrero Metalúrgica
UOM ARGENTINA

João Antonio Felício
Secretario de Relaciones Internacionales
Central Única de Trabajadores
CUT BRASIL

Arturo Martínez Molina
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores de Chile
CUT CHILE

Apecides Alvis Fernández
Presidente
Confederación de Trabajadores de Colombia
CTC Colombia

Carlos Rodríguez
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores
CUT COLOMBIA

Rodrigo Aguilar
Presidente
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum,
CTRN COSTA RICA

Israel Salinas
Secretario General
Confederación Única de Trabajadores de Honduras
CUTH HONDURAS

Salvador Medina
Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional
Confederación de Trabajadores de México
CTM MEXICO

Roberto González
Secretario General
Central Sandinista de Trabajadores
CST NICARAGUA

Víctor Torres
Secretario general
Convergencia Sindical
CS PANAMA

Juan José Gorriti
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación General de Trabajadores del Perú
CGTP PERU

Eugenio Pérez Cepeda
Presidente
Confederación Nacional de la Unidad Sindical
CNUS REPUBLICA DOMINICANA

Juan Castillo
Coordinador
Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores
PITCNT Uruguay

Manuel Cova
Secretario General
Confederación Trabajadores de Venezuela
CTV Venezuela

Jorge Campos Miranda
Director Regional
FITIM
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Carlos Salguero
Representante Regional
ICM
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Antonio Rodríguez Fritz
Secretario Regional
Internacional del Transporte
ITF-Américas

Sergio Novais
Presidente Regional
Internacional de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas
ICEM AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Jocelio Drummond
Secretario Regional Inter-Americano
Internacional de Servicios Públicos
ISP Américas

Combertty Rodríguez
Representante Regional
IE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

José Ramírez
Sec. General
Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario, Cuero y Calzado /
organización Regional Interamericana
FITTVCC/ORI

Declaración del Sindicalismo Latinoamericano y Caribeño ante el nuevo texto de Modalidades para las Negociaciones del NAMA en la OMC. 18 de febrero 2008

Las organizaciones sindicales abajo firmantes hemos venido dando seguimiento al proceso de negociaciones de la OMC desde su reactivación a fines de enero del 2007, particularmente a las de Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (AMNA/NAMA). La semana pasada hemos tomado conocimiento del nuevo texto de modalidades para las negociaciones presentado por el presidente del grupo de NAMA, embajador Stephenson, y deseamos expresar nuestra más seria preocupación por su contenido, ya que de ser aprobado por los ministros de nuestros países, implicaría un verdadero retroceso en el logro de un desarrollo sostenible que garantice la creación de trabajo digno y el respeto a los derechos fundamentales de lo/as trabajadore/as.

En declaraciones anteriores, incluyendo la realizada en julio del 2007 cuando se dio a conocer el borrador de negociaciones de NAMA, hemos venido alertando sobre las graves consecuencias sociales y laborales de la actual propuesta de liberalización contenida en las negociaciones de la Ronda Doha.

Frente a este panorama, las organizaciones sindicales consideramos que:

- No es aceptable el rango de coeficientes de entre 19 y 23 de la Fórmula Suiza propuesto para los países en desarrollo. En primer lugar, porque dichos coeficientes conducirán a cortes en las tarifas aplicadas, afectando los ya de por sí bajos niveles de empleo, imperantes en nuestros países. En segundo lugar, porque dichos coeficientes no sólo redundarán en importantes reducciones de las tasas aplicadas en varias de los sectores industriales nacionales, sino que también reducirán el importante espacio de política que se necesita para construir y diversificarlas en el futuro. Tercero, porque las reducciones que se les están solicitando a los países en desarrollo son mucho más elevadas que las de los países desarrolla-

dos. Y, cuarto, porque las reducciones que los países en desarrollo tienen que hacer en NAMA son mucho más elevadas que las que deberán hacer en Agricultura,

- Asimismo, no consideramos aceptable que aún y cuando la gran mayoría de países en desarrollo han venido reiterando, desde julio del año pasado, su rechazo a aceptar dicho rango de coeficientes, éste haya sido nuevamente incorporado al texto de negociaciones, ignorando con ello los intereses de los países que constituyen la mayoría de los miembros de la OMC, relegando así, los compromisos asumidos al principio de la mal llamada Ronda del Desarrollo.
- Damos la bienvenida al hecho de que el porcentaje de flexibilidades sobre las líneas arancelarias que los países podrían excluir de la apertura se deja abierto, sin embargo, quisiéramos hacer hincapié que dichas flexibilidades necesitarían ser mucho más altas que las propuestas en el borrador de julio, para de esta forma estar en capacidad de proteger a las industrias intensivas en mano de obra. Los países en desarrollo deberían también tener la posibilidad de modificar dichas flexibilidades en el tiempo (las líneas tarifarías elegidas) en base a las necesidades desarrollo que los mismos países vayan presentando.
- Apoyamos la posición de NAMA 11, respecto a la necesidad de que exista al menos una diferencia de 25 puntos en los coeficientes entre los países desarrollados y en desarrollo, y hacemos un llamado a nuestros gobiernos que no son parte del Grupo NAMA 11, para apoyar posiciones similares con respecto a los coeficientes y mayores flexibilidades en la actual etapa de negociaciones.
- Demandamos a nuestros gobiernos que identifiquen con la claridad y responsabilidad necesaria, las líneas tarifarías y sectores que requieren de flexibilidades adicionales al ser sectores intensivos en mano de obra. Los niveles de desempleo, precarización e informalidad son ya demasiado elevados en nuestros países, como para comprometer aún más la posición de un mayor numero empleos formales a través de los cortes tarifarios propuestos en el actual texto de NAMA.
- Finalmente, reiteramos la recomendación formulada por la Confederación Sindical Internacional de solicitar a los Ministerios de Trabajo que soliciten un trabajo conjunto de la OIT y la OMC, dirigido a disponer de un profundo análisis ex ante de las consecuencias sobre el trabajo decente y el desarrollo sostenible de la liberalización comercial que se esta impulsando en la Ronda de Doha. En base a lo anterior reclamamos a nuestros gobiernos no aceptar el actual texto de modalidades de NAMA.

Signatarios

Víctor Báez Mosqueira
Secretario General de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores
CSI ORIT

Rodrigo Aguilar
Secretario General
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe
CSACC

Juan José Gorriti
Secretario General
Coordinadora de Centrales Sindicales Andina
CCSA

Adolfo Aguirre
Secretario de Relaciones Internacionales
Central de Trabajadores de Argentina
CTA ARGENTINA

Francisco Gutiérrez
Secretario de Relaciones Internacionales
Unión Obrero Metalúrgica
UOM ARGENTINA

João Antônio Felício
Secretario de Relaçiones Internacionales
Central Única de Trabajadores
CUT BRASIL

Nilton Souza Silva(NECO)
Secretario de Relaciones Internacionales
Forca Sindical- Brasil

Ricardo Patah
Presidente
Unión General de Trabajadores
UGT BRASIL

Roberto González
Secretario General
Central Sandinista de Trabajadores
CST NICARAGUA

Víctor Torres
Secretario General
Convergencia Sindical
CS PANAMA

Eugenio Pérez Cepeda
Presidente
Confederación Nacional de la Unidad Sindical
CNUS REPUBLICA DOMINICANA

Rodrigo Aguilar
Presidente
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum,
CTRN COSTA RICA

Isaías González Cuevas
Secretario General
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROC México

Salvador Medina
Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional
Confederación de Trabajadores de México
CTM MÉXICO

Jaime Arciniega Aguirre
Presidente
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CEOSL

Apecides Alviz Fernández
Presidente
Confederación de Trabajadores de Colombia
CTC Colombia

Carlos Rodríguez
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores
CUT COLOMBIA

Bernardo Rojas
Presidente
CUT AUTENTICA PARAGUAY

Julio César Bazán
Secretario General
Confederación Unitaria de Trabajadores
CUT Perú

Juan José Gorriti
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación General de Trabajadores del Perú
CGTP PERU

Ana Maria Muñoz Caceres
Vice Presidenta Nacional
CUT - CHILE

Manuel Cova
Secretario General
CTV .VENEZUELA

José Roberto Fazio
Secretario de Relaciones Internacionales
PIT CNT- URUGUAY

Sergio Novais
Presidente Regional
Internacional de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas
ICEM para América Latina y el Caribe

Jocelio Drummond
Secretario Regional Inter-Americano
Internacional de Servicios Públicos
ISP Américas

Carlos Salguero
Representante Regional
ICM
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Antonio Rodríguez Fritz
Secretario Regional
Internacional del Transporte
ITF-Américas

Combertty Rodriguez
Representante Regional
IE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Fernando Lopes
Secretario General Adjunto
FITIM Mundial

Acción sindical conjunta de las afiliadas mexicanas de la CSA ante el inicio de negociaciones horizontales en la OMC.14, mayo, 2008

Carta dirigida al Secretario de Economía Eduardo Sojo
Estimado Lic. Eduardo Sojo Garza- Aldape
Secretario de Economía
Presente

Las organizaciones sindicales abajo firmantes, afiliadas a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Las Américas (CSA) y otras organizaciones fraternas, nos dirigimos a Ud. en relación con las actuales negociaciones sobre el Acceso a los Mercados para los Productos no Agrícolas (AMNA) en la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular sobre el inminente inicio del proceso horizontal en las negociaciones con objeto de alcanzar un acuerdo de modalidades plenas en AMNA y en Agricultura.

A lo largo del 2007 y en lo que va del año en curso, hemos expresado en diferentes declaraciones hechas llegar al Director General de la OMC, Pascal Lamy, así como a los negociadores comerciales en Ginebra y al mismo Gobierno de México, nuestra profunda preocupación por el alto nivel de ambición en las negociaciones sobre el AMNA, particularmente respecto de los países en desarrollo, que se verían sujetos a severas reducciones arancelarias en caso de aplicarse la fórmula suiza.

Las simulaciones elaboradas por la Confederación Sindical Internacional (CSI)

revelaron que las reducciones arancelarias para los países en desarrollo, tal como están propuestas en el proyecto de texto sobre las modalidades, publicado en febrero de 2008, tendrían como resultado descensos hasta niveles sin precedentes en los aranceles consolidados y aplicados para una serie de países y sectores. Dichas reducciones no sólo tendrían un impacto negativo inmediato sobre el empleo en los países en desarrollo implicados, sino que además aumentarían la presión a la baja en los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores/as a causa de la creciente competencia, y perjudicaría el desarrollo industrial en dichos países.

Reducir el espacio político en un momento en que la creación de empleo productivo y decente es uno de los principales desafíos globales, constituye una muestra de la manifiesta incoherencia en el establecimiento de políticas internacionales en este momento.

El reciente documento sobre las distintas opciones respecto a las estructuras que se utilizarían en las negociaciones del AMNA, presentado por el Presidente de las negociaciones sobre el AMNA, y en particular las cifras correspondientes a dichas estructuras, no altera en absoluto el elevado nivel de ambición, por lo que persisten nuestras preocupaciones. Las opciones incrementan el número de posibles enfoques a las negociaciones, pero los niveles de reducciones arancelarias y de flexibilidades continúan siendo similares a los propuestos en el texto. Tampoco es probable que las reducciones arancelarias propuestas en el nuevo proyecto de texto sobre modalidades respecto al AMNA varíen mucho de las anteriores.

Independientemente de la estructura que se escoja para el texto de modalidades respecto al AMNA, el nivel de ambición debe reducirse considerablemente para respetar el compromiso, efectuado por todos los miembros de la OMC cuando se lanzó la Ronda Doha, de reducir la reciprocidad plena, permitiendo a los países en desarrollo que aplicasen una reducción arancelaria muy inferior a la propuesta actualmente, que guarde relación con su estado de desarrollo, y que sea sustancialmente menor a los recortes aplicados por los países desarrollados.

Los países en desarrollo deben ser capaces de conservar suficientes flexibilidades para que determinadas líneas arancelarias esenciales queden exentas de la aplicación de reducciones. Deberían además poder aplicar un coeficiente inferior a la reducción prevista por la fórmula suiza en un número suficiente de líneas arancelarias, y no tendrían que verse obligados a realizar concesiones respecto al coeficiente y las flexibilidades. Las flexibilidades propuestas con anterioridad en el texto de modalidades respecto al AMNA deberían incrementarse sustancialmente. Además, tal como han propuesto los sindicatos en repetidas ocasiones, debería existir la posibilidad de alterar los compromisos contraídos respecto a reducciones arancelarias, en línea con las necesidades de empleo y desarrollo que pudieran presentarse en el futuro.

En vista de las preocupaciones expuestas, resulta evidente que ha de concederse más tiempo para estudiar el impacto que tendrían las distintas propuestas realizadas en el documento del 28 de febrero sobre las distintas opciones, presentado por el Presidente del AMNA, y en particular explorar los méritos de la propuesta 8 que prevé una reducción arancelaria aplicando un enfoque estilo "Ronda Uruguay" (es decir, una reducción media en lugar de reducciones línea por línea) que, dependiendo del nivel de ambición, podría aportar a los países en desarrollo la flexibilidad suficiente en sus compromisos respecto a las reducciones arancelarias.

Quisiéramos además subrayar que los compromisos de reducciones arancelarias en cuanto al AMNA han de realizarse tomando en cuenta consideraciones de desarrollo, y en ningún caso a cambio de compromisos por parte de los países desarrollados en agricultura. Está claro que tanto la agricultura como la industria son importantes, y las perspectivas de desarrollo y empleo en estos sectores vitales no deben intercambiarse.

Desearíamos igualmente reiterar nuestra preocupación de que las negociaciones en servicios no conduzcan a una presión hacia la desregularización y privatización de este sector.

Por último, manifestamos nuestra inquietud respecto al proceso de negociación "horizontal" previsto con la participación de altos representantes y Ministros. Teniendo en cuenta el impacto potencial antes descrito que tienen las negociaciones sobre AMNA en los países en desarrollo en lo que respecta al empleo y al desarrollo, no han de decidirse en discusiones secretas en la "sala verde" sin que medie la plena participación de todos los miembros de la OMC y todas las partes interesadas.

Así pues, le instamos a que manifieste su apoyo a que haya una total transparencia para con partes interesadas clave como son los sindicatos, un acceso rápido y adecuado a información y consulta y que las negociaciones sean plenamente inclusivas, en particular en lo referente a posibles negociaciones de la "sala verde".

Atentamente

Signatarios

Alfredo Beltrán García
Presidente de la Unidad Latinoamericana
Consejo Nacional de Trabajadores
CNT

Sergio Flores Muñoz
Secretario de Formación del Comité Ejecutivo Nacional
Confederación Obrera Revolucionaria
COR

José del Valle
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROC

Rodolfo González Guzmán
Secretario del Interior del Comité Central
Confederación Regional Obrera Mexicana
CROM

Salvador Medina
Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional
Confederación de Trabajadores de México
CTM

José Luis Hernández Andrade
Vicepresidente de Relaciones
Unión Nacional de Trabajadores
UNT

Declaración del Sindicalismo Latinoamericano y Caribeño ante el nuevo texto de Modalidades para las Negociaciones de NAMA en la OMC. 28 mayo 2008

Las organizaciones sindicales abajo firmantes, afiliadas y fraternas a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Las Américas (CSA), hemos venido dando seguimiento al proceso de negociaciones de la OMC desde su reactivación a fines de enero del 2007, particularmente las referidas al Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (AMNA/NAMA).

Esta semana hemos tomado conocimiento del nuevo texto de modalidades presentado por el presidente del grupo de NAMA, embajador Stephenson, y deseamos expresar nuestra más seria preocupación por su contenido, el cual sigue alejado del mandato de Doha al no respetar el principio de reciprocidad menos que plena. Ello es así en la medida que el mayor nivel propuesto de flexibilidades sobre las líneas arancelarias que los países podrían excluir de la apertura es formulado a cambio de mantener un elevado nivel de ambición, particularmente respecto de los países en desarrollo, que se verían sujetos a severas reducciones arancelarias en caso de aplicarse los bajos coeficientes propuestos.

Asimismo, coincidimos con el enfoque del Grupo Sindical de NAMA11, al señalar que esta propuesta no solo intenta dividir al Grupo de países de NAMA11, al ofrecer provisiones solo a algunos de sus miembros, sino además deja de lado al conjunto de países en desarrollo que serán afectados por la aplicación de recortes arancelarios vía la Fórmula Suiza.

Ante el inminente inicio de negociaciones horizontales y la posibilidad de mayor presión sobre los países en desarrollo con objeto de alcanzar un acuerdo de modalidades plenas en AMNA y en Agricultura, que convoque a una ministerial en los meses pró-

ximos, demandamos a nuestros gobiernos:

- no realizar un trade off entre Agricultura y NAMA ya que ambos sectores son fundamentales para el desarrollo de nuestros países.
- no aceptar que las negociaciones en servicios conduzcan a una presión hacia la desregularización y privatización de este sector.
- fortalecer la posición de los grupos de países en desarrollo como el G90, NAMA11, G20 y el Grupo de Economías Pequeñas y Vulnerables para asegurar que los resultados de las negociaciones cumplan con los compromisos de desarrollo asumidos en Doha en el 2001.
- en cuanto a las negociaciones de NAMA, adoptar una posición cercana a la del Grupo NAMA11, solicitando mantener una diferencia de por lo menos 25 puntos entre los coeficientes de países desarrollados y en desarrollo. Ello se fundamenta en que una diferencia menor conduciría a severos cortes en las tarifas aplicadas, afectando los ya de por sí bajos niveles de empleo, imperantes en nuestros países. Asimismo, reducirían el importante espacio de política que se necesita para construir y diversificar el desarrollo industrial a futuro. Finalmente, las reducciones que se les están solicitando a los países en desarrollo son mucho más elevadas que las de los países desarrollados.
- complementariamente, respetar el principio de reciprocidad menos que plena, aumentar el nivel de flexibilidades para los países en desarrollo sin atarlos a bajos coeficientes para de esta forma estar en capacidad de proteger a las industrias intensivas en mano de obra, exigir la posibilidad de elegir entre líneas arancelarias que estarían exentas de cortes arancelarios y líneas arancelarias que estarían sujetas a la mitad de cortes de la fórmula Suiza y, finalmente, permitir que los países en desarrollo tengan la posibilidad de modificar dichas flexibilidades en el tiempo (las líneas tarifarías elegidas) en base a las necesidades desarrollo que los mismos países vayan presentando.
- Identificar, con la claridad y responsabilidad necesarias, las líneas tarifarías y sectores que requieren de flexibilidades adicionales al ser sectores intensivos en mano de obra. Los niveles de desempleo, precarización e informalidad son ya demasiado elevados en nuestros países, como para comprometer aún más la posición de un mayor numero empleos formales a través de los cortes arancelarios propuestos en el actual texto de NAMA.
- reiterar la recomendación formulada por la Confederación Sindical Internacional de que los Ministerios de Trabajo soliciten un trabajo conjunto de la OIT y la OMC, dirigido a disponer de un profundo análisis ex ante de las consecuencias sobre el trabajo decente y el desarrollo sostenible de la liberalización comercial que se esta impulsando en la Ronda de Doha.

En base a lo anterior, reclamamos a nuestros gobiernos no aceptar el nuevo texto de modalidades de NAMA, y adoptar una posición que permita que la actual etapa de negociaciones sea totalmente transparente e inclusiva para sectores de la sociedad civil interesados, como las organizaciones sindicales.

Signatarios

Víctor Báez Mosqueira
Secretario General
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Las Américas
CSA

Rodrigo Aguilar
Secretario General
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe
CSACC

Juan José Gorriti
Secretario General
Coordinadora de Centrales Sindicales Andina
CCSA

Gerardo Martínez
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación General del Trabajo
CGT RA ARGENTINA

Adolfo Aguirre
Secretario de Relaciones Internacionales
Central de Trabajadores de Argentina
CTA ARGENTINA

Francisco Gutiérrez
Secretario de Relaciones Internacionales
Unión Obrero Metalúrgica
UOM ARGENTINA

Rudy Geerman
Presidente
Federación de Trabajadores Arubanos
FTA ARUBA

Francisco Antonio Feijoo
Presidente
Confederación Nacional de Profesionales Liberales
CNPL BRASIL

João Antônio Felício
Secretario de Relaçiones Internacionales
Central Única de Trabajadores
CUT BRASIL

Nilton Souza Silva (NECO)
Secretario de Relaciones Internacionales
FORCA SINDICAL- BRASIL

Ricardo Patah
Presidente
Unión Geral de Trabajadores
UGT BRASIL

Pedro Robles Saavedra
Presidente
Central Autónoma de Trabajadores
CAT CHILE

Arturo Martínez Molina
Presidente
José Manuel Díaz
Secretario de Relaciones Internacionales
Central Unitaria de Trabajadores de Chile
CUT CHILE

Julio Roberto Gomez Esguerra
Secretario General
Confederación General de Trabajadores
CGT COLOMBIA

Apecides Alvis Fernández
Presidente
Confederación de Trabajadores de Colombia
CTC COLOMBIA

Carlos Rodríguez
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores
CUT COLOMBIA

Rodrigo Aguilar
Presidente
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum,
CTRN COSTA RICA

Roland Ignacio
Secretario General
Central General di Trashadonan di Corsow
CGTC CURACAO

Fernando Ibarra
Presidente
Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas
CEDOC ECUADOR.

Jaime Arciniega Aguirre
Presidente
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CEOSL ECUADOR

Francisco Quijano Clará
Secretario General
Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños
CATS El SALVADOR

José Pinzón Salazar
Secretario General
Central General de Trabajadores de Guatemala
CGTG GUATEMALA

Paul Loulou Chery
Secretario General
Centrale des Travailleurs Haitiens
CTH HAITÍ

Israel Salinas
Secretario General
Confederación Única de Trabajadores de Honduras
CUTH HONDURAS

Daniel Durón
Secretario General
Confederación General de Trabajadores
CGT, HONDURAS

Alfredo Beltrán García
Presidente de la Unidad Latinoamericana
Consejo Nacional de Trabajadores
CNT MÉXICO

Sergio Flores Muñoz
Secretario de Formación del Comité Ejecutivo Nacional
Confederación Obrera Revolucionaria
COR MÉXICO

Salvador Medina
Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional
Confederación de Trabajadores de México
CTM MÉXICO

José del Valle
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROC MÉXICO

Rodolfo González Guzmán
Secretario del Interior del Comité Central
Confederación Regional Obrera Mexicana
CROM MÉXICO

José Luis Hernández Andrade
Vicepresidente de Relaciones
Unión Nacional de Trabajadores
UNT MÉXICO

Roberto González
Secretario General
Central Sandinista de Trabajadores
CST NICARAGUA

Carlos Humbes
Secretario General
Central de Trabajadores de Nicaragua
CTN, NICARAGUA

Mariano Mena
Secretario General
Confederación General de Trabajadores de Panamá
CGTP, PANAMÁ

Víctor Torres
Secretario General
Convergencia Sindical
CS PANAMÁ

Guillermo Puga
Secretario General
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
CTRP PANAMÁ

Bernardo Rojas
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
CUT AUTENTICA PARAGUAY

Alfredo Lazo Peralta
Secretario General
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
CATP PERU

Julio César Bazán
Secretario General
Confederación Unitaria de Trabajadores
CUT PERÚ

Juan José Gorriti
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación General de Trabajadores del Perú
CGTP PERÚ

Víctor Villalba Rodríguez
Presidente
Central Puertorriqueña de Trabajadores
CPT PUERTO RICO

Gabriel del Rio Doñe
Secretario General
Confederación Autónoma Sindical Clasista
CASC REPUBLICA DOMINICANA

Eugenio Pérez Cepeda
Presidente
Confederación Nacional de la Unidad Sindical
CNUS REPUBLICA DOMINICANA

Teresita Capurro
Secretaria General
ASU-FED. MAGISTERIO URUGUAY

Juan Castillo
Coordinador
Plenario Intersindical de Trabajadores Comando Nacional de Trabajadores
PITCNT URUGUAY

Manuel Cova
Secretario general
Central de Trabajadores de Venezuela
CTV VENEZUELA

José Ramírez
Sec. General
Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario, Cuero y Calzado/ Organización Regional Interamericana
FITTVCC/ORI

Carlos Salguero
Representante Regional
ICM AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Combertty Rodríguez G.
Coordinador principal para América Latina
Internacional de la Educación
IE AMERICA LATINA

Sergio Novais
Presidente Regional
Internacional de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas
ICEM AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Jocelio Drummond
Secretario Regional Inter-Americano
Internacional de Servicios Públicos
ISP AMERICAS

Jorge Almeida
Director Regional
Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas
FITIM AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Antonio Rodriguez Fritz
Secretario Regional
Internacional del Transporte
ITF-AMÉRICAS

Percy Oyola Palomá
Secretario General
Confederación Latinoamericana de Trabajadores de los Servicios Públicos
CLATSEP

Juan Carlos Schmid
Secretario General
Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Transporte y las Comunicaciones
CLTTC

Francisco Verano
Presidente
Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores
COLACOT

Oscar Semerel
Presidente
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Jubilados y Pensionados
CLATJUP

Leonardo Marquez
Secretario General
Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios, de Seguros y Servicios Afines
FELATRABS

Roberto Mejía Alarcón
Presidente
Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social
FELATRACS

Anselmo Pontilius
Presidente
Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Hotelería y Turismo
FLACTUR

Wilson Wanderley Vieira
Presidente

Carlos Gaitán
Presidente Honorario
Federación Latinoamericana de Trabajadores de las Industrias y la Construcción
FLATIC

Los Sindicatos declaran: La Ronda de Doha gira hacia el libre comercio con un fuerte impacto sobre el desarrollo sostenible y el empleo.29 julio 2008

Los organizaciones sindicales afiliadas y fraternas a la Confederación Sindical de Trabajadores/as de Las Americas (CSA) han venido dando seguimiento a las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC, desde su reactivación a principios del 2007. Recientemente, en el marco de las apresuradas negociaciones en Ginebra por acordar una hoja de ruta para lograr la conclusión de la Ronda a finales de este ano, se han confirmando los grandes riesgos sobre los cuales los sindicatos han venido alertando en diferentes declaraciones durante el 2007 y el año en curso: • Que la actual propuesta que el Director General de la OMC, Pascal Lamy, ha puesto en la mesa de los negociadores, responde exclusivamente a los intereses de los países desarrollados, dejando a un lado el respeto a los principios de "reciprocidad menos que plena" y "trato igual y diferenciado" que hubiesen permitido establecer reglas del comercio multilateral más equilibradas y justas, orientadas al desarrollo sostenible y a la generación de trabajo digno. • Que los países en desarrollo están siendo nuevamente presionados para "tomar o dejar" de manera urgente la propuesta de Lamy, sin mediar un serio proceso de evaluación sobre el impacto que pudiese tener la misma, en cuanto a la perdida de espacio para el manejo de políticas publicas, mayores niveles de desempleo, precarización, informalidad y pobreza. • Que nuevamente serán los países en desarrollo los que se comprometan a una mayor liberalización de sus mercados industriales, mientras que Europa y los Estados Unidos siguen aún retaceando la protección de sus mercados agrícolas. • Que la actual propuesta sobre Acceso a Mercados No Agrícolas (NAMA/AMNA), al igual que las elaboradas previamente por el presidente del Grupo de Negociaciones, embajador Sthepenson, no solo continúa atentando contra el potencial industrial y la generación de trabajo digno, sino que restringe aún mas los márgenes de flexibilidad con los cuales podrían contra los países en desarrollo para excluir determinados sectores industriales sensibles de la liberalización arancelaria, de aprobarse la llamada "cláusula de anticoncentración" que está en negociación. Coincidimos con la apreciación formulada por el Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Guy Ryder, al afirmar que "las modalidades que se están negociando necesitan contribuir al desarrollo industrial, no socavarlo. Los gobiernos miembros de la OMC, deben escuchar a los sindicatos de los países de NAMA que serán afectados por este último proyecto, y en lugar de aceptar la oferta disponible que está sobre la mesa, deben continuar negociando hasta que el Programa de Desarrollo de Doha sea digno de ese nombre, aún cuando se enfrentan a una enorme presión para aceptar este desequilibrado acuerdo. " Demandamos a nuestros gobiernos que instruyan a sus misiones negociadoras en Ginebra a no aceptar la actual propuesta del Director General de la OMC, Pascal Lamy.

Signatarios

Víctor Báez Mosqueira
Secretario General
Trade Union Confederation of Americas TUCA/CSA

Rodrigo Aguilar
Secretario General
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe
CSACC

Gerardo Martínez
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación General del Trabajo
CGT RA ARGENTINA

Adolfo Aguirre
Secretario de Relaciones Internacionales
Central de Trabajadores de Argentina
CTA ARGENTINA

João Antônio Felício
Secretario de Relaçiones Internacionales
Central Única de Trabajadores
CUT BRASIL

Nilton Souza Silva (NECO)
Secretario de Relaciones Internacionales
FORCA SINDICAL- BRASIL

Ricardo Patah
Presidente
Unión Geral de Trabajadores
UGT BRASIL

Arturo Martínez Molina
Presidente
José Manuel Díaz
Secretario de Relaciones Internacionales
Central Unitaria de Trabajadores de Chile
CUT CHILE

Apecides Alvis Fernández
Presidente
Confederación de Trabajadores de Colombia
CTC COLOMBIA

Rodrigo Aguilar
Presidente
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum,
CTRN COSTA RICA

Israel Salinas
Secretario General
Confederación Única de Trabajadores de Honduras
CUTH HONDURAS

Salvador Medina
Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional
Confederación de Trabajadores de México
CTM MÉXICO

Víctor Torres
Secretario General
Convergencia Sindical
CS PANAMÁ

Eugenio Pérez Cepeda
Presidente
Confederación Nacional de la Unidad Sindical
CNUS REPUBLICA DOMINICANA

Jocelio Drummond
Secretario Regional Inter-Americano
Internacional de Servicios Públicos
ISP AMERICAS

Jorge Almeida
Director Regional
Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas
FITIM AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Antonio Rodriguez Fritz
Secretario Regional
Internacional del Transporte
ITF-AMÉRICAS

Combertty Rodríguez G.
Coordinador principal para América Latina
Internacional de la Educación
IE AMERICA LATINA

Gerardo Martínez
Secretario General
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
CCSCS

Sheila Katz
Congreso laboral Canadiense
CLC Canadà

José Luis Hernández Andrade
Vicepresidente de Relaciones
Unión Nacional de Trabajadores
UNT MÉXICO

Juan Castillo
Coordinador
Plenario Intersindical de Trabajadores
Comando Nacional de Trabajadores
PITCNT URUGUAY

Pedro Robles Saavedra
Presidente
CAT –Chile

Alfonso Pastene Uribe
Secretario General
CAT – Chile

Magdalena Castillo Díaz
Presidenta
CONSFETRACOSI – Chile

Jaime Arciniega
Presidente
CEOSL Ecuador

Declaración Sindical sobre la Crisis Financiera Internacional y la OMC. 7 octubre 2008

Las organizaciones sindicales abajo firmantes hemos venido dando seguimiento al proceso de negociaciones de la OMC desde el 2007, y en diferentes declaraciones a los gobiernos nacionales y a los negociadores comerciales en Ginebra, hemos alertado sobre los riesgos que a nivel del empleo, los derechos laborales y el desarrollo sostenible podrían derivarse de las actuales propuestas sobre apertura industrial, agrícola y de servicios que aún siguen siendo consideradas por los negociadores, posteriormente al colapso de julio.

La actual crisis financiera es la dramática confirmación de que el enfoque de políticas basado en la desregulación y la financierización de la economía llevan al desastre. Ello se aplica de forma directa a dos de las prevenciones que el sindicalismo ha mostrado en relación a negociaciones realizadas en el marco de la OMC: la apertura de los sectores financieros nacionales, como parte del GATS; y la desprotección a los sectores industriales y agrarios, que pueden quedar atrapados en la lógica financiera especulativa, en vez de ser convertidos en un eje central de las políticas de desarrollo en todo país que no tiene aún una estructura económica integrada.

Más en general, el retorno a políticas estatales reguladoras de gran tamaño, como las que se observan en estos días por parte de los

países industrializados, debe ser visto como el entierro final del enfoque inverso, llevándose consigo a lo que quedaba de las supuestas enseñanzas del Consenso de Washington.

Por lo anterior, las organizaciones sindicales demandamos a nuestros gobiernos y a los negociadores comerciales en Ginebra, que el conjunto de negociaciones comerciales en la Ronda Doha y a nivel bilateral, que pudiera ser retomado en esta coyuntura, debe quedar intersectado por el enfoque que pone en el centro al desarrollo sostenible, donde el comercio justo y equitativo es un elemento indispensable.

Igualmente, convocamos a los negociadores comerciales a cumplir con la recomendación expresada en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa de la OIT, la cual llama a todas las organizaciones internacionales y regionales a promover el trabajo decente, "dado que la política comercial y la política de los mercados financieros repercuten en el empleo".

Coincidimos con la Confederación Sindical Internacional cuando afirma que "La solución de la crisis financiera debe ir de la mano con una acción internacional concertada para estimular el crecimiento y el empleo a fin de que el peligro inminente de recesión mundial se evite, y las economías se pongan en marcha en vías de un desarrollo justo y sostenible"

Signatarios

Linda Chavez-Thompson
Presidenta
Confederación Sindical de Las Américas
CSA - TUCA

Victor Báez Mosqueira
Secretario General
Confederación Sindical de Las Américas
CSA - TUCA

Juan José Gorriti
Secretario General
Coordinadora de Centrales Sindicales Andina
CCSA

Gerardo Martínez
Secretario General
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
CCSCS

Rodrigo Aguilar
Secretario General
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe
CSACC

Gerardo Martínez
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación General del Trabajo de la República Argentina
CGT-RA ARGENTINA

Adolfo Aguirre
Secretario de Relaciones Internacionales
Central de Trabajadores de Argentina
CTA ARGENTINA

Nilton Souza Silva (NECO)
Secretario de Relaciones Internacionales
FORCA SINDICAL- BRASIL

João Antonio Felicio
Secretário de Relações Internacionais
Central Única dos Trabalhadores
CUT – BRASIL

Ricardo Patah
Presidente
Unión General de Trabajadores
UGT BRASIL

Kenneth V. Georgetti
Presidente
Congreso Laboral Canadiense
CLC CANADA

Alfonso Pastene Uribe
Secretario General
Central Autónoma de Trabajadores
CAT - CHILE

Magdalena Castillo Díaz
Presidenta
Confederación de Trabajadores del Comercio Servicios e Industria de Chile
CONSFETRACOSI

José Manuel Diaz
Encargado Secretaria Relaciones Internacionales
Central Unitaria de Trabajadores
CUT CHILE

Fabio Arias
Fiscal
Central Unitaria de Trabajadores
CUT COLOMBIA

Rodrigo Aguilar
Presidente
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum,
CTRN COSTA RICA

Jaime Arciniega Aguirre
Presidente
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CEOSL ECUADOR

Israel Salinas
Secretario General
Confederación Única de Trabajadores de Honduras
CUTH HONDURAS

Sergio Flores Muñoz
Secretario de Formación del Comité Ejecutivo Nacional
Confederación Obrera Revolucionaria
COR MÉXICO

Alfredo Beltrán García
Presidente de Integración Latinoamericana
Consejo Nacional de los Trabajadores de México

CNT
Presidente Coordinador
Coordinadora Mexicana de Trabajadores
CMT

Salvador Medina
Subsecretario de Relaciones del Comité Nacional
Confederación de Trabajadores de México
CTM MÉXICO

José del Valle
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROC MÉXICO

José Luis Hernández Andrade
Vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores
UNT MÉXICO

Roberto González
Secretario General
Central Sandinista de Trabajadores
CST NICARAGUA

Víctor Torres
Secretario General
Convergencia Sindical
CS PANAMÁ

Guillermo Puga
Secretario General
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
CTRP PANAMÁ

Miguel Zayas Martínez
Secretario General en Ejercicio
Central Nacional de Trabajadores
CNT – PARAGUAY

Bernardo Rojas
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
CUT AUTENTICA PARAGUAY

Julio César Bazán
Secretario General
Confederación Unitaria de Trabajadores
CUT PERÚ

Jacobo Ramos
Secretario General
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNTD REPUBLICA DOMINICANA

Rafael Abreu
Presidente
Confederación Nacional de la Unidad Sindical
CNUS REPUBLICA DOMINICANA

Manuel Cova
Secretario general
Central de Trabajadores de Venezuela
CTV VENEZUELA

Jorge Almeida.
Representante Regional.
FITIM-Oficina Regional América Latina y El Caribe.

Combertty Rodríguez García
Coordinador Regional
Internacional de la Educación para América Latina
IE

Carlos Salguero
Representante Regional
Internacional de trabajadores de Construcción y Madera para América Latina y el Caribe
ICM

Jocelio Drummond
Secretario Regional Inter-Americano
Internacional de Servicios Públicos
ISP AMERICAS

Antonio Rodríguez Fritz
Secretario Regional
Internacional del Transporte
ITF-AMÉRICAS

Rodolfo Benítez
Secretario Regional
UNI AMERICAS

EL MOVIMIENTO SINDICAL EN LAS NEGOCIACIONES DE LA RONDA DE DOHA 2008: LA CGTRA

Agostina Giardini, Marita González y Antonio Jara,
Secretaría de Relaciones Internacionales

La Argentina ha sido durante los nueve años que duró la Ronda de Uruguay, el paradigma de la liberalización, la discípula ejemplar del Consenso de Washington. Aferrada a una política exterior que privilegió la apertura de su economía, en particular del sector servicios, comercio y actividades financieras; elogiada por todos los organismos multilaterales; de espaldas a sus lazos históricos y culturales de la región, su final fue una profecía anticipatoria de la crisis económica internacional que hoy atraviesa al mundo. El desmantelamiento de su aparato productivo, la reprimarización de su economía y la dependencia extrema a los ciclos económicos capitalistas mundiales constituyeron los resultados del implante de este proyecto neoliberal.

De esa experiencia, los argentinos y argentinas hemos aprendido algunas lecciones, sobre todo en lo que refiere al delicado equilibrio necesario entre la inserción de nuestra economía en un sistema multilateral de comercio y la autodeterminación de los resortes cardinales de las políticas monetaria, cambiaria, productivas, comercial, orientadas a generar un desarrollo endógeno basado en el comercio justo y teniendo por prioridad la creación de trabajo digno. El trabajo es la base de la realización humana, de la vida familiar y social, y ese es el arquetipo de sociedad por el que luchamos.

En dicho contexto, la Ronda Doha o Ronda de Desarrollo, iniciada a partir de Noviembre de 2001, tenía como finalidad originaria promover oportunidades para las naciones en desarrollo tendientes a lograr una mayor participación de los beneficios del sistema mundial del comercio. Sin embargo, en todo el transcurso de las negociaciones de la Ronda se observa un desigual compromiso entre lo que están dispuestos a aceptar los países industrializados y aquello que requieren de los demás países que forman el acuerdo multilateral. El hecho que las negociaciones refieran meramente a cuestiones arancelarias y flexibilidades, demuestra que estamos lejos de definir un comercio justo que permita el desarrollo sostenible para los países periféricos[1].

El futuro del sistema multilateral de comercio es en la actualidad tema de preocupación para las definiciones de política de las organizaciones de la clase trabajadora argentina y mundial. Desde la Confederación General del Trabajo de la República Argentina hemos tomado el desafío de incidir en esta dimensión en el entendido

[1] Extraído de MERCOSUR/FCES/XXXI/Recomendación N° 1/05

que un comercio justo a escala global debe priorizar el empleo y las condiciones de trabajo de hombres y mujeres.

En esta Ronda, los Estados se han propuesto recortes arancelarios muy ambiciosos, muy superiores a los fijados en la Ronda Uruguay. Los sucesivos fracasos de las Ministeriales y Mini-Ministeriales durante el año 2008 prefiguran un posible debilitamiento del sistema de la Organización Mundial de Comercio.

La pérdida de confianza en la OMC como foro negociador, seguramente agravada por la crisis financiera capitalista actual, podría inicialmente entusiasmarnos, dado los peligros que se ciernen sobre un cierre de la Ronda con coeficientes arancelarios perjudiciales para nuestros países y con flexibilidades poco auspiciosos para la consolidación de un entramado industrial férreo. Sin embargo, también puede augurar políticas muy agresivas de los países desarrollados que inunden nuestra región de acuerdos preferenciales, tratados bilaterales de inversión y, por supuesto, más TLC.

Es necesario afirmarlo una y otra vez: "Los países en desarrollo son los principales beneficiarios de un sólido sistema sustentado en normas multilaterales, pero estas no son las normas que al día de hoy ha instalado la OMC". Bajo esa premisa, el sindicalismo debe trabajar e incidir en todo el sistema multilateral, con vistas a crear un paradigma basado en la justicia social.

La crisis actual coadyuva al tan declamado fracaso de la Ronda de Doha, pero puede haber un resultado peor, que se alcance un mal acuerdo o que la búsqueda de proteccionismos de los países centrales, hoy en crisis, desconozca sus resultados y apelen a contradecir en sus políticas domésticas lo que firman en los escenarios internacionales; y como sabemos, la OMC no funciona como un verdadero tribunal internacional de "represalias cruzadas", sino que son nuestros países los más castigados por los órganos internacionales cuando orientamos nuestras políticas a la protección de productos manufacturados de mayor valor agregado. El argumento por el cual, Inglaterra combatió la competencia industrial entre 1750 y 1847, o Estados Unidos que aplicó tarifas arancelarias a los bienes industriales entre 1820 y 1931 para proteger sus manufacturas, por trillado que parezca no deja de ser veraz. Y es legítimo que nuestros países persigan la diversificación de su producción y la creación de una red productiva con mayor valor agregado.

El mandato de la Confederación General del Trabajo

La CGT representa a cuatro millones y medio de trabajadores y trabajadoras, distribuidos en sindicatos de muy disímiles características, tanto por su origen público y privado, por las actividades que despliegan, por su mayor o menor vinculación con el sector externo o por su relevancia en el mercado interno. Esta diversidad nos coloca en la necesidad de compatibilizar en la heterogeneidad de intereses. Esta afirmación es mucho más válida cuando se trata de describir el trabajo realizado en el Grupo de Comercio Internacional de la Secretaría de Relaciones Internacionales. En este grupo conviven sindicatos, como la Federación de la Carne y el sindicato textil, donde los acuerdos que se alcancen en la Ronda de Doha, los impacta en forma contradictoria. Siendo la Argentina un país altamente competitivo en materia de producción de carne, una mayor liberalización con mayor acceso a mercados de este producto, sería altamente beneficioso, mientras que para el sector textil o el metalúrgico constituyen los sectores más sensibles a las rebajas arancelarias. Sin embargo, prima en nuestro movimiento obrero, la solidaridad y fraternidad de los compañeros y compañeras, que privilegian el bienestar general de la sociedad, incluso por encima de los intereses meramente sectoriales.

En dicho marco, la CGTRA desarrolla su trabajo de comercio internacional en base a determinados principios éticos e ideológicos, que amalgama a nuestro movimiento obrero organizado.

- La clase trabajadora argentina participa del trabajo sindical de la Ronda de

Doha con el objetivo que el acuerdo final realmente constituya un compromiso mundial que elimine los desequilibrios del sistema multilateral de comercio.

- El acceso a mercados en materia agrícola constituye una prioridad y su tratamiento debe ser considerado con la misma firmeza y perseverancia que los productos no tradicionales (NAMA), tal como lo establece el párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Hong Kong. No es viable un sistema multilateral que, orientado desde los países centrales, privilegie el tratamiento de los productos no tradicionales, incluso cuando esta lógica también parece prevalecer dentro de un sector importante del movimiento sindical mundial.

- La CGTRA, a igual que las demás centrales de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS- insta a que los países del Mercosur se mantengan en posición de bloque. El Mercosur constituye nuestro más importante desafío de integración regional, cuyos objetivos exceden las metas comerciales; por su naturaleza es un proyecto político que busca la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social. Si la búsqueda de la justicia social se inscribe en los considerandos del Tratado de Asunción, la postura común del bloque regional, se expresa en el tercer párrafo de forma contundente: "La adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales". En dicho sentido, durante las negociaciones de Doha llevadas a cabo a fines de julio de 2008, se observa con preocupación, las discrepancias entre los socios del Mercosur. Abogamos, que en las próximas ministeriales, se retome una senda común.

- La CGT brega por exigir que las flexibilidades se asienten en el Principio de Tratamiento Especial y más Favorable para los Países en Desarrollo.

- La Argentina ha liberado su sector servicios durante toda la década del '90 con resultados perjudiciales en lo referente al empleo, la autonomía geopolítica, la disposición de herramientas políticas de regulación de todo el sector, entre otros. En dicho sentido, la CGT busca revertir este proceso, a consciencia que esta tarea comienza con medidas internas, más allá de las negociaciones de la Ronda de Doha.

- En materia de patentes y propiedad intelectual, la CGTRA, entiende, tal como lo establece la CSA, que "En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados"[2].

- En el actual estado de las negociaciones, el impacto en el empleo en algunos sectores industriales en la Argentina atentan con la expansión de la demanda interna que se ha verificado en el último lustro. Por ello, el movimiento obrero resistirá cualquier intento de un acuerdo que detenga la diversificación del aparato industrial y la productividad.

Todos estos puntos son coincidentes, hasta hoy, con la postura que emana de la Cancillería Argentina, por ello, la CGT estableció – como se desarrolla en el apartado subsiguiente- una alianza estratégica con la postura del NAMA 11 y en particular del gobierno argentino. Dicha alianza se basa en dos principios rectores, la autonomía sindical en sus actividades de la Ronda y una estrategia común de defensa del trabajo decente en nuestro país en todos los foros internacionales. Los esfuerzos de la Argentina para alcanzar un resultado en la Ronda de Doha, tal como lo afirman los negociadores, es "avanzar en un contexto de modalidades que impliquen un coeficiente 35 de fórmula suiza y flexibilidades para un 16% de líneas NAMA, con 50% de corte y sin límite de valor de comercio. Ello constituye una contribución significativa y el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer, en el actual contexto internacional y de la negociación"[3].

[2] Extraído de Plataforma Laboral de las Américas. Panamá, Agosto de 2005.
[3] Extraído de Comunicación de la Argentina. OMC. TN/MA/W/109. 25 de noviembre de 2008. Acceso a los Mercados para los Productos no Agrícolas.

Las Actividades de CGTRA junto a la CSA y la CSI

La CGTRA desarrolla las actividades relacionadas a las negociaciones en la Ronda de Doha junto a la CSI y la CSA. La CGT participa en las teleconferencias del grupo sindical NAMA11 de CSI organizado por Esther Busser como así también del grupo sindical latinoamericano que coordina Hilda Sánchez de la CSA. A su vez, estamos en contacto directo constantemente por el E-server donde recibimos, enviamos información y consultamos sobre la temática.

Para poder asumir los compromisos internacionales en esta materia, la CGTRA conformó en el ámbito nacional el Grupo de Comercio Internacional (en adelante GCI) para tratar los temas relacionados y poder dar una respuesta rápida y contundente a las cuestiones del comercio internacional. El grupo está conformado por numerosos sindicatos, entre los que se destacan: AOTRA, FAECYS, Federación de la Carne, UATRE, UOCRA, UOM, UTICRA, UPCN, UPTSA, SOIVA, SAT, entre otros[4]. El grupo de trabajo circula información en forma semanal y realiza reuniones regularmente.

Durante el 2008 este grupo se ha reunido en varias ocasiones tanto para el análisis de los avances en las negociaciones de la Ronda como en el intercambio de información sobre el impacto en el empleo en los sectores, particularmente los sensibles.

Asimismo hemos compartido reuniones con los funcionarios de Cancillería Argentina. Es particular es de destacar el trabajo conjunto que llevamos a cabo con el Ministro Luis Niscovolos, ex-Director de Asuntos Multilaterales de la Cancilleria. De acuerdo a estos intercambios, el gobierno argentino adoptó en las negociaciones la postura de mantener el equilibrio de las negociaciones en todos los sectores respetando el principio de reciprocidad menos que plena y preservar el arancel externo común del MERCOSUR. En palabras de este funcionario "Es legítimo que los países desarrollados deseen vender sus productos manufacturados, pero en mercados sanos, con consumidores con capacidad adquisitiva y eso significa con niveles de empleo."

Uno de los temas centrales de debate entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la CGTRA es la necesidad de contar con simulaciones de impacto del empleo sectorial, tanto en lo que refiere al empleo directo como al empleo indirecto. Las estimaciones que realiza la CSI son de suma importancia como insumo que favorecen las posiciones de las negociaciones gubernamentales, sin embargo se ha observado que la base de población ocupada está desactualizada, respecto a la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) y respecto a los propios registros sindicales. Esta constituye una tarea de investigación central para el GCI. No obstante, a pesar de las dificultades que acarrea este tipo de tareas, en particular por la ausencia en algunos casos de base empírica, el propio grupo debatió extendidamente sobre la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el tratamiento que se le da a NAMA y los demás sectores, en particular agricultura y propiedad intelectual.

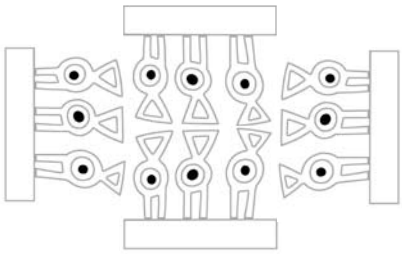
El Grupo de Comercio Internacional ha establecido como agenda de trabajo para el año 2009 debe centrarse en los siguientes puntos:

1. Desarrollar un trabajo más exhaustivo en el seguimiento en materia de agricultura, acceso a mercados y propiedad intelectual, instando a un intercambio más fluido en estas materias con la CSI y la CSA.

2. Paralelamente a las acciones político-sindicales que realiza la CGT en los ámbitos de negociación, se requiere subsanar las falencias en materia de estadísticas e indicadores en los sectores sensibles con bases de insumos propias, creando un subgrupo técnico que estudie los impactos en materia de empleo frente a la adopción del coeficiente.

[4] AOTRA –Asociación Obrera Textil de la República Argentina-, FAECYS – Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios-, Federación de la Carne, UATRE – Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores-, UOCRA – Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina- , UOM – Unión Obrera Metalúrgica-, UTICRA - Unión de Trabajadores. de la Industria del Calzado. de la República Argentina, UPCN – Unión de Personal Civil de la Nación-, UPTSA –Unión del Personal y Trabajadores de la Sociedad argentina de Autores y Compositores-, SOIVA Sindicato Obrero de la Indumentaria y Vestimenta de Argentina, SAT, Sindicato Argentino de Televisión.

OTRAS REGIONES



NEGOCIACIONES SOBRE EL ACCESO A LOS MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS NO AGRÍCOLAS: RECLAMOS Y ACTIVIDADES EN LA INDIA

G.Manicandan, Centro para la Educación y la Comunicación, CEC.
Responsable de Programas



La campaña sobre el NAMA en la India

Las negociaciones sobre el acceso a los mercados para productos no agrícolas (NAMA, por la sigla en inglés) se han venido llevando a cabo desde las declaraciones ministeriales de Doha de noviembre de 2001. El objetivo de las negociaciones es reducir y, en algunos casos, eliminar los aranceles de productos industriales para permitir el acceso de éstos a los mercados. Los productos o bienes objeto de las negociaciones del NAMA son fundamentalmente de naturaleza industrial y recursos naturales no agrícolas como la pesca, recursos forestales, piedras preciosas y minerales. La importancia de las negociaciones del NAMA para la India reside en el hecho de que los sectores comprendidos en el NAMA son cruciales para el desarrollo económico y social de este país. Dichos sectores representan el medio de vida para millones de personas.

Aunque en la India hubo masivas protestas contra las negociaciones comerciales sobre el Acuerdo sobre Agricultura (AoA), al NAMA no se le dedicó mucha atención. Ni las organizaciones de la sociedad civil ni los sindicalistas han desarrollado una estrategia para contrarrestar las posibles secuelas de las negociaciones comerciales sobre este tema. En este contexto, la central de trabajadores Hind Mazdoor Sabha (HMS) y el Centro de Educación y Comunicación (CEC) iniciaron su labor con la intención de entender y elaborar contraestrategias para influir en la posición del gobierno de la India sobre las negociaciones del NAMA: Tendrá efectos de largo alcance para millones de trabajadores del sector manufacturero; la estructura de la industria se verá sometida a un cambio sustancial en un ámbito más liberalizado y competitivo. Por consiguiente, en el intento por ser competitiva, la industria presentará nuevas estrategias para reducir los costos de producción que tendrán un efecto adverso sobre las condiciones de trabajo y los salarios. Esto quedó de manifiesto en el caso del sector Textil y de la Indumentaria, donde en el contexto post MFA (Acuerdo Multifibras) los trabajadores resultaron seriamente afectados. A esto se le suma que el NAMA también afectaría el

espacio político del gobierno para la promoción de industrias socialmente sensibles y, por ende, el resultado sería una pérdida de ingresos fiscales importantes por las reducciones arancelarias.

Las actividades de la campaña relativa al NAMA se enfocaron en "presurizar" al gobierno para que no sucumba ante la presión de los países desarrollados y proteja los intereses de millones de trabajadores de la India. Hizo un llamamiento al gobierno para consultar estos asuntos con el parlamento y partes interesadas de la India. En ocasiones, la comunicación de los sindicatos insistió en que el gobierno indio debe mantener la solidaridad de los países en desarrollo en las negociaciones del NAMA.

Colaboración de los sindicatos de la India en la campaña sobre el NAMA

HMS y el CEC llevaron adelante las actividades de la campaña con el objeto de entender el impacto del NAMA para la industria y los trabajadores de la India y trabajaron con miras a una estrategia común para abordar los desafíos planteados por las negociaciones sobre el NAMA. También trabajaron arduamente para cimentar una sólida alianza de trabajadores en el ámbito nacional y colaborar en este proceso dentro del escenario internacional. Con el propósito de informar a los sindicatos y actores sociales de la India sobre los temas y acontecimientos de las negociaciones comerciales sobre el NAMA se creó un grupo de Google (http://groups.google.co.in/group/namaindia).

Con miras a la elaboración de una estrategia común contra las negociaciones sobre el NAMA, las actividades del CEC y HMS han reunido a centrales sindicales como el Congreso Pan-Indio de Sindicatos (AITUC), *Bharatiya Mazdoor Sabha* (BMS) y la Central de Sindicatos Indios (CITU), *Trade Union Coordination Committee* (TUCC) [Coordinadora Sindical], *United Trade Union Centre* (UTUC) [Unión Sindical Central] y *The All India United Trade Union Centre* (All India UTUC) [Central Sindical Pan-India].

HMS tuvo un papel fundamental a la hora de convertir el NAMA y sus consecuencias para los trabajadores en un tema de preocupación central para los sindicatos indios. Posteriormente, el tema se incluyó en el programa del Comité Patrocinante de los Sindicatos Indios *(Sponsoring Committee of Indian Trade Unions*) y en el documento de reclamos presentado ante el gobierno por el comité. El Comité mencionado es un organismo único integrado por las principales centrales sindicales.

Además de otros sindicatos como *All India Central Council of Trade Unions* (AICCTU) [Consejo Central Pan-Indio de Sindicatos], la *New Trade Union Initiative* (NTUI) [Nueva Iniciativa Sindical] y organizaciones sindicales y de trabajadores, así como trabajadores del sector no organizado como el *National Fish Workers' Forum* (NFF) [Foro Nacional de los Pescadores], *National Forum for Forest people and Forest Workers* (NFPFW) [Foro Nacional de Pueblos y Trabajadores Forestales] participaron en los programas y las actividades sobre el NAMA organizados por el CEC y HMS. En los programas también participaron las representaciones en la India de organizaciones sindicales internacionales como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM). Estos programas y actividades también sirvieron de plataforma para la interacción entre las Centrales Sindicales que representan a trabajadores organizados y los sindicatos que representan a trabajadores del sector no organizado.

Nuestros esfuerzos en la India contaron con el firme apoyo del grupo de sindicatos de los países del NAMA 11 formado por la CSI. Las actividades de los sindicatos del NAMA 11 fueron positivas ya que brindaron información oportuna sobre los acontecimientos relativos a las negociaciones comerciales de la OMC, además de integrar las actividades nacionales con las internacionales.

Asimismo, las actividades de los sindicatos del NAMA 11 brindaron una oportunidad única de presentar las preocupaciones nacionales ante un foro internacional y cimentar la solidaridad de la clase trabajadora entre los países en desarrollo. Tuvo un papel fundamental al influir en las decisiones de los países del NAMA 11. El fragmento siguiente presenta de manera general las diversas actividades llevadas a cabo por el CEC y HMS en la India.

Campaña del NAMA en la India: actividades desde 2006

Nuestras actividades relacionadas con el NAMA se iniciaron en el año 2006. A través de una serie de reuniones y análisis de ideas entre las organizaciones sindicales y de trabajadores, en el contexto de la reunión miniministerial de la OMC en junio de 2006, se preparó un memorando en respuesta a las modalidades propuestas por el Comité de la OMC sobre el NAMA. En junio de 2006 se envió el memorando al Dr. Manmohan Singh, Primer Ministro de la India, y al Sr. Kamal Nath, Ministro de Industria y Comercio. También fue entregado a los medios de prensa. Posteriormente, el memorando fue actualizado y firmado por más de 400 representantes sindicales durante una convención de sindicatos nacionales realizada el 25 de julio de 2006 en Nueva Delhi y se envió al Primer Ministro indio y al Ministro de Comercio. A ésta le siguió una propuesta para la realización de un encuentro más grande para reunir a todos los sindicatos.

El memorando de los Sindicatos exigía al gobierno indio "proteger los intereses del pueblo trabajador de la India o abandonar la Ronda de Doha". Si bien reconocieron el papel activo del gobierno indio en grupos como el G20, G77 y NAMA 11, los Sindicatos expresaron su decepción por la falta de iniciativa del gobierno para analizar los temas con sindicatos y organizaciones que se verán afectados por los resultados de las negociaciones sobre el NAMA. El ambicioso coeficiente propuesto por los países desarrollados obligaría a imponer un nivel muy elevado de reducciones arancelarias a la India y otros países en desarrollo, lo cual tendría un grave efecto en las industrias locales, la balanza de pagos, los ingresos por aranceles aduaneros, el espacio político y el empleo, todos ellos elementos críticos de las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza. Señaló que debido a que alrededor de las tres cuartas partes (3/4) de las exportaciones de la India son de productos manufacturados, las reducciones arancelarias tendrán un gran impacto para los trabajadores indios. Advirtieron al gobierno que con el coeficiente de 15 propuesto en 2006 por los EE. UU. y la UE, la India tendría que aplicar una reducción promedio de 70% en los aranceles a las importaciones frente al 20% correspondiente a los países industrializados.

Los sindicatos también se opusieron vehementemente a las negociaciones sectoriales tendientes a la eliminación o armonización arancelaria en sectores de uso intensivo de mano de obra y críticos, como la pesca y los productos pesqueros, productos forestales, textiles e indumentaria, calzado, automóviles y autopartes, bicicletas y partes relacionadas, productos electrónicos y eléctricos, productos de papel, productos de plástico, productos de caucho, metales y productos metalúrgicos. Todos estos sectores constituyen un medio de vida esencial y forman parte del empleo formal e informal para millones de personas en la India. Las grandes reducciones arancelarias en estos sectores someterán a un gran número de pequeñas y medianas empresas manufactureras a presiones competitivas, que a su vez se traducen en bajos salarios, malas condiciones de trabajo, pérdida de empleo e inseguridad social para millones de trabajadores. Expresó preocupación por el hecho de que las grandes reducciones arancelarias podrían obligar al gobierno a comprometer su capacidad de retener los instrumentos políticos necesarios para proteger a ciertos sectores, diversificar la base industrial y crear y mantener empleos decentes.

Frente a esta preocupación y la falta de (en realidad, la falta absoluta de) iniciativas

para analizar los efectos y las consiguientes políticas de ajuste, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores pidieron al gobierno:

- No caer en la trampa de vincular el NAMA al Acuerdo sobre Agricultura (párrafo 24) como sugiere la Declaración Ministerial de Hong Kong, teniendo en cuenta que las propuestas de los países desarrollados son sumamente desproporcionadas y van en contra de los intereses de la India.
- Asegurar que la India tenga flexibilidad en los compromisos por cada línea arancelaria con la opción de aumentar los aranceles en forma selectiva y cómo y cuándo lo considere necesario para el desarrollo industrial, considerando que la flexibilidad de política es fundamental para lograr dicho desarrollo.
- Desistir de asumir compromisos de reducción arancelaria en sectores ambientalmente sensibles, como los sectores pesquero y forestal, que pondrían en peligro los medios de vida sostenibles para millones de personas.

También solicitaron al gobierno que proteja y haga valer los intereses de los países en desarrollo y países menos adelantados insistiendo en los siguientes puntos:

- Basándose en el principio de "reciprocidad menos que plena", asegurar que cada uno de los países en desarrollo aplique una reducción arancelaria acorde a su propio grado de desarrollo. La mayor reducción de los aranceles en los países en desarrollo debería ser una decisión política estratégica de cada país y no un mandato obligatorio conforme a las negociaciones del NAMA.
- Garantizar la soberanía económica de los países en desarrollo en las negociaciones, asegurando que cuenten con el espacio de política necesario para adoptar estrategias contextualizadas de desarrollo industrial y que tengan flexibilidad para modificar los aranceles basándose en razones de desarrollo.
- Evaluaciones multilaterales y nacionales de impacto de las actuales propuestas de desarrollo, la calidad y cantidad de empleo y las personas que viven en la pobreza, con plena participación de los sindicatos que representan a los trabajadores que se verán afectados por los resultados. Debería prestarse atención en especial a los sectores ambientalmente sensibles y de uso intensivo de mano de obra, así como al impacto para el género, según lo requiere el párrafo 16 de la Declaración de Doha que expresa que las modalidades deberían incluir estudios adecuados y medidas de creación de capacidad.

Con estas preocupaciones, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores instaron al gobierno indio a enfocar las negociaciones sobre el NAMA de una manera tal que sirvan de aporte y no para perjudicar a la soberanía económica y las necesidades de desarrollo de la India y su población trabajadora. De lo contrario, es mejor abandonar la Ronda de Doha.

El fracaso de la reunión Ministerial de Hong Kong en 2006, demostró claramente la asimetría reinante en las relaciones de poder dentro del ámbito internacional. Explica bien las malévolas intenciones de los países desarrollados con su posición intransigente relativa al Acuerdo sobre Agricultura y la negociación del NAMA, ya que se negaron a reducir las protecciones para la agricultura y los productos industriales mientras propugnan por una eliminación creciente de las estructuras comerciales de protección social de los países en desarrollo. Desde enero de 2007, los miembros de la OMC emprendieron varios esfuerzos para reanudar las conversaciones y con la expectativa de recomenzar las negociaciones comerciales de la OMC en junio y julio de 2007, con la activa participación de *Hind Mazdoor Sabha (HMS)*, el CEC y la Fundación Frederich Ebert Stiftung (FES), la India organizó un Seminario Sindical Nacional: "El NAMA: ¿qué significa para los trabajadores?" *["NAMA – What it means to Labour"]* el 22 y 23 de junio de 2007 en Nueva Delhi.

En aquel momento fue importante para los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil poner al gobierno en conocimiento de los efectos de las negociaciones

del NAMA para los trabajadores. Fue necesario contar con la intervención informada y efectiva de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil para que el gobierno no sucumbiera a los reclamos irrazonables de los países desarrollados durante las negociaciones sobre el NAMA.

Este seminario nacional, El NAMA: *¿qué significa para los trabajadores?* estaba orientado a evaluar los pro y los contra de la negociación y, en consecuencia, influirá activamente en el gobierno indio para adoptar una posición positiva para salvaguardar los derechos y medios de vida de millones de trabajadores indios. El objetivo central del seminario era fortalecer la posición sindical sobre el NAMA. En el seminario participaron diversos sindicatos nacionales y otras organizaciones de trabajadores no organizados.

El discurso de apertura del seminario estuvo a cargo del Secretario General de HMS, Hermano Umramol Purohit. A continuación, especialistas y sindicalistas expusieron sobre temas y tendencias del NAMA. El Compañero R.A.Mittal, Secretario Nacional de HMS y el Compañero Dyvadheenam, Representante Subregional de la FITIM, evaluaron la información del debate sobre el NAMA y las discusiones al nivel de los sindicatos mundiales. El segundo día del seminario se concentró en el trabajo del grupo y en formalizar la posición de los sindicatos sobre el NAMA.

El seminario presentó una "Declaración de Nueva Delhi de los sindicatos indios sobre el NAMA". Dicha declaración respaldó el contenido del memorando enviado anteriormente por los sindicatos en junio de 2006. Además expresaron su solidaridad con la declaración de sindicatos del NAMA 11 emitida el 11 de junio de 2007 en Ginebra.

La declaración de Nueva Delhi llamó al gobierno indio a mantener una posición unida de los países en desarrollo en las negociaciones del NAMA, en particular las posiciones relativas a:

- Reducción de los aranceles de países en desarrollo completamente acorde con sus respectivos grados de desarrollo;
- respetar el principio de "reciprocidad menos que plena" en todos los compromisos de reducción;
- no hay concesiones sobre el NAMA a cambio de los logros obtenidos en Agricultura;
- los compromisos de reducción de aranceles no tienen ninguna vinculación con las exigencias de "acceso real al mercado" planteadas por los países desarrollados;
- no se asumen compromisos que no estén en consonancia con el derecho de la India a mantener su espacio de política y el derecho al desarrollo.

Convocó al gobierno indio a consultar su posición en las negociaciones de comercio internacional con el Parlamento Indio. En un país democrático como la India, es fundamental que el gobierno obtenga el consentimiento del Parlamento sobre su posición. Expresó las preocupaciones de los sindicatos sobre la ausencia de iniciativa del gobierno indio para consultar con los sindicatos y las organizaciones de trabajadores en lo relativo a las posiciones adoptadas por el gobierno en materia de negociaciones de comercio internacional y, particularmente, las negociaciones del comercio mundial. La declaración también llamó a la CSI a respaldar la posición de los sindicatos del NAMA 11.

Posteriormente, en junio de 2007, los representantes sindicales enviaron un memorando con todas esas preocupaciones y solicitaron al gobierno de la India que aborde las negociaciones del NAMA que le permitirán mantener su espacio político, perseguir su objetivo de desarrollo, aumentar y proteger el empleo, las condiciones de trabajo y el medio de vida de millones de personas. De lo contrario, el mejor trato con la OMC será ningún trato.

Respuesta del gobierno

En respuesta al memorando en un comunicado dirigido a HMS, el Ministerio de Industria y Comercio expresó: "compartimos su opinión en cuanto a que la selección de los coeficientes de la fórmula suiza deben respetar el mandato de reciprocidad plena en los compromisos

de reducción y asegurar el carácter comparable de las ambiciones en el NAMA y en Agricultura". Sin embargo, es imprescindible vigilar atentamente los acontecimientos en las negociaciones del NAMA y "presurizar" al gobierno para que no sucumba ante las presiones de los países desarrollados.

Conclusiones

Durante el transcurso del año 2008, HMS continuó escribiéndole al gobierno para solicitarle que no sucumba a las presiones de los países desarrollados, particularmente en el contexto del tratado nuclear entre la India y EE.UU. y argumentó en sus comunicaciones que la vara para juzgar el tratado de Doha debería basarse en su aporte para la reducción de la pobreza, generación de empleo, condiciones de trabajo decentes y creación de medios de vida sostenibles. Junto con los sindicatos del NAMA 11, HMS presentó varias declaraciones ante el gobierno si y cuándo éste cambiaba su posición negociadora. Planteó el tema en la conferencia del trabajo de la India y en otros foros internacionales.

En el año 2009, especialmente después de las elecciones en la India y en el contexto de los cambios en el ámbito político internacional, las negociaciones comerciales en la OMC podrían entrar en un paso decisivo. Según el Sr. Gopal Pillai, Secretario del Departamento de Comercio, en el contexto de la crisis financiera, el gobierno indio podría adoptar una posición en la que "algún trato es mejor que nada" en las próximas conversaciones de la OMC durante el año 2009. Cuando se reanuden las conversaciones de la OMC, el tema principal para el gobierno indio relativo a las negociaciones sobre el NAMA será el de los coeficientes para las reducciones de aranceles, la cláusula anticoncentración y las iniciativas sectoriales. La vinculación de los compromisos de reducción de aranceles con las flexibilidades, la cláusula anticoncentración y las iniciativas sectoriales será un tema crucial en lo que se refiere a los resultados de desarrollo para la India. El gobierno indio podría iniciar negociaciones sectoriales para algunos sectores con el propósito de alcanzar "algún trato". En este momento, los sindicatos de la India tienen una inmensa tarea por delante: por una parte, los efectos de la crisis económica comienzan a sentirse en la clase trabajadora india y, por la otra, el gobierno participa en las negociaciones sobre libre comercio con diversos países desarrollados, incluida la Unión Europea. En estos momentos, un trato alcanzado en la OMC bajo las modalidades actuales tendrá un gran impacto para los trabajadores indios.

ACCIONES RELACIONADAS CON EL NAMA EN FILIPINAS

Ariel B. Castro, Director de Educación
Febrero 2009

La participación y las discusiones sobre comercio internacional no aparecen, necesariamente, al tope de la lista de prioridades estratégicas y primordiales de los sindicatos. Debido a la naturaleza compleja y técnica del tema, los sindicatos prefieren abocarse a cuestiones más tradicionales como la seguridad en el empleo, el trabajo decente y la negociación colectiva. Además, existe la noción equivocada de que el comercio mundial y las normas que lo controlan no atañan a la vida cotidiana de los trabajadores y las acciones diarias de los sindicatos. Sin embargo, debido a los resultados injustos y negativos que ha producido, muchos sindicatos han asumido un papel activo en diversas instancias para garantizar la incorporación efectiva de la dimensión social en las negociaciones comerciales.

En los últimos años, los sindicatos condujeron y participaron en algunas de las protestas internacionales más grandes y ásperas en lugares donde las reuniones de los líderes mundiales para discutir cuestiones de desarrollo internacional y comercio eran el centro de atención. Los sindicatos, tanto en forma individual como colectiva, también han comprometido a funcionarios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y negociadores comerciales a transmitir el mensaje de que las normas del comercio deben prestar debida atención a las preocupaciones de la gente común y los trabajadores y no servir, ante todo, a los intereses de las grandes empresas. En particular, los sindicatos insisten en la "dimensión del desarrollo" de la llamada "Ronda de Doha para el Desarrollo" (DDR, por la sigla en inglés), que se inició en 2001 y colocó los intereses y las necesidades de los países en desarrollo en el centro del Programa de Trabajo de Doha de la OMC. Una de las principales áreas en la que los sindicatos llevaron adelante activamente campañas es la de las negociaciones sobre el Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (AMNA o NAMA, por la sigla en inglés)

debido a que abarca la liberalización del comercio de todos los bienes no agrícolas y tiene el potencial para afectar de manera adversa la producción y el empleo en numerosos sectores.

En Filipinas, la campaña sobre el NAMA liderada por la central sindical *Trade Union Congress of the Philippines* (TUCP) [Congreso Sindical de Filipinas] adquirió un gran impulso ya que hizo posible que sindicatos y otras organizaciones aliadas con objetivos similares estuvieran mejor informados acerca de las complejidades y las injusticias del sistema vigente en la OMC y, lo que es más importante aún, acerca de lo que se podía hacer para cambiar la situación. En particular, el TUCP elaboró su campaña en torno al tema central de la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores en las negociaciones y los acuerdos de comercio y la promoción del trabajo decente.

Este informe resume los aspectos más significativos de la campaña, que comprendieron una variedad de actividades y ayudaron a poner de relieve la importancia de mejorar la comprensión y compartir información así como de establecer alianzas transfronterizas para hacer frente a los efectos negativos de la globalización.

La posición filipina respecto del NAMA

Un factor fundamental que debemos tener en cuenta al analizar la Campaña sobre el NAMA del TUCP es la posición que adoptaron los negociadores filipinos en la OMC a diferencia de otros miembros. En 2005, Filipinas se sumó y lideró a otros países en desarrollo, en particular a la coalición del G-33, que se concentraba en las negociaciones agrícolas en la OMC, y el NAMA-11. El grupo NAMA-11 estaba compuesto por Argentina, Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Namibia, Túnez, Egipto, India, Indonesia y Filipinas.

Como posición común, el NAMA-11 pretendía reducciones arancelarias para los productos industriales menos severas y un margen de flexibilidad en la protección a los fabricantes nacionales. Como grupo, los países presentaron una serie de comunicaciones en la OMC en las que expresaban una posición unificada, en especial con respecto a "lograr un resultado justo, equilibrado y orientado al desarrollo y acorde al mandato". El NAMA-11 hizo hincapié en que "una diferencia de por lo menos 25 puntos entre los coeficientes de los países en desarrollo y los de los países desarrollados que tenga en cuenta el principio de 'reciprocidad menos que plena' en los compromisos de reducción" requeriría que los países desarrollados hicieran más que los países en desarrollo".

Consciente del importante lugar que ocupaba Filipinas dentro del NAMA-11, el TUCP presentó varios reclamos a los negociadores Filipinos. Citando estudios y simulaciones realizadas por la ex CIOSL (ahora la Confederación Sindical Internacional – CSI), el TUCP consideraba que a los niveles propuestos, las reducciones arancelarias tendrían efectos dobles: por un lado, este camino de liberalización conduciría a pérdidas de empleos y ajustes y, por el otro, las perspectivas futuras de desarrollo industrial de los países en desarrollo podrían verse seriamente comprometidas, inclusive las posibilidades de lograr el trabajo decente y la creación de empleo productivo. El Cuadro 1 (fuente: CSI, 2007) resume el impacto de las propuestas actuales del NAMA.

El grupo sindicatos NAMA 11

La campaña también recibió un impulso considerable cuando el TUCP se unió a los sindicatos de los países del NAMA-11 y juntos formaron un grupo "informal" que recibió el nombre de Grupo de Sindicatos del NAMA. El grupo de sindicatos del NAMA-11 estaba compuesto por organizaciones de Argentina, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Namibia, Filipinas, Sudáfrica y Venezuela.

El Grupo de Sindicatos del NAMA-11 manifestó sus preocupaciones por la posición adoptada por los países desarrollados en las negociaciones del NAMA

Cuadro 1 Fuente: CSI 2007

Filipinas	Aplicado actual	Consolidado actual	SF 19 nuevo consolidado	Reducción en SF 19 aplicado	SF 23 nuevo consolidado	Reducción en SF 23 aplicado	Empleo formal (2004)
Textiles	9,1	30	11,6	-	13,0	-	96.000
Indumentaria	15	30	11,6	23%	13,0	13%	370.000
Cuero	13,3	50	13,8	-	15,8	-	69.000
Calzado	13,3	50	13,8	-	15,8	-	
Plástico	11,5	30,4	11,7	-	13,1	-	56.000
Caucho	8,3	23,8	10,6	-	11,7	-	
Madera	7,1	24,7	10,7	-	11,9	-	142.000
Automóviles	24	24,8	10,8	55%	11,9	50%	39.000
Químicos	3,7	25,6	10,9	-	12,1	-	66.000
Maquinaria	2,7	26,3	11,0	-	12,3	-	64.000
Muebles	11,9	39	12,8	-	14,5	-	143.000
Metales fabricados	7,2	30	11,6	-	13,0	-	111.000



e instó al grupo NAMA-11 en la OMC a mantenerse unido frente a la presión de los países desarrollados. El Grupo de Sindicatos del NAMA-11 también emitió varias declaraciones en las que instaba a los negociadores "a no hacer más concesiones en el NAMA dado que las posiciones existentes ya tendrían resultados negativos para el empleo en el sector de la fabricación y el desarrollo industrial de muchos países en desarrollo". Estas declaraciones fueron presentadas a la Secretaría de la OMC, sus respectivas misiones en Ginebra y al organismo u oficina del gobierno nacional responsable del comercio.

Los integrantes del grupo mantuvieron un intercambio de información regular a través de llamadas en conferencia mensuales y mensajes de correo electrónico así como noticias mediante un servidor de listas de correo exclusivo. Esos contactos les permitieron contar con información actualizada sobre el estado actual de las negociaciones y planificar actividades a nivel nacional y mundial. Resultaron ser particularmente útiles para hacer un seguimiento de la situación y preparar las acciones necesarias que debían llevar a cabo los sindicatos.

El trabajo con el gobierno filipino

En el orden nacional, el TUCP también mantuvo una comunicación fluida con el Departamento de Comercio e Industria (DTI, por la sigla en inglés) de Filipinas. Por medio de cartas acordadas conjuntamente con los demás integrantes del Grupo de Sindicatos del NAMA, el TUCP apeló al DTI "para que garantizara que los compromisos de reducciones arancelarias en el NAMA debían establecerse en función de las consideraciones de desarrollo". Asimismo, el TUCP exigió "total transparencia y acceso de los sindicatos a consultas e información así como la inclusión en las negociaciones de la sala verde".

El TUCP también fue invitado a diversas reuniones de consulta sobre el NAMA convocadas por el DTI. La central sindical aprovechó estos encuentros para dar a conocer los reclamos de los sindicatos en el ámbito del NAMA e interactuar con otros actores del proceso. Por haber asistido a estas reuniones, el TUCP pudo influir en las posiciones de los negociadores y asegurarse de que la voz de los trabajadores y los sindicatos fuera escuchada y reconocida.

Además, se llevaron a cabo reuniones con los negociadores Filipinos del NAMA

en Ginebra y Manila para discutir la postura de los sindicatos en ese ámbito. El papel del TUCP finalmente cobró mayor importancia cuando fue invitado a participar en el grupo de trabajo interinstitucional que se reunía en forma periódica para hacer un seguimiento del avance de las negociaciones del NAMA.

La educación de los trabajadores sobre OMC y NAMA

Con el fin de ampliar la comprensión y compartir información sobre el NAMA, el proceso de negociación y las acciones sindicales, el TUCP organizó varios simposios y jornadas educativas para los trabajadores en las que participaron ampliamente no sólo los sindicatos sino también las organizaciones no gubernamentales. Las actividades del TUCP contaron con el apoyo de grupos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la Red de Trabajadores Asiáticos sobre las IFI – Sección Filipinas (ALNI/P) *[Asian Labor Network on IFIs],* el Consejo de Trabajadores Formales y Migrantes de NAPC (FLMW) *[Formal Labor and Migrant Workers Council]* y el Centro de Solidaridad *[Solidarity Center]* de Filipinas.

Un buen ejemplo es el foro que se realizó el 12 de mayo de 2008 sobre "El estado actual de las negociaciones del NAMA en la OMC: sus implicancias para la campaña de los trabajadores para promover el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo en Filipinas" *(Current State of WTO-NAMA Negotiations: Their Implications to the Workers' Campaign to Promote Adherence to CLS and Decent Work in the Philippines)*. La actividad fue organizada conjuntamente con los sindicatos y dirigida por el TUCP junto con organizaciones de trabajadores migrantes aliadas, sindicatos del sector público, federaciones de trabajadores y sindicatos locales. Los sindicatos y organizaciones participantes unieron sus voces para hacer un llamamiento a los negociadores de los gobiernos en la OMC, en particular el DTI, para que aseguraran un resultado de desarrollo en las negociaciones en curso en la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Citando las simulaciones realizadas por la CSI, los sindicatos y las organizaciones expresaron su profunda preocupación por los efectos negativos en el empleo, la presión para reducir los salarios y rebajar las condiciones de trabajo y un desarrollo industrial más amplio en caso de que se siguiera adelante con el nivel de reducciones arancelarias propuesto. Los funcionarios del DTI que se encontraban presentes en la reunión acordaron elevar estos temas a sus superiores y les aseguraron a los participantes del foro que los representantes sindicales recibirían información y tendrían acceso a consultas sobre la posición de Filipinas respecto del NAMA y otras cuestiones de la OMC.

Los asistentes al foro también acordaron que era necesario llevar a cabo una investigación profunda sobre los efectos de las negociaciones en el trabajo decente, el desarrollo y el empleo. Asimismo, firmaron una declaración conjunta que fue comunicada al Secretario de Comercio. Deberían, también, haber fijado una reunión con el DTI.

Las declaraciones conjuntas

Desde 2006, el TUCP emite con cierta periodicidad declaraciones en las que expresa su apoyo a las posiciones adoptadas por el Grupo de Sindicatos del NAMA-11. Estas declaraciones son enviadas a los organismos gubernamentales y los medios de prensa. Una de ellas fue emitida justo antes de la reunión miniministerial que se llevó a cabo en Ginebra en 2008 en la que el TUCP tuvo la posibilidad de solicitar el apoyo de aproximadamente 20 sindicatos, organi–zaciones de trabajadores migrantes, sindicatos de marinos, sindicatos del sector público, federaciones sindicales y sindicatos locales. La declaración y posición común expresaba las preocupaciones y los reclamos respecto del estado actual de las negociaciones del NAMA en la OMC. Entre las organizaciones que firmaron la declaración se encuentran las siguientes: *Trade Union Congress of the Philippines* (TUCP) [Congreso Sindical de Filipinas]

1. Task Force Advocacy- Asian Labour Network on IFIs/Phils [Grupo de Trabajo de Advocacy – Red Sindical Asiática de Filipinas]
2. Association of Trade Unions (ATU-TUCP) [Asociación de Sindicatos]
3. National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines (NACUSIP-TUCP) [Congreso Nacional de Sindicatos de la Industria Azucarera de Filipinas]
4. Formal Labor and Migrant Workers Council-National Anti-Poverty Commission (FLMW-NAPC) [Consejo de Trabajadores Formales y Migrantes - Comisión Nacional contra la Pobreza]
5. Philippine Transport and General Workers Organizations (PTGWO-TUCP) [Organización de Trabajadores del Transporte y Generales de Filipinas]
6. KAKAMMPI (organización de trabajadores migrantes)
7. Temic Automotive Philippines, Inc.- FFW
8. Philippine Federation of Labor (PFL-TUCP) [Federación Filipina de Trabajadores]
9. *Alliance of Progressive Labor* (APL) [Alianza de los Trabajadores Progresistas]
10. *NAPC-Basic Sector Unit* [Unidad básica sectorial]
11. *Philippine Government Employees Association* (PGEA-TUCP) [Asociación de Empleados del Gobierno Filipino]
12. *Center for Overseas Workers* (COW) [Centro para Trabajadores del Exterior]
13. *KILUSAN sa Jollibee-KILUSAN-TUCP*
14. *Confederation of Labor and Allied Social Services* (CLASS-TUCP) [Confederación de Trabajadores y Servicios Sociales Afines]
15. *Federation of Free Workers* (FFW) [Federación de Trabajadores Libres]
16. *NUWHRAIN-APL*
17. *PIILU-TUCP*
18. *United Filipino Seafarers* (UFS) [Marinos Filipinos Unidos]
19. *National Union of Bank Employees* (NUBE) [Sindicato Nacional de Empleados Bancarios]
20. *KAIBIGAN, Inc.*

La declaración fue enviada al Secretario del DTI y se transformó en el tema central de la reunión con el Departamento de Comercio.

El trabajo con los medios

Otro aspecto de la campaña que funcionó muy bien fueron las relaciones con los medios de prensa y comunicación. Las apariciones periódicas en la prensa y las noticias ayudaron a difundir el mensaje de los sindicatos y la posición en la OMC y las negociaciones del NAMA. También movilizaron el apoyo público y generaron mayor conciencia sobre el posible impacto negativo global de las propuestas existentes para el NAMA presentadas por los países desarrollados.

Conclusiones y el camino a seguir

Durante el último año, el TUCP logró grandes avances en la campaña para promover la incorporación efectiva de la dimension social en el comercio mundial. Los abordajes estratégicos que empleó en coordinación con la CSI y los otros miembros del Grupo de Sindicatos del NAMA-11 demuestran cómo los sindicatos introdujeron la innovación en el trabajo de campaña sobre un tema de carácter mundial. Al cubrir juntos el ámbito mundial, los sindicatos continúan teniendo una voz potente y fuerte en la lucha por la justicia social y económica para los trabajadores. Sin embargo, debido a la naturaleza de los sindicatos, hay una divergencia en la escala y la magnitud de los enfoques de campaña adoptados a nivel nacional, y la campaña del TUCP es una prueba de tal divergencia.

Se aprendieron diversas lecciones en todo el proceso de campaña, pero la más importante fue la capacidad de reavivar un tema que, de otro modo, se transformaría en un tema sindical no tradicional. El apoyo que el TUCP pudo obtener no sólo de sus afiliadas sino también de otros grupos de trabajo y ONG es una prueba de que los sindicatos y sus aliados pueden marcar una diferencia y cambiar el rumbo del plan actual de comercio mundial. Las acciones a nivel nacional son tan importantes como las campañas mundiales. Y lo que es más importante aún, las

campañas mundiales no serían tan eficaces si las bases no estuviese adecuadamente informadas y educadas.

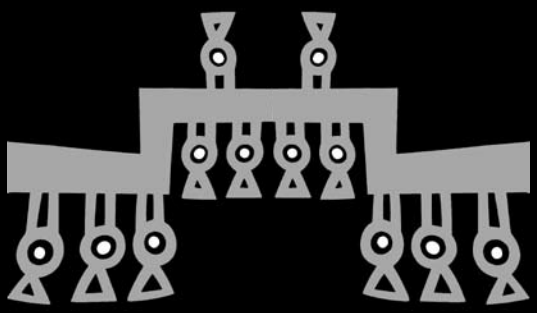
Sin duda habrá otros desafíos que superar en el camino, pero lo más importante es que el TUCP pretende centrarse en un conjunto de temas para fortalecer su campaña.

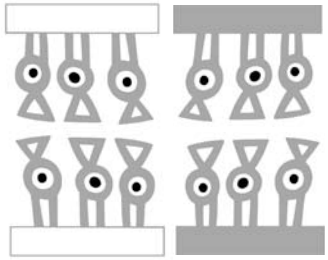
a. La necesidad de promover el trabajo decente en las negociaciones de comercio. Ante la proliferación de los tratados y acuerdos de comercio bilaterales y regionales, el TUCP busca lograr la incorporación efectiva del trabajo decente, con el énfasis puesto en los derechos fundamentales de los trabajadores y en los mandatos de negociación de los negociadores del comercio. Mientras opone resistencia a la naturaleza neoliberal de estos acuerdos de comercio, el TUCP continuará insistiendo en la necesidad de tener evaluaciones de impacto en el comercio y la sostenibilidad y un capítulo dedicado a las normas de trabajo y ambientales en dichos acuerdos.

b. la importancia de cerrar la brecha del conocimiento. Uno de los grandes retos para los sindicatos es revertir la falta de interés de los dirigentes y los afiliados en discutir cuestiones relativas al comercio mundial debido, principalmente, a la ausencia de oportunidades de aprendizaje y educación. TUCP pretende llevar adelante programas de educación de trabajadores para reducir la brecha del conocimiento sobre el comercio. Intentará poner información y material educativo sobre el comercio y otros temas de la OMC al alcance de sus afiliados en general. El TUCP también reforzará su capacidad de realizar investigación orientada a la política.

c. alianzas transfronterizas. El TUCP continúa creyendo en el poder de crear alianzas más allá de las fronteras. La mayor y única fuerza que logrará un cambio social mundial proviene de un movimiento sindical mundial unido. El TUCP está comprometido a hacer realidad este objetivo.

III.
ACUERDOS COMERCIALES





BILATERALISMO ASIMÉTRICO: SEGURIDAD, PROSPERIDAD Y EL PACTO DE CANADA CON COLOMBIA

Teresa Healy y Sheila Katz
Publicado en Estudios en Economía Política, octubre 2008



En Colombia los dirigentes sindicales son perseguidos sistemáticamente. Es más fácil crear un grupo armado que un sindicato en este país.
Gabriel Pérez, Confederación General del Trabajo (CGT)[1]

El gobierno canadiense inició unas controvertidas negociaciones con Colombia en junio de 2007 con la intención de apresuradamente cerrar un tratado de libre comercio bilateral. A partir del anuncio de esta decisión, los movimientos sindicales, junto con organizaciones de derechos humanos, partidos políticos opositores y grupos solidarios en Canadá, Colombia y otras partes de las Américas han respondido con incredulidad y enojo. No se ha recibido explicación racional de por qué Canadá busca un tratado de comercio preferencial con un país conocido por su pésima trayectoria en materia de derechos humanos y donde ser sindicalista significa vivir bajo la constante amenaza de muerte violenta. En los últimos 22 años 2.669 sindicalistas han sido asesinados en Colombia y más de 400 de estos asesinatos ocurrieron desde que el gobierno del Álvaro Uribe asumió en poder.[2] En comparación con el mismo periodo del año anterior cuando Canadá estaba concluyendo las negociaciones, el porcentaje de asesinatos de sindicalistas aumentó más de 71% en los primeros seis meses de 2008.[3] El gobierno de Uribe está sumido en una crisis de legitimidad con cada vez más autoridades y aliados políticos del Presidente siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Colombia. El escándalo "*para*político", así denominado debido a los estrechos vínculos de autoridades nacionales con grupos *para*militares, ha involucrado a más de 100 miembros del Congreso y el Senado de Colombia acusados de enriquecimiento ilícito por su relacionamiento con escuadrones de la muerte *para*militares. Casi todos son seguidores del Presidente Uribe o miembros de su partido político. La respuesta del Presidente Uribe a estas medidas ha sido intentar desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial.[4]

Este estudio mostrará que la decisión de Canadá de implantar un tratado bilateral con Colombia no es señal de que vuelve a comprometerse con las Américas sino del renovado compromiso con el reforzamiento del poder de Estados Unidos en el hemisferio antes que a comprometerse otra vez con las Américas. Mientras que el gobierno de Bush se topaba con la resistencia de los nuevos gobiernos de las Américas a sus políticas comerciales y de inversión, enfrentó lo que consideró un fracaso de los foros multilaterales. En consecuencia, el gobierno de Bush empezó a forjar tratados bilaterales con los gobiernos derechistas de la región. Para Canadá - como aliado incondicional de Estados Unidos - no fue suficiente simplemente seguirle los pasos. En primer lugar, al trabajar con México y Estados Unidos para establecer la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Canadá modeló el nuevo bilateralismo "securitizado" del mundo post-11 de septiembre y post-Kioto. Además, a través del uso creativo de alianzas asimétricas, Estados Unidos y Canadá han intentado asegurar la institucionalización de los regímenes comerciales y de inversión del TLCAN en los tratados bilaterales del hemisferio. Empero, como no alcanzaba con el tipo de tratado que sólo conducía a la liberalización del comercio, Canadá trabajó en pos de un régimen de inversión en el que los estados renuncian a su rol en el desarrollo económico y toman decisiones corporativas sobre la base de las medidas establecidas en el Capítulo 11 del TLCAN. Ahora Canadá está actuando a nivel internacional para crear alianzas estratégicas de EE.UU. en comercio, inversión *y* seguridad. El gobierno de Harper incluso ha intervenido para menoscabar la oposición a la política exterior de Bush dentro mismo de Estados Unidos. En esta coyuntura de suma intransigencia y por medios que no pueden tildarse de democráticos, Canadá se esfuerza por extender el perímetro de seguridad de EE.UU. para abarcar a Colombia a la par que derrota a la oposición popular dentro de Canadá, Estados Unidos y más allá. Salta a la mente una pregunta muy importante: ¿Hasta qué punto están dispuestas las fuerzas populares de Canadá a combatir este nuevo conservadurismo con el propósito de fortalecer el apoyo por un modelo alternativo de desarrollo y práctica política?

Oposición y Política Exterior de EE.UU. en las Américas

Tal como demostrado por la derrota del ALCA, la insatisfacción con la política comercial y de inversión de EE.UU. es generalizada en las Américas. Los pueblos de Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Guatemala y Paraguay han electo gobiernos con diferentes grados de independencia de Washington. Son los denominados países de la "marea rosa" que están desarrollando alternativas y confrontando la política exterior de EE.UU. en las Américas. Son gobiernos que están iniciando sus propios planes y proyectos y que responden favorablemente a las alternativas propuestas por los movimientos sindicales y sus contrapartes sociales en todo el hemisferio. Ésta es la dinámica que los observadores están empezando a llamar "post-neoliberalismo".[5] Estos gobiernos han manifestado su preferencia por proyectos de integración regional, antes que por el modelo del ALCA dominado por EE.UU. y Canadá.[6] También crece el apoyo a los modelos de desarrollo nacionales, tales como los propuestos en la Plataforma Laboral de las Américas.[7]

Para responder a este grado de oposición, el gobierno de Bush se vio obligado a abandonar el enfoque multilateral para las relaciones comerciales hemisféricas y a buscar negociaciones bilaterales puntuales con gobiernos "amistosos", lanzándose sobre gobiernos bajo la influencia de Washington, principalmente México, América Central, Colombia y Perú. Estas negociaciones bilaterales "comerciales" poco tienen que ver con reducciones arancelarias, más bien están enfocadas en la re-estructuración y las protecciones a las inversiones, y ahora incluyen el imperativo post-11 de septiembre de "segu-

ridad". Los pactos comerciales con América Central y la República Dominicana (CAFTA), Perú y Colombia buscan redundar en lo que más precisamente podrían llamarse pactos de "Comercio, Inversión y Seguridad".

El origen de esta nueva generación de pactos "comerciales" yace en América del Norte en la convergencia de ideas en torno a "la seguridad de la nación" y una continua integración económica. En 2005, los Presidentes de Estados Unidos y México y el Primer Ministro de Canadá se reunieron en Waco, Texas para anunciar la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los Líderes anunciaron que la ASPAN sería facilitada por grupos de trabajo tri-nacionales dentro de la función pública a nivel federal. Estos grupos de trabajo identificarían áreas donde fortalecer la integración económica y cooperación en asuntos de seguridad dentro de los ministerios de "seguridad" y "prosperidad". Un año después se reunieron en Cancún, México donde los "Líderes" anunciaron que habían solicitado a diez Directores Ejecutivos de cada país que conformen el Consejo de Competitividad de América del Norte (CCAN) para proveer asesoramiento sobre las prioridades para una continua integración de América del Norte. Cuando los Líderes se reunieron otra vez en Montebello en agosto de 2007, los Directores Ejecutivos se unieron a los Líderes para discutir fronteras, energía y reglamentaciones. Confirmaron su agenda de "facilitación fronteriza", reafirmaron su compromiso de promover una gestión de la frontera "basada en riesgos" e instruyeron a sus Ministros que sigan cooperando en aplicación de la ley, reforma de la reglamentación y cooperación energética transfronterizas e "inter-operables".[8]

La ASPAN plasma el modelo de la agenda económica/de seguridad definido casi en su totalidad por los ejecutivos gubernamentales y corporativos, y preparado para su expansión a todas las Américas contraponiéndose a todo principio democrático. Éste es el nivel ejecutivo del gobierno y del sector empresarial que está trabajando con las fuerzas policiales y de seguridad para definir los confines de la "seguridad" de América del Norte y más allá. La misma ASPAN admite que representa un esfuerzo por evitar lo que una autoridad estadounidense denominó como otra "batalla hiriente" como la vivida en las negociaciones del TLCAN.[9] Según una autoridad canadiense, deseaban constatar cuánto podían hacer juntos "sin modificar una sola ley".[10] En otras palabras, con su enfoque en la "coordinación", la "facilitación" y la "reforma de la reglamentación", la ASPAN ha permitido que los gobiernos reanuden la búsqueda por la integración norteamericana sin el fastidio de verse obligados a buscar la aprobación de sus respectivos Poderes Legislativos.

No sólo se han pasado por alto los mecanismos legislativos para el debate y la revisión de la ASPAN en Canadá, Estados Unidos o México, sino que existe evidencia de que también se está socavando al Poder Judicial. Por ejemplo, el enfoque de "gestión basada en riesgos" para las fronteras subsume la presunción de inocencia bajo la idea de que cada persona constituye un riesgo mayor o menor, independientemente de todo proceso judicial. Es una abierta violación de la soberanía que las bases de datos con información policial de ciudadanos, residentes y viajeros en Canadá hayan sido entregadas a autoridades de inmigración y fuerzas de seguridad de Estados Unidos; "listas de viajeros proscriptos" restringen los derechos de movilidad sin revisión judicial alguna; en contraposición a las disposiciones constitucionales, se impide que ciudadanos con doble nacionalidad de países que Estados Unidos considera como peligrosos realicen ciertos trabajos en Canadá y abran cuentas en dólares estadounidenses. Prácticas intransigentes también rigen las relaciones laborales en las arenas bituminosas de Alberta o en la agricultura, lo cual generó la protesta de los parlamentarios por la contratación de trabajadores migrantes "en condiciones que equivalen a servidumbre forzada".[11] Mientras tanto, la esencia de la agenda de seguridad norteamericana, que nada tiene que ver con la seguridad humana, radica en la búsqueda

de Estados Unidos de la seguridad en materia de suministros energéticos.

En la cuarta cumbre de Líderes sobre la ASPAN realizada en Nueva Orleans en abril de 2008, surgió el tema de los pactos comerciales bilaterales como parte de las comunicaciones oficiales, a pesar de que Colombia no forma parte de América del Norte. Después de su reunión preparatoria el 8 de abril de 2008, los tres Ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte mencionaron la importancia del comercio con Colombia.[12] Posteriormente en la rueda de prensa después de la Cumbre de Nueva Orleans, el Presidente Bush y el Presidente Calderón de México se refirieron al atascado pacto comercial entre EE.UU. y Colombia. El Presidente Bush declaró: También conversamos sobre el tratado de libre comercio de Colombia... Un tratado con Colombia nivelaría a las partes. Y no concretar un tratado sería dar una señal lamentable a la región.[13]

De igual manera, Stephen Harper se refirió a la importancia del pacto con Colombia y manifestó preocupación por la negativa del Congreso de EE.UU. a aprobarlo.[14] Las reuniones de Nueva Orleans tuvieron un perfil bajo a pesar de que se realizaron pocos meses después de la Cumbre de Montebello cuyos resultados fueron bastante contundentes. Laura Carlsen es bastante convincente cuando sugiere que la Cumbre de la ASPAN en Nueva Orleans fue utilizada para obtener el apoyo de Canadá y México para intervenir en el debate nacional que había criticado intensamente al TLCAN y al pacto con Colombia durante el proceso de nominación del Partido Demócrata.[15] Una de las nuevas temáticas que surgió en Nueva Orleans fue la importancia de instaurar más medidas de seguridad en todos los pasos del proceso de producción. Queda por ver qué significará esta agenda para los trabajadores.

Si bien Canadá y México se unieron a Estados Unidos en este arreglo "TLCAN-plus", la ASPAN no es realmente trilateral, sino que se basa en un conjunto de acuerdos doblesbilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y Estados Unidos y México. Este modelo se ajusta a los intereses de la clase empresarial norteamericana que hará todo lo posible por crear *de facto* lo que no puede ser creado legislativamente dada la magnitud de la resistencia popular en Canadá y en Estados Unidos. En este sentido, el carácter doble-bilateral de la ASPAN promueve el proyecto de integración profunda de América del Norte. Tal como declaró Thomas D'Aquino del Consejo Canadiense de Directores Ejecutivos: "tres pueden hablar y dos pueden hacer".[16] Este razonamiento sugiere que el enfoque doble-bilateral permite que dos países que desean avanzar más rápidamente en ciertas problemáticas no debieran ser retenidos por el proceso trilateral. A pesar de que D'Aquino y otros que criticaron duramente la lentitud del proceso de la ASPAN, los gobiernos han progresado significativamente en la implementación de las 52 recomendaciones del Consejo de Competitividad de América del Norte anunciadas en febrero de 2007.

En parte la ASPAN denota la preocupación de la clase empresarial canadiense respecto de las relaciones entre Canadá y EE.UU., pero no sólo en materia de acceso a los mercados; los líderes corporativos de América del Norte han fijado la mira mucho más allá y buscan una política comercial común, un arancel externo común y una estrategia conjunta para concretar tratados con países como Colombia. Calladamente están estableciendo una unión aduanera. En gran medida esto explicaría por qué Bush y Harper y sus ministros se afanan tanto por justificar sus acciones repitiendo la aseveración, pero sin fundamentarla, que liberalizar el comercio y la inversión con Colombia fomentará los derechos humanos, la democracia y la prosperidad económica en dicho país, además de beneficiar a las empresas nacionales: ...sin acceso a los mercados mundiales, sin abrir oportunidades para las empresas, negocios, trabajadores colombianos, cuando se está atajando la democracia, se están reteniendo los derechos humanos y lo peor de todo es que sin razón se mantiene a la población en situación de pobreza.[17]

Mientras tanto para la inversión canadiense, en particular en minería, el camino se ha despejado aún más por causa de la utilización del terrorismo paramilitar y militar contra campesinos, sindicalistas y comunidades indígenas y afro-colombianas. La privatización y reestructuración neoliberal de la economía también ha desempeñado un rol en abrir a Colombia al comercio. Por ejemplo, dos de los tres millones de desplazados en Colombia provienen de zonas mineras que han vivido una violencia brutal desde los 90.[18]

Dentro de la ASPAN existe un modelo de relaciones interestatales que Canadá promueve con el propósito de contrarrestar el giro a la izquierda en las Américas. Este modelo ha sido adoptado más extensamente puesto que Canadá y México han optado por firmar pactos comerciales/de inversión/seguridad con países que Estados Unidos ha elegido para relaciones bilaterales. La situación de Canadá en el proceso de "integración económica y cooperación en seguridad" en curso con Estados Unidos es cada vez más comprometida y menos democrática. Como modelo de bilateralismo, la ASPAN evoca imágenes de colaboración asimétrica, no sólo por los niveles orwelianos de vigilancia impuesta a la población, sino también porque Canadá sigue justificando la construcción de jerarquías dentro y entre los estamentos de la defensa; dentro y entre estructuras de la gobernanza ejecutiva corporativa; y dentro y entre las fuerzas policiales y fronterizas.

Empujando la frontera estadounidense hacia afuera

La Autoridad de Promoción Comercial de EE.UU. (TPA por sus siglas en inglés) arguye explícitamente que se deben cerrar tratados comerciales en las Américas para asegurar los intereses de seguridad a largo plazo de Estados Unidos. La TPA vincula la seguridad y prosperidad explícitamente arguyendo que los pactos comerciales y de inversión deben asegurar el acceso sin trabas de Estados Unidos a los recursos naturales de la región.[19] Pero la agenda de seguridad de EE.UU. va más allá en el caso de América Latina. Cabe recordar que Estados Unidos no percibe sus interacciones con los países latinoamericanos simplemente como relaciones "interestatales". Más bien históricamente Estados Unidos ha mantenido control extraterritorial en países de la región y lo ha justificado a partir de la confección de la Doctrina Monroe en 1823. En otras palabras, EE.UU. considera que su propia seguridad requiere expandir el espacio que controla alrededor de sus propios confines oficiales. El Departamento de Estado de EE.UU. sostiene que: … para ayudar a expandir el perímetro de seguridad de EE.UU. más allá de nuestras fronteras inmediatas, el Departamento ayuda a países seleccionados a fortalecer sus propias fronteras y puntos de entrada contra traficantes de drogas y de personas, terroristas y otros grupos criminales, ya sea en México, el Caribe o países colindando con Afganistán".[20]

Algunas de las maneras en que el gobierno de Bush "extiende su perímetro de seguridad" fueron explicadas en un informe preparado por el Congreso de EE.UU. a principios de 2005. El Informe de Investigación del Congreso analizó las políticas de seguridad de EE.UU. que "empujan la frontera hacia fuera". Éstas son políticas que buscan asegurar la seguridad de EE.UU. abordando las problemáticas antes de que lleguen a la frontera estadounidense. Éstas son políticas con las que los canadienses se han familiarizado en los últimos tres años desde que Canadá se unió a Estados Unidos y México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Estos esfuerzos por implantar el control extraterritorial de EE.UU. incluyen inspecciones inmigratorias de pasajeros que desean ingresar a EE.UU. en puertos extranjeros; presentación por adelantado de listas de pasajeros por las aerolíneas en ruta a EE.UU.; control previo de pasajeros antes del embarque; control previo de pasajeros asistido por computadora incluyendo el análisis del comportamiento de compra de pasajes y verificación de nombres contra

listas de vigilancia de terroristas; aplicación de la ley a bordo de los vuelos; listas de viajeros proscriptos; capacitación de sobrecargos; manifiestos de carga electrónicos por adelantado; seguridad de contenedores; asociación con la industria para asegurar la cadena de suministro de bienes importados a EE.UU.; mudar las inspecciones más lejos de la frontera a través de un programa de Seguridad del Perímetro de América del Norte; armonización de las políticas de inmigración y refugiados de EE.UU., Canadá y México; interceptación de individuos considerados como amenaza a la seguridad nacional; esfuerzos por "eliminar el arribo de inmigrantes indebidamente documentados".[21]

Si bien el imperialismo estadounidense en América Latina es de larga data, últimamente las relaciones entre EE.UU. y Canadá y entre EE.UU. y México son el campo de prueba para las nuevas tecnologías con las cuales Estados Unidos extiende su perímetro de seguridad con métodos extraterritoriales. Cuando Canadá firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y EE.UU. (CUFTA) en 1989, se argüía que Canadá estaba protegiendo su "relación especial" con Estados Unidos. En efecto, el modelo del CUFTA se convirtió en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el modelo del TLCAN ha sido impuesto en las negociaciones bilaterales de Estados Unidos y Canadá en las Américas. Las relaciones comerciales y de inversión entre Canadá y EE.UU. no sólo sirvieron de modelo para la liberalización del comercio y las inversiones, sino que ahora Canadá modela el comportamiento de un país con el propósito de mantener su condición de "perímetro de seguridad" más favorecido con EE.UU.

A partir de la derrota del ALCA, Estados Unidos ha elegido cuidadosamente con qué país negociar en América del Sur, América Central y el Caribe. En las circunstancias actuales, Canadá y México continuarán apoyando las políticas que "empujan la frontera estadounidense hacia fuera", y EE.UU. sigue buscando otros respaldos de esta índole. Por ejemplo, el Departamento de Estado de EE.UU. se refiere a las naciones caribeñas como "la 'tercera frontera' frecuentemente olvidada de EE.UU.", y desde 2001 puso en marcha una "Iniciativa para la Tercera Frontera".[22] La relación entre la política exterior de EE.UU. y Canadá en el Caribe amerita mayor análisis, especialmente a la luz del reciente pacto entre EE.UU. y República Dominicana, y el anuncio de Canadá de su intención de negociar con la República Dominicana y CARICOM. [23]

El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile entró en vigor el 1° de enero de 2004. EE.UU. cerró el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA) en mayo de 2004 a pesar de fuerte oposición por parte de grupos de la sociedad civil centroamericanos y estadounidenses condenando un pacto comercial y de inversión estilo TLCAN que incidiría negativamente en sus economías y los pobres. El pacto se ratificó en los cuatro países (Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador) en medio de enérgicas manifestaciones ciudadanas, a veces violentamente reprimidas. La oposición al pacto en Costa Rica fue tan decidida que el gobierno se vio obligado a realizar un referéndum que los grupos ciudadanos perdieron por un ligero margen. La oposición denunciaba interferencia de EE.UU. y fraude electoral.[24]

En 2004, EE.UU. y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) entablaron negociaciones para un tratado comercial y de inversión, pero EE.UU. optó por negociar sólo con países que participaban en la ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas). Esta Ley redujo los aranceles sobre las importaciones a Estados Unidos para aquellas Partes que se comprometieran a quitarle tierra a la producción de coca. Venezuela fue excluida. Cuando Bolivia y Ecuador emprendieron sus propias reformas alternativas garantizando más retornos para el gobierno de los ingresos provenientes del petróleo, EE.UU. suspendió las negociaciones con ellos. Estados Unidos entonces cerró un Acuerdo de Promoción

Comercial con Perú en febrero de 2006, y con Colombia en mayo de 2006.

Como resultado, las relaciones multilaterales se complicaron aún más en la región andina y el Cono Sur. Venezuela abandonó el CAN denunciando la influencia de EE.UU. en la organización.[25] Chile, bajo un gobierno a favor del libre comercio, se volvió a unir en junio de 2007.[26] Posteriormente Hugo Chávez, el Presidente venezolano solicitó el ingreso de su país a MERCOSUR, el bloque comercial del Cono Sur, pero Chávez también ha estado promoviendo su propia Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La ALBA es una iniciativa de "comercio justo" establecida primeramente con Cuba (médicos por petróleo), luego con Bolivia y después con Nicaragua (bajo Daniel Ortega). Dominica es el primer miembro de habla inglesa de CARICOM en unirse a la ALBA. Más recientemente, Chávez anunció la creación de un banco regional de préstamos que constituirá una alternativa al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta iniciativa es una ampliación del BanSur establecido por Venezuela noviembre pasado junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay.[27]

Bajo todo punto de vista, este rechazo a la hegemonía del "Consenso de Washington" representa una amenaza para la superpotencia del mundo. Su respuesta ha sido agresiva y es necesario comprender el tratado del gobierno de EE.UU. con Colombia teniendo en cuenta este contexto fuertemente "securitizado" y polarizado". A partir del 11 de septiembre EE.UU. justifica sus iniciativas extraterritoriales como esfuerzos por asegurar su propia frontera. Como resultado, continúan las "guerras"·al terrorismo, las drogas, los inmigrantes, Hugo Chávez y el populismo de la "marea rosa". A modo de ilustración, los gastos militares de EE.UU. en América Latina y el Caribe superan su ayuda económica. Desde el año 2000, "EE. UU. ha gastado aproximadamente $3 mil millones en el "Plan Colombia", un paquete de programas para combatir el tráfico de drogas, capacitar al ejército colombiano para luchar contra los insurgentes y fortalecer a las instituciones gubernamentales".[28] El Departamento de Estado de EE.UU. ha presupuestado $590 millones en ayuda a Colombia para el ejercicio 2008, es decir un aumento de $9,4 millones respecto de 2006.[29] Colombia es el tercer beneficiario más importante de ayuda económica estadounidense después de Israel y Egipto, y recibirá $750 millones en el periodo 2007-08. El Consejo de Asuntos Hemisféricos reporta que es mucho más que el total asignado a todos los demás países latinoamericanos juntos.[30]

Es más, como indica Carlsen, la inclusión de Colombia en la expansión de seguridad norteamericana debe ser comprendida a la luz del "nuevo paradigma de cooperación en seguridad" del gobierno de Bush.[31] El Plan Colombia es el modelo para la mayor ayuda militar a México en un esquema que algunos observadores denominan el "Plan México" debido a las similitudes entre los dos programas.[32] Esta nueva iniciativa de seguridad en la frontera entre México y EE.UU., formalmente llamada la "Iniciativa Mérida" enfocará en las actividades delictivas y el tráfico de drogas transfronterizos. En 2008 el Congreso asignará $550 millones a esta Iniciativa para que contratistas de defensa y empresas de tecnología de la información suministren y capaciten a las fuerzas militares y policiales mexicanas. Según Carlsen, de ninguna manera se trata de una estrategia conjunta para abordar el problema de las actividades delictivas y el tráfico de drogas puesto que el peso de la responsabilidad recae sobre México. Según el Plan EE.UU. no se ocupa de enfrentar la demanda y venta de drogas, el tráfico de armas o el lavado de dinero.[33]

Gutiérrez, el Secretario de Comercio de EE.UU., aclaró que la intención del tratado de EE.UU. con Colombia y su agenda bilateral en América Latina es contrarrestar el poder del Presidente Hugo Chávez en el hemisferio. Al dirigirse a líderes empresariales estadounidenses declaró, "Un voto en contra de estos TLC es un voto a favor de ralentizar reformas vitales, ayudando a quienes buscan obstaculizar la propagación

de la libre empresa y la democracia".[34] El gobierno de Bush no oculta el hecho de que el propósito del pacto comercial/de inversión/seguridad con Colombia es expandir el perímetro de seguridad de EE.UU. Bajo su gobierno actual, Colombia es el aliado perfecto para esta tarea.

El Tratado Sin Ratificar entre EE.UU. y Colombia

Las implicancias para los derechos humanos de estos recientes "Acuerdos de Promoción Comercial" de EE.UU. han sido puestas sobre el tapete por los opositores políticos del gobierno de Bush. Ante la oposición en su país y en el extranjero, en marzo de 2007 Bush buscó más apoyo para su política exterior en América Latina en un viaje de seis días a cinco países visitando Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México.[35] Cuatro meses más tarde en junio de 2007, el Presidente Bush obtuvo el espaldarazo del gobierno canadiense que anunció que Canadá renovaba su relación con el hemisferio y que inmediatamente iniciaría negociaciones comerciales con Colombia y Perú.[36]

El gobierno de Bush continuó enfrentando firme oposición en EE.UU. El Centro de Solidaridad AFL-CIO se opuso enérgicamente a este pacto señalando que sindicalistas colombianos habían sido asesinados impunemente y que no hubo condena en 97% de estos crímenes. Dirigiéndose a la Cámara de Representantes del Congreso, el Presidente John Sweeney dijo que en la situación actual: . no tenemos mucha esperanza de que los trabajadores, que simplemente no pueden ejercer sus derechos básicos en el actual entorno hostil, se beneficien de una expansión potencial del comercio o de la inversión. En estos momentos aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia costaría a Estados Unidos considerable influencia sobre Colombia para impulsar un progreso continuado en materia de derechos humanos.[37]

Sin embargo, el tratado entre EE.UU. y Perú fue ratificado por la Cámara de Representantes de EE.UU. en noviembre de 2007 después de que suficientes Demócratas se sintieran conformes con las enmiendas bilaterales que otorgaban mayores protecciones para los trabajadores y el medio ambiente en Perú, así como una extensión del Programa de Asistencia para Ajuste del Comercio del TLCAN para trabajadores estadounidenses afectados por despidos.[38] Los sindicatos peruanos siguen oponiéndose al tratado aún después de la inclusión de estos cambios.[39]

A lo largo de 2007, los líderes Demócratas de la Cámara de Representantes se opusieron firmemente al Acuerdo de Promoción Comercial con Colombia: "Este preocupación generalizada en el Congreso de EE.UU. por la violencia en Colombia, la impunidad, la falta de investigaciones y procesamientos judiciales, y el rol de los paramilitares. Asuntos de esta índole no pueden resolverse solamente a través del lenguaje de un tratado comercial. Sostenemos que primero se debe contar con pruebas concretas de resultados sostenidos en el terreno en Colombia, y los congresistas continuarán trabajando con todas las partes interesadas para lograr este objetivo antes de considerar un TLC. En consecuencia, por el momento no podemos apoyar el TLC con Colombia".[40]

De todos modos, a fines de 2007 y principios de 2008 el gobierno de Bush ejerció presión intensa sobre el Congreso de EE.UU. El gobierno colombiano obró de la misma manera realizando una campaña de relaciones públicas y cabildeo con empresas de alto nivel de Washington, campaña por la cual se dice que el gobierno colombiano pagó cientos de millones de dólares.[41]

El gobierno de Bush encabezó las delegaciones del Congreso a Colombia para convencer a los Demócratas de las virtudes del pacto. Estas misiones vinieron después de delegaciones anteriores que habían llevado a cabilderos de importantes empresas y gremios empresariales de EE.UU. a Colombia.[42] En una sesión informativa previa para los periodistas que cubrían la delegación de Condoleezza Rice, la Secretaria de Estado, a Colombia en enero de 2008, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos

Hemisféricos, Thomas A. Shannon, hizo la conexión entre este tratado de libre comercio y los intereses de seguridad de EE.UU. Declaró que es imperativo que el Congreso de EE.UU. ratifique el pacto con Colombia a fin de consolidar la presencia de EE.UU. en el Pacífico: ...no se trata sólo de nuestra relación con Colombia, por más importante que ésta sea. Colombia es un socio estratégico de EE.UU. en una región complicada y tenemos mucho que ganar de nuestra relación con Colombia. Si nuestro Congreso aprueba el tratado de libre comercio con Colombia y el tratado de libre comercio con Panamá se creará un cinturón ininterrumpido de tratados de libre comercio a lo largo de la costa del Pacífico de las Américas desde Canadá a Chile. Esto es un logro extraordinario. Es un cinturón de tratados de libre comercio que cubre aproximadamente dos tercios del PIB de la región, sin incluir a Estados Unidos. Cubre aproximadamente un tercio de nuestro movimiento comercial a escala global y crea una plataforma estratégica no sólo para cruzar el Pacífico de un salto a algunas de las economías más dinámicas del mundo, sino que también me hace recordar una interesante conversación con MERCOSUR y otros países de la región que aún no están dispuestos a entrar en negociaciones de libre comercio con nosotros… Esto contiene un componente estratégico que va más allá de Colombia, que va más allá de EE.UU. y se refiere a cómo nos relacionamos con las Américas. Se refiere a cómo empezamos a consolidar una comprensión de democracia y una comprensión del libre comercio que ciertamente nos conviene.[43]

Este punto geopolítico no debe ser pasado por alto, en particular debido al descuido geográfico de Shannon (Ecuador está en el medio del supuesto cinturón ininterrumpido de tratados a lo largo del Pacífico). Estados Unidos actuará en pos de mantener su "plataforma estratégica" en la costa del Pacífico. De igual manera, en un viaje reciente a Colombia, Mike Mullen, Presidente del Estado Mayor Conjunto, abundó sobre la necesidad de una presencia estadounidense en la costa del Atlántico. A la par que acusaba a Chávez de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de expresar inquietud respecto de que Venezuela está comprando armas, Mullen también indicó que es probable que la Armada de EE.UU. vuelva a desplegar su 4ª Flota en Florida lo cual le permitiría navegar las aguas del Atlántico desde el Caribe pasando por América Central hasta América del Sur.[44]

La delegación de Rice, que incluyó cuatro Sub-Secretarios y nueve Representantes Demócratas del Congreso, se reunió con el liderazgo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia. La CUT sostuvo que en realidad las asimetrías entre los dos países significarían la anexión de la economía colombiana a la estadounidense. También explicaron el impacto negativo que preveían para el sector agrícola, así como para la soberanía de Colombia en materia de producción alimentaria, industria y servicios de salud. Explicaron que la pérdida de los mercados para cultivos legales aumentaría el poder de los narcotraficantes. También hablaron de la violencia en contra de los sindicalistas y la impunidad con la que se tratan estos crímenes. Por último instaron al gobierno de EE.UU. que no aprobara el tratado sino que presionara al gobierno colombiano para que reforme su legislación laboral e implemente las normas de la OIT.[45] El movimiento laboral colombiano organizó una campaña muy intensa a escala nacional e internacional para contrarrestar esta iniciativa.[46]

A modo de respuesta, la Secretaria de Estado indicó que el gobierno de Colombia era un aliado de Estados Unidos y por lo tanto el gobierno de EE.UU. continuaría promoviendo este tratado comercial que, a su parecer, contaba con requisitos más rigurosos en materia de asuntos laborales que ningún otro tratado hasta la fecha. Por su parte, los representantes del Congreso hablaron a favor del "comercio justo" e indicaron que sería muy difícil que este tratado sea aprobado en Estados Unidos

dada la indignación generalizada por las violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Bush no logró apoyo de la opinión popular colombiana e inmediatamente al aterrizar en Colombia el 24 de enero Condoleezza Rice fue declarada *persona non grata* por el liderazgo de la coalición de lucha contra el libre comercio y sus miembros. El Comité Colombiano de Lucha Contra el ALCA y la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (RECALCA) convocaron manifestaciones y movilizaciones populares con motivo de su visita al país.[47]

Luego, en abril de 2008, frustrado por la inacción de los Demócratas de la Cámara de Representantes, el Presidente Bush decidió forzar el tema en el Congreso con una legislación de implementación del pacto entre EE.UU. y Colombia con un régimen agilizado. Esta legislación, que requiere votación dentro de un plazo de tiempo limitado, resguarda contra enmiendas y acciones parlamentarias que impidan que se someta el tratado a votación. En una rueda de prensa en la Casablanca, el

Presidente Bush declaró que el pacto con Colombia: …fomentará los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos en una región crítica. Fortalecerá a un valiente aliado en nuestro hemisferio… este tratado es demasiado urgente, lo que está en juego es demasiado valioso… amerita apoyo de los dos partidos en el Congreso.[48]

Normalmente los presidentes estadounidenses sólo envían pactos comerciales al Poder Legislativo cuando están razonablemente seguros de obtener un resultado positivo, razón por la cual el Congreso nunca ha votado en contra de pacto alguno.[49] Pero el Presidente Bush tomó esta medida sin el respaldo explícito de la oposición y, desafortunadamente para él, a principios de 2008 Nancy Pelosi, Líder de los Demócratas en la Cámara de Representantes y su grupo no estaban de humor para ser presionados. "El Presidente hizo lo suyo. Yo haré lo mío mañana" dijo Pelosi al anunciar que la Cámara votaría un cambio de reglas para eliminar el periodo máximo legalmente instruido de 90 días para aprobar la medida.[50] Es poco probable que el pacto con Colombia sea votado en un Congreso controlado por los Demócratas antes de las elecciones de noviembre de 2008.

Bilateralismo Asimétrico

¿Por qué Canadá? ¿Por qué? Lo que está en juego es la reputación de Canadá como símbolo escrupulosamente pulido de rectitud pública y proyecciones de los políticos de un gobierno regido por principios y conocido por su integridad.[51]

A mediados de 2007, cuando el Congreso de EE.UU. indicó al gobierno de Bush que perdería la votación sobre la Acuerdo de Promoción Comercial de Colombia si lo sometía a la Cámara, repentinamente el gobierno del Primer Ministro Stephen Harper empezó a mostrar interés en las Américas y en un pacto comercial con Colombia. En parte el gobierno conservador de Harper estaba intensificando la agenda de expansión económica de Canadá en las Américas, un tema que los líderes empresariales y políticos han tenido presente desde los 90. Para 2006, Canadá era el tercer inversor externo más importante en América Latina y el Caribe. Canadá es el inversor más importante en minería y cuenta con una sólida presencia en servicios financieros, telecomunicaciones, y petróleo y gas, entre otros sectores.[52] Canadá también trabajaba para que el pacto de EE.UU. con Colombia fuera más potable a nivel nacional e internacional.

En mayo de 2007, Canadá anunció una nueva estrategia para las Américas basada en la reivindicación canadiense de ser defensor de derechos humanos, democracia, estado de derecho y buen gobierno. David Emerson, Ministro de Comercio Internacional, anunció que podría darse un nuevo enfoque al comercio en la región con países compatibles "en materia de nuestros valores fundamentales y nuestro abordaje a la democracia".[53] Entonces, al dirigirse al Club de Canadá, el Ministro de Relaciones Exteriores Peter MacKay declaró: "El nuevo

abordaje de Canadá en asuntos exteriores es superar la retórica y las riñas políticas, y enfocarnos en lo que podemos hacer de manera constructiva y estamos haciendo para fomentar la seguridad, la prosperidad y la paz en nuestro hemisferio, y por supuesto, ser ejemplo para resto del mundo".[54]

En octubre Maxime Bernier, Ministro de Relaciones Exteriores, confirmó el vínculo cuando declaró ante el Parlamento canadiense que: "Nos esforzaremos para fortalecer la seguridad en este continente y consolidar relaciones más seguras con nuestros vecinos… también trabajaremos para que nuestras economías sean más sólidas y sustentables promoviendo tratados de libre comercio".[55]

El Primer Ministro Harper viajó a la región en julio de 2007 y visitó Chile, Colombia, Haití y Barbados. En Chile reafirmó las metas de Canadá de fortalecer y promover "los valores canadienses", impulsar el comercio y la inversión, y sorprendentemente vinculando estos dos primeros objetivos con un tercero que era "confrontar los nuevos desafíos de seguridad, así como desastres naturales y pandemias de salud".[56] En Colombia, entre otras iniciativas, Harper anunció que se habían iniciado negociaciones de libre comercio entre Canadá y Colombia, y Canadá y Perú,[57] es decir los dos países que recién habían cerrado pactos con Estados Unidos.

Pronto la doble misión del Primer Ministro se volvió evidente: tenía que ser visto como trabajando por asegurar nuevas oportunidades de negocios para empresas canadienses, principalmente en el sector extractivo, y también empezó a ejercer presión sobre los Demócratas en la Cámara de Representantes de EE.UU. que seguían oponiéndose a la ratificación de su propio pacto. Harper empezó a cabildear activamente a favor de la postura del Presidente Bush dentro mismo de las fronteras de Estados Unidos. El 25 de septiembre de 2007, Harper declaró ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York: "En mi opinión Colombia necesita que sus amigos democráticos le tiendan una mano y le brinden la oportunidad de asociarse y comerciar con América del Norte. Me preocupa sobremanera que no todos en Estados Unidos parecen estar dispuestos a esto. ¿Cuál es el mensaje que envían a quienes desean colaborar en libertad y prosperidad? Existe mucha preocupación en este país en torno a la ideología de populismo, nacionalismo y proteccionismo en las Américas y los gobiernos que la promueven. A decir verdad amigos míos, no existe otro lugar en el hemisferio donde esas fuerzas puedan hacer más daño real que esas mismas fuerzas en EE.UU… Que EE.UU. le dé la espalda a sus amigos en Colombia perjudicará nuestra causa mucho más de lo que podría esperar cualquier dictador latinoamericano".[58]

Un mes más tarde, George W. Bush empezó el primero de una serie de discursos en los que cita al Primer Ministro de Canadá.[59] El 12 de octubre, en un discurso ante la Cámara de Comercio del Gran Miami, George W. Bush se refirió al discurso de Harper: "Tal como especificó el Primer Ministro Stephen Harper de Canadá… que EE.UU. le dé la espalda a sus amigos en Colombia perjudicará nuestra causa mucho más de lo que podría esperar cualquier dictador latinoamericano".[60]

En marzo de 2008, en un discurso ante los cargadores de muelle en Jacksonville Florida, el Presidente Bush instó a los Demócratas a prestar atención a las "palabras sabias" del Primer Ministro Harper: "… No soy sólo yo. Muchos comprenden la importancia de este tratado. Nuestros aliados han expresado su postura claramente. Yo quiero que los congresistas atiendan lo que dijo Stephen Harper, el Primer Ministro de Canadá. Dijo que "que EE.UU. le dé la espalda a sus amigos en Colombia perjudicará nuestra causa mucho más de lo que podría esperar cualquier dictador latinoamericano".[61]

En el discurso del Presidente Bush al firmar la legislación de implementación nuevamente se refirió a las palabras de Harper: "que EE.UU. le dé la espalda a sus amigos en Colombia perjudicará nuestra causa mucho más de lo que podría esperar cualquier dictador latinoamericano.[62]

Indudablemente Harper y Bush trabajaron conjuntamente para aprovechar las acciones de Canadá para incidir en y debilitar la oposición Demócrata al pacto. Fue así que siete Representantes Demócratas del Congreso de EE.UU. escribieron una carta a sus contrapartes en Ottawa explicando porqué para ellos, "ningún tratado comercial con Colombia es aceptable en este momento".[63] La carta fue seguida por una visita de uno de los signatarios, Michael Michaud, el Representante Demócrata de Maine, el 4 de febrero de 2008. El Congresista Michaud viajó a Ottawa para reunirse con los Líderes y Críticos de los tres partidos de oposición, así como con Emerson, el Ministro de Comercio. Instó al gobierno canadiense y a los miembros de la oposición a no seguir adelante con el pacto comercial si no se evidencian mejoras medibles en la situación de los derechos humanos en Colombia.[64]

En efecto, éste fue el sentir clave de los miembros del Comité de Comercio Internacional que habían realizado un estudio de dos meses sobre los impactos humanitarios y ambientales de las controvertidas negociaciones comerciales y el eventual tratado. Los partidos de la oposición se horrorizaron cuando el gobierno canadiense anunció que había concluido el tratado antes de analizar el informe del Comité de Comercio Internacional.[65]

Los partidos opositores concluyeron que el gobierno canadiense socavaba el trabajo del Comité Parlamentario y avanzaba a ese ritmo con el fin de darle una mano al Presidente Bush en su lucha con el Congreso.[66] En el Periodo de Preguntas del 9 de junio de 2008, Navdeep Bains, el Crítico Liberal de Comercio dijo: "Hace meses que el Primer Ministro y el Presidente Bush se vienen citando mutuamente con el objetivo de acelerar estos tratados con Colombia, pasando por alto graves inquietudes en materia de derechos humanos y el medio ambiente. Los estrechos vínculos y la admiración del gobierno por el Partido Republicano están bien documentados… ¿Podría el Primer Ministro explicar por qué los Republicanos siguen decidiendo nuestra política comercial?"[67]

Las autoridades colombianas captaron la táctica e inmediatamente sostuvieron reuniones con sus contrapartes estadounidenses para ver si era posible reavivar el atascado tratado entre EE.UU. y Colombia una vez más. Luis Guillermo Plata, Ministro de Comercio de Colombia declaró a los reporteros: "El tratado con Canadá tiene su propio mérito, pero indudablemente tendrá un efecto colateral. Recién hemos concluido un tratado con un competidor de Estados Unidos en muchos productos como cebada, trigo, carne de cerdo y maquinaria para minería. Tal vez se den cuenta de lo que pierden cuando vean que gran parte de nuestro comercio empieza a ir por otra vía".[68]

Los tratados entre EE.UU. y Colombia y Canadá y Colombia incluyen pactos paralelos de cooperación laboral y el medio ambiente. Tanto Estados Unidos como Canadá reivindican que las disposiciones laborales de sus respectivos tratados son "de última generación". El Presidente Bush declaró "incluimos disposiciones laborales y ambientales más estrictas que las de cualquier otro tratado de libre comercio".[69] Canadá anunció que su pacto comercial "contiene disposiciones laborales mucho más integrales que ningún otro tratado del mundo". El pacto compromete a cada país a respetar normas laborales fundamentales, tales como las de la OIT, y los que vulneran estas normas laborales fundamentales tendrían que pagar una multa de hasta $15 millones por violaciones.[70] Sin embargo, Canadá y Colombia ya están comprometidos por las Convenciones de la OIT por ser miembros de la Organización Internacional del Trabajo. El cinismo del pacto con Colombia no termina ahí. Los líderes sindicales, abogados laborales, parlamentarios opositores y analistas en Canadá se horrorizaron al conocer los detalles de las disposiciones laborales que justifican este pacto. Éstas están resumidas en la opinión de disenso del Nuevo Partido Democrático (NPD): "Evidencia provista por negociadores canadienses de alto nivel

ante el Comité Permanente de Comercio Internacional reafirmaron que el comunicado de prensa del 7 de junio del gobierno de Harper confirma que el tipo de cláusulas de protección laboral que establece el TLC castigará a quienes asesinan a trabajadores con una orden de compensación – lo cual equivale a un simple giro monetario contra los libros contables del gobierno. El tope para la multa por asesinar a sindicalistas se fijó en $15 millones, en un año cualquiera, pagados por el gobierno colombiano a un fondo de desarrollo. Objetivamente hablando, el pago máximo en un año de $15 millones equivale a $5.628 por sindicalista ya asesinado. ¿Cómo se sentirían los canadienses si Harper acordara el mismo trato para aquéllos que intencionalmente se disponen a asesinar a los organizadores del movimiento laboral dentro de nuestras propias fronteras? ¡Cuánta falta sin sentido de aprecio por la vida humana!"[71]

A pesar de que Harper pasó por alto el trabajo democrático del Comité de Comercio Internacional (CCI), el Comité igualmente presentó su informe en el que se recomendaba que Canadá no firme ni implemente el pacto con Colombia hasta que dicho país no haya tomado sus recomendaciones en cuenta. Entre otros, el Comité recomendó que: "una entidad competente debería llevar a cabo una evaluación independiente, imparcial e integral del impacto sobre los derechos humanos... antes de que Canadá considere firmar, ratificar e implementar el tratado con Colombia".[72]

Además el Informe recomendó que: "todo tratado comercial con Colombia debe estar acompañado por disposiciones legisladas sobre la responsabilidad social corporativa y los mecanismos para la presentación de informes a fin de monitorear la implementación de las normas universales de derechos humanos por las entidades canadienses que inviertan en Colombia".[73]

Una expresión del debate fuertemente politizado dentro del Comité fue que los tres partidos opositores escribieron su propio informe de disenso y un miembro del Comité se dirigió a la Cámara expresando la distancia entre el gobierno y el informe.[74] El 19 de junio de 2008 cuando se levantó el 39° Parlamento, las negociaciones habían concluido y se había anunciado una revisión legal de los textos negociados. A pesar del enconado debate político, los parlamentarios no necesariamente votarán sobre el pacto con Colombia cuando se reanude el Parlamento puesto que bajo la nueva legislación introducida por los Conservadores el tratado será presentado a la Cámara de los Comunes para su revisión, pero no será ratificado por ella.[75]

Conclusión

Desde el inicio de las negociaciones de libre comercio entre Canadá y EE.UU. a fines de los 80, el movimiento laboral y la izquierda canadiense han retado al gobierno canadiense a que favorezca políticas económicas nacionales que fomenten la igualdad y fortalezcan la democracia por encima de políticas que aumentan el poder corporativo y debilitan las voces de los trabajadores en el Parlamento y la sociedad en general. En los 90 las fuerzas populares se opusieron al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque incrementaba los derechos de los inversores a la par que agregaba un mecanismo inefectivo para tratar con las inquietudes de los trabajadores. Ahora, catorce años después de la entrada en vigor del TLCAN, los movimientos laborales y las fuerzas populares en todo el hemisferio siguen opuestos a estos pactos comerciales y de inversión. La situación se torna aún más grave puesto que Canadá ni siquiera se esfuerza por fingir que cuenta con una política exterior independiente y sigue la estrategia de EE.UU. de socavar la solidaridad latinoamericana cerrando pactos bilaterales con países identificados como de importancia estratégica por el gobierno de Bush. Es más, en esta generación de negociaciones, los pactos "comerciales" y "de inversión" también incluyen un aspecto de "seguridad" en el que ni se menciona la seguridad de los trabajadores o de las personas.

En el caso del pacto de Colombia, las coaliciones de organizaciones laborales, no-gubernamentales, de fe y de desarrollo representadas por el Congreso del Trabajo de Canadá, el Grupo de Políticas de las Américas del Consejo de Cooperación Internacional y Fronteras Comunes de Canadá han estado trabajando estrechamente con asociados colombianos para contrarrestar la campaña del gobierno conservador con el fin de construir el tipo de apoyo que detendría las negociaciones e impediría la ratificación por el gobierno.[76] La campaña se fundamentó en un discurso que defiende los derechos humanos sosteniendo que, en vista de que acuerdos paralelos sobre trabajo, como el que fue agregado al TLCAN, no han logrado proteger los derechos de los trabajadores, simplemente incluir un capítulo laboral en el texto del tratado entre Canadá-Colombia no prevendrá ni una sola amenaza de muerte. Es improbable que un capítulo laboral proteja a los trabajadores contra los derechos tipo-TLCAN otorgados a los inversionistas y empleadores. Los investigadores de la Escuela Nacional Sindical manifestaron: "… un tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá significaría un premio político para el gobierno colombiano, pero no garantizaría las vidas y la seguridad de los sindicalistas colombianos. Ni garantizaría los derechos laborales ni las libertades sindicales ni el diálogo social… Si el Primer Ministro Stephen Harper de Canadá realmente desea respetar los "valores canadienses" -que suponemos incluyen a los derechos humanos y laborales- no debe firmar un tratado comercial con el actual gobierno de Colombia".[77]

De igual manera la Asociación Canadiense de Abogados Laborales sostiene que: "… en general, al ser implementados por las partes contratantes los tratados de comercio preferenciales no proporcionan mecanismos reales para garantizar que los derechos laborales sean protegidos. Al combinarlos con otros aspectos de los tratados de "libre comercio" que afectan la vida de los trabajadores, el efecto es una compresión de los derechos laborales y estándares de trabajo concedidos a los trabajadores. El advenimiento de tratados comerciales preferenciales regionales ha socavado la capacidad de los trabajadores de proteger sus derechos y sustento diario".[78]

Estos análisis han sido elaborados a partir de las experiencias históricas y compartidas de los movimientos activistas y su contexto es la incesante reestructuración neoliberal. A partir del momento en que el movimiento laboral canadiense, sus aliados en la academia y otras ONG empezaron a analizar el significado de la "integración profunda" en América del Norte, cada organización nacional ha tomado medidas públicamente para oponerse a la falta de democracia de la ASPAN y educar a sus sectores internamente sobre sus implicancias. En la agenda comercial del hemisferio, los activistas siguen interviniendo en la nueva dinámica bilateral a la sombra del fracaso del ALCA y del estancamiento de la Ronda Doha de conversaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. De igual manera, las coaliciones populares que trabajan en la problemática comercial y de inversión en Canadá, Quebec, Estados Unidos y México han detectado en la ASPAN y en los nuevos tratados bilaterales una degradación de la práctica política a nivel nacional en todos sus contextos. En efecto, el gobierno de Harper es una reacción a nivel ejecutivo a los movimientos políticos que se han erigido en todas las Américas desde fines de los 60 en oposición a las intervenciones de EE.UU., la represión, la deuda, el ajuste estructural, la reestructuración neoliberal y los pactos comerciales. Estas coaliciones reconocen el impacto de sus propios esfuerzos en pos de cimentar la Alianza Social Hemisférica (ASH) y las propuestas de la Plataforma Laboral de las Américas. A su vez, la ASH ha desarrollado apoyo para las políticas de desarrollo democráticas y nacionales propugnadas por los nuevos gobiernos en América Latina.

Junto con los trabajadores de todo el hemisferio estamos empeñados en la lucha

colectiva por la igualdad económica, la democracia participativa, la seguridad humana y la defensa de los derechos humanos que toma forma y ocupa su lugar a nivel nacional y a través de la participación con las estructuras estatales nacionales. En este sentido hay mucho que aprender de nuestras contrapartes en América Latina. Esta búsqueda por una renovación de las alternativas a nivel nacional es también una forma de solidaridad transfronteriza y guarda potencial para fortalecer la capacidad de nuestros movimientos. Por ejemplo, los movimientos populares en las Américas cuentan con experiencia en estados de seguridad y deberían ser escuchados por los activistas canadienses. Si bien dichos intercambios quedarían fuera de la definición de los intereses "nacionales" de Canadá en las Américas, sería aconsejable que los movimientos populares aprendan más los unos de los otros. Ciertamente, mientras que nuestros líderes políticos siguen ocupados en su bilateralismo asimétrico, nosotros podremos encontrar las alternativas más creativas para la lucha por la democracia política y económica recuperando lo que nuestra marginalidad nos puede enseñar.[79] Sin duda esto engendrará mayor reflexión sobre lo que se requiere para que se produzca un cambio en Canadá también.



[1] Gabriel, Perez, Testimony to Standing Committee on International Trade Mission to Colombia, May 2008, as cited in "Dissenting Opinion New Democratic Party: Human Rights, the Environment and Free Trade with Colombia" 5th Report of the Standing Committee on International Trade, June 2008, p.61 http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteeList.aspx?Lang=1&PARLSES=392&JNT=0&SELID=e22_.4&COM=13181&STAC=2393871

[2] Colombian Trade Union Federations, *Labor Rights and Freedom of Association in Colombia* Bogotá, October 2007.

[3] ¨Informe a la 97th Conferencia Internacional del Trabajo: Presentado por las Centrales Sindicales colombianas y la Confederación de Pensionados de Colombia, CUT, CGT, CTC y CPC, Bogotá, mayo de 2008

[4] Polo Democrático Alternativo, "Letter of Solidarity to the President of the Supreme Court of Colombia" , January 21, 2008.

[5] Ruckert, Arne and Macdonald, Laura, Harper (Re) Engages the Hemisphere: Canada and Post Neoliberal Latin America, presented to conference titled "Canada and the Americas: Defining Re Engagement,"organized by DFAIT, Centre for Trade Policy and Law, and FOCAL, March 12, 13, 2008

[6] There are two major economic sub-regions in South America, the Andean Community of Nations (CAN) and the Common Market of the Southern Cone (MERCOSUR).

[7] Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), "Labour's Platform for the Americas" http://www.gpn.org/research/orit2005/index.html

[8] Teresa Healy, "America del Norten Competitiveness Council and the ASPAN: *Les agents provocateurs* at the Montebello Leaders' Summit" September 2007 www.canadianlabour.ca

[9] U.S.embassy official at meeting with Canadian Labour Congress, Council of Canadians and Canadian Centre for Policy Alternatives, April 18, 2007, Ottawa.

[10] Government official, Briefing on the ASPAN with Public Safety and Emergency Preparedness Canada and Department of Industry Canada, and Canadian Labour Congress, Council of Canadians and Canadian Centre for Policy Alternatives, February 6, 2007.

[11] Davies, Libby M.P. (Vancouver East, NDP) House of Commons HANSARD June 19, 2008.

[12] US Department of State, "Remarks With Mexican Foreign Secretary Patricia Espinosa and Canadian Foreign Minister Maxime Bernier after their Meeting", Washington, DC, April 8, 2008 (Retrieved June 25, 2008). http://www.state.gov/secretary/rm/2008/04/103316.htm

[13] U.S. Office of the White House President Bush Participates in Joint Press Availability with President Calderon of México and Prime Minister Harper of Canada, New Orleans, April 22, 2008. Retrieved June 24, 2008 .ttp://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/04/20080422-5.html

[14] Michelle Collins, "Slow Progress, Frustration mark ASPAN Summit" *Embassy,* April 23, 2008 www.embassymag.ca

[15] Carlsen, Laura, "Dissecting the America del Norten Summit Joint Statement: Bush's Last Stand", Americas Program Commentary, *Center for International Policy* (CIP), April 23, 2008 http://américas.irc-online.org/am/5178 (Retrieved April 29,2008)

[16] Thomas D'Aquino, "Seizing the Opportunities of Globalization" *Policy Options,* June 2008, 56-62.

[17] Michelle, Collins, "Colombia Deal Done Before Human Rights Study Complete", *Embassy,* June 11, 2008

[18] Tod Gordon, "Building its Ties to Colombia: Canada's Imperial Adventures in the Andes" *The Bullet* (Socialist Project e-bulletin 110, May 27, 2008

[19] Ariela Ruiz Caro. "Peru Gets its Free Trade Agreement with the United States" *Americas Program Policy Report,* November 13, 2007 http://américas.irconline.org/am/4726.html

[20] U.S. Department of State, "Performance Plan: Fiscal Year 2004, Strategic Goal 5- International Crime and Drugs", March, 2003 www.state.gov/s/d/rm/perfplan/2004/20480.htm

[21] Congressional Research Service, "Border and Transportation Security: Selected Programs and Policies", *Report for Congress,* March 29, 2005.
[22] US Department of State, "Congressional Budget Justification: Foreign Operations: Fiscal Year 2008", May 2, 2007, p.681
[23] Foreign Affairs and International Trade Canada, New Release, June 7, 2008
[24] Jessica Walker Beaumont, "Costa Rica Referendum on CAFTA Outcome Questioned", Alliance for Responsible Trade (ART) , Monday, October 8, 2007, http://afd-headlines.blogspot.com/2007/10/costa-rica-referendum-on-cafta-outcome.html
[25] Ruiz Caro. "Peru Gets its Free Trade Agreement" November 13, 2007
[26] Eva Silkwood, "Juntos Podemos? Together we CAN: Chile and the Andean Community's Quest for Free Trade", *Council on Hemispheric Affairs*, July 17, 2007.
[27] Ian James, "Chavez Urges Withdrawal from U.S. Banks", *Associated Press,* January 27,2008
[28] Elinor Shields, "US weighs costs of Plan Colombia", BBC News, July 5, 2005
http://news.bbc.co.uk/2/hi/américas/4627185.stm (Retrieved June 26, 2008)
[29] US Department of State, "Congressional Budget Justification: Foreign Operations: Fiscal Year 2008", May 2, 2007.
[30] Center for International Policy,US Aid to Colombia, Summary Table: US Aid to Colombia since 1997. http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm Retrieved January 15, 2008.
[31] Laura Carlsen, "U.S.-Latin America: The Intersection of Trade and Security, Americas Program, Center for International Policy (CIP), April 11, 2008
[32] Steven Lendman, "Plan México: Plan Colombia Heads for México". *Global Research,* May 27, 2008, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9084(Retrieved June 26, 2008)
[33] Carlsen, Laura, "Dissecting the America del Norten Summit Joint Statement: Bush's Last Stand", Americas Program Commentary, *Center for International Policy* (CIP), April 23, 2008 http://américas.irc-online.org/am/5178 (Retrieved April 29,2008)
[34] Keith Koffler. "FTA Push Moves to Top of Bush Agenda", *National Journal,* July 18, 2007. www.nationaljournal.com
[35] Larry Birns,"The President's Latin American Journey: A matter of low expectations and utter despair" *Council on Hemispheric Affairs,* March 8, 2007 www.coha.org
[36] Jennifer Ditchburn, "Harper to visit volatile capitals in southern hemisphere", *Canadian Press,* Thursday, May 31, 2007
[37] Sweeney, John J. "Letter to Representatives on the issue of Colombia", AFL-CIO, November 8, 2007
[38] Ruiz Caro. "Peru Gets its Free Trade Agreement, November 13, 2007
[39] Central Unitaria de Trabajadores del Perú, and the Confederación General de Trabajadores del Perú, "Letter to Democratic Representatives", Congress of the United States of America, August 20, 2007. http://www.citizenstrade.org/pdf/PeruvianLaborUnionLetter_082007.pdf
[40] U.S. Government House of Representatives, "News from House Democrats: Pelosi, Hoyer, Rangel, and Levin Statement on Trade", Friday, June 29, 2007 http://speaker.house.gov/newsroom/pressreleases?id=0235
[41] Lipton, Eric and Weisman, Steven R., Wide Net Cast by Lobby for Colombia Trade Pact, New York Times, April 8, 2008
[42] Kevin Bogardus, "White House, Colombia press Democrats on FTA", *The Hill,* November 16, 2007 www.thehill.com
[43] U.S. Department of State, "Advance Briefing of the Secretary's Trip to Colombia, *M2 Presswire,* January 24, 2008.
[44] *Newstext,* "Southcom may get 4th Fleet", January 20, 2008 (FPInfomart)
[45] Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), "Condoleezza Rice y el Sindicalismo Trataron Sobre el TLC" retrieved February 2, 2008 www.cut.org.co 46 Colombian Trade Union Federations, Letter to U.S. Senators and Congressional Representatives", November 19, 2007.
[47] Red Colombiana de Accion Frente al Libre Comercio y el ALCA (RECALCA), "Visita de Condolezza Rice a Colombia demuestra que el TLC solo beneficia a United States", 24 January, 2008 http://www.recalca.org.co/aapronunciamientos/080124_condoleeza.htm
[48] "President Bush Signs Letter to Send the United States-Colombia Free Trade Agreement Implementing Legislation to Congress" White House Fact Sheet and Press Release, April 7, 2008
[49] Editorial, *The Hill* June 15, 2008 www.thehill.com
[50] Laura Litvan and Mark Drajem, "Update 5: Pelosi Says House to Vote on Delaying Colombia Trade", *Bloomberg,* April 9, 2008, www.bloomberg.com
[51] Kathleen Dugan and Kevin Easdale, "Colombian Free Trade Pact Shot Down: One Step Forward for the U.S., One Back for Canada" Council on Hemispheric Affairs, July 19, 2007.www.coha.org(Retrieved January 20, 2008).
[52] Tod Gordon, "Disaster in the Making:Canada Concludes Its Free Trade Agreement With Colombia" *The Bullet* (Socialist Project e-bulletin, 112, June 11, 2008)
[53] Lee Berthiaume,. "Emerson sees Americas as Extension of Continental Commercial Platform", *Embassy,* May 30, 2007.
[54] Peter MacKay, "Expanding Trade And Foreign Relations In The Americas: Canada Counts", speech given to the Canadian Club, published in Embassy Report, *Embassy Magazine,* May 30, 2007
[55] Lee Berthiaume, "Bush invokes Harper's Comments on Colombia", *Embassy,* October 24, 2007.
[56] Government of Canada, Office of the Prime Minister, "Prime Minister Harper Signals Renewed Engagement in the Americas", July 17, 2007 http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?category=1&page=9
[57] "PM Announces Free Trade Talks with Colombia, Peru" CBC News, July 16, 2007 www.cbc.ca
[58] Government of Canada, Office of the Prime Minister,

"Prime Minister Addresses the Council on Foreign Relations" 25 September 2007 www.pm.gc.ca59 Harper, Tim. "Bush cites Harper on Free Trade... sort of". *Toronto Star,* December 5, 2007.

[60] Government of the United States, White House. "President Discusses Free Trade Agreements" 12 October 2007 www.whitehouse.gov

[61] "President Bush Visits Jacksonville, Florida, Discusses Trade Policy" Office of the White House, March 18, 2008 www.whitehouse.gov

[62] "President Bush Discusses Colombia Free Trade Agreement", Office of the White House, April 7,2008. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/04/20080407-1.html

[63] CLC Press Release "No trade agreement with Colombia acceptable at this time" US legislators say", January 17, 2008, http://canadianlabour.ca/index.php/colombia_projects/No_trade_agreement_w (Retrieved June [27,] 2008).

[64] Jeff Davis, U.S. Politician Warns MPs Against Free Trade Deal with Colombia", *Embassy,* February 6, 2008 http://www.embassymag.ca/html/index.php?display=story&full_path=/2008/february/6/freetradedeal/

[65] Comité permanent du commerce international (CIIT)/ Standing Committee on International Trade "Human Rights, the Environment and Free Trade with Colombia: 5th Report of the Standing Committee on International Trade", June, 2008. http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteeList.aspx?Lang=1&PARLSES=392&JNT=0&SELID=e22_.4&COM=13181&STAC=2393871

[66] David Ljunggren, "Canadian opposition slams Colombia free trade deal" *Reuters,* June 9, 2008

[67] 39th Parliament, 2nd Session, Edited Hansard. Number 108, Monday, June 9, 2008, http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&Parl=39&Ses=2&DocId=3560493#Int-2518306-%23Int-2518306

[68] *El Tiempo,* "Ministro de Comercio inició gira en Washington para intentar 'descongelar' trámite del TLC", 9 de Junio 2008, http://beta.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4243322 (Translation by Katz)

[69] "President Bush Discusses Colombia Free Trade Agreement" April 7, 2008

[70] Foreign Affairs and International Trade Canada, "Canada Concludes Negotiations for Free Trade, Labour Cooperation and Environment Agreements with Colombia", *New Release,* No. 135 June 7, 2008

[71] "Dissenting Opinion New Democratic Party: Human Rights, the Environment and Free Trade with Colombia" 5th Report of the Standing Committee on International Trade, June 2008, p.61 http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteeList.aspx?Lang=1&PARLSES=392&JNT=0&SELID=e22_.4&COM=13181&STAC=2393871

[72] Comité permanent du commerce international (CIIT)/ Standing Committee on International Trade, "Human Rights, the Environment and Free Trade with Colombia" 5th Report of the Standing Committee on International Trade, June, 2008. http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteeList.aspx?Lang=1&PARLSES=392&JNT=0&SELID=e22_.4&COM=13181&STAC=2393871

[73] Comité permanent du commerce international (CIIT)/ Standing Committee on International Trade Mission to Colombia, May 2008, Human Rights, the Environment and Free Trade with Colombia" 5th Report of the Standing Committee on International Trade, June, 2008. http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteeList.aspx?Lang=1&PARLSES=392&JNT=0&SELID=e22_.4&COM=13181&STAC=2393871

[74] Michelle Collins, "Wrangling Over Colombia Trade Deal Continues", *Embassy Magazine,* June 25, 2008 http://www.embassymag.ca/html/index.php?display=story&full_path=/2008/june/25/columbia/

[75] Foreign Affairs and International Trade, "Canada-Colombia Free Trade Negotiations", June 7, 2008, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/andean-andin/can-colombia-colobie.aspx (Retrieved June 26, 2008); Jeff Davies, "New Treaty Review Process Falls Short", *Embassy,* January 30, 2008 www.embassymag.ca/html/index.php?display=story&full_path=/2008/january/30/treaty/(Retrieved July 1, 2008).

[76] Canadian Labour Congress and the *Central Unitaria de Trabajadores de Colombia,* "Canadian and Colombian Labour Jointly Reject Trade Talks", July 16, 2007; Ken Georgetti, "Letter to the Honourable David Emerson, Minister of International Trade" Canadian Labour Congress, December 19, 2007; David Emerson, Minister of International Trade, "Letter to Kenneth V. Georgetti concerning Canada-Colombia free trade agreement negotiations", January 08, 2007 www.canadianlabour.ca

[77] Escuela Nacional Sindical, "TLC Colombia-Canada y su clásula laboral", January, 2008.(Translation by Katz)

[78] Canadian Association of Labour Lawyers, "Canada-Colombia Free Trade Agreement: Labour Provisions" January, 2008. unpublished analysis.

[79] R.W. Cox, "A Canadian Dilemma: The United States or the world" *International Journal,* Summer 2005, 667-684.

LA SALIDA AL PACIFICO: APEC, FORO ARCO LATINOAMERICANO Y ASEAN

Hilda Sánchez, asesora

A casi dos décadas de su creación, varios indicadores dan cuenta de un escenario mucho más complejo que el que caracterizó el surgimiento del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC)[1]:

- la irrupción de China como eje articulador de un reordenamiento productivo y comercial regional de gran envergadura;
- el avance de la Unión Europea en su posicionamiento en la región de Asia Pacífico con algunos de los miembros de la zona[2](China, Corea del Sur, Japón y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático[3];
- la firma de un creciente y diversificado número de acuerdos bilaterales / regionales de liberalización comercial y de inversión entre sus miembros(TLCs, TIFAs, EPA, CER, TPPI)[4] ;
- la creación de dos círculos concéntricos internos, sobre la base de la preexistente ASEAN, el ASEAN+3[5] y el ASEAN+6[6];
- y, más recientemente, la creación del llamado Foro Arco del Pacífico Latinoamericano.

Dicho escenario, proyecta: por un lado, el mayor relacionamiento Sur-Sur y con otros países industrializados de la OCDE, y por otro lado, la búsqueda de alianzas estratégicas que permitan, particularmente al Arco

[1] El APEC formado en 1989 en Canberra (Australia), está integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

[2] La UE se ha convertido en el mayor socio comercial y mercado de exportación de China, mientras que China es su segundo mayor socio comercial. Además, según un informe del Comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, China está registrando avances para recibir el codiciado Estatus de Economía de Mercado (MES) por parte de la UE, algo que ayudará a la potencia exportadora asiática a evitar los aranceles punitivos anti-dumping. La Comisión Europea dijo en su última evaluación que China sólo había cumplido uno de los cinco criterios utilizados para medir la influencia de la intervención estatal sobre los precios y los costos, pero Beijing había hecho un "progreso considerable" sobre los otros cuatros, proveyendo una "clara plataforma" para alcanzar el objetivo. El próximo informe es esperado para el 2009. Algunas fuentes han señalado que Mandelson está presionado por algunos capitales europeos para que adopte más medidas contra el aumento de las importaciones chinas. Web Pueblo en linea.

[3] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) fue creada en 1967 y ha venido cobrando un mayor impulso posteriormente a la crisis financiera de 1997. Este bloque regional se encuentra integrado por Brunei, Camboya, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Este grupo regional tiene previsto el establecimiento de una zona de libre comercio para el 2015. La región del ASEAN tiene una población de 500 millones de personas, un Producto Interno Bruto (PIB) de casi 700.000 millones de dólares y un comercio total de 850.000 millones de dólares.

[4] Dicho proceso ha venido cobrando mayor impulso desde mediados de los noventa, registrándose a la fecha cerca de 200 acuerdos comerciales de diferente índole entre países de Asia Pacífico, Asia Oriental, Asia Meridional y de la ex Unión Soviética, de los cuales 57 ya están en vigor, 27 con negociaciones concluidas, 39 en etapa de negociación y 18 ya firmados (CEPAL, 2007). Esto representa más del 50% del total de acuerdos registrados en la OMC, reflejando con ello la densidad de la red de acuerdos comerciales en la región. El avance en la liberalización de inversiones se ve reflejada también en el vertiginoso número de Tratados de Protección y Promoción de Inversiones (TPPI) que se han venido firmando entre los países de la región con China a la cabeza, los cuales suman más de 1150 tratados, cerca del 50% del total mundial (UNCTAD, 2007). Para una mayor claridad del contenido de cada uno de estos acuerdos ver el anexo final.

[5] Formado por ASEAN+China/Corea del Sur / Japón.

[6] Formado por ASEAN+3+Australia, Nueva Zelanda e India.

Latinoamericano, incorporarse a la dinámica plataforma productiva y comercial de Asia Pacífico, encabezada por China. Este proceso responde también al relativo interés mostrado para la creación de una Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (FTAAP), la cual fue propuesta en el marco de la Cumbre de APEC realizada en Santiago en el 2004 y contó con el apoyo inicial de EEEUU, Australia, Canadá, Japón, México y Chile. Sin embargo, después de cuatro años, solo se ha logrado que dicha iniciativa este siendo valorada en un grupo especial creado por recomendación de los Lideres de APEC en Sydney (2007)[7],ya que algunos miembros piensan que es preferible compatibilizar dicho objetivo con la etapa de liberalización comercial que será alcanzada por los países desarrollados miembros de APEC en el 2010, cumpliendo con la primera etapa de los Objetivos de Bogor .

Frente a un escenario de crisis internacional y de colapso de las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio(OMC). varios de los países miembros de APEC llegaron a la 16ª Reunión de los Líderes de APEC, en Lima, Perú, el 22 y 23 de noviembre de 2008, con el objetivo de mostrar su decisión de avanzar en la liberalización comercial y de inversiones a nivel de las negociaciones bilaterales o de bloques regionales.

El cuadro 1 sintetiza la actual composición de APEC, como sumatoria de estructuras de menor tamaño, y destaca la vinculación con otros países no miembros: en el caso de los dos formatos de ASEAN (Camboya, Laos, Birmania e India), así como en el caso del Foro Arco del Pacífico Latinoamericano (considerando que Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá han solicitado el ingreso.

I. El Foro Arco del Pacífico Latinoamericano

Desde la perspectiva latinoamericana, destaca la emergencia de este Foro creado en Cali, Colombia, en enero del 2007, el cual trabaja con una agenda de libre comercio similar a la de APEC: convergencia comercial; facilitación del comercio, infraestructura y logística; promoción y protección de inversiones; y cooperación económica y técnica para la competitividad. Tiene el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) y cuenta además con la participación de sectores empresarios de los países miembros. En su composición destaca el hecho de estar integrado por la mayor parte de los países del CAFTA-RD (con excepción de República Dominicana), y salvo Colombia y Ecuador, todos tienen TLCs vigentes con EEUU.

Colombia, Chile, México, Perú Ecuador, Costa Rica son parte también del llamado Middle Ground, que ha estado a favor de la propuesta de liberalización comercial sobre Acceso a Mercados No Agrícolas (NAMA) contenida en el "paquete Lamy" previamente al colapso de las negociaciones en la Ronda Doha de la OMC[9].

Luego de su creación, el Foro Arco ha realizado cinco encuentros más, los dos últimos a lo largo del 2008, paralelamente a las actividades de la propia APEC:

- Lima II (agosto, 2007), donde el Foro fue relanzado por el presidente Alan García, bajo la figura de "Arco del Pacífico", orientado a impulsar y consolidar un conjunto de alianzas entre los países del Pacífico Latinoamericano para mejorar su proyección hacia Asia Pacífico[10]. El cancil-

[7] Dicho grupo posiblemente presentara un informe a la reunión de Lima sobre los pros y contras de esta propuesta, dada su poca factibilidad política en la medida que resulta impensable que China y Estados Unidos puedan compartir compromisos vinculantes vía un TLC regional. En cualquier caso, hay que recordar que en APEC se encuentran reunidos los países del G8 no pertenecientes a la UE(Canadá, Japón, Rusia y los EE.UU. y China).

[8] Según estas metas establecidas en 1994 cuando Bogor fue sede de la reunión de APEC, la completa liberalización comercial y de inversiones en la zona deberá haberse alcanzado antes del 2010 para las economías desarrolladas y para el 2020 para las economías en desarrollo.

[9] Junto con Pakistán, Hong Kong – China, Israel, Singapur. También son parte del Grupo Modo 4 que pretende que se reduzcan o eliminen los obstáculos comerciales a la prestación de servicios por personas naturales en un lugar diferente al de su país de origen. Grupo informal integrado por Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Egipto, Guatemala, India, Marruecos, México, Pakistán, Perú, República Dominicana, Tailandia y Uruguay. Asimismo, son parte del Grupo Cairns el más antiguo en la organización (1986). Busca la reforma de la agricultura y cuenta con 19 Miembros entre desarrollados y en desarrollo con altos intereses exportadores agrícolas. Sus miembros son Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay. El Grupo Cairns es coordinado por Australia.

PAISES MIEMBROS DE APEC, SEGÚN AGRUPAMIENTOS DE MENOR TAMAÑO

	APEC	Fuera de APEC
ASEAN, 1967	Tiene previsto el establecimiento de una zona de libre comercio para el 2015. Su población es de 500 millones de personas, su Producto Interno Bruto (PIB) de casi 700.000 millones de dólares, y su comercio total de 850.000 millones de dólares. Miembros: Brunei, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam.	Camboya Laos Birmania
NAFTA, 1994	Canadá, EEUU y México	
ASEAN+India 2004		India
ASEAN + 6 2008	Se agregan: Nueva Zelanda, y Australia Este grupo también se le conoce como Cumbre de Asia Oriental.	India
Foro Arco del Pacífico Latinoamericano, 2007	Chile, Perú, México	Colombia Ecuador Costa Rica Panamá El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Los cuatro primeros han solicitado su ingreso a APEC*
Otros fuera de agrupamientos	Hong Kong, Papua Nueva Guinea, Rusia.	

Fuente: elaboración propia

* Colombia, Ecuador, Panamá, India, Macao, Mongolia, Pakistán y Sri Lanka ya tocaron a la puerta del APEC en 1997, cuando en plena crisis financiera asiática la organización estableció la moratoria tras aceptar el ingreso, para el año siguiente, de Perú, Rusia y Vietnam. Su formulación se encuentra bajo el apartado "Fortaleciendo APEC" de la Declaración, y su justificación se refiere a la necesidad, según los miembros, de que la discusión de la entrada de nuevos miembros se realice en un momento en que esté alcanzado un nivel importante en el avance en la integración regional y apertura de sus economías. La moratoria recientemente extendida, data del año 1997 y debía tener una duración de 10 años. Sin embargo, al menos por los próximos tres años, los únicos tres socios latinoamericanos continuarán siendo Chile, México y Perú. Estos se habían comprometido a dar su apoyo al ingreso de los aspirantes de América Latina, pero al parecer dicha iniciativa no halló eco dentro del Foro en Sydney 2007. Puentes, septiembre 2007.

ler de Brasil Celso Amorim fue uno de los invitados especiales a dicha reunión.

- Cancún III (abril, 2008), donde reiteraron reforzar medidas conjuntas para "fortalecer su penetración en el mercado asiático y resguardarse de la desaceleración económica en Estados Unidos, a donde destinan la mayor parte de su comercio"[11]. En su declaración final se propuso la creación de 5 grupos de trabajos: el grupo de "reflexión", liderado por México, encargado de proponer un mecanismo de institucionalización del Foro[12]; el Grupo sobre la facilitación del comercio, infraestructura y logística, coordinado por Panamá[13]; el grupo de promoción y protección de inversiones, dirigido por Colombia[14]; y los grupos de cooperación para la competitividad y el de convergencia comercial e integración, coordinados por Perú y Chile.

- Panamá reunión preparatoria (junio 2008), donde sesionaron los grupos de trabajo de cara a la próxima reunión del grupo en Santiago (5 y 6 Octubre). De particular interés resulta el grupo liderado por Chile, el cual esta orientado a lograr la convergencia comercial de los TLCs suscritos entre los países miembros del Foro(dentro de los cuales se encuentra el TLCAN y CAFTA-RD), con un objetivo claro: el impulsar una "red de proveeduría regional" entre todos aquellos países que hayan incluido en sus TLCs una cláusula llamada de "acumulación de origen", por la cual podrán ser distribuidores de insumos para la fabricación de un bien final que se beneficiara de exenciones de impuestos para ingresar al mercado norteamericano o asiático[15].

- Santiago IV, el 5 y 6 de octubre para presentar los informes de los grupos de trabajo, y derivar algunas propuestas a APEC. Chile impulsa la convergencia de un mayor nùmero de paìses en:el Foro Arco y en el acuerdo P4(Singapur, Nva Zelanda y Brunei), el único acuerdo transpacífico que existe en la región Americana. Esencialmente se busca la proyección del Foro Arco hacia el Pacífico Norteamericano (en la reunión de Santiago estuvieron presentes los embajadores de Canadá en Chile y México, y a fines del 2008, en Naciones Unidas los 11 miembros del Foro Arco se reunieron con Bush para invitarlo a formar parte de esta iniciativa). Por lo que respecta al P4, Chile viene impulsando la incorporación de otros países como Perú, Colombia y EEUU. Al cierre de la reunión se diò a conocer la La Declaración de Santiago que incluyo: - "el compromiso con la



[11]En esa ocasión el ex Secretario de Gobierno de México, Eduardo Sojo, indicó que el encuentro no abordó acciones conjuntas para evitar en América Latina un cimbronazo de la recesión en Estados Unidos, aunque dijo que "queda claro que el objetivo de lograr una mayor relación comercial con Asia, disminuye los riesgos" para los países de la región. Agregó que en el caso mexicano el gobierno de Felipe Calderón busca diversificar su comercio, ya que destina el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, y aclaró que en 2007 crecieron 25% los envíos hacia América Latina. Por su lado, la delegación chilena resaltó que más del 40% de sus ventas al exterior están dirigidas a China, que se ha convertido en su principal socio tras la firma de un Tratado de Libre Comercio. Nota de prensa EFE.

[12] Este grupo estudiará como mantener una estructura flexible y la creación de una Secretaría Técnica pro tempore rotativa. Asimismo, buscará el fortalecimiento institucional para el desarrollo e identificación de prioridades en políticas públicas y fomento de la transparencia y buen gobierno.

[13] El grupo de Facilitación del Comercio, Infraestructura y Logística, que coordina Panamá, presentará una lista de proyectos regionales de impacto hacia el Pacífico asiático. Estos proyectos son los que impulsa el Plan Puebla Panamá, los de la iniciativa de Infraestructura Suramericana IRSA y los esfuerzos nacionales.

[14] El grupo de Promoción y Protección de Inversiones, junto con el de Convergencia comercial, coordinado por Colombia, trabajará en la imagen de ARCO a fin de proyectar la región como un mercado importante que permite la "minimización" de riegos para la inversión, también recabara un inventario de los regímenes de inversión y de los acuerdos de protección y promoción de inversiones existentes en la Cuenca del Pacífico latinoamericano, con el fin de identificar los estándares de protección y promoción estipulados.

[15] La subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México señaló en la reunión de Panamá que el modelo a seguir es el de la acumulación de origen textil entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que entró en vigor en agosto del 2008, y que permite a la región central del Continente exportar a la Unión Americana prendas de vestir que incorporen insumos mexicanos y que estas sean consideradas como originarias de uno de los países miembros. También señalo que Europa y Asia están muy avanzados en este tipo de "integración vía la convergencia comercial", dijo que México buscará mayor profundización de los tratados comerciales con Colombia, también buscara converger en un solo TLC con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como nuevos tratados con Perú, Panamá y República Dominicana. El Director de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Furche, Furche explicó en la misma reunión que según los resultados de un estudio encargado al Banco Interamericano del Desarrollo (BID) el comercio podría crecer cerca de un 17% si se logran avances en acumulación de origen. "Chile será sede del IV Foro el 6 y 7 de octubre en Santiago, en donde trabajaremos durante los meses previos al encuentro para presentar en éste un plan concreto que nos permita a los países participantes del Foro determinar modalidades para iniciar una futura negociación en acumulación de origen", señaló.

democracia y la vigencia del Estado de Derecho, fundamentos indispensables del diálogo político que hemos sostenido". ■el objetivo de "hacer más eficiente y modernos nuestros Estados y sus instituciones, fortaleciendo el crecimiento económico e impulsando un desarrollo incluyente, que favorezca la cohesión social y el bienestar de sus ciudadanos". ■"esta es una agrupación de países, como lo dice la declaración, que se está consolidando y que en la etapa siguiente va tener una expresión política muy clara con motivo de la Cumbre en San Salvador a fines de octubre y principio de noviembre".

■ A finales de octubre del 2008, el Foro Arco se reuniò en El Salvador, en ocasión de la V,Cumbre Iberoamericana para hacer pùblica su institucionalizaciòn a traves de la siguiente declaración oficial:

"1.El Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano es una instancia de articulación política y económica, y un espacio de convergencia, cooperación e integración dentro de América Latina;

2. El Foro Arco es la única instancia de contacto con el Asia Pacífico a la que pertenecemos todos los Estados latinoamericanos ribereños del Pacífico;

3. El Foro Arco representa un enfoque común de los países latinoamericanos ribereños del Pacífico que ha avanzado en los procesos de institucionalización, de convergencia económica y de concertación política en América Latina frente a la Cuenca del Pacífico;

4. El Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano se fundamenta en los principios de participación voluntaria, flexibilidad, apertura, y consenso en sus decisiones;

5. Estar ubicados en el litoral americano del Océano Pacífico constituye una ventaja estratégica que debe aprovecharse para impulsar nuestra competitividad y avanzar en nuestro desarrollo. La Cuenca del Pacífico Asiático es una de las zonas más dinámicas de la economía mundial, con una participación relevante en el comercio mundial; es fuente importante de inversión y cuenta con niveles de desarrollo tecnológico e innovación entre los más altos del mundo;"

Para el 2009, se ha planificado la próxima reunión Panamá V y la VI en Guatemala durante el primer semestre del 2010[16].

El cuadro 2 presenta el detalle sobre los acuerdos comerciales y de inversión firmados por los países del Foro Arco con los de APEC y otros de ASEAN durante el 2007-2008, excluyendo los correspondientes a América del Norte e intralatinoamericanos. Si se agrega a India, hay que contabilizar también el AAP del 2005 con MERCOSUR[17]; y el AAP con Chile 2006.

Por otra parte, Corea del Sur ha avanzado recientemente durante el 2008 hacia acuerdos con otros países que no están en el Foro Arco: con Uruguay, con quien tiene un Acuerdo de Cooperación en silvicultura y pesca; y con Brasil, al preparar emprendimientos en etanol y biodiesel. También a lo largo del 2008, avanzando en su posicionamiento comercial y de inversiones, China suscribió con Venezuela seis acuerdos de cooperación que incluyen la creación de una empresa mixta para la explotación del Bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como un proyecto de refinería de Zhuhai, en la provincia china de Guandong. Màs recientemente, a mediados de febrero, China ha iniciado un acercamiento comercial y de inversiones hacia Colombia, en base al Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones firmado en noviembre del 2008 en Lima, en el marco de la reunión de APEC, donde Colombia fue el ùnico paìs no miembro que fue invitado a participar.

El creciente número de acuerdos firmados entre los miembros de este bloque, durante el 2007 y el 2008, apuntan: por un lado, a la construcción de mercados unificados, con normas más comunes y mayor "certidumbre jurídica" para las inversiones intra y extra regionales; y, por el otro lado, a promover una "proyección coordinada" hacia el Pacífico, de cara a la creciente competencia de los países de ASEAN.

[16] Panamá ha sido considerada una plataforma logística para el comercio exterior a través del Canal, el sistema portuario, el "hub" aéreo, la Zona Libre de Colón y la Zona Económica Especial del Pacífico, y el ferrocarril interoceánico.
[17] El acercamiento surgió del interés de ambos en presionar en la OMC - conformándose como G-20- para que los países desarrollados eliminen los subsidios a los productos agrícolas. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 81.

Cuadro 2

PAISES DEL FORO ARCO:ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE INVERSIONES (TPPI)CON PAISES DE APEC-2008

	Acuerdos Comerciales APEC	Acuerdos Comerciales FORO ARCO	TPPI APEC	TPPI Foro Arco
Chile	China, TLC, se amplia con un acuerdo sobre servicios, 2008. Australia,, TLC firma de acuerdo y en tramité de ratificación parlamentaria, 2008, MERCOSUR, AAP, 2005 Japón, 2007, TLC vigente, 2007; Australia, TLC fin de las negociaciones, 2008 Malasia, TLC en proceso de negociación, 2008 Tailandia, TLC, Grupo de Estudio Conjunto con su tarea finalizada, 2008 Vietnam, TLC en negociación, 2008 Rusia, creación del Grupo Especial para el Comercio y la Inversión, 2008 Indonesia, TLC, 2007 exploran inicio de negociaciones Perú y México les ha propuesto ingresar al P4 (Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam), primer TLC transpacífico que firmó en el 2006.	Panamá, TLC vigente, 2008, Colombia, TLC, sin trámite parlamentario, 2006. Perú, TLC sin trámite parlamentario, 2006, México, Acuerdo de Asociación Estratégica, que formaliza diálogo político de manera similar al que tiene vigente con la UE, 2006)[18] Costa Rica, TLC/Centroamérica-Protocolo Bilateral, 2002 El Salvador, TLC/Centroamérica-Protocolo Bilateral, 2002 Guatemala, TLC/Centroamérica, inicio tramite parlamentario, 2008 Honduras, TLC/Centroamérica, 2008 Nicaragua, TLC/ Centroamérica-Protocolo Bilateral en Negociación, 2008 Ecuador, ACE-ALADI, en trámite de ratificación, 2008	Australia, Corea, China, Filipinas, Indonesia, Malasia Vietnam, N.Zelandia	Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú,
México	Japón, TLC, 2005 Corea del Sur, TLC 2ª ronda de negociaciones, 2008 Singapur, TLC en negociaciones, 2000 China, interés por negociar un TLC sobre servicios[19], 2008. Perú (2008, TLC negociaciones concluidas y posible firma en noviembre) Chile, TLC vigente, 1999;	Colombia (1995, TLC– G3, que incluyó a Venezuela hasta noviembre 2006; en 2008 se inician negociaciones sobre nuevo acuerdo); Costa Rica, TLC vigente, en 2008 hicieron reglamentaciones para uniformar el TLC Nicaragua, TLC vigente, 1998 El Salvador, Honduras, Guatemala–TN, TLC vigente[20], 2001 Panamá, TLC en negociación, 2008 Ecuador, Acuerdos de Alcance Parcial, vigente, 1993 Panamá, AAP14, 1985	Corea	
Colombia	Chile, TLC, pendiente trámite parlamentario, 2006 EEUU, TLC, pendiente trámite parlamentario en EEUU, 2006 P4 (2009, previsto el inicio de negociaciones comerciales, 2009 Chile, ACE24, 1993	El Salvador, Guatemala y Honduras, TLC, 2008 G3 TLC, que incluyó a Venezuela hasta noviembre 2006 Nicaragua-Guatemala-Costa Rica-El Salvador-Honduras, Acuerdos de Alcance Parcial vigentes, 1984	China Chile(no ratificado), Perú (ratificado)	Guatemala (no ratificado),

[18] México firmó en 1990 el ACE 17 con Chile previamente a la firma del TLCAN, mientras que para Chile fue el segundo a cuerdo después del TLC con Canadá. En el 2007, México firmaria un acuerdo similar con Argentina al firmado un año antes con Chile.
[19] China ha suscrito en los últimos seis años, cerca de 30 acuerdos con México(Cooperación en el Sector Energético, la Cooperación en los Campos de Transporte Terrestre, Carretero, Marítimo y de Aguas Interiores y Construcción de Infraestructura Relacionada, y un Acuerdo Comercial de Transición sobre apertura arancelaria para productos chinos) a los que se vienen a sumar los recientemente firmados el 10 de julio en Pekín: un Acuerdo para la Promoción y Perfección Recíproca de Inversiones y un Protocolo para Exportar e Importar Carne de Cerdo.
[20] En el caso de Honduras y El Salvador han firmado recientemente un TLC con Taiwán(2008, TLC vigente).

Perú	Corea,TLC inicio de negociaciones(febrero 2009) China, TLC 5ª ronda de negociaciones[21], 2008 Corea del Sur, inicio de negociaciones por un TLC, 2008 Singapur[22], TLC se firmo acuerdo[23], 2008; Canadá, TLC firmado, 2008, Vietnam, inicio de acercamiento comercial hacia Vietnam[24], 2008. Perú, TLC(acuerdo limitado en productos no sensibles en estudio), 2008 Tailandia,TLC,2006 Chile (2006. TLC vigente[25], 2006 México, TLC posible firma en noviembre, 2008 Chile, ACE38/ALADI, 1998		Australia, Corea, China, Malasia, Singapur, Tailandia	El Salvador
Ecuador	China, acuerdo entre Petroecuador y la petrolera china Andes Petroleum para prestación de servicios[26], 2008 Chile, ACE32, 1994 México ACE29, 1993		China, Chile	El Salvador
Guatemala	Taiwán, TLC, 2006 México, TLC Triangulo del Norte, 2000 Chile, TLC-América Central, 1999 EEUU, CAFTA-RD, 2004	Colombia, AAP, 1984 Panamá, AAP, 1974	Corea, Chile, Taiwán	Ecuador
Honduras	Taiwán, TLC, 2007 México, TLC Triangulo del Norte, 2000 Chile, TLC-América Central, 1999 EEUU, CAFTA-RD, 2004	Colombia, AAP, 1984 Panamá, AAP,1973	Chile Sud Corea EEUU	Ecuador
El Salvador	Taiwán, TLC, 2007 México, TLC Triangulo del Norte, 2000 Chile, TLC-América Central, 1999 EEUU, CAFTA-RD, 2004	Colombia, AAP, 1984 Panamá, AAP,1970	Corea, Taiwán, Chile, Perú	Ecuador
Nicaragua	Taiwán, TLC, 2006 Chile, TLC-América Central,1999 EEUU, CAFTA-RD, 2004		Corea, Taiwán Chile China EEUU	Ecuador El Salvador
Costa Rica	China, 11 acuerdos de cooperación en comercio e inversión y estudiarán iniciar negociaciones por un TLC, 2007 Chile, TLC-América Central, 1999 EEUU, CAFTA-RD, 2004		Corea, Taiwán, Chile Canadá China	Ecuador
Panamá	México, TLC en negociación, 2008 Chile, TLC vigente, 2006 Taiwán, TLC, 2003 Canadá, TLC 2ª ronda de negociaciones, 2008 Singapur, TLC vigente, 2006.		Corea, Taiwán, Chile Canadá México, EEUU	

Si se considera dicho proceso en el actual escenario de APEC, ha sido claro que aún y cuando se ha declarado oficialmente la necesidad de fortalecer la llamada "comunidad de APEC", varias de sus economías miembros han venido llegando a las últimas cumbres con estrategias diversas para avanzar más rápidamente en su principal objetivo de liberalización del comercio y de la inversión regional surgido de las metas de Bogor, dada la complejidad en las negociaciones en la OMC y en APEC mismo.

De hecho, el mismo carácter del foro de APEC ha venido siendo cuestionado por algunos de sus propios miembros dadas sus debilidades institucionales tales como: compromisos no vinculantes, objetivos confusos, demasiados miembros, agenda demasiado larga, estructura disfuncional de la secretaría, etc.

En el 2008, Chile, Perú y México llegaron a Lima, mostrando el avance "pro-libre comercio e inversión" del Foro Arco del Pacífico Latinoamericano, y la búsqueda de una mayor asociación con las economías más dinámicas de Asia Pacífico vía la firma de nuevos TLCs, particularmente con China.

Por su parte, Perú también tratò de mostrar avances en la asociación estratégica con Brasil hacia el Asia, a partir de la carretera Interoceánica", para unir las costas del Atlántico en Brasil con las del Perú en el Pacífico.

II. ASEAN y sus encadenamientos estratégicos

A la cita de APEC en Lima, también asistieron algunos de los países miembros de ASEAN, el mecanismo de cooperación regional más antiguo del Sureste Asiático, quiénes llegaron mostrando el avance en el fortalecimiento de su plataforma productiva y comercial intraregional a través de la firma de nuevos acuerdos con sus socios comerciales más estrechos: ASEAN-India[27](2008-TLC); ASEAN/NuevaZelanda/Australia(2008, TLC fin de negociaciones); ASEAN-Japón(2007,TLC)[28]; ASEAN-Corea del Sur (2008, TLC concluidas negociaciones), todos los cuales al sumarse al ASEAN-China(2003, TLC vigente) han venido a conformar el llamado ASEAN+6. Los Gráficos 1 y 2 sintetizan visualmente el desarrollo de este proceso en el tiempo.

Comparativamente con el Arco del Pacífico Latinoamericano, este modelo "pro libre comercio e inversión" viene a responder al auge de comercio intraaindustrial asiático basado en una importante plataforma de integración vertical de cadenas de valor, con la presencia de empresas multinacionales, la mayoría asentada en China. El acuerdo bilateral China-ASEAN ha venido fortaleciendo las redes comerciales y productivas necesarias para consolidar dicha plataforma, la cual se ha mostrado fuertemente competitiva

[21] China ha planteado a los negociadores de Perú incluir un capítulo de inversiones en el TLC bilateral, como el que mantiene con Nueva Zelanda. Los negociadores peruanos informaron que el gobierno chino trabaja por su parte para ofrecerle a Perú un acuerdo de cooperación aduanera más profundo del que se hace normalmente. Ministerio de Comercio de la Rep. Popular de China.

[22] Singapur también esta en negociaciones con Bahrain (2004, TLC en negociación) y Canadá (2001, TLC en negociación).

[23] El ministro de Comercio e Industria de Singapur señaló que" "Este acuerdo tiene mucha calidad, porque permitirá a Singapur aprovechar a Perú para ingresar en América Latina y a Perú hacer lo mismo en Asia", acotó

[24] Los dos países, cuyo intercambio comercial alcanzó en 2006 un valor de 51 millones de dólares, tienen suscritos acuerdos de cooperación de ámbito comercial, agrícola, pesquero, y tecnológico. También está previsto el impulso a empresas vietnamitas en Perú.

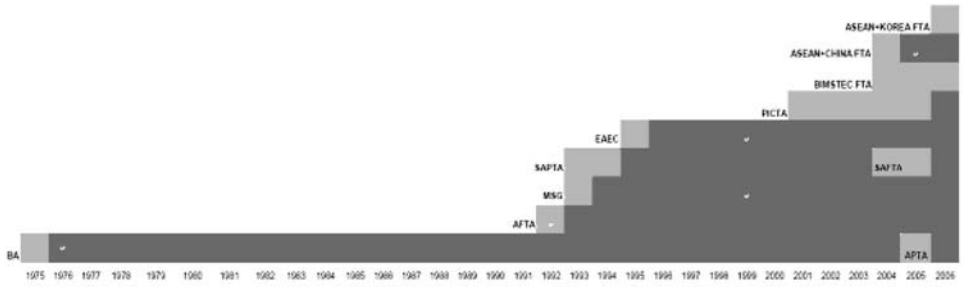
[25] Igualmente ha firmado con EEUU(2006, TLC vigente), con Tailandia(2005, TLC vigente), con Singapur(2008,TLC vigente); con Canadá(2008, TLC firmado) y esta en la cuarta ronda de negociaciones con AELC en el 2008.

[26] China ha pasado a encabezar la lista de los mayores inversionistas en materia de infraestructura en algunas de las regiones subsaharianas más pobres de África, según señala un informe del Banco Mundial. India y algunos países de Medio Oriente también contribuyeron a que se pueda financiar una cantidad récord de proyectos de infraestructura en el sur de África, que durante mucho tiempo quedó relegada en la agenda de los inversionistas internacionales. Cifras del Banco Mundial muestran que las inversiones de las economías emergentes en el continente africano aumentaron de mil millones de dólares por año, promedio registrado antes de 2004, a 8 mil millones en 2006 y 5 mil millones en 2007.

[27] Primer socio comercial de los países de ASEAN

[28] El acuerdo será firmado En el 2008 por los parlamentos de Japón y los de la ASEAN (Filipinas, Tailandia, Brunei, Indonesia, Malasia, Camboya, Laos, Singapur y Birmania (Myanmar)). Se trata del primer acuerdo de libre comercio de carácter multinacional de Japón, que ya ha alzando acuerdos similares con México, Chile y seis países de la ASEAN (Tailandia, Singapur, Indonesia,

GRÁFICO 1. ACUERDOS REGIONALES EN ASIA PACÍFICO



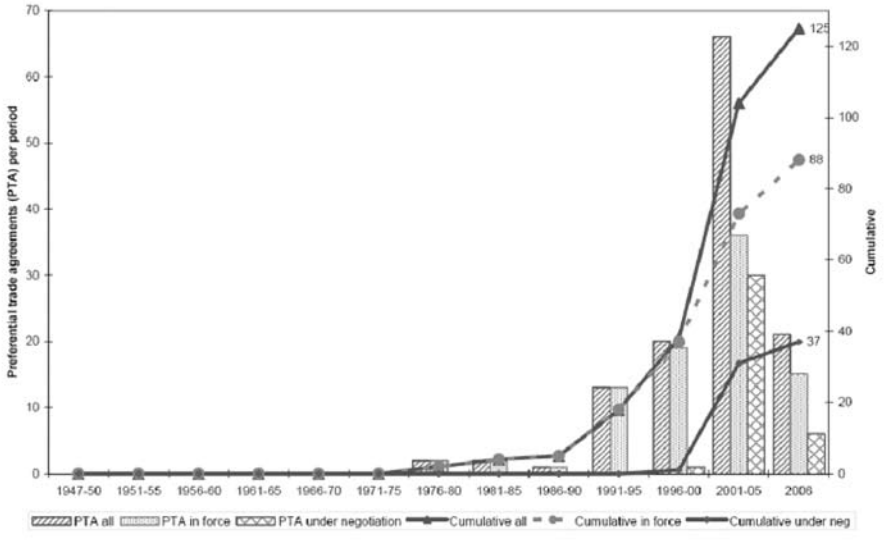
Legend

Signed but not in force	In force	Notified to WTO
		✔

Source: Asia-Pacific Trade and Investment Agreements Database, January 2007

Acronyms:
AFTA - ASEAN Free Trade Agreement (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam)
APTA - Asia-Pacific Trade Agreement (Bangladesh, China, India, Republic of Korea, the Lao People's Democratic Republic and Sri Lanka)
BA - Bangkok Agreement (Bangladesh, India, the Lao People's Democratic Republic, the Republic of Korea and Sri Lanka)
BIMSTEC FTA - Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand)
EAEC - Eurasian Economic Community (Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan)
MSG - Melanesian Spearhead Group (Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu)
PICTA - Pacific Island Countries Trade Agreement (Cook Island, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga and Vanuatu)
SAFTA - South Asia Free Trade Area (Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh)
SAPTA - SAARC Preferential Trading Arrangement (same members as SAFTA)

GRÁFICO 2. ACUERDOS COMERCIALES ENTRE PAÍSES DE ASIA PACÍFICO



Source: Asia-Pacific Trade and Investment Agreements Database, February 2007
Note: PTA means preferential trade agreements and "neg" stands for negotiation.

frente a otros países del Pacífico latinoamericano. Las economías asiáticas mantienen actualmente una cadena de proveeduría de manufacturas cada vez más elaboradas y no solo de insumos basados en recursos naturales. Se ha señalado que de las 500 mayores empresas multinacionales a nivel mundial, 450 están en China[29].

Según datos de la CEPAL[30], en 2005 estos países representaron 5,5% de los flujos mundiales de importaciones y 6,4% de las exportaciones. Dicha importancia queda de relieve en la intención de Estados Unidos y la Unión Europea de acceder a acuerdos comerciales con el bloque ASEAN. Sin embargo, la Unión Europea tiene previsto continuar con las negociaciones por un par de años más, dado que existen cuestiones políticas controvertidas como el rechazo de algunos países asiáticos a la incorporación de un capitulo sobre normas laborales y ambientales en el TLC[31]. En el caso de EEUU, en el 2005 se firmó con ASEAN un acuerdo marco sobre comercio e inversiones (TIFA)[32].

En este escenario, a fines de julio del 2008, en Singapur se reunieron los diez Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN con sus pares de China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Australia, Unión Europea y otros socios económicos de la organización regional, para buscar acuerdos, en medio de una crítica etapa política y económica que amenaza su proceso como bloque regional.

Esencialmente se busco la ratificación de la carta de principios fundamentales de la ASEAN, aprobada en la XIII Reunión de Jefes de Estado de ASEAN, realizada en noviembre del 2007 en Singapur, Dicha carta contempla la creación para el 2015 de un espacio económico regional único para los países más desarrollados de la ASEAN (Singapur, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Brunei y Malasia), mientras que Vietnam, Birmania (Myanmar), Laos y Camboya se unirían a ese marco cinco años después. Otro componente incluido en la carta, es la normativa relativa a los derechos humanos, un conjunto de mecanismos de consenso destinados a resolver dichos conflictos bajo el "tradicional" principio de no injerencia de la ASEAN, lo cual excluye la posibilidad de sancionar o expulsar a los países miembros que registren graves violaciones de los derechos humanos, caso de Birmania(Myanmar)[33] . Hasta mediados del 2008, Filipinas, Indonesia y Tailandia(por contravenir su constitución) no se habían adherido a la carta de principios, que para que entre en vigor debe ser ratificada por la totalidad de los miembros de ASEAN. La reunión concluyo haciendo un llamado a la ratificación de la carta antes de la Cumbre de Bangkok, a realizarse en diciembre del 2008.

La estrategia de ASEAN también se proyecta en términos extraregionales hacia el lado americano con el MERCOSUR. En noviembre del 2008, en Brasilia, ambos

[29] En el 2007, ASEAN+3 avanzo hacia la creación de un fondo monetario común para brindar liquidez en tiempos de crisis a sus diez países miembros más Japón, China y Corea del Sur. Según fuentes financieras, los países de Asia controlan las mayores reservas de divisas con unos 2,7 billones de dólares, con China y Japón a la cabeza. El nuevo fondo monetario común unificará los intercambios de divisas que tienen lugar actualmente a nivel bilateral, calculados en unos 80.000 millones de dólares, y los convertirá en un programa multilateral. Debido a que cualquier país miembro de la ASEAN+3 que tenga dificultades de liquidez podrá recurrir al programa de ayuda común, el sistema ha sido equiparado a un nuevo Fondo Monetario Internacional (FMI).

[30] Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, "Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2006. Tendencias 2007".

[31] A fines del 2007, en Bruselas se realizo una Cumbre entre la UE y ASEAN donde se informó que durante el 2006, la ASEAN representó alrededor del 5% del comercio exterior total de bienes de la UE. Entre los Estados miembros de la UE Alemania, con un 29% del total, fue el principal país exportador hacia la ASEAN, por delante de Francia(14%) y del Reino Unido(13%). Holanda (20% del total) fue el Estado miembro de la UE que más bienes importó de los países de la ASEAN, seguido del Reino Unido (19%) y Alemania(otro 19%).Entre los Estados miembros de la ASEAN, Singapur, (40% del total) fue el principal destino de las exportaciones desde la UE durante el año pasado, por delante de Malasia(23%) y de Tailandia (19%).Singapur fue también el principal importador de la UE entre los países de la ASEAN (25% del total), mientras que Malasia, (23%) y Tailandia(19%) ocuparon el segundo y tercer puesto en el ránking. Los productos manufacturados fueron el pasado año el principal elemento con el que comerciaron los Estados miembros de la UE y los de la ASEAN, al contabilizar un 85% de las importaciones y las exportaciones entre ambas regiones del mundo. Pressnote EFE 20-11-2007.

[32] Estados Unidos también esta en negociaciones desde el 2006 por un TLC, con Filipinas esta en negociaciones desde el 2006 por un TLC, con Indonesia, en el 2003 firmó un TLC, con Singapur tiene un TLC vigente desde el 2004, con Vietnam tiene un Acuerdo preferencial desde el 2001. ESCAP/ United Nations.

bloques acordaron diseñar un Plan de Acción para el establecimiento de un foro de diálogo político e impulsar el comercio y la cooperación, todo lo cual sera evaluado en una nueva reunión a celebrarse en septiembre en el marco de las Naciones Unidas[35]. La primera reunión entre MERCOSUR y ASEAN se realizo en el 2007. En esa ocasión estuvieron reunidos en Brasilia, los ministros del MERCOSUR con representantes de los países de ASEAN, en el marco de la III Reunión del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE)[35].

Actualmente Brasil tiene a cargo la presidencia rotativa semestral del MERCOSUR, integrado también por Argentina, Uruguay y Paraguay. En enero del 2008, el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Celso Amorin, formuló declaraciones en Singapur a favor de la firma de un TLC entre el MERCOSUR y la ASEAN, e indicó que sus visitas a Vietnam y a Singapur forman parte de la estrategia económica del Gobierno de Brasil de estrechar la relación económica con los países del sudeste de Asia[36]. A mediados de julio del 2008, en una visita a Vietnam para firmar varios acuerdos de cooperación, el presidente de Brasil, Ignacio Lula, exhortó al sector empresarial de Brasil y Vietnam a aprovechar las oportunidades de cooperación en beneficio mutuo y para lograr un acercamiento entre el MERCOSUR y APEC[37].

En noviembre del 2007, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, también en Singapur manifestó el interés de su gobierno de lograr un mayor acercamiento con este país y con el ASEAN[38]. De igual forma, el ministro de Economía, Danilo Astori, en Malasia anunció que empresas malasias estaban interesadas en el mercado uruguayo, como puerta de entrada al MERCOSUR, particularmente en el área de las telecomunicaciones.

En el marco del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Brasil también viene desarrollando relaciones de cooperación con Rusia en tecnología, proyectos industriales, alianzas entre Petrobras y corporaciones de energía rusa. Y la idea es expandir este tipo de cooperación con el MERCOSUR. Ejemplo de esta relación creciente, son las plantas que empresas brasileñas como Sadia y Metalfrio establecieron recientemente en

[33] La CSI y Global Unions han venido desarrollando importantes campañas de denuncias sobre el caso de Myanmar.

[34] Los ministros de Exteriores de Brasil, Celso Amorim, y Tailandia, Sompong Amorvivat, que presidieron la reunión, explicaron en una rueda de prensa que ese Plan de Acción será sometido a los cancilleres en un encuentro que se celebrará en septiembre del 2009, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según datos oficiales, el intercambio comercial entre el Mercosur y la ASEAN llegó el año pasado a 11.750 millones de dólares, suma considerada escasa debido al tamaño de las economías agrupadas en ambos bloques. Amorim explicó, sin embargo, que durante la reunión no se habló de posibilidades de llegar a un convenio tarifario ni a un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. "Fue un primer encuentro, se intercambiaron opiniones y fueron expuestas algunas experiencias", pero no se llegó al punto de pensar en tratados, dijo el ministro brasileño, quien en forma metafórica indicó que ambos bloques están "en una fase de enamoramiento y no de noviazgo". Durante la reunión también fueron abordados asuntos de la agenda internacional, como la crisis financiera, la seguridad alimentaria y energética y el estancamiento de la Ronda de Doha. En un comunicado divulgado tras el encuentro, el Mercosur y la ASEAN coincidieron en que los miembros de ambos bloques, gracias a "sus políticas económicas responsables", están en condiciones "más favorables que en el pasado" para enfrentar la crisis. También enfatizaron "la importancia de impedir que la crisis originada en los países desarrollados comprometa las conquistas alcanzadas en ambas regiones en términos de inclusión social y reducción de la pobreza".

[35] Los miembros de FOCALAE por América Latina son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por Asia del Este: Australia, Brunei, Camboya, China, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, República de Corea, Tailandia y Vietnam.

[36] En Vietnam, Amorin señaló que el comercio entre Brasil y el país indochino ha crecido hasta los 300 millones de dólares en el último trienio, y que tiene el potencial para subir hasta los 2.000 millones de dólares. Pressnote.EFE 29-02-2008.

[37] Pekín. Agencia Notimex. | julio 10, 2008.

[38] Uruguay es uno de los mayores productores mundiales de carne de vacuno, con 500.000 toneladas anuales, y el segundo mayor proveedor de ternera congelada a Malasia, tras la India. El Gobierno uruguayo quiere sumar a sus exportaciones de carne otros productos, como software informático o de biotecnología, así como fomentar un flujo bilateral de inversiones en estos sectores. Mientras que Uruguay no cuenta con ninguna inversión en Malasia, una empresa malasia sí dispone a las afueras de la capital uruguaya de Montevideo de una fábrica de guantes de látex que emplea a unas 200 personas. En el 2007, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria malasia, Syed Ali Alattas, invitó durante el foro a los empresarios uruguayos a hacer negocios en Malasia y destacó que durante los nueve primeros meses de 2007, el intercambio comercial entre ambos países ha ascendido a 24,4 millones de dólares. El volumen del comercio bilateral se quedó en todo 2006 en los 26,2 millones de dólares, según datos oficiales. Ambos Gobiernos acordaron a fines del 2007, convenios de colaboración en temas como la erradicación de la pobreza, misiones de mantenimiento de paz o la certificación 'halal' -acorde a los ritos musulmanes- para la carne uruguaya, entre otros, y el puerto malasio de Klang y la Administración Nacional de Puertos de Uruguay firmaron un pacto de hermandad. Las exportaciones de Malasia a Uruguay ascendieron el año pasado a 15,8 millones de dólares (10,8 millones de euros), mientras que las importaciones alcanzaron los 12,8 millones de dólares (8,73 millones de euros). Cabe destacar que Uruguay es, tras la India, el segundo exportador de carne vacuna a Malasia.Pressnote EFE16-11-2007.

Kaliningrado. Aunque la presencia de Rusia en América latina no es importante hasta ahora, funcionarios del gobierno RUSO han señalado que "América Latina es vista como un área con buenas perspectivas económicas; el gobierno ruso está tratando de expandir la cooperación en áreas en que el país es competitivo, tales como energía, inversión en minería e infraestructura"[39].

Chile es otro referente importante de ASEAN, aún y cuando sus vínculos actuales son más bien a nivel de sus países miembros y no como bloque, lo cual también obedece a la estrategia comercial chilena[40].

El cuadro 3 presenta el detalle de los acuerdos comerciales y de inversión firmados entre los países asiáticos miembros de APEC con otros miembros de ASEAN y del Foro Arco del Pacífico Latinoamericano. También se incluyen a EEUU, Canadá e India. El cuadro refleja:

ASEAN+3: el fortalecimiento intraregional y su proyección extraregional a partir de un mayor relacionamiento comercial y de inversiones de China, Japón y Corea con países del Arco Latinoamericano durante el 2008.

ASEAN+6: el fortalecimiento intraregional. En el 2008, Nueva Zelanda no solo se convirtió en el primer país desarrollado en firmar un TLC con China, sino que junto con Australia avanzo en su posicionamiento con los países de ASEAN al finalizar las negociaciones por un TLC. De igual forma, al igual que India, también han avanzado en la firma de TLCs con otros países asiáticos.

El gran número de Tratados de Protección y promoción de Inversiones firmados por los países miembros de APEC y ASEAN, comparativamente con los firmados con los países del Foro Arco del Pacífico Latinoamericano.

Cuadro 3

APEC Y OTROS PAISES DE ASEAN:
ACUERDOS COMERCIALES Y TPPI INTRAREGION, 2008
Incluye los acuerdos comerciales que aún están en negociación y los TPPI aún no ratificados

	Acuerdos Comerciales APEC[42]	Acuerdos Comerciales FORO ARCO	TPPI APEC	TPPI Foro Arco
China[41] Colombia	Colombia, suscribio siete acuerdos de cooperación economica y técnica,febrero 2009. Nueva Zelanda, TLC aprobado por Parlamento Neocelandés[43] , 2008	Costa Rica, firman 11 acuerdos de cooperación en comercio e inversión y estudiarán iniciar negociaciones por un TLC, 2007	Australia, Camboya, India, Indonesia, Japón, Sud Corea, Laos, Malasia,	Ecuador

[39] La avanzada rusa, Antonieta Cádiz, América Economía, 2008.

[40] En el 2006, funcionarios del gobierno chileno señalaron que "Hay dos formas de negociar con Asean: grano por grano o con el bloque entero. En este momento estamos yendo grano por grano, pero tenemos que enfocarnos en Asean en términos globales".El otro camino es usar el P4, que contiene una cláusula mediante la cual otros países pueden sumarse a él. De hecho, originalmente ese acuerdo se llamaba P3; sólo en la etapa final de conversaciones se plegó Brunei. "El P4 nos genera la oportunidad de incorporar países, de Asean o no de Asean, e incluso países Apec, como Perú y Australia". Chile –hoy, Web.

[41] China ha firmado también cinco TLC con Hong Kong de China, Macao de China, Chile, Pakistán, Nueva Zelanda, Singapur y la ASEAN. El país también sostiene conversaciones sobre el establecimiento de TLC con la Unión Aduanera del Sur de África, el Consejo de Cooperación del Golfo, Australia, Islandia y Perú. Los 13 TLC involucran a 29 países y regiones. El comercio entre China y esos países y regiones representa alrededor de una cuarta parte del total nacional. Ministerio de Comercio de la Rep. Popular de China. .

[42] Siete acuerdos de cooperación suscribieron los gobiernos de Colombia y China como resultado de la visita oficial al país en febrero del vicepresidente de esa nación, Xi Jinping. Los convenios sobre cooperación económica y técnica, asistencia en atención de desastres, salud y promoción de negocios e inversión se firmaron en presencia del vicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón y su par chino, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño (Presidencia). Entre los acuerdos se destacan la donación china de 5,8 millones de dólares para proyectos de asistencia económica y técnica, y de 300 mil dólares destinados a la atención de damnificados por el invierno en Colombia. Asimismo se concretó un convenio sobre intercambios en materia científica, tecnológica, educativa y sanitaria en el área de medicina tradicional entre el Ministerio de la Protección Social y la Administración Estatal de Medicina Tradicional China. También se suscribió la cooperación financiera entre el Banco Nacional de Desarrollo Chino y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), con el fin de aumentar el suministro de información y mejorar el clima de negocios entre los dos países. Se firmó un Memorando de Entendimiento para el Programa Integral Río Magdalena entre el Banco Nacional de Desarrollo de China, la Corporación de Asesoría de Obras Hidroeléctricas de China, e instituciones locales para el dragado y proyectos futuros en esa corriente fluvial.Finalmente, se definió la ampliación de las relaciones entre sectores empresariales de los dos países para promover las oportunidades de inversión, mediante un acuerdo entre la Asociación Nacional de Empresarios y el Consejo de China para el Fomento del Comercio Internacional.Tras

Perú	Tailandia, fortalecimiento acuerdos comerciales en el marco de TLC con ASEAN, 2008 EEUU, reunión de la Comisión Conjunta sobre Comercio e Industria e inicio de negociaciones de un TPPI[44], 2008; Nueva Zelanda, TLC firmado, 2008 Singapur, TLC fin de negociaciones 2008[45]; Corea del Sur, TLC en negociación, 2006[46]; Canadá, interés por promover la cooperación económica y comercial bilateral, 2008 Chile, TLC sobre servicios que amplia el vigente, 2008[47]. Perú, TLC 5ª ronda de negociaciones, 2008 México, interés por negociar un TLC sobre servicios, 2008 Acuerdo de Bangkok, Acuerdo Preferencial (Bangla Desh, China, India, Corea del Sur, Laos, Sri Lanka), 1976	Ecuador firman acuerdo entre Petroecuador y la petrolera china Andes Petroleum para prestación de servicios, 2008	Australia, Corea, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Federación Rusa, Singapur, Vietnam. Chile, Perú ASEAN, TPPI posible firma en diciembre, 2008	
Japón	Vietnam, Acuerdo de Cooperación Económica, EPA) para impulsar las inversiones y el intercambio comercial, 2008; Australia, TLC 6ª ronda de negociaciones, 2008; Corea del Sur, EPA inicio de negociaciones para alcanzar un TLC, 2008; India 2007, EPA 9ª ronda de negociaciones); Brunei, 2008, EPA vigente; Indonesia, TLC vigente, 2008; Tailandia, TLC vigente, 2007; Chile, TLC, 2007 Malasia, TLC vigente, 2006; Filipinas, EPA, 2006 México, TLC vigente, 2005 Singapur, TLC vigente, 2002;	China, Hong Kong, Corea del Sur, Federación Rusa, Singapur, Vietnam. Perú (2008 en negociación, como etapa previa para un TLC)		
Corea del Sur	China, TLC en negociación, 2005; Japón, EPA, inicio de negociaciones para alcanzar un TLC, 2008; Canadá, TLC en negociación, 2008; EEUU, TLC firmado pero sin ratificación de Congreso del Congreso y la Asamblea Nacional Coreana, 2007; Tailandia, TLC firmado, 2008; India, CEPA en negociación, 2008; Australia, TLC inicio de negociaciones, 2008; Nueva Zelanda, TLC en estudio, 2008; Japón, TLC interés por reactivar negociaciones por un TLC suspendidas 2008; Consejo de Cooperación del Golfo-CCG[48] un TLC en estudio, 2008. México,TLC 2ª ronda de negociaciones 2008 Perú TLC iniciaran negociaciones en noviembre 2008 Chile, TLC, 2004. Acuerdo de Bangkok, Acuerdo Preferencial(Bangla Desh, China, India, Corea del Sur, Laos, Sri Lanka), 1976	China, Indonesia, Malasia, Fed., Rusa, Vietnam		

[43] Este es el primer TLC global, que China firmó con otros países que cubre los comercios de mercancías y servicios, la inversión y de otros muchos terrenos, y el primero de ese tipo con un país desarrollado.

[44] El Tratado incluye las cláusulas clásicas de este tipo de acuerdos en cuanto a protección y promoción de inversiones:•un trato no discriminatorio, •trato justo y equitativo, incluido el derecho al debido proceso de indemnización en caso de expropiación o nacionalización, •libre transferencias de capital, •Reglamento transparente, •someter sus controversias a arbitraje internacional independiente.

[45] China es el segundo mayor socio de comercio de Singapur. Y éste es el octavo socio de comercio, el séptimo origen de capital extranjero y el segundo mercado de servicios laborales de China. El volumen de comercio bilateral de 2007 alcanzó a 47,150 millones de dólares USA.

Australia	ASEAN/Nueva- Zelanda, 2008, TLC fin de negociaciones, 2008, Chile, TLC, 2008 China, 2008, TLC 11 ronda de negociaciones, 2008 Japón, 2008, TLC 6ª ronda de negociaciones, 2008, Malasia, 2008, TLC en negociación, 2008, India, 2008, TLC estudio de factibilidad, 2008, Indonesia, TLC estudios de factibilidad, 2007 , Corea del Sur, 2008, TLC en estudio , 2008 Singapur, 2003, TLC vigente2003. Consejo de Cooperación del Golfo-CCG un TLC en estudio, 2007 ASEAN/Australia, TLC fin de negociaciones, 2008,		China, Hong Kong, India, Indonesia,Chile	
Nueva Zelanda	China, TLC firmado, 2008, Consejo de Cooperación del Golfo-CCG, TLC 3ª ronda de negociaciones durante 2008 Malasia, TLC 6ª ronda de negociaciones, 2006). P4(Singapur, Chile y Brunei Darussalam) primer TLC transpacífico que firmó en el 2006. Acuerdo de Bangkok, Acuerdo Preferencial(Bangla Desh, China, India, Corea del Sur, Laos, Sri Lanka), 1976		China, Hong Kong ,	
Singapur	Perú, TLC, firman acuerdo 2008. Japon,TLC-CEP,2007 Consejo de Cooperación del Golfo, TLC(bajo negociaciones), 2006 ASEAN/Australia/Nueva Zelanda, TLC, 2006 China, TLC (1ª ronda de negociaciones), 2006 P4(Nueva Zelanda, Chile y Brunei Darussalam) primer TLC transpacífico que firmó en el 2006.	Singapur-Panamá, TLC, 2006	China, Indonesia, Japón, Laos, Taiwán, Vietnam, Camboya. Perú	

[46] China es el mayor socio comercial de la República de Corea, la cuarta mayor economía de Asia, y el comercio bilateral llegó a 145. 000 millones de dólares el año pasado. la República de Corea espera elevar la cooperación con China no sólo en la industria manufacturera sino también en los sectores de servicios de la economía del conocimiento, tales como software, finanzas, comunicación y logística. Debido al creciente precio del petróleo crudo, de materias primas y alimentos, la República de Corea y China enfrentan posible insuficiencia energética. La República de Corea espera cooperar con China en energía nuclear o en la exploración de fuentes nuevas de energía, y poner más énfasis en las industrias ecológicas y ahorradoras de energía, dijo Lee. Además, alentó a su país a desarrollar la cooperación con China en áreas como protección del medio ambiente mundial y cambio climático. Actualmente hay cerca de 18,000 empresas surcoreanas que operan en China y de igual forma existe el interés de empresas chinas por invertir en la Rep. de Corea. Ministerio de Comercio de la Rep. Popular China.

[47] China se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de Canadá, detrás de Estados Unidos. El volumen de comercio bilateral superó los 30.000 millones de dólares USA el año pasado. Ministerio de Comercio de China.

[48] Formado por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Omán y Kuwait.

[49] Funcionarios del gobierno chino informaron que los obstáculos actuales se mantiene en el acceso a los servicios financieros australianos al mercado chino y la inversión bilateral directa. También se ha señalado que los servicios financieros, profesionales y educativos, así como la inversión en el sector minero, serán prioridades para Australia en las negociaciones. China y Australia comenzaron conversaciones de TLC en mayo de 2005. Los analistas dijeron que los temas de agricultura y acceso al mercado de servicios siguen sin resolverse luego de la décima ronda de conversaciones de noviembre pasado. China es el socio comercial más grande de Australia y es su segundo mayor destino de exportaciones luego de Japón. El volumen comercial entre los dos países llegó a 43.800 millones de dólares USA en 2007, según las estadísticas del Ministerio de Comercio de China. (Xinhua). www. peopledaily.com.

[50] A finales de enero del 2009 , la prensa informò que el Ministerio de Industria de Indonesia exigió un aplazamiento al avance de las negociaciones entre la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y Australia, Nueva Zelandia para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), con el objetivo de proteger la industria local de Indonesia."En una situación tan crítica, cada país tiende a reforzar sus productos nacionales", dijo el viernes el Ministerio del Jefe de Investigación y Desarrollo Dedy Mulyadi. Según Dedy, la industria indonesia local no es competitiva aún para ongresar al mercado extranjero, incluso para proteger mercado interno. "El aplazamiento debia haberse tomado una o dos años antes", dijo el funcionario. Dijo que aunque el procedimiento del TLC está bajo la autoridad del Ministerio de Comercio de Indonesia, el Ministerio de Industria tiene que proponer el aplazamiento, debido a que las exportaciones del país se reducirá, lo que perjudicará a los sectores manufactureros en medio de su crisis financiera mundial. ". Xinhua,31 de enero 2009.

[51] Australia tiene acuerdos vigentes con: Singapur(2003,TLC), Tailandia (2005, TLC), Estados Unidos (2005,TLC), Nueva Zelanda (Closer Economic Partnership, 1983).

[52] Nueva Zelanda tiene acuerdos vigentes con: Chile, Brunei, Singapur(2005, Closer Economic Partnership) Tailandia(2005, Closer Economic Partnership), Singapur(2001, Closer Economic Partnership), Australia(1983, Closer Economic Partnership) y suspendió e 2002 después de cinco rondas de negociaciones un 'Closer Economic Partnership' (CEP).

Singapur	SudCorea, TLC, 2005 Singapur, Acuerdo de Cooperación Económica(CECA), 2005 EEUU, TLC, 2004 Canada, TLC(3a ronda de negociaciones), 2002 Australia, TLC, 2002 Nueva Zelanda, TLC-Acuerdos de Servicios(CEP),2001 Mexico, TLC,(6a ronda de negociaciones),2000 México, TLC en negociaciones, 2000			
Filipinas	China, Acuerdo Comercial tipo, 1975 Indonesia, Acuerdo Comercial tipo, 1975 Rusia, Acuerdo Comercial tipo, 1976 Nueva Zelanda, Acuerdo Comercial tipo, 1977 Corea del Sur, Acuerdo Comercial tipo, 1978 Vietnam, Acuerdo Comercial tipo, 1978 EEUU, Acuerdo Comercial tipo, 1979 Tailandia, Acuerdo Comercial tipo, 2000 Japón, Acuerdo Comercial tipo, 2006 Laos-Thailand, Acuerdo Preferencial, 1991		Australia, Camboya, Canadá, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Federación Rusa, España, Taiwán, Tailandia, Vietnam,	
Brunei	P4(Nueva Zelanda, Chile y Brunei Darussalam) primer TLC transpacífico que firmó en el 2006		Vigentes: Corea del Sur No ratificados: China	
Camboya	EEUU, acuerdo comercial, agrícola e industrial, 2008	UE, acuerdo de cooperación, 1997	China, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Malasia,, Filipinas, Vietnam	
Laos	Acuerdo de Bangkok, Acuerdo Preferencial(Bangla Desh, China, India, Corea del Sur, Laos, Sri Lanka), 1976	UE, acuerdo de cooperación, 1997	China, India, Indonesia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia Vietnam, Malasia, Federación Rusa	
Malasia	Chile, TLC, 2008 (bajo negociación-1a ronda). EEUU, TLC(apuran cierre de negociaciones), 2008[53] Japón, TLC, 2005	UE, acuerdo bilateral para promover el comercio de la madera producida de forma legal, 2008. Consejo de Cooperación del Golfo, crecientes relaciones comerciales y de inversión, 2007[54]. India, TLC, en negociación, 2008[55] Uruguay, creación comisión bilateral permanente con el fin de promover el intercambio comercial entre ambos países, 2008	China, India, Indonesia, Vietnam, Laos, Papua Nueva Guinea, Chile, Perú Uruguay(2008)	
Vietnam		Brasil, Acuerdos Comerciales sobre agricultura, industria, biotecnología y energía, 2008 Argentina, Acuerdos de cooperación, 2004 Unión Europea, acuerdo bilateral para la entrada de Vietnam en la Organización Mundial del Comercio (OMC), 2004	Camboya, China, India, Indonesia, Japón, Chile Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Fed. Rusa, Singapur, Taiwán, Tailandia,	

[53] Malasia ocupa la decimosexta posición como socio comercial con EEUU, por encima incluso de Tailandia, Australia, Brasil o India, países con los que mantenemos una relación comercial bilateral.

[54] Gran parte de los inversores establecidos en la región del Golfo están penetrando en el mercado malasio, especialmente en la región de Iskandar, área que se encuentra en pleno proceso de expansión y desarrollo. Al mismo tiempo, se está produciendo el proceso inverso: las compañías malasias están mostrando un gran interés por la mayoría de los proyectos que, en materia de construcción de infraestructuras, se están ejecutando en el GCC.

[55] Malasia e India concluirán en breve las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio bilateral, una vez solucionadas las diferencias entre ambos países, entre las que destaca la petición de Kuala Lumpur de que India rebaje sus aranceles sobre el aceite de palma. India importa cerca de tres millones de toneladas de aceite de palma y sus derivados al año, principalmente desde Malasia e Indonesia. El Gobierno indio ha ofrecido una rebaja del arancel del aceite crudo de palma de hasta el 50% y del refinado de hasta el 60%. ASEAN y, en particular, dos de sus miembros más afectados, Indonesia y Malasia, exigen recortes de los aranceles hasta alcanzar el 30% y 40% en aceites crudos y refinados, respectivamente.Pressnote El pionero.

Indonesia	Chile, TLC, 2007 exploran inicio de negociaciones		Australia, Camboya, China. Croacia, India, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Polonia, Qatar, Singapur, Tailandia, Vietnam, Chile	
Tailandia	Australia, TLC, 2005 Nueva Zelanda, TLC,2005 Perú, TLC, 2005 EEUU, TLC, 2005(4th ronda de negociaciones sobre la base un TIFA) India, TLC, 2007 Japón, TLC, 2007 ratificado por el Parlamento Corea del Sur, TLC, 2006 bajo consideración China, TLC bajo consideración, 2006 Chile, Grupo de Estudio Conjunto con su tarea finalizada, 2008		Camboya, Canadá,China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sur, Laos, Filipinas, Federación Rusa, Taiwán, Vietnam, Perú	
Taiwán		Panamá, TLC, 2003 Nicaragua, TLC, 2006 Honduras, TLC, 2007 El Salvador, TLC, 2007 Guatemala, TLC, 2006	Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, India Honduras(no ratificado)
Canadá	Australia, Acuerdos de Cooperación Económica y Comercial(TECA), 1995 Chile.TLC, 1997 EEUU-México, NAFTA, 1995 Perú, TLC, 2008(firmado) Colombia, TLC, 2008 (5ª ronda) Singapur,TLC,2007 (5a ronda stand by) Corea del Sur, TLC, 2008 (bajo negociación-15a ronda) Japón, Acuerdo Marco Económico(Grupo de estudio, 2006	Costa Rica, TLC, 2002 El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, TLC, 2006(negociaciones stand by) Panamá, TLC, 2008 en estudio.	Indonesia, Vietnam, China (pendientes): India (neg. concluidas) Tailandia, URSS, Perú, Filipinas, (vigentes)	Ecuador, Panamá, El Salvador, Uruguay (vigentes)
EEUU	México, TLC, 1995 Brunei, TIFA.2004 Filipinas, TIFA, 2004 Indonesia, TIFA, 2004 Chile,TLC,2004 Singapore,TLC,2004 Tailandia, TIFA.2004 Australia, TLC, 2004 Malasia, TIFA, 2005 Vietnam, Acuerdo anexión a la OMC, 2006 Perú, TLC, 2007 Corea del Sur, TLC, 2007(pendiente ratificación en el Congreso EEUU)	CAFTA-RD, 2006		Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay
Fed. Rusa	China, Acuerdos comerciales y energéticos, 2006	Colombia, Acuerdo Comercial, 1995 UE, Acuerdo de Cooperación Económica, 1994 Perú, interés en acuerdos comerciales,	Canadá, Corea del Sur, Laos, Filipinas, Tailandia EEUU,Vietnam	Ecuador, India
India	China, aumentan mayor cooperación comercial y de inversiones[56], 2008; Tailandia, TLC, 2007 ASEAN, Acuerdo de Cooperación Económica, 2004.		Australia, China, Indonesia, Corea del Sur, Laos, Malasia, Filipinas, Fed. Rusa, Taiwán, Tailandia, Vietnam	

[56] China e India se comprometieron hoy a reforzar los lazos comerciales y la cooperación económica entre ambos países en ámbitos como la construcción, inversión, servicios financieros, tecnología, educación y turismo.

India	Consejo de Cooperación del Golfo-CCG, existen negociaciones desde 2006 Chile, TLC, 2006 (pendiente en el Congreso) Singapur, Acuerdo de Cooperación Económica(CECA), 2005 Consejo de Cooperación del Golfo, TLC, 2006bajo negociación China, TLC, 2004 bajo consideración EU, en estudio un acuerdo para el 2009			

Fuente: elaboración propia.

III. Comercio y Estándares Laborales

Cerramos esta nota, con una síntesis de las principales conclusiones de los informes ejecutivos que la CSI ha venido preparando para la revisión de políticas comerciales en la OMC, los cuales incluyen un análisis de la violación de dichas políticas a las normas laborales de el país en cuestión. Se incluyen los informes disponibles de los países miembros de cada uno de los bloques regionales que se han comentado:

CHINA

- La República Popular de China ha ratificado cuatro de los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT. En vista de las severas restricciones a los derechos sindicales y la prevalencia de el trabajo infantil y trabajo forzoso, así como la discriminación, se determinarán las medidas necesarias para cumplir con los compromisos aceptados por los miembros de la OMC en las Declaraciones Ministeriales de Singapur, Ginebra y Doha en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
- China no ha ratificado ninguno de los convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva. Hay graves restricciones en cuanto a la libertad sindical, de negociación colectiva y el derecho de huelga, tanto en la legislación como en la práctica. Los trabajadores no están en capacidad de formar y afiliarse a sindicatos de su elección y cualquier intento de organización independiente es reprimida. Una nueva ley de contrato de trabajo, que provea sanciones específicas por no respetar la legislación laboral y los reglamentos relativos a los contratos y cuestiones conexas, puede hacer una contribución a la aplicación de las normas.
- China ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre igualdad de remuneración y el Convenio sobre la discriminación. La discriminación en el empleo está prohibido por la ley, pero sí se produce en la práctica. La legislación exige la igualdad de remuneración, pero las diferencias salariales siguen existiendo entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos de la sociedad. China ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio sobre la edad mínima. El trabajo infantil sigue siendo un grave problema en la República popular de China, en particular el trabajo forzoso infantil y el trabajo infantil como parte de programas de estudio-trabajo y en la industria manufacturera.
- China no ha ratificado los convenios fundamentales sobre el trabajo forzoso. El trabajo forzoso existe en formas tales como el trabajo penitenciario, el trabajo que tienen lugar como parte de "re-educación", y la trata de mujeres y niños para trabajos forzados y obligados a la prostitución. Recientemente ha llamado la atención pública los graves problemas tanto de niños como de adultos pobres, de zonas del interior con trabajo forzoso en condiciones equivalentes a la esclavitud en las empresas manufactureras en las provincias costeras, lo que ha resultado en la intervención oficial.

INDIA

- La India ha ratificado cuatro de los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT. En vista de las restricciones a los derechos sindicales, la prevalencia de trabajo infantil y trabajo forzoso, así como la discriminación, se determinarán las medidas necesarias para hacer cumplir a la India con los compromisos que aceptó en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha en 1996-2001, y en la OIT con la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
- India no ha ratificado el Convenio fundamentales de la OIT sobre la libertad de la asociación o convenio fundamental en la negociación colectiva. Son varias las restricciones con respecto a la libertad de asociación, la negociación colectiva y el derecho de huelga, tanto en la legislación y en la práctica. Los trabajadores del sector público están aún más restringidos en sus derechos. Las propuestas que se han hecho para modificar la legislación restringen aún más los derechos sindicales.
- India ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre la igualdad de Remuneración, así como el Convenio sobre la discriminación. Sin embargo hay deficiencias legales y en la práctica existe discriminación en el empleo y los salarios. En particular, los dalits son sometidos a graves situaciones de discriminación y están empleados en los puestos de trabajo más explotados.
- India no ha ratificado el Convenio fundamentales de la OIT sobre las peores Formas de trabajo infantil y el Convenio sobre la edad mínima. A pesar de los esfuerzos, el trabajo infantil sigue siendo un grave problema en la India e incluye el trabajo infantil peligroso y la servidumbre infantil.
- La India ha ratificado los dos convenios sobre el trabajo forzoso. Se ha informado de la trata para trabajos forzados y la prostitución forzada. También hay un problema generalizado de la servidumbre laboral en India.

TAILANDIA

- Tailandia ha ratificado cinco de los ocho Convenios Fundamentales del trabajo de la OIT. A la vista de restricciones sobre los derechos sindicales y la prevalencia de trabajo infantil y trabajo forzoso así como la discriminación, se determinarán las medidas necesarias para hacer cumplir a Tailandia con los compromisos que aceptó en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en Trabajo.
- Tailandia no ha ratificado ninguno de los convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. Hay graves restricciones en cuanto a la libertad de asociación, negociación colectiva y el derecho de huelga, tanto en la legislación y en la práctica. Las empresas estatales de trabajadores y funcionarios públicos se enfrentan aún a más restricciones. Los trabajadores migrantes están imposibilitados de formar sindicatos y la discriminación antisindical en Tailandia es común.
- Tailandia ha ratificado el Convenio fundamental de la OIT sobre igualdad de remuneración, pero no el Convenio sobre la Discriminación. Existen varias lagunas legales y un sustancial número de trabajadores no están cubiertos por la legislación. En la práctica existe discriminación en el empleo y en los salarios, y las mujeres se concentran en empleos con bajos salarios y baja calificación en la economía informal. Las trabajadoras migrantes y los trabajadores domésticos son los más afectados.
- Tailandia ha ratificado el Convenio fundamental de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio sobre la edad mínima. A pesar de programas específicos y proyectos, el trabajo infantil sigue siendo un problema grave en Tailandia, e incluye las peores formas de trabajo infantil.
- Tailandia ha ratificado los dos convenios sobre el trabajo forzoso. Hay tráfico de personas para trabajos forzados y prostitución forzada, incluidos la de los niños.

SINGAPUR

■ Singapur ha ratificado cinco de los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT. A la vista de restricciones sobre los derechos sindicales de los trabajadores, la discriminación, y demás restricciones sobre instrumentos jurídicos, son necesarias más medidas para hacer cumplir a Singapur con los compromisos aceptados en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

■ Singapur ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva, pero no el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización. Los trabajadores en el sector privado tienen derecho a organizarse y formar sindicatos. Los trabajadores del sector público no tienen el derecho a organizarse, pero en la práctica se hacen excepciones. El derecho a organizarse es generalmente respetado. El derecho a la negociación colectiva está protegido por la ley, y la negociación colectiva se lleva a cabo en la práctica. El derecho de huelga está reconocido pero limitado. Las huelgas son raras y la mayoría de las controversias se resuelven a través de la conciliación.

■ Singapur ha ratificado el Convenio Fundamental de la OIT sobre Igualdad de Remuneración. No ha ratificó la Convención sobre la Discriminación. La discriminación está prohibida por la ley, pero sí se produce en la práctica. Muchas mujeres siguen trabajando puestos con bajos salarios y baja cualificación y, por tanto, generalmente ganan menos que sus homólogos masculinos, aunque las distancias se están reduciendo. La situación de los trabajadores domésticos extranjeros sigue siendo una fuente de preocupación a pesar de ciertos esfuerzos realizados por el Gobierno para abordar la cuestión.

■ Singapur ha ratificado la Convención fundamental de la OIT sobre las peores formas de Trabajo Infantil, así como el Convenio sobre la edad mínima. A pesar de los recientes esfuerzos en esta esfera, siguen existiendo algunos elementos de la legislación de Singapur sobre el trabajo infantil que aún deben modificarse de conformidad con las normas internacionales. En particular, los trabajos peligrosos deberían queda prohibidos para los menores de 18 años. En la práctica, sin embargo no hay indicación de trabajo infantil en Singapur, como consecuencia de la alta prioridad que se otorga por el gobierno a la educación.

■ Singapur ha ratificado la Convención sobre la abolición del Trabajo Forzoso, pero no el Convenio sobre el Trabajo Forzoso. No hay indicios de trabajo forzoso en Singapur; Sin embargo, el tráfico de mujeres para la prostitución forzada se produce.

BRUNEI

■ Brunei Darussalam pasó a ser un miembro de la OIT a finales de 2007 y no ha ratificado ninguno de los ocho de las Normas Fundamentales del Trabajo de la OIT. En muchas zonas de Brunei Darussalam la legislación y la práctica requieren mejoras importantes con el fin de cumplir con los compromisos aceptados por Brunei en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur en 1996 y en Doha en 2001, y en la Declaración de la OIT relativa a Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo, adoptada en junio de 1998.

■ Brunei no ha ratificado ninguno de los Convenios sobre Derechos Sindicales Fundamentales. Prácticamente no hay actividad sindical en el país y se carece de fundamento jurídico, ya sea para la negociación colectiva o la huelga. Por otra parte, la suspensión de los derechos democráticos se opone a la actividad sindical.

■ Brunei no ha ratificado ninguno de los Convenios fundamentales de la OIT contra la discriminación. Las mujeres en Brunei no gozan del mismo acceso al empleo y, a menudo ocupan puestos temporales, mientras que los hombres tienen puestos permanentes. Ninguno de los ciudadanos de Brunei deja de enfrentarse a graves discriminaciones en el mercado laboral, ya

que quedan fuera del alcance de la mayoría de la legislación laboral. Aunque en algunos casos el gobierno ha demostrado voluntad para sancionar los actos ilegales cometidos contra trabajadoras domésticas extranjeras, la situación de este grupo particular de los trabajadores sigue siendo una fuente de gran preocupación.

- Brunei no ha ratificado ninguno de los Convenios fundamentales de la OIT sobre Trabajo Infantil. No existe un informe sobre la situación del trabajo infantil en Brunei. No se dispone de datos sobre la situación de los niños pequeños.
- Brunei no ha ratificado ninguno de los Convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso. Aunque la ley prohíbe el trabajo forzoso y obligatorio, las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de algunos trabajadores extranjeros pueden ser asimilados al Trabajo Forzoso. La trata de personas con fines de trabajo se produce de vez en cuando.

BAHRAIN

- Bahrein ha ratificado sólo cuatro de las ocho Normas Laborales Fundamentales. En Bahrein diversas áreas del derecho y la práctica requieren mejoras con el fin de cumplir con los compromisos aceptados por Bahrein en las Declaraciones Ministeriales de la OMC de Singapur en 1996 y Doha en 2001, y en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptada en junio de 1998.
- El Gobierno de Bahrein no ha ratificado ninguno de los dos Convenios Fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales. Se han hecho algunos progresos desde 2002, para garantizar que los trabajadores puedan disfrutar de sus derechos fundamentales a formar y afiliarse a un sindicato y de negociación colectiva, pero a los trabajadores en el sector público se les sigue negando el derecho a organizarse. Otra fuente de preocupación es la larga lista de sectores en los que las huelgas están prohibidas.
- El Gobierno de Bahrein no ha ratificado el Convenio fundamentales de la OIT sobre Igualdad de Remuneración, pero ha ratificado la Convención sobre la Discriminación en Empleo y Ocupación. Aunque se han hecho algunos esfuerzos, los trabajadores migrantes - que constituyen el 60 por ciento de la fuerza de trabajo - siguen siendo gravemente discriminados en casi todos los aspectos del empleo y por la falta de una protección jurídica adecuada. La situación de las trabajadoras domésticas es extremadamente preocupante. Los cambios en la ley y en la práctica son necesarias para garantizar a la mujer la igualdad de acceso a las oportunidades en el mercado de trabajo.
- El Gobierno de Bahrein no ha ratificado el Convenio fundamentales de la OIT sobre la edad mínima. A pesar de que ha ratificado el Convenio sobre las peores formas de Trabajo Infantil, la legislación de Bahrein no está en conformidad con dicha Convención.
- El Gobierno de Bahrein ha ratificado los dos Convenios Fundamentales de la OIT en el trabajo forzoso. Sin embargo, en varios aspectos, la legislación de Bahrein sobre trabajo forzoso no es de conformidad con los convenios de la OIT. En la práctica, el número de los trabajadores extranjeros que están obligados a trabajar es una fuente de gran preocupación. La situación de los trabajadores domésticos es particularmente alarmante.

GUATEMALA

- Guatemala ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, en vista de las severas restricciones a los derechos sindicales de los trabajadores, discriminación, trabajo infantil y otras restricciones legales, son necesarias más medidas para cumplir con los compromisos que Guatemala aceptó en Singapur, Ginebra y Doha, en la Declaración Ministerial de la OMC en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
- Aunque Guatemala ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre los derechos sindicales, la protección de los derechos

definidos en el mismo son totalmente insuficientes. Los trabajadores siguen enfrentándose a la represión violenta de su derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos, incluido el asesinato de los activistas sindicales en un contexto de total impunidad. Hay graves restricciones en el derecho a la negociación colectiva y de huelga. La ley y las autoridades no proporcionan la protección contra la discriminación antisindical, especialmente para los trabajadores en las plantaciones de banano y las zonas francas industriales (ZFI). Todo tipo de prácticas dudosas para eliminar los sindicatos, tanto en el sector público y el privado para no ser penalizados.

■ Guatemala ha ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre la discriminación. Sin embargo, las mujeres y los grupos indígenas se enfrentan a importantes niveles de discriminación en el empleo y la ocupación. La segregación del mercado de trabajo persiste. Las mujeres constituyen la gran mayoría de la mano de obra en las zonas francas industriales donde los sindicatos son incapaces de proteger sus derechos. Un número desproporcionado de los pueblos indígenas viven en la pobreza y están sobrerrepresentados en el trabajo agrícola, donde los derechos sindicales no se hacen cumplir. Políticas públicas para combatir la discriminación y el racismo son limitados y pocas veces eficaz.

■ A pesar de la ratificación de ambos convenios fundamentales de la OIT sobre la cuestión, el trabajo infantil sigue siendo un fenómeno generalizado en Guatemala, incluso en sus peores formas. La legislación nacional no se aplica y las medidas adoptadas por el Gobierno hasta ahora son claramente insuficientes. La situación de los niños trabajadores domésticos es particularmente alarmante. Del mismo modo, los casos de los niños involucrados en prostitución exigir más y mejor la acción gubernamental.

■ Aunque Guatemala ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso, las condiciones de trabajo de algunos trabajadores son tan pobres que en algunos casos pueden ser asimilados al trabajo forzoso. La trata de seres humanos, especialmente niños y mujeres, es un problema creciente en el país.

HONG KONG

■ Con motivo de la entrega oficial de Hong Kong a China en 1997, el Gobierno de China notificó a la OIT que cuatro de los Convenios sobre las Normas Fundamentales del Trabajo de la OIT se aplican en Hong Kong. Otras dos convenciones han sido desde entonces aplicadas a Hong Kong.

■ En vista de la falta de reconocimiento de los sindicatos, graves obstáculos para la negociación colectiva, y la persistencia de la discriminación sindical, se determinará las medidas necesarias para hacer cumplir a Hong Kong con los compromisos aceptados en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha en 1996-2001, y los compromisos contraídos de China en nombre de Hong Kong en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo, adoptada en junio de 1998.

■ Aunque los convenios fundamentales de la OIT relativos a la protección de los derechos sindicales se aplican en Hong Kong. Sin embargo, las restricciones a estos derechos se mantienen, en la legislación y en la práctica. El Gobierno de Hong Kong, en particular, se niega persistentemente a seguir la recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT con respecto a los problemas antes mencionados.

■ Ninguno de los convenios fundamentales de la OIT sobre la discriminación se aplican en Hong Kong, a pesar de que la propia China ha ratificado dos de ellos (Convenio 111, enero de 2006). La legislación de Hong Kong prohíbe la discriminación por motivos de género, discapacidad, y de responsabilidad familiar, pero no hay disposición legal todavía para poner fin a la discriminación contra la gran población de trabajadores migrantes. La discriminación contra la mujer sigue siendo un problema, especialmente en lo que se refiere a la remuneración y la representación de mujeres en

altos cargos. La Discriminación con respecto a la edad y la raza también es grave.

- Los dos convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo infantil se aplican en Hong Kong. La ley, sin embargo, no es coherente con los compromisos realizados por China en nombre de Hong Kong en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Ambos convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso se aplican en Hong Kong. Aunque la ley prohíbe el trabajo forzoso, hay informes sobre mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Hong Kong es también un país de tránsito para el tráfico de personas.

INDONESIA

- Indonesia ha ratificado los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT convenios sobre el trabajo. En vista de las restricciones a los derechos sindicales y la prevalencia de el trabajo infantil y trabajo forzoso, así como la discriminación, se necesitan medidas para dar cumplimiento a los compromisos que Indonesia ha aceptado en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT relativa Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
- Indonesia ha ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad de asociación y en la negociación colectiva. Sin embargo, hay restricciones en cuanto a la libertad de asociación, la negociación colectiva y el derecho de huelga, tanto en la legislación y en la práctica. Los trabajadores del Sector Público están más restringidos en sus derechos.
- Indonesia ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre la igualdad de Remuneración, así como el Convenio sobre la discriminación. Sin embargo hay varias deficiencias legales y un número considerable de los trabajadores no están cubiertos por la legislación. En la práctica hay discriminación en el empleo y los salarios y las mujeres están concentrada en empleos con bajos salarios y baja calificación en el empleo informal. Los trabajadores migrantes y los trabajadores domésticos están entre los más afectados.
- Indonesia ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre las peores Formas de trabajo infantil y el Convenio sobre la edad mínima. A pesar de algunas iniciativas, el trabajo infantil sigue siendo un grave problema en Indonesia e incluye las peores formas de trabajo infantil.
- Indonesia ha ratificado los dos convenios sobre el trabajo forzoso. Hay un cierto grado de trata para trabajos forzados y la prostitución obligada y el trabajo forzoso infantil en las plataformas pesqueras.

JAPÓN

- Japón ha ratificado seis de los ocho Convenios Fundamentales del trabajo de la OIT. En Habida cuenta de las restricciones a los derechos sindicales y la discriminación, se necesitan medidas para que Japón de cumplimiento a los compromisos aceptados en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha en 1996 -2001, y en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en Trabajo.
- Japón ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre libertad sindical y el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Sin embargo, existen restricciones en el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva en el sector público, y los trabajadores del sector público no tienen derecho a la huelga.
- Japón ha ratificado la Convención fundamental de la OIT sobre igualdad de remuneración, pero no al Convenio sobre la discriminación. Aunque se han hecho progresos, la discriminación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, incluso con respecto a la remuneración sigue siendo considerable, debido no solo a una concentración de mujeres en empleos a tiempo parcial y temporales, sino también debido a un doble sistema de administración de personal.
- Japón ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre las peores formas de Trabajo Infantil y el Convenio sobre la edad mínima. El trabajo infantil

generalmente no se producen en Japón, y la educación es gratuita y obligatoria hasta la edad de quince años.

■ Japón ha ratificado el Convenio sobre el trabajo forzoso, pero no la Convención sobre la abolición del trabajo forzoso. El trabajo forzoso está prohibido, pero todavía existen problemas con el tráfico de personas en Japón con el fin de la prostitución forzada y trabajo forzado.

AUSTRALIA

■ Australia ha ratificado siete de los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT. A la vista de restricciones sobre los derechos sindicales en particular, se determinarán las medidas necesarias para hacer cumplir a Australia con los compromisos aceptados en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur, Ginebra y Doha durante 1996-2001, y en la Declaración de la OIT relativa a Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

■ Australia ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva. Existen severas restricciones en cuanto a la libertad de asociación y el derecho a negociar colectivamente, tanto en la legislación y en la práctica. La nueva legislación que entró en vigor en 2006 erosionó aún más los derechos sindicales y ha socavado aún más la negociación colectiva.

■ Australia ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre Igualdad de Remuneración y Discriminación. Sin embargo, existe una importante brecha salarial de género y las mujeres son menos representadas en los altos puestos de dirección y las mujeres indígenas experimentan mucho mayor desempleo que la población general.

■ Australia ha ratificado la Convención fundamentales de la OIT sobre las peores formas de Trabajo Infantil pero no el Convenio sobre la edad mínima. El trabajo infantil se produce en forma limitada

■ Australia ha ratificado los dos convenios sobre el trabajo forzoso. Hay informes de la trata para la prostitución forzada.

CANADA

■ Canadá sólo ha ratificado cinco de los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT. No ha de ratificar el Convenio de la OIT 98 (1949), el derecho a la Sindicación y la Negociación Colectiva, el Convenio de la OIT 138 (1973), el Convenio sobre la edad mínima y el Convenio de la OIT 29 (1930), el Convenio sobre trabajo forzoso. Otras medidas son necesarias para hacer cumplir a Canadá con los compromisos de hacer respetar las normas laborales básicas internacionalmente reconocidas que ha aceptado en diversos foros internacionales.

■ A pesar de que la ley federal concede el derecho a unirse y formar sindicatos, hay importantes limitaciones a los sindicatos y a otros derechos de los trabajadores en leyes provinciales de Canadá. Se llevan a cabo violaciones en todo el país, de diferentes maneras dependiendo de la provincia. La OIT y su comités de control han criticado la situación y hace un llamamiento para que se enmiende esas disposiciones que limitan los derechos definidos legalmente por instrumentos internacionales vinculantes.

■ Canadá en general respeta las disposiciones relativas a las normas sobre la discriminación en el empleo en muchos aspectos. Las mujeres siguen recibiendo más bajos remuneración que los hombres. Además, siguen existiendo casos de discriminación hacia los trabajadores de color, las poblaciones indígenas y de trabajadores con discapacidad. El trabajo infantil no es un problema importante en Canadá. La trata de personas, lo que constituye una forma de trabajo forzoso, es un problema y se calcula que al menos 800 personas al año son objeto de trata para los EE.UU. con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.

COREA

■ La República de Corea ha ratificado cuatro de los ocho convenios fundamentales de la OIT. En vista de las restricciones a los derechos sindicales de los trabajadores, la discriminación, y otras restricciones legales,

son necesarias más medidas para cumplir con los compromisos que la República de Corea aceptó en Singapur, Ginebra y Doha, en la Declaración Ministerial de la OMC en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

- Corea no ha ratificado ninguno de los convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales. La legislación laboral del gobierno no se ajusta a las normas internacionales ni al propio compromiso de Corea en la OCDE. El gobierno continúa interfiriendo en algunos casos, y reprime a las actividades sindicales. Muchos empleados públicos se ven privados de su derecho a organizarse. La violencia policial contra huelguistas sigue siendo un problema, a veces resultando en heridas graves. En la práctica, los trabajadores migrantes no son capaces de disfrutar de sus derechos sindicales fundamentales.
- Corea ha ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre la discriminación y en igualdad de remuneración. La discriminación en el empleo y la ocupación está prohibida por la ley. Sin embargo en la práctica la discriminación contra la mujer y los trabajadores extranjeros es frecuente y grave. Las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación de las mujeres desfavorecidas en el mercado de trabajo no han dado los resultados prometidos. El actual sistema de permisos de empleo pone a los trabajadores extranjeros en una situación especialmente vulnerable, lo que los hace fácilmente presa de abusos y explotación.
- Corea ha ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo infantil. El trabajo infantil no se considera un fenómeno muy extendido en Corea. La educación es obligatoria hasta los 15 años de edad, la edad mínima para entrar en el trabajo. El trabajo realizado por los jóvenes menores de 18 años está regulado. Sin embargo, se carece de datos oficiales sobre la prevalencia de los niños que participan en la industria del sexo.
- Corea no ha ratificado ninguno de los convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso. El trabajo forzoso está prohibido por la ley y en la práctica, los coreanos no están sujetos a trabajo forzoso, pero se ha informado acerca de las condiciones que enfrentan algunos de los trabajadores migrantes que podrían equivaler a trabajo forzoso.

ESTADOS UNIDOS

- Los Estados Unidos sólo han ratificado dos de los ocho Convenios Fundamentales del Trabajo de la OIT. Habida cuenta de las restricciones a los derechos sindicales de los trabajadores y los continuos problemas de Trabajo Infantil, se determinarán las medidas necesarias para cumplir con los compromisos aceptados por los EE.UU. en las Declaraciones Ministeriales de la OMC en Singapur y en Doha en 1996-2001, y en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
- Los EE.UU. no han ratificado el Convenio Fundamental de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ni el Convenio sobre libertad sindical y el derecho de sindicación. No hay suficiente protección contra la discriminación antisindical. El derecho de huelga y el derecho a la negociación colectiva están severamente restringidos, en particular, para los trabajadores del sector público y para determinados grupos de trabajadores del sector privado.
- Los EE.UU. no han ratificado el Convenio Fundamental de la OIT sobre igualdad de remuneración, ni el Convenio sobre discriminación. La discriminación en el empleo está prohibido por la ley, pero ocurre en la práctica. La legislación exige la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, pero las diferencias en los salarios siguen existiendo entre hombres y mujeres y entre los diferentes grupos étnicos.
- Los EE.UU. han ratificado la Convención Fundamental de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, pero no el Convenio sobre la edad mínima. El trabajo infantil sigue siendo un problema en

los EE.UU., en particular en la agricultura donde menos se aplican normas y donde los niños siguen siendo expuestos a condiciones de trabajo peligrosas, a la espera de una nueva legislación.

■ Los EE.UU. han ratificado la Convención sobre la abolición del trabajo forzoso, pero no el Convenio sobre el trabajo forzoso. El trabajo forzoso existe en formas como la prostitución forzada (trata de mujeres y niñas), en la agricultura y el trabajo doméstico, y en el de la industria de prendas de vestir de los territorios de EE.UU.

MÉXICO

■ México ha ratificado únicamente seis de los ocho convenios fundamentales de la "Organización Internacional del Trabajo". La violación de los principios que emanan de esta normativa internacional vinculante para los estados miembros de la OIT, de la cual México es uno de ellos, es constante y sistemática.

■ Las violaciones a la autonomía sindical son constantes y la creación de un sindicato independiente una carrera de obstáculos debido a las formalidades necesarias para ello. El derecho de huelga está igualmente limitado, lo que ha llevado a los órganos supervisores de la OIT a recomendar que México modifique su legislación en vigor. Numerosos sindicalistas sufren agresiones y muchos de ellos son asesinados impunemente en su intento de ejercer estos derechos.

■ La legislación en vigor contra la discriminación no se hace cumplir y las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres son elevadas. Las personas con discapacidad y los indígenas sufren discriminación abierta. El acoso sexual es un problema común en los lugares de trabajo sin estar adecuadamente tratado por el gobierno.

■ Más de tres millones de niños trabajan en México debido a la pobreza y las desigualdades dentro del país. Muchos niños abandonan la escuela antes de finalizar la enseñanza obligatoria y el estudio en otro idioma que no sea el español no está garantizado, por lo que muchos niños de origen indígena se ven privados de seguir con éxito su educación.

■ El trabajo forzoso es común en México, incluidos niños. México es un país de origen, tránsito y destino de personas para fines de explotación sexual.

PANAMÁ

■ Aunque Panamá ha ratificado los ocho convenios fundamentales del trabajo de la OIT, siguen produciéndose numerosas violaciones, particularmente en lo referente a los derechos sindicales, y se requieren cambios esenciales para cumplir plenamente con los compromisos contraídos por Panamá tanto ante la OIT como ante la OMC.

■ Pese a que el gobierno de Panamá ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre derechos sindicales, hay muchos aspectos de la legislación que no guardan conformidad con los Convenios de la OIT. En particular, el hecho de que los trabajadores/as del sector público no disfruten plenamente de derechos sindicales. La tendencia general hacia la desregulación y hacia una mayor flexibilidad de las relaciones de empleo sigue constituyendo un obstáculo importante para la organización sindical en Panamá. Los sindicatos y las asociaciones de funcionarios públicos existentes son víctimas de represalias y amenazas cuando exigen sus derechos.

■ Panamá ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre discriminación e igualdad de remuneración. Los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la discriminación en el empleo y la remuneración deberán proseguir y reforzarse para garantizar que las mujeres tengan acceso a mejores puestos de trabajo en todos los sectores y para eliminar la brecha salarial entre géneros. El gobierno no ha resuelto de forma satisfactoria la discriminación contra las minorías étnicas en el empleo y la ocupación.

■ Panamá ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre trabajo infantil y el gobierno ha establecido medidas legales y programas de apoyo para implementar dichos conve-

nios. Pese a estas medidas, el trabajo infantil sigue siendo un problema en el país. La falta de recursos financieros impide la aplicación de las leyes y regulaciones. El caso de los menores que trabajan en el servicio doméstico resulta particularmente preocupante.

■ Panamá ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre trabajo forzoso. Sin embargo, la trata de personas, especialmente mujeres y niños/as, es causa de creciente preocupación en el país, y el gobierno debe redoblar esfuerzos para abordar esta cuestión de forma adecuada.

COSTA RICA

■ Aunque Costa Rica ha ratificado los ocho convenios fundamentales del trabajo de la OIT, siguen produciéndose numerosas violaciones, particularmente en lo referente a los derechos sindicales, y se requieren cambios esenciales para cumplir plenamente con los compromisos contraídos por Costa Rica tanto ante la OIT como ante la OMC.

■ Pese a que los dos convenios de la OIT sobre derechos sindicales han sido ratificados, los trabajadores/as no pueden ejercer sus derechos en la práctica. Los sindicalistas no gozan de suficiente protección frente a la discriminación antisindical y los actos antisindicales por parte de los empleadores suelen quedar impunes. En el sector privado, los sindicatos han sido sustituidos progresivamente por las denominadas asociaciones solidaristas, o comités permanentes de trabajadores, generalmente establecidos por los propios empleadores.

■ Más de la mitad de las exportaciones de Costa Rica provienen de Zonas Francas y maquilas, donde se violan flagrantemente los derechos sindicales. Desde los fallos de la Sala Constitucional en 2000, numerosos convenios colectivos del sector público han sido desmantelados y el derecho a la negociación colectiva se ha visto privado de todo significado. Durante más de una década, el gobierno ha venido afirmando que tomaría medidas para corregir esta situación, pero hasta el momento de redactar el presente informe no se había constatado ninguna mejora significativa.

■ Costa Rica ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre discriminación e igualdad de remuneración, y los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la discriminación en el empleo y la remuneración han dado resultados positivos. Con todo, estos esfuerzos deberán proseguir para garantizar que las mujeres consigan un acceso a mejores puestos de trabajo en todos los sectores y para eliminar la brecha salarial entre géneros. La situación de los trabajadores migrantes (especialmente las mujeres) y la población indígena requiere también que se preste una atención particular.

■ Aunque el gobierno ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre trabajo infantil y lleva a cabo una serie de programas para impedir que los niños trabajen en condiciones que pudieran contravenir la legislación nacional, el trabajo infantil sigue siendo un problema en Costa Rica, especialmente en el servicio doméstico, en actividades económicas informales y no reguladas en las zonas urbanas, y en labores agrícolas y más concretamente en la recolección del café. El número de niños explotados sexualmente es también fuente de preocupación.

■ Aunque Costa Rica ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos para destinarlos al trabajo forzoso sigue siendo un problema alarmante.

URUGUAY

■ Uruguay ha ratificado las ocho normas fundamentales del trabajo de la OIT. En algunas áreas, la legislación y la práctica de Uruguay requieren medidas adicionales para cumplir plenamente con los compromisos que Uruguay aceptó en Singapur en 1996 y Doha en 2001 en las Declaraciones Ministeriales de OMC y en la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT aprobada en 1998.

■ Aun cuando en Uruguay generalmente se respetan los derechos sindicales, sigue habiendo problemas con respecto a la discriminación antisindical; y una definición excesi-

vamente amplia de los "servicios esenciales", en los que se niega el derecho de huelga.

- Pese a que la ley dispone la igualdad, en la práctica las mujeres se concentran en puestos de trabajo de bajos salarios. La minoría afrouruguaya del país se enfrenta a numerosos obstáculos para llegar a conseguir puestos de trabajo mejor pagados.
- El trabajo infantil en Uruguay, que se concentra en ocupaciones informales y el trabajo rural, sigue siendo tema de inquietud. El gobierno está aplicando medidas para resolver el problema, pero se han criticado como insuficientes.
- Hay informes de trabajo forzoso en Uruguay, y el gobierno debe mejorar sus medidas sobre esta cuestión.

UNION EUROPEA

- Casi todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea han ratificado los ocho convenios fundamentales del trabajo de la OIT. Las únicas excepciones son la República Checa y Estonia. En ciertas áreas se necesitan algunas medidas para conformarse a los compromisos que la Unión Europea asumió en Singapur, Ginebra y Doha, en las declaraciones ministeriales de la OMC realizadas en el período de 1996 a 2001, así como en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
- Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los dos principales convenios de la OIT sobre los derechos sindicales. En general, los derechos sindicales se respetan en la ley y en la práctica en los 15 Estados miembros históricos de la Unión Europea y en la mayor parte de los 12 nuevos Estados miembros. Sin embargo, particularmente en los nuevos países miembros, tienen lugar violaciones de los derechos sindicales y la legislación laboral no siempre está acorde con los convenios de la OIT. Se registran deficiencias particularmente respecto a la discriminación antisindical y el derecho de huelga.
- Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT relativos a la discriminación y la igualdad de remuneración. La legislación nacional y diversas Directivas de la UE establecen la igualdad de remuneración y de trato en el empleo. En la práctica, no obstante, sigue habiendo una pronunciada discriminación económica en contra de la mujer. Existen diferencias salariales en todos los Estados miembros, las tasas de desempleo suelen ser más elevadas para las mujeres que para los hombres, y las mujeres se concentran de forma desproporcionada en empleos a tiempo parcial y mal remunerados en el sector de servicios. Se registra igualmente discriminación contra las minorías étnicas, incluyendo la minoría romaní.
- Todos los Estados miembros de la UE, con la excepción de la República Checa y Estonia han ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo infantil. Sin embargo, en muchos países de la UE se da en cierta medida el empleo ilegal y la explotación de menores, principalmente en la economía informal y en la agricultura.
- Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo forzoso. Con todo, la trata de personas, esencialmente mujeres y niñas para destinarlas a trabajos forzosos y a la explotación sexual, es un problema en cierta medida en prácticamente todos los países. En algunos Estados miembros, los presos están obligados a trabajar para empresas privadas.

Link para Informes completos de CSI para la revisión de políticas comerciales en la OMC

- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Singapore (Geneva, 14 and 16 July 2008)
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of the United States (Geneva, 9 and 11 June 2008)
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of China (Geneva, 21 and 23 May 2008)
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Brunei (27-29 February 2008)
- Informe para el examen por el Consejo General de la OMC de las políticas comerciales de México (11 - 13 de febrero de 2008
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Pakistan (Geneva 16 and 18 January 2008)

- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Turkey (Geneva, 10 and 12 December 2007)
  Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Thailand (Geneva, 26 and 28 November 2007)
- Informe para el examen por el Consejo General de la OMC de las políticas comerciales de Panamá
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Bahrain
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Indonesia
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of India
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Japan
- Informe para el examen por el Consejo General de la OMC de las políticas comerciales de Australia
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Canada
- Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Hong Kong
- Informe para el examen por el Consejo General de la OMC de la políticas comerciales de Costa Rica

ANEXO - Formatos de Acuerdos Comerciales y de Inversión

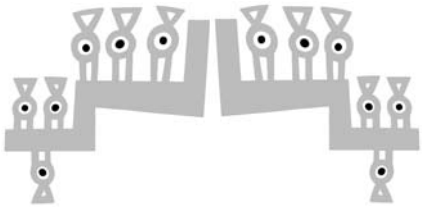
- 1. Acuerdos/Tratados comerciales intrarregionales de carácter bilateral o subregional.
- Acuerdos de Cooperación Económica (ACE) entre países de ALC, centrados en el otorgamiento de preferencias arancelarias firmados por buena parte de los países latinoamericanos (toda Sudamérica más México y Cuba) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, creada en 1980 sobre la base de la anterior ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de 1960).
- TLC bilaterales entre países de ALC, en que fija un arancel externo común y se tienden a liberar los intercambios intrapaís. Este formato sólo ha comenzado a ser practicado en años recientes entre países de distintas uniones aduaneras, en buena medida como desarrollo de los ACE.

2. Acuerdos/Tratados comerciales extrarregionales de carácter bilateral o subregional.

Se refiere a los TLC y ACE firmados por países de ALC con países de las distintas subregiones asiáticas a los que no suele considerárselas (al menos todavía) del "Norte" (China, India, Corea del Sur, Brunei, Tailandia, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Israel)

3. Acuerdos de inversión

Los Tratados de Protección y Promoción de Inversiones (TPPI) o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son frecuentemente del tipo Norte-Sur, porque reproducen, por esta vía alternativa, la estrategia de los países del Norte dirigidas a establecer "reglas de libre inversión", mediante disposiciones que fortalecen los derechos de los inversionistas extranjeros en los países participantes. Para ello, prohiben el establecimiento de requisitos de desempeño y, por el contrario, establecen mecanismos de arbitraje para resolver controversias Estado-Inversor, los cuales permiten que las empresas multinacionales puedan interponer demandas contra los Estados ante tribunales internacionales, frente a cualquier cambio en el marco regulatorio que consideren afectan los compromisos establecidos en el tratado. La solución de controversias suele ser a menudo secreta y poco transparente.



LA ACTIVA PRESENCIA DE COREA A NIVEL DE LAS NEGOCIACIONES BILATERALES DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN A NIVEL MUNDIAL

Hilda Sánchez, asesora

En el presente documento se han sistematizado algunas informaciones sobre las activas negociaciones que ha venido desplegando Corea del Sur durante el 2008 y el 2009 con la UE, países del Sudeste Asiático, Australia, Canadá, México, Uruguay, Brasil, Japón, Nueva Zelanda, el Consejo de Cooperación del Golfo y con Perú.

Una segunda sección recopila documentos sindicales recientes sobre este país, provenientes de la CSI, CLC de Canadá, AFL-CIO, FITIM-IMF y otras organizaciones.

Finalmente, una tercera sección describe las denuncias presentadas ante la OCDE en relación a las Directrices OCDE sobre Empresas Multinacionales referidos a empresas coreanas (en su país o en el exterior), así como de filiales de otras multinacionales en Corea.

I. NEGOCIACIONES COMERCIALES DE COREA DEL SUR

1. OMC. Posteriormente al colapso de las negociaciones, el viceministro de Comercio de Corea del Sur, Ahn Ho-young, indicó que su país continuará con la negociación de TLCs. Seúl ha firmado acuerdos comerciales con Chile, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio(Suiza, Noruega, Irlanda y Liechtenstein.

2. América del Norte

Canadá. En marzo se realizó la 13ª ronda de negociaciones para la firma de un TLC, centrado en cuestiones de apertura arancelaria acceso a mercados), medidas no arancelarias, el comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros, entrada temporal de personas, las inversiones, compras gubernamentales, competencia, propiedad intelectual, comercio electrónico, solución de controversias y acuerdos de cooperación en paralelo sobre temas ambientales y laborales. Un estudio difundido por el Ministerio Canadiense de Comercio aseguró que los acuerdos comerciales negociados con Corea del Sur no beneficiarán a Canadá ya que "los sectores estratégicos y de alta tecnología tales como las computadoras, la maquinaria y el equipo de transporte (especialmente automóviles) han experimentado la peor de las pérdidas de empleos. En este

informe se considera ademàs que tambièn sentiràn el impacto de la liberalizacion comercial sectores de baja tecnología tales como la ropa y el calzado(Universidad de Carleton, 2006).

Estados Unidos de América. El TLC entre ambos países fue firmado en junio de 2007, pero aún está pendiente su ratificación por parte del Congreso estadounidense y la Asamblea Nacional coreana. A lo largo del 2008 se han venido realizando diferentes acciones de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil contra la decisión del gobierno de reanudar la importación de carne vacuno procedente de Estados Unidos. En julio, miles de trabajadores de la Hyundai Motor, mayor empresa fabricante de automóviles en el país, iniciaron una huelga para sumarse a las protestas y exigir nuevas negociaciones sobre este acuerdo de importación con Estados Unidos, el cual fue puesto como condición por parte de EEUU para ratificar el TLC.

3. América Latina

México. A principios de agosto de 2008 se reitero el interés de los dos países por retomar las negociaciones por un TLC (hasta el momento se han celebrado dos rondas). México trata de impulsar inversiones coreanas en los sectores automotriz, electrónico, textil, del calzado, aeronáutico, turístico y de tecnologías de la información. No obstante, empresarios de la industria química, del acero y automotriz se oponen al acuerdo porque muchos de estos productos ya entran al mercado mexicano con bajos aranceles, y el TLC vendría a profundizar aún más dicha situación.

Uruguay. En septiembre del 2008, se firmo un acuerdo de cooperación en silvicultura y pesca entre los dos países, y se promoverán las carnes uruguayas en el mercado coreano así como las inversiones de empresas coreanas en el Uruguay. Además Corea ha solicitado el apoyo de Uruguay para promover un TLC con MERCOSUR.

Perú. Las negociaciones por un TLC se iniciarán en marzo próximo y varias empresas coreanas han manifestado interés por invertir en el campo energético, de hidrocarburos y construcción.

Brasil. Recientemente Corea le ha manifestado su interés al gobierno brasileño por desarrollar emprendimientos en etanol, biodiesel, extracción de materiales, petroquímica y minería.

4. Unión Europea

Corea del Sur y la Unión Europea (UE) acordaron en febrero pasado retrasar dos o tres semanas la octava ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas economías. La siguiente ronda que iba a tener lugar en Bruselas la primera semana de marzo era considerada por ambas partes como la última y más importante para desbloquear los acuerdos. Según el ministro surcoreano de Comercio, Kim Jong-hoon, los negociadores del UE pidieron retrasar las conversaciones dos o tres semanas, aunque las dos partes mostraron su disponibilidad para salvar sus diferencias antes de que termine marzo.

Los representantes de Seúl y Bruselas aseguraron que se han realizado progresos significativos, principalmente en lo referente a las normas de origen y en el sector de la automoción. La UE representa el segundo mayor mercado de exportación de Corea después de China, país con el que Corea buscará también firmar un TLC. El punto de desacuerdo fue la inflexibilidad de la UE de acceder a la demanda de Seúl de reducir el plazo de la desgravación arancelaria de automóviles. La UE se mostró escéptica diciendo que la industria automotriz es un sector muy susceptible en Europa. De igual manera, Corea del Sur no accedió a la solicitud europea de acortar el calendario de liberalización para sus principales productos mecánicos y químicos. La parte surcoreana, sin embargo, propuso como alternativa reducir los aranceles de los bienes manufacturados en un 95% o más en cinco años; dada la dificultad de desgravar a corto plazo las tarifas correspondientes a los artículos de mayor susceptibilidad. La siguiente ronda de deliberaciones será en el marco de las consul-

tas por sectores que comenzarán a mediados de septiembre y la reunión de ministros de Comercio programada para octubre.

5. Asia-Pacìfico

Tailandia. A fines de agosto del 2008, ambos países firmaron un TLC, con el cual este dejó de ser el único país de ASEAN que no había concretado un acuerdo con Corea. Después de casi un año de negociaciones, en diciembre del 2007, Tailandia finalizó las negociaciones con Seúl en virtud del acuerdo de libre comercio Corea-ASEAN(AKFTA) después que Seúl permitió una prórroga (2010-12 a 2016-17) de la reducción de los aranceles de importación sobre bienes tailandeses (acero y productos siderúrgicos, cosméticos, cueros crudos, curtidos de cuero y artículos de cuero). Seúl se comprometió a la reducción de los aranceles que incluyen los aparatos eléctricos, tableros de partículas, madera contrachapada, melaza de caña, hilos, camarones congelados, almidón de tapioca y calamares provenientes de Tailandia.

India. Se han celebrado cinco rondas de negociaciones por un Acuerdo Amplio de Cooperación Económica (CEPA), que en la práctica es similar a un TLC. Hasta mediados del 2008, aún no se había llegado a una conclusión debido a las disputas sobre normas de origen, servicios y comercio agrícola. Ambos países tienen intereses comunes en el desarrollo de plantas de acero, adonde se están dirigiendo las empresas coreanas actualmente.

Australia. A principios de agosto del 2008, los dos países acordaron iniciar negociaciones de un TLC y ampliar su relación comercial a los campos de la defensa, la seguridad y en materia energética.

Nueva Zelanda. A mediados del 2008, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, visitó Corea del Sur con la intención de analizar la posibilidad de establecer un TLC, tras firmar este mes uno con China.

Japón. Corea ha venido intentando a lo largo del 2008, sin mucho éxito, reanudar las negociaciones por un TLC con Japón, las cuales fueron iniciadas en el 2003. Las negociaciones han sido bloqueados por la renuencia de Corea a abrir más su mercado del automóvil y otras industrias manufactureras, mientras Japón también se opone a abrir plenamente sus mercados agrícolas. Las empresas coreanas resisten el acuerdo con el argumento de que se erosionarán sus ganancias.

Japón es el principal competidor de Corea en el mercado mundial de la electrónica y sus partes. Para las empresas japonesas, Corea esta bastante cerca y es un destino que garantiza mano de obra calificada y suficiente apoyo gubernamental.

Otros países asiáticos. Para finales del 2009, Corea tiene previsto firmar un TLC con el Consejo de Cooperación del Golfo(CCG) seis estados del Golfo (Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Omán y Kuwait - posee alrededor del 40 por ciento de las reservas mundiales de petróleo),lo cual ayudaría a garantizar a Corea del Sur un suministro estable de energía. El CCG naciones son también un mercado clave para los constructores de Corea del Sur que recibió órdenes de construcción de un total de 14,4 millones de dólares el año pasado.

II. DOCUMENTOS SINDICALES

II.1 Informe 2007 sobre las violaciones de los derechos sindicales

El gobierno del Presidente Roh Moo-hyun persistió en la vía de la represión antisindical ordenando una ofensiva policial radical contra el sindicato de funcionarios, Korean Government Employees Union, que incluyó la ocupación y el cierre de más de cien oficinas sindicales locales. En noviembre, el gobierno también forzó la adopción en el Parlamento de una serie de enmiendas a la legislación laboral, que facilitarán la contratación de mano de obra de reemplazo durante las huelgas así como la contratación de trabajadores/as mediante contratos temporales. Los empleadores siguieron

despidiendo sindicalistas impunemente y a menudo iniciaron procedimientos penales (y exigieron compensaciones exorbitantes) por una pretendida "obstrucción a la actividad comercial" que en realidad representa el ejercicio normal de las actividades sindicales. Continuaron los violentos asaltos de la policía contra huelguistas, resultando varios heridos graves y causando la muerte de un trabajador del acero. Informe completo en www.ituc-csi.org

El 7/8/2008, la CSI envió una carta al Presidente Lee Myung-bak de Corea del Sur protestando enérgicamente por el hecho de que el gobierno hubiera detenido a la Sra. Jin Young-ok, Primera Vicepresidenta de la Confederación Coreana de Sindicatos (Korean Confederation of Trade Unions -KCTU), -afiliada a la CSI- y de que hubiera emitido mandatos de arresto contra otros altos dirigentes de dicha organización, del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea (Korea Metal Workers' Union - KMWU) y del sindicato de la sección automotriz de Hyundai (Hyundai Motor Branch). Se emitieron mandatos de arresto contra Lee Suk-haeng, Presidente de la KCTU, y Lee Yong-shik, su Secretario General, contra Jung Gab-deuk, Presidente de la KMWU y Nam Take-gyu, su Vicepresidente, como así también contra los seis dirigentes máximos electos del sindicato Hyundai Motor Branch. A raíz de esos mandatos de arresto, la policía rodeó la sede de la KCTU, se registró a las personas que ingresaban al edificio y se emitieron órdenes de allanamiento de los domicilios de las personas buscadas. También se puso bajo vigilancia a sus familiares. El gobierno decidió tomar esas medidas en virtud de ciertas disposiciones del código penal relativas a "obstaculización de los negocios", a raíz de una huelga general que la KCTU convocó para el 2 de julio debido a preocupaciones en materia de seguridad alimentaría por las importaciones de carne de Estados Unidos y otra serie de reivindicaciones entre las cuales figuraban las privatizaciones y la escalada de precios al consumidor. "Las medidas que tomó el gobierno son totalmente inaceptables. Hacemos un llamamiento al Presidente Lee para que ponga de inmediato en libertad a Jin Young-ok, levante los mandatos de arresto y deje de hostigar y vigilar a los dirigentes sindicales y sus familiares. El gobierno debería entablar un diálogo sobre estas cuestiones, que revisten suma importancia para los trabajadores coreanos, en lugar de recurrir una y otra vez a la represión antisindical", declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI(CSI on line).

II.2 UAW, IAM, USW y KMWU: Resolución sindical sobre los TLC de Corea del Sur y EE.UU. y de Canadá y Corea del Sur y los trabajadores encarcelados

Los tratados de libre comercio propuestos, respectivamente entre Corea del Sur y EE.UU. (KORUS FTA) y entre Canadá y Corea del Sur (Canada-Korea FTA) han sido negociados sin participación efectiva de la sociedad civil. En consecuencia, si se aplican promoverán los intereses económicos del capital transnacional, a expensas de los obreros, los campesinos, las mujeres y los pobres. Por manifestar su oposición a los antidemocráticos KORUS FTA y Canada-Korea FTA, los metalúrgicos han sido reprimidos, y en el caso del Sindicato de trabajadores metalúrgicos de Corea del Sur (KMWU), han sido encarcelados los sindicalistas participantes en una huelga contra el TLC. Los 430 delegados al Comité Central de la FITIM, provenientes de más de 60 países, reunidos en Salvador, Bahía, Brasil los días 28-29 de noviembre de 2007, exigen que se ponga inmediatamente en libertad a los trabajadores encarcelados y se suspenda la represión de trabajadores que expresan democráticamente su oposición a esos tratados de comercio neoliberales.

En febrero del 2008, el CLC de Canadá manifestó, ante el Comité de Comercio Internacional sus principales preocupaciones en torno al TLC con Corea:

1) "Nos preocupa que el modelo de negociaciones comerciales bajo

consideración consolida el papel de Canadá como una región productora de recursos dentro de Norte América y en la economía mundial a expensas de la base manufacturera de Canadá, las comunidades y los servicios públicos.

2) Nos preocupa que el acuerdo es malo para los trabajadores de ambos países. Pone los beneficios empresariales por delante de las necesidades y los intereses de las personas que trabajan en Canadá y Corea.

3) Nos preocupa que Canadá está desempeñando un papel lamentable a nivel del orden mundial. En lugar de comprender por qué existe tan profunda y generalizada oposición a las políticas neoliberales de comercio y de inversión en todo el mundo, Canadá está, por desgracia, reforzando el unilateralismo de EEUU en detrimento de la sistema multilateral."

"Somos conscientes de la oposición al libre comercio en Corea, y del impacto negativo sobre los trabajadores en Canadá y Corea. Recientemente, el Congreso del Trabajo de Canadá y la Confederación de Sindicatos de Corea emitieron una declaración conjunta e hicieron un llamamiento a nuestros respectivos gobiernos para detener estas conversaciones sobre el comercio de inmediato. A la luz de la grave crisis manufacturera, el deterioro devastador de la balanza comercial automotriz, así como de los graves riesgos que este acuerdo plantea al sector agrícola coreano, ambas Centrales sindicales reconocen que el sector manufacturero en los dos países será adversamente afectado. En Corea, los trabajadores se enfrentan a la tendencia del empleo irregular y precario (ya en el 54% de la fuerza de trabajo). Esta situación sólo vendrá a intensificarse, como resultado de ese pacto comercial. Los trabajadores coreanos y canadienses sugieren que nuestros gobiernos opten por entablar un verdadero proceso de consulta con los trabajadores y sectores relevantes interesados, para dar lugar a una estrategia de desarrollo económico que construya nuestras sociedades, en lugar de trabajar en contra de los trabajadores.

El CLC, por tanto, pide una moratoria en las actuales negociaciones Canadá-Corea.

Se recomienda que los debates se inicien sobre un acuerdo de comercio justo basado en los derechos de los trabajadores en ambos países para lograr un desarrollo social y económico equitativo. Hacemos un llamado a esta comisión para recomendar que la política comercial canadiense respalde políticas industriales y sociales sostenibles para garantizar puestos de trabajo decente basados en los derechos fundamentales consagrados en los convenios fundamentales de la OIT.(www.canadianlabour.ca).

II.3 AFL-CIO: Declaración de John Sweeney , sobre el proyecto de Acuerdo De Libre Comercio Corea-Estados Unidos. 03 abril 2007

Las trabajadoras y los trabajadores en los Estados Unidos y Corea del Sur se unen hoy para oponerse enérgicamente al Acuerdo de Libre Comercio Corea-Estados Unidos (TLC KORUS), y vamos a enviar un poderoso mensaje para el Congreso de los EE.UU. y el Parlamento coreano de que cualquier acuerdo comercial entre nuestros países deben proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y contribuir a la creación de buenos empleos en ambos países. El acuerdo, que es el mayor desde el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no beneficiará a los trabajadores de los Estados Unidos o Corea del Sur. La AFL-CIO junto con nuestros homólogos de Corea sindicato, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU) y la Federación Coreana de Sindicatos (FKTU) se oponen enérgicamente a cualquier acuerdo que perjudicará a las familias trabajadoras, los agricultores y los productores nacionales de ambos países. Este defectuoso tratado no contiene ejecutables básicos para la protección de los derechos de los trabajadores, y se socavan la capacidad de los gobiernos para proporcionar servicios públicos y sociales de

alta calidad, y para proteger la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la salud pública. Nuestros gobiernos se apresuraron en las negociaciones y anunciaron el acuerdo a finales de la pasada noche, después de 48 horas de extensión de la fecha límite de negociación. Cuestiones importantes para las familias trabajadoras de ambos países han sido claramente desubicadas. Es inexplicable como la Administración Bush presentó un acuerdo comercial no exigiendo protecciones para los derechos de los trabajadores en un momento en que existe un amplio reconocimiento en el Congreso de los EE.UU. que los acuerdos comerciales deben defender básico los derechos de los trabajadores.

Es probable que este acuerdo agrave y acelere la pérdida de buenos empleos en los sectores manufactureros de EE.UU., especialmente en automóviles, vestuario y electrónica. Ya tenemos $ 14 mil millones de déficit comercial con Corea del Sur - casi 12 millones de dólares en autos y piezas de automóviles. Este acuerdo es probable que pone en peligro decenas de miles de puestos de trabajo EE.UU., mientras que deja de abordar el conjunto de barreras oficiales a la venta de automóviles de EEUU en Corea del Sur. Desafortunadamente, la. Representante Comercial (USTR) rechazó la muy sensata propuesta presentada por un grupo bipartidista de miembros del Congreso para atar cualquier apertura del mercado de automóviles de EEUU a parámetros concretos de ventas de automóviles de EEUU en Corea. Tenemos poca confianza de que nuestros negociadores han abordado con éxito el enorme desequilibrio en el comercio de automóviles con las tradicionales propuestas de reducción de aranceles .

Aunque los detalles del acuerdo todavía no se han hecho públicos, estamos profundamente preocupados por informes de prensa de que el TLC incluye beneficios de acceso a mercados de productos fabricados en la zona industrial de la ciudad fronteriza de Kaesong. Los trabajadores de Kaesong no tienen capacidad alguna para ejercer sus derechos humanos fundamentales a la libertad de asociación, a organizarse y negociar colectivamente. Ellos son esencialmente sirvientes del gobierno de Corea del Norte - no pueden recoger directamente los salarios de sus empleadores de Corea del Sur, sólo los pagará el gobierno de Corea del Norte después de sentencias arbitrarias y excesivas deducciones. Es completamente inaceptable que los productos fabricados en estas condiciones represivas reciban acceso preferencial al mercado de los EE.UU..

Por último, este acuerdo no incorpora las normas laborales básicas de la OIT, sino que incluye en su lugar sólo una débil disposición de que los países deberán hacer valer sus propias leyes laborales. Los países pueden debilitar sus leyes laborales en cualquier momento sin penalización.

El TLC KORUS no refleja las propuestas sobre los derechos de los trabajadores, protección del medio ambiente, inversiones, adquisiciones, y los medicamentos con receta presentada por los Cámara de Demócratas recientemente. Estas propuestas reflejan las preocupaciones ampliamente compartidas, y los miembros del Congreso debe rechazar cualquier acuerdo que no incorpore plenamente a los trabajadores.

III. OCDE: DENUNCIA SOBRE EMPRESAS COREANAS EN RELACIONES A LAS DIRECTRICES SOBRE EMPRESAS MULTINACIONALES

De acuerdo a información del TUAC (por sus siglas en inglés, Comité Consultivo Sindical ante la OCDE) y de OCDE Watch, el sindicalismo y ongs han presentado entre el 2001 y 2007, 10 casos de denuncia de no cumplimiento de los contenidos de las Directrices OCDE sobre Multinacionales.

La mayor parte de los casos se refieren a empresas coreanas, ¡unto a dos en que la denuncia corresponde a una filial local de una multinacional de otro origen (Nestlé y Lafargue). Asimismo, algunos casos se

refieren a sucursales de empresas coreanas en el exterior.

La mayor parte de estos casos fueron presentados directamente ante el Punto Nacional de Contacto coreano, en ocasiones compartido con otros.

Al final de cada descripción se ha incluido una evaluación global sobre el resultado alcanzado, desde el punto de vista del denunciante.

1. Empresa y sector: Cosmos Mack Industries Ltd (Corea)
País y conflicto: Sri Lanka, actitudes antisindicales de un joint venture de la empresa
Denunciante: FTZWU y sindicatos de la zona franca.
Fecha de inicio: noviembre 2001
Fecha de finalización: 2003
Resultado: intermedio.

2. Empresa y sector: ChoiShin Co Ltd (Corea), maquila textil
País y conflicto: Guatemala, por comportamiento antisindical de sus dos filiales ChoiShin Co Ltd, Corea, productoras para Liz Claiborne.
Denunciante: ITGLWF, con participación de su regional, con el apoyo de las dos centrales coreanas (Federación de Sindicatos Coreanos, FKTU y Confederación Coreana de Sindicatos, KCTU) y la participación de los dos sindicatos de empresa (Sitracima y Sitrachos, afiliados a FESTRAS (Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños). Apoyo del TUAC.
Otros PNC involucrados: remitido también al PNC EEUU y al PNC Holanda (por utilizarse fondos de un programa público).
Fecha de inicio: febrero 2002
Fecha de finalización: junio 2003
Resultado: positivo

3. Empresa y sector: Sees Co (Corea), ropa deportiva
País y conflicto: Sri Lanka, por actitudes antisindicales de su filial
Denunciante: Progress Union
Fecha de inicio: noviembre 2002
Fecha de finalización: retirado en diciembre 2002
Resultado: positivo.

4. Empresa y sector: Kiswire Snd Bhd (Corea)
País y conflicto: Corea, por comportamiento antisindical.
Denunciante: MTVC
Fecha de inicio: mayo 2003
Fecha de finalización: 2006.
Resultado: negativo.

5. Empresa y sector: Nestlé (Suiza)
País y conflicto: Corea, por falta de información de su factoría ante mudanza a China.
Denunciante: KCTU, IUF e ICEM, junto a Nestlé Korea Labour Union.
Otros PNC involucrados: pedido de informes al PNC Suiza
Fecha de inicio: septiembre 2003
Fecha de finalización: marzo 2004
Resultado: positivo, por la intervención del PNC Suiza.

6. Empresa y sector: Korean EPZ Co (Corea)
País y conflicto: Bangladesh, actitudes antisindicales en zonas francas.
Denunciante: ITGLWF
Fecha de inicio: marzo 2004
Fecha de finalización: junio 2004
Resultado: negativo.

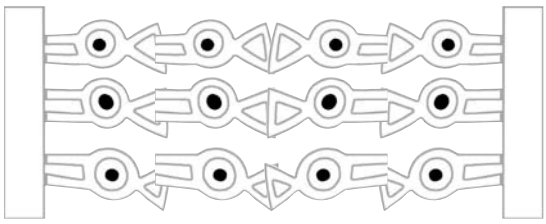
7. Empresa y sector: Lafarge (Francia)
País y conflicto: Corea, por actividades antisindicales de su sucursal Lafage Halla Cement.
Denunciante: KCTF, Korean Chemical and Textile Workers Federation. Con participación de ICEM.
Fecha de inicio: octubre 2006
Fecha de finalización: 2007
Fuente y comentarios: TUAC. Resultado positivo

8. Empresa y sector: Chougong Trading, texil
País y conflicto: Filipinas, por comportamiento antisindical con sus subcontratistas.
Denunciante: KCTU, KHIS (Korean House of International Solidarity) y WAC (Workers Assitance Center Inc).
Fecha de inicio: septiembre 2007.
Fecha de finalización: El departamento de trabajo nacional evaluó negativamente al

sindicato por presión de la empresa. Ese mismo año, la empresa entró en bancarrota.

9. Empresa y sector: Tetrapak (registro en Suecia, pero staff en Suiza)
País y conflicto: Indonesia, por cierre de una factoría sin información a los trabajadores.
Denunciante: KCTU.
Otros PNC involucrados: También presentado al PNC Suecia y al PNC Suiza-
Fecha de inicio: julio 2007
Fecha de finalización: Sin información

10. Empresa y sector: Il-Kyong Co Ltd, textil.
País y conflicto: Filipinas, por comportamiento antisindical de su subsidiaria Jeon Garments.
Denunciante: KCTU y la ong Chogwon Union in Filipinas
Fecha de inicio: septiembre 2007
Fecha de finalización: 2007
Resultado: negativo. El Departamento de Trabajo nacional evaluó negativamente al sindicato, por presión de la empresa.



LOS DESAFIOS QUE ENFRENTA EL SINDICALISMO LATINOAMERICANO

Silvia Portella de Castro, socióloga, maestra por el Programa de Integración de América Latina (PROLAM-USP), consultora sindical en Brasil y en el Mercosur
Marzo 2009

Durante los años ochenta y noventa, el sindicalismo latinoamericano sufrió duros reveses y tuvo dificultades para resistir las medidas liberalizadoras y desreguladoras implementadas por los gobiernos nacionales de ese período. Los procesos de apertura comercial y las medidas de ajuste financiero significaron la pérdida de millones de puestos de trabajo, una caída acentuada de los salarios y de la renta, y el debilitamiento de los derechos laborales. A comienzos del siglo actual, más de dos tercios de los trabajadores y trabajadoras de América Latina vivían una relación de trabajo precarizada, debido a la tercerización indiscriminada, la institucionalización de contratos de trabajo atípicos (contrato temporario, contrato por tarea, contrato por horas, y demás) y al aumento del fraude laboral.

A fines de la década del 90, la negociación colectiva había perdido fuerza, sin un piso mínimo para los convenios colectivos. La clase patronal presionaba, buscando la reducción de derechos y beneficios anteriormente conquistados y la descentralización del proceso de negociación colectiva —negociaciones por empresa y no por rama de actividad— reduciendo todavía más el poder de negociación de los sindicatos.

Además, la dependencia del ingreso de inversiones externas ha llevado a los gobiernos a ofrecer subsidios fiscales y a reducir los costos de las obligaciones laborales como forma de atraer o mantener empresas en su territorio. En ese proceso los sindicatos sufrieron un verdadero chantaje por parte de las empresas: la elección entre empleos o derechos laborales.

A partir de 2002, con la elección del Presidente Lula en Brasil, el panorama político del continente sudamericano comenzó a alterarse. Hasta entonces solamente Venezuela mostraba cambios en su política social e internacional, a partir de la acción del Presidente Chávez. También se podían observar modificaciones en la política argentina, implementadas por Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sucedió a De la Rúa en 2001 y condujo el proceso de estabilización económica y política con un tono mucho más progresista que sus antecesores.

Cuando Lula asumió la presidencia, éstos eran sus aliados, principalmente en cuanto al fortalecimiento y consolidación de una integración económica y comercial con otro perfil. Nacía la idea de un nuevo Mercosur ampliado y más interesado en lo social.

Luego vinieron Kirchner en Argentina en 2003, Tabaré Vásquez en Uruguay en 2004, Evo Morales en Bolivia en 2005, Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador en 2007 y, finalmente, Lugo en Paraguay en 2008.

En función de ese nuevo escenario se pudo detener la marcha del ALCA, se construyó el G20 —que cambió el papel de los países en desarrollo y más pobres en la historia de la OMC— y se avanzó en la construcción de un proceso de integración pautado por otra lógica, la de la cooperación e integración productiva, social y política.

¿Corremos ahora el riesgo de retroceder y perder parte de esos avances a causa de lo que se está considerando como la mayor crisis económica, financiera y comercial desde los años treinta? ¿Qué hacer? ¿Cómo puede actuar el sindicalismo en ese escenario?

El objetivo de este artículo es contribuir a ese debate y enfrentar esos desafíos.

Los problemas y efectos de la crisis generada por los Estados Unidos

La crisis generada y exportada por la mayor economía global, cuya última administración llevó al extremo el uso de una política liberal-predatoria, del autoritarismo y del militarismo, ya está produciendo una importante pérdida de empleos y caída de salarios, tanto en los países centrales como en los países en desarrollo, un cuadro que en los próximos dos o tres años (nadie sabe decir cuánto tiempo) significará muchos desafíos y dificultades para el sindicalismo de las Américas, tanto desde el punto de vista nacional y regional como mundial.

La globalización comercial, productiva y financiera aporta ganancias y ventajas a las empresas transnacionales y a los países más industrializados. Pero también permite que una infección aguda, como la que explotó en Washington, se expanda con rapidez. Inmediatamente tras la evidencia de la gravedad de la situación, la Unión Europea y Japón se vieron tremendamente afectados y la ola de quiebras y despidos comenzó a esparcirse.

Ahora la crisis se autoalimenta de más desempleo y de una ola "neo-proteccionista". Se extiende rápidamente y trata de convertirse en política oficial de los gobiernos, desde los Estados Unidos a Rusia, desde Brasil a China e India. Su efecto será el de deprimir todavía más el comercio global. Por detrás del proteccionismo hay una inmensa preocupación por el desempleo y por insatisfacciones políticas y sociales.

En los Estados Unidos se viene registrando, en promedio, una pérdida de más de medio millón de puestos de trabajo por mes. Con esa cantidad de vacantes cerradas, la tasa de desempleo de Estados Unidos subió de 7,2% en diciembre de 2008 a 7,6% en enero de 2009, la más alta desde 1992. Según un informe del Departamento de Trabajo, en los últimos 12 meses el número de personas desempleadas aumentó 4,1 millones. Se estima que actualmente hay 11,6 millones de desempleados en el país.

En la Unión Europea el panorama también es pesimista, registrándose casi 18 millones de desempleados. De acuerdo con las estadísticas de Eurostat, la tasa de desempleo aumentó un 8% en el mes de diciembre, siendo España el país con el nivel más elevado, cerca del 14,4% (las proyecciones son de 20% de desempleados para fines de 2009).

Los países emergentes no sufrieron el primer impacto, lo que permitió pensar que posiblemente, países como India, China, Brasil y Rusia se verían poco afectados y podrían ser la vía de recuperación del desastre anunciado con tanto tiempo. Pero la ilusión no duró mucho y los BRIC ya sufren los efectos paralizantes del colapso en la actividad económica en las principales economías industriales del mundo.

Los llamados "emergentes" (fuera de China que es uno de los grandes impor-

tadores de productos primarios) exportan productos primarios, pero también manufacturas de media y alta tecnología integrando cadenas de producción y comercio mundiales, hegemonizadas por las transnacionales. Estos casos sufren los efectos de la recesión en las economías más ricas, a medida que las demandas de exportación y las inversiones extranjeras disminuyen. Este proceso ya está provocando el aumento de los despidos y la reducción de la renta y los beneficios.

A fines de enero de 2009 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un informe sobre la gravedad de la situación, con una estimación muy pesimista de que el mundo puede terminar el año 2009 con 241 millones de desempleados.

Según la OIT, en los últimos años los países asiáticos fueron responsables del 45% de la creación de nuevas vacantes en el mundo. En 2009, de acuerdo con previsiones del FMI, el crecimiento de China e India, los dos gigantes de la región, debe caer la mitad del acumulado en 2007. En China, la producción de manufacturas viene cayendo "rápidamente" y en enero se estimaba que aproximadamente 20 millones de obreros migrantes del campo estaban desempleados. Brasil, que fue el único ¡unto con China en tener un crecimiento de más del 4% del PIB en 2008, ya sintió el impacto de la crisis en el último cuatrimestre del año pasado, cuando su crecimiento registró una caída del 3,6%, según mediciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El informe de la OIT sobre la situación de América Latina, presentado en Lima el 30/01/09, anunció que en el año 2008 el número de desempleados había alcanzado el total de 15,7 millones de personas, y que en 2009 podría haber una pérdida de 1,5 a 2,4 millones de empleos en el continente. La evaluación es considerada estimativa, basada en las proyecciones de la CEPAL y del FMI, que están previendo que la región tendrá un crecimiento del 1,9% del PIB. O sea que podríamos terminar el año con más de 18 millones de desocupados.

La crisis tiene un poderoso efecto sobre las relaciones laborales, habiendo ya registro en varios países de las presiones patronales procurando cambios en los contratos, que de tiempo indeterminado pasan a ser contratos temporarios. Además, los salarios y rendimientos ya comienzan a estar afectados (ya sea por el corte de bonificaciones por productividad, por retrocesos en las negociaciones por aumentos salariales o incluso por la reducción de horarios y salarios).

Los impactos en México y en América Central y el Caribe reflejan directamente la recesión estadounidense, dados sus vínculos comerciales y financieros con los Estados Unidos (históricamente ya era así, y tras la firma del NAFTA y del CAFTA aumentó esa dependencia). En América del Sur, a partir de febrero de 2009 comenzó a crecer el número de despidos en la región. Los sectores más afectados son los que dependen de las cadenas productivas globales, como por ejemplo la industria automotriz (ensambladoras y autopartistas), con repercusiones principalmente en Brasil, Argentina y Uruguay, las exportaciones de productos primarios y minerales, que impactan en Chile, Brasil y la mayor parte de la región andina, y los manufacturados para la exportación (de media y alta tecnología, como calzado y aeronaves), que afectan principalmente a Brasil.

En los primeros dos meses del año hubo dos hechos que tuvieron un gran impacto en Brasil. En primer lugar, los despidos en la Cía. Vale y, en particular, la presión de la empresa sobre los sindicatos para que aceptasen acuerdos colectivos que reducen los derechos laborales ya acordados, a cambio de mantener empleos. Luego, el impactante anuncio de Embraer, el día 20 de febrero, del despido de 4.200 trabajadores debido a la suspensión de los pedidos externos de aviones. Estos hechos provocaron una gran indignación sindical, que llevaron al Presidente Lula a intervenir en el tema puesto que ambas empresas, principalmente Embraer, reciben financiamientos subsidiados de bancos públicos.

Este tipo de hechos se repiten en varios países, principalmente en América del Norte y en Europa. Ahora comienzan a ser más frecuentes en el continente sudamericano. Por eso nos parece pertinente detallarlos.

Frente a esto se plantean algunas preguntas.

¿Cómo enfrentar esa situación y cómo impedir que los avances mencionados y la producción recuperada no sean destruidos? ¿Cómo preservar el papel activo de los Estados nacionales en la conducción de sus economías, manteniendo principalmente el proyecto estratégico de construir un bloque sudamericano con capacidad para establecer relaciones más equilibradas con los países centrales y para no aceptar que transfieran los efectos de la crisis a nuestra región? Y sobre todo, ¿cómo responder a la presión de las empresas y de los sectores gubernamentales para reducir los derechos, flexibilizar las relaciones laborales, a cambio de un mantenimiento incierto de los empleos?

Las dimensiones de esta crisis son tales que hasta el momento no fue posible la formulación de diagnósticos más precisos sobre su duración, extensión, etcétera. Por lo tanto, menos todavía se puede pretender dar respuestas a las preguntas formuladas. Es por eso que no haremos más que una sistematización de ideas, propuestas y sugerencias, que ya están siendo debatidas o practicadas, como forma de contribuir al debate de la CSA con sus afiliadas, para la construcción de una estrategia para enfrentar los problemas actuales.

Los derechos laborales no son moneda de cambio

Un panorama de los diferentes países muestra que las centrales sindicales han buscado reaccionar, no aceptando que la discusión se restrinja a esta ecuación: para salvar los empleos es preciso reducir los derechos laborales y bajar los salarios. En Europa crece el nivel de aprehensión y de radicalización (véase el ejemplo del cerco hecho por el sindicato y los empleados a Sony en Francia, que liberaron a los directores de la empresa solamente luego de que se comprometieran a apoyar a los despedidos). Pero también en los mayores países de América del Sur crecen las reacciones de las organizaciones sindicales, que no quieren perder lo poco que habían conseguido en los planos gremiales, salariales y laborales en los últimos cinco años. Por limitaciones de espacio y tiempo nos ocuparemos únicamente del caso de Brasil. No sólo por sus dimensiones e importancia, sino porque si hubiera un encogimiento de su economía y mercado de consumo, el impacto sobre sus vecinos sería todavía mayor.

En Brasil, desde diciembre las principales centrales sindicales han procurado resistir y ha habido innumerables movilizaciones, entre las que se incluyen un frente de las siete centrales sindicales brasileñas, como la Caravana a Brasilia de diciembre último, y otras promovidas por las centrales sindicales individualmente y por diferentes sindicatos.

El día 19 de enero los principales dirigentes de seis centrales sindicales brasileñas tuvieron un encuentro con el Presidente de la República y con el Ministro de Trabajo, para analizar la situación y debatir la adopción de medidas para evitar despidos y ayudar a quienes ya perdieron sus empleos.

Las centrales sindicales presentaron las siguientes reivindicaciones:

- Aumento inmediato del salario mínimo de R$ 415,00 a R$ 476,00 (que entró en vigencia a partir del 1° de febrero);
- Ampliación del seguro de desempleo a 10 meses (en febrero el Ministerio de Trabajo aprobó ampliar a 7 cuotas en el caso de los sectores más afectados por el desempleo)
- Mantenimiento del empleo en las empresas que obtienen recursos públicos o reducción de impuestos
- Reducción de la jornada de trabajo sin reducción de los salarios
- Autorizar el retiro de por lo menos el 20% de la cuenta del FGTS (Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio)
- Negociar con las empresas en dificultades para impedir al máximo los despidos

[1] CUT, Força Sindical, UGT, CGTB, CTB, Nova Central

[2] En ese mes, el Banco Central redujo la tasa SELIC – intereses en 0,5%, pero en marzo, en función de la caída abrupta del PBI en el último trimestre de 2008, el BC aumentó el corte en otro 1,5%.

- Reducción inmediata de dos puntos porcentuales de la tasa Selic
- Caída del superávit primario
- Suspensión temporaria del pago de ICMS (impuesto sobre circulación de mercaderías y prestación de servicios) por los gobiernos estaduales de sectores con dificultades para mantener los empleos. A partir del beneficio, los empresarios se comprometen a no despedir.

El Presidente de la CUT, Artur Henrique da Silva, presentó una propuesta concreta de reducción de la jornada de trabajo sin reducción de los salarios, lo que propiciaría la creación de un banco negativo de horas extras, es decir que no perjudicaría a las empresas. Acusó a la mayoría de los empresarios de estar haciendo un chantaje al gobierno y de querer aprovechar el momento de crisis para conseguir más flexibilizaciones (actualmente, en algunas empresas se está consiguiendo negociar esa propuesta).

El gobierno creó un Comité de Gestión de la Crisis e invitó a los empresarios a participar. Para el Presidente de la CUT, el Ministro de Economía debería dialogar también con los trabajadores. La CUT propuso a los gobiernos estaduales la reducción del ICMS (impuesto de circulación de mercaderías) a cambio de la garantía de las empresas de no despedir y propuso al gobierno federal que exija a las empresas beneficiadas con la reducción o exención del IPI (impuesto sobre productos industrializados) la suspensión de los despidos, como por ejemplo en el sector de las automotrices. La CUT apoya que el gobierno ofrezca incentivos fiscales y principalmente crédito con intereses bajos, pero defiende que se dé prioridad a la pequeña y mediana empresa y que como contrapartida, las empresas se comprometan a mantener los empleos y a respetar los derechos laborales y las prestaciones sociales.

El Presidente de Força Sindical, el diputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), ha concentrado más sus demandas en la cuestión de la reducción de la tasa de interés, el aumento de las cuotas del seguro de desempleo y el aumento del salario mínimo. Y la UGT, a través de su Presidente, Ricardo Patah, además de respaldar las demandas de las otras centrales, reivindicó que el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) dé preferencia a las micro y pequeñas empresas para la concesión de créditos. Entre los pedidos de la UGT también figuraba la autorización para que los trabajadores puedan sacar por lo menos el 20% del FGTS (Fondo de garantía por tiempo de servicio) y una Medida Provisoria (MP) para que las contrataciones de empresas por parte del gobierno federal se hagan por medio de subastas electrónicas, no por licitación.

La CUT ya había lanzado un importante documento, aprobado en su órgano de dirección ejecutiva a comienzos de diciembre (ver el texto en esta publicación), en el que optaba por promover negociaciones y acuerdos con sectores específicos —como máquinas, electro-electrónica, etcétera— y rechazaba frontalmente la propuesta de un modelo de acuerdo de reducción de derechos a cambio de garantía de empleo, como había propuesto Força Sindical en el mes de enero. Posteriormente, FS abandonó dicha propuesta y pasó a negociar caso por caso. La UGT también se declaró contraria a establecer un modelo previo de negociación.

Con grados diferenciados de movilización y con mayor o menor grado de flexibilidad en las negociaciones, lo que las principales centrales sindicales brasileñas están afirmando es que la solución de los problemas financieros y productivos generados por la crisis global no está en la supresión de puestos de trabajo ni en la reducción de salarios y derechos; por el contrario, esto llevaría a una retracción del mercado interno y, por lo tanto, a una prolongación de la crisis.

En los países vecinos como Argentina, Perú, Colombia, la acción sindical se ha dado de modo más descentralizado. Pero en general, la orientación del sindicalismo ha sido la misma en su defensa de los empleos y derechos.

[3] La propuesta de la jornada de lucha continental fue presentada por la CSA en la Cumbre Sindical Latinoamericana y Caribeña, realizada en Salvador el 15 de diciembre de 2008, todavía con una fecha tentativa. La propuesta también contó con el apoyo de las centrales vinculadas a FSM, que concentraron sus movilizaciones para el 1o de abril.

En este sentido la CSA está logrando construir una voz de mando y su convocatoria para la jornada de lucha continental del 26 de marzo (por otra parte, primer aniversario de la creación de la CSA) .

Tanto la CSA como la CSI y las Federaciones Sindicales Internacionales (FITIM, ICEM, ISP, entre otras) han defendido la necesidad de las organizaciones sindicales de discutir con los gobiernos de sus países la adopción de medidas que protejan el empleo y el ingreso familiar. No hay otra fórmula para garantizar eso que no sea la preservación de un papel activo para el Estado y la ampliación de su intervención en la economía. También es imprescindible mantener los niveles presupuestarios de antes en lo que respecta a las políticas públicas fundamentales (salud, educación, vivienda, etcétera).

La crisis provocó la reducción del comercio externo y del ingreso de inversiones. Es necesario, por lo tanto, desarrollar una política volcada al mercado interno (nacional y regional) que garantice el acceso al crédito con la oferta de inversiones y reducción de las tasas de interés.

Además hay que garantizar los precios y el crédito al sector agropecuario, intensificar las inversiones para infraestructura y particularmente para saneamiento y vivienda. Son actividades capaces de generar muchos empleos que pueden cubrir enormes carencias en varios de nuestros países.

Pero tenemos que reivindicar y exigir que las medidas adoptadas por nuestros gobiernos para reactivar las empresas y el flujo del mercado (reducción de impuestos y tarifas, facilitación del crédito, prolongación de los plazos para el pago de deudas, compra de papeles, etcétera) estén acompañadas por el compromiso efectivo de las empresas de no despedir y no reducir salarios o derechos.

El Secretario General de la Federación Internacional de los Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Marcello Malentacchi, escribió en su columna en la página Web, el 28 de enero de 2009: "Tenemos que reconfigurar el programa de organización económica y social para dar prioridad a una mayor seguridad a los trabajadores y poner en marcha la humanidad y una ética de solidaridad". Con esto, el sindicalista metalúrgico destaca que el movimiento sindical internacional debe asumir su papel ante la crisis mundial y dice que "el derecho a la sindicalización y a la negociación deben ser las piedras angulares de una nueva estructura económica y social, que nos ofrezca los medios para tener la seguridad de que nunca más volveremos a ser rehenes de negociantes mundiales hábiles y sospechosos".

La CSI, en conjunto con sus afiliadas y las federaciones agrupadas en Global Unions, formuló una serie de propuestas dirigidas a los gobiernos nacionales con énfasis en la adopción de políticas que garanticen el empleo sostenible. Su posición se basa en la defensa del respeto de los derechos laborales, así como en la adopción de programas dirigidos al mercado de trabajo como forma de reactivar el consumo y el crecimiento.

En la declaración que se presentó en Davos, a fines de enero de 2009, la CSI propuso la adopción de una serie de medidas para detener la caída de la economía mundial, entre las que destacamos:

*Mayor coordinación entre las políticas que fijan las tasas de interés, promoviendo recortes todavía más grandes;

*Medidas de reactivación presupuestaria para mantener y crear puestos de trabajo;

*Inversiones en infraestructura para estimular la demanda y prepararse para la recuperación de la economía;

*Acciones para que los trabajadores/as mantengan sus empleos y puedan pasar por un proceso de reconversión laboral durante la crisis;

*Fortalecimiento de los programas de apoyo a los desempleados y de los regímenes de seguridad social;

* Apoyo a los programas que procuren el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);

* Préstamos de emergencia del FMI a los países en desarrollo, sin condiciones restrictivas y de austeridad.

La CSI lideró la convocatoria del G20 Sindical, que se reunirá durante los días 30 y 31 de marzo, dos días antes de la reunión del G20 en Londres, para aprobar un conjunto de propuestas y medidas que buscan no solamente salidas a la crisis, sino también cambios profundos en el sistema económico y financiero mundial.

Los documentos que debate el movimiento sindical internacional , que serán presentados al G20, establecen una estrategia de 5 puntos principales para la reforma de las instituciones multilaterales internacionales, tratando no sólo de superar la crisis, sino también de construir una economía mundial. Lo que el sindicalismo mundial está proponiendo al G20 es: la aplicación de un plan de acción internacional coordinado para la recuperación y el crecimiento sostenible; la realización de inversiones en los sectores conocidos como de "economía verde" necesarios para que la economía mundial pueda crecer con la reducción de las emisiones de carbono; la creación de las condiciones internacionales para la negociación de un Nuevo Trato Verde, y la promoción de una profunda reforma de los mecanismos de control de las finanzas mundiales.

El principal tema en la agenda de los Jefes de Gobierno del G20 será el debate sobre el funcionamiento y la posible reforma del sistema regulatorio de las finanzas mundiales. En la visión de la CSI, esto debería significar la adopción de un conjunto de medidas que aseguren una nueva arquitectura de regulación del sistema financiero a escala nacional y global, con la implementación de un sistema bancario que contribuya a un financiamiento estable y rentable de la economía real.

Otra medida propuesta por el sindicalismo mundial es la democratización de los foros multilaterales de decisión y el alerta para que el G20 no esté únicamente abierto a los actores financieros e institucionales, sino que se prevea la participación y consulta de la sociedad civil, y, en particular, de los sindicatos que quieran sentarse a esa mesa.

La CSI y el conjunto de organizaciones sindicales que firmarán el documento mencionado fueron bien claras en sus críticas y demandas sobre el funcionamiento de las finanzas globales, pero también presentaron un conjunto de propuestas muy concretas, entre las que podríamos destacar las siguientes: regular y controlar los fondos especulativos y acabar con los "paraísos fiscales"; controlar los sistemas de remuneración de ejecutivos e intermediarios financieros; proteger a las familias trabajadoras de sistemas de préstamos predatorios; mejorar el mandato y los recursos de las autoridades supervisoras, y establecer un nuevo espectro de servicios financieros que actúa en beneficio de la economía real.

Es fundamental que el sindicalismo regional y mundial presione para que las reformas de los organismos multilaterales, principalmente los de financiamiento y fomento, eliminen las actuales condicionalidades, subordinando los préstamos a la aplicación de políticas fiscalistas y de ajuste conservador (que mucho contribuyeron a que las economías fueran cada vez más vulnerables al capital especulativo). Lo que el sindicalismo debe exigir es que estos organismos cambien la lógica y la orientación de sus condicionalidades. Se debe pedir a los Estados que inviertan en proyectos de desarrollo sostenible y aseguren el respeto de los derechos humanos y laborales fundamentales. Se debe vincular el desarrollo de este debate con la adopción de medidas que permitan el Cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Son propuestas importantes, pero el mayor significado está en la realización de este gran encuentro sindical, que reivindica la participación de representantes de la clase trabajadora en el proceso. Para que esto se haga efectivo es necesario también establecer un plan de movilizaciones y acciones concretas, ya que sin presión del sindicalismo no se logrará superar la retórica.

[4] El documento base de la CSI y de Global Unions que se presentará para su aprobación en el Encuentro del G 20 Sindical de fines de marzo fue debatido por un grupo de trabajo que se reunió en París el 11 y 12 de marzo, bajo la coordinación del TUAC.

El papel y las prioridades de América Latina

Tal vez la reunión del G20 Sindical no exprese uno de los temas centrales para América Latina, que es la relación entre las economías centrales y nuestros países, la llamada "relación norte-sur", o incluso entre países centrales y periféricos. Nadie puede olvidar la importancia de una acción coordinada entre los países emergentes y en desarrollo en el seno de la OMC, encabezada por Brasil, India y Sudáfrica, creando el G20 comercial. Incluso teniendo que convivir con los inconvenientes de impasses y contradicciones que hacen inviable la regulación del comercio global, el G20 fue fundamental para impedir que nuestros gobiernos se sometiesen a un acuerdo de profundización de la liberalización comercial de la OMC, tan nefasto como para cerrar la Ronda Uruguay (GATT) en 1994.

Por eso es fundamental, en este proceso de cambios desencadenado por la emergencia provocada por la crisis, que presionemos por una reforma en la OMC, para que esa organización se coloque al servicio de un comercio justo, que establezca plazos y ritmos de apertura diferenciados, que favorezca el acceso y la coparticipación del desarrollo tecnológico y que impida el proteccionismo y las barreras puestas por los países más ricos e industrializados ante los países en desarrollo y más pobres. Es preciso democratizar la estructura de funcionamiento y decisión de la OMC y reivindicar un espacio concreto de intervención para el sindicalismo y los movimientos sociales.

Pero estas cuestiones están presentes no solo en el plano multilateral; también están en las relaciones bilaterales, principalmente en los frecuentes diálogos entre nuestro continente y América del Norte y la Unión Europea. En todos esos Foros —institucionales, sindicales y tripartitos— hemos valorizado enormemente la dimensión social de esas relaciones, la importancia del establecimiento de un diálogo social en cada país, y demás. Pero para que esas metas dejen de ser una utopía es preciso que todo el sindicalismo —del norte y del sur, americano, europeo, asiático y africano— defienda un comercio con justicia, sin barreras proteccionistas, compartiendo la tecnología y la información y terminando con la xenofobia y la discriminación a los emigrantes.

Debemos, por consiguiente, profundizar este debate en la región y llevar a cabo un intenso trabajo para hacer avanzar y consolidar el proceso de integración de nuestras economías, ya que para hacerse oír e incidir de hecho en las negociaciones globales, América Latina tiene que presentarse como un bloque cohesionado, establecido sobre un programa de complementación económica y productiva, procurando la conquista de un desarrollo sostenible en nuestros países.

En América del Sur, a pesar de las diferencias en cuanto a la concepción de las relaciones comerciales extra-regionales —solamente Chile, Perú y Colombia defienden una política comercial externa más abierta y flexible— se ha avanzado en la construcción de la UNASUR, demostrando que, a pesar de las diferencias, prácticamente todos los países optaron por no aislarse en la acción dentro del continente. Pero incluso así no se puede desconocer que el alineamiento y la subordinación de Chile, Perú y Colombia al gobierno de Bush y a la doctrina de los TLC han significado una gran traba al avance de ese proceso. El acuerdo de Chile está en vigencia, pero los de Colombia y Perú están en suspenso. No se puede todavía prever cómo Obama conducirá sus relaciones con América del Sur. La presión por reforzar el proteccionismo será grande, así como también para el establecimiento de barreras contra los emigrantes. Pero a juzgar por sus primeras declaraciones y por la posición de la mayoría demócrata del Congreso, difícilmente saldrán del papel.

Ahora el cuadro se repite, de modo todavía más restrictivo, en las negociaciones bilaterales entre Perú y Colombia y la Unión Europea (ya que no se consiguió llegar a una propuesta única en la CAN). Según la

prensa de esos dos países, la propuesta europea, en lo que respecta a la propiedad intelectual, es más agresiva que el modelo TLC de los Estados Unidos. El nivel de protección que la UE pretende para los medicamentos innovadores representa una amenaza para el acceso de los más pobres a los medicamentos genéricos. Los negociadores europeos piden la ampliación de la vigencia de las patentes farmacéuticas por un mínimo de cinco años adicionales a los 20 años ya establecidos actualmente, un nivel de protección que no existe ni en los Estados Unidos, ni en la normativa de la OMC, ni en el interior de la Unión Europea. Si se aceptara la demanda europea, las reglas andinas y nacionales sobre las patentes de fármacos serían anuladas. Además, la pretensión europea es de ampliar de cinco a once años la protección de los datos de prueba, lo que significa que durante ese período el organismo regulador nacional no podrá aprobar la circulación y comercialización de un nuevo medicamento genérico basado en la información provista por el laboratorio que lo desarrolló. Y, según un representante de la ONG colombiana Misión Salud, la UE exige que la violación de cualquier aspecto de la propiedad intelectual sea penalizada con prisión de los responsables, sanción que no existe en ningún país, mucho menos en la UE.

Con relación a las migraciones, la política europea es cada vez más preocupante. La Unión Europea también aumentó las restricciones al comercio y, lo que es peor, debate nuevamente la adopción de duras medidas contra los/las inmigrantes. El 5 de febrero el Senado italiano aprobó artículos de la ley de seguridad en los que se prevé que los médicos puedan denunciar a inmigrantes ilegales, que se establezca un registro de ociosos y que se fije entre 80 y 200 euros el impuesto para obtener el permiso de residencia.

Para América Latina en particular, esa situación es bastante peligrosa y exigirá mucho de su sindicalismo. Por un lado, las economías del continente sufrirán con los impactos de las restricciones sobre el comercio y la inversión, y por el otro, tendrán que enfrentar una ola proteccionista y anti-inmigración, que priorizará únicamente sus condiciones. Y es justamente en Europa y en los Estados Unidos donde se encuentra la mayor parte de los inmigrantes latinoamericanos.

Además, los EE. UU. y la UE son los mayores compradores de las economías asiáticas, que están siendo obligadas a restringir sus ventas externas (la mayor fuente de su crecimiento). De este modo también se ven obligadas a comprar menos, lo que significa más pérdidas para América Latina, que dirige a Asia el 11% del total de sus exportaciones.

En los países de nuestro continente más afectados por la crisis, los sindicatos tratan de defender los puestos de trabajo y de impedir que sean moneda de cambio para reducir los derechos laborales. Pero cada uno está luchando por su cuenta. Es preciso consolidar una acción coordinada a nivel continental para poder así avanzar más en la región y a la vez contribuir de mejor manera en los foros sindicales globales.

Basándose en esos principios, las centrales sindicales de los países latinoamericanos, principalmente de América del Sur, deben reforzar y aumentar su participación en la CSA, ya sea como entidad de carácter nacional o como miembro de las coordinadoras subregionales.

Por su parte, la conducción de la CSA debe involucrarse al máximo posible en los procesos de lucha nacionales que las centrales están entablando en defensa de los empleos, los salarios y los derechos y en el debate sobre las políticas nacionales para detener y revertir los efectos de la crisis. Podemos convivir con el crecimiento de los PBI, pero no podemos aceptar la adopción de políticas fiscalistas y liberales que vacíen nuevamente el papel del Estado y lleven a la caída del desarrollo. La CSA debe acompañar de cerca este debate y estas luchas.

La CSA defiende la consolidación de una integración del continente, garantizando

que tenga como prioridad la complementación productiva, la generación de empleos de calidad, la distribución de los ingresos, el fortalecimiento de la democracia y el pleno respeto de los derechos laborales. Para eso es fundamental que el Mercosur se consolide y avance, que la CAN se recomponga o que los países andinos se asocien al bloque más articulado, para que de tal modo la UNASUR pueda transformarse en realidad.

La acción descentralizada y coordinada es fundamental. Es preciso que esas coordinaciones sindicales subregionales contribuyan a materializar la política de la CSA en sus regiones, pero que ésta a su vez se involucre de modo mucho más efectivo en las agendas subregionales, ya sean puramente sindicales o de tratamiento de temas como los mencionados: la consolidación de un proceso de integración solidario, democrático y capaz de sentar las bases para una acción externa fuerte y soberana de nuestro continente en el escenario económico y político mundial.

UNA NUEVA POLÍTICA INTERNACIONAL, UN NUEVO SINDICALISMO

Alvaro Padrón, investigador y profesor especializado en MERCOSUR*
Marzo 2009

Introducción

La crisis internacional ha puesto de manifiesto la incapacidad del modelo neoliberal de sustentarse, no ya desde el punto de vista social y político, perspectivas desde donde ya era cuestionado en su propio inicio, sino también ahora en su faceta económica y financiera.

Por lo pronto, la desregulación de los mercados financieros de las últimas décadas ha llevado al descontrol de mercados de capitales crecientemente integrados, y su derrumbe produce efectos globales sobre la economía real y el empleo que terminan desestabilizando la actividad económica y al cuerpo social. Los Estados, con sus finanzas debilitadas, están actuando como último recurso a la crisis sistémica, a costa de socializar pérdidas para detener la caída de los valores de los activos privados.

Será inevitable entonces, destinar energía, recursos e innumerables esfuerzos para atender las consecuencias que esta crisis provoque, priorizando a los sectores más vulnerables, y, desde la perspectiva del movimiento sindical en particular, focalizando los impactos en el empleo, tanto en su cantidad como en su calidad.

Pero siendo esto inevitable, resultaría un error histórico no asumir esta coyuntura como un punto de inflexión para profundizar las tendencias transformadoras que se han instalado en América Latina y que pueden encontrar en la propia crisis, la oportunidad de dar un salto en calidad sobre su rumbo aún disperso y de corto aliento. Retomar el concepto de desarrollo y trazar propuestas y alianzas que den perspectivas de transformación sustentable y de largo plazo a los dilemas instalados desde hace décadas para el desarrollo de nuestra región.

Para ello, la existencia de un sujeto sindical continental, recientemente creado como lo es la Confederación Sindical de las Américas, resulta más que favorable. Las nuevas estructuras sindicales a nivel mundial las CSI, y en nuestro caso la referida CSA parecen estar sometidas a su primera prueba trascendente que las interpela más allá de su auto construcción y les exige un posicionamiento nuevo, desafiante y transformador. La CSA está doblemente exigida, por la complejidad de su composición, la heterogeneidad de las situaciones nacionales que involucra, donde convive la principal potencia mundial y epi-

* Miembro de la conducción del CURI, Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales, la Fundacón Liber Seregni, e Instituto del Tercer Mundo, Director de Proyectos de FES Uruguay, Ex secretario técnico de la CCSCS y ex miembro del secretariado ejecutivo del PITCNT

centro de la crisis, con regiones conducidas por estrategias progresistas, donde las mejoras económicas y sociales se han instalado con innegable resultado.

La CSA no solo cuenta para este desafío con una nueva estructura, mejor y más amplia composición y el entusiasmo de todo comienzo, sino que tiene como principal capital un programa adecuado y de carácter transformador, así como una capacidad de propuestas de alta calidad técnica y política, tal como se refleja en la Plataforma Laboral de las Américas.

Sumarle a esas herramientas la acción sindical coordinada, desde lo nacional a lo continental, desde lo subregional a lo sectorial, es el principal desafío

Por ello la Integración Regional se transforma en la principal bandera del Sindicalismo Continental.

Permite unidad de objetivos y acción articulada.

Para ello es necesario doblar los esfuerzos por más y mejor Integración en las Américas, lo cual exige un enfoque nuevo, diferente de la "Política Internacional", que también debe permear la percepción y costumbre que el MS ha tenido tradicionalmente sobre este tema.

La actual coyuntura debería resultar propicia para afianzar la estrategia de inserción internacional, que tiene como pilar a los procesos de Integración Regional. Esta es una de las opciones estratégicas de los gobiernos de la región que permitirá sintetizar el objetivo de una mejor inserción internacional de sus países, a la vez que genera condiciones para desarrollar una masa crítica necesaria que permita participar con mayor fuerza en el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional. La participación de Argentina, Brasil y Méjico en las deliberaciones del G20, representa una oportunidad histórica para que la región haga escuchar su voz.

La crisis actual debe motorizar entonces, esfuerzos integracionistas, previniendo eventuales salidas individuales que no constituyen opciones viables en un mundo globalizado. Pero más allá de lo que dicten la coyuntura y la nueva estructura eventualmente resultante del desarrollo de la crisis global, resulta imperativo desarrollar una visión compartida de largo plazo, plasmada en instituciones que otorguen a la región una mayor fortaleza y atractivo fundada en la previsibilidad la cohesión social y la convivencia pacífica.

Integración Regional, el caso del MERCOSUR

A pesar del adverso contexto financiero internacional, el proceso de integración del Mercado Común del Sur continuó avanzando. Ha sido principalmente en el plano de la agenda interna del bloque donde se alcanzaron diversos acuerdos que profundizan los mecanismos que relacionan a las economías del MERCOSUR. En el período junio de 2007 - junio de 2008, crecieron los volúmenes de comercio en un contexto expansivo de las economías del bloque. En el frente externo, la dinámica negociadora ha registrado resultados menos tangibles. El recrudecimiento de la crisis financiera internacional en el último trimestre de 2008 crea un contexto adverso para las economías del bloque durante el año próximo. Ese escenario contempla una desaceleración del crecimiento mundial y una contracción de los principales mercados de consumo, como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

El producto interno bruto de los cinco países miembros del bloque creció en promedio 7,3% en 2007 y alcanzaría 6,9% en 2008, según las últimas proyecciones disponibles. Aunque las importaciones exhibieron un gran dinamismo, el crecimiento de las cinco economías (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela) fue apoyado por una gran expansión de las exportaciones, favorecida por la fuerte demanda y el alto precio de las *commodities*. El crecimiento del producto se basó en un aumento de la inversión en sectores productivos y un consumo privado robusto, resultado del aumento de los ingresos y de la disponibilidad de crédito, principalmente en el caso de Brasil. El dinamismo de las economías se enmarcó en una situación macroeconómica caracterizada por balances fiscales

positivos, con excepción del caso venezolano, y superávits en las balanzas comerciales brasileña, argentina y venezolana.

La tasa de desempleo disminuyó en los cinco países, alcanzando una tasa promedio de 8,1% de la población económicamente activa. También en el plano social, hubo avances en cuanto a la disminución de los niveles de pobreza. La tasa de inflación fue el principal desafío para las autoridades monetarias, debido al fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía. De esta forma, la inflación promedio de los cinco países fue 10% en 2007, con expectativas de situarse por encima este nivel hacia fines de 2008.

Para 2009, el panorama de crecimiento está sujeto a grandes incertezas. De hecho, la profundidad y la extensión de la desaceleración de la economía global será la principal variable que determinará las posibilidades de crecimiento del MERCOSUR. Las economías del bloque se verán afectadas negativamente a través del comercio y del acceso al crédito internacional, fenómeno que ya comenzó a obstaculizar el financiamiento del intercambio. En cuanto a las exportaciones, se sentirá el doble efecto causado por la caída de la demanda y de los precios de las principales *commodities:* productos agrícolas, minerales y petróleo.

Resta saber si la desaceleración del crecimiento global puede ser compensada en los cinco países del bloque a través de políticas monetarias y fiscales anti cíclicas. Los gobiernos tratarán de mantener los niveles de empleo, ingresos, consumo e inversión. El menor protagonismo de las presiones inflacionarias, que caracterizaron el final de 2007 y la primera parte de 2008, será un factor relevante para lograr este propósito. Las proyecciones de las tasas de crecimiento del bloque de 4% anual en 2009 son consistentes con las premisas mencionadas anteriormente.

En este contexto, la Integración regional se presenta, como la herramienta adecuada para que el conjunto de países que componen el espacio integrado puedan desarrollar estrategias comunes que eviten depender de forma exclusiva de las decisiones y acciones que se adopten a nivel internacional, e incluso influir en ellas. Está claro que ya no es posible, incluso para los países mayores, pretender ganar en autonomía y aumentar su influencia internacional de forma aislada. Esta es la racionalidad básica del proceso de Integración Regional que desde 1991 ha iniciado el MERCOSUR, y que se reafirma más que nunca, al influjo de un contexto internacional tan complejo como incierto.

Es probable que la crisis internacional, de paso a un nuevo empuje integrador en América Latina, en particular en América del Sur; pero también es posible, que se instalen salidas individuales y esquemas de protección no negociados que provoquen conflictos entre países, y coloquen a la Integración en un congelador sin perspectivas de avances. Esta disyuntiva y su correcta resolución, dependerá de los liderazgos, lúcidos, creíbles, y con la autoridad suficiente para tomar decisiones difíciles e innovadoras, no siempre populares a escala nacional, para lo cual es más importante que nunca el impulso de una nueva forma de pensar y hacer política internacional o lo que llamaremos en este artículo: "Una política exterior de Nuevo Tipo".

Paradojas y Dobles Discursos

Es sorprendente ver, y difícil de aceptar, la práctica contradictoria que presentan muchos de los actores tradicionales que negocian y representan los espacios institucionales de los procesos de integración, en nuestro caso el MERCOSUR. Desde una defensa poco explicada y explicable del intergubernamentalismo, se enfrenta y evita avanzar en políticas comunes (sin pretender en nuestro caso definirlas bajo el concepto de Supranacionalidad) Resulta paradójico, que en todos los textos fundamentales, incluyendo el propio Tratado de Asunción (1991), se encuentren innumerables citas al Mercado Común (nombre propio del MERCOSUR "Mercado Común del Sur") se reitere una y otra vez la necesidad de conformar un mercado regional ampliado, constituir un arancel externo común, etc. y sea tan difícil avanzar en la lógica de reflexión y actuación conjunta. Si para los temas

"duros" en donde están en juego intereses nacionales y sectoriales muy sensibles el lenguaje de lo "común", "comunitario" es ampliamente aceptado, ¿por qué resulta tan difícil incorporarlo al conjunto del proceso de negociación y de relacionamiento?

Desde el enfoque de éste autor, se trata de un reflejo de los funcionarios gubernamentales, en particular de quienes están a cargo de la política exterior de cada país, que se han formado bajo la matriz tradicional que prioriza la defensa de la soberanía nacional. Resulta por ello esencial debatir y elaborar un nuevo concepto de soberanía, que lejos de afectar los intereses nacionales, pueda defenderlos mejor en el contexto de la interdependencia internacional y la globalización. No se trata de "perder" o "ceder" soberanía (por cierto, bastante afectada ya, no por la integración sino por la referida interdependencia, o en nuestro caso, dependencia del contexto internacional) Se trata de compartir los márgenes de decisión y acción con que contamos y potenciarlos. Es decir, compartir y complementar la soberanía que nos va quedando para transformarla en mayores capacidades de defensa de nuestros intereses comunes e impulso de las estrategias que en esa dirección construyamos.

Naturalmente este enfoque, requiere como condición necesaria la existencia de "intereses comunes" lo cual asumo como dado, por la propia existencia del MERCOSUR desde hace prácticamente 18 años. Lo que probablemente ocurre con frecuencia, es que los principales actores de la política exterior de nuestros países están más influidos por el manejo de la agenda en donde el centro son los temas y áreas en que nuestros países disputan entre sí, que aquellos donde se expresa el interés común. Sin negar las divergencias y los asuntos en los cuales surgen conflictos entre sectores y países (algo natural en cualquier región del mundo, incluyendo las más integradas) y la necesidad de profundizar y perfeccionar los mecanismos para la solución de estas controversias, resulta evidente la necesidad de enfatizar las cosas que nos unen y desarrollar una política común para el impulso de estos temas de manera tal que el proceso avance, se profundice y alcance resultados tangibles; reforzando la confianza entre las partes, y ganando credibilidad frente a nuestras sociedades y el concierto internacional en general.

Para ello, es necesario trascender la política exterior tradicional, restringida al Estado Nación, y transformarla en una Política Común, que como primera seña de identidad debería dejar de llamarse "exterior". Si ya asumimos con naturalidad que estamos construyendo un Mercado Común, dejemos de llamar a la política internacional de cada país hacia el MERCOSUR "Política Exterior". Es, en sentido estricto, "política interior" en relación al Mercado Común o al Espacio Integrado. Luego vendrá, y de hecho existe, aunque poco desarrollada, la necesidad, de una política exterior del bloque, ésta sí, bien llamada, política exterior.

Profundización y democratización del MERCOSUR

Por ciento que esta postura tiene como sustento la convicción de que solo seremos capaces de desarrollarnos como países en la medida que lo hagamos como región. Las restricciones y los condicionamientos que impiden nuestro desarrollo solo pueden ser superados y resueltos en conjunto, actuando en los espacios multilaterales y en las negociaciones internacionales de forma unida. Del mismo modo, y para ello, es necesario el impulso de estrategias comunes al interior del bloque, en lo económico (incluyendo lo productivo, lo comercial, lo macro económico) en lo político, (como auténtica conducción del proceso) en lo social y en lo cultural (como conexión con la ciudadanía y núcleo más sofisticado de una verdadera integración)

De modo general, podríamos denominar a esa dirección como la Profundización del MERCOSUR. Ésta orientación, que en absoluto resulta ni neutra ni natural, requiere de un cambio en la composición y enfoque del proceso de negociación que solo es viable impulsando otro concepto general que podemos expresar como la Democratización del MERCOSUR. En efecto, solo es posible pasar a otro estadio

de integración, si se amplían los actores y los espacios en donde estas cuestiones se debaten y se resuelven. Ambas orientaciones, la de profundización y la democratización del MERCOUSR colocan en el centro del debate la cuestión institucional del bloque regional. Es hora de avanzar en éste aspecto, asumido en el plano político desde hace algunos años, pero estancado en la maraña burocrática que hoy representa la estructura actual. La misma, fue diseñada en los inicios de la década del 90 y ha recibido diversos parches, ninguno de ellos sistemáticos y mucho menos consistentes con la nueva etapa que la región transita.

La arquitectura institucional de un proceso de integración no es nunca un marco neutro que, más allá de sus formatos y contenidos, permite hacer viable cualquier tipo de proyecto regional o crea incentivos para favorecer determinadas formas de integración. A partir de ese enfoque, es necesario entender la estructura institucional, y el proceso de decisión al interior del MERCOSUR como un elemento central de la discusión sobre el modelo de integración y su orientación. El análisis sobre las fortalezas y debilidades de la institucionalidad de un proceso de integración, de su impacto sobre la evolución cotidiana de un bloque regional constituye un factor particularmente relevante que lleva implícito aspectos centrales tales como:

1) Involucra, de manera ineludible, la definición acerca del modelo de integración al que se aspira. En ese sentido todo debate acerca de opciones integracionistas implica una confrontación de propuestas de cómo pensar la institucionalidad del bloque, pero también orienta nuevas opciones acerca de cómo definir el modelo general y estratégico del proyecto de integración. La opción por un modelo, se corresponde necesariamente con la elección de un determinado formato institucional.

2) el debate sobre instituciones en un proceso de integración define los rasgos del modelo de democracia presente en los niveles nacionales, es decir países miembros, y el nivel regional, es decir el propio bloque regional. Sobre éste último nivel se trata por ejemplo de elegir formatos que van desde modelos intergubernamentales a otros que presentan formas de supranacionalidad. Desde enfoques más concentradores del poder decisorio en las instituciones integradas de manera exclusiva por representantes de los Estados a otros que tienden a desconcentrar los sistemas decisorios a través de una diversidad de dimensiones posibles, entre otras, dando participación a las organizaciones de la sociedad civil, de los Gobiernos Locales, descentralizando la decisión e implementación de las políticas públicas de integración, etc.

3) estos debates y opciones implican asumir posiciones sobre las principales orientaciones de los modelos de desarrollo nacional y regional, y su mayor o menos articulación. A partir del formato que la integración adquiera, y de los actores que se involucren, las opciones de políticas de integración serán diferentes y consecuentemente a su vez más o menos legítimas, más o menos efectivas y eficaces.

4) por último, en el debate sobre la institucionalidad de un proceso de integración también está presente la interrogante acerca de cómo el bloque resuelva sus controversias internas, si dispone de los instrumentos necesarios para que existan de modo efectivo y permanente órganos e instancias capaces de procesar los conflictos y arribar a una resolución legítima, democrática y pacífica de los mismo. El diseño puede crear mayores o menores incentivos para la concertación o favorecer el predominio en la negociación de visiones centradas en la exclusiva búsqueda de intereses nacionales y / o sectoriales, debilitando y quitando legitimidad, en este último caso a la dimensión regional del proceso.

Hoy existe una oportunidad inmejorable para repensar la estructura institucional del MERCOSUR, oportunidad que se instala a partir de una demanda efectiva desde nuestros países consientes que no tienen salida en solitario. Resulta clara la necesidad de construir una nueva institucionalidad que supere el "déficit democrático" que ha tenido el proceso, enterrando un aparente interpresidencialismo generador de una suerte de súper ejecutivismo absolutamente inejecutivo, que arraigue

la legitimidad del MERCOSUR en nuestras sociedades, pero que al mismo tiempo le dé al bloque la posibilidad de responder con efectividad a otra agenda capaz de asumir mejor esta nueva coyuntura que nos exige otra forma de pensar, no solo en clave nacional, sino en clave regional e internacional. Todo lo cual, nos lleva nuevamente a la necesidad de contar en nuestros países con una política exterior adecuada a éste nuevo escenario, que sin duda, vino para quedarse.

Características de una Política Exterior de Nuevo Tipo

Sin pretender agotar el tema, y solo como una primera reflexión, enumeraré alguna de las señas de identidad necesarias para esta nueva política pública.

- Lo primero y fuertemente simbólico es, como hemos dicho, dejar de llamar a la política que nuestros países desarrollan hacia el espacio integrado "política exterior". El proceso de integración debe pasar a ocupar, un lugar relevante en cada cancillería y encuadrarse en una estrategia ligada a la política central de cada país. Me refiero a lo simbólico ya que es necesario que jerarcas, funcionarios, y la sociedad en su conjunto sientan a la región como su propio territorio y no como un espacio extranjero. Esto sugiere además, la necesidad de consolidar equipos permanentes en la gestión de esta política, evitando la rotación tradicional de los "destinos" que se aplica en la diplomacia y que nada tiene que ver con un proceso complejo y permanente como es construir un Mercado Común.
- Desarrollar un ejercicio interdisciplinario, que aún con la coordinación de las cancillerías como sujeto articulador, involucre a todos los Ministerios y áreas del Estado que deben actuar (en el diseño primero y luego en la implementación) de las políticas comunes.
- Si esta articulación interdisciplinaria a nivel de los poderes ejecutivos es imprescindible para una eficaz gestión del proceso, la presencia de los poderes legislativos es ineludible para dotar al mismo de la legitimidad democrática. En este sentido, la creación y consolidación del Parlamento del MERCOSUR es un avance importante (el más trascendente en los últimos 18 años del bloque) Lo propio ocurre con la necesidad de transformar el Tribunal Permanente de Revisión (Sistema de Solución de Controversias) en un verdadero Tribunal Permanente de Justicia. Ambos niveles, el Legislativo y el Judicial, en la medida en que avancen a nivel regional exigirán de las políticas nacionales un nuevo tiempo de articulación y formas de participación ahora a escala supra nacional.
- También será necesario enfocar la integración como política de Estado. Es normal referirse a este concepto cuando intentamos plantear la duración de una determinada política más allá del gobierno de turno. En el caso de la Integración Regional no cabe duda que se trata de una política de largo plazo por excelencia, que requiere un diseño que trascienda una etapa reducida de nuestra historia y adquiera otra categoría temporal. No se trata de plantear que todos opinen igual o deban coincidir con el modelo, la concepción, las prioridades etc., en el proceso de integración. Asumiendo que la Integración Regional es esencialmente un proyecto político, la diversidad de miradas, concepciones y estrategias es ineludible y yo agregaría, necesarias y positivas. Se trata de alcanzar los mayores consensos posibles, políticos y sociales, que doten al proceso de una certeza y estabilidad en el corto mediano y largo plazo.
- Por último, y quizás lo más importante, es la necesidad de dotar al proceso de integración de legitimidad social involucrando a la ciudadanía en su desarrollo. Como pocas experiencias internacionales, el MERCOSUR cuanta con la adhesión de las principales y más diversas organizaciones de la sociedad civil que actúan a nivel regional. Esto es un enrome activo de nuestro bloque, ampliamente desaprovechado. Multiplicar esta adhesión a nivel del ciudadano común debería ser, además de una responsabilidad de los gobiernos, la oportunidad de contar con un respaldo estratégico para consolidar y desarrollar la integración profunda. El Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, en su primer Presidencia Protempore del bloque

en 1995 llamó a "llenar de ciudadanía el MERCOSUR" creando el programa "Somos Mercosur" , el Presidente de Brasil Lula Da Silva hizo lo propio instalando las Cumbres Sociales como un espacio inédito en la agenda semestral; y hace apenas unos días, en la Cumbre de Bahía, el novel Presiente de Paraguay Fernando Lugo ponía su rostro bajo el lema "soy ciudadano del Sur, soy MERCOSUR" , convocando a ponerle rostro humano al proceso. Todos esfuerzos valiosos que deben trascender la retórica e instalarse en la conciencia colectiva. Una sociedad moderna y "políticamente rica" es aquella capaz de evitar el aislacionismo y asumir la globalización en un sentido positivo. Para ello, cada ciudadano, en particular, quienes actúan en sectores formadores de opinión y de políticas públicas, debería tener asumida la importancia de la política exterior, en este caso del "nuevo tipo". Permear la sociedad con este enfoque le daría a nuestros países y a la región un enorme potencial, y esto no se consigue repitiendo el carácter elitista y superfluo con que la mayoría de nuestras instituciones, organizaciones y ciudadanos en general identifican el ambiente de la diplomacia exterior. Superar ese prejuicio e involucrar al conjunto a esta tarea central para nuestro desarrollo, es vital para que no se reproduzca una práctica de encierro que solo resulta en pequeñas parcelas de poder sumiendo al resto de la sociedad en la mediocridad y el aldeanismo.

La Política Exterior de Nuevo Tipo debe ser practicada por el conjunto de la sociedad para ser efectiva y por ello requiere de amplios niveles de información y transparencia en su gestión.

Pocos actores sociales tienen la capacidad de impulsar y ser protagonistas luego, de una política de este tipo.

Desde hace años, en varios Países de la Región, la influencia del MS ha permitido que los llamados Gobiernos Progresistas aumenten el nivel de involucramiento de representantes sindicales en la política exterior de sus países.

Brasil en mayor medida, Argentina y Uruguay integrando dirigentes sindicales en las delegaciones Presidenciales, Panamá y Chile de forma similar, pero siempre sin cambiar la matriz de funcionamiento de la Política Exterior.

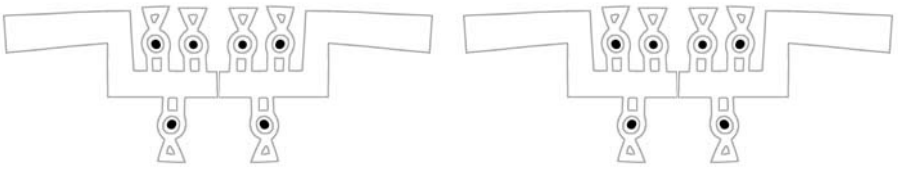
Un Sindicalismo Socio-Político a la altura de los desafíos de estos tiempos debe trascender la agenda doméstica, evitar que su política internacional se reduzca a una "agencia de viajes" y pelear por una verdadera presencia en el escenario internacional. La Nueva Estructura Sindical resultante del proceso de autorreforma, entre otras innovaciones, debería presentarnos Secretarias Internacionales transversales a toda la estructura, capaces de influir en el conjunto de la estrategia político sindical de la organización y valoradas tanto en recursos económicos como humanos como un área central de la misma.

El carácter internacionalista del MS le permite desarrollar un enfoque y una estrategia que resulta inédita para el contexto histórico de nuestras sociedades, aún cuando ellas estén conducidas por Gobiernos Progresistas, ya que estos presentan como problema básico la dificultad de pensar y actuar mas allá de las fronteras del estado nación.

Aquí radica la importancia estratégica de la CSA, como articulador central de un enfoque continental, que complemente lo nacional y sub regional, sintetizando una visión colectiva que dialogue e interactúe con la dimensión mundial, sin falsos enfrentamientos pero también sin subordinación.

La crisis en este sentido, no hace otra cosa que reforzar la necesidad de respuestas e instrumentos globales. Para el MS esto no es distinto, por el contrario, es una oportunidad para utilizar sus nuevas estructuras y mostrar su utilidad y eficacia

Se trata del futuro de nuestros Países y cada día más ese futuro depende del tipo de inserción internacional así como, de la capacidad para diseñarla y gestionarla por parte de nuestras sociedades, dentro de las cuales el MS ocupa un lugar de enorme responsabilidad y protagonismo.



LLA CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO BIRREGIONAL UE-ALyC

Alvaro Orsatti, asesor
Marzo 2009



Se están cumpliendo diez años del lanzamiento del proyecto de Asociación Estratégica Birregional entre la UE y ALC (I Cumbre gubernamental, Río, junio 1999). Con altibajos, este proceso ha continuado desde entonces, siendo 2009-2010 un período clave, que determinará si la nueva década comienza con mayores avances, en un contexto marcado por la crisis sistémica y la imposibilidad de alcanzar acuerdos en la Ronda de Doha de la OMC, todo lo cual amenaza con consolidar un neo-proteccionismo.

Los Acuerdos de Asociación (ADA) con Europa son un capítulo del proceso más amplio, iniciado a comienzos de los noventa, de apertura económica por vía comercial (complementada con tratados de promoción y protección de inversiones, TPPI) a otros países, que incluye tanto TLC (tratados de libre comercio) como formatos de regionalismo abierto, partiendo de uniones aduaneras "imperfectas", con la expectativa de alcanzar estadios superiores de mercados ampliados. En estos casi veinte años se han sumado proyectos continentales (la Iniciativa para las Américas de Bush Sr., el ALCA de Clinton, el TLCAN en América del Norte, la revisión del Pacto Andino y del MCCA, la profundización de CARICOM (y la aparición del AEC), el Mercosur (luego de acuerdos sectoriales Argentina/Brasil de años anteriores). También se ha desarrollado, de forma moderada, la ALADI creada en 1980. Más recientemente, los TLC con EEUU (a partir del firmado con Chile) comienzan una subetapa, que se proyecta hacia países del sudeste asiático y hacia acuerdos intralatinoamericanos.

Es en este marco que la UE se incorporó a la tendencia general, mediante el reenfoque de sus acuerdos previos concentrados en el diálogo político y la cooperación, que ahora incorporaban en un lugar clave el pilar comercial, de características muy similares a los TLC (cf Baez Mosqueira, 2008b, que presenta un ejercicio comparativo de contenidos). No hay que olvidar tampoco la importancia alcanzada, desde años anteriores, por la firma de un gran número de TTPI país por país europeo con otros de ALyC. En el análisis geoestratégico y político, existe consenso en señalar que la propuesta de Acuerdo Birregional es totalmente simétrica a la, por entonces, negociación del ALCA.

Las dos primeras negociaciones, de carácter bilateral, con Chile y México, se concretaron rápidamente a comienzos de la siguiente década, siendo en sí mismas expresión de lo recién afirmado, en cuanto a un paralelismo con los previos TLC de EEUU con esos países. Pero la tercera, ya con el formato subregional que Europa ha considerado preferible, con el Mercosur, se prolongó durante tres años sin alcanzar acuerdo en la fecha prevista (octubre 2004), y desde entonces no ha sido retomado en profundidad. Posteriormente, en 2006 se anunció formalmente el comienzo de las negociaciones con la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y el SICA (Sistema de Integración Centroamericana). Por entonces ya se desarrollaban también las negociaciones referidas a los países del Caribe que forman parte del grupo ACP (Asia, Caribe Pacífico) de la UE. Los mandatos negociadores europeos se conocieron a mediados del 2007, y las rondas de negociación comenzaron algunos meses después.

Este proceso ha contado con la presencia del sindicalismo de ambas regiones, así como de otras organizaciones de la sociedad civil, por la suma de decisiones de la institucionalidad europea, y otras surgidas autónomamente[1]. El contexto general de esta participación ha tenido claras limitaciones. De acuerdo a una evaluación reciente conjunta del sindicalismo de ambas regiones (en la Declaración del 2008, sobre la que se abunda más adelante), en Europa, las consultas no pueden considerarse como tales, ya que habitualmente son meras entregas de información en breves reuniones. En ALyC, también predomina lo que se ha denominado los "cuartos de al lado", que no reconocen el derecho de consulta sino que se limitan a proporcionar información unilateral[2].

El inicio de este nuevo ciclo de construcción del Acuerdo coincidió en el tiempo con la creación de la CSA, la que en su congreso fundacional (Panamá, marzo 2008) registró la nueva situación de proliferación de negociaciones de TLC, generalizando un contraste estratégico entre éstos y los procesos de "integración subregional", en los que se mantienen expectativas, a pesar de su desarrollo frecuentemente dificultoso y hasta polémico (la fuerte influencia de las empresas transnacionales en la generación del mercado ampliado, los intercambios desiguales al interior). Por encima de este concepto, CSA utiliza el de "comercio justo"[3]

[1] Junto a las Cumbres (Madrid, 2002, Guadalajara, 2004, Viena, 2006, y Lima, 2008; la del 2010 está programada nuevamente en la capital española), el sindicalismo mundial de la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) y CMT (Confederación Mundial de Trabajadores), junto con la CES (Confederación Europea de Sindicatos) y sus regionales en las Américas, programó sus propias reuniones, inicialmente la "Conferencia Sindical sobre Relaciones entre UE y ALC", en 1999) y luego repitiendo el formato de Cumbres, dirigidas a preparar sus posiciones en el espacio formal de participación que proporciona la experiencia europea: los "Encuentros" de la CESE (Consejo Económico y Social Europeo) y la CES con organizaciones de la sociedad civil organizada (SCO), en un enfoque que incluye, además de los sindicatos, a organizaciones de empleadores, de la economía social y "otras que creen cohesión social" (en los términos utilizados por los organizadores). Desde el tercer encuentro (México), participan las estructuras ya existentes en cada unión aduanera: el CCLA (Consejo Consultivo Laboral Andino), el FCES (Foro Consultivo Económico y Social) y el CC-SICA (Comité Consultivo del SICA). Existe también un proceso de seminarios regionales ACP-EU entre los Grupos de Interés Económico y Social. Los Encuentros derivan en declaraciones formales. Asimismo, la CES ha realizado otras reuniones subregionales con la CCSCS (Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur), la CTCS (Coordinadora de Trabajadores del Cono Sur, CLAT), la CSACC (Coordinadora Sindical de América Central y Caribe), y la CCSA (Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (así como con el CCLA, Consejo Consultivo Laboral Andino). El mismo procedimiento se ha seguido con las centrales mexicanas, que no forman parte de estructuras de este tipo. También hay que incluir las Cumbres Iberoamericanas (en este período, destaca la de Cartagena, 2007).

[2] De todas formas, existe una marcada heterogeneidad de experiencias. Por un lado, el sindicalismo mexicano y chileno prácticamente no tuvo participación en la negociación de los acuerdos con la UE, ni luego de aplicarse, al no pactarse estructuras de participación, en el primer caso, ni ponerse en funcionamiento, en el segundo. Por otro, si bien en relación al Mercosur la evaluación considera que tal presencia se dio en un contexto "opaco", se destaca el trabajo realizado desde el FCES, donde se produjo una objetiva convergencia con las representaciones empresarias, que compartían ese órgano. En Orsatti (2007) se destaca el contenido de tres resoluciones al respecto (en 2001-4).

[3] Puede discutirse el sentido asignado al termino "integración subregional". En sentido estricto, todos los acuerdos comerciales son "de integración", por lo que algunas resoluciones congresales han utilizado la expresión "integración neoliberal", para diferenciar los TLC de uniones aduaneras. Ello tampoco soluciona el problema, ya que las uniones aduaneras también tienden, en mayor o menor medida, a tener componentes neoliberales.. Además, es cada vez frecuente la firma de TLC intralatinoamericanos (Colombia, Perú, Chile, Uruguay). Esta cuestión ya fue planteada en el XV Congreso de ORIT (Brasilia, 2005), desde un taller organizado por la FES (principalmente Silvia Portella). Otra cuestión terminológica-conceptual de creciente importancia es la aparente disyuntiva entre integración "desde los Pueblos" o "desde los Estados", cuestión que ha comenzado a ser aclarada, en el sentido de que no son incompatibles. Es también necesario profundizar en la convivencia entre otras conjugaciones que también se utilizan para la primera de las fórmulas ("de", "para"). En cuanto al "comercio

Al respecto, el Programa de Acción (CSA, 2008) considera que "las propuestas de ADA que se discuten actualmente introducen un cambio fundamental en relación a los anteriores acuerdos, para destacar ahora los aspectos directamente comerciales con un enfoque que no se diferencia del utilizado por EEUU en sus TLC con países de la región, que esencialmente favorecen la estrategia de multinacionales y élites empresariales locales, dirigidas a sacar el máximo provecho, olvidando su responsabilidad social". En este marco, la CSA "demanda que las negociaciones lleven a verdaderos Acuerdos de Asociación Económica, Política, Social y Cultural. Ello implica oponerse a la aplicación de criterios neoliberales de libre comercio y avanzar hacia un comercio justo y equilibrado, reafirmando la necesaria vinculación que debe haber entre estos acuerdos y visiones productivas como la que plantea la PLA" (Plataforma Laboral de las Américas (con el sublema de Desarrollo Sostenible y Trabajo Digno), elaborada por ORIT y otras organizaciones subregionales y nacionales, que fue presentada en la IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, noviembre 2005).

El antecedente inmediatamente previo sobre este enfoque figuraba en el documento de base del proyecto sobre integración de ORIT-CCOO (Portella, 2006): "la actuación sindical en los procesos de integración y/o asociación comercial subregional, continental e intercontinental no se reduce a la demanda de los derechos laborales y sociales, visto que éstos no podrán existir si las condiciones económicas y comerciales establecidas tendrán reflejos dramáticos para el mundo del trabajo"… "es preciso preservar la idea central de un mercado integrado, basado en la autodeterminación de las naciones, reducción de las asimetrías y complementariedad entre las economías". En este contexto, el documento recordaba que el sindicalismo había "denunciado que los compromisos que implicarían las negociaciones con la UE (y con el ALCA), seguramente impedirían que el Mercosur pudiera construir una economía regional complementaria".

Pero es el Foro Sindical ante la Cumbre de Lima de Presidentes y Jefes de Estado de UE y ALC (abril 2008) CSA-CES-CSI el que ha traído un enfoque birregional desarrollado, en consonancia con el programa de la CSA[4].

Esta perspectiva fue construída como reflejo de pre-consensos entre el sindicalismo birregional (CES, 2008) e internacional (CSI-CES, 2007), así como aquellos más desarrollados desde el sindicalismo de ALyC (las ya mencionadas resoluciones del FCES del Mercosur, analistas relevantes - Padrón, 2007).

Más en general, se seguía también un camino con amplia tradición en el sindicalismo latinoamericano, al momento de tomar posición ante los TLC: concretamente, desde la ORIT-CIOSL, las resoluciones de sus dos congresos previos a la disolución (del XV, Washington, 2001 y XVI, Brasilia, 2005) sobre temas de integración recurrían a un listado de condiciones necesarias para "todo acuerdo de integración", "buscando influir tanto desde la sociedad civil como con la participación crítica y propositiva en

justo" es inmediata su interpretación en términos de la teoría económica clásica del desarrollo, que enfatiza los elementos de intercambio desigual y de deterioro de los términos del intercambio (en el enfoque desarrollista latinoamericano), que tiene detrás las enseñanzas de la historia económica sobre los motores perdurables del crecimiento y el desarrollo económico, con énfasis en el perfil sectorial y tecnolgico.

[4] En el Foro de Lima, organizado con el apoyo de la FES regional, participaron, por ALyC representantes de Perú (CUT y CGTP), Argentina (CGT y CTA), Brasil (CUT), Colombia (CTC), Uruguay (PIT-CNT), Perú (CUT), Chile (CUT), Panamá (Convergencia Sindical) y Paraguay (CNT), así como de tres de las coordinadoras subregionales (CCSCS, CCSA y CSTS). Por Europa, estaba representado el sindicalismo nacional de España (UGT, CCOO y USO), Francia (CGT), e Italia (CGIL, UIL). Hay que destacar que, en un proceso sin antecedentes, el contenido de la Declaración recibió los aportes (más de cincuenta) de los participantes en la reunión de la CESE, que incluía otras organizaciones. Otras organizaciones de ALyC presentes en este contexto provenían de Ecuador (CEOSL, CEDOCUT), Brasil (UGT, CTB, CNTB), Colombia (CUT), México (CTM, CROC, COR), Nicaragua (CST), Perú (CATP), Chile (CAT), Guatemala (CGTG), Rep. Dominicana (CASC), Venezuela (CODESA). También estaban presentes, por Europa, OPZZ (Polonia), CM-KOS (Rep. Checa) y LO (Suecia). En este nuevo ciclo, se han desarrollado numerosas actividades subregionales, frecuentemente con la CES y el apoyo de la FES, de las que surgen desarrollos que de una forma u otra coinciden con esta perspectiva regional En Orsatti (2007) se sintetizan los principales resultados, diferenciando las "matrices" subregionales). También se destaca el papel jugado por el Parlamento Europeo, en 2006, de distintas formas: polémica, en cuanto a una resolución adoptada respecto de las negociaciones con el Mercosur, y una declaración (del ala socialista) que tiene importantes elementos de convergencia con el enfoque sindical. Allí también se destacan los matices introducidos en el área andina por el enfoque boliviano y venezolano (ver más adelante otro comentario sobre este mismo tema).

el campo institucional de dichos procesos" (en la formulación del XV).[5]

En este marco, la Declaración desarrolla el enfoque estratégico que pudiera denominarse de las dimensiones múltiples", para responder a la versión reduccionista (de los gobiernos de ambas regiones) de conformarse con un triple pilar (político, de cooperación y comercial). La Declaración explicita la necesidad de un cuarto (sociolaboral), de un quinto (cohesión social), y de una participación transversal.

La Declaración de centralidad a la cuestión del desarrollo sostenible en los países de ALyC, siguiendo una interpretación plena que no deja oculto, como muchas veces sucede, la dimensión económica, junto a las otras dos (la social y medioambiental), lo que permite encarar la crítica al pilar comercial. Los ejes estratégicos son

1. la consideración de que el "comercio justo" es el criterio clave de todo acuerdo comercial, siguiendo los planteos que los países en desarrollo efectúan ante las negociaciones multilaterales en la Ronda de Doha de la OMC, centrado en el principio de reciprocidad menos que plena y, con ello, en niveles arancelarios que estén en línea con la etapa de desarrollo en que se encuentran los países, así como en la no aceptaciòn de intercambios de concesiones entre sectores (agrícola, industria y servicios.

2. la apuesta por el fortalecimiento de los procesos de integración subregional (Mercosur, CAN, SICA, CARICOM), dotándolos de instituciones eficaces y democráticas que representen realmente a la ciudadanía de los países miembros, que se interrelacionen entre sí y avancen hacia una integración más amplia (UNASUR, AEC), respetando al mismo tiempo los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en todos sus Estados, cesando la impunidad que todavía subsiste en algunos países, y garantizándose los plenos derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga.

3. una fuerte preocupación por el enfoque neoliberal de libre comercio de los ADA, al cual el sindicalismo birregional se opone porque va en dirección contraria al tipo de integración que defiende el sindicalismo birregional.

4. dos consideraciones prácticas respecto de los ADA:

- que un objetivo central debe ser el desarrollo sostenible y el respeto a los procesos de integración subregionales, convalidando este enfoque de forma explicita en los distintos capítulos.
- que los aspectos sociolaborales y medioambientales constituyen una condición necesaria pero no garantizan por si solos el desarrollo sostenible, en cuanto al pilar económico.

5. el reconocimiento de que el proceso de integración europeo ha tenido importantes avances desde su creación, aún cuando la UE debe superar su debilidad política y desarrollar una política exterior propia para poder afrontar con otras regiones del mundo, y en particular con ALyC desafíos comunes impuestos por la globalización.

6. una reiteración del apoyo al establecimiento de una Asociación Estratégica Birregional UE-ALyC.

7. el pedido de que la Cumbre Sindical sea considerada como evento oficial y previo a la de Jefes de Estado, y el compromiso de realizar un seguimiento de los compromisos adoptados solicitando para ello una efectiva participación.

El Anexo presenta una síntesis apretada de los contenidos de esta Declaración en cuanto a evaluaciòn del mandato negociador europeo, y las propuestas por capitulo.

Posteriormente, la reacción más marcada de CSA ante las negociaciones de ADA fue ante la Directiva de Retorno de junio 2008, considerándola la "Directiva de la Vergüenza" (Baez Mosqueira, 2008a), mediante una carta que la rechaza, por "criminalizar a los migrantes e incrementar los sentimientos de intolerancia ya conocidos, como el racismo

[5] Junto a las Cumbres (Madrid, 2002, Guadalajara, 2004, Viena, 2006, y Lima, 2008; la del 2010 está programada nEste ha sido también, al menos de manera indirecta, el enfoque de la Alianza Social Continental (ASC) en su principal documento programático, la "Alternativa para las Américas" (presentado ante la Cumbre de Québec, 2001). Un dato olvidado es que el capitulo "Trabajo" estaba a cargo de la CIOSL. Este enfoque "institucional" es, además, complementario del que adoptan los gobiernos nacionales cuando, como parte de una comunidad continental, deben discutir propuestas concretas. Piénsese, por ejemplo, en el papel de Brasil a partir del 2003, en relación al ALCA, enfrentando contenidos del ALCA desde "adentro")

y xenofobia. En contraste con las negociaciones bilaterales, en que se propone flexibilizar las fronteras incrementando la capacidad de circulación sus mercancías, servicios y capitales, los gobiernos europeos ahora tratan de culpabilizar trabajadores migrantes por las dificultades económicas en sus países, que no son otra cosa que consecuencias de la política neoliberal" (ver también un enfoque desde Europa, difundido en ALyC, Cachón Rodríguez, 2009).

Este enfoque ha sido subestimado, e incluso criticado, por otros sectores de la sociedad civil, en cuanto a que la estrategia ante los ADA, desde una filosofía de la acción, debiera requerir una negativa lisa y llana a participar de las negociaciones. Esta perspectiva está claramente presente en "Enlazando Alternativas", una alianza de organizaciones de la sociedad civil básicamente no sindicales de las dos regiones, que participa, desde 2004, en las actividades de la SCO vinculadas a las negociaciones de los acuerdos UE-ALyC. Su enfoque se sustenta en considerar que existe un "Consenso de Viena" (por analogía al "Consenso de Washington", a su vez vinculado con el documento "Europa Global: competir en el mundo" (también del 2006). La perspectiva utilizada se refleja en la propia declaración ante la Cumbre de Lima, que por ello evita cualquier desarrollo propositito detallado (Enlazando Alternativas, 2008). EA trabaja en las Américas en relación a la Alianza Social Continental (ASC), creada en 1999 con un foco principal puesto en las negociaciones del ALCA. Desde sus primeras actividades, la ASC se vinculó con ORIT-CIOSL (en la Cumbre Sindical de Belo Horizonte, 1997). En ese sentido, se presenta una relación triangular con la CSA, que es objeto de análisis en Freire (2008), encontrando la existencia de un campo mutuo en las concepciones de la CES (que ha sido crítica de EA), con base en el respeto de los procesos de alianza (o no alianza) que se tomen en las dos regiones, y en considerar que el "enemigo conjunto" son las empresas transnacionales europeas que, como dice el programa de acción de CSA, son las principales beneficiarias de estos acuerdos.[6]

En cualquier caso, es el propio desarrollo de las negociaciones, y el resultado final, el que dará luz sobre el sentido y alcance de las distintas alternativas estratégicas del sindicalismo. En el tercer trimestre del 2009, las negociaciones de UE con CAN y Centroamérica han seguido caminos críticos, augurando nuevas tensiones entre las decisiones tomadas por los gobiernos y los sindicatos dentro de cada región. Un primer elemento destacado es que, en el área Andina, no ha sido posible mantener la negociación en bloque, con lo que se avanza hacia acuerdos bilaterales con algunos de los países miembro del CAN. Pero más importante es el tema de la calidad de la negociación: el 5 de marzo la CES y las dos coordinadoras de Centroamérica y Caribe, dirigieron una carta abierta a los negociadores de ambas regiones, que pone en "blanco y negro" el dramatismo de la situación: "los informes de nuestros asesores, al cierre de la VI Ronda, destacan que no hay ningún avance en la incorporación de nuevas propuestas en los textos negociados. Pese a todos nuestros esfuerzos, solo hemos tenido algunas promesas genéricas, pero ninguna respuesta concreta a nuestros planteamientos", con lo que, de no cambiar la situación, el sindicalismo "denunciará que este es un TLC más". El sindicalismo birregional había solicitado, siguiendo la pauta integral de la Declaración de Lima, un cuarto pilar sociolaboral, un mecanismo de seguimiento y cumplimiento obligatorio de los acuerdos, con monitoreo desde el movimiento sindical, un fondo de cohesión social, aplicado a las asimetrías, y la eliminación de algunos temas comerciales

[6] Un ejemplo de la ambigüedad que trae consigo el formato de SCO, al momento de elaborar declaraciones consensuadas, se presenta en el siguiente párrafo (tomado de la declaración de Viena), que aparece màs bien como promocional, de forma acrítica, del mundo europeo de los negocios, cuando destaca la necesidad de "prestar especial atención e impulsar las inversiones europeas en ALyC" (también a la inversa), y "el reforzamiento de un contexto favorable a las mismas, en camino a que conviertan en un socio estratégico a favor de la industrialización, la competitividad, el crecimiento tecnológico, y la dotación de infraestructuras", particularizándose en la necesidad de que se "promueva el papel de los sectores-punta europeos en el desarrollo de ALC mediante programas-marco de investigación y desarrollo tecnológico". FIIAPP-EUROSOCIAL (2008) ha realizado un primer intento de contextualizar el tema de la participación de las organizaciones sociales en las negociaciones.

que van en detrimento del desarrollo de los países centroamericanos, como los servicios y las instituciones publicas.

Hacia el futuro inmediato, la relación sindical UE-ALyC puede tener un nuevo capitulo positivo con el desarrollo del plan de trabajo CES-CSA (a acordarse definitivamente en mayo 2009) que, por primera vez, ya que anteriormente, como se dijo, las relaciones entre el sindicalismo de las dos regiones se centraba en el plano subregional. Este plan incluye, además de las negociaciones comerciales, cuestiones temáticas claves, en dirección a cotejar los enfoques predominantes en cada región y, eventualmente destacar buenas prácticas: la política migratoria, la RSE, la información y consulta supranacional (con la experiencia de Comités Europeos de Empresa), los fondos de cohesión social (siguiendo una iniciativa de la española Fundación Alternativas; existe ya una primera reacción desde ALyC, CSA (2009). Finalmente, se ha incluido también el polémico tema de la flexiseguridad, para comenzar a prepararse, en ALyC, ante eventuales aplicaciones en la región.

ANEXO: CONTENIDOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA EN RELACION A LOS ADA EN LA DECLARACION CSA-CES-CSI DE LIMA (abril 2008).

Se ha mantenido la redacción original, apretando el texto y reubicándolo.

I. Evaluación del mandato negociador europeo.

1. Tiene expresiones positivas en el campo productivo, de la cohesión social y de la dimensión sociolaboral;
2. Comparativamente con otros tratados, destaca la condición bloque a bloque de la negociación, y la inclusión de pilares de diálogo político y cooperación;
3. Incluye en un lugar destacado un capitulo de libre comercio centrado en la liberalización de bienes y servicios, incluyendo otros elementos OMC-plus: liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital, y de compras gubernamentales, comprendiendo los sectores de agua, energía y transporte;
4. Promueve que los países de ALyC den un tratamiento a las transnacionales europeas no menos favorable que el otorgado a las propias empresas, lo que se extiende a situaciones en que aquellos países tengan acuerdos con un tercer país;
5. Tiene claros déficit en las dimensiones de la cohesión social, sociolaboral y participación: en materia de cohesión social no plantea referencias a instrumentos como los fondos estructurales; respecto del tratamiento de las asimetrías, se autolimita, al afirmar que "todas estas disposiciones se reducirán al mínimo", y que "ello será contemplado cuando fuese necesario y reduciendo al mínimo la diferenciación de compromisos entre países"; no menciona expresamente a estructuras participativas de la sociedad civil; no introduce un pilar sociolaboral, con lo que esta dimensión tiende a quedar incluida en el capitulo sobre cooperación, de forma limitada; no considera la cuestión migratoria, de indudable importancia en la actualidad de los dos bloques; no incorpora el tratamiento del cambio climático; no prevé la necesidad de analizar el impacto pre y post acuerdo en los aspectos económico-comercial, sociolaboral y medioambiental;

II. Propuesta sobre la dimensión comercial. Los acuerdos deben:

1. Reconocer las grandes diferencias que separan a la UE de ALC, de forma explícita en todos los apartados de las negociaciones;
2. Asegurar repercusiones económicas directas positivas para ambas partes, no condicionando ni afectando las necesarias estrategias de desarrollo productivo que adoptan los países y regiones de ALyC;
3. Contener cláusulas claras, medibles y cuantificables en relación a la transferencia tecnológica;
4. Incorporar un trato especial, diferenciado y flexible, de acuerdo a las necesidades y sensibilidades de los distintos países;
5. Tender a resolver adecuadamente el problema agrícola de ALC, que se vincula con cuestiones, estrechamente vinculadas entre sí, y que requieren soluciones transversales, como el uso indiscriminado de la tierra, la

actual crisis alimentaria mundial, el acceso al agua, el uso de transgénicos y agrotóxicos, la energía, el cambio climático;
6. Utilizar un enfoque SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) "plus" (en vez de OMC plus) para, con ello, partir de los beneficios comerciales que tienen sus países en el mercado comunitario por la vigencia de ese sistema, como alternativa al enfoque que considera que, por ser unilaterales, esos beneficios deben ahora ser rediscutidos.

III. Propuesta sobre la dimensión sociolaboral. Los acuerdos deben:
1. Incorporar un "cuarto pilar" sociolaboral basado en el reconocimiento de estándares laborales mínimos y el desaliento al "dumping social". La vigencia de estas normas debe impedir que las Partes alienten el comercio y la inversión extranjera (incluyendo la dirigida a zonas francas industriales) mediante la ampliación o el mantenimiento de una ventaja competitiva a través de la disminución del nivel de protección dispuesto por las leyes sociales y laborales nacionales, su derogación o la falta de aplicación. La actuación de las empresas transnacionales y sus empresas contratistas tiene que ser contemplada desde la perspectiva de su responsabilidad social y legal;
2. Hacer referencia a la plena vigencia de los derechos humanos en general, y los laborales en particular, tanto en el sector `privado como el público, incluyéndose mecanismos eficaces de seguimiento y cumplimiento que garantice su aplicación irrestricta en el campo comercial. Ello debe incluir la estipulación de sanciones comerciales o económicas efectivas y suficientemente elevadas como para constituir un desincentivo, destinando lo obtenido a mejorar las normas sociales y las condiciones de trabajo en los sectores y ámbitos que dieron origen a los problemas en cuestión. Estos instrumentos tienen que ser parte del propio acuerdo, con autonomía de instrumentos externos;
3. Tener presente, para influir de forma positiva, algunas dramáticas situaciones nacionales de violación de los derechos humanos, incluyendo los sindicales, en Colombia, Guatemala, y en cualquier otro país. Al respecto, deben eliminarse las leyes que criminalizan la protesta y la acción sindical y social;
4. establecerse que para la cuestión sociolaboral valen las mismas disposiciones estándares del resto del ADA, como forma de que lo estipulado en ese pilar quede sujeto a similar trato en materia de resolución de conflictos;
5. Incorporar, como instrumentos específicos de este pilar: una mención explícita sobre las normas de la OIT (convenios y recomendaciones), estableciendo un criterio vinculante. Tales normas son las ocho consideradas fundamentales por la Declaración de 1998, así como otras consideradas "prioritarias" por la propia OIT (C122 sobre la política del empleo, C81 y C129 sobre la inspección del trabajo, C144 sobre la consulta tripartita) e incluso otras que también gozan de un amplio apoyo (C155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, C102 sobre seguridad social, C103 sobre protección de la maternidad C135 sobre los representantes de los trabajadores, C169 sobre las poblaciones indígenas, R193 sobre promoción de las cooperativas, R195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, R198 sobre la relación de trabajo. Deben incorporarse también las legislaciones nacionales más avanzadas de cada uno de los bloques firmantes, así como instrumentos subregionales (por ejemplo la Declaración Sociolaboral del Mercosur). En el caso que los convenios no hayan sido ratificados por algunas de los países en la situación de partida, debiera tomarse un compromiso al respecto;
6. También debe incluirse: el compromiso de respetar las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el Protocolo de Kyoto y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y las convenciones sobre derechos humanos en general; las experiencias de acuerdos marco internacionales entre federaciones sindicales internacionales y empresas transnacionales con casa matriz europea y filiales en ALC;
7. Reconocer los trabajadores autoempleados, mediante políticas publicas que los ayude a formalizarse.
8. Incluir un enfoque de género sistemático y transversal, aplicando los consensos alcanzados en los foros mundiales, para garantizar los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad.

IV. Propuestas sobre la cohesión social y el desarrollo sostenible. Los acuerdos deben:
1. Incluir medidas de cohesión y justicia social que reduzcan sus eventuales efectos negativos en materia de pobreza, precariedad e informalidad laboral y desplazamientos migratorios, y fomenten el trabajo decente que promueve la OIT como factor esencial para la cohesión social;
2. Incluìr mecanismos correctores de las asimetrías entre las dos regiones, con base en la experiencia europea de los fondos estructurales de cohesión y solidaridad. Este enfoque ya figuraba en la Cumbre de Guadalajara por medio del programa EuroSocial, el cual debería complementarse con nuevos programas dotados de mayores recursos financieros. Estos mecanismos tienen que ser financiados por la UE (a través de, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones) y por aquellos países que son los principales beneficiarios del comercio y de las inversiones;
3. Reconocer la cuestión migratoria como un elemento vinculado al desarrollo sostenible, en cuanto al derecho a no migrar, y colocarla de forma transversal en el diálogo político, en el capitulo sociolaboral, para garantizar los derechos de los migrantes en los países de origen, y en el capítulo comercial, en cuanto a un tratamiento adecuado de las remesas. La UE debe contribuír con acuerdos y programas que faciliten la migración regular, la inserción económica, social y cultural de los migrantes y la plena garantía de los derechos laborales, sindicales, sociales y civiles, para el/la migrante y su familia. Se necesita también una política proactiva e integral de migración, asentada en reglas precisas de admisión y residencia que respete la dignidad de las personas, y que debería estar basada en el marco de los derechos de los recogidos en la Convención de NU sobre protección de los derechos de todos los trabajadores y sus familiares) y en convenios de la OIT (C 97, C 143 y C 157). Ha sido muy positiva la reciente firma del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que tiene por objetivo que los trabajadores migrantes puedan gozar, en sus países de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores. Asimismo, hacen un llamamiento por la rápida y eficaz aplicación de este convenio, y en favor de que otros países de la UE puedan sigan el mismo principio;
4. Introducir la protecciòn medioambiental, con cooperación en materia de cambio climático que permita vincular de forma duradera la preservación ecológica, el crecimiento económico y la creación de empleos decentes.

V. Propuestas sobre la dimensión participativa. Los acuerdos deben incorporar transparencia y apertura al sindicalismo y los otros sectores de la sociedad civil organizada, mediante:
1. Comités Consultivos Mixtos, integrados por los Comités Económicos y Sociales, o sus equivalentes, y el CESE, garantizando los recursos necesarios para su efectiva participación en el proceso;
2. Un foro sobre comercio y desarrollo sostenible, a reunirse dos veces al año, para realizar consultas sobre cuestiones y problemas sociales mediante una discusión pública entre organizaciones de empleadores, de trabajadores y ongs. En esas consultas debería estipularse un claro equilibrio entre los representantes de los tres sectores.
3. A través de estas estructuras, o de otras específicas, se introducirían mecanismos que permitan: la información, consulta y participación durante las negociaciones, con acceso en tiempo y forma a los borradores, el monitoreo y evaluación de la aplicación de los acuerdos, mediante la presentación de informes periódicos sobre los adelantos realizados para poner en práctica los compromisos, considerando todos los aspectos inherentes a su repercusión social y económica (incluyendo acceso a servicios públicos de calidad) y la utilización de distintas políticas (entre ellas, políticas relacionadas con el comercio) destinadas a conseguir desarrollo industrial; la presentación, por las organizaciones de trabajadores y de empleadores de ambas partes, de comunicaciones respecto de problemas sociales observados, pidiendo a los gobiernos acciones que se traduzcan en un seguimiento y revisión constante de lo estipulado, con miras a evitar que los gobiernos violen o permitan la violación de los derechos de los trabajadores. Estas peticiones deberán tener un rápido y adecuado tratamiento por expertos independientes bien calificados, cuyas recomendaciones sean resueltas rápidamente,

a fin de posibilitar que los gobiernos se ocupen debidamente de ellas; la participación en la evaluación pre y post acuerdo sobre los impactos de los acuerdos en las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Baez Mosqueira, Victor, CSA, 2008: Declaración de CSA sobre la Directiva Europea de la Vergüenza. Web CSA, junio.

Baez Mosqueira, Victor, CSA, 2008: Fundamentos para la estrategia de CSA ante los ADA. Informe a la Reunión CSA-CES-CESE, Bruselas, septiembre.

Cachón Rodríguez, Lorenzo, 2009: Para los europeos, la culpa de la crisis es de los inmigrantes; Clarín (Argentina), 18 febrero, edición en web.

CES, 2008: Comunicado sobre el Encuentro sindical sobre las negociaciones de la UE con MERCOSUR, Comunidad Andina y América Central, Bruselas, marzo (multicopilado).

CSA, 2008: Programa de Acción. Aprobado en el Congreso fundacional, Panamá, marzo. En web de CSA.

CSA, 2009: Sobre la propuesta de la Fundación Alternativas de un Fondo de Cohesión Social para los acuerdos de asociación de UE y ALyC (multicopiado).

CSA y CES, 2008: Declaración de Lima. Cumbre Sindical UE-ALC, Lima, abril.

CSACC-CCTR-CES, 2009: Carta Abierta sobre el ADA-CA-UE. Dirigida a los negociadores de ambas regiones; marzo.

CSI-CES, 2007: Reivindicaciones sindicales relativas a los elementos sociales clave de las secciones concernientes al desarrollo sostenible" de las negociaciones de la UE sobre los Tratados de Libre Comercio.

Enlazando Alternativas, 2008: Declaración de Lima. Cumbre de los Pueblos, Lima, mayo

FIIAPP-EUROSOCIAL, 2008: Participación de la sociedad civil y cohesión social. Presentado al III Encuentro Internacional de Redes de Eurosocial, Mèxico.

Freire Neto, Rafael, 2008: TLC europeos y estrategias de alianzas en ALC, ALAINET, mayo.

Orsatti, Alvaro, 2007: Enfoques sobre la negociación UE-ALC. Proyecto ORIT-CCOO Fortalecimiento e integración de las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil en la Región Latinoamericana.

Padrón, Alvaro, 2007: Los acuerdos de asociación entre América Latina y Europa: el papel del Movimiento Sindical, Nueva Sociedad, 2007.

Portella de Castro, Marìa Silvia, 2006: Integración, libre comercio y la acción sindical en ALC. Proyecto ORIT-CCOO antes mencionado.

EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA ECONOMÍA POPULAR

Presentación

La Confederación General de Trabajadores del Perú realizó en el mes de noviembre último un seminario para analizar las consecuencias de la crisis mundial. Las conclusiones a las que arribamos fueron de carácter público y han sido luego discutidas y sistematizadas por nuestro Secretariado Ejecutivo para formular una propuesta que enfrente la crisis.

Los delegados al Consejo Nacional del Trabajo, han formulado con esos lineamientos una versión más detallada específicamente para el sector trabajo, esta sigue en debate, su continuación está condicionada, por acuerdo de las cuatro centrales, al resultado de la discusión del salario mínimo.

Entre los meses de febrero y marzo hemos enriquecido sustancialmente nuestros puntos de vista con la participación de los economistas del mundo del trabajo convocados por la CGTP. A ella se han sumado expertos laboralistas que han revisando el plan para dar mayor sustento legal a lo discutido. Los enfoques e informaciones que hemos recogido de los documentos y opiniones de los técnicos de la OIT han sido de gran utilidad, a todos ellos nuestro reconocimiento.

La propuesta aquí plasmada, difiere de la lógica que postula simplemente dejar que "el mercado se regule solo". Ciertamente está en discusión la relación Estado – Mercado. La crisis ha puesto al descubierto que el paradigma que privilegia a las exportaciones en desmedro del mercado interno, idea que parte del falso supuesto que el mercado mundial es infinito ha fracasado. Hay que volver a discutir la relación entre mercado interno-externo. La experiencia señala que a mayor mercado interno, mejor es la situación para enfrentar la crisis.

2- El escenario previsible

El debate entre los analistas sobre los escenarios futuros, podemos concentrarlo en dos posiciones, aunque ambas coinciden en que el Perú se verá afectado, las diferencias radican en los sectores que van a sufrir mas severamente los efectos de la recesión mundial. Las distintas visiones se

explican en que cada una tiene diferentes valoraciones del grado de inserción de nuestra estructura financiera y productiva en el mercado mundial.

De otra parte, no hay seguridad en los planes de salvataje en los países desarrollados. Que estos funcionen depende, también de un factor psicológico, si la crisis se prolonga demasiado, habrá también crisis de confianza y por reacción natural, los agentes lejos de gastar o invertir van a preferir acumular, ahorrar y si este efecto se mantiene en los agentes financieros el ahorro no se convertirá en inversión.

En el caso de nuestro país, hace falta saber hasta dónde se seguirá ajustando la proyección del PBI, ahora el crecimiento previsto es de 5% ello es relevante para saber si un paquete impulsar la economía, con las cantidades anunciadas, es suficiente o no. Los sectores productivos han reportado sus proyecciones de inversión para el próximo año, no existe mayor información sobre sus planes de contingencia en caso que se agudice la crisis.

Según los reportes de las autoridades económicas peruanas hoy se registra en el país una caída de la demanda interna, especialmente del consumo privado y del ingreso de divisas por reducción de las exportaciones especialmente textiles, y por el incremento de las importaciones, simultáneo a una caída del PBI en los sectores de la minería metálica y no metálica, manufactura fabril de recursos no primarios, agroindustria, comercio y servicios, lo que proyecta una caída del PBI a niveles inferiores al registrado en el 2008 y un deterioro en los términos de intercambio o balanza comercial. Si esto llega a suceder, a pesar de las fortalezas que tenemos en el Perú por las divisas acumuladas, estas pueden resultar insuficientes. Mientras tanto, existe incertidumbre sobre el curso que siga el tipo de cambio, por cuanto este puede resultar una restricción para los planes de crecimiento.

Las AFP han caído sin ningún control. El apoyo del Estado permite un grado de concertación enorme. Hay que poner atención en este tema ya que los que están próximos a la jubilación no recuperarán sus fondos.

Se ha puesto a la vez en evidencia en nuestro país un encarecimiento de las líneas de crédito comercial e hipotecario y mayores restricciones para sus colocaciones, aunque no de liquidez, que afecta el desarrollo de una política expansiva de la inversión privada, acentuada además por las restricciones de línea de crédito del exterior. El BCR ha reaccionado con una rebaja de la tasa de referencia en 0.25 %

Según los últimos reportes la inflación anualizada supera casi en el triple las proyecciones fijadas por las autoridades fiscales. Es más, todo indica que la inflación sufrida meses atrás se estabiliza hacia arriba, la renuencia de los que controlan ciertos precios como los alimentos elaborados hacen perder capacidad de compra a la población en general, siendo las madres de familia y sobre todo las mujeres jefas de hogar quienes tienen que lidiar con esta situación.

Ya se registra una reducción de los ingresos corrientes especialmente tributarios a favor del Gobierno Central, es previsible una desaceleración de la recaudación especialmente del Impuesto a la Renta (-19.5 % en febrero)y del Impuesto General a las Ventas a causa del decrecimiento del PBI y de las utilidades, al mismo tiempo que un incremento en la morosidad especialmente de los medianos y pequeños contribuyentes.

El crecimiento del empleo, que llegó a 10% en junio ha sido lo más novedoso de esta década. Un crecimiento del empleo durante 80 meses, es nuevo. Tomar en cuenta este antecedente es relevante ya que, siendo un hecho, una inminente desaceleración de la economía en el país, es previsible que esta se extienda sobre los otros precios de la economía. Para apreciar el impacto que tendrá la crisis sobre el empleo y los salarios hay que tener en cuenta que en las empresas agroindustriales ya despidieron a miles trabajadores. También se registran alrededor de 8 mil despidos en la minería y la tendencia es similar en

la industria textil que ya contabiliza más de 20 mil trabajadores en paro.

Como se puede apreciar hay más de un sector afectado que es intensivo en mano de obra y que provee de empleo de manera equitativa a varones y mujeres, por lo que un enfoque de género en las soluciones es imprescindible.

3- Nuestra apreciación sobre los planes del gobierno para encarar la crisis

Como se puede apreciar no compartimos el escenario triunfalista de quienes minimizan los efectos de la situación ya que los vaticinios han ido reduciendo sus expectativas. Como se recordará al inicio de la crisis el presidente García proyectaba un crecimiento entre el 6.8 y 7 %; en las últimas semanas esos augurios optimistas han ido decreciendo; hoy el ministro Carranza calcula llegar a un crecimiento del 5%. Este insólito realismo va a la par con las cifras replanteadas por la CEPAL y el FMI para América latina, región en la cual, si bien el único país con crecimiento negativo es México, no se crecerá a los niveles anteriormente previstos sino entre 1.9 y 2.8 % en promedio. En general todas las regiones siguen reajustando sus previsiones a la baja y cada vez son más alarmantes las noticias acerca de las pérdidas de empleo en las regiones del primer mundo.

Por ello, aun cuando coincidimos con el gobierno en la necesidad de un plan que mantenga los mayores niveles de crecimiento, tenemos una posición de crítica al "plan anti-crisis" ya que este, debería contar con un cronograma que recupere los meses que se demoró en ser presentado, De otra parte es necesario precisar cifras porque de los 10.032 millones de soles anunciados, al menos el 40% ya estaba programado presupuestalmente. El plan puede resultar inequitativo porque mayoritariamente se concentra en inversiones públicas orientadas a grandes empresas y en mejorar las condiciones de este sector, prestando poca atención a la agricultura y las MYPES, donde trabajan la mayoría de peruanos, igualmente por no atender el empleo y los salarios, y mantener un gasto social reducido. Finalmente urge eliminar los riesgos que agravarán el desequilibrio externo.

PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES

1- Objetivos

Nuestra propuesta va dirigida esencialmente a proteger a los sectores más pobres y desprotegidos del país, evitando el aumento en las cifras de pobreza y mejorar las redes de protección social, la educación y la salud.

La defensa del empleo y los salarios, es también un objetivo fundamental, así como el aumento del gasto social. Esta debe ser una política efectiva destinada a evitar una recesión económica y dar apoyo a los pobres, hombres y mujeres, golpeados por la crisis. Ello debe propiciar la concurrencia de todos los peruanos en el esfuerzo común de enfrentar la crisis y evitar que los conflictos sociales se multipliquen y agudicen, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la inversión.

2- Política social

Dos tipos de programas sociales son necesarios. En aquellas zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, proponemos programas que combinen la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de la infraestructura pública, mediante la construcción y mejora de caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud pueden generar cientos o miles de empleos temporales.

Por otro lado, para campesinos y ganaderos, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos no pueden descuidar sus cultivos y sus animales. En estos casos proponemos programas de transferencias en dinero, el Programa Juntos puede ser más efectivo. En los distritos rurales golpeados por la crisis donde no hay Juntos, debería establecerse

con prontitud. Donde ya existe y hay ganaderos afectados, el programa podría ampliarse temporalmente para las familias sin hijos. De esta manera, se evita que estas familias pobres se vean obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto esfuerzo han juntado, o que los niños sean sacados del colegio para trabajar. En aplicación de estas alternativas la experiencia ha demostrado que las mujeres son más eficaces en la administración de ingresos.

La salud y la seguridad social para los ancianos, que son políticas sociales que debieran ser permanentes, ahora se vuelven más necesarias. Las familias que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para comprar sus medicinas, están mucho más en riesgo cuando hay desempleo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y dar pensiones a los ancianos pobres con dinero del estado, son dos buenas alternativas.

Proponemos que se estudie como promover pensiones a los ancianos que no perciben ingresos, retribuir los fondos de FONAVI, retribuir a los beneficiarios de la cuarta lista de despedidos, estas son medidas que van en la dirección correcta, así como mayor impulso al plan de reconstrucción a la zona sur afectada por el terremoto.

3- Política Fiscal

No obstante el drástico ajuste efectuado al Presupuesto de la República 2009, las recientes medidas dispuestas por el Gobierno para acelerar la inversión y el gasto público mediante la asignación de 10,032 millones de soles con énfasis en obras de infraestructura y con recursos adicionales del Tesoro, no garantizan por si solo su realización debido a la dispersión administrativa, a las barreras de contratación existentes y poca capacidad gerencial del Estado para la ejecución.

Si tenemos en cuenta que la inversión pública justifica aproximadamente el 20% del PBI, no está claro que su impacto alcance para dinamizar toda la economía. Por ello, requerimos aumentar de manera real el gasto público en infraestructura, pequeñas obras con empleo temporal y gasto social del orden del 2% del PBI (US$ 2,500 millones) en el 2009. De esta manera se mantendría la demanda interna, se promovería el desarrollo y se protegería a los más pobres. Mantener la demanda interna es fundamental para que las empresas puedan seguir vendiendo y de esa manera dar empleo, y para mantener el mercado para las MYPES y agricultores.

Es importante que la política tributaria asegure la financiación del Estado para el plan, poniendo énfasis en los impuestos directos. Equilibrar los ingresos tributarios en un sentido redistributivo y reactivador, reduciendo los impuestos y aportes al fondo de estabilización de los combustibles (con lo que se reducen los precios de los combustibles).

La reducción de impuestos y precios de los combustibles devolverá ingresos a las familias y a las empresas, aumentando la demanda y la competitividad, ayudando a abatir la inflación. Establecer también un impuesto extraordinario al patrimonio de las empresas mineras, como forma de captar ingresos de este sector que obtuvo ingresos extraordinarios los años anteriores. Esto, junto a los impuestos extraordinarios, permitirá amenguar la fuerte reducción en los ingresos tributarios que provocará la crisis.

4- Política monetaria y cambiaria

Mantener la política orientada a evitar una reducción del crédito proveyendo de liquidez a los bancos. Si resultara necesario un apoyo de capital (patrimonio) de los bancos, otorgarlo a condición de una participación estatal en su accionariado y directorio. Establecer programas especiales para dar crédito al agro y las MYPES, y para refinanciar a quienes lo necesiten, buscando una reducción de los intereses a estos sectores. Establecer un programa especial para ampliar los créditos hipotecarios a sectores de bajos y medios ingresos,

para reconvertir los créditos existentes de dólares a soles, y para evitar un alza de tasas de interés en el sector construcción.

Mantener el régimen de flotación sucia del tipo de cambio, pero tener una política de mayor resguardo de las Reservas Internacionales, por lo que de ser necesario se deberá permitir un aumento paulatino y moderado del tipo de cambio, aumentando así la competitividad de la producción nacional y apoyando el equilibrio en el sector externo.

5- Defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno

Este es un aspecto capital y más si dentro de él de manera especial incluimos la producción agropecuaria nativa para lograr mejoras en nuestros productores del campo, en ese sentido asegurar el gasto en las regiones y promover la descentralización merece un plan especial. Junto a ello defender el empleo y los salarios debe ser una prioridad ante la crisis.

Así mismo, debido a que no hay estudios reales sobre el impacto de los TLC que se están negociando ni de su conveniencia, estos tratados deben ser suspendidos. El aumento de aranceles servirá para proteger el mercado interno para la industria y agricultura nacionales.

6- La imprescindible atención al sector externo

Ya que no podemos controlar los precios de nuestras exportaciones, hay que adoptar políticas que frenen importaciones. Los mecanismos a mano no son muchos: Subir Aranceles, lograr tipo de cambio más real, frenar salidas de divisas como es el caso de las inversiones de AFP. Además habrá que tomar en cuenta los impactos que tendrá un plan de esta naturaleza en el sector externo, ello exige una coordinación eficiente con el BCR.

En resumen son cinco ejes de aplicación simultánea y con un enfoque de género los que guían nuestra propuesta:

- Elevar de manera racional el gasto público y por ello es de suma importancia conocer la información desagregada del PIB.
- Necesidad de defender la producción nacional para el mercado interno.
- Defender el empleo y aumentar el salario para dinamizar la demanda de acuerdo a la información desagregada del PIB, la inflación y valores de la canasta desagregados. Así sabremos dónde hay problemas de empleo e ingresos y focalizar el apoyo.
- Trabajo digno con fomento al ejercicio de la libertad sindical, en el cual fomentar la Negociación Colectiva como el factor que evite conflictos es de gran necesidad. Así mismo la Reforma del sistema de pensiones para dignificar a los pensionistas
- Política equilibrada del sector externo.

PROPUESTAS CONCRETAS

1- Fortalecer la economía

a) Impulsar los Programas Sociales intensivos en empleo con enfoque de presupuesto por resultados.

La herramienta que el gobierno tiene más a la mano para enfrentar este problema son programas de empleo temporal. "Construyendo Perú", que comenzó como "A Trabajar" en el gobierno anterior, puede ampliar rápidamente su cobertura. El gasto público es una medida efectiva para este fin, siempre y cuando esté dirigido de preferencia, no al gran mega proyecto que en la mayor parte de los casos son de larga maduración, sino a los pequeños que den resultados inmediatos. Este gasto público adicional deberá aplicarse principalmente de manera descentralizada, mediante los gobiernos regionales y los municipios en un 80%, con atención a compensar las regiones más afectadas por la crisis y por la pérdida del canon.

Estos programas, pueden generar cientos de miles de empleos en pocos meses en las zonas de mayor despido, en algunos departamentos mineros y agroindustriales y rehabilitar o construir caminos, colegios o áreas verdes. Son flexibles para ampliarse o reducirse de acuerdo a las necesidades regionales. Han funcionado bien en el gobierno anterior. Además, son un mecanismo efectivo para aumentar la demanda interna y

servir así como empuje contracíclico, porque usan sobretodo insumos nacionales (cemento, palas, picos, etc.) y porque dan ingresos a familias pobres que tienen un consumo básico de productos nacionales.

b) Elevar el Presupuesto Público 2009.

Para tal fin planteamos aprobar, mediante Ley, los créditos suplementarios para impulsar nuevos Programas Sociales intensivas en empleo, especialmente productivos, con enfoque del Presupuesto por Resultados y con énfasis en sus programas y ejes estratégicos en los ámbitos de Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Produce, y de los Gobiernos Regionales y Locales a través del FONIPREL. Coordinar y articular su ejecución a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAF) y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

2- Proteger el empleo con trabajo digno

a) El Ministerio de Trabajo deberá fiscalizar activamente el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas. Se deben impedir los despidos injustificados y la explotación del trabajo infantil.

Para ello, deberá contratar más inspectores y trabajar en estrecha vinculación a los sindicatos y centrales sindicales. Derogar el DL 1086 que permite a las empresas medianas dejar de pagar 2 sueldos anuales en beneficios laborales a sus trabajadores. Esta primera medida debe ayudar también a identificar dónde está el mayor impacto del desempleo.

Proponemos trabajar en tres niveles, el primero: La gran empresa intensiva en empleo: textiles, minería y agroindustria concretamente. En estos sectores se ha planteado reconversión y reestructuración empresarial. Sin embargo, no se puede abusar de la reconversión ya que esta es para el cambio definitivo y no para lo temporal, porque de lo contrario cuando se reactive la demanda original no habrá trabajadores. De otra parte, es fácil identificar el segmento que creció y empresas que van a caer para no abusar de la reestructuración.

Las actividades de construcción pueden ayudar a regiones como Ica en la que llegaron emigrantes de Ayacucho y Huancavelica, que ahora se verán afectados.

Un segundo nivel debe atender lo que acontece con las pequeñas empresas que trabajaban con las grandes, estás si entrarán en reestructuración empresarial.

El tercer nivel: comprende a trabajadores independientes que están alrededor de las empresas mencionadas y que son los más vulnerables. A ellos debería dirigir el Estado demanda de sus servicios. Construyendo Perú es un buen programa para aplicar en este nivel, aunque tiene una limitación: sólo está en construcción y no en servicios. Por esta razón mientras se conciben actividades y planes que incluyan servicios, proponemos un seguro de desempleo temporal como existe en otros lugares de América.

b) Crear el Programa Nacional de Reconversión Laboral

Aprobar la creación de un Programa Nacional de Reconversión Laboral en el Sector del Trabajo y Promoción del Empleo, con recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, eventualmente de FONDOEMPLEO y la cooperación internacional, dirigido a trabajadores cesados por efecto de la crisis y orientado a su readaptación y colocación en nuevos puestos de trabajo. Conformar a su interior un órgano de gestión con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores.

3- Elevar los ingresos, los salarios y la productividad desde la empresa

a) Impulsar una Política de Fomento de la Productividad y el Trabajo Decente en las empresas

A través de un decreto supremo impulsar una Política Pública de Fomento de la Productividad y el Trabajo Decente orientado al uso más intenso de los mecanismos de negociación colectiva en las empresas, a fin de promover la productividad, contrarrestar

la reducción del empleo, proteger el salario propiciando su crecimiento en consonancia con el crecimiento de la productividad y para garantizar la libertad sindical, teniendo como promotor activo de esta Política al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo CNTPE.

b) Aumentar el salario para dinamizar el mercado interno

Otro de los factores de importancia en la política contracíclica es el salario. De los 14 millones de PEA, solo 4 millones son asalariados. El resto son autoempleados. Ahora, la gran masa vive de lo que les venden a los asalariados, por lo tanto, la mejora salarial es la mejor forma de transmitir ingresos a los campesinos y a los informales. La disminución de la producción y los despidos se produce fundamentalmente por falta de demanda, y aumentar el salario mínimo puede ayudar a recuperar la demanda.

Se ha dicho que el Perú es el país mejor preparado para resistir esta crisis económica mundial que golpea a todos los países de la región, pues bien, Colombia, Brasil y Bolivia entre otros, están acordando aumentos a sus trabajadores en mayor o menor proporción, el nuestro no tiene porque ser la excepción más aún cuando en el marco macroeconómico multianual y diversos agentes del gobierno han señalado que nuestro crecimiento en el 2008 (mayor al del 2007) ha ido acompañado de una importante subida de la productividad. Dignificar a los servidores públicos de bajos sueldos debería ser una preocupación esencial.

El alza de salarios no tiene porque representar una pérdida de competitividad de la industria nacional, si va acompañada de un aumento en el tipo de cambio, el drawback y los aranceles (los dos primeros ya se vienen produciendo). Por ello, en lo inmediato hay que aprobar mediante decreto supremo el incremento de la remuneración mínima vital para contener el atraso inflacionario, en aplicación de la Cláusula Gatillo, de acuerdo a la propuesta aprobada por el Comité Especial de Productividad del CNTP y proyectarnos a alcanzar el valor de la canasta básica. Este es el factor clave para la elevación de la demanda.

c) Un programa especial de protección del empleo

Puede incluir la suscripción de acuerdos tripartitos por rama, con empresas y trabajadores en sectores afectados por la crisis, mediante los cuales por un plazo de un año el Estado pague las contribuciones a la seguridad social correspondientes hasta el salario mínimo, a condición de que no se reduzca el empleo, los salarios ni los beneficios laborales.

d) Promover incentivos tributarios para la capacitación laboral e innovación tecnológica en la empresa

Aprobar una Ley para el reconocimiento como gasto y/o costo deducible del Impuesto a la Renta, de los gastos efectuados para la capacitación laboral e innovación tecnológica en la empresa orientada a elevar la productividad empresarial, de acuerdo a los límites de reconocimiento de gasto, de planillas y de ventas aprobada por el Comité Especial de Productividad del CNTPE.

4- Elevar la productividad en el agro y la soberanía alimentaria

a) Impulsar una Política Concertada para elevar la Productividad en el Agro.

Orientada a impulsar la inversión pública y privada en infraestructura rural, sistemas de riego, caminos rurales y energía, y en proyectos sostenibles alimentarios, con participación de las organizaciones de productores, de Agroexportadoras y trabajadores agrícolas. Medidas específicas para el agro deben ser el restablecer franjas de precios y sobretasas de salvaguarda ante las importaciones subsidiadas en EEUU y en Europa, para lo cual el TLC debe suspenderse. En este contexto el papel de INDECOPI para frenar los abusos de las posiciones dominantes de mercado resulta de urgencia.

Como sucedía hasta hace poco con la urea, aun quedan otros insumos agropecuarios que han mantenido altos precios internos

a pesar de la caída de precios internacionales. El gobierno debe regular este mercado, forzando a la reducción de precios.

b) Tomar medidas anti-monopolio

Estas tienen importancia, particularmente en productos como el algodón y la lana de alpaca.

Así mismo medidas como promover la asociatividad de los productores para que puedan comercializar directamente y/o tener mejores condiciones de negociación con los intermediarios. El Estado deberá promover ferias agropecuarias en las principales ciudades y actuar directamente en el mercado de ser necesario. Todo ello por que los agricultores están particularmente afectados por la crisis debido a que los monopolios e intermediarios abusivos la aprovechan para sacar ganancias extraordinarias.

c) Los agricultores necesitan facilidades para obtener y refinanciar créditos.

Se debe reforzar el Agrobanco y establecer líneas de crédito a la banca comercial y las cajas rurales para que puedan mantener y ampliar sus créditos a tasas preferenciales. Una línea especial debe plantearse para apoyar a aquellos agricultores que, haciendo caso al gobierno, se ha pasado a productos como el espárrago cuyo precio se ha derrumbado. Esto, por cuanto la crisis puede llevar a muchos agricultores a la quiebra, con el riesgo de que pierdan sus tierras ante los bancos.

d) El gobierno debe derogar los Decretos Leyes que amenazan a las comunidades campesinas con la pérdida de sus tierras, agua y recursos en manos de empresas mineras y grandes corporaciones.

Los decretos legislativos que centralizan la gestión del agua quitándosela a los agricultores también deben ser derogados.

5- Impulsar el acceso al financiamiento para la pequeña y micro empresa

a) El grueso del empleo, incluso con alta participación de mujeres, está en la microempresa y en el mundo rural, estos pueden ser las más afectadas por el encarecimiento del crédito y la pérdida de mercados externos e internos. Las medidas del gobierno tienen en la reconversión y programa de compras estatales a microempresas: 100 millones y 50 millones. Es muy poco, si lo comparamos con otras medidas solo el drawback es 300 millones.

b) Disponer la asignación de una mayor línea de crédito, de alto impacto, de parte de COFIDE y a través de las entidades del sistema financiero, para respaldar las operaciones de Factoring a nivel nacional a favor de la pequeña y microempresa agrícola y urbana; y elevar la contribución financiera de COFIDE a favor del Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI) orientado a afianzar y garantizar las operaciones de crédito y contrataciones a favor de la micro y pequeña empresa agrícola y urbana.

c) Poner en marcha de manera inmediata el plan de compras del estado. El gobierno ha anunciado un programa de compras estatales, el mismo que debe incluir productos como uniformes, calzado escolar, mobiliario escolar y otros. Esto es positivo, pero es indispensable que al respecto se suspenda el TLC con EEUU que establece que en programas de esta magnitud las empresas norteamericanas pueden competir como si fueran peruanas.

d) Defensa del mercado interno. La invasión de textiles y calzado de China e India a precios de dumping debe ser frenado de inmediato. No debe esperarse a complejos estudios de precios, como ha planteado el gobierno; el daño a la industria nacional es evidente y justifica medidas temporales de salvaguarda mientras se realizan los estudios.

e) Una política de créditos para las empresas en crisis. El paquete del gobierno solo contempla créditos para MYPES exportadores, cuando es evidente que se necesita también apoyo a las Mypes orientadas al mercado interno.

El apoyo a pequeñas empresas y a sectores en crisis también es una medida conveniente. El sector textil - confecciones por ejemplo, ha perdido decenas de miles de empleos, y eso va a seguir. Un respaldo

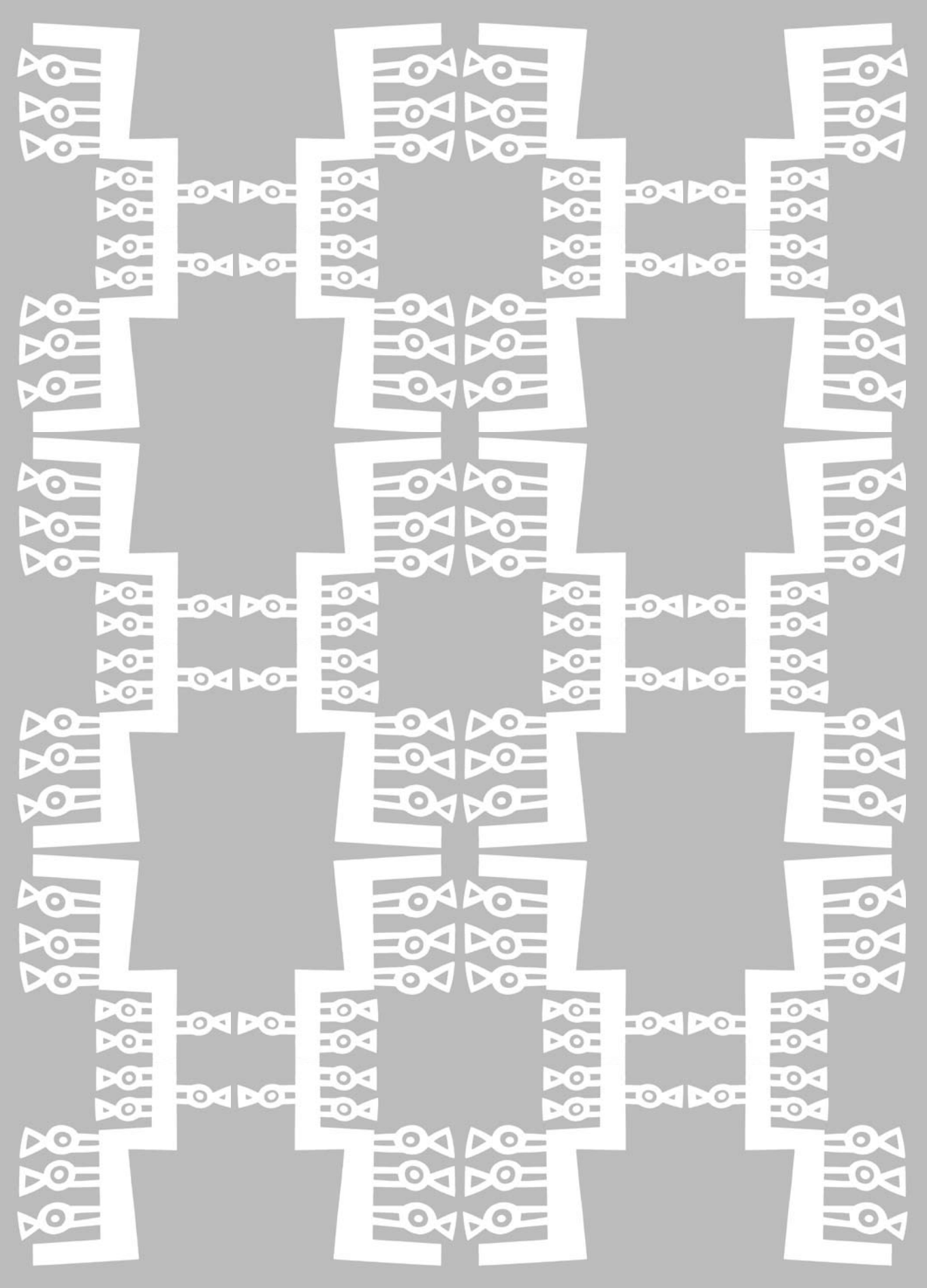
a empresas en crisis a condición de que mantengan el empleo, como en México, puede servir de complemento a programas de protección del mercado interno frente al dumping chino, de compras estatales de buzos, uniformes y calzado escolar, y de facilitación del crédito. Cubrir la mayor parte de sus contribuciones a la seguridad social con fondos del estado, como hace Argentina, o subsidiar los salarios bajos como en Chile, podría servir para mantener y ampliar el empleo formal y aumentar la competitividad empresarial.

6- Mayor énfasis en la integración regional para aprovechar los mercados cercanos

Ello implica aprobar mediante Ley el crédito suplementario para la ampliación de las operaciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERU orientado a relanzar el "Fondo de Promoción de las Exportaciones" y las acciones de promoción de exportaciones de bienes y servicios, apoyar la internacionalización de empresas y la diversificación de mercados, mejorando el trabajo consensuado con los gremios empresariales turísticos y exportadores, y fortaleciendo la comunicación con las regiones.

Estas son a grandes rasgos, las principales medidas que planteamos para que la actual crisis, no repita la historia y sean nuevamente los trabajadores y trabajadoras, los más pobres y olvidados quienes asuman los mayores costos y sacrificios.

Esperamos que el gobierno acorde con la responsabilidad política que le compete, sepa escuchar nuestras alternativas y responder a ellas. Aspiramos también que las demás organizaciones de la sociedad civil contribuyan a enriquecer esta propuesta y la hagan suya. De esta manera podremos ¡juntos construir una patria donde ningún ciudadano sea extraño en su propia tierra.






CSA
TUCA


ITUC CSI IGB


OUR WORLD IS NOT FOR SALE
STOP CORPORATE GLOBALIZATION